CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

Extractivismo a sangre y fuego: el imperialismo canadiense en América Latina

Todd Gordon
Jeffery R. Webber

Extractivismo a sangre y fuego: el imperialismo canadiense en América Latina

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA / Gordon, Todd y Jeffery R. Webber.

Extractivismo a sangre y fuego: el imperialismo canadiense en América Latina / Gordon, Todd y Jeffery R. Webber / 2021

La Paz, junio de 2021, xii, 552 p.
CEDLA (Ed.)
I. t.
II. s.

DESCRIPTORES TEMÁTICOS

<IMPERIALISMO> <NEOLIBERALISMO> <RACISMO> <CORPORACIONES MULTINACIONALES> <CAPITAL CANADIENSE> <FINANZAS> <MINERÍA> <SEGURIDAD> <DEMOCRACIA> <TURISMO> <MAQUILAS> <COMERCIO> <AGUA> <DERECHOS HUMANOS> <ECOLOGÍA> <DESARROLLO> <RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA> <MERCANCIAS EXTRACTIVAS>

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS

<AMÉRICA LATINA> <CENTROAMÉRICA> <CANADÁ> <HONDURAS> <GUATEMALA> <EL SALVADOR> <COSTA RICA> <NICARAGUA> <PANAMÁ> <COLOMBIA> <PERÚ> <ECUADOR> <VENEZUELA>

© 2021, CEDLA

Primera edición en español, 2021

Depósito Legal:	4-1-3347-2021
ISBN:	978-9917-9886-0-1
Director ejecutivo:	Javier Gómez Aguilar
Autores:	Todd Gordon y Jeffery R. Webber
Producción editorial:	Unidad de Comunicación y Gestión de Información (CEDLA)
Edición:	Gustavo Guzmán
Diseño y diagramación:	Eugenio Chávez
Traducción:	Camilo Ruiz Tassinari
Fotografía de tapa:	Jeffery R. Webber, protesta contra el golpe de Estado en Honduras (2011)
Impresión:	Punto de Encuentro
Editorial CEDLA:	**www.cedla.org** **info@cedla.org**

Achumani, Calle 11 Nº 100
entre Av. García Lanza y Av. Alexander
T: 591 2 279 4740 | 591 2 279 9848
C: 8630
La Paz - Bolivia

Esta versión en español fue publicada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con el apoyo de la Embajada de Suecia, en el marco del Programa: "CEDLA, Enhanced Knowledge for Action: MPDA and the Sustainable Use of Natural Resources".

Las opiniones y orientación presentadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente son compartidas por las instituciones y/o agencias que han apoyado este trabajo.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.

ÍNDICE

Presentación xi

INTRODUCCIÓN

GUANTES DE TERCIOPELO Y PUÑOS DE HIERRO

Imperialismo sin colonias 7
Racismo y ecología 15
El neoliberalismo 18
La expansión del capital canadiense 24
La importancia estratégica de América Latina para Canadá 30
La ayuda al desarrollo 39
Responsabilidad Social Corporativa 44
Mercancías extractivas y neoliberalismo militarizado 47
El libro, de aquí en adelante 49

PRIMERA PARTE
CENTROAMÉRICA

LA NUEVA NORMALIDAD: EL CAPITALISMO AUTORITARIO EN HONDURAS 57
Fundamentos históricos 62
La contrainsurgencia 65

La pacificación neoliberal 68
Inseguridad violenta 75
El interregno Zelaya 78
Ottawa y el golpe democrático 84
El Acuerdo Tegucigalpa-San José 88
Lavar la sangre de la violencia de Estado 94
Canadá y los derechos humanos 98
Etnografía de la oposición 102
El capital canadiense en Honduras 107
La economía de la estrategia canadiense 125
El Tratado de Libre Comercio 129
Conclusión 133

GUATEMALA: HACER NEGOCIOS TRAS EL GENOCIDIO 139
Un esbozo histórico 142
Canadá y la nueva minería en Guatemala 152
La dialéctica de la resistencia y la militarización 173
Conclusión 188

DESPOSESIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA 191
El Salvador 193
Costa Rica 206
Nicaragua 216
Panamá 223
Hacia una agenda de seguridad regional 227
Conclusión 231

SEGUNDA PARTE
LOS ANDES

LA MALA HORA EN COLOMBIA 235
El fondo histórico 237
Violencia de extracción 251
Inversión canadiense y resistencia popular 255
El Jano del libre comercio 276
La ayuda al desarrollo como un caballo de Troya 282
Conclusión 285

LOS DOLORES DE LA DEPENDENCIA MINERAL EN PERÚ 287
El *boom* minero 290
Escasez de agua 294
Contexto histórico: raza, clase, geografía y terror 295
Fujimori y el neoliberalismo autoritario 300
Continuidades en la etapa post Fujimori 303
Tambogrande y Ancash: conflictos contra las mineras canadienses 305
Más allá de Tambogrande y Ancash 311
La falsa promesa de Humala 315
Candente Copper y Cañarico Norte 319
Diplomacia mineral canadiense 321
Conclusión 326

LAS VENAS DE ECUADOR 327
Las arenas movedizas del gobierno de Correa 335
Los dolores de parto del orden minero neoliberal 341
La ofensiva de la Embajada 351

El mandato minero 355
La nueva ley minera 365
La santidad de la inversión extranjera 377
Los usos de la ayuda al desarrollo 378
Conclusión 381

VENEZUELA: LA AMENAZA DE UN BUEN EJEMPLO 383
El capital canadiense en Venezuela 387
¿Quién fue Chávez? 392
¿Autocracia, clientelismo y decadencia? 395
Canadá y el argumento del autoritarismo 398
Los medios de comunicación canadienses ante Venezuela 404
La política canadiense hacia la Venezuela post Chávez 407
Conclusión 409

UN EJERCICIO DE CINISMO: "DEMOCRACIA" Y "SEGURIDAD" EN LOS ANDES 411
Promoción democrática 414
Política de seguridad 430
Conclusión 437

CONCLUSIÓN

CONTINÚA LA EXPANSIÓN, PERO LA RESISTENCIA NO CEJA
Las geografías del capital canadiense 441
Derechos humanos y ecología 447

BIBLIOGRAFÍA..... 455
Medios de comunicación 532

Índice de tablas

Tabla 1 Distribución del Ingreso Nacional en Honduras 75
Tabla 2 Porcentajes de responsabilidad por muertes de no combatientes y desapariciones forzosas.....243

Presentación

Este libro, de Todd Gordon y Jeffery Webber, publicado inicialmente en inglés con el título *Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America* (2016), pone en cuestión la política exterior canadiense y la expansión de sus inversiones en América Latina. De manera específica, se detiene en los casos de algunos países centroamericanos y otros ubicados en los Andes para ejemplificar este hecho que, a decir de los autores, "anima la dialéctica entre la expansión capitalista canadiense y la resistencia popular en la región".

Con esta publicación, el lector podrá hacer un recorrido por hechos acontecidos en varios países latinoamericanos hasta el año 2016 y en los que Canadá ha tenido algún tipo de participación. Además de conocer cómo se ha desarrollado el capital canadiense en el sector de recursos primarios y en la banca de esos países, y el apoyo activo del gobierno canadiense para crear las condiciones necesarias para la inversión en esos sectores. Por otro lado, y como contrapeso, refleja la resistencia social al interior de los países donde las comunidades se han opuesto a la presencia de las inversiones vinculadas a sus recursos naturales con el objetivo de defender sus derechos y proteger el medio ambiente.

En esa línea, el libro plantea la intervención político económica de Canadá en Centroamérica, especialmente en Honduras y Guatemala, como también en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá; y en

los países andinos de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, en los que además ha tratado de debilitar a los movimientos sociales de esos países para lograr la expansión de la inversión externa.

Esperamos que esta publicación contribuya al conocimiento de la presión de los intereses económicos canadienses en Latinoamérica, muchas veces subordinado a otros capitales, como el norteamericano o británico. Una forma de hacer política exterior y de expandir el capital que se viene dando desde la década del noventa en la región y que recién en los últimos años ha comenzado a ser analizada y estudiada, sobre todo, visibilizada.

Javier Gómez Aguilar
DIRECTOR EJECUTIVO
CEDLA

Introducción

Guantes de terciopelo y puños de hierro

En los últimos años, el gobierno canadiense ha apoyado al gobierno surgido del golpe de Estado en Honduras; le ha dado ayuda militar e ideológica al régimen colombiano, que puede alardear de tener el peor historial de derechos humanos en el hemisferio; ha intervenido agresivamente en los asuntos internos de los gobiernos de izquierda de Hugo Chávez en Venezuela y en el de Rafael Correa en Ecuador; ha estimulado la destrucción ecológica y el éxodo de poblaciones vulnerables a través de su apoyo a las compañías canadienses dedicadas a la extracción de recursos naturales; ha encubierto las condiciones de sobrexplotación en las fábricas canadienses que operan en las maquiladoras de América Central; y ha buscado deslegitimizar, cooptar y derrotar a los movimientos populares que han desafiado los intereses del capital canadiense. Esta es la realidad con la que cualquier estudio honesto sobre la creciente interpenetración política y económica entre Canadá y América Latina tiene que comenzar. Y no se trata de ejemplos extremos o aislados, marginales al carácter general de la política exterior canadiense en la región. Este libro afirma que las políticas y tendencias que acabamos de mencionar son precisamente el núcleo de la política exterior canadiense en América Latina; son políticas y tendencias que animan la dialéctica entre la expansión capitalista canadiense y la resistencia popular en la región.

Las corporaciones multinacionales canadienses se han expandido con fuerza devastadora en América Latina desde la década de los años noventa. Su impacto perverso sobre los derechos humanos sólo es comparable con sus enormes agravios ecológicos. Ambos van de la mano. La expansión del capital canadiense ha producido una ola de resistencia militante por parte de las comunidades, el modo más exitoso de contener a las multinacionales canadienses y las políticas estatales que permiten su operación. Esta dialéctica de expansión capitalista y resistencia popular es bien entendida por los estrategas del Estado canadiense.

Por ejemplo, Stockwell Day, exministro de Comercio Internacional, perfectamente consciente de la cada vez mayor inversión canadiense en América Latina, resumió bien la dinámica de la política exterior hacia la región cuando dijo: "Se trata de cifras altas, e indican dónde yacen nuestros intereses" (Day, 2009a).

Pero como una alta proporción de esa inversión va al sector de los recursos naturales —que necesita grandes extensiones de tierra y degrada el medio ambiente—, los intereses canadienses nunca están completamente garantizados. Las inversiones podrán prometer enormes ganancias, pero enfrentan la oposición de las comunidades locales. Incluso si los gobiernos no se oponen abiertamente a la inversión canadiense en los recursos naturales, sus planes no son idénticos a los del inversor. Un reporte de Ernst & Young citaba al "nacionalismo en los recursos" como el primer y principal riesgo al que se enfrentaban las compañías mineras en 2013: un incremento considerable de este nivel de riesgo frente al décimo lugar que ocupaba en 2008. "Nacionalismo en los recursos" describe el intento de los gobiernos de los países del Sur por capturar una parte de las enormes ganancias obtenidas durante el reciente auge de los *commodities* (Burnett, Mouawad y Bret. 2013). Un argumento central de este libro es que los "intereses" canadienses son, por su propia naturaleza, vulnerables a la inestabilidad y a las contradicciones, y necesitan de la protección estatal para mantenerse. Proporcionar esta protección es el gran objetivo general de la política

exterior canadiense en la región —ya sea en su forma diplomática, de ayuda al desarrollo o de cooperación en seguridad— para asegurar la exitosa expansión del capital canadiense en su insaciable búsqueda de ganancias.

El intenso involucramiento de Canadá con América Latina ha recibido cada vez más atención por parte de observadores en la literatura académica y popular durante los últimos años. Sin embargo, con algunas excepciones notables, la mayoría de los análisis son poco profundos[1]. Los conflictos entre las compañías canadienses y las comunidades locales, por ejemplo, son normalmente vistos como algo aislado en relación con el patrón general de conflictos que marca la expansión del capital canadiense. Igualmente, el fracaso sistemático del Estado canadiense para llamar a cuentas a las multinacionales es rara vez discutido en esa literatura. Y cuando se aborda el tema, el análisis se enmarca en una narrativa que presenta a la política exterior de Canadá como "confundida", incapaz de entender bien la región, o simplemente como la expresión de una relación subordinada hacia Estados Unidos. En general, la crítica al accionar del Estado canadiense en la región es tibia y subestima la dimensión de la violencia y destrucción provocada por las compañías canadienses.

Pero además, mientras que la correcta comprensión de la expansión del capital canadiense en América Latina y las expresiones contemporáneas de la política exterior de Canadá necesitan considerar seriamente la dinámica imperialista en el sistema mundial del siglo XXI, y el rol del Estado canadiense en ese sistema, ningún observador

1 Algunas excepciones incluyen los reportes de *Human Rights Action* (www.rightsaction.org) y *Mining Watch* (www.miningwatch.ca), o los artículos publicados en *Upside Down World* (www.upsidedownworld.org), además del texto de referencia de Todd Gordon (Gordon, 2010). El periodismo independiente y las organizaciones de solidaridad le llevan la delantera a la literatura académica en el estudio de los intereses políticos y económicos canadienses en América Latina. Sin embargo, los primeros se enfrentan a límites estructurales que les impiden ampliar sus análisis e identificar patrones más profundos. Este libro busca llenar ese hueco teórico acerca de los procesos políticos y económicos subyacentes, así como la manera en la que éstos se vinculan con los objetivos más amplios del gobierno canadiense.

ha llevado a cabo ese tipo de investigación. La producción académica reciente sobre las relaciones de Canadá con la región es incapaz de situar esta problemática en el contexto más amplio de las dinámicas brutalmente asimétricas de acumulación capitalista global. Lo que ese tipo de análisis revelaría es que Canadá es uno de los países más ricos del planeta, y que opera en un sistema imperialista global que por naturaleza beneficia al capital del mundo desarrollado en detrimento de la población y el medio ambiente de los países pobres. Una laguna concomitante es el análisis (faltante) del vigoroso intento por parte de Canadá de controlar los recursos naturales y el trabajo humano en América Latina. Como acaba de señalarse, el carácter novedoso y la amplitud de esa dominación nunca han sido apropiadamente documentados o analizados. En realidad, el asunto en cuestión no se reduce a la problemática de la penetración del capital, a pesar de lo importante que esto es en sí mismo, pues la expansión del capital de Canadá es inseparable de la política exterior agresiva del Estado canadiense y su esfuerzo por influir los procesos de toma de decisiones de los Estados y comunidades latinoamericanas.

Ahora bien, una objeción a nuestro marco teórico podría ser que ya no tiene sentido hablar de capital "canadiense". Se ha extendido la idea de que en la era de la globalización transnacional ya no es útil referirse a los capitales nacionales y sus intereses particulares; se dice que deberíamos hablar de capitales transnacionales que echan raíces en este o aquel Estado nación de manera oportunista y flexible. Reconocemos que, en efecto, ha habido una cierta intensificación de tendencias en la coordinación transnacional de capitales (que no anula la competencia entre ellos) durante los últimos 40 años, pero pensamos que es crucial retener el concepto de capitales nacionales y, en nuestro caso, hablar de capital canadiense, esto es, de un capital que tiene un propietario canadiense claro e identificable, ya sea como propietario de una compañía privada o como accionista minoritario o mayoritario de una empresa de participación bursátil.

Imperialismo sin colonias

Nuestra preocupación analítica y empírica central es la del papel jugado por el Estado canadiense dentro del sistema mundial del imperialismo capitalista en relación con América Latina. Por lo tanto, es importante ser conceptualmente claros desde el principio en lo que respecta a la relación entre el capitalismo y el imperialismo. Una de las características centrales del capitalismo es su carácter autoexpansionista, su necesidad de abrazar al mundo entero. "La necesidad de un mercado en constante expansión para absorber su producción", escribieron hace tiempo Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, "persigue a la burguesía a lo largo y ancho del planeta. Debe asentarse en todos lados, desarrollarse en todos lados, desarrollar conexiones en todos lados" (Marx y Engels, 2002 [1888]: 83).

"Desde sus inicios en los siglos XVI y XVII", apunta el economista político David McNally, "el capitalismo ha buscado generar ganancias a través de la explotación de los pueblos y los recursos naturales alrededor del mundo". La dimensión internacional de la historia del desarrollo capitalista en Europa involucró "enormes movimientos mundiales de algodón, azúcar, tabaco y de esclavos africanos", los cuales "estimularon la acumulación capitalista de riqueza". Según McNally, "la colonización de buena parte del mundo —Irlanda, la India, Norte y Sudamérica, China, buena parte de África— fue pieza central del desarrollo capitalista […], el capitalismo siempre ha tenido una orientación global" (McNally, 2006: 28). "El capitalismo maduro", afirma el politólogo Colin Mooers, "es inevitablemente imperialista; el empuje hacia afuera del capital, su búsqueda por nuevas fuentes geográficas de acumulación, es una condición estructural e inevitable del sistema" (Mooers, 2014: 74).

Sin embargo, una mirada al mundo hace evidente que el imperialismo ya no tiene que ver con las conquistas territoriales prolongadas y con el establecimiento de gobiernos coloniales como en los siglos pasados. El colonialismo, entendido estrictamente como el "control político de las poblaciones y territorios por Estados extranjeros, ya

sea acompañado por un asentamiento permanente y considerable (colonias de poblamiento) o no", es una característica marginal de la política mundial contemporánea (Bernstein, 2000: 242)[2]. Por ello, cabe preguntarse: ¿ya no tiene sentido hablar de imperialismo en el siglo XXI?, ¿o acaso tras la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de descolonización el imperialismo se ha convertido en un imperialismo sin colonias?

En la senda de la politóloga Ellen M. Wood, pensamos que vivimos en un mundo en el cual la dominación imperialista ya no depende del establecimiento de colonias permanentes. En la dinámica del sistema mundial actual, "el imperialismo capitalista se ha convertido casi completamente un asunto de dominación económica, en el cual los imperativos del mercado, controlados por los poderes capitalistas dominantes, llevan a cabo el trabajo antes hecho por los Estados imperiales o los colonos" (Wood, 2003: 153).

En *Imperio del Capital*, Wood nos lleva en un viaje histórico que comienza con el imperio romano y termina con el análisis de las dinámicas —competencia capitalista, acumulación y aumento de la productividad del trabajo— que sustentan el liderazgo contemporáneo de Estados Unidos sobre la economía mundial y el sistema de Estados. Entender las características distintivas de un imperialismo capitalista es el enfoque estructurante del libro de Wood, y esto la lleva a yuxtaponer nuestra época contemporánea con los imperios del pasado. El objetivo de Wood es entender y subrayar "el motor [del capitalismo imperialista] y lo que lo distingue de otras formas imperiales desde sus orígenes" (Wood, *op. cit.*: X).

Hay una faceta de la contribución de Wood que requiere especial atención. Ella apunta a la relación análoga entre las formas específicas de las relaciones sociales domésticas y las de la dominación imperial, a la relación entre el establecimiento y expansión de relaciones

2 Las consecuencias de las colonias de población siguen con nosotros, sin embargo, y se expresan a través de relaciones raciales coloniales en varias partes del mundo, incluyendo a Canadá.

sociales capitalistas domésticas, y a la externalización del capital a través del imperialismo. El registro histórico muestra que ha habido una estrecha relación histórica entre las sociedades capitalistas y no capitalistas, por un lado, y la relación histórica entre sus imperialismos, por el otro.

Los imperios coloniales no capitalistas del pasado —como los imperios feudales portugués y español en América Latina entre el final del siglo XV y los primeros años del siglo XIX— dominaron el territorio y a sus súbditos a través de la conquista militar, la dominación política directa y, por tanto, a través de una amplia dominación extraeconómica, del mismo modo que los señores feudales dominaban a los siervos. En contraste con esto, el imperialismo capitalista "puede ejercer su dominio a través de medios económicos al manipular las fuerzas del mercado, incluyendo el arma de la deuda" (Wood, *op. cit.*: 12).

De esto no se deriva que el imperialismo capitalista prescinda de la necesidad de la coerción, como indicará cualquier mirada superficial a la prensa diaria. En efecto, como Colin Mooers sugiere, "la fuerza sigue siendo indispensable tanto para lograr la 'apertura' de los mercados ahí donde no existen, como para asegurar la obediencia continua hacia los derechos del capital" (Mooers, 2014: 5). Para Wood, un mundo definido por la universalización casi completa del capitalismo es algo históricamente novedoso, y, por tanto, requiere de una nueva teoría del imperialismo, una que esté "diseñada para un mundo en el cual todas las relaciones internacionales son inherentes al capitalismo, un mundo, por tanto, gobernado por imperativos capitalistas" (Wood, 2003: 127).

Por lo tanto, el colonialismo, entendido como el control político directo sobre los pueblos y los territorios por Estados extranjeros, independientemente de si incluye o no comunidades numerosas de colonos, es mejor entendido como una de las formas que el imperialismo ha asumido a lo largo de la historia. Tal y como Henry Bernstein afirma:

> Mientras que el colonialismo se refiere al gobierno directo de una población por un Estado foráneo, el imperialismo implica un sistema general de dominación de un Estado (o Estados) sobre otros Estados, regiones o sobre el mundo entero. Por lo tanto, la subyugación política a través del colonialismo es sólo una de las formas que esta dominación puede tomar; el imperialismo también incluye diferentes formas de control indirecto (Bernstein, 2000: 250).

Intentando refinar una definición que enfoque nuestra atención en la especificidad de las relaciones Norte-Sur, y que nos permita ver cómo ciertas formas de imperialismo pueden cambiar a lo largo de distintos períodos históricos durante el auge y la consolidación del capitalismo como un sistema mundial, al tiempo que se mantienen algunos de sus presupuestos esenciales, David McNally sugiere que "el imperialismo es un sistema de desigualdades y dominación global —basado en regímenes de propiedad, poder militar e instituciones mundiales— a través del cual la riqueza es extraída del trabajo y de los recursos de los pueblos del Sur Global para beneficio del capital en el Norte" (Gordon, 2010: 26).

En suma, el imperialismo capitalista se caracteriza por profundas desigualdades entre las regiones y los países del mundo. Estas desigualdades son exacerbadas gracias al desarrollo desigual de las relaciones capitalistas globales, y son reproducidas a través de las políticas de las potencias imperialistas y de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El imperialismo capitalista conlleva la extracción de riqueza y recursos de los países más pobres en beneficio del capital del Primer Mundo, en detrimento de la población pobre y de los países del Sur. La mayoría de los habitantes de los países sometidos al imperialismo experimentan su situación como un violento sometimiento económico, político, ecológico y militar.

El "subdesarrollo" o "dependencia" en el llamado Tercer Mundo, no es necesariamente un corolario estructural del crecimiento y el

desarrollo en los países centrales, como lo afirma la teoría de la dependencia clásica[3]. Más bien, se trata de una consecuencia de la manera desigual en la cual el capitalismo se desarrolla, y es a su vez un subproducto de la lógica interna del capitalismo en el nivel nacional, regional y mundial. Esta lógica implica que el capital más productivo se concentre en las regiones inicialmente más ricas, y que se disemine a otras partes del mundo lenta y pausadamente, y a menudo bajo condiciones extremadamente específicas (por ejemplo, con un fácil acceso a las materias primas, o en respuesta a las crisis económicas domésticas). Lo que nos interesa ahora, sin embargo, no es tanto la cuestión del desarrollo desigual, o el desarrollo de las fuerzas del mercado endógenas a la acumulación capitalista, lo que nos interesa son las vías a través de las cuales el desarrollo desigual es amplificado y reproducido por la política exterior de los Estados centrales del Primer Mundo para crear y recrear las condiciones que beneficien a su propio capital.

En ciertos casos, estas acciones benefician a todo el capital, pero debido al carácter desigual del desarrollo, los patrones de acumulación del capitalismo imperialista contemporáneo tienden a beneficiar más al capital del Primer Mundo. Las clases políticas de los Estados imperialistas centrales abogan por políticas como el ajuste estructural, el libre mercado y todo tipo de interferencia política en los países más débiles, con el objetivo de estructurar la economía política doméstica en beneficio del capital imperialista.

La dependencia de los países periféricos hacia los Estados centrales no es, por tanto, un producto necesario de la acumulación capitalista, sino más bien la consecuencia de la combinación de dos factores: el desarrollo desigual y las acciones conscientes llevadas a cabo por los Estados imperialistas. Esto no quiere decir que estos últimos busquen deliberadamente reproducir las condiciones de pobreza de los primeros

3 Un panorama crítico de los principales debates sobre la dependencia y cómo se articulan en el contexto latinoamericano se encuentra en Kay (2013 [1989]).

(aunque esta puede ser la situación en algunos casos), sino más bien que los Estados imperialistas intentan canalizar la dinámica política y económica de los países dependientes para que se mantengan políticamente subordinados a los intereses del capital de los países centrales. Los patrones de dependencia son, por tanto, una combinación de una acción política premeditada y subproducto no intencionado de la acumulación capitalista.

El economista político Andrew Higginbottom sugiere que es posible encontrar reflejos contemporáneos de la teoría de la modernización en las publicaciones de varios Estados imperialistas, así como en las del BM y del FMI[4]. Ese tipo de actualizaciones de la teoría de la modernización afirman que la Inversión Extranjera Directa (IED) es, *ipso facto*, una fuente necesaria para el desarrollo económico en el Tercer Mundo y para mejorar el nivel de vida de la población que ahí vive. Y, aunque en un registro distinto, esta posición encuentra eco en algunas teorías marxistas del imperialismo[5].

Ray Kiely, por ejemplo, ha creado un marco teórico útil para entender el desarrollo desigual y la persistencia de las asimetrías políticas y económicas entre los países pobres y ricos. Sin embargo, Kiely también afirma que el principal problema de los primeros es precisamente el escaso flujo de IED de los segundos. La continua concentración de IED entre los países desarrollados es un problema central para Kiely[6]. Esto sobrevalora la concentración de la inversión extranjera en el mundo desarrollado —que es real—, pero en el caso de Canadá, por ejemplo, durante los últimos 25 años ha habido un claro aumento en

4 Alvin Y. So ofrece una revisión general acerca de la escuela de la modernización dentro de los estudios de desarrollo, y cómo se compara con las teorías de la dependencia y del sistema mundial (So, 1990). Marcus Taylor, a su vez, presenta una interesante reflexión sobre las versiones contemporáneas de la teoría de la modernización en la coyuntura actual (Taylor, 2010: 579-661).

5 El comunista británico Bill Warren es el principal defensor de esta perspectiva (Warren, 1980).

6 Alfredo Saad-Filho y John Weeks también parecen creer que la IED en el sector de los recursos naturales puede ser un importante motor del desarrollo bajo ciertas condiciones (Saad-Fihlo y Weeks, 2013: 1-20).

la proporción de IED hacia los países del Sur (Gordon, 2010). Kiely es también incapaz de problematizar un proceso económico que no es, en sí mismo, benéfico a las poblaciones del Sur. Aumento en la inversión extranjera no quiere decir progreso. Para citar sólo un ejemplo importante, un reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que:

> Las ganancias de las compañías transnacionales que operan en América Latina y el Caribe han aumentado por un factor de 5,5 en nueve años (datos hasta 2011) […]. Este aumento en las ganancias […] tiende a cancelar el impacto positivo de los flujos de IED en la balanza de pagos. De hecho, la evidencia para América Latina y el Caribe muestra que en años pasados los egresos registrados como ingresos por IED han sido casi tan altos (92 por ciento) como los ingresos por inversiones, en el Caribe (ECLAC, 2012: 12).

El mismo estudio indica que la proporción de egresos de capital por cada dólar de ganancia —es decir, los dólares repatriados al país de origen por las multinacionales— es más alta en el sector de recursos naturales, ya que más del 50 por ciento de las ganancias de la IED en los países centrados en la minería son repatriadas, por ejemplo. Al mismo tiempo, la ganancia promedio de la inversión extranjera de las multinacionales centradas en el sector de recursos naturales ha sido considerablemente mayor que en otros sectores durante las últimas dos décadas, al punto que su rentabilidad es casi el doble que el segundo sector más redituable de las 500 principales compañías extranjeras que invierten en la región (ECLAC, *op. cit.*: 76-77).

Debido a la intersección entre mercados de recursos naturales liberalizados a lo largo y ancho del continente americano, y a los altos precios de los *commodities*, "las corporaciones en las industrias extractivas obtuvieron ganancias extremadamente altas" (ECLAC, *op. cit.*: 13). Entre los años 2001 y 2011, los flujos de IED se multiplicaron en un 2,7 por ciento, es decir, un aumento menor que el de las ganancias

(ECLAC, *op. cit.*: 12). Debido a que los países en desarrollo tienen a menudo regímenes fiscales laxos, y a las estrategias corporativas para transferir las ganancias a jurisdicciones con regímenes todavía más permisivos, el crecimiento del sector de los recursos naturales no suele ser una estrategia confiable para mejorar el bienestar de la población de esos países.

Para hacer aún más crítico este problema, y contra lo que dice el gobierno canadiense, el reporte de la CEPAL deja en claro que el sector de recursos naturales es un débil generador de empleos. La minería y la inversión petrolera, por ejemplo, son los sectores con menor generación de empleos de las 12 grandes industrias estudiadas en el reporte en cuestión, con únicamente 0,5 empleos generados por cada millón de dólares invertidos (ECLAC, *op. cit.*: 47).

Esto es especialmente importante en vista de que la orientación estratégica de potencias imperialistas como los Estados Unidos y Canadá durante los últimos 15 años ha consistido en intentar apropiarse de la enorme riqueza natural de la región. La importancia de esta dinámica ha sido acentuada por las oportunidades de acumulación abiertas tras la privatización neoliberal de los recursos naturales y, hasta hace poco, por el aumento de precios de los principales *commodities* del mercado internacional (Veltmeyer y Petras [eds.], 2014; Burchardt y Dietz, 2014: 468-486). Al mismo tiempo, la estrategia geopolítica de Estados Unidos y Canadá ha consistido en contener —a través de la persuasión y/o eliminación a través de la fuerza— la marea creciente de movimientos populares y de gobiernos de izquierda en la región. Precisamente, la población ha obligado a sus gobiernos a reclamar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y reafirmar una cierta autonomía política y económica hacia los poderes externos (Katz, 2011: 115-122; Boron, 2013: Caps. 3-5).

Vale la pena recordar aquí que América Latina y el Caribe es el hogar del 25 por ciento de los bosques y del 40 por ciento de la biodiversidad mundial. La región tiene el 85 por ciento de las reservas de litio y un tercio del cobre, bauxita y plata. La región es igualmente

rica en carbón, petróleo, gas y uranio, con el 27, 28, 8 y 5 por ciento, respectivamente, de todos los depósitos del mundo actualmente en explotación. Continuamente se descubren nuevas reservas submarinas de petróleo a lo largo de las amplias líneas costeras en los dos océanos. Finalmente, la región tiene el 35 por ciento de la producción hidroeléctrica potencial mundial, y las reservas más grandes de agua dulce (Seoane, 2013: 93).

Racismo y ecología

Para el imperialismo es esencial el acceso a los recursos naturales, con el concomitante desastroso impacto ecológico de sectores como la minería, el petróleo, el gas natural y la construcción de presas. El imperialismo es un fenómeno ecológico. Por un lado, está condicionado por regímenes ecológicos, de manera tal que cuestiones como qué tipo de recursos naturales y en dónde se encuentran, son temas centrales para la acumulación capitalista. Por el otro lado, transforma (casi siempre de manera destructiva) los sistemas ecológicos locales y regionales en su búsqueda de ganancias, por ejemplo, al hacer explotar montañas enteras para construir minas a cielo abierto, o al filtrarse el desperdicio tóxico que emana de las minas hacia los mantos acuíferos de los alrededores, envenenando todo a su paso.

Esta conexión suele pasarse por alto en buena parte de la literatura sobre el imperialismo, especialmente en las teorías que enfatizan la falta de IED como el problema central al que se enfrentan los países pobres, sin caer en cuenta los desastres ecológicos que genera, y que son resultado de la penetración del capital en los países del sur. La inversión extranjera canadiense se inserta, por tanto, en un sistema más amplio de capitalismo mundial, que a su vez depende de una sed insaciable por recursos no renovables, la mayoría de los cuales se encuentran en el Tercer Mundo. De manera inevitable, por otra parte, junto a los esfuerzos canadienses

para expandir su IED encontramos una serie de iniciativas que tienen como objetivo debilitar las ya bastante laxas regulaciones ambientales[7].

Como puede esperarse, las potencias imperialistas menosprecian la destrucción causada al medioambiente y a la sociedad por la expansión capitalista y las políticas agresivas del libre mercado. La defensa de la IED y de la liberalización de los mercados moviliza, implícita o explícitamente, temas racistas acerca de los pueblos del Tercer Mundo, empantanados en la pobreza y la deuda, e incapaces de ayudarse a sí mismos. Este será un tema recurrente a lo largo de este libro. El imperialismo y el racismo, como dijimos antes, han estado íntimamente conectados a lo largo de la historia del capitalismo, enraizado en parte en el colonialismo. De manera análoga a lo que sucede en Canadá, buena parte de la tierra en la mira de las compañías extractivistas en Latinoamérica es habitada por comunidades indígenas.

Las compañías canadienses de recursos naturales ignoran a menudo los derechos indígenas a la tierra, y consideran sus territorios vacíos y desperdiciados: *terra nullius*. La tarea de las multinacionales es transformar esos territorios en una fuente de comercio y ganancia, y cualquier comunidad indígena que desafíe la autoridad de los inversionistas —que no esté "agradecida" por la ayuda recibida de los extranjeros— es vista como obstáculo al progreso, es decir, debe ser removida, por la fuerza si fuera necesario. El simple hecho de que esas comunidades no se hinquen en reverencia ante el desarrollo capitalista, o de que vean en la tierra algo más que un medio para

7 Aunque su apego por los presupuestos teóricos de los sistemas-mundo limita la profundidad de su análisis, la noción de Jason Moore de una ecología mundial capitalista, y de un ambiente que le da forma al capitalismo más que simplemente ser pasivamente transformado por éste, es útil para pensar la dimensión ecológica del capitalismo y del imperialismo (Moore, 2025). Por su parte, en Jorgenson se incluye una útil discusión acerca del componente ambiental en la toma de decisiones del capital del mundo desarrollado y en el de los países pobres, lo que impacta en las decisiones de los primeros sobre si invertir en los países liberalizados del Tercer Mundo, y la influencia que esto tiene sobre las ecologías de los últimos (Jorgenson y Kick, 2009).

la explotación capitalista, es suficiente para que sean catalogadas como "atrasadas" e "ingenuas". La represión de los indígenas en estas áreas ricas en recursos es a menudo justificada a través de este tipo de ideas.

La destrucción ecológica de las comunidades indígenas y campesinas las transforma de varias maneras. Separados de la tierra, los patrones indígenas de reproducción social son trastocados, y se ejerce en particular más presión sobre las mujeres, que suelen ser las principales proveedoras y cuidadoras de los bebés y los niños. Las instituciones financieras internacionales y los programas extranjeros de ayuda —incluyendo el canadiense— estimulan el desarrollo de las relaciones de mercado, lo que amenaza la posibilidad de autosustento de las familias. La escala monstruosa del desplazamiento y expulsión de esas familias de la tierra durante las dos últimas décadas ha implicado que las relaciones de mercado en los países pobres no sean una verdadera opción de sobrevivencia para la mayoría de la gente.

Como hemos dicho, el sector de los recursos naturales tiene una proporción de empleos generados por dólar invertido extremadamente baja. El crecimiento de zonas manufactureras de bajos salarios en el Tercer Mundo ha atraído a millones de campesinos despojados a pesar de las pésimas condiciones laborales, especialmente mujeres en búsqueda de empleo. Los nuevos proletarios buscan con desesperación a qué asirse en los márgenes del capitalismo mundial. Para muchos otros, la única opción de sobrevivencia es la migración al Primer Mundo, dejando a menudo a su familia, en un intento desesperado por encontrar empleo en los que inevitablemente son los sectores peor pagados de los mercados laborales de Europa, Norteamérica o el Medio Oriente. En estas regiones, la explotación racista del trabajo migrante se justifica a través de la ciudadanía, al excluir de los derechos ganados por la fuerza de trabajo local a los trabajadores extranjeros. En la era neoliberal de la migración de masas —cuya escala no tiene precedentes históricos—,

la reproducción social de cada vez más personas de color es un proceso internacional[8].

El objetivo de la inversión extranjera nunca ha sido el desarrollo en sí mismo, ni una mejor calidad de vida para la gente en los países receptores. Su objetivo es la ganancia. Los inversionistas simplemente buscan oportunidades en lugares que les permitan una alta repatriación de ganancias, y la menor interferencia posible por parte de los gobiernos y las comunidades afectadas. Si hay demasiada "regulación" o "burocracia", o si las exigencias de las comunidades amenazan con poner en riesgo la rentabilidad, los inversionistas se irán a otro lugar tan pronto como puedan. Dejando de lado por ahora la cuestión de qué tipo de desarrollo es el mejor para la justicia social, para la ecología y para la población humana, es claro que un aumento en la inversión extranjera no constituye en sí misma una fórmula para mejorar la calidad de vida o el crecimiento industrial endógeno. Como lo demostró el economista Anwar Shaikh, los flujos de IED intensifican el carácter desigual del desarrollo, así como la pobreza. Sólo ganan las corporaciones de los países centrales y una fina capa de la población local: los capitalistas y los políticos (Shaikh, 1979a: 281-302; Shaikh, 1979b: 27-57). Cualquier teoría que afirme que la inversión extranjera es el motor principal del desarrollo, o que acríticamente piense que la IED es una solución a los problemas de pobreza y desarrollo en los países pobres, es peligrosamente simplista, y debe ser puesta en duda.

El neoliberalismo

La fase del capitalismo que más nos interesa en este libro es la de la globalización neoliberal, que cubre, a grandes rasgos, las cuatro últimas décadas. Hay mucha confusión y oscuridad conceptual respecto a qué exactamente caracteriza esta última fase del capitalismo global, y, por

8 Susan Ferguson y David McNally han escrito, al respecto, sobre el contexto norteamericano como una expresión paradigmática de tendencias mundiales (Ferguson y McNally, 2014).

tanto, es necesario ser muy específicos en el uso de la terminología apropiada. El neoliberalismo debe ser visto, en nuestra opinión, como un proyecto político de las clases dominantes del mundo avanzado —especialmente en Estados Unidos— para crear o restaurar el poder de las clases capitalistas a lo largo y ancho del mundo en respuesta a la crisis del keynesianismo y las políticas desarrollistas de finales de la década de 1960, a la caída en la rentabilidad y el fenómeno de la estanflación en los años setenta, y al auge de amenazas al orden del capital en la forma del movimiento obrero, luchas populares radicales e insurgencias campesinas en varias partes del mundo durante esos años (Albo, 2007; Gowan, 1999; Harvey, 2005; Saad-Filho, 2005).

La teoría purista del libre mercado, que yace en el centro de la ideología neoliberal, debe ser vista como una caja de herramientas para justificar el proyecto de restauración del poder de clase de los capitalistas, más que como una guía exacta de la práctica política de los Estados durante ese período. El apego de las políticas públicas al dogma neoliberal varía enormemente de un caso a otro. En términos globales, el neoliberalismo ha fracasado miserablemente en sus objetivos declarados de aumentar la eficiencia económica y el bienestar humano. Sin embargo, visto como un proyecto político cuyo objetivo es restaurar el poder de las clases capitalistas, ha sido completamente exitoso. Sin embargo, su implementación ha creado enormes contradicciones sociales, amplificadas tras el estallido de la crisis de 2007-8, que a su vez ha desatado una nueva ola de experimentos neoliberales a lo largo y ancho del planeta (McNally, 2020). En el siglo XXI, América Latina ha estado al frente del rechazo popular organizado contra el modelo neoliberal, aunque desde 2011 la primavera árabe y varias olas de movilizaciones populares en distintos países de Europa han contribuido a la resistencia mundial (sobre América Latina: Weber y Carr, 2013; Katz, 2007: 27-41; Katz, 2009; Robinson, 2007; Robinson, 2008; y Sader, 2011; sobre la primavera árabe: Hanieh, 2013; Achcar, 2013; sobre Grecia: Kouvelakis, 2011: 17-32; y sobre España: Antentas y Vivas, 2012).

El capital financiero

La expansión del capitalismo neoliberal a lo largo del último cuarto del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI ha tenido una serie de características esenciales. Para empezar, en vista de que su predominancia en el sector productivo estaba amenazada desde finales de la década de 1960, el Estado en Estados Unidos apostó por el sector financiero. El capital financiero estadounidense jugó un rol esencial en el proyecto imperialista que se inició con la neoliberalización del orbe (Harvey, 2003: 63-66; Panitch y Gindin, 2003; Panitch y Gindin, 2004)[9]. Para poder tener éxito, Estados Unidos presionó por la liberalización de los mercados, especialmente de los mercados de capital.

Estados Unidos —y otros países imperialistas en una proporción menor aunque no insignificante— se aprovechó de las oportunidades abiertas por la crisis de la deuda de los años ochenta en los países del Tercer Mundo, y pudo servirse de su control sobre las principales instituciones financieras —bancos comerciales, instituciones de préstamos multilaterales, el FMI y el BM, así como varios bancos regionales— para impulsar Programas de Ajuste Estructural (PAE) (Gordon, 2009: 54; Green, 2003; Soederberg, 2004; Soederberg, 2005: 927-949; Soederberg, 2006). Estos programas son a menudo impuestos por el FMI y el BM bajo condiciones: los países que los aceptan tienen que comprometerse a aplicar políticas de austeridad fiscal con déficits mínimos o nulos, recortes a los gastos sociales y a los subsidios a las necesidades básicas, reformas al sistema fiscal, liberalizar el comercio y los mercados financieros, unificar las tasas de cambio, eliminar las barreras a la inversión extranjera, desregularizar la industria y fortalecer

9 Es importante decir que estamos conscientes que a lo que nos referimos como financialización del capitalismo en el período contemporáneo puede ser ambiguo. En concreto, "las líneas entre el capital industrial y financiero son, de hecho, borrosas, pues las grandes corporaciones utilizan ambas maneras para apropiarse de la ganancia. General Electric, por ejemplo, es tanto un banco como una compañía manufacturera, y General Motors y Ford dependen cada vez más de sus divisiones financieras para generar ganancias" (McNally, 2009: 56).

las garantías a los derechos de propiedad privada (Williamson, 1993: 1332-1333).

En su libro *Global Shift*, el geógrafo Peter Dickens presenta las tendencias económicas globales durante las décadas en las que este tipo de políticas han determinado la acción de los Estados. En concreto, muestra varios indicadores de la creciente interconexión en la economía mundial, particularmente las tendencias en los flujos comerciales y la inversión extranjera (Dickens, 2011). Aunque con una gran variación nacional y regional, la evidencia muestra un marcado aumento en los procesos de interconexión en la economía mundial desde la década de 1980. En otras palabras, una proporción cada vez más alta de lo que se produce, cruza las fronteras.

Sin embargo, aunque el comercio ha crecido a pasos agigantados a lo largo de todo este período, la IED ha sido consistentemente más alta. Se puede observar un aumento impresionante de la inversión extranjera desde la mitad de la década de 1980, que supera radicalmente las tendencias también a la alza en la exportación. La IED es importante para nuestro análisis de Canadá, puesto que si la inversión supera el umbral del diez por ciento, se considera que el inversor adquiere poderes administrativos sobre el activo que se compra, sea un banco, una mina o una fábrica maquiladora.

Es igualmente cierto, por otra parte, que la mayoría de la IED se concentra en Norteamérica, Europa y Japón, pero también es evidente que hay cada vez más flujos de inversión extranjera hacia ciertas partes de los países del Sur, y también a China, que se ha convertido en una nueva zona de acumulación del capital. Hay que notar que aunque las estadísticas totales sobre flujos, tendencias y la volatilidad de la economía mundial son un punto de partida esencial para entender la época neoliberal, estos datos nos dicen poco sobre la profunda desigualdad de estas tendencias a lo largo de distintas zonas geográficas, por ejemplo concentraciones de producción, comercio e IED en algunas partes, y su ausencia relativa en otras. Sin embargo, como Dickens apunta, lo que todo esto significa es que la dinámica esencial

de la interconexión de la economía mundial en la era neoliberal ha transitado del comercio a la inversión extranjera (*ibíd.*).

Las corporaciones multinacionales

¿Cuáles son los nuevos agentes de la IED y del comercio en la economía mundial? La corporación multinacional es el principal actor que ha emergido como el vehículo facilitador de los flujos crecientes del comercio y de inversión extranjera. Aunque estos enormes cuerpos operan en varios países, mantienen sus centros de operaciones en un Estado específico, y dependen de éste para defender sus intereses, tanto en casa como fuera de ella. Es en este sentido en que el Estado capitalista sigue siendo una característica central del imperialismo capitalista en la época neoliberal.

El Estado capitalista —con sus leyes que defienden la santidad de la propiedad privada y de los derechos del individuo sobre los derechos colectivos, y con sus mecanismos administrativos (las fuerzas del orden, normas laborales, sistemas de seguridad social) dirigidos a canalizar la lucha de clases y el poder social proporcionado por su influencia en el sistema financiero y la impresión de dinero— emergió como un medio para contener las contradicciones sociales producidas por el sistema capitalista, y, por tanto, para generar relaciones de mercado estables. Su objetivo ha sido asegurarse de que las luchas sociales no se conviertan en amenazas a las relaciones de mercado a través de su canalización o, de ser necesario, de la represión (Gordon, 2010: 33).

Los Estados imperialistas contemporáneos dedican sus mejores esfuerzos a mantener los mercados domésticos y abrir nuevos en el exterior, para beneficio de sus multinacionales. Estas características del período neoliberal —el incremento de la IED y del comercio, la emergencia de las multinacionales y el rol facilitador de estos procesos por parte de los Estados capitalistas centrales— son, en parte, la razón por la cual le prestamos tanta atención a lo largo del libro a la dinámica de la inversión extranjera canadiense en América Latina, y

al rol del Estado canadiense en apoyar el avance de sus corporaciones en la región.

Acumulación por desposesión

El concepto central del análisis del capitalismo desarrollado por el geógrafo marxista David Harvey es el de acumulación por desposesión. Este concepto es una extensión de la noción de Marx de "acumulación primitiva". Ellen M. Wood explica que en los escritos de Marx acumulación primitiva se refiere a "la expropiación de los productores directos, en particular los campesinos", un proceso que "permitió el despliegue de relaciones sociales de propiedad y la dinámica asociada con ello" (Wood, 2002: 48). Marx escribe sobre esos momentos históricos "en los que masas de hombres son arrancados de sus medios de subsistencia y arrojados al mercado de trabajo como proletarios libres, desprotegidos y sin derechos. La expropiación de la tierra del productor agrícola, del campesino, es pues la base de todo el proceso. La historia de esta expropiación asume características distintas en cada país, y sus fases se suceden en órdenes distintos en las diferentes épocas históricas" (Marx, 1990: 876).

Según Harvey, Marx tuvo el mérito de resaltar estos procesos de acumulación del capital "basados en la depredación, el fraude y la violencia", pero cometió el error de pensar que se trataba de características exclusivas de un estado "primitivo" u "original" del capitalismo. Con el concepto de acumulación por desposesión, Harvey busca subrayar la continuidad de prácticas depredadoras que han vuelto al centro de la escena con el neoliberalismo (Harvey, 2003: 144). Desde la mitad de la década de los años setenta, medios de producción que previamente estaban bajo formas de propiedad pública —ya sea como propiedad del Estado o en propiedad comunal— han sido lanzados al mercado en una escala sin precedentes, a menudo a través del fraude, la coerción y otras formas de depredación por parte del Estado o por poderosos agentes privados. En otras palabras, muchas formas de

propiedad pública se han convertido en mercancía y han entrado al mercado como objetos de compra-venta.

La intensificación de la mercantilización incluye, por supuesto, la mercantilización del trabajo, o la proletarización en gran escala de los campesinos y los indígenas. Harvey, de un modo vívido aunque quizá demasiado amplio, cobija todos estos procesos —desiguales y complejos— bajo el término de acumulación por desposesión[10]. En un nivel histórico, Adolfo Gilly y Rhina Roux han escrito:

> La expansión de la relación del capital se sostiene en dos procesos concomitantes e interconectados: la explotación (apropiación del excedente bajo la forma del plusvalor) y la desposesión (la apropiación violenta, o cobijada bajo formas legales, de recursos naturales y bienes de propiedad comunal o pública) […]. En nuestra opinión, esto es parte de un proceso permanente, que forma parte *de*, y acompaña *siempre*, al proceso del capital (Gilly y Roux, 2009).

Cada uno de estos rasgos de la fase neoliberal del capitalismo mundial tiene su variación latinoamericana específica. Volveremos a las especificidades regionales en un momento, pero primero examinaremos los patrones de la reciente expansión internacional del capital canadiense a la luz de la discusión anterior sobre el capitalismo, el imperialismo y el neoliberalismo.

La expansión del capital canadiense

Lo que aquí sostenemos es que Canadá está profundamente imbricado en la dinámica contemporánea del imperialismo tal y como se desarrolla en Latinoamérica. Para empezar, la escala de la expansión del capital canadiense en la región bajo la forma de IED durante el

10 Para una discusión y crítica del concepto de Harvey de acumulación por desposesión ver Brenner (2006: 79-105) y Callinicos y Ashman (2006: 107-131).

último cuarto de siglo ha sido mayúscula. Esto ha sido posible por la liberalización de flujos de capital, el cambio en la normatividad de los sectores financiero y natural, la privatización de activos públicos, etc. En 1990, la inversión extranjera acumulada canadiense era solamente de 2,58 mil millones CAD (dólares canadienses). Para el año 2000 había llegado a los 25,3 mil millones CAD, un aumento del 880 por ciento. Luego subió a los 59,4 mil millones CAD en 2013 —en medio de la recesión económica mundial más profunda desde la década de los años treinta—, un aumento del 134 por ciento desde el año 2000 y del 2.198 por ciento desde 1990.

Lo que es más, las cifras de 2000 y 2013 sin duda subrepresentan la penetración del capital canadiense. Esto se debe a que las cifras de Statistics Canada, de donde vienen las estadísticas anteriores, no incluyen la inversión canadiense que pasa por los centros financieros *offshore* caribeños. Si lo hiciera, posiblemente duplicaría o hasta triplicaría las cifras para algunos países debido a la fuerte presencia del capital canadiense en el sector *offshore* caribeño, tema que discutiremos más adelante[11].

Para poner en perspectiva el crecimiento de la inversión canadiense en Latinoamérica, la IED estadounidense en la región a lo largo del mismo período, aunque es mucho más alta en términos absolutos (283,9 mil millones de dólares en 2012), aumentó a un ritmo más lento: 79 por ciento entre 2000 y 2012, y 555 por ciento entre 1990 y 2012. Debe subrayarse que la proporción de la inversión extranjera estadounidense respecto al total de inversiones pasó del 46,8 por ciento en 1990 al 38,7 por ciento en 2012. Entre los años 2007 y 2012, Canadá fue la segunda principal fuente de inversiones para la región después de Estados Unidos —la tercera si consideramos a América Latina en

11 La mayor parte de estas estadísticas vienen del Cuadro 376-0051 de la CANSIM (CANSIM es la principal base de datos socioeconómica de series temporales de Statistics Canada). Las cifras sobre varios países ya no son publicadas por Statistics Canada. Por tanto, las cifras que aquí se presentan sobre Panamá son de 2010, y las estadísticas sobre Ecuador, Honduras y Guatemala son de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (ECLAC, 2012: 53-54). Las cifras de 2011 sobre Nicaragua vienen de Mayoral (2012).

su conjunto como una sola fuente—, un salto desde el quinto lugar durante el período 1995-2005. Y aunque la inversión estadounidense es más grande que la canadiense, esta última es proporcionalmente mucho más alta que la primera. Otro dato especialmente significativo: la economía canadiense es diez veces más pequeña que la de Estados Unidos, pero su inversión extranjera en Latinoamérica y el Caribe es un cuarto de la estadounidense (BEA, s/f [sin fecha])[12].

Finanzas y minería

El capital canadiense echa raíces en todo tipo de sectores. Como veremos en el capítulo sobre Honduras —el mayor productor de calcetas y camisetas del mundo—, el principal empleador privado en ese país es Gildan Activewear, una corporación de Montreal. Otras compañías canadienses de petróleo y gas, constructoras y de ductos, también juegan un papel controversial en el continente. Pero es en el sector financiero y minero en el que las compañías canadienses son las más prominentes. Las primeras tienen largas raíces históricas en la región, a menudo conectadas con las dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Pero durante período neoliberal el capital financiero canadiense se ha extendido espectacularmente en el hemisferio occidental, al pasar del 15 por ciento de la IED a finales de los años ochenta, hasta casi la mitad en los años 2000 (McFarlane, 1989; Stewart, 1982; Hudson, 2010: 33-48)[13]. Scotiabank,

---

12 Como se apunta en esta referencia bibliográfica, las cifras sobre la IED de Estados Unidos vienen del Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce (BEA). Las comparaciones regionales vienen del reporte de la CEPAL (ECLAC, 2012: 37; ECLAC, 2005: 22). Y también de acuerdo con la CEPAL, debe señalarse que Holanda es una fuente más grande que Canadá, sin embargo, no la incluimos aquí puesto que buena parte de la IED que oficialmente viene de ahí, de acuerdo con la propia CEPAL, es de hecho capital no holandés. Nótese que las estadísticas específicas de IED de las agencias estadísticas de estos dos países pueden ser obtenidas para América Latina, pero las estadísticas de la CEPAL que comparan los principales países de los que proviene la IED, no permiten ese nivel de especificidad, por tanto hablamos de "América Latina y el Caribe combinados".

13 *Northern Shadows*, un libro de Peter McFarlane, cubre mucho más que el sector financiero, y ofrece una poco común historia crítica de la relación entre Canadá y América Central (McFarlane, 1989).

por ejemplo, el banco canadiense mejor establecido fuera de Norteamérica, genera más de un quinto de sus ganancias a partir de sus inversiones internacionales, la mayoría de las cuales están en América Latina y el Caribe.

Scotiabank gastó unos seis mil millones CAD en más de 20 adquisiciones en la región entre 2007 y 2012 —parte integrante de una ola de compras de activos por parte de instituciones financieras canadienses en los años que siguieron a la crisis de 2008 (Robertson, 2013: B5; French, 2012: FP5; Pasternak, 2011)—. Los bancos canadienses dominan el sector financiero en el Caribe Inglés. Los tres bancos más grandes de la zona son canadienses —RBC, Scotiabank y CIBC— y tienen unos 42 mil millones en activos ahí (el 61 por ciento del total de activos bancarios del Caribe), 40 veces más que los más de 40 bancos locales (Ogawa *et al.,* 2013; *The Economist*, 27/03/2008). La importancia de esta influencia se extiende, por supuesto, más allá del Caribe Inglés. Como dice la CEPAL:

> La proporción de la IED que pasa por centros financieros internacionales ha aumentado significativamente, y representa una distorsión considerable, puesto que estos flujos de capital canadiense no se quedan en los centros *offshore*, sino que van a destinos finales en otros mercados, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, Asia, Estados Unidos y Europa (ECLAC, 2007: 144).

A su vez, la industria minera canadiense es la más grande del planeta. Unas dos terceras partes de las compañías mineras del mundo son de Canadá. Un régimen fiscal y legal permisivo y una larga historia minera han nutrido un sector de exploración y producción agresivo, y la política exterior ha apoyado sistemáticamente a las compañías con ambiciones internacionales (FAIT, 2009a). Esas ambiciones, sostenidas sobre la lealtad legal y diplomática del Estado canadiense, han llevado a las compañías a buscar ganancias en prácticamente todo el mundo. Pero Latinoamérica y el Caribe representan más de la mitad de los

activos mineros canadienses en el exterior: 72,4 mil millones CAD[14]. Mientras que en 1990 en la región sólo había dos minas canadienses en operación (es decir, no sólo en la fase de exploración o en construcción), la cifra dio un salto hasta las 80 minas en 2012, con otras 48 en desarrollo, de acuerdo con la Plataforma Canadiense de Desarrollo Internacional (cuyas estadísticas provienen de la base de datos de la industria: www.infomine.com).

Estas minas generaron un ingreso combinado de 19,3 mil millones CAD en 2012 (CIDP, 2013; Comunicación personal con P. Heindrich, 19 de marzo de 2013). De acuerdo a la base de datos del sitio web *Northern Miner* (una publicación de la industria), en 2014 el 62 por ciento de las minas de la región pertenecían a compañías canadienses[15]. El tamaño y el rol dirigente de la industria minera canadiense son sin duda las razones por la cuales Toronto es el punto nodal financiero de la industria a nivel mundial. En 2013, por ejemplo, 6,9 mil millones CAD fueron obtenidos mediante la venta de acciones en las dos bolsas de valores de la ciudad (la Toronto Stock Exchange [TSX] y la Toronto Venture), lo que representa el 84 por ciento del total mundial (TSX, 2014).

Súper ganancias

El control de los mercados de recursos naturales latinoamericanos ha bañado a los dueños de las compañías canadienses en súper ganancias. Si observamos tan sólo las ganancias de las minas que seguían en operaciones en 2013 (15 minas de oro en total), las tres

14 Las cifras sobre los activos mineros canadienses vienen de *Natural Resources Canada* (s/f). La categoría de "las Américas" no especifica América Latina, aunque es claro en la base de datos de propiedades de www.northernminer.org que la mayoría de los activos están en América Latina, y no en el Caribe. Nótese que "activos" no es lo mismo que IED: activos incluye, por ejemplo, proyectos no financiados por capital canadiense y se refiere más al destino que a la fuente de la inversión (es decir, incluye inversión canadiense que pasa a través de Estados Unidos).

15 Las cifras vienen de la base de datos de www.northernminer.org, visitada el 8 de abril de 2014. De acuerdo con esta fuente, había cien minas activas, todas ellas de compañías con sede en Canadá.

más grandes por ingresos —Barrick, Yamana y Goldcorp— obtuvieron una ganancia neta de 14,9 mil millones de dólares entre 1998 y 2013[16]. La tasa de ganancia para estas minas fue de un impresionante 45 por ciento; si tomamos en cuenta los impuestos y royalties para la Barrick, por ejemplo, seguía siendo de un altísimo 42,4 por ciento. La tasa de ganancia promedio para la economía canadiense en su conjunto en ese mismo período fue del 11,8 por ciento[17]. Aquí están, simple y sencillamente, los "intereses" canadienses en Latinoamérica. Como veremos después, el argumento repetido *ad nauseam* por las compañías y por gobiernos canadienses de distintos colores, así como por las propias compañías, es que no se trata de que se estén volviendo asquerosamente ricas gracias a los recursos de comunidades despojadas y empobrecidas. No, claro que no: están mejorando las condiciones de vida de las comunidades de las que extraen oro, plata, cobre y otros minerales del subsuelo.

La verdad es que sólo una ínfima parte de las ganancias son reinvertidas en las comunidades. La "inversión comunitaria" combinada de Barrick y Yamana —parte esencial de la llamada agenda de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), cuyo objetivo es fomentar la ficción de que las mineras "dan" algo a cambio de la tierra que explotan y de los problemas políticos que crean — fue de un miserable 1,4 por ciento de los ingresos netos de 2012, y de un 0,9 en 2011 (no hay cifras similares para Goldcorp)—. Pero más allá de estas "inversiones comunitarias", una vez que se termina la construcción, el flujo de dinero nuevo se detiene casi completamente. Los costos de construcción de las nuevas minas son recuperados en unos pocos años de operación.

Los nuevos gastos de capital en minas operativas de Barrick y Goldcorp promediaron el 39,9 por ciento de las ganancias del año anterior.

---

16 Identificamos estas tres compañías usando ingresos totales que aparecen en la plataforma de 2012 de Canadian International Development.

17 Las cifras sobre la tasa de ganancia doméstica canadiense nos fueron proporcionadas por Geoff McCormack, cuyos cálculos están basados en los cuadros de la CANSIM 031-0002, 380-0063 y 382-0006.

Estos gastos son, por tanto, ganancias reinvertidas, no flujos nuevos. En otras palabras, la mayoría de las ganancias abandonan el país, y una vez terminado el período de construcción, la mina representa una considerable fuga neta de valor. También es necesario tener en cuenta la poca cantidad de empleos producidos por la minería a gran escala, aparte del desplazamiento humano y del daño ecológico irreparable. Para ser concretos: estas compañías y sus dueños se están haciendo asombrosamente ricos gracias a la riqueza mineral de América Latina, dejando a su paso comunidades empobrecidas, abandonadas ante una realidad de dislocación social y degradación ambiental. Y, casi siempre, es la violencia la que permite todo esto[18].

La importancia estratégica de América Latina para Canadá

Instintos depredadores

La devastación provocada por las corporaciones canadienses en América Latina podrá ser concienzudamente evitada en los medios de comunicación masivos canadienses o en la literatura académica, pero la reputación de estas corporaciones las precede en la región. La población que vive en lugares con una inversión canadiense influyente

18 Las cifras de las compañías vienen de los reportes financieros y de los reportes de responsabilidad corporativa. Los ingresos y los costos son únicamente por operación de las minas (no incluye los costos de exploración) y tampoco incluye los ingresos no relacionados a la extracción y venta directa del oro, como ingresos por intereses o coberturas. Para el año 2013, usamos costos "todo incluido" para nuestra medida de costos; para otros años consideramos gastos en "efectivo" más gastos por capital (o "gastos en costos de minería" para Goldcorp). Los costos se calculan sobre el oro vendido y no sobre el oro producido (aunque la diferencia entre estos dos rubros no es significativa) para tener una idea más clara de los costos asociados en comparación con la dimensión de los ingresos. El oro no vendido, en todo caso, es mantenido como reserva, y, por tanto, como un activo para ser vendido en el futuro. Barrick es la única de las tres compañías que sistemáticamente diferencia los impuestos y regalías por cada mina en operación. No hay cifras de "inversión comunitaria" de Goldcorp después de 2009 y no están divididas por región o por mina. Los costos de construcción de Yamana, por ejemplo, son contabilizados dentro de sus gastos de capital, y por tanto no calculamos un gasto en capital postconstrucción.

sabe perfectamente bien de qué tipo de cosas esas corporaciones son capaces. Las calaveras han ocupado el lugar de la hoja de arce en la bandera canadiense, y nadie que viva en una región minera se hace ninguna ilusión. Las historias reales de la inversión canadiense en Latinoamérica que yacen detrás de los cuentos de hadas encontrados en los reportes de responsabilidad corporativa tienen un lugar de primera importancia en este libro.

Las mentiras de las grandes mineras, de las maquiladoras y de otros dueños del capital tienen que ser demolidas para que las élites económicas y los políticos que las apoyan puedan ser llamados a cuentas. Impacientemente a la espera de súper ganancias, los dueños de las compañías del sector primario no tienen ningún interés en resolver los problemas políticos de las comunidades afectadas. Cualquier disenso se convierte en un problema de seguridad —a menudo a un alto precio para los que resisten—. Entre 2009 y mayo de 2014, por lo menos 23 personas fueron asesinadas en América Latina en conflictos que involucran a mineras canadienses[19].

Pero esa sólo es la punta de un iceberg de sangre. Un reporte de 2009 del Canadian Centre for the Study of Resource Conflict, comisionado por la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), una organización formal del sector, llegó a la conclusión de que las compañías canadienses tienen el peor récord mundial en derechos humanos, así como en incidentes ambientales y laborales. Ellas solas son responsables de un tercio de todos los casos estudiados —una proporción muchísimo más alta que la de cualquier otro país estudiado—. La PDAC no publicó su estudio, fue filtrado[20]. Por supuesto, las violaciones a los derechos humanos, los incidentes ambientales y los conflictos sociales no son coto exclusivo del sector minero, incluso

19 Esta cifra está basada en reportes de los medios de comunicación en la gran prensa canadiense, la prensa alternativa y la latinoamericana. Los países en los que ha habido asesinatos son: Bolivia, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Panamá.

20 Como en la cita anterior, esta cifra tiene base en los reportes de los medios de comunicación mencionados.

si éste ha producido algunos de los ejemplos más absurdos. Gildan Activewear, por ejemplo, es un líder mundial en la producción textil gracias a sus terribles condiciones de producción en Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Scotiabank, por citar un ejemplo de otro sector, fue objeto de violentas protestas durante el colapso económico argentino en 2002, cuando el banco prohibió a sus clientes de clase media y baja retirar sus ahorros, y se rehusó a recapitalizar su filial argentina. Scotiabank simplemente clausuró operaciones y salió del país, dejando a sus clientes en la pobreza (Gordon, 2010: 255-238).

El Estado y el capital

La conquista de Latinoamérica por parte del capital canadiense no se hizo sola, recibió el apoyo sistemático del Estado —de la Oficina del Primer Ministro y la de Relaciones Exteriores, pasando por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y los ministerios de Defensa Nacional, Recursos Naturales y el de Salud[21]—, como veremos con detalle después. La política exterior canadiense en Latinoamérica ha estado atada a la expansión exterior del capital de ese país, ambas respondiendo a las necesidades de corporaciones cuyas inversiones no han dejado de crecer y que se enfrentan a cada vez mayores obstáculos políticos y sociales. Los políticos canadienses le han dado prioridad a nuevos tipos de relaciones con los Estados de la región, esperando crear las mejores condiciones posibles para la obtención de ganancias. Poder expandir más y más la inversión en la región se ha convertido en una tarea estratégica para los hombres de Estado. América Latina estaba claramente en el radar de los gobiernos liberales de Jean Chrétien y de Paul Martin en la década de 1990 y en los años 2000. Fueron ellos quienes firmaron los primeros tratados de libre comercio, así como una serie de tratados bilaterales de inversión (llamados en Canadá

21 Desde 2015, la Cancillería canadiense (Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, FAIT), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency, CIDA, por su sigla en ingés) y el despacho de Comercio Internacional, son parte de Global Affairs Canada.

"acuerdos para la protección de la inversión extranjera"). Los primeros incluyeron el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica, el de Chile y el de Costa Rica. Pero las relaciones con Latinoamérica recibieron un empuje extra, y una articulación más clara, bajo el gobierno conservador de Stephen Harper, quien firmó otros cuatro tratados de libre comercio e intentó trazar —tanto en público como en privado— una agenda para la intervención canadiense[22].

Esto no quiere decir que la política exterior canadiense pueda ser reducida a los caprichos de un gobierno en particular, sea Conservador, Liberal, o incluso Nuevo Demócrata. Justin Trudeau, líder del Partido Liberal, reemplazó a Harper como Primer Ministro en octubre de 2015. Aunque es demasiado temprano para hacer afirmaciones tajantes acerca de la orientación de la política exterior latinoamericana de su gobierno, hay pocos motivos para esperar una ruptura con el legado de Harper. Es claro que el gobierno de este último legó un cierto rastro cínico en la relación de Canadá con el continente americano (así como con el resto del mundo), y, como estuvo en el poder entre 2006 y 2015, sus acciones son analizadas con detalle en este libro. Pero, para resaltar un punto mencionado en nuestra discusión de las formas contemporáneas del imperialismo, las distintas políticas exteriores canadienses —o las variaciones en ésta—, así como las de otros Estados, se ven delimitadas por los ritmos de acumulación del capital, con todas sus necesidades políticas y económicas, con sus contradicciones y límites ecológicos, y por el lugar del país dentro de la jerarquía del sistema mundial. Esas políticas se mantendrán —sin duda con cambios en el énfasis en ciertas prioridades y en el estilo agresivo previo— mientras no haya un reordenamiento profundo de las raíces estructurales del imperialismo capitalista, independientemente de que Harper ya no

22 Una señal de la importancia de América Latina para el gobierno de Harper son los constantes viajes de alto nivel. Harper hizo un *tour* en 2007, visitó Honduras en 2011 y se dio otra vuelta en 2013. El ministro de Relaciones Exteriores John Baird hizo otro viaje largo en el verano [entre mayo y agosto] de 2013. Varios ministros canadienses visitaron Honduras durante las negociaciones del TLC, y Peter Kent y Diane Ablonczy, ministros de Estado para las Américas, ejercieron cargos diplomáticos dirigidos específicamente a la región.

esté ahí. El análisis cuidadoso de las relaciones de Canadá con Latinoamérica revela que los conservadores no representaron un cambio radical respecto a sus predecesores liberales, y con Trudeau a la cabeza deberíamos, otra vez, esperar más continuidad que cambio.

La economía, la democracia y la seguridad eran los intereses declarados del *Strategy for Engagement in the Americas*, el documento programático clave del gobierno de Harper, publicado en 2007. La *Estrategia* fue aplaudida por muchos observadores como un giro necesario hacia el continente, después de décadas sin un plan coherente y general en la política exterior. Sin embargo, Harper fue criticado posteriormente por académicos y analistas por no seguir su propio plan, o no darle suficientes recursos. Por ejemplo, se argumentó que Canadá fue incapaz de asistir en tareas de seguridad en la región debido a su involucramiento excesivo en Afganistán, o que sus planes de promover la democracia en los países donde sufría las amenazas más claras (esos críticos con esto solían referirse a países como Venezuela o Ecuador) eran inconsistentes y no tenían una estrategia suficientemente clara. Estas críticas yerran el blanco. Para empezar, el objetivo del gobierno de Harper en sus relaciones con Latinoamérica nunca fue la promoción de una agenda democrática auténtica, y en todo caso nada que excediera los angostos parámetros de la democracia neoliberal.

El objetivo primordial de la referida *Estrategia* es la protección de los derechos del capital mundial en general, y del capital canadiense en particular: la creación y reforzamiento de las condiciones necesarias para la acumulación (y repatriación) de las ganancias de los inversionistas canadienses. Esto incluye mecanismos que promuevan la liberalización de los mercados, sólidos derechos de propiedad y la debilitación de cualquier institución que pudiera desafiar este paradigma.

Seguridad/Democracia

Aunque la mayoría de la atención y gasto en seguridad por parte del Estado canadiense entre 2001 y 2014 fue hacia Afganistán, es importante recalcar que América Latina no salió nunca del radar. Con

mucho menos pompa que en su intervención en Afganistán, Canadá se ha dedicado a estrechar lazos con gobiernos centroamericanos y andinos que comparten su visión flexible de los derechos humanos. Para ponerlo claramente: una visión utilitaria de la democracia y la seguridad —ignorada por la mayoría de los analistas— ha llevado a Canadá a apoyar a gobiernos de extrema derecha (Guatemala) o autoritarios (como el gobierno hondureño postgolpe).

Las condiciones óptimas

Reproducir las condiciones óptimas para los inversionistas extranjeros en América Latina requiere, para utilizar el vocabulario de la política exterior canadiense, una "perspectiva holística de gobierno". No sólo se trata de movilizar a la Cancillería (Foreign Affairs and International Trade, FAIT, por su sigla en inglés) y a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency, CIDA, por su sigla en ingés)— las cuales, sin duda, siguen jugando un papel central—, sino también a muchos otros ministerios y oficinas del Estado: Recursos Naturales, Salud y, por supuesto, varias agencias de seguridad. Los ministerios de Recursos Naturales y de Salud no son parte oficial de las agencias de relaciones exteriores, pero influyen y tienen una voz importante, especialmente cuando los gobiernos extranjeros, presionados por los movimientos sociales, ponen en tela de juicio los desarrollos del capital canadiense. Estos departamentos ponen manos a la obra para demostrar que esos proyectos son seguros, ambientalmente responsables y beneficiosos para la economía local. Siguiendo el llamado del gobierno Harper por un mayor acercamiento a la región, las agencias canadienses de seguridad, como Defensa Nacional y la RCMP (*Royal Canadian Mounted Police*, la Polícia Montada de Canadá), han aumentado su inversión en entrenamiento, ejercicios de combate, y han aumentado la venta de armas y de tecnología a varios Estados. La línea oficial del gobierno Harper fue dejar de depender de la diplomacia *suave*. En un discurso a líderes del Partido Conservador, Harper afirmó que en un mundo

de amenazas cada vez mayores, "la fuerza no es una opción, es una necesidad vital" (Berthiaume, 2011).

Esto claramente tiene repercusiones en las relaciones con América Latina. Por supuesto que Canadá no tiene el poderío militar de Estados Unidos o de otras grandes potencias, pero tampoco tiene una fuerza despreciable: tuvo el decimocuarto presupuesto de defensa más alto del mundo en 2012 (detrás de varias expotencias coloniales y de países cuyos ejércitos son financiados por Estados Unidos). Durante los últimos años aprobó presupuestos de defensa arriba de los 20 mil millones de dólares —bastante más que durante la Guerra Fría (tomando en cuenta la inflación)—. La *Canada First Defence Strategy* (*Estrategia de Defensa Canadá Primero*), aprobada por el gobierno de Harper en 2008, prevé aumentos en el gasto militar hasta el período 2027-2028. Aunque el gobierno redujo sus pretensiones presupuestarias y cortó el gasto militar tras el estallido de la crisis financiera de 2008 y la reducción de su participación en la ocupación de Afganistán, las proyecciones de gastos totales de la *Estrategia de Defensa* alcanzan todavía los 400 mil millones de dólares a lo largo de su existencia proyectada. Evidentemente, esos gastos no tienen nada que ver con operaciones de mantenimiento de la paz: la inversión en *jet* de caza, buques acorazados, drones no tripulados, etc., tiene como objetivo aumentar la proyección del poder destructor de Canadá (SIPRI, 2013; Robinson, 2011; Meyer, 2012; Pugliese, 2012; Gordon, 2010: 294-301, 308-312). En efecto, las fuerzas armadas de Canadá han jugado un papel central en las grandes intervenciones de la última década en Afganistán, Libia, Mali, Irak y Siria, lo que da cuenta de una gran capacidad y voluntad para exponer su poderío militar.

De hecho, la segunda gran intervención militar canadiense en lo que va del nuevo siglo (tras la invasión de Afganistán, pero antes de involucrarse en Kandahar en 2006) fue en el hemisferio occidental: el golpe de Estado de 2004 contra el presidente democráticamente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide, y la ocupación militar que

le sucedió[23]. Ese golpe —edulcorado por el apoyo de un gobierno liberal en Ottawa— envió la señal de que Canadá estaba dispuesto a aplicar su poderío militar contra los gobiernos y movimientos que no se sometan enteramente al proyecto imperial. Éste es, hasta la fecha, el único ejemplo de intervención militar abierta contra un gobierno del hemisferio, pero la agenda canadiense de seguridad se encarna en otras formas, acaso más sutiles. La policía y las fuerzas armadas de Honduras y Guatemala, que constantemente reprimen y violan los derechos humanos de los disidentes locales, reciben entrenamiento y financiamiento canadiense.

Las fuerzas armadas jamaiquinas y canadienses tienen estrechas relaciones desde hace décadas, y recientemente Canadá abrió allí una base militar. El pretexto oficial son las operaciones antidrogas y contraterroristas en el Caribe, pero como veremos más adelante, éstas son sólo una pequeña parte de lo que realmente está en juego. Las fuerzas armadas con las que el gobierno de Harper cultivó relaciones pertenecen a países con los cuales Canadá comparte una visión política y económica, y/o a países en los cuales el capital canadiense tiene intereses de peso y enfrenta una oposición organizada, como en Honduras, Guatemala y Colombia.

La relación de seguridad entre Canadá y Colombia es un buen botón de muestra del pensamiento (y el papel asignado a los derechos humanos) de la política exterior canadiense. Colombia tiene el peor historial de derechos humanos en el hemisferio, con crímenes perpetrados regularmente por el ejército y bandas paramilitares con vínculos apenas escondidos con las fuerzas armadas. Esta situación, que Canadá conoce perfectamente bien, no impidió que se firmara un acuerdo de cooperación en seguridad, en abril de 2012, que incluye también cooperación y asistencia técnica a los aparatos de seguridad de Guatemala y Honduras (*Radio Santa Fe*, 14/04/2012).

23 Para más información sobre el golpe y el papel central de Canadá en este evento y en la violencia posterior, ver Hallward (2007), Gordon (2010: 326-343) y Barry-Shaw y Oja Jay (2012: 225-242).

Sin embargo, las tareas esenciales del proyecto imperial canadiense recaen en la Cancillería (FAIT), en la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y en el despacho de Comercio Internacional. La Cancillería, en comunicación con la Oficina del Primer Ministro, organiza y dirige la arquitectura general de la política exterior, tanto en Latinoamérica en general como en países estratégicos específicos. Suelen ser los ministros del gabinete con los portafolios de relaciones internacionales y comercio internacional quienes diseminan por la región el mensaje de libre mercado y democracia restringida, y son, por supuesto, los burócratas en el departamento de Comercio Internacional quienes escriben los tratados de libre comercio. Un componente de la política exterior canadiense que recibe una atención sorprendentemente escasa por parte de los observadores es la red de embajadas a lo largo de América Latina. Como veremos más adelante, los funcionarios de las embajadas (embajadores, comisionados de comercio, agentes de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) son la punta de lanza del proyecto imperial canadiense. Las tareas de estos "misioneros" van desde presionar a los gobiernos locales hasta fungir como los ojos, oídos y bocas de las compañías y de Ottawa, pasando por recolectar inteligencia e implementar la política oficial. Los funcionarios de las embajadas a menudo asumen el papel de agentes detrás de bambalinas para los inversionistas canadienses. Son ellos quienes navegan las aguas de la política local, abogan por inversiones, presionan para liberalizar sectores económicos y le reportan a Ottawa cuando se necesita más presión para que penetren los capitales canadienses. Estos funcionarios y diplomáticos a menudo discuten entre ellos las estrategias más efectivas para responder a los movimientos de oposición a las mineras canadienses (Calderón, 2011a).

Ése es el papel que juega, sin darse cuenta, Anthony Bebbington, un académico experto en las industrias del sector primario en las Américas, quien durante una sesión en el Parlamento canadiense, y ante el Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional (*Standing Committee on Foreign Affairs and International*

Development, SCFAID, por su sigla en inglés), parafraseó a un funcionario latinoamericano, quien le dijo: "Hasta donde yo sé, el embajador canadiense es un representante de las compañías mineras"[24]. En coordinación con las embajadas, el gobierno canadiense a menudo paga a periodistas y funcionarios de ministerios relacionados con los recursos naturales para que viajen a la conferencia anual de la Asociación de Desarrolladores y Prospectores de Canadá (PDAC, por su sigla en inglés) para que conozcan directamente a los representantes de la industria y a los funcionarios canadienses.

Jennifer Moore de *Mining Watch* describe con precisión este ritual anual como un esfuerzo "para canalizar el mensaje de los conflictos mineros" (Mining Watch, 2012). Los periodistas y los funcionarios invitados siempre son de países en los que los intereses mineros canadienses se han visto amenazados por movimientos sociales o por ciertas políticas estatales. Como veremos a lo largo del libro, la defensa del capital canadiense no es una novedad para las embajadas. Por tanto, la declaración de Harper de noviembre de 2013, en donde decía que "todos los recursos diplomáticos [...] serán administrados para el beneficio del sector privado", no fue un cambio de política, como algunos creen, sino simplemente una confirmación oficial tardía de algo que los diplomáticos canadienses han hecho durante mucho tiempo en la oscuridad[25].

La ayuda al desarrollo

Los programas de ayuda al desarrollo deben ocupar un lugar central en cualquier estudio crítico sobre la intervención canadiense

24 Anthony Bebbington fue citado por el Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional del Parlamento canadiense (*Standing Committee for Foreign Affairs and International Development*, SCFAID, por su sigla en inglés), 41st Parliament, 1st Session, en fecha 29 de febrero de 2012.

25 La cita es de un documento de la Foreign Affairs and International Trade (FAIT), mencionada a su vez por Ibbitson (2013: A1).

en Latinoamérica. La afirmación del gobierno canadiense de que sus programas están dirigidos a mejorar el bienestar de los latinoamericanos no resiste el más mínimo escrutinio. El presupuesto canadiense de ayuda al desarrollo está en la mitad más baja de los países donantes en relación con el ingreso nacional bruto (Brown, 2012: 79-107). Se trató de apenas 187,7 millones CAD para América Latina entre 2011 y 2012. Para poner esto en contexto, en 2012 tan sólo las compañías mineras canadienses, como hemos visto, tuvieron ingresos por 19,3 mil millones CAD, y tres mineras de oro —Barrick, Yamana y Goldcorp— obtuvieron ganancias netas por 2,8 mil millones CAD. Las remesas de Canadá a América Latina en 2012 llegaron a los 768 millones CAD, cuatro veces más que la ayuda al desarrollo del gobierno canadiense. Cualquier discusión de este tipo de programas debe tomar en cuenta que los presupuestos de ayuda incluyen los costos de la burocracia y, en el caso de Canadá, el apoyo al desarrollo de recursos, un detalle importante que veremos más adelante. En otras palabras, las cifras presupuestales proporcionadas por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) no son una representación exacta de lo que Canadá realmente gasta en ayuda al desarrollo, o qué tan efectiva es esa ayuda[26]. Un estudio del Banco Mundial situó a Canadá en el lugar 29 de un total de 38 respecto a la *calidad* de sus programas de ayuda al desarrollo (Knack, Rogers y Eubank, 2010)[27].

---

26 Las cifras de ayuda canadiense a América Latina vienen de los expedientes por país de la página de internet de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), disponible en www.acdi-cida.gc.ca. Esto no incluye el financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cifra que se encuentra en un cuadro estadístico separado. Aunque la Agencia de Desarrollo Internacional cuenta este dinero, que alcanzó los 241,7 millones CAD en el período 2011-2012 como parte de su presupuesto de ayuda al desarrollo, sólo poco más del uno por ciento del presupuesto del BID es otorgado en forma de donaciones. El resto son préstamos que se pagan con intereses o con garantías hipotecarias, en lugar de ayudas bilaterales o multilaterales directas que no requieran reembolso con intereses. Todas las donaciones fueron para Haití (BID, 2012; CIDA, 2012c). Las cifras de remesas vienen del documento del Banco Mundial (Banco Mundial, s/f).

27 Acerca del pobre desempeño de la ayuda al desarrollo, ya sea en términos de presupuesto o en relación con otras naciones donadoras, consultar McGill (s/f: 24-52).

La cuestión no es simplemente que Canadá tenga un presupuesto avaro de ayuda al desarrollo. Para los estadistas canadienses, la ayuda, como cualquier otra herramienta de la política exterior, es un instrumento para crear las condiciones apropiadas de acumulación del capital en los países pobres[28]. Julian Fantino, exministro de Cooperación Internacional, afirmó brutalmente que el papel de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) es "alistar a la gente y los países para el comercio y la inversión" (Fantino, 2012). La posición de Fantino, que tiene eco entre conservadores, liberales y directivos de la Agencia de Desarrollo Internacional, es que la única senda de desarrollo que una nación puede seguir es la de libres mercados y fuertes derechos de propiedad privada, donde la ganancia es ama y señora, y una parte de ésta cae en cascada eventualmente a las comunidades pobres a las que se dirige la inversión. Fantino escribió después en una columna en la revista *Embassy*: "Simplemente, no es plausible esperar un desarrollo económico sostenido sin un gobierno estable o sin un sector privado dinámico". Cualquiera que sugiera lo contrario —dijo— simplemente "está volviendo a dogmas

28 En el rubro de la "efectividad de la ayuda", Brown (2012) también identifica los intereses comerciales como parcialmente responsables del aumento en la preocupación por la "efectividad" en la toma de decisiones acerca de este rubro en los años 2000. Sin embargo, su hipótesis de que el "prestigio internacional" ha jugado un rol cada vez más importante en la política de ayuda canadiense, por lo menos desde Chretien hasta los primeros días del primer gobierno (minoritario) de Harper, debilita su argumento. Puede ser verdad que hubo un deseo de "sentarse a la mesa" de los grandes donadores en varios países en los que Canadá concentró su ayuda, pero incluso en los momentos tardíos de los gobiernos liberales y en los primeros de los conservadores, es arriesgado decir que esto superó el deseo de ayudar en la expansión del capital canadiense. La mayoría de los países que Canadá identificó para "alianzas ampliadas" bajo los liberales y, con los conservadores, como "países de enfoque", eran países en los que las compañías canadienses ya tenían intereses o habían sido identificados como lugares con potencial de inversión, particularmente en el sector de los recursos naturales. Y si entendemos la política de ayuda como un instrumento de la política exterior dentro de una economía mundial —como una herramienta para la reproducción de relaciones capitalistas de mercado—, vemos que los intereses del capitalismo canadiense siempre han jugado un rol importante en la articulación de la política exterior y de ayuda al desarrollo, y que las declaraciones explícitas de Julian Fantino, así como la incorporación de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) al nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo, no implican de ningún modo una ruptura radical con el pasado (Gordon, 2010: 142-152; Barry-Shaw y Jay, 2012; Campbell, 2004: 104-106).

anticuados" (Fantino, 2013: 7)[29]. Este fue el mismo argumento con el que el gobierno de Harper defendió sus tratados de libre comercio con Colombia y Honduras a pesar de la dura represión política que aqueja a estos países: el libre mercado elevará los estándares de vida y, de algún modo, mejorará los derechos humanos, así que a todos les irá mejor al fin de cuentas.

Esta es la teoría económica del goteo de riquezas (*trickle down*), convertido en una teoría del goteo de derechos humanos. Es teóricamente espuria y empíricamente injustificada por la realidad de esos países. De hecho, el argumento de Fantino y compañía no es otra cosa que necesidad política revestida de teoría política para justificar el saqueo de riquezas de países pobres y débiles. Desde hace varios años que la ayuda al desarrollo está cada vez más atada a la industria minera canadiense. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) se comprometió a gastar 100,7 millones CAD en entrenamiento, infraestructura y proyectos de reforma relacionados con la minería entre 2002 y 2019, aunque la mayoría del gasto se ejercerá en la segunda mitad del período. Elizabeth Blackwood y Veronika Stewart han llamado la atención hacia las distintas formas en las que la Agencia de Desarrollo Internacional apoya al sector minero canadiense, todas las cuales están justificadas con retórica de reducción de la pobreza (Blackwood y Stewart, 2012: 217-245).

Al mismo tiempo, Latinoamérica se ha convertido en objetivo importante de la ayuda canadiense, con una participación muy

29 Esta idea de la política de ayuda al desarrollo como una herramienta atada a las fuerzas del sector privado debido a cuestiones de necesidad económica, aparece en *Driving Inclusive Economic Growth: The Role of the Private Sector in International Development*, 41 Parliament, 1ra. sesión, y en la respuesta del gobierno el 7 de marzo de 2013, ambas disponibles en www.parl.gc.ca. Kim Mackrael se ha ocupado de hacer un análisis interno de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) acerca de su programa de ayuda al desarrollo y los vínculos explícitos de sus decisiones cuando se trata de dónde enfocar la ayuda relacionada con los intereses comerciales (Mackrael, 2014: A19). Es importante recordar, además, que la posición de Fantino no es una nueva orientación para la política de ayuda al desarrollo canadiense, pero sí hace gala de una exposición más cruda (Gordon, 2010; Barry-Shaw y Jay, 2012).

significativa en el programa de ayuda al desarrollo del antiguo gobierno conservador denominado *Country of Focus*. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) redujo recientemente el número de países inscritos en su programa, muchos de los cuales eran africanos, y de los más pobres del mundo. La ayuda fue redirigida y concentrada en un número mucho menor de Estados. Los países latinoamericanos que son parte del programa son Bolivia, Honduras, Colombia y Perú. Ninguno de los dos últimos es de los más pobres de la región, pero lo que tienen en común los blancos latinoamericanos de la ayuda canadiense son recursos naturales sin explotar y la atención depredadora de los inversionistas canadienses.

Esta orientación de la ayuda fue resumida acertadamente por un portavoz de Stephen Harper: "Nuestro gobierno está aumentando su asistencia al desarrollo de Latinoamérica porque son nuestros vecinos, donde tenemos importantes intereses" (Saunders, 2009: A4)[30]. Con este objetivo en mente, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) recortó la ayuda que le proporcionaba desde hace mucho tiempo a varios países que ya no encajaban en su política declarada de apoyar a los proyectos de explotación de recursos naturales —aunque tampoco hay que sobreestimar el apoyo previo de la Agencia de Desarrollo Internacional a organizaciones independientes o progresivas.

Un buen ejemplo de las purgas políticas de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional es el destino del grupo ecuménico Kairos. Los recortes a esta organización sin duda tienen que ver con su apoyo

30 Como Blackwood y Stewart observan, "'nueve de los países de enfoque' de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) tienen algunas de las 12 principales reservas de los seis minerales más importantes en el mundo". Y otros siete países tienen los principales depósitos de otros minerales considerados "vitales para la industria" o son "altamente valiosos", como las piedras preciosas, uranio, diamantes y fosfato (Blackwood y Stewart, 2012: 228). La ayuda canadiense, sin embargo, no se enfoca exclusivamente en la industria de los recursos naturales; compañías de varias industrias se han reunido y han viajado con Fantino para discutir el apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional a la inversión canadiense en América Latina. Sin embargo, el sector de los recursos naturales es obviamente una de las principales fuerzas detrás de la expansión internacional del capital canadiense, y claramente Fantino y los conservadores le dan una atención especial (Foster, 2013: 11).

a organizaciones críticas de las mineras canadienses en México (más que sus posibles conexiones al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel, como los medios inicialmente sugirieron) (Berthiaume, 2010: 1, 10)[31]. La Agencia de Desarrollo Internacional también le recortó el apoyo a Development and Peace y al Mennonite Central Committee, dos organizaciones que han trabajado con grupos opuestos a los proyectos mineros canadienses (Shane, 2012: 1, 5).

Responsabilidad Social Corporativa

Cuando la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) comenzó a recortar el presupuesto para las organizaciones que no compartían su postura respecto a la inversión en el sector primario, el área de Responsabilidad Social Corporativa empezó a recibir una proporción cada vez mayor del presupuesto de ayuda al desarrollo canadiense. Tras la intensificación de las protestas contra los proyectos de extracción de recursos primarios, la industria y el gobierno han adoptado a la responsabilidad corporativa como la nueva cara de la industria extractiva. No se puede ya discutir la minería o los proyectos de extracción petrolera sin hablar de la responsabilidad social corporativa, pero en el fondo ésta es sólo un intento de cubrir las actividades depredadoras de la industria extractiva con verborrea social. El dinero ofrecido a las comunidades, como dijimos antes, es una miseria comparado con lo que las compañías obtienen de sus inversiones destructivas. Ese dinero

31 En el caso de la purga al grupo Kairos, el hecho trascendió gracias a una nota manuscrita que provocó una respuesta del líder conservador del parlamento, cuando los principales funcionarios de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), tras preocuparse inicialmente por Kairos, eventualmente le recomendaron al ministro de Cooperación Internacional Bev Oda aprobar el financiamiento de la organización. Pero el documento que recomendaba la aprobación fue alterado posteriormente —Oda negó en un principio haber estado involucrado— con un "no" escrito a mano entre el "se" y el "aprueba". Oda eventualmente aceptaría haber ordenado que se incluyera ese "no". Un año antes de este incidente, los grupos de ayuda reportaron a los medios de comunicación que gente de Oda les avisó de las consecuencias si se involucraban en trabajo político de este tipo (Curry y Galloway, 2011: A1; Clark, 2010: A4; Clark, 2011: A8).

siempre está politizado, y a menudo se usa para comprar el apoyo de sectores de las comunidades afectadas. Por supuesto, la premisa para que se construyan pequeños centros de salud, escuelas y canchas de fútbol, es que la comunidad acepte el proyecto extractivo: sin mina no hay ayuda financiera.

Para las compañías esto es una carga financiera inevitable, cuyos costos intentan minimizar. Pero el gobierno de Harper dirigió la ayuda al desarrollo hacia los programas de responsabilidad social corporativa con la idea de subsidiar los ya magros presupuestos de las compañías. Lo que sucedió, en realidad, es que el gobierno canadiense subsidió a algunas de las corporaciones mineras más grandes del mundo en su búsqueda de súper ganancias, absorbiendo los gastos de relaciones públicas suscitados por el desarrollo de proyectos destructores del ambiente que a menudo suscitan una fuerte oposición. Lo dice Pierre Gratton de la Asociación Minera Canadiense (MAC): "Los proyectos [de CSR] nos ayudan a mejorar la imagen de la industria" (LeBlanc, 2012). Harper, por su lado, declaró que los programas de responsabilidad social "contribuirán a un clima regional de inversión y de negocios más estable" (Prime Minister's Office, 2012).

Hay cada vez más proyectos de Responsabilidad Social Corporativa ligados a la ayuda al desarrollo del Estado. Entre estos se cuenta un proyecto de dos años por 200 mil CAD para Centroamérica (CIDA, 2012a). Y en 2012, la Agencia de Desarrollo Internacional anunció fondos por 25,6 millones CAD para establecer el Instituto Canadiense Internacional para las Industrias Extractivas, como un proyecto conjunto entre la Universidad de la Columbia Británica, la Universidad Simon Fraser y la Escuela Politécnica de Montreal. De acuerdo con Julian Fantino, el instituto "le proporcionará conocimiento sobre regulaciones y supervisión" a los países ricos en recursos naturales (CIDA, 2012b). Pero el proyecto más controversial a la fecha fue el acuerdo de 2011 entre la Agencia de Desarrollo Internacional, las mineras canadienses y grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) para explícitamente vincular la ayuda al desarrollo canadiense, vía la responsabilidad social

corporativa, a proyectos mineros específicos. Se gastarán 26,7 millones CAD en cinco años y medio en los primeros proyectos de este tipo en África (Ghana y Burkina Faso) y América Latina (Barrick en Perú, y en la Iniciativa Regional Andina para Promover una Responsabilidad Social Corporativa Efectiva en los países de los Andes). En el caso de la mina a cielo abierta planeada por la Barrick en Perú, que es parte del acuerdo de la Agencia de Desarrollo Internacional, la compañía ha enfrentado una sólida oposición por parte de los campesinos, a quienes les preocupa que la mina contamine las fuentes de agua. El municipio aprobó un decreto para crear una zona de conservación natural unos pocos meses antes del anuncio de la Agencia de Desarrollo Internacional (Arnold, 2012).

Digámoslo con claridad: la RSC es una herramienta de intervención política: disuelve el proceso de toma de decisiones sobre la inversión extranjera y va contra el requerimiento del derecho internacional sobre que los gobiernos tengan el consentimiento informado de los pueblos indígenas sobre los proyectos de desarrollo que tendrán un efecto sobre ellos y sus tierras. En lugar de eso, las compañías —ahora con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, por su sigla en inglés)— intentan sobornar y cooptar a las comunidades. En el lugar de respetar la soberanía de las comunidades indígenas, la Agencia de Desarrollo Internacional ofrece 5,2 millones de dólares en el Programa para los Pueblos Indígenas, que busca "fomentar las habilidades de administración de recursos naturales de las organizaciones indígenas latinoamericanas" (CIDA, 2013). Y encuentra aliados entre las grandes ONG dispuestas a exhibir zanahorias putrefactas ante las comunidades hambreadas.

Blackwood y Stewart nos recuerdan que la Agencia de Desarrollo Internacional ni siquiera tiene la capacidad legal de hacer implementar el carácter "socialmente responsable" de los proyectos que financia (Blackwood y Stewart, 2012: 226). Pero el verdadero compromiso de Canadá con la responsabilidad social queda al descubierto cuando fracasan los esfuerzos de la RSC: la violencia, la intimidación y las

fuerzas de seguridad pasan al frente, y los pronunciamientos públicos del gobierno canadiense se transforman en silencio. El apoyo a las corporaciones también puede ser entendido a partir de lo que el gobierno canadiense no hace: conservadores y liberales se han negado a implementar una legislación que llame a cuentas a las corporaciones por violaciones a los derechos humanos y daño ecológico causado en el extranjero[32].

Mercancías extractivas y neoliberalismo militarizado

Un conjunto de dinámicas regionales ligadas a patrones de acumulación en otras partes del mercado mundial (principalmente el rápido ritmo de crecimiento en China), provocaron un giro generalizado hacia la aceleración de la minería, la extracción de gas y petróleo y los monocultivos agroindustriales en todo el continente (Rosales, 2013: 1443-1457; Seoane, Taddei y Algranati, 2013; Grinberg y Starosta, 2015). Se trata de tres procesos básicos presentes en la región.

Primero, como parte del giro regional a un régimen de crecimiento impulsado por el extractivismo y las exportaciones de recursos primarios, se observa una marcada intensificación en las formas de acumulación por desposesión. En una escala más amplia, la apropiación

32 Presionado para tomar alguna medida a raíz de que el carácter depredador del sector de los recursos naturales se comenzó a conocer en Canadá, el gobierno conservador decidió responder con una serie de "mesas redondas" con los "actores involucrados" (representantes de la industria y de ONG) en 2006. A pesar de las recomendaciones, en estas mesas, el gobierno responsabilizó por la supervisión y el llamado a cuentas de las compañías canadienses a los países en las que éstas invierten, algunos de los cuales han sido presionados por Canadá para que lleven a cabo reformas al régimen regulatorio minero. Se estableció, asimismo, un *Ombudsman* (Defensor del Pueblo), que recibe quejas y denuncias contra las compañías canadienses. Sin embargo, la participación de las compañías es voluntaria y las víctimas de los abusos de las mineras canadienses han abandonado estos mecanismos, argumentando su inutilidad (Keenan, 2010: 29-34). El diputado liberal John McCay, por su parte, impulsó en 2010 otro empuje a favor de la rendición de cuentas. Aunque limitada —buscaba quitarle apoyo financiero y diplomático a las compañías que estuvieran involucradas en abusos a los derechos humanos, sin consecuencias judiciales en Canadá—, la propuesta fue rechazada por siete votos: 13 diputados liberales y cuatro del Nuevo Partido Democrático no asistieron a la sesión (Curry, 2010: A6).

violenta de recursos naturales precipita la transferencia del patrimonio comunal a las manos del capital multinacional.

Segundo, el proceso está cambiando la posición de América Latina dentro de la división internacional del trabajo. Con el avance del capitalismo extractivista, también lo hacen los procesos de desindustrialización y la región regresa a su rol histórico como proveedor de mercancías primarias al núcleo del sistema mundial. Este cambio en la inserción de la región en el mercado mundial conlleva dinámicas imperialistas renovadas (esta vez bajo la forma del capital multinacional) y el resurgimiento de economías de enclave (como la minería o la manufactura maquiladora) con sus rasgos característicos de dependencia.

Tercero: empezando en 2008, el ritmo del extractivismo en la región se ha intensificado todavía más tras el estallido de la crisis más profunda del capitalismo mundial desde la Gran Depresión de los años treinta. Esta crisis debe ser entendida en todas sus dimensiones, es decir, es una crisis económica, pero también una crisis de agotamiento de las fuentes de energía naturales y de intensificación de la competencia entre los grandes poderes que quieren controlar estas fuentes. Y es también una crisis alimentaria (expresada en enormes fluctuaciones de precios) relacionada con la aceleración de los monocultivos agroindustriales y a la financialización del sector agrícola mundial, y una crisis ecológica, vinculada estrechamente al cambio climático (Seoane, Taddei y Algranati, 2013: 26-27).

El modelo de capitalismo extractivista que madura en Latinoamérica no sólo implica la victoria de la lógica de la acumulación por desposesión, la contaminación del ambiente, la hegemonía del capital multinacional y nuevas formas de dependencia. También, necesaria y sistemáticamente, conlleva lo que llamamos neoliberalismo militarizado: violencia, fraude, corrupción y prácticas autoritarias por parte del ejército y las fuerzas de seguridad. Esto quiere decir: asesinato, amenazas de muerte, ataques y detención arbitraria contra los opositores a la extracción de recursos.

Una parte fundamental del neoliberalismo militarizado es el intento ideológico de los Estados por hacer ver a los movimientos sociales como criminales, narcotraficantes y terroristas. Los campesinos indígenas que resisten la desposesión por las mineras canadienses se convierten "clases peligrosas", de acuerdo con esas narrativas. Bajo el manto del combate a los criminales y al tráfico de drogas, o de "neutralizar" movimientos subversivos, ha emergido una retórica perversa de la "seguridad democrática". Ésta busca justificar los cambios en los aparatos coercitivos del Estado: reformas legales que le otorgan más poderes a la policía; mayores restricciones a los derechos y las libertades individuales y colectivas; más poder de intervención doméstica para las fuerzas armadas; y, finalmente, mayor impunidad para los grupos paramilitares (*ibíd.*).

En años recientes, los ejemplos más brutales y violentos del neoliberalismo militarizado en la región han sido los gobiernos de Felipe Calderón en México (2006-2012), en donde la militarización de la "guerra contra las drogas" produjo decenas de miles de muertes. Otro ejemplo es el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia (2000-2010), cuyo giro hacia la "seguridad democrática" trajo consigo la total instauración de un régimen de terror militar y paramilitar, y de desposesión contra buena parte de la población rural. Todo el corredor centroamericano, que une a Colombia con México, ha sido salpicado por la dinámica del neoliberalismo militarizado, apoyado activamente, afirmamos, por Canadá (*ibíd.*).

El libro, de aquí en adelante

En las páginas que siguen, seguimos la pista de la agresiva inserción del capital y el Estado canadienses en la compleja economía política de América Latina, enfocándonos en dos subregiones: Centroamérica y los Andes. El capital canadiense, especialmente en el sector bancario y de recursos primarios, es la punta de lanza de la acumulación capitalista en las Américas, al tiempo que el Estado canadiense

busca generar las condiciones óptimas para los inversionistas de su país: mercados libres, débiles regulaciones ambientales y movimientos sociales canalizados o reprimidos.

La Primera Parte del libro estudia las dinámicas de expansión capitalista y de resistencia en Centroamérica. Canadá se ha convertido en un actor importante en el istmo centroamericano y ha apoyado a fuerzas reaccionarias aquí y allá —incluyendo a los sectores golpistas en Honduras—. Esta parte del libro está articulada alrededor del capítulo sobre este país precisamente, y analiza el golpe de 2009 contra el presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, pero también estudia a detalle la intervención político-económica canadiense en Guatemala y el resto de la región.

La Segunda Parte del libro analiza la región de los Andes. El capital canadiense tiene importantes intereses en Ecuador, Perú y Colombia, al tiempo que el auge de la izquierda ha sido más fuerte en la parte central y norteña de los Andes. Por tanto, hay mucho en juego para los inversionistas canadienses en una región en la que sus intereses se ven continuamente desafiados por movimientos sociales poderosos y, ocasionalmente, por los gobiernos. En los capítulos dedicados a Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, mostramos con lujo de detalles que el Estado canadiense ha trabajado sin parar para debilitar los movimientos sociales andinos y a los gobiernos en Ecuador y Venezuela. La otra cara de la moneda son los vínculos diplomáticos y militares con los gobiernos conservadores en Colombia y Perú.

Al entender a Canadá como un poder imperialista cuya burguesía persigue sus intereses en Latinoamérica, nuestro libro se aparta de las ideas convencionales —y de buena parte de los análisis de la izquierda— sobre el lugar de Canadá en el mundo. La visión del *mainstream* dice que Canadá es un poder mediano y benigno, que debe buscarse un lugar en un mundo complejo y dominado por una "gran potencia" que a menudo compite contra Canadá. Esta visión es incapaz de contextualizar la posición de Canadá en la jerarquía internacional de naciones y dentro de la acumulación capitalista mundial,

o de su lugar dentro de las relaciones asimétricas entre los países del núcleo capitalista y los del Sur.

En esa literatura, desaparece por completo el concepto de imperialismo o el estudio de la escala de la internacionalización del capital canadiense. La literatura "crítica" tradicional que busca situar a Canadá en el mundo a veces usa el concepto de imperialismo, aunque a menudo se apoya en análisis empíricos equivocados sobre el capital canadiense, como si su desarrollo se hubiera interrumpido y estuviera subordinado a capitales nacionales más poderosos, como el británico y, eventualmente, el estadounidense. Basándose en la teoría de la dependencia, que originalmente buscaba explicar la inserción desigual del Tercer Mundo dentro del capitalismo global, muchos análisis ligados a la izquierda afirman que Canadá también es dependiente, aunque es un país opulento (y es que ningún autor serio puede asimilar a Canadá con el Tercer Mundo). Un ejemplo reciente de esto es el libro de Leo Panitch y de Sam Gindin, *The Making of Global Capitalism*, en el que los autores reiteran la noción de la dependencia canadiense respecto a Estados Unidos (sin ninguna justificación empírica) y afirman que el mundo ha sido "canadanizado" en su relación con la potencia hegemónica mundial (Gindin y Panitch, 2013: 41, 115). En otras palabras, el argumento de su libro descansa en este punto sobre una idea equivocada.

Las literaturas tradicionales, por tanto, oscurecen más de lo que revelan sobre el papel de Canadá en el mundo. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un corpus que pone en duda el consenso del *statu quo* y que afirma que Canadá debe ser entendido como imperialista. No se trata de una literatura homogénea, pero algunos de los autores que han intentado entender a Canadá como una potencia imperialista son Todd Gordon, Greg Albo, Dru Oja Jay, Nick Barry-Shaw y Jerome Klassen (Gordon, 2010; Barry-Shaw y Oja Jay, 2012; Klassen, 2014: Klassen y Albo, 2012). A la vez, periodistas independientes y organizaciones solidarias han hecho un gran trabajo documentando casos individuales de malas prácticas corporativas en el mundo del

Sur[33]. Esas investigaciones han inspirado y proporcionado argumentos a la nueva literatura sobre el imperialismo canadiense. Al analizar a Canadá en el contexto de la acumulación capitalista mundial y de las relaciones Norte-Sur, y al estudiar con detalle las prácticas y las inversiones de las corporaciones y al Estado canadiense en Latinoamérica, este libro va a contrapelo de la literatura tradicional sobre el papel de Canadá en el mundo y busca hacer una contribución, con una nueva especificidad regional, a la creciente literatura sobre el imperialismo canadiense.

Agradecimientos

Tanto en el proceso de investigación como en la escritura de este libro recibimos el apoyo de una amplia red de amigos, familiares, activistas, periodistas y académicos. Sin esta "infraestructura" colectiva, *Extractivismo a sangre y fuego* hubiera sido imposible. En Canadá, presentamos avances de nuestra investigación en *Ideas Left Out*, así como en varios foros de *Historical Materialism* en Toronto. Estamos agradecidos con Paul Kellog y Abbie Bakan por los esfuerzos organizativos que conllevó preparar nuestra presentación en el primero de esos foros, y con el equipo organizador de *Historical Materialism* por su ayuda en el segundo. David McNally, Greg Albo y Henry Veltmeyer compartieron su conocimiento y nos otorgaron un apoyo esencial en varias etapas del proceso de investigación. Geoff McCormak compartió las estadísticas sobre la tasa de ganancia en Canadá.

Dawn Paley leyó el manuscrito con atención y puso a nuestra disponibilidad su conocimiento de primera mano sobre México, Centroamérica y Colombia. Jennifer Moore de *Mining Watch* nos proporcionó información importante acerca de la minería en América Latina, y compartió con nosotros contactos y pistas para nuestra investigación

33 Publicaciones de este tipo incluyen: *The Bullet* (www.socialistproject.ca/bullet/); *Upside Down World* (//upsidedownworld.org); *Dominion* (www.dominionpaper.ca) y *Znet* (znet.org), entre otras. Organizaciones solidarias son Rights Action y Mining Watch.

en Ecuador. Kevin Thomas de *Maquila Solidarity Network* en Toronto nos ofreció su conocimiento sobre la influencia canadiense en el sector maquilador hondureño. Todd aprendió mucho de las clases de español y conversaciones constantes con nuestro amigo y camarada Carlos Torchia, un participante de toda la vida en la lucha por un mundo mejor. Carlos fue muy generoso al compartir con nosotros su conocimiento *de* —y su pasión *por*— la historia y la política latinoamericana. Melisa Breton y Caren Weisbart también demostraron excepcionales habilidades en la traducción y transcripción de las entrevistas en Guatemala. Roger y Elaine Webber, los padres de Jeffery, fueron solidarios a lo largo de todo el proceso. Este libro está dedicado a ellos, tanto como a sus hermanas Elizabeth, Ruth y Theresa. Olga Shustyk y Gerry y Rebecca Dykstra apoyaron este proyecto.

En los Estados Unidos, Greg Grandin y Noam Chomsky mostraron una y otra vez su solidaridad desinteresada hacia proyectos disidentes como el nuestro, lo mismo que Sinclair Thomson, Charlie Post y Forrest Hylton. Dana Frank mostró entusiasmo por nuestra investigación; compartió sus contactos y nos dio ideas para nuestra investigación en Honduras. Gerardo Rénique, experto en Perú, nos proporcionó pistas y recursos para entender el sector minero de ese país. Bhaskar Sunkara abrió el espacio de *Jacobin* para nuestras primeras exploraciones sobre Honduras y el resto de Centroamérica, y leyó con entusiasmo el manuscrito.

En Honduras, Karen Spring superó toda expectativa en su asistencia a nuestra investigación, y nos dio innumerables ideas y consejos en lo que respecta a la política local. Su conocimiento de primera mano de los movimientos sociales hondureños nos abrió un mundo que de otra forma no hubiéramos descubierto. En Guatemala, Grahame Russell de *Rights Action*, una organización de solidaridad que trabaja con las comunidades en resistencia a los proyectos extractivistas canadienses, compartió con nosotros su íntimo conocimiento del país, incluyendo las cicatrices dejadas por siglos de imperialismo, y nos presentó a varios de los heroicos activistas que siguen luchando, a menudo con gran costo

personal, por la justicia social. En Ecuador, Michelle Báez, Alejandra Santillana Ortíz y William Sacher fueron esenciales en su apoyo a nuestra investigación y en ayudarnos a entender las complejidades de la política y la economía local. Michelle y Alejandra nos ayudaron a entender la cambiante correlación de fuerzas y la compleja configuración sociopolítica de las corrientes ideológicas, y hay pocas personas que entiendan a la minería en Ecuador tan bien como William.

En Venezuela, Susan Spronk hizo con nosotros varias de las entrevistas. Muchas gracias a ella por su amistad y su instinto político a lo largo de la investigación. Atenea Jiménez Lemon y William Gudiño nos ayudaron a desarrollar contactos y a entender la coyuntura venezolana. En Londres presentamos partes de la investigación preliminar en *Historical Materialism* y en el grupo de trabajo *World Development*. Los comentarios de Ben Selwyn, Liam Campling, Satoshi Miyamura y Jonathan Pattenden fueron particularmente útiles.

Este libro fue escrito con el apoyo del Social Sciences and Human Research Council.

Nuestro sentido aprecio a todos los valientes activistas en las Américas en lucha contra el imperialismo canadiense que hablaron con nosotros durante los últimos cinco años. Esperamos que reciban este libro como una pequeña contribución a su lucha.

Como siempre, nuestros más sentidos agradecimientos van para Jackie Esmonde y Tieneke Dykstra.

Primera parte
Centroamérica

La nueva normalidad: el capitalismo autoritario en Honduras

Antes del amanecer del 28 de junio de 2009, los militares hondureños derrocaron al gobierno socialdemócrata de Manuel Zelaya y lo reemplazaron temporalmente con Roberto Micheletti, miembro de una facción rival del Partido Liberal, el propio partido de Zelaya. Este acto le puso fin al trastabillante experimento democrático hondureño, iniciado en 1982 (Salomón, 2012: 58). Tras la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) por interrupción de la legalidad democrática, se organizaron elecciones para proveer al régimen de una cierta legitimidad legal. Porfirio "Pepe" Lobo, del Partido Nacional, ganó unas elecciones extremadamente fraudulentas en noviembre del mismo año y tomó posesión en enero de 2010, en medio de enormes protestas en Tegucigalpa y en otras ciudades. El derrocamiento de Zelaya fue el segundo golpe de Estado exitoso en el hemisferio occidental desde el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú en 1992 (Gordon y Webber, 2012)[34].

La situación hondureña actual encapsula bien la amalgama regional entre neoliberalismo y militarización que atraviesa el corredor centroamericano, de Colombia a México (Grandin, 2011). La

34 En 2004 hubo un golpe exitoso contra Jean Bertrand Aristide, en Haití; intentos con menos éxito tuvieron lugar contra Chávez en Venezuela en 2002 y contra Morales en Bolivia en 2008. Un tercer intento (parlamentario), exitoso esta vez, tuvo lugar recientemente en Paraguay (Gordon y Webber, 2012).

implementación completa del Plan Centroamérica propuesto por Barack Obama llevaría a término la unificación de los distintos aparatos de seguridad del istmo, iniciada por el Plan Colombia de Bill Clinton y el Plan México de George W. Bush. La "guerra contra las drogas" del mexicano Felipe Calderón dejó por lo menos 55 mil muertos entre 2006 y 2012, mientras que el programa colombiano ha inyectado 3,6 mil millones de dólares a una regulación militarizada y a la lucha antinarcóticos desde el año 2000 (Littell, 2012; Paley, 2012e: 22; Watt y Zepeda, 2012; Stokes, 2005).

Los regímenes de Lobo y el de su sucesor Juan Orlando Hernández en Honduras han sido una especie de expresión política de las necesidades coercitivas de las estrategias de acumulación de los capitales norteamericanos y sus aliados locales. Esto es: minería a cielo abierto, grandes desarrollos hidroeléctricos, turismo, plantaciones de biocombustible, créditos de carbono por bosques, y maquiladoras textiles (Bird, 2012: 35). Los "flujos de inversión extranjera directa a Honduras sumaron 1,014 mil millones de dólares en 2011, 27 por ciento más que en 2010", según el último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). "El principal inversionista en Honduras fue Estados Unidos (28,6 por ciento), seguido de Canadá (18,4 por ciento) y México (15 por ciento)" (ECLAC, 2012a).

Este es el complejo escenario regional que hay que desmenuzar para poder entender cómo Honduras se convirtió en el ancla de la política canadiense en Centroamérica, una política centrada en la promoción de fuertes derechos de propiedad para el capital y la contención de las amenazas a estos derechos a través de medios económicos, diplomáticos y coercitivos. Este capítulo tiene, por tanto, dos grandes objetivos. Primero, describe y explica los distintos aspectos del imperialismo canadiense en Honduras desde el golpe de 2009. Segundo, busca situar la geopolítica canadiense en Honduras a la luz del propio desarrollo histórico de ese país y de las formas de resistencia popular.

De esta forma intentaremos evitar un retrato del pueblo hondureño que lo pinte como una víctima pasiva del abuso imperial.

El capítulo comienza con una reflexión sobre los fundamentos históricos de Honduras, analizando la dinámica de la contrainsurgencia durante la Guerra Fría y la pacificación neoliberal en los años noventa, así como el legado de nuevas formas de inseguridad, violencia y desigualdad que esa guerra y la economía neoliberal le heredaron al siglo XXI. Éste es el contexto en el que intentaremos entender la llegada de Zelaya a la presidencia, así como las principales características de su corto gobierno.

Las secciones posteriores exploran la diplomacia de Ottawa después del golpe, incluyendo el papel clave jugado por Canadá en el llamado Acuerdo Tegucigalpa-San José, el encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos bajo los gobiernos de Micheletti y de Lobo, la reintegración de Honduras a la "comunidad internacional" y la cristalización del Acuerdo de Cartagena en 2011. En este punto, situaremos nuestra mirada a las clases populares hondureñas para mostrar cómo se ha forjado un heroico movimiento de resistencia contra los intereses del capital y de la clase dominante local en las circunstancias más difíciles. Y con este contexto en mente, podremos finalmente entender las motivaciones más profundas de la intervención canadiense. Con ello, buscamos hacer un análisis materialista del capital canadiense en Honduras, particularmente en la minería, las maquilas y el turismo.

Esos intereses materiales nos ayudarán a entender la parte final del capítulo, que analiza los planes económicos de involucramiento canadiense para el largo plazo y el papel del Tratado de Libre Comercio Canadá-Honduras dentro de esos planes. La conclusión del capítulo reconsidera todas estas cuestiones a la luz de los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2013. Pretendemos entender el significado político de esa elección, así como ofrecer un panorama socioeconómico del momento presente.

Fundamentos históricos

La historia moderna de Honduras es la típica historia de una república bananera. La industria platanera se desarrolló de una manera relativamente rápida tras sus primeros pasos en 1860. Para 1928, tres corporaciones americanas —Cuyamel Fruit Company, Standard Fruit Company y la United Fruit Company— controlaban la producción y exportación de más plátanos en tierras hondureñas que en ningún otro país en el mundo.

Estas multinacionales tradicionales dominaron durante décadas la vida económica y política del país. El cultivo del plátano era responsable de más del 90 por ciento de las exportaciones hondureñas (ECLAC, 2012a). Este era un típico sector económico de enclave. El plátano se cultivaba en el extremo norte del país, en la costa Atlántica, en una región inaccesible por carretera o tren desde otras partes de Honduras. Los precios dependían de los humores del mercado internacional. Con la Gran Depresión, colapsó el cultivo bananero y emergió el café como una fuente paralela de divisas extranjeras —aunque igualmente vulnerable a enormes caídas y subidas en el mercado mundial—.

Sostenida sobre dos débiles pilares, la economía política hondureña de la primera mitad del siglo XX era la "más atrasada" de Centroamérica, pues "tanto las clases subordinadas como las dominantes eran las menos desarrolladas", lo que permitía "la dominación directa del país por parte de compañías extranjeras" (Robinson, 2003: 118-119). En las décadas de 1950 y 1960, la modernización capitalista empezó a influir sobre las relaciones sociales del resto del país, y se alteró su modo de incorporación al mercado mundial: se diversificaron las exportaciones para incluir algodón, ganado y azúcar. La expresión política de esta nueva estructura social se cristalizó en dos partidos políticos flexibles e infestados de tendencias: el Partido Liberal, que apareció a finales del siglo XIX, y el Partido Nacional, una escisión de los liberales, que empezó a tener una presencia importante a principios del siglo XX. Estas dos formaciones han monopolizado la esfera oficial de la vida política hasta el día de hoy, con la excepción de algunos interregnos

militares. El más largo de estos períodos de gobierno militar fue el que transcurrió entre 1963 y 1982, sucedido por una tenue transición a la democracia electoral, y, una década después, por la transformación neoliberal de la economía[35].

Por fuera de los canales de los partidos Liberal y Nacional, o de las esferas de la política oficial del régimen, emergieron tradiciones de radicalismo agrario y obrero en contra de la expansión capitalista de mediados de siglo. La muestra más explícita de los nuevos bríos de los trabajadores fue sin duda la huelga de 1954 contra la United Fruit Company. "Significó un giro histórico", dice el historiador Walter LaFeber. "La sociedad se abrió y se empezó a liberalizar cuando algunos derechos laborales fueron reconocidos por vez primera" (LaFeber, 1983: 179). En términos estrictamente económicos, los trabajadores apenas lograron modestos aumentos salariales, pero consiguieron el reconocimiento legal de los sindicatos y el derecho a organizarse. La reacción de Washington y de la élite local a la participación comunista en la huelga se hizo sentir durante varias décadas. El gobierno y sus socios estadounidenses reprimieron duramente cualquier disenso radical, e intentaron cooptar el movimiento con la formación de sindicatos "libres y democráticos", es decir, anticomunistas (Bulmer-Thomas, 1990: 223-224).

En los años sesenta, el campo vivió una enorme explosión de movilización agrarista inspirada por el ejemplo cubano. La movilización y las ocupaciones campesinas de las dos décadas que siguieron obligaron a los gobiernos militares a redistribuir cerca de 200 mil hectáreas a campesinos sin tierra (Booth, 1991: 48). Estas luchas agrarias, combinadas con acciones sindicales en las plantaciones laborales, persistieron en

35 Las transiciones "democráticas" en América Latina de los años ochenta y noventa generalmente consistieron en un cambio de un gobierno militar directo a una democracia de "baja intensidad", o "poliarquía", "un sistema en el que gobierna un pequeño grupo en función de los intereses del capital y donde la participación en el proceso de toma de decisiones por parte de la mayoría se ve confinado a la elección entre élites concurrentes en procesos electorales controlados por el Estado" (Robinson, 2004: 134-153).

distintas formas hasta los años ochenta y noventa[36]. La militancia campesina de inicios de los años sesenta tuvo su cenit en la misma región de la gran huelga de 1954. La lucha estalló por la expropiación de las tierras campesinas debido a la expansión de operaciones de la United Fruit. Los campesinos reaccionaron formando la Federación Nacional de Campesinos Hondureños (Fenach), una organización independiente y militante basada en la acción directa de las masas y enfocada en la ocupación de tierras ejidales o comunales expropiadas recientemente. La Fenach fue fundada con la ayuda de antiguos líderes sindicales de la huelga de 1954, de activistas de izquierda, estudiantes radicalizados y movimientos guerrilleros larvarios (Brockett, 1991: 259-260).

La respuesta del gobierno hondureño y de sus socios estadounidenses a la movilización campesina tuvo muchas similitudes con la reacción al activismo sindical. Los esfuerzos de cooptación se articularon alrededor de la abiertamente anticomunista Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, "organizada con la ayuda declarada de Estados Unidos a través de la AFL-CIO [Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá] y su brazo latinoamericano, la Organización Regional Interamericana del Trabajadores" (Brockett, 1991: 259).

El uso de la fuerza se hizo más visible a partir de la caída del gobierno civil en 1963 y de la subsecuente liquidación de la Fenach: "Los líderes atrapados terminaron en la cárcel, las oficinas y los archivos fueron destruidos, y los militantes reprimidos" (*ibíd.*). La represión aumentó en intensidad durante los años ochenta, como veremos en un momento. Aunque el yugo de la fuerza estatal fue menor en comparación con las carnicerías de las dictaduras de El Salvador o Guatemala, las detenciones ilegales, las desapariciones y los asesinatos se tornaron comunes en Honduras (Booth, 1991: 54).

36 Véase, por ejemplo, Corr (1999: 30-50).

Estados Unidos estableció una relación especial con los militares hondureños a partir de 1954 a través de la cual las fuerzas armadas de Honduras recibieron ayuda para "profesionalizar" al ejército (LaFeber, 1983: 182). De todas maneras, tuvieron que estallar la revolución sandinista en Nicaragua y varias insurrecciones simultáneas en El Salvador y Guatemala para que la relación especial entre las fuerzas armadas estadounidenses y hondureñas se solidificara.

En el plano doméstico, Honduras estaba pasando por una serie de cambios estructurales durante las décadas de 1970 y 1980. El país sufrió una crisis económica devastadora que provocó que el ingreso per cápita se desplomara en un 12 por ciento durante los primeros cuatro años de la década de 1980 (Robinson, W.I., 2003: 124). En 1981 hubo elecciones por primera vez desde 1963, y el candidato del Partido Liberal, Rafael Suazo Córdova, resultó victorioso. Pero, a pesar de la transición a la democracia, el rol de los militares en la vida doméstica se intensificó con el nuevo flujo de ayuda militar estadounidense. Honduras se convirtió en una de las principales bases del esfuerzo de Estados Unidos para echar abajo al gobierno sandinista y evitar que movimientos guerrilleros similares se hicieran del poder en El Salvador y Guatemala.

La contrainsurgencia

A mediados de 1980, Jimmy Carter ya había mandado a un alto mando militar a avisarle a los hondureños de su rol como "reducto del anticomunismo ante las presiones de la revuelta popular" (LaFeber, 1983: 264). Durante la administración de Reagan la cruzada contra el comunismo adquirió dimensiones completamente insospechadas. Ochocientos militares hondureños pasaron por la tristemente famosa Escuela de las Américas en la década de 1980, cuando el país se convirtió en la base de operaciones de la contrainsurgencia centroamericana (Gill, 2004: 83). Inmediatamente después de la asunción de Reagan, el nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia

(CIA, por su sigla inglés), William Casey, recibió la propuesta de militares hondureños de "organizar a los miembros en desbandada de la Guarda Nacional nicaragüense en una expedición contrarrevolucionaria para desestabilizar al gobierno sandinista" (Grandin, 2006: 114). Nacieron los *contras*. Honduras se convirtió en "la retaguardia para 20 mil *contras* nicaragüenses, cuyas líneas de abastecimiento se extendían desde Estados Unidos, pasando por las bases militares hondureñas, hasta los campos militares en la frontera con Nicaragua" (Robinson, W.I., 2003: 124). La frontera hondureña con El Salvador se convirtió en un frente contra las operaciones guerrilleras en ese país (Flynn, 1984: 113).

Entre 1980 y 1992 Honduras recibió 1.600 millones de dólares en ayuda económica y militar de Estados Unidos (Robinson, W.I., 2003: 121). El imperio estadounidense estableció "*sus propias* bases militares y aéreas, centros de inteligencia, puestos de mando regionales y un centro de entrenamiento para soldados salvadoreños administrado por comandos estadounidenses, abierto hasta 1985" (Robinson, W.I., 2003: 123 [énfasis en el original]). La ayuda estadounidense le proporcionó a los militares hondureños equipos móviles de entrenamiento, artillería, equipos de visión nocturna y de comunicaciones de alta tecnología, aviones de reconocimiento y buques patrulla (Flynn, 1984: 111). Aún más: Honduras funcionó como santuario para que los pilotos contrainsurgentes dirigidos por la CIA bombardearan Nicaragua. Durante años proveyó a la *contra* de recursos para que continuaran sus operaciones (Chomsky, 1987: 128-129). Desde 1983,

> la operación americana era tan grande que la CIA abrió una oficina de prensa en el Holiday Inn de Tegucigalpa para presumir sus logros. Había entre 300 y 400 militares trabajando en el país. Los 116 miembros de la Embajada [estadounidense] la convertían en una de las más grandes en toda Latinoamérica (LaFeber, 1983: 310-311).

El apoyo formal de Estados Unidos no era sino la punta de lanza de una red internacional de apoyo al anticomunistmo en Centroamérica.

Esta intrincada red incluía, por ejemplo, a la junta militar argentina hasta su caída tras la Guerra de las Malvinas en 1982, a los saudíes, taiwaneses, panameños e israelíes, y a una amplia gama de actores no estatales: desde organizaciones religiosas conservadoras ligadas a la derecha cristiana estadounidense hasta narcotraficantes, pasando por mercenarios, corporaciones de seguridad y traficantes de armas[37].

Si bien es cierto que el aumento de la presencia militar en Honduras estuvo motivada por una cuestión geoestratégica ligada a la cercanía de los frentes nicaragüense y salvadoreño, no hay que olvidar que otro de sus objetivos fue capacitar a las fuerzas armadas locales contra una resistencia popular real o potencial —"contrainsurgencia preventiva", le llaman—. La antropóloga Lesley Gill apunta que "aunque Honduras no tuvo nunca una insurgencia guerrillera de grandes proporciones, los militares reprimieron estudiantes, sindicalistas, campesinos y a cualquiera que perteneciera a grupos considerados de izquierda" (Gill, 2004: 83). Cerca de 300 maestros, sindicalistas, campesinos y militantes "desaparecieron" entre 1980 y 1984 en las manos de los aparatos de seguridad del Estado hondureño. Una nueva ola de resistencia contra la militarización de una sociedad hondureña supuestamente democrática se articuló en 1986 y 1987 en torno al movimiento campesino. La respuesta del Estado consistió en una racha de asesinatos contra líderes sindicales y laborales (LaFeber, 1983: 312, 331-332).

Las federaciones campesinas y los sindicatos, así como las comunidades de base cristianas inspiradas por la Teología de la Liberación y las organizaciones estudiantiles que surgieron en los años setenta continuaron resistiendo, aunque algunas fueron eventualmente cooptadas a un sistema electoral cada vez más importante. Estos movimientos

37 Grandin, Greg (2006: 115): "Se ha hecho famoso que [Oliver] North [del Consejo de Seguridad Nacional] organizó un elaborado sistema de intercambio que, con la ayuda de los comerciantes israelíes, le vendía misiles americanos a Irán a precios inflados, y las ganancias se usaban para surtir a los *contras*. Hay mucha evidencia, y entre otras las que surgen de las propias notas manuscritas de North, de que la CIA usaba a los narcotraficantes latinoamericanos de cocaína y marihuana como intermediarios, y que utilizaba sus aviones para enviarle armas a los *contras* a cambio de un fácil acceso a los mercados americanos".

sociales fueron apoyados, por un lado, por organizaciones de derechos humanos y, por el otro, por varios efímeros frentes guerrilleros a principios de los años ochenta. En respuesta,

> proliferaron métodos de contrainsurgencia y terrorismo nunca antes usados en el país, como leyes "antiterroristas", desapariciones y escuadrones de la muerte ligados al Estado. La población fue víctima de violaciones masivas de derechos humanos similares a las de los países vecinos (Robinson, W.I., 2003: 124).

La eliminación violenta de los movimientos sociales fue la precondición social para la subsecuente introducción del neoliberalismo. "Con unas pocas excepciones de peso", escribe el historiador Greg Grandin, "el terror punitivo orquestado por el Estado y las élites ha sido esencial para permitir el afianzamiento del neoliberalismo en América Latina. El prerrequisito para la rápida reestructuración que tuvo lugar a lo largo del continente americano a partir de los años ochenta fue una función tanto de la destrucción de los movimientos de masas como del auge de nuevas élites financieras" (Grandin, 2004: 14).

La pacificación neoliberal

Tras el final de la Guerra Fría, la derrota de la revolución sandinista en las elecciones de 1990 y el final de las guerras civiles en El Salvador y Guatemala, la región pasó de un período de terror estatal y de lucha guerrillera en la década de 1980 a una época de consolidación neoliberal a lo largo de los años noventa —lo que el historiador James Dunkerley ha llamado "la pacificación de Centroamérica"— (*ibíd.*). Con sus propias particularidades, la trayectoria de Honduras refleja bien el giro regional.

La llegada a la presidencia de Rafael Callejas del Partido Nacional en las elecciones de 1990 fue el banderazo de salida del proceso de reestructuración neoliberal. Callejas, un banquero y economista,

miembro de una de las familias más ricas de Honduras, lideró la nueva ala hegemónica del Partido Nacional conformada por tecnócratas neoliberales y sectores orientados hacia el exterior de la burguesía hondureña (Robinson, W.I., 2003: 127). La emergencia de peleas fraccionales internas en los partidos Liberal y Nacional ha sido una característica de la política local desde la transición neoliberal. Han entrado en conflicto dos sectores de la burguesía: la facción orientada hacia el mercado interno y la facción orientada hacia el exterior. La segunda ala (más poderosa) tiene un claro interés en mantener y profundizar un modelo de acumulación basado en la reestructuración neoliberal y en la exportación. Por su lado, el sector del capital ligado a un mercado interno en declive se ve obligado a aliarse de manera episódica y populista con las clases subalternas[38].

Callejas introdujo el primero de tres paquetes de ajuste estructural implementados durante la década de 1990, en respuesta a una serie de demandas del FMI, el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros prestamistas extranjeros. Estas medidas constituyeron los pilares de una orientación más general hacia el libre mercado, el turismo, las exportaciones no tradicionales, las zonas de libre comercio y, por supuesto, la maquila. Los parámetros generales de esta estrategia no serían modificados por los distintos gobiernos liberales y nacionales de la siguiente década y media (Booth, Wade y Walker, 2006: 144; Robinson W.I., 2003: 129).

Roberto Reina, representante de una corriente populista de centro izquierda dentro del Partido Liberal, ganó la elección presidencial de 1993. Con un perfil público como defensor de los derechos humanos, Reina hizo campaña alrededor de la lucha contra la corrupción y prometió ponerle límites a los poderes militares. Es cierto que durante un cierto tiempo restringió la influencia militar sobre la vida social y política, sin embargo, durante su presidencia el modelo neoliberal fue

38 Ver otra vez Robinson, W.I. (2003: 127-132), para más detalles acerca de cómo las facciones del capital hondureño orientadas al mercado internacional han tenido expresiones políticas en forma de grupos y redes de la nueva derecha dentro de los partidos Nacional y Liberal.

profundizado a través de un nuevo programa de ajuste. Su sucesor liberal en la presidencia, Carlos Roberto Flores (1997-2001), representaba al ala de ultraderecha del partido. Paradójicamente, el auge de las protestas agrarias y urbanas contra la reestructuración neoliberal bajo Reina hizo que incluso Flores tuviera que presentar una plataforma crítica de las condicionalidades del préstamo del FMI.

Por supuesto, una vez en el poder, Flores cambió de sintonía y se dedicó a expandir la industria maquiladora, el turismo y el sector exportador agrario no tradicional —un tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE) fue puesto en marcha— (Booth, Wade y Walker, 2006: 145). A Flores le siguió el ultra conservador Ricardo Maduro (2001-2005) del Partido Nacional, quien continuó con la ortodoxia neoliberal en la economía y reintrodujo el control militar de la vida civil a través de la "guerra contra las pandillas".

Una de las principales consecuencias de la reestructuración neoliberal del campo hondureño ha sido la exclusión de los campesinos del acceso a la tierra. La mayoría ha migrado a Estados Unidos o a los barrios miseria de las grandes ciudades —principalmente a la capital Tegucigalpa en el sureste, con su rica tradición de activismo de izquierda—; o a San Pedro Sula, una zona de libre comercio caracterizada por la dominación de la derecha en la vida pública[39]. Los patrones de uso de la propiedad de la tierra y las estructuras de clase en el campo han cambiado de manera significativa. La pobreza rural llegó al 70 por ciento hacia finales de los años noventa, de acuerdo con el Banco Mundial (Boucher, Barham y Carter, 2005: 108). En los primeros años del nuevo siglo, casi la mitad de la población rural trabajaba en granjas de menos de cinco hectáreas. Los campesinos sin tierra constituían el 27 por ciento de la población económicamente activa en el campo.

Estos campesinos se han visto orillados a la condición de proletarios o semiproletarios, han cortado cualquier vínculo permanente

39 Para una discusión detallada de esta tendencia general en los países del sur, ver Davis (2006).

con la tierra y han tenido que buscar otros empleos (Ruben y Van den Berg, 2001: 550). En términos geográficos, casi el 80 por ciento de la pequeña actividad agrícola se lleva a cabo en las laderas de las colinas, puesto que los valles más fértiles están en manos de capitales agroindustriales extranjeros dedicados a la "producción ganadera, la caña de azúcar, el plátano y el cultivo de aceite de palma" (Ruben y Van den Berg, *op. cit.*: 551)[40].

Algunas de las muestras más brutales de estas tendencias se pueden encontrar en la región del Bajo Aguán. "A nivel nacional, unas 30.500 hectáreas de tierras de campesinos adquiridas tras la reforma agraria fueron vendidas entre 1990 y 1994". Tanya Kerssen:

> Estas tierras estaban concentradas en las regiones más fértiles del país: zonas con los mejores suelos, con mucha agua e infraestructura de comunicaciones, energía y transporte. Por tanto, mientras que el promedio nacional de reconcentración agraria durante estos cuatro años fue de poco menos del diez por ciento, en el Valle del Aguán y en las regiones costeras del Atlántico (áreas apropiadas para cultivos de alto valor como el plátano y la palma africana) fue de más del 70 por ciento (Kerssen, 2011).

En Aguán, de las 28.365 hectáreas otorgadas a cooperativas campesinas tras la reforma agraria, 20.930 fueron vendidas a privados. Los principales beneficiarios fueron tres magnates del aceite de palma: René Morales Carazo, Reynaldo Canales y el hombre más rico de Honduras, Miguel Facussé Barjum (quien se ganó el apodo de "palmero de la muerte"). En total, 40 cooperativas perdieron sus tierras en Aguán. Este habría de ser el lugar de emergencia de uno de los movimientos más fuertes de defensa de la tierra (Kerssen, 2011).

En los años que siguieron al primer programa de ajuste estructural de 1990 se desató el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED)

40 Para más detalles sobre esta materia, ver Kok (2004: 73-89).

hacia las cinco zonas procesadoras de exportación patrocinadas por el gobierno, así como a cinco parques industriales privados en los que la mayoría de la fuerza de trabajo son mujeres no sindicalizadas. El número de trabajadores de la maquila se elevó de nueve mil en 1990 a 20 mil en 1991, 48 mil en 1994 y cien mil hacia el final del siglo (Robinson, 2008: 120).

En 2007, las ganancias por exportaciones de valor agregado en el sector maquilador alcanzaron los 1,2 mil millones de dólares, un enorme aumento comparado con los 203,7 millones de 1996. Las maquiladoras se convirtieron en la segunda principal fuente de divisas después de las remesas provenientes de Estados Unidos. Detrás de estos dos rubros, los ingresos por turismo aumentaron de 29 millones de dólares en 1990 a 556,7 millones en 2007 (*The Economist*/EIU: 15-16)[41]. La inversión extranjera eclipsó cualquier récord previo en 2007, al llegar a los 815,9 millones de dólares, la mayor parte de la cual fue hacia el sector maquilador, el transporte, las telecomunicaciones, las finanzas y el turismo (*The Economist*/EIU, *op. cit.*: 24). Sin embargo, en ese mismo año empezó a caer la demanda estadounidense de productos manufacturados hondureños, cuando se hizo sentir la competencia de productores más baratos en Asia.

A pesar del influjo de la IED y de las evaluaciones positivas de las instituciones financieras internacionales en relación al ritmo y carácter de la reforma neoliberal, el crecimiento macroeconómico en Honduras durante la década de 1990 sólo fue superior al cuatro por ciento en un año (1997), y el período terminó con años de crecimiento negativo. Empero, hubo un giro importante en la siguiente década.

41 Este reporte también da cuenta del auge —desde mediados de los años noventa— de artículos de exportación no tradicional como el camarón, la trucha, melones y la palma africana. En el sector tradicional agrícola, el informe subraya los nuevos altos precios del café desde 2004 y la mayor producción que siguió a esta modificación, al tiempo que el precio del plátano bajó a causa de las tarifas de la Unión Europea. Una de las áreas de mayor interés para los inversionistas es la minería de zinc, plata, plomo y oro. Honduras, se piensa, tiene grandes depósitos minerales no explorados que podrían abrirse a los inversionistas si se aprueba una legislación ambiental controversial.

Entre los años 2003 y 2007, "Latinoamérica vivió el período de crecimiento económico más importante desde el *boom* de la postguerra que terminó a la mitad de los años setenta, generado por la extraordinaria combinación de cuatro factores: altos precios de los *commodities*, el auge del comercio internacional, excepcionales condiciones financieras y los altos niveles de las remesas" (Ocampo, 2009: 704). La economía hondureña reflejó estas tendencias. Gracias a las remesas, los altos precios de los *commodities*[42] y la demanda del mercado estadounidense, Honduras calificó en 2005 para entrar al programa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y solicitar una reducción de su deuda (ECLAC, 2006: 129). Después de haber cumplido hasta la saciedad con los rigores del programa de reducción de pobreza y crecimiento del FMI, Honduras pudo aplicar al programa de HIPC, que habría de reducir la deuda pública en 1.200 millones de dólares entre 2005 y 2015, una parte de los cuales se supone iría dirigido a la reducción de la pobreza como parte de los Objetivos del Milenio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (*The Economist*/EIU: 17).

El Producto Interno Bruto (PIB) creció rápidamente entre 2003 y 2007, sobrepasando el seis por ciento en 2005, 2006 y 2007, antes de volver a caer tras el estallido de la crisis económica mundial en 2008. La crisis empezó a corroer la economía hondureña a través de una decreciente demanda externa, la reducción en las remesas familiares y flujos truncos de IED (ECLAC, 2009: 113; Mapstone, 2009). La tasa de crecimiento del PIB se redujo a un cuatro por ciento en 2008. Pero los mecanismos que transmitieron la crisis del centro del sistema mundial se hicieron sentir de verdad hacia el año 2009, cuando el PIB cayó en 2,1 por ciento con una recuperación tenue y frágil en 2010 y 2011.

A pesar de la alta tasa de crecimiento de la mitad de los años 2000, las condiciones sociales se mantuvieron igualmente desastrosas a lo largo de todo este período. De los 177 países que figuran en el

42 Hay que decir que aunque Honduras se benefició, en general, del alto precio de sus artículos de exportación en esos años, también sufrió por los altos precios del petróleo entre 2004 y 2007 debido a su condición de importador de hidrocarburos.

Índice de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo Humano de la ONU, Honduras está en el lugar 112. En América Latina, sólo Bolivia (113), Guyana (114), Guatemala (122), Nicaragua (124) y Haití (124) están peor (UNDP, 2009). Para 2011, Honduras había caído al lugar 121 (UNDP, 2011). En 1990, año de inicio del neoliberalismo, el 75 por ciento de la población vivía en la pobreza y el 38 por ciento en indigencia (CEPAL, 2000: 269). En 2002, justo antes del *boom* de los *commodities*, esas cifras habían aumentado al 77 y al 54 por ciento, respectivamente.

Para el año 2007, pasado el auge de los *commodities*, los niveles de pobreza e indigencia sólo habían retrocedido al 69 y al 46 por ciento, respectivamente (CEPAL, 2009: 16). En 2009, la pobreza y la indigencia se habían reducido al 65,7 y 41,8 por ciento, pero para 2010, una vez que se había hecho sentir la crisis, los niveles habían vuelto a caer al 67,4 y 42,8 por ciento. Así, Honduras fue uno de los dos países —el otro fue México— que registró un "aumento significativo en la tasa de pobreza e indigencia" en Latinoamérica y el Caribe durante este período (*ibíd.*).

Del mismo modo, las cifras de la distribución nacional del ingreso (tabla 1) ilustran la regresión iniciada con el neoliberalismo, a pesar del ambiente económico favorable a la redistribución que predominó entre los años 2003 y 2007. La caída marginal en la proporción del ingreso nacional absorbido por los más ricos fue, a su vez, "recibida" por el siguiente 20 por ciento. El 40 por ciento más pobre de la población recibió una proporción menor del ingreso nacional en 2007 comparado con el de 1990, y el *boom* de los años 2000, de hecho, borró algunos de los modestísimos avances de los años noventa. Incluso tras los años del *boom*, la infraestructura más básica para el funcionamiento correcto de la economía se mantuvo totalmente subdesarrollada: la red ferroviaria —construida para conectar a las compañías bananeras— en total desuso, con la mayoría de los 785 kilómetros de vías desaparecidos, y sólo el 21,3 por ciento de los 15.628 kilómetros de carreteras estaban pavimentadas (*The Economist*/EIU: 13). De acuerdo

con las estadísticas oficiales, el 11 por ciento de las casas de habitación están sobrepobladas, una de cada seis personas de más de 15 años es analfabeta *y el 15* por ciento de las viviendas no tienen un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales (*The Economist*/EIU: 11).

Tabla 1
Distribución del Ingreso Nacional en Honduras

Año	40% más pobre	Siguiente 30%	Siguiente 20%	10% más rico
1990	10%	20%	27%	43%
1999	12%	23%	29%	37%
2002	11%	22%	28%	39%
2006	9%	23%	29%	39%
2007	10%	24%	30%	37%

Fuente: Derivado de CEPAL (2008: 230). Las cifras de 2007 son proyecciones.

Inseguridad violenta

Los años del primer asalto neoliberal, entre la década de 1990 y los años 2000, también estuvieron marcados por la persistencia de la represión estatal y la militarización de la política bajo la égida de la "guerra contra el crimen" y la "guerra contra las pandillas". Los movimientos campesinos nunca dejaron de ser una fuerza social de peso de la política hondureña. En efecto, Tegucigalpa se convirtió, entre 1996 y 2004, en la sede del que probablemente fue, durante esos años, el movimiento campesino transnacional más importante del mundo: Vía Campesina (Desmarais, 2007). Sin embargo, el poder colectivo de los campesinos empezó a disminuir a partir de la mitad de los años noventa, cuando el campo sufrió una marcada decadencia. En el movimiento sindical, los trabajadores bananeros —cada vez más las trabajadoras bananeras— "intentaron sobrevivir a los cierres de plantaciones, nuevos sistemas productivos y otras maquinaciones de las corporaciones bananeras —por no mencionar al huracán Mitch"— (*ibíd.*). Nuevos

grupos de mujeres, organizaciones campesinas y obreras y asociaciones barriales siguieron surgiendo a lo largo de la década de 1990 y participaron en distintos tipos de luchas sociales (Robinson, W. I. 2003: 132). En 2003, un movimiento predominantemente urbano contra la privatización de empresas públicas y de los servicios sociales sacó a 25 mil personas a las calles (Booth, Wade y Walker, 2006: 147). De cualquier forma, hacia el final de los años noventa el carácter general de la vida social y política hondureña estaba marcado no por la lucha de clases sino por la emergencia de nuevas patologías sociales entre los pobres y los oprimidos, así como por la remilitarización del Estado. El objetivo oficial de esta última era mejorar la situación de violencia en la que vivían los pobres, pero en realidad actuó como una garantía coercitiva para asegurar el orden neoliberal.

El crimen y la violencia han aumentado significativamente en América Latina en la estela de la reestructuración neoliberal (Portes y Hoffman, 2003: 66-70). América Central lleva la batuta de este fenómeno. El floreciente lumpemproletariado, excluido del mundo rural y sin posibilidades de entrar a la economía formal urbana, ha sido abandonado a un escenario en el que el crimen se ha convertido en uno de los pocos modos de sobrevivir. El istmo centroamericano ha sido transformado en un punto nodal para las rutas comerciales de los cárteles de la droga. Una enorme parte de los desempleados, los excombatientes armados de la guerra civil y pandilleros deportados de Estados Unidos, se han convertido en empleados de estas organizaciones (Edelman, 2008: 229-257). "En el mejor de los casos", dice Grandin,

> la energía de los desposeídos es canalizada hacia movimientos que demandan la redistribución de la riqueza, como en Bolivia y Argentina durante las crisis recientes. En el peor, los pobres buscan salidas a través de alternativas violentas tales como el nacionalismo de derecha, el fundamentalismo religioso o la brutalidad de las pandillas (Grandin, 2006: 207).

Para el caso hondureño, el antropólogo Jon Wolseth agrega: "Ante el sufrimiento provocado por el neoliberalismo, las iglesias evangélicas le han ofrecido a los jóvenes una respuesta espiritual, mientras que las pandillas han ofrecido un empoderamiento basado en la violencia interpersonal" (Wolseth, 2008: 99).

En 2006, en Honduras hubo 3.108 asesinatos, un promedio anual de 46,2 muertes violentas por cada cien mil personas. Esto es cinco veces el promedio global (Mejía, 2007: 27). Las dos principales pandillas son la Mara-18 y la Mara Salvatrucha. El Estado ha utilizado su presencia como una justificación para la remilitarización de la política. A inicios de los años 2000, el gobierno de Tegucigalpa instauró un toque de queda a las dos de la mañana, que fue poco después reforzado por una política de cero tolerancia extendida por el presidente Ricardo Maduro a todo el país. "Cuando las calles quedan desiertas durante la noche", explica un periodista, "la policía militar hace redadas en los barrios marginales de la ciudad —el 'cinturón de la miseria'— con el objetivo declarado de desbaratar las pandillas y arrestar a sus miembros".

Recordando los días oscuros de los años ochenta, estas constantes incursiones "llevan nombres como 'Operación Jaula', 'Estruendo' y 'Patria'" (*ibíd.*). La política de mano dura ha fracasado estrepitosamente en lograr cualquier reducción en el número de homicidios, pero ha sobrepoblado las cárceles y, más importante, ha permitido que el Estado eche para abajo las medidas embrionarias de control civil sobre los militares puestas en marcha durante el período presidencial de Roberto Reina. Bajo Maduro, las divisiones entre las fuerzas armadas y la policía fueron disueltas, así como fue disuelta cualquier pretensión de control civil sobre el aparato coercitivo del Estado (Mejía, *op. cit.*: 28). Por ejemplo, la Operación Guerra contra la Delincuencia desplegó a diez mil policías bajo la autoridad de un oficial militar. Este tipo de tácticas permitieron que continuaran los métodos de "limpieza social" —entre 1998 y 2002, mil 500 jóvenes fueron asesinados por los escuadrones de la muerte y las fuerzas privadas de seguridad— y provocaron el

aumento en los asesinatos políticos contra activistas sociales (Booth, Wade y Walker, 2006: 147).

Será suficiente con mostrar algunos ejemplos representativos de la violencia política. Ernesto Sandoval, un activista del Comité de Derechos Humanos de Honduras (Codeh), fue asesinado en febrero de 1998 (Booth, Wade y Walker, *op. cit.*: 146). Se ofrecía una recompensa de 40 mil dólares por el Padre Tamayo, un cura y reconocido activista ambientalista del Movimiento Ambiental Olancho (MAO). Tamayo sobrevivió a varios intentos de secuestro y asesinato. incluyendo uno durante una marcha del MAO en 2001 contra la deforestación provocada por las multinacionales madereras, en el que el capitán de la policía local lo separó del grupo y le puso una granada en la boca antes de echarse a correr. "La saqué y la aventé lo más lejos posible. Explotó en un campo de los alrededores", cuenta el Padre Tamayo, sonriendo. "Ahora la policía me abrió un proceso por disturbios" (Bracken, 2008)[43].

Varios jueces y abogados de derechos humanos fueron asesinados durante los años 2000. Las oficinas de movimientos sociales han sido saqueadas y personas identificadas con la izquierda asesinadas, o amenazadas de muerte (*ibíd.*). La militarización de la política y de la sociedad, llevada a cabo bajo la cubierta de la guerra contra el crimen, es en realidad la primera línea de defensa de los poderosos. Con este contexto histórico en mente es posible entender la relativa facilidad con la que Roberto Micheletti organizó y llevó a cabo el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009.

El interregno Zelaya

Zelaya, un ranchero adinerado y magnate de la industria maderera, llegó a la presidencia en 2006 como líder del disidente Movimiento Esperanza Liberal, una corriente del Partido Liberal. Su llegada al

43 Otros dos activistas del Movimiento Ambiental Olancho (MAO), Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Cartagena, fueron asesinados por agentes de la policía nacional en 2006.

poder tuvo lugar tras ocho años de un giro importante —aunque desigual— hacia la izquierda en varias partes de América Latina. Pero su presidencia también coincidió con la intensificación de los esfuerzos del imperialismo para volver al *statu quo* anterior (Webber y Carr, s/f).

Zelaya había sido diputado del Partido Liberal durante tres períodos consecutivos, entre 1985 y 1999, y había dirigido el Fondo Hondureño de Inversión Social, financiado por el BM, entre 1994 y 1999. En la elección presidencial de 2005 se enfrentó a Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional. La campaña giró casi exclusivamente en torno a los problemas del crimen, la violencia y las pandillas, con Lobo abogando por la continuación de la política de mano dura y por la reintroducción de la pena de muerte, que había sido abolida en 1937. Zelaya, por el contrario, se opuso a la pena de muerte y a la legislación antipandillas, afirmando que este tipo de políticas no había hecho más que exacerbar el problema. Hizo vagas promesas de nuevos programas sociales para aliviar los altos niveles de pobreza y desempleo, que veía como factores que empujaban a los jóvenes hacia las pandillas.

Ya ungido presidente, Zelaya implementó algunas políticas modestas de reforma económica y social. Hizo gratuita la inscripción a las escuelas, aumentó los salarios de los maestros e intentó reducir el costo de los combustibles (*The Economist*/EIU, 2008). También aumentó el salario mínimo de 6 a 9,60 dólares al día, se disculpó por las ejecuciones de niños a manos de las fuerzas de seguridad en la década pasada, hizo campaña por la legalización de algunas drogas y bloqueó legislación que hubiera hecho ilegal adquirir la píldora del día siguiente (Grandin, 2009a). En el área de la extracción de recursos naturales, Zelaya le propuso al Congreso una serie de leyes que exigían una mayor regulación ambiental y prohibían las minas a cielo abierto.

Una nueva Ley Forestal aprobada en septiembre de 2007 introdujo medidas para prevenir un mayor colapso ecológico, al designar al 87,7 por ciento del territorio hondureño como área protegida (*The Economist*/EIU, 2008: 12). A pesar de la presión de los grupos empresariales y de las propias facciones de derecha en su partido, Zelaya se negó

a privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (de propiedad estatal), así como la compañía de telecomunicaciones, Hondutel (*The Economist*/EIU, 2009).

Al mismo tiempo, es fácil exagerar la amplitud del giro a la izquierda con Zelaya, el cual, al menos en política interna, nunca se salió de los parámetros de un reformismo modesto (Romero, 2009: 129-138). El gasto público en educación se mantuvo en tan sólo el 3,8 por ciento del PIB. En abril de 2006 Honduras se unió al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que tenía el objetivo de abolir los impuestos aduanales y otras barreras al comercio, y crear un ambiente de negocios apropiado para la inversión extranjera —particularmente para las multinacionales que querían hacer de Honduras su base de operaciones— (*The Economist*/EIU, 2008: 10).

Dos años después, el gobierno de Zelaya firmó un acuerdo con el FMI que "compromete" al gobierno a mantener la estabilidad macroeconómica, reducir el gasto corriente (en especial la masa salarial del gobierno), alcanzar un déficit fiscal de no más del 1,5 por ciento del PIB y dirigir el gasto público hacia la construcción de infraestructura y la reducción de la pobreza (*ibíd*.).

En realidad, si Zelaya llevó a cabo reformas sociales fue debido a la presión intensa y consistente ejercida desde abajo por sindicatos militantes, organizaciones campesinas y grupos estudiantiles imbuidos de ideologías revolucionarias o de la Teología de la Liberación. En los primeros 32 meses de su presidencia hubo cerca de 700 conflictos sociales, especialmente contra la privatización y el libre mercado, y por aumentos salariales o subsidios para controlar el precio de la canasta básica (Hernández, 2009).

Como apuntamos antes, Honduras sufrió una fuerte desaceleración económica en 2008 ligada a la crisis económica mundial, y particularmente a la depresión en Estados Unidos, el principal mercado de exportación y fuente de turismo, remesas e IED. Fue a raíz de esto que Zelaya pragmáticamente decidió unirse a la Alianza Bolivariana

para los Pueblos de América (ALBA) en septiembre de ese año. Como parte del trato,

> Venezuela ofreció comprar bonos hondureños por valor de cien millones de dólares, para que ese dinero se invirtiera en vivienda popular. Hugo Chávez también ofreció una línea de crédito de 30 millones de dólares para el campo, cien tractores y cuatro millones de focos ahorradores (Cuba enviaría técnicos para instalarlos, así como más doctores y personal alfabetizador) (*The Economist*, 30/10/2008).

La prensa económica internacional vio este giro "no como una cuestión de afiliación ideológica, sino de necesidad financiera" (*The Economist*, 20/10/2008).

Sin embargo, es casi una ley que los gobiernos no necesariamente tienen que adoptar medidas revolucionarias para que las élites tradicionales y las fuerzas militares se sientan amenazadas y actúen violentamente en defensa de sus intereses. Las tensiones en Honduras se agudizaron con la preparación de un referéndum apoyado por Zelaya programado para junio de 2009. El plebiscito popular preguntaría a los hondureños si querían tener un segundo referéndum vinculante durante las elecciones nacionales de noviembre acerca de si debía o no llamarse a una Asamblea Constituyente. La Constitución hondureña fue adoptada durante el gobierno militar de los años ochenta. Luego de que la Suprema Corte decidiera que el referéndum era ilegal, Zelaya le pidió al ejército que distribuyera las papeletas para el referéndum[44]. El comandante en jefe de las fuerzas armadas hondureñas, Romeo Orlando Vásquez Velázquez, se negó a obedecer. Zelaya lo despidió,

44 "Los partidarios del golpe", dice Mark Weisbrot, "afirman que el Presidente violó la ley al no desistir del referéndum una vez que la Suprema Corte había decidido su inconstitucionalidad. Esto es una cuestión legal; puede ser verdad, o puede ser también que la Suprema Corte no tuviera bases legales para tomar esa decisión. Pero es irrelevante para lo que sucedió después: el ejército no es árbitro de las disputas constitucionales entre las distintas ramas del gobierno" (Weisbrot, 2009).

con lo que éste pasó a jugar el principal papel militar en el golpe contra el Presidente (*ibíd.*). Una vez que Vásquez había sido echado, el ministro de Defensa Ángel Orellana renunció y la Corte Suprema decidió que el despido de Vásquez había sido ilegal. La mayoría del Congreso, incluyendo la facción de derecha del Partido Liberal, dirigida por Micheletti, se puso en contra del Presidente[45]. Una cofradía de fuerzas conservadoras vio la oportunidad de hacerse con el poder, con lo que se articuló una alianza en torno al derrocamiento de Zelaya:

> Evangélicos conservadores y católicos —incluyendo al Opus Dei, que tiene una gran presencia en Honduras— lo detestaban porque se negó a prohibir la píldora del día siguiente. El sector minero, hidroeléctrico y el de los biocombustibles, no lo quería porque no les otorgó fondos estatales ni acceso a tierras. Todos los funcionarios judiciales lo odiaban porque se disculpó a nombre del Estado por el programa de limpieza social de los años noventa que asesinó a niños de la calle y pandilleros por igual. Y los generales no lo querían porque intentó someterlos al control civil (Grandin, 2009b).

Según la principal organización de derechos humanos del país, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), hubo 43 asesinatos de civiles ligados al movimiento de resistencia entre el golpe de Estado y febrero de 2012. La Cofadeh acepta que esta cifra es un estimado a la baja, pues la intimidación y el miedo impiden que las comunidades y los familiares reporten los agravios que sufren. En noviembre de 2011, un reporte de Rights Action contaba 59 asesinatos. La otra cara de la retórica de reconciliación nacional y del regreso a la democracia en la que se arropó la victoria electoral de Lobo fue la intensificación de la represión, inmediatamente después de su toma de

45 La composición del Congreso era la siguiente: Partido Liberal, 62 congresales; Partido Nacional, 55; Partido de Unificación Democrática (PUD), 5; Partido Demócrata Cristiano, 4; Partido de Innovación Nacional y Unidad-Social Demócrata, 2. El único partido que formalmente se posicionó contra el golpe fue el PUD.

posesión. La Cofadeh reportó 250 violaciones a los derechos humanos en los primeros tres meses de su mandato (Gordon y Webber, 2013).

De acuerdo a Naciones Unidas, Honduras tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Reporteros sin Fronteras ha señalado al país como uno de los más peligrosos para los periodistas. El régimen mismo ha admitido que la policía y el ejército están infestados de narcotraficantes (Frank, 2014a; Gordon y Webber, 2013). Los asesinatos y amenazas contra periodistas, abogados y jueces, contra la comunidad homosexual, lesbiana, bisexual y transgénero, o contra cualquier asociado a los movimientos sociales son un lugar común. Durante el gobierno de Lobo, por ejemplo, 67 abogados y 29 periodistas fueron asesinados. Sólo en cuatro casos hubo detenidos (Frank, 2013a). A partir del golpe, la violencia, la impunidad y el terror de Estado y de los paramilitares han tenido rienda suelta, mientras que la libertad de expresión, de asamblea y de asociación, han sido coartados (Rights Action, 2013; Frank, 2013b).

En noviembre de 2013, la Fiscal Especial Hondureña para los Derechos Humanos le dijo a una delegación de observadores electorales del Gremio Nacional de Abogados Americanos que tenía una torre acumulada de 7.500 casos que no había podido tratar (Achtenberg, 2013a). Desde 2009, la Cofadeh ha recibido reportes de cinco mil violaciones a los derechos humanos solamente en la parte norte del país. Una nueva fuerza policial militarizada se ha ensañado contra los barrios pobres, y se dedica a hostigar a sus habitantes. En mayo de 2012, esa corporación asesinó a un muchacho de 15 años que no se detuvo en un punto de control. Sin embargo, la violencia policial no se puede reducir a actos aleatorios de violencia: la mayoría de sus acciones es abiertamente política.

Tomás García fue asesinado el 15 de julio de 2013 por su actividad en el movimiento indígena que intentaba detener la construcción de una presa hidroeléctrica en Intibuca. Durante ese mismo verano, se le abrió un proceso a Bertha Cáceres, una de las personalidades más conocidas del movimiento indígena hondureño y miembro del

Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) por bloquear carreteras —también en protesta contra la construcción de presas—[46]. El caso más emblemático e infame es el del Valle del Aguán, donde casi un centenar de campesinos han sido asesinados por las milicias privadas y las corporaciones policíacas del Estado, reprimidos por luchar contra la usurpación de tierras por parte de las grandes corporaciones productoras de aceite de palma (Frank, 2014a; Malkin, 2014).

Ottawa y el golpe democrático

La respuesta inicial al golpe por parte del gobierno canadiense fue bastante tibia, y posteriormente se colocó entre los principales actores de la escena postgolpista[47]. Durante los meses siguientes, Canadá dedicó sus energías a abogar por una "resolución" particular de la situación. Desde el principio, el gobierno de Stephen Harper intentó terminar con el aislamiento de Honduras y hacer aceptable al nuevo gobierno ante la comunidad internacional —recordemos que la membresía del país en la OEA había sido revocada, puesto que el golpe violó su Carta Democrática—. Al mismo tiempo, Canadá buscó separar al nuevo gobierno hondureño de la órbita venezolana y de los otros gobiernos de centro izquierda en América Latina con los que Zelaya había desarrollado vínculos y quienes fueron los críticos más abiertos del golpe. La política canadiense hacia el golpe durante los meses que le siguieron indicaba una cosa: a los ojos de los intereses canadienses, la mejor opción era un régimen represivo y pro libre mercado, cubierto por un delgado caparazón democrático.

La esencia de la respuesta canadiense al golpe consistió en evitar el regreso de cualquier forma de democracia significativa, pese a que

46 Después de la publicación de la versión inglesa de este libro, Bertha Cáceres fue asesinada en su casa por intrusos armados el 2 de marzo de 2016. Durante años había estado recibiendo amenazas de muerte de escuadrones de la muerte con vínculos con el aparato de seguridad del Estado.

47 Sobre la respuesta canadiense a los sucesos previos al golpe, ver Gordon (2010: 376-377).

evitó apoyar públicamente la intervención por parte de los militares hondureños. Para los arquitectos de la política exterior canadiense, el golpe de Estado abría la posibilidad de detener el moderado giro hacia la izquierda y la democratización de un país gobernado desde siempre por un pequeño consorcio de élites económicas y militares. Una oportunidad así no debe desperdiciarse por ningún compromiso con el liberalismo constitucional. El papel de Canadá en socavar los intentos de restaurar la democracia en Honduras debe ser visto como una señal de aviso al resto del istmo, donde los intereses del capital canadiense han sido puestos en peligro tanto por decisiones de los gobiernos como por movimientos sociales intransigentes.

Así que al tiempo que Canadá se posicionó como un mediador neutral, se negó a exigir públicamente el regreso de Zelaya del exilio y criticó toda tentativa de éste de volver a la presidencia sin una previa negociación con Estados Unidos y con la misma Canadá (Kent, 2009a). Un reporte de la embajada canadiense en Tegucigalpa afirmaba que Zelaya tenía "un apoyo considerable de los grupos sindicales y laborales, así como de las organizaciones populistas que florecieron durante su presidencia" (Arsenault, 2009a).

A pesar de esto, la Embajada no modificaría su posición. Tras el intento inicial de Zelaya de volver al país, que provocó una movilización de masas en su apoyo a pesar de la violenta represión, Peter Kent, ministro de Estado para las Américas, le dijo a la radio CBC que los intentos del Presidente depuesto "por volver al país [...] no hacen más fáciles las cosas"[48].

Kent guardó silencio ante los repetidos ataques a la libertad de expresión y de reunión. Zelaya era —hay que repetirlo en vista de la posición de Canadá— el presidente constitucionalmente electo de un país que, por su propia ley y por la Carta Democrática de la OEA, debió haber podido volver inmediatamente al país y reasumir su presidencia. Los funcionarios canadienses, como Kent y sus consejeros

48 Peter Kent, citado en Rights Action (2009).

de las oficinas de Foreign Affairs and International Trade (FAIT, por su sigla en inglés; su equivalente en América Latina sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional), decidieron hacer caso omiso de esto. Zelaya logró volver del exilio en septiembre de 2009 a pesar de los intentos de Micheletti para mantenerlo fuera del país, aunque terminó bajo asedio militar en la embajada brasileña. Canadá se negó a condenar el trato que le dieron las autoridades hondureñas, o a exigir su liberación del que se había convertido en un confinamiento de facto —no digamos ya pedir su regreso a la presidencia—.

El silencio del gobierno canadiense respecto a la facilidad con la que Micheletti utilizó la fuerza contra sus enemigos es una buena muestra de su orientación general en la escena política posterior al golpe. El gobierno de Harper dijo poco o nada sobre la ola represiva que cimbró a las fuerzas antigolpistas tras la llegada de Micheletti al poder. Ni una sola declaración de prensa identificó o criticó explícitamente las medidas represivas del nuevo gobierno. En lugar de eso, Kent hizo un llamado a que "todas las partes muestren autocontención" (Kent, 2009b), a sabiendas de que la fuerza era usada unilateralmente, y a sabiendas de que el ejército, los escuadrones de la muerte y una policía bien armada peleaban contra un movimiento pro democracia enteramente desarmado[49]. Esta no fue una política equivocada debido a una supuesta falta de información, fue una posición calculada, basada en ignorar la represión (bien documentada) sufrida por el campo antigolpista[50].

La posición más prudente para Canadá, de acuerdo con esta lógica, consistía en orillar a Zelaya a una resolución negociada —diseñada, sin embargo, para evitar que volviera a la presidencia—. En efecto, como parte de esta estrategia, al tiempo que el gobierno de Harper criticó a

49 Para una discusión más detallada acerca de la ausencia de respuesta canadiense a la violenta represión de los activistas antigolpe, ver Gordon (2010: 377-379).

50 Organizaciones hondureñas de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos publicaron varios reportes acerca de la represión.

la ligera el golpe de Estado, también extrañamente culpó a Zelaya de lo que había pasado. En una reunión de la OEA en la que se discutió la posibilidad de hacer a un lado la dictadura de Micheletti y permitir el regreso de Zelaya, Kent dijo que la comunidad internacional había tenido un enfoque demasiado unilateralista hacia el golpe, y afirmó que "el golpe ciertamente es una afrenta a la región, pero hay un contexto en el que todo esto sucedió… Tenemos que apreciar los eventos que produjeron el golpe"[51].

En otras palabras, el derrocamiento de Zelaya no es el problema inequívoco que las declaraciones de los distintos gobiernos latinoamericanos nos hacen pensar. El congresista conservador Dave van Kesteren, hablando ante el Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional (SCFAID, por su sigla en inglés), luego de que se hubieran hecho públicas las negociaciones comerciales con Honduras, dejó de darle vueltas al asunto y culpó a Zelaya y a Venezuela del golpe, en lo que parece ser la verdadera opinión de su gobierno acerca de América Latina:

> Hubo un golpe porque el país se deslizaba hacia Hugo Chávez, ese tipo de régimen, y la influencia que éste ejerce sobre muchos países del sur [sic]… No nos equivoquemos. Estamos viendo una verdadera lucha de poder, y es entre lo que creemos que es una sociedad libre, es decir tener libertad de bienes, lo que llamamos la mano no guiada [sic], contra el total control del gobierno, o la libertad contra el totalitarismo, la libertad contra la pobreza (SCFAID, 2011a).

Aquí Van Kesteren lleva la posición conservadora sobre Honduras un paso más allá que lo oficialmente aceptado por Kent, pero la política oficial canadiense es transparente: independientemente de lo que uno piense de los golpistas, tenían razones genuinas para querer derrocar

51 Kent, citado en Lacey y Thompson (2009).

a Zelaya. Al impulsar reformas que excedían los límites políticos y económicos aceptados por los poderes imperiales, Zelaya propició el golpe, y su simple regreso a la presidencia no era algo que pudiera ser permitido. Mucho menos si, como creen los conservadores (y los liberales canadienses), Honduras era una pieza central en la gran estrategia de autoritarismo antineoliberal de Hugo Chávez.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José

La oposición del gobierno canadiense a la restauración de una genuina democracia en Honduras determinó su apoyo a una solución negociada a la crisis que, rápidamente, se convirtió en su principal política tras el golpe y por lo menos hasta las elecciones del 29 de noviembre de 2010. Canadá apoyó sin rechistar el Acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado por Zelaya desde su aislamiento en la embajada brasileña, posiblemente con la esperanza de que cualquier acuerdo debilitaría al régimen golpista.

Lo opuesto terminó por suceder. El Acuerdo Tegucigalpa-San José reforzó la estabilidad del régimen al proveer un barniz de orden constitucional bajo el cual los gobiernos canadiense y estadounidense pudieron apoyar sin problemas las elecciones de noviembre. El Acuerdo trasladó al Congreso la cuestión de la reinstalación de Zelaya, en lugar de establecerlo como el núcleo no negociable de cualquier intento de resolver el conflicto. Impuso la noción de la "unidad nacional", a través de un llamado para que las fuerzas de Zelaya compartieran el poder con los representantes de la dictadura. Cualquier intento de llevar a cabo una Asamblea Constituyente fue descartado. Zelaya siguió siendo hostigado en la embajada brasileña, la represión contra las fuerzas antigolpistas se mantuvo como antes, y los candidatos pro régimen hicieron campaña. Ninguno de los candidatos representó a los opositores al golpe. Zelaya se retiró del Acuerdo poco después.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José no supuso nunca ninguna posibilidad de que se restaurara una democracia genuina en Honduras, a

pesar de que haya sido presentado por el gobierno canadiense como un esfuerzo justo y equitativo para lograr tal cosa. Los intereses canadienses estaban en otra parte, tal como los resumió el embajador Neil Reeder: "Como antiguos socios de Honduras en la ayuda al desarrollo, el comercio y la inversión, estamos encantados con el resultado" (Reeder, 2009a). Zelaya decidió negociar con estas condiciones sobre la mesa, pero el Acuerdo era impopular entre varias de las principales figuras de la resistencia precisamente porque conllevaba cancelar la modesta agenda de reformas de su gobierno. Los funcionarios canadienses estaban completamente al corriente de esto (Reeder, 2009b), y el apoyo al Acuerdo por parte de Ottawa fue, en buena medida, una respuesta al auge de la resistencia y de la lucha por el regreso de la democracia. Un reporte de la Embajada, por ejemplo, afirmaba que "el aumento de las manifestaciones callejeras en varias partes del país es un peligro con el que se debe lidiar a través de un mayor esfuerzo para sentar a la mesa a las dos partes", y agregaba, con algo de alarma, que "en las manifestaciones pro Zelaya confluyen campesinos y los pobres del campo, sindicalistas, estudiantes universitarios y miembros de pequeños partidos de izquierda, incluyendo socialistas y antiguos comunistas" (Minaker, Arsenault y Reeder, 2009).

Aunque la representación diplomática canadiense en Honduras es relativamente pequeña (en realidad, la Embajada en San José tiene jurisdicción sobre Honduras), ésta se vio incrementada con la llegada temporal de personal de otras misiones. El embajador Reeder estuvo muy activo en varios momentos de la negociación, y varios representantes canadienses, incluyendo a Kent, participaron en dos misiones de alto nivel de la OEA en Tegucigalpa, entre agosto y octubre de 2009, cuando las negociaciones para el que sería el Acuerdo Tegucigalpa-San José empezaron a tambalear.

Los canadienses estaban también en contacto con Óscar Árias, el presidente costarricense y principal mediador (quien posteriormente estuvo involucrado en un escándalo de tráfico de influencias con la minera canadiense Infinito Gold). El objetivo de Canadá y Estados

Unidos era poner en marcha el Acuerdo y hacer que Zelaya volviera a la presidencia sin ningún tipo de autoridad constitucional un poco antes de las elecciones en noviembre. Con esto, Canadá y Estados Unidos podrían mostrarle a la comunidad internacional que Honduras había vuelto a la normalidad constitucional, lo cual a su vez permitiría que la elección de Porfirio Lobo fuera vista como el punto final del período de turbulencia golpista —algo bastante sencillo desde el punto de vista de las relaciones públicas—. Confiados en que todas las partes seguirían este plan, los funcionarios canadienses exigieron inicialmente que el Acuerdo fuera ratificado para que Canadá ayudara en la posterior preparación de las elecciones de noviembre (Reeder, 2009a; Valdes, 2009).

El Acuerdo fue firmado pero nunca ratificado, y Micheletti se negó a permitir que Zelaya volviera a la presidencia, así fuera de la manera más testimonial. Zelaya denunció el acuerdo y lo declaró muerto. Resultó que el compromiso de Canadá con la ratificación del Acuerdo y la democracia constitucional era flexible. No interferiría con el reconocimiento del gobierno recién elegido. De hecho, el gobierno canadiense le ofreció un apoyo inquebrantable. Canadá hubiera preferido que el Acuerdo fuera ratificado, pues esto haría más sencilla la operación de relaciones públicas en defensa de Lobo y por la readmisión de Honduras a la comunidad internacional. Pero tampoco era imprescindible: el gobierno canadiense no iba a dejar que ese fracaso interfiriera con sus planes en Honduras (ante todo, la expansión del capital canadiense), y, por tanto, pasó a ocupar la primera línea en la defensa de Honduras y por su reintegración a la comunidad internacional. Kent expresó su "decepción" ante los problemas de implementación del Acuerdo y confirmó que los monitores electorales canadienses, como los del resto del mundo, no participarían en los equipos de observación electoral. Pero no perdió tiempo en alabar la elección. A pesar de la represión y de las acusaciones de fraude, Kent anunció sin rechistar que

> Canadá felicitaba al pueblo hondureño por el modo ordenado y pacífico en el que habían sido llevadas a cabo las elecciones.

> Aunque no fueron monitoreadas por las organizaciones internacionales, sabemos por reportes de la sociedad civil que hubo una alta participación, que parecen hacer sido justas y pacíficas, y que no hubo grandes episodios de violencia (Kent, 2009c)[52].

Detrás de esta defensa de las elecciones de noviembre, Canadá reconocía, en un reporte interno del despacho de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) —al que contribuyeron también funcionarios en Ottawa y de la Embajada en Tegucigalpa)—, que "en cuanto a decisiones económicas, esperamos que Lobo intente favorecer la estabilidad macroeconómica y que esté abierto a la inversión extranjera. Su elección juega a favor de las inversiones canadienses en el país" (FAIT, 2009b). Lobo era el hombre de Canadá, listo para mostrarse como un aliado de confianza y un líder político responsable —es decir, amigable con los intereses del capital canadiense— y, por tanto, su elección había sido democrática y justa.

Esa posición tan flexible respecto a la elección de un nuevo gobierno en el contexto de un golpe de Estado habría de recibir otra justificación por parte de Reeder, quien culpó a Zelaya por el fracaso del Acuerdo Tegucigalpa-San José. Al defender, en el Parlamento canadiense, y ante el Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional (SCFAID), el 21 de marzo de 2011, la buena relación entre Canadá y un gobierno electo por fuera de las normas de la democracia constitucional, Reeder afirmó que "las acciones y la retórica del presidente Zelaya impidieron que se llegara a un acuerdo" (SCFAID, 2011a).

Seguramente Reeder se refiere a la crítica que Zelaya hizo del Acuerdo, y a su posterior retiro de éste cuando Micheletti le prohibió regresar a la presidencia incluso como una figura estrictamente simbólica. Durante todo este tiempo, por cierto, los gobiernos estadounidense

52 Costa Rica, Colombia, Perú y Estados Unidos también reconocieron inmediatamente los resultados de la elección.

y canadiense presionaron a Zelaya para que aceptara el Acuerdo, a pesar de las condicionantes del régimen. Las razones de Zelaya para desconfiar del Acuerdo —la posición de debilidad en la que lo dejaba, la actitud recalcitrante de Micheletti y de los otros actores del golpe, y la prisa con la que países como Canadá lo presionaron para que lo firmara— se confirmaron poco después.

Obviamente, el acuerdo que Reeder y Kent querían que firmara Zelaya nunca fue ni justo ni sensato, ni siquiera al inicio de las negociaciones, y la facilidad con la que Canadá apoyó las elecciones después del fracaso de un acuerdo negociado sugiere que su verdadero objetivo nunca fue el restablecimiento de una democracia genuina. Es poco probable que Zelaya no se hubiera dado cuenta de esto. También era obvio que la dictadura hondureña hubiera podido implementar el Acuerdo si así lo hubiera querido, pero abiertamente decidió no hacerlo. Ante esto, Zelaya decidió que no tenía ningún sentido negociar porque simplemente no podía ganar ya nada. Intentar echarle la culpa a Zelaya por el fracaso del Acuerdo —que era, repitámoslo, una afrenta a la democracia liberal más básica, y que probablemente no lo hubiera firmado si la correlación de fuerzas hubiera estado más a su favor— es poco sincero.

Lo que realmente había enojado a Reeder y al gobierno canadiense fue que Zelaya no acatara las exigencias de Estados Unidos y Canadá. Reeder mismo visitó a Zelaya en la embajada brasileña en octubre de 2009 y "transmitió duramente el mensaje […] de que se abstuviera de convocar […] a que la gente saliera a protestar a las calles" y "para que pública y explícitamente apoyara las elecciones de noviembre" (Valdes, 2009b). Zelaya no hizo ninguna de esas cosas, y decidió no prestarse a la farsa imperialista de que la constitucionalidad había sido restaurada y darle una legitimidad inmerecida a las elecciones. Por tanto, Zelaya se convirtió en una fuente de ira para el gobierno canadiense por su independencia y sus decisiones; su reputación fue hecha añicos para hacerlo ver como el blanco merecido de un golpe de Estado. Mientras tanto, Canadá centró sus

esfuerzos en profundizar sus vínculos con el nuevo gobierno, el de Porfirio Lobo.

Hay que decir que Zelaya no fue la única causa de frustración para los canadienses. Reeder aceptó, en su testimonio ante el mencionado Comité del Parlamento canadiense (SCFAID), en marzo de 2011, que "el gobierno de facto" (es decir, la dictadura de Micheletti) jugó su parte en echar a perder el compromiso. Los representantes canadienses en Honduras tenían esto completamente claro. Los comunicados de la misión de Canadá en Tegucigalpa entre septiembre y noviembre de 2008 dan a entender que la Embajada y Kent estaban preocupados con la intransigencia de Micheletti y sus partidarios en la negociación e implementación del Acuerdo[53]. Pero esto no debe ser visto como una muestra de neutralidad por parte de Canadá.

El principal objetivo canadiense era limitar la democracia, y la relación con Micheletti dependía enteramente de eso. En la medida en la que la política de mano dura de Micheletti contra Zelaya y la oposición era vista como una manera de contener un levantamiento popular y de impedir el regreso de éste al poder, aquél jugaba un rol necesario. Pero esa mano dura era una espada de doble filo. Desde la perspectiva de Canadá, el hecho de que Micheletti se negara a implementar el Acuerdo significaba que la dictadura ya no estaba cumpliendo su propósito de impedir que Zelaya volviera al poder con la autoridad de antes. Para Canadá, aunque Zelaya hubiera vuelto a la presidencia gracias al Acuerdo, esto implicaba una derrota para el presidente depuesto y sus partidarios. La necedad de Micheletti sólo le hacía más difícil a Canadá poder vender el acuerdo a la comunidad internacional, y cancelaba la posibilidad de apoyar públicamente la elección. Efectivamente, no fue sino hasta junio de 2011 que el gobierno

53 La frustración de Canadá se expresó en varios *Situational Reports* enviados por la oficina de la Embajada en Tegucigalpa a la FAIT y a veces a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) en Ottawa, por ejemplo, Arsenault (2009b), Valdes (2009a), Reeder (2009c).

de Lobo obtuvo el reconocimiento de la mayoría de los Estados latinoamericanos y de la OEA.

A la par de esto, quedaba la sensación de que el *impasse* político —además de alimentar al movimiento pro Zelaya— sólo dañaba la economía y potencialmente ponía en peligro la estabilidad interna. Esta era, en todo caso, la opinión de varios empresarios hondureños que veían en Canadá a un aliado de confianza, que apoyaba y colaboraba con un acuerdo vía Óscar Arias que resolviera la crisis constitucional (Valdes, 2009c)[54].

Lavar la sangre de la violencia de Estado

El fracaso del Acuerdo Tegucigalpa-San José generó dudas acerca de la legitimidad del gobierno de Lobo que no iban a desaparecer con el reconocimiento estadounidense o canadiense. Lobo ganó una elección organizada por una dictadura, la de Micheletti, que ni siquiera había pretendido legitimarse constitucionalmente vía el Acuerdo, al tiempo que acusaciones de fraude electoral pululaban por el país. La brutal represión contra la oposición alimentó todavía más la preocupación internacional. La mayoría de los países latinoamericanos y la OEA se negaron a reconocer al nuevo gobierno hondureño. La resistencia hondureña veía al régimen de Lobo como la continuación del golpe bajo un barniz democrático. Canadá y Estados Unidos no podían simplemente ignorar la mala reputación del régimen de Lobo. Profundizar los vínculos políticos y económicos con el nuevo gobierno desde la posición de Canadá como promotora de la democracia y los derechos humanos implicaba defender su legitimidad.

Esto pasaba por reescribir la historia del 28 de junio de 2009. Si podía generarse la duda, por pequeña que fuera, de que Zelaya no era la víctima inocente del golpe, entonces la oposición al gobierno

54 Este reporte menciona un encuentro con los representantes empresariales canadienses para discutir acerca de sus preocupaciones, pero los detalles están completamente censurados.

de Lobo perdería credibilidad. Como dijimos antes, Canadá le quitó importancia a la represión que siguió al golpe y difundió la historia de que Zelaya era responsable por el fracaso tanto del Acuerdo Tegucigalpa-San José como del mismo golpe.

En su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento (SCFAID), el 21 de marzo de 2011, el embajador Reeder habría de contribuir a la reescritura de la historia al decir que "el gobierno de facto tomó el poder *después* de que el Presidente Zelaya *dejara* el país", como si éste hubiera salido del país por su propia voluntad y no porque los militares le pusieron una pistola en la nuca —al mando de éstos estaba el General Vásquez, quien sería después nombrado por Lobo director de la empresa de telecomunicaciones paraestatal, Hondutel— (SCFAID, 2011). En el testimonio de Reeder, la idea de "exilio", que implica la persecución política de quien tiene que dejar el país por sus diferencias con la autoridad, es reemplazada por un acto voluntario. Durante la discusión sobre la readmisión de Honduras a la OEA, el 1 de junio de 2011, el representante canadiense Alan Culham llevó esta operación de limpieza un paso más adelante al evitar sistemáticamente utilizar la palabra "golpe" y reemplazarla por el término "crisis política" (Culham, 2011), una noción bastante más ambigua que la de "golpe militar", que expresa de una manera clara y objetiva cómo y por quién fue derrocado el gobierno de Zelaya.

Los representantes canadienses continuaron con su política iniciada tras el golpe de acercamiento a los líderes hondureños. En el documento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) de 2009 sobre Honduras, el que se denomina *Country Strategy Process*, el "intensificar el involucramiento de Canadá con la dirección política a través de visitas regulares y el diálogo" ya era identificado como un "objetivo estratégico" (FAIT, 2009c). La nueva política hacia las Américas del gobierno de Harper abogaba por un acercamiento más profundo con la región, pero en Honduras la falta de claridad en el sector minero había sido una constante fuente de preocupación (veremos en un momento por qué).

Pero en el contexto del aislamiento internacional postelectoral de Honduras "intensificar el involucramiento con la dirección política" adquirió un mayor significado. Además de la comunicación y las reuniones regulares entre los funcionarios de la Embajada y los políticos hondureños, el ministro Kent se reunió con Lobo y con varios funcionarios durante una visita a Honduras antes de que la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, hiciera lo propio (Clinton viajó dos veces –en febrero y agosto– a Tegucigalpa en los siete meses que siguieron a la asunción de Lobo). Esas reuniones deben ser vistas como una muestra pública de apoyo hacia un gobierno aislado y un claro mensaje a los observadores internacionales de que las cosas habían vuelto a la normalidad en Honduras y que Canadá veía a Lobo como un líder democrático y un interlocutor legítimo.

La defensa que el gobierno de Harper hizo de Lobo giró en torno al argumento de que éste dirigía un proceso de reconciliación nacional. Este último concepto fue repetido hasta la saciedad por los funcionarios canadienses. Durante su visita a Honduras a finales de abril de 2009, Kent no paró de elogiar a Lobo y a su gobierno, ignorando la represión hacia los activistas antigolpistas —que incluyó el asesinato del activista sindical Julio Fúnez Benítez el 15 de febrero, dos días antes de que llegara Kent—. Por el contrario, el ministro de Estado para las Américas afirmó con gusto que "el presidente Lobo ha empezado un proceso de reconciliación nacional, lo que incluye la formación de una comisión de la verdad" (Kent, 2010; *El Heraldo*, 18/02/2019). Por su parte, y durante su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores (SCFAID), el 21 de marzo de 2011, el embajador Reeder insistió que "el presidente Lobo ha dado varios pasos hacia el restablecimiento del orden y la reconciliación nacional" (SCFAID, 2011b).

De lejos, el principal botón de muestra de la pretensión de reconciliación nacional fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Aceptada durante las negociaciones del Acuerdo Tegucigalpa-San José, la CVR fue establecida en abril de 2010 con un panel internacional de comisionados; su objetivo declarado consistía en investigar los

eventos de junio de 2009 y permitirle a la gente cerrar ese capítulo y reconciliar las divisiones provocadas por el golpe. Sin embargo, desde sus orígenes, la Comisión fue un fraude; se instaló no en las postrimerías de un conflicto violento tras el cual los distintos actores buscaban resolver sus diferencias de buena fe (como en Sudáfrica o en Guatemala), sino en medio de la represión militar y paramilitar contra la población civil. Junto con Washington, Canadá fue uno de los ejes de la reducida alianza que apoyó a Lobo en su intento de normalizar las relaciones internacionales del régimen. Su apoyo a la CVR le dio una credibilidad que no tenía. Un reporte de las oficinas de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) predecía que "un lanzamiento exitoso" de la Comisión "será [...] visto por muchos países como una precondición esencial para la reintegración de Honduras a la comunidad internacional" (Autor desconocido, s/f). Al jugar un rol de primera línea en el esfuerzo por hacer ver al régimen de Lobo como abierto a la reconciliación, la Comisión encontró en el gobierno canadiense a un aliado entusiasta. Un "Memorando para la Acción" redactado para Kent por el viceministro de Relaciones Exteriores decía que apoyar a la CVR era una gran oportunidad para Canadá que no debería desperdiciar, puesto que le permitiría "continuar su rol dirigente en Honduras" (Edwards, s/f). Kent estuvo de acuerdo, y Relaciones Exteriores (FAIT) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) le dieron más de 400 mil dólares canadienses. Designaron también a uno de los comisionados, el exdiplomático Michael Kergin, quien por cierto era socio de una de las principales firmas de derecho corporativo de Canadá, Bennett Jones, la cual se especializa, entre otras cosas, en asuntos relacionados con la inversión y la minería (SCFAID, 2011c).

Las distintas organizaciones de la resistencia olieron el fraude y se negaron a participar. La principal organización hondureña de derechos humanos respondió con su propia comisión de la verdad. Como era de esperarse, la CVR aceptó en su reporte de julio de 2011 que había habido un golpe de Estado, pero culpó a Zelaya por violar la ley al

no hacerle caso al fallo de la Suprema Corte que le exigió cancelar el primer referéndum que le preguntaría a los hondureños si querían tener una segunda consulta vinculante durante las elecciones de noviembre de 2009. Como dijimos antes, el segundo referéndum hubiera permitido a los hondureños decidir si querían tener una nueva Constitución. La idea de una Asamblea Constituyente sigue siendo una idea muy popular entre la población. Por cierto, el diez por ciento del reporte de la Comisión de la Verdad está clasificado, escondido durante una década en alguna biblioteca de Ottawa.

A pesar de la farsa representada por la CVR, el gobierno hondureño y sus aliados la usaron como una plataforma para intentar normalizar sus relaciones con otros países. Como era de esperarse, Canadá elogió a la Comisión por sus esfuerzos en la dirección del "fortalecimiento de las instituciones del país y por ayudar a los hondureños a tener mayor confianza en sus instituciones democráticas" (FAIT, 2011a). El objetivo de toda esta verborrea de Canadá era exhibir públicamente su compromiso con la democracia en Honduras, en un momento en el que el capital canadiense —en las maquilas y el turismo— entraba en una fase cualitativamente distinta. En otras palabras, un intento de curarse en salud ante las posibles críticas de que Canadá estaba haciendo negocios y beneficiándose de un régimen autoritario.

Canadá y los derechos humanos

El apoyo del gobierno de Canadá hacia el régimen de Lobo, a pesar de la violencia, no emana del desinterés hacia los derechos humanos. En realidad, proviene de la idea de que la violencia es un fundamento necesario del compromiso sociópata del régimen hondureño con el capital internacional. El Estado canadiense comparte este compromiso sociópata. El Estado canadiense apoyará los derechos humanos siempre y cuando no entren en contradicción con los intereses del capital canadiense.

Como hemos visto, los funcionarios canadienses normalmente subestimaban o cerraban los ojos ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Honduras, pero ya en el primer año de la presidencia de Lobo las cosas se pusieron tan mal que Reeder tuvo que aceptar que tal vez no iban tan bien. En su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento canadiense (SCFAID), el 21 de marzo de 2011, el Embajador dijo que "los abusos a los derechos humanos y las quejas formales han aumentado", y que "mantenemos un canal de comunicación con el gobierno hondureño para expresarle nuestra preocupación, tanto en público como en privado, respecto a la situación de los derechos humanos", lo cual incluía emitir "declaraciones formales de preocupación durante la revisión periódica llevada a cabo por Naciones Unidas en este ámbito" (SCFAID, 2011b). Esta aceptación es importante, pues se produjo ante una repartición del gobierno canadiense que se dedica a calcular cuándo y cómo expresa su "preocupación" sobre los derechos humanos. En el caso de Honduras, Canadá ha hecho escasas declaraciones públicas sobre los abusos a los derechos humanos de los disidentes[55].

La declaración de Reeder expresaba más la terrible situación de las fuerzas antigolpistas —denunciada por varias organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos— que cualquier compromiso principista por parte de Canadá. Es importante subrayar que esta declaración fue emitida inmediatamente después de que el gobierno de Harper anunciara que estaba negociando formalmente un acuerdo de libre comercio con Honduras. En el fondo, se trataba de una respuesta en adelantado a las potenciales críticas por profundizar los vínculos económicos y políticos con un régimen violador de los

55 El silencio del gobierno de Canadá ante los abusos a los derechos humanos que siguieron al golpe en Honduras, puede ser contrastado con los tres comunicados de prensa que emitió inmediatamente después de las controversiales elecciones en Irán, en junio de ese mismo año (2009), en las que el gobierno iraní reprimió las protestas. Un gobierno represivo debe ser criticado abiertamente, el otro no. Para más detalles sobre la actitud de Canadá frente a la represión en Honduras y Perú, y su distinto posicionamiento en el caso de Irán, ver Gordon (2009b).

derechos humanos. Así que aunque Reeder aceptó que había algunos problemas de derechos humanos, evitó tocar el tema de qué tan graves eran. Canadá no dijo nada sobre la violencia contra los activistas antigolpe en Tegucigalpa, ni sobre la represión y asesinato de los campesinos del Bajo Aguán tras la readmisión de Honduras a la OEA. El hecho de que hubiera vínculos transparentes entre los perpetradores de los crímenes y las fuerzas de seguridad —mostrados con lujo de detalle por las víctimas de la represión y los grupos de derechos humanos— fue completamente ignorado por Canadá.

Durante la visita de Estado de Harper, en agosto de 2011, visita en la que se encontró con Lobo y firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Honduras, el primer ministro canadiense aceptó que posiblemente había algunos problemas de derechos humanos en el país, pero con confianza dio por terminado el asunto: "Estoy seguro de que no son cometidos por el gobierno" (*La Tribuna*, 12/08/2011). Los activistas y las asociaciones de derechos humanos de Honduras, entretanto, afirmaban que el Estado era responsable por la pésima situación: por la represión llevada a cabo por los aparatos de seguridad, pero también por el clima de impunidad al que ha contribuido. Rara vez en Honduras se lleva a alguien a juicio —no hablemos de encarcelar— por cargos de tortura, privación ilegal de la libertad o asesinato. En lo que pareciera ser una aceptación implícita de la impunidad imperante en cuestiones de violaciones a los derechos humanos, la Agencia de Desarrollo Internacional financió un proyecto en el que la Sociedad de Educación Jurídica de la Columbia Británica (JESBC) ayudaría a la oficina del fiscal general hondureño a mejorar sus capacidades de investigación criminal, aunque —de esto no han hablado los funcionarios canadienses— el programa no ha hecho nada para lidiar con la cuestión de la persecución política (Reeder, 2010a).

Los funcionarios canadienses evitan pensar en la conexión entre las violaciones a los derechos humanos y el Estado hondureño, y cierran los ojos completamente ante el posible rol de las compañías canadienses, con quienes colaboran estrechamente. En su testimonio

ante el Comité de Relaciones Exteriores (SCFAID), Reeder niega cualquier vínculo entre la crisis de derechos humanos y los intereses mineros canadienses (que veremos con detalle en un momento). En respuesta a un testimonio del activista hondureño Pedro Landa ante el referido Comité (SCFAID) sobre las mineras canadienses, Reeder dijo: "He visitado las minas canadienses, y respeto la industria. Las minas generan buenos empleos y oportunidades para los hondureños" (SCFAID, 2011d). Es una posición abiertamente engañosa la que tomó el gobierno canadiense: tal vez la situación de los derechos humanos no sea perfecta, pero los problemas no tienen nada que ver con el Estado hondureño, el gobierno de Lobo o la inversión canadiense.

Pero, de acuerdo con el mantra de la política exterior canadiense, el involucramiento político y económico con Honduras es esencial para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Aquí tenemos la teoría de la cascada traspasada a los derechos humanos, utilizada para defender la búsqueda de ganancias por parte de las compañías canadienses y las alianzas con gobiernos reaccionarios. Aliarse con el gobierno de Honduras y generar oportunidades de hacer negocios para las compañías canadienses no es oportunismo puro y duro; es, según ellos, una política altruista. El aumento inevitable en el nivel de vida que llegará con la inversión canadiense generará mejoras a los derechos humanos, puesto que —se desprende de lo anterior— una población con un estándar de vida más alto es más educada y exigirá más y mejores derechos. Por tanto, Reeder podía decirle al Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento, expresando con toda honestidad la posición de la Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT), que "el aislamiento sólo lastimará a la población más vulnerable", y que por tanto Canadá debía "trabajar con el gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos" antes que "negarle al pueblo hondureño la oportunidad de beneficiarse de un acuerdo de libre comercio con nosotros" (SCFAID, 2011e). La idea implícita en la formulación de Reeder es que la posición contraria —impedirle a las compañías canadienses hacer lo que quieran y aislar al régimen de

Lobo— sólo deteriorará todavía más la crisis de derechos humanos. Con un toque de *laissez faire*, Canadá pone de cabeza la idea de que proporcionarle apoyo político y estimular el desarrollo económico en un país cuya población sufre de persecución política, sólo reforzará esa persecución.

La posición de Reeder es claramente absurda. Honduras ha sido el centro de atención de la política exterior canadiense en la región desde por lo menos el golpe, y nuevos desarrollos maquiladores y turísticos fueron anunciados desde antes que se firmara el TLC. Cualquier análisis honesto de la situación de derechos humanos debe aceptar que estos se han deteriorado, especialmente en lo que concierne a los activistas y las fuerzas de oposición. El gobierno de Lobo ha hecho poco o nada para cambiar esto. Los asesinatos continuaron después del pronunciamiento de Reeder y de que se anunciara el TLC, pero Canadá se ha mantenido en silencio. Un silencio que se mantuvo también cuando la Suprema Corte hondureña, criticada por las organizaciones de derechos humanos por su apoyo al golpe, limpió de cargos a seis generales del ejército acusados participar en él (*The Associated Press*, 21/10/2011). La idea de que la inversión canadiense y una estrecha cooperación política mejorarán la situación es un cuento de hadas que ni Reeder ni Harper podían creerse.

Etnografía de la oposición

Una consecuencia inesperada de la ruptura del orden constitucional en Honduras ha sido la emergencia de una oposición popular poderosa, definida por una ideología y una práctica mucho más cercanas a las mejores tradiciones revolucionarias latinoamericanas de lo que había sido durante la historia reciente de la izquierda hondureña (Rojas Bolaños, 2010: 111; Sáenz, 2009: 139-145; Sáenz, 2009: 147-154). La resistencia empezó casi inmediatamente. Cuando Micheletti celebraba triunfalmente su llegada a la presidencia, en el resto de la capital y a través del país, una erupción de las clases populares —dirigida por

maestros, obreros, estudiantes, comunidades indígenas, campesinos, ambientalistas, organizaciones de mujeres y otros— tomaba fuerza y esquivaba los primeros embates de la represión. Tegucigalpa se llenó de barricadas, las carreteras fueron bloqueadas y las calles inundadas de llantas encendidas cuando la gente enfrentó a la policía y a los militares. Tegucigalpa se llenó de grafitis. En uno de ellos se leía: "Pinocheletti" (Borón, 2009; Cuevas y Weissert, 2009).

"Quieren echar a Zelaya, cueste lo que cueste", dijo el líder campesino Rafael Alegría, "pero todo lo que han logrado fue hacernos ver como un país de salvajes, donde no se respetan las reglas democráticas. ¿O sabes de otro lugar en el que una encuesta haya provocado un golpe de Estado?" (Cano, 2009). Entre el 28 de junio y el 29 de noviembre, cuando las elecciones consolidaron el golpe, hubo unos 150 días de resistencia, que llegaron a su cenit el 5 de julio —cuando Zelaya intentó volver del exilio en avión— y el 15 de septiembre, cuando el Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) organizó una marcha paralela y mostró su músculo en abierta confrontación con las celebraciones oficiales del Día de la Independencia (Cálix, 2010: 44).

El núcleo del FNRP estaba constituido por distintos sectores del movimiento obrero, especialmente maestros, trabajadores bananeros, trabajadores del sector público y obreros de plantas embotelladoras, pero también logró incorporar a un amplio espectro de movimientos sociales, incluyendo campesinos, mujeres, medios alternativos de comunicación, indígenas y afroindígenas, y activistas LGBT, entre otros (Frank, 2010). Los movimientos sociales y los sindicatos enviaron representantes para formar parte de los organismos coordinadores centrales del Frente. En lugar de limitarse a exigir el regreso de Zelaya, el FNRP llamó a la formación de una Asamblea Constituyente para refundar el país sobre la base de la justicia social y la igualdad. En términos ideológicos, debido a su confianza en la acción directa de las masas, el FNRP representaba a una izquierda cada vez más radical, algo no visto en mucho tiempo en el panorama hondureño.

Fuimos testigos de este espíritu de resistencia en las calles de Tegucigalpa el 27 de enero de 2010, el día de la ceremonia de posesión de Lobo. Era claro que la gente no iba a permitir que el paso de la batuta de Micheletti a Lobo implicara un regreso a lo mismo de siempre, a la farsa de la normalidad democrática. A pesar de los francotiradores en los techos de los edificios y de los cientos de militares y policías con armas automáticas en cada calle, era obvio que la población tenía menos que temer que el propio Lobo. Se volvieron famosas las camisetas con el eslogan: "Nos tienen miedo porque no tenemos miedo".

El periodista de Radio Globo, Félix Molina, nos dijo en la víspera de la asunción de Lobo, que Honduras entraba en la cuarta etapa del golpe. La primera era la de la preparación y la ejecución. La segunda, juntar fuerzas en casa y entre la comunidad internacional en torno al Acuerdo Tegucigalpa-San José. La tercera fue implementar el Acuerdo. Una semana antes de la asunción, la cuarta había empezado a cristalizar. La capital estaba cubierta de posters celebrando la llegada de un nuevo gobierno de "unidad nacional". "Esta cuarta etapa", afirmó Molina, "consiste en construir una cierta normalidad, supuestamente a través de la paz y la reconciliación. Se trata de vender un supuesto proyecto de integración nacional. En esencia, el objetivo es decir que aquí no pasó nada, que los golpes de Estado pueden ser un modo democrático de corregir a los gobiernos que se salen de la senda. El punto de este cuarto momento es legalizar el golpe". Tan pronto la propaganda estatal había cubierto las calles con su mensaje de calma y consenso, los artistas de la resistencia respondieron: "¡Fuera golpistas asesinos!".

Los grandes medios pintaron a Lobo como al "presidente electo", pero el FNRP lo repudió como el "vástago del golpe". Los grandes medios celebraron al gobierno de unidad nacional e integración, pero el FNRP rechazó el diálogo con el régimen de Lobo, y denunció que no era otra cosa que la última encarnación del golpe original de 2009. La guerra verbal encontró expresión material en los cientos de miles que marcharon del centro de la capital al aeropuerto el 27 de enero.

La manifestación le rindió homenaje a Zelaya —quien había finalmente escapado tras cuatro meses de confinamiento en la embajada brasileña para irse al exilio en República Dominicana— y, al mismo tiempo, anunció que la lucha contra el régimen del golpe continuaría. Nos acercábamos a la primera columna de policías militares cuando los manifestantes corearon: "¡Estudiar, aprender, para *chepo* [policía] nunca ser!". Un grupo de niños, de no más de diez años, bailaba entre la gente, cantando por la muerte del régimen golpista. Campesinos, sindicalistas, feministas y miembros de organizaciones de izquierda caminaban hombro con hombro y coreaban consignas cuando los carros pitaban el claxon en solidaridad. Los adolescentes en un autobús escolar sacaron las cabezas por la ventana y levantaron los puños al aire:

> El pueblo ¿dónde está? ¡El pueblo está en las calles exigiendo libertad! ¿Estás cansado? ¡No! ¿Tienes miedo? ¡No! ¿Entonces? ¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!

"La resistencia tiene dos pilares", nos dijo durante la marcha Rafael Alegría, uno de los principales líderes campesinos de la resistencia. "Uno es el pilar de la movilización social. Consiste en la reivindicación de los derechos del pueblo; la resistencia acompaña a la gente en sus luchas diarias por reforma agraria, salarios justos y contra la privatización de los servicios sociales". El otro pilar, apuntó Alegría, "es el brazo político, convertirnos en una fuerza política militante que trabaje día y noche para tomar el poder en nuestro país".

Le preguntamos acerca de la Asamblea Constituyente, al tiempo que la gente alrededor nuestro coreaba:

> "¿Qué somos? ¡Resistencia popular! ¿Qué queremos?: ¡Constituyente!".

"El poder popular —nos aseguró Alegría— provocará grandes transformaciones en este país. Estamos pidiendo una Asamblea Constituyente que hará de este país una democracia participativa. Será

una nueva Honduras, un país con justicia social, con igualdad, con un nuevo modelo de desarrollo en el que todos estén incluidos para que, como dicen los bolivianos, todos puedan vivir bien". Alegría contrasta su visión con la "situación actual, en la que hay una oligarquía privilegiada, dueña y en control de todo, y del otro lado las masa empobrecidas. Esto no puede seguir así".

Dos días antes, en un encuentro de la resistencia fuera de la embajada brasileña para celebrar el Día de la Mujer, nos encontramos con Brenda Villacorta, de Feministas en Resistencia, quien expresó ideas similares. "El que Lobo sea presidente no quiere decir nada. Es la continuación, la perpetuación del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Los actores han cambiado pero el guión es el mismo". Los manifestantes del 27 de enero estaban de acuerdo: "¡No existe Presidente!, ¡sí a la Constituyente!".

"La resistencia tomará las calles una y otra vez", señaló Villacorta. "Es la única manera de presionar, o por lo menos la más efectiva. El camino hasta llegar a una Asamblea Constituyente es largo", estimaba, pero valía la pena. "La vieja Constitución fue establecida por una dictadura militar, y no beneficia al pueblo hondureño, al auténtico pueblo hondureño. Sólo le sirve a los empresarios y los grandes grupos de poder".

Para la resistencia hondureña, Lobo no expresaba el final del golpe, sino su consolidación bajo la cubierta de la legitimidad democrática. El día en que llegó a la presidencia, Lobo ya había declarado una emergencia financiera y había anunciado más medidas de austeridad fiscal. La ley de amnistía para los protagonistas del golpe y el otorgamiento de concesiones mineras apuntaban a la consolidación de un giro a la derecha en la política interna y económica, cuyo objetivo era echar para atrás las modestas reformas implementadas por Zelaya. El asalto venidero sobre las clases populares, enmarcado en una profunda recesión exacerbada por los golpistas y en la continua represión e intimidación, representaba un desafío peligroso para el futuro de la resistencia. Sin embargo, si el 27 de enero reveló algo, eso era que

había dos Honduras. El campo de "Pepe" Lobo y los imperialistas, por un lado, y una hidra de muchas cabezas de explotados y oprimidos, por el otro. Si las masas no habían juntado suficientes fuerzas para echar a Lobo al basurero de la historia, por lo menos sí habían demostrado que no se arredrarían ante una minúscula minoría, incluso si ésta estaba armada hasta los dientes.

Pero a pesar de la heroica resistencia, la correlación de fuerzas interna y externa siguió favoreciendo la consolidación del golpe. Para entender las motivaciones subyacentes de los capitalistas, diplomáticos y políticos canadienses dentro de la escena postgolpe en Honduras, en las siguientes páginas volcaremos nuestro análisis hacia las bases materiales de sus intereses: minería, maquilas y turismo. Estudiaremos también los principales desarrollos económicos en los que actores canadienses han jugado un rol central, como el recientemente mejorado acuerdo de libre comercio entre Honduras y Canadá.

El capital canadiense en Honduras

Como señalamos, la administración de Zelaya implicó una modesta ruptura con la *doxa* económica neoliberal, pero los gobiernos del golpe —el de Micheletti y el de Lobo— se hicieron cargo de que ésta volviera con energías renovadas. No hay mejor muestra del compromiso de Lobo con el gran capital que la convención de inversionistas que tuvo lugar en Trujillo en mayo de 2011 bajo el título "Honduras is Open for Business" (Honduras está abierta a la inversión) y con este eslogan: "Un momento de cambio, un horizonte de oportunidades". Durante la convención, a la que asistieron muchos inversionistas canadienses, se publicó el documento oficial "Honduras: Un país abierto a la inversión" (Gobierno de Unidad Nacional de Honduras, 2011). Este texto explica que se está discutiendo la legislación específica para facilitar la implementación de las varias facetas de los dos grandes planes de desarrollo: "Visión de país (2010-38)" y el "Plan de la Nación (2010-22)". El principal objetivo de ambos es atraer inversión extranjera directa

hacia seis áreas en las cuales el gobierno de Lobo cree que Honduras disfruta de ventajas competitivas: infraestructura, energía renovable, turismo, el agronegocio, silvicultura y textiles, y servicios de negocios y electrónicos (Gobierno de Unidad Nacional de Honduras, *op, cit*.: 1).

Estas eran buenas señales para el capital canadiense y extranjero, que llevaron al embajador Cameron Mackay a expresar, en una efusiva columna en uno de los principales diarios hondureños, cuán "complacida" estaba Canadá "de ver a Honduras bajo el liderato del presidente Porfirio Lobo" (Mackay, 2011). El nuevo modelo económico ha podido ser implementado a pesar de la resistencia popular gracias a la impunidad con la que el Estado y sus fuerzas militares han cometido abusos sistemáticos a los derechos humanos de la población. La respuesta del Estado canadiense a estas violaciones ha sido paralela a su reciente posición acerca de la democracia en Honduras.

El capital canadiense tiene una gran influencia sobre varios sectores de la economía hondureña, y seguirá creciendo durante los siguientes años. De acuerdo al embajador Mackay, hacia el verano de 2011 Canadá tenía más de 750 millones CAD invertidos en Honduras —un salto considerable comparado con los 105 millones CAD de 2007 (el último año previo al golpe para el cual hay estadísticas) (*La Prensa*, 08/07/2011; BEA; s/f b; Bank of Canada, s/f)[56]. Los tres principales sectores son la minería, la maquila y el turismo. La creciente influencia del capital canadiense no ha sido aceptada con los brazos abiertos por los trabajadores hondureños, o por las comunidades afectadas por los costos ambientales y sociales de la minería y el turismo. Antes del golpe, esas comunidades ya se habían organizado contra las compañías canadienses, pero las cosas se han puesto mucho peor.

56 En aras de la comparación: la IED de Estados Unidos en 2010 fue de 1.058 mil millones CAD, con una tasa de cambio promedio de 1,03 CAD por cada dólar americano. Los lectores también deben tener en cuenta, al considerar esta comparación, que la economía estadounidense es aproximadamente diez veces el tamaño de la de Canadá. En otras palabras, Canadá tiene una inversión extranjera relativa más alta que la estadounidense. Ver las estadísticas del Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce (BEA, s/f b) y del Bank of Canada (Bank of Canada, s/f).

Las experiencias de los obreros de la maquila y de las comunidades afectadas por la minería y el turismo ofrecen una imagen clara y perturbadora de las implicaciones del golpe y de la expansión del capital canadiense en el país.

La minería

Los conflictos en torno a la minería han sido una característica central de la vida política hondureña desde finales de los años noventa, cuando se votó una nueva ley minera y las compañías canadienses empezaron a invertir. Como resultado, a pesar de que Goldcorp logró poner en operación su mina de cielo abierto San Martín, la industria ha sido generalmente inestable.

Pedro Landa es un dirigente ambientalista con una larga experiencia en la industria minera. Hablamos con él durante más de una hora en su oficina en Tegucigalpa a finales de junio de 2011. Según Landa, las mineras canadienses, que son ya las compañías más grandes que operan en Honduras, han sugerido que podrían invertir entre 700 y mil millones CAD durante los siguientes años si se aprueba una nueva ley para garantizar la seguridad de sus inversiones[57]. El dirigente señaló que la mayoría de las más de 160 concesiones de exploración en espera de aprobación para continuar con los trabajos son propiedad de compañías canadienses.

Sin embargo, la exploración minera se empezó a estancar desde antes de la elección de Zelaya. Las compañías y la ley minera han sido desde hace años el blanco de la crítica de movimientos sociales y de comunidades afectadas por estas actividades. Para dar un par de ejemplos: un ejecutivo de la corporación canadiense Maverick se quejó de la oposición de las comunidades a las actividades de la empresa, refiriéndose a los manifestantes como un "eco-cáncer"; el gigante minero Goldcorp, a su vez, fue también blanco de una muy fuerte y radical oposición de la comunidad (que discutiremos en un momento)

57 Entrevista de los autores con Pedro Landa (Tegucigalpa, 24 de junio de 2011).

(Buncome, 2006)[58]. La ley minera que regía cuando Zelaya llegó a la presidencia había sido implementada tras la devastación del huracán Mitch en 1998, bajo la presión del FMI y del BID, como parte de sus esfuerzos para que los países latinoamericanos abrieran sus industrias de recursos naturales a la inversión extranjera. Este desastre natural y su terrible impacto económico fue utilizado como pretexto para aprobar una ley casi sin debate público —una ley que desde el principio fue vista como beneficiosa para las compañías antes que para las comunidades aledañas a las minas— (Development and Peace, 2007; Ludeña, 2011). El gobierno de Zelaya inicialmente le dio espacio a la industria para que propusiera reformas a la ley, pero cuando ésta no mostró interés en hacerlo, y ante la persistente preocupación pública sobre el tema, decidió proponer una nueva ley en abril de 2009. Dicha ley hubiera prohibido las minas a cielo abierto y el uso de metales pesados como el cianuro para el refinamiento, una propuesta que no le causó ninguna gracia a los magnates mineros.

El gobierno de Zeleya rechazó también el plan de clausura de actividades del gigante Goldcorp en la mina San Martín, que había sido criticado por la comunidad por no limpiar el sistema acuífero de las toxinas emanadas de las actividades extractivas (Development and Peace, 2007; Bird, 2011). La tensión iba en aumento y la industria estaba en un limbo. Pero la propuesta de Zelaya de hacer una nueva ley nunca vio la luz del día. El golpe, y la represión que le siguió, cambiaron la correlación de fuerzas entre el capital y los movimientos sociales. Pero esto no se tradujo inmediatamente en una nueva ley. Pedro Landa cree que la industria minera y sus representantes políticos decidieron ser muy cuidadosos con este tema, a sabiendas de que la minería a cielo abierto seguía siendo un asunto sensible en el país (incluyendo a varios miembros del parlamento), entre otras cosas porque la industria

58 El ejecutivo la corporación canadiense Maverick fue citado en Kosich (2004). Para tratar el tema, los autores entrevistaron a Carlos Amador, Roger Escober y Reina Gamero, activistas de la comunidad (Tegucigalpa, 17 de junio de 2011).

había sido identificada públicamente, tanto en Honduras como en el extranjero, como una aliada clara del golpe[59].

Canadá tenía la mira puesta en una nueva ley minera favorable a las compañías. Un año antes del golpe, de hecho, el ministro canadiense de Cooperación Internacional, Bev Oda, se reunió con representantes de una de las compañías más involucradas en Honduras, Yamana Gold, quienes le compartieron su frustración con la legislación minera y con el creciente sentimiento antiminería reinante en el país (Office of the Embassy, 2008). El gobierno canadiense no tenía fe en que Zelaya fuera a interesarse en los problemas del capital canadiense. Por el contrario, el gobierno de Lobo, abiertamente a favor de la inversión extranjera y efusivo con el gobierno de Harper, era visto como un interlocutor de confianza. Landa también resaltó la influencia de la industria minera en la política doméstica después del golpe. Señala que representantes de la industria de la Asociación Nacional de Minería Metálica en Honduras (Anaminh) sirvieron como consejeros del gobierno Micheletti y posteriormente formaron parte de una comisión minera bajo Lobo. La comisión fue clave para la redacción de la nueva ley que sería aceptada por el Congreso en 2012[60]. El ambiente político general en la Honduras postgolpe le generó suficiente confianza a la industria y al gobierno canadiense acerca de las posibilidades de un renacimiento de la minería en el país.

Se puede percibir bien este sentimiento en un reporte sobre las relaciones comerciales con Honduras escrito por la sección de América Latina y el Caribe del despacho de Relaciones Exteriores y Comercio

59 Entrevista de los autores con Pedro Landa (Tegucigalpa, 24 de junio del 2011). Los críticos de Goldcorp afirmaron en julio de 2009 que la compañía le pagó a varios extrabajadores y a gente de la ciudad para que asistiera a las manifestaciones pro golpe en la capital (Rights Action, 2009a).

60 La conexión entre las mineras y el golpe aparentemente inspiró una "turba" antigolpe que, de acuerdo con la carta que un ejecutivo de Goldcorp le envió al Embajador y al director de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) en Honduras, atacó las oficinas de la compañía durante una manifestación en agosto de 2009. Las personas llenaron de grafitis las paredes y apedrearon las ventanas (Villacorta, 2009).

Internacional (FAIT): "Tomando en cuenta la apertura del nuevo gobierno [hondureño] hacia la inversión extranjera y el deseo de establecer regulaciones claras para el sector extractivo, esperamos presenciar un interés renovado en invertir en Honduras por parte de la comunidad minera canadiense" (Wimmer, 2010a). De hecho, de acuerdo con Landa, se aprobaron 168 licencias de exploración antes de que se votara la nueva ley, la mayoría de ellas para empresas canadienses[61].

Tras la elección de Lobo en noviembre de 2009, los funcionarios canadienses pusieron manos a la obra. En su primera visita tras la asunción, el ya mencionado ministro de Estado para las Américas Peter Kent se reunió con representantes de la industria minera canadiense y con distintos líderes políticos hondureños. La Embajada le prometió a la industria que trabajaría para ellos y que organizaría encuentros con los principales políticos, para sacar partido de los intentos por debilitar a Zelaya y apoyar al aislado régimen de Lobo. A finales de mayo de 2010, por ejemplo, el embajador Reeder y el jefe de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) Daniel Arsenault acompañaron a los ejecutivos de las compañías canadienses de Breakwater Resources y Aura Minerales a hacer "llamadas de alto nivel" a varios políticos hondureños, incluyendo al presidente del Congreso, el conservador Juan Hernández, al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Canahuati, al ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Rigobierto Cuéllar Cruz, y al propio presidente Lobo, para "ayudarlos a cumplir con sus objetivos comerciales en Honduras". Arsenault reporta muy campante que Hernández "mostró simpatía hacia Canadá y hacia nuestra postura sobre las inversiones en el país", mientras que Lobo y sus ministros "querían estimular una mayor inversión extranjera en Honduras como un modo de crear empleos". Los funcionarios canadienses tenían un claro objetivo, y al notar apertura por parte de los hondureños, no ganaban nada con darle vueltas al asunto. Arsenault escribe: "Ayudamos en las discusiones entre el sector privado y el gobierno para

61 Entrevista de los autores con Pedro Landa (Tegucigalpa, 24 de junio de 2011.

promover un código minero que le diera claridad y certeza a nuestras inversiones" (Aresnault, 2010a).

"El mensaje de los inversionistas canadienses", señaló Reeder en un comunicado acerca de la reunión, "era que nosotros [sic] estábamos dispuestos a considerar nuevas inversiones mineras en el país. El presidente Lobo y su ministro de minería habían presentado públicamente esta visita como una muestra de apoyo" (Reeder, 2010b). Y ese apoyo sería premiado. "Parece haber", reportó Arsenault, "una apertura política en Honduras para avanzar en las discusiones acerca de un amplio código de minería". Por supuesto, en el Reporte de Coyuntura (*Situational Report*) del que tomamos estas citas no se menciona el tema directamente, pero es suficientemente claro para cualquier diplomático o funcionario involucrado que esa "apertura política" es una consecuencia directa de un golpe militar y de la sangrienta represión. El Reporte de Coyuntura también señala que Reeder dijo que el gobierno canadiense esperaba que las compañías mineras "se comportaran a la altura de los estándares de la responsabilidad social corporativa", un señalamiento vacío, con pocas implicaciones más allá del ejercicio de relaciones públicas que representa.

A raíz de la buena voluntad y la confianza mostrada en las reuniones, los ejecutivos de las mineras canadienses ofrecieron con la mejor de las voluntades su apoyo para redactar una nueva ley minera "comparable a las que funcionan en otras jurisdicciones". Cuando sus interlocutores hondureños aceptaron la ayuda de los ejecutivos, éstos se pusieron a buscar, a través de consultas con representantes del Banco Mundial y del FMI, a un consejero —con el que se reunieron varias veces para "asegurarnos de que compartíamos la misma ideología"— para hacerle propuestas al Congreso hondureño. Cuando Breakwater Resources contactó a la Embajada y a la delegación de la Agencia de Desarrollo Internacional en Honduras para pedirles apoyo financiero para redactar la ley, éstas respondieron que no podían abrir la chequera, pero que deberían acercarse al Centro para la Excelencia en el Instituto Canadiense para la Minería (CIM), en Montreal (un organismo

de responsabilidad social corporativa, compuesto de profesionales de la industria minera y que recibe financiamiento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, FAIT), el cual podría darle a la nueva ley un barniz de responsabilidad social[62].

Una opción sugerida por la Agencia de Desarrollo Internacional y la Embajada, era que los representantes de la industria "se hicieran cargo de los costos de la consultoría/redacción de la ley, pero que el interlocutor con el Congreso hondureño fuera el CIM [...]. Con esto, las compañías no tendrían que jugar un papel directo y el CIM podría ser presentado como el interlocutor". Otro ángulo propuesto por ellos era "usar a la FIDE [Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones], la agencia hondureña que promueve la inversión extranjera", como "el principal interlocutor con el Congreso, para permitir que un consultor redacte la ley, pero que la industria minera financie a la FIDE, a menos que la FIDE tenga sus propios recursos"[63]. La estrategia canadiense consistía en hacer que las grandes mineras financiaran la redacción de la nueva ley detrás de bambalinas.

Pero el apoyo de la Embajada a la nueva ley no se terminó ahí. Un correo redactado en marzo de 2012 por un funcionario de la misión diplomática canadiense en Honduras da a entender, sin entrar en detalles, que el apoyo de la Embajada al gobierno de Lobo comenzó desde los primerísimos días de su llegada al poder. "Dado que Honduras no ha tenido una ley minera moderna desde hace mucho, durante los últimos dos años la Embajada ha estado trabajando con el gobierno hondureño para promover una ley minera competitiva, moderna y transparente" (Wang, 2012)[64]. Los medios hondureños reportaron a principios de

62 El Instituto Canadiense para la Minería, la Metalurgia y el Petróleo, recibió 150 mil CAD de la FAIT en 2010, unos meses antes de que Reeder ofreciera sus servicios a Breakwater (CIM, s/f a).

63 Las citas y la discusión acerca de la ley minera vienen de una serie de correos electrónicos entre Bob Carreau de Breakwater Resources y la embajada canadiense, enviados entre el 11 y el 25 de mayo de 2010 (acceso a la información: Expediente A-2010-00532).

64 El funcionario añade, para no dejar pasar la oportunidad de reiterar un lugar común de los canadienses, que la ley promoverá la minería socialmente responsable.

2012, una vez que se había terminado un primer borrador de la ley, que Honduras hizo un acuerdo con los canadienses para que estos le pagaran a un consultor que se asegurara de que "la experiencia de Canadá estuviera también reflejada en la ley"[65].

Entre septiembre y noviembre de 2010, se estableció una comisión parlamentaria para empezar a discutir una nueva ley minera (*El Heraldo*, 31/05/2011). Inicialmente, la comisión proyectó la imagen de que buscaba la perspectiva de distintos actores hondureños, incluyendo a los ambientalistas. Algunos grupos ecologistas inicialmente aceptaron participar, pero eventualmente se retiraron luego de darse cuenta de que sus críticas a la minería a cielo abierto estaban siendo ignoradas. La comisión terminó su trabajo y la versión final de la ley fue presentada ante el Congreso a principios de 2012, sin consultar a nadie que no fuera del Congreso o de la propia industria (*La Tribuna*, 04/01/2012).

De acuerdo con varias organizaciones sociales y de derechos humanos que emitieron un comunicado conjunto cuando la ley fue publicada en enero, ésta ignoraba las críticas de los ambientalistas y las comunidades contra de la industria: permite la minería a cielo abierto; no protege el acceso al agua limpia de las comunidades cercanas a los desarrollos; tiene vacíos que permiten que las compañías paguen menos impuestos; reduce los requerimientos para la entrega de concesiones; restringe el acceso público a la información acerca de las actividades y los planes de las mineras; no se asegura de que las comunidades sean consultadas, pues sólo se requiere hacer la consulta para empezar la producción y no para la exploración; y se compromete a darle salida a los proyectos de exploración congelados por la moratoria de Zelaya (Mining Watch, 2012b). En otras palabras, la ley establece un ambiente extremadamente favorable para el capital canadiense e internacional, y al hacer esto inevitablemente provoca la agudización del conflicto social.

65 La cita es de *El Heraldo* y está en Moore (2012).

La historia reciente de Goldcorp es un buen ejemplo del impacto de la gran minería industrial en el campo hondureño. La mina San Martín, en el Valle de Siria, era operada por la subsidiaria de Goldcorp, Entremares, y estuvo activa entre 2000 y 2007. Desde el primer día fue resistida por la población. Los activistas del Comité por la Defensa del Valle de Siria acusaron a Goldcorp de contaminar el sistema acuífero y envenenar a los habitantes. Señalaron la deforestación, la construcción de carreteras y el acaparamiento del agua en detrimento de los pequeños campesinos (la mina necesitaba entre 757 y 1.211 litros de agua por minuto para extraer el oro) y por tanto la destrucción de la seguridad alimentaria para el campesinado de la región[66]. Golcorp y el gobierno hondureño niegan que San Martín haya dañado el ambiente o la salud de la gente del valle, pero un estudio científico que analizó el agua usada para consumo humano en dos de las comunidades del Valle de Siria mostró que los niveles de arsénico, plomo y cromo hexavalente estaban muy por encima de los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud (Bianchini, 2006). El mismo estudio encontró altos niveles de arsénico y plomo en la sangre de diez personas a las que se les tomaron muestras.

Presionado por la campaña internacional contra Goldcorp impulsada por el Comité de Defensa, el ministerio hondureño del Medioambiente hizo su propio estudio de sangre y orina a 62 personas en 2007, y Goldcorp contrató a un analista médico y a un antiguo fiscal especial para el medioambiente para supervisar el proceso. Sin embargo, el Ministerio del Medioambiente y Goldcorp decidieron no publicar los resultados durante los siguientes cuatro años. En abril de 2011, los resultados de las pruebas de arsénico, mercurio y plomo en la sangre —pero no en la orina— fueron publicados: 46 de las 62 personas tenían "niveles peligrosamente altos de metales pesados envenenando su sangre, y por lo tanto requerían un tratamiento médico sostenido

66 Entrevista de los autores con Carlos Amador, Roger Escober y Reina Gamero (Tegucigalpa, 17 de junio de 2011).

desde el año 2007" (Spring y Russell, 2011). Otros estudios clínicos del doctor Juan Almendarez, en Tegucigalpa, "han revelado pérdida de cabello y serios problemas cutáneos, así como en las vías respiratorias y los ojos —los cuales pueden ser atribuidos a la contaminación por metales pesados nocivos para la salud de las generaciones presentes y futuras—" (Almendarez, 2011).

Los activistas locales reportan que los representantes del gobierno hondureño visitaron los domicilios de los 62 individuos a los que se les hicieron pruebas y les ofrecieron llevarlos a un hospital en Tegucigalpa si firmaban un acuerdo de confidencialidad (Spring y Russell, 2011). Los exámenes clínicos revelaron "hiperpigmentación, problemas de coordinación y la sensación de hormigueo", que Almendarez afirma son "indicativos de envenenamiento crónico con arsénico y plomo".

El Estado hondureño continuó subestimando la amplitud del problema y se negó a buscar un modo de compensación para las víctimas, mientras que Goldcorp simplemente negó todo. De hecho, parece que Goldcorp y el Estado hondureño sabían perfectamente lo que sucedía, y desde por lo menos 2007 intentaron esconder información acerca de los problemas de salud creados por las fugas de cianuro de la mina a cielo abierto: la concesión minera de San Martín contenía una cláusula que permitía la cancelación del proyecto si se dañaba la calidad del agua o del aire, o a la ecología nacional. Pero el Comité por la Defensa del Valle de Siria siguió presionando al gobierno —señalando el ganado muerto y el alto grado de pérdida de cabello, comezón cutánea y abortos inesperados en la comunidad—, lo que atrajo atención internacional a la lucha contra Goldcorp.

El envenenamiento difícilmente se detendrá con la simple clausura de la mina, que tuvo lugar en 2008. De acuerdo con Paul Younger, un profesor de ingeniería geoquímica en la Universidad de Newcastle en Inglaterra que estudió el plan de clausura de 2008, la filtración de ácidos había causado contaminación por metales pesados cuyos efectos se harán sentir durante más de un siglo. Otro estudio posterior realizado por los colegas de Younger en Newcastle, Adam Jarvis

y Jaime Amezaga, "encontró evidencia de contaminación 'severa' en el agua, pues está altamente acidificada y repleta de metales, y fluye directamente hacia un arroyo de uso doméstico y agrícola" (Carrol, 2009). Todos estos hechos, en conjunto, demuestran que la promoción de la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte del gobierno canadiense es poco más que vil propaganda. El gobierno canadiense no ha criticado públicamente a Goldcorp por esta tragedia, su silencio ha sido sepulcral. Tampoco ha considerado necesario ayudar a las comunidades que sufren de los efectos de la exposición al plomo, arsénico y de la contaminación de sus sistemas acuíferos.

Otro ejemplo del conflicto social generado por las actividades de Goldcorp es la orden de arresto emitida el 5 de julio de 2011 contra seis activistas del Valle de Siria que habían participado en bloqueos carreteros para impedir el paso de taladores al municipio de El Porvenir, que los activistas decían que ha había sido propiedad comunal desde finales del siglo XIX. Los activistas fueron acusados de amenazar de muerte a un terrateniente. Los arrestos están vinculados con la oposición a la minera, que los activistas afirman está aliada con una rica familia local que obtuvo la tierra por medios fraudulentos. Se dice que la familia piensa talar todo el terreno, para lo cual ha recibido el permiso del Estado hondureño. Para la Goldcorp será posteriormente más fácil conseguir el permiso ambiental para explotar la mina si el terreno en el que operaría había sido previamente desbrozado. Los activistas obtuvieron la libertad condicional posteriormente, pero tendrán que enfrentar un proceso por esas acusaciones (Bird, 2011).

Goldcorp no es la única minera canadiense que enfrenta críticas por su terrible comportamiento ambiental. Otro caso es el de la mina San Andrés, de la compañía Aura Minerals, en el municipio de La Unión. Aura Minerals es la tercera compañía canadiense dueña de esa mina desde la mitad de los años noventa, y recibe financiamiento del Plan Canadiense de Pensiones. La comunidad acusa a la mina de contaminar el agua, luego de dos derrames de cianuro que obligaron a reubicar a muchos pobladores. La comunidad también acusa a la

compañía de no haber entregado nunca la compensación prometida para cubrir los costos al desplazamiento de la gente. Las personas que se tuvieron que reubicar y salir de la comunidad de San Andrés a causa de uno de los predecesores de Aura, Greenstone Resources, dicen que nunca recibieron la tierra ni el pago prometidos por Greenstone, y que Aura sigue ignorándolos. Aura busca expandir sus operaciones a la comunidad original de San Andrés, lo que incluye extender la mina al cementerio (Spring, 2010). En noviembre de 2011, tres periodistas de Multivisión en Santa Rosa de Copán, en el occidente hondureño, acusaron al representante de Aura Minerals de amenazarlos luego de que cuestionaron las prácticas de la compañía. En realidad, las amenazas venían de otro periodista que trabajaba en el departamento de relaciones públicas de la empresa (Comité por la Libertad de Expresión, 2011).

Maquilas

La corporación de Montreal, Gildan Activewear, el mayor productor mundial de calcetines y uno de los principales fabricantes de camisetas, es la principal empleadora en el sector privado en Honduras. A principios de febrero de 2011, cuando las negociaciones sobre el TLC estaban ya bien avanzadas, Gildan anunció que cerraría su última fábrica en Alabama, Estados Unidos, y que invertiría más de cien millones de dólares en una nueva fábrica de calcetines en Honduras. El emporio actualmente tiene seis fábricas en el país (casi la mitad de su total global). En 2011, la compañía abrió una casa matriz en Honduras (Marotte, 2011). Aunque el tratado de comercio no había sido firmado cuando anunció la inversión, Gildan tenía total confianza en que su aprobación era sólo cuestión de tiempo, pues se había reunido siete veces con políticos canadienses y representantes de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) entre junio de 2010 y enero de 2011, reuniones que fueron registradas por la Oficina del Comisionado de Lobbying en Ottawa y puestas bajo la etiqueta de "Comercio Internacional". (El registro oficial, hay que señalarlo, no toma en cuenta

reuniones informales y comunicaciones entre las compañías y los funcionarios, que no son poco frecuentes).

A mediados de junio de 2011, nos encontramos en San Pedro Sula con María Luisa Regalado, una de las dirigentes del Colectivo de Mujeres de Honduras (Codemuh). Había estado trabajando con las obreras (notablemente mayoritarias) de Gildan desde 2006, recopilando testimonios sobre las condiciones de trabajo y sobre distintos tipos de agravios, y ayudando a coordinar el apoyo legal a las luchas de los trabajadores. Durante la entrevista, Regalado nos contó que había más de 500 expedientes médicos de trabajadores con enfermedades relacionadas con el ritmo laboral. Los obreros sufren sistemáticamente de problemas en su estructura ósea debido a la prolongada distorsión de sus cuerpos causada por la permanente inclinación sobre las máquinas en la línea de producción. También padecen de heridas como hernias, problemas de la vista y daño en los tendones y músculos. La Codemuh ha defendido a mujeres lastimadas en las maquilas de Gildan que ya no pueden seguir trabajando. Según Regalado, Gildan se negó a buscarles otros espacios de trabajo en la fábrica o a ofrecerles cualquier tipo de ayuda. La presión pública, organizada por la Codemuh y otras organizaciones, generó que tras una serie de negociaciones facilitadas por el Ministerio del Trabajo, Gildan tuviera que aceptar reubicar a esas trabajadoras y llevar a cabo un estudio ergonómico, pero nunca cumplió con sus compromisos. En un país en el cual no existe ningún tipo de seguridad social ni salud pública, es imposible cuantificar la dimensión de los problemas sufridos por los trabajadores lastimados en las maquilas Gildan.

Es común que las obreras sufran de lesiones simultáneas en la espalda y en ambos brazos. No es ninguna sorpresa que esto suceda cuando, de acuerdo a Regalado, a menudo las jornadas de trabajo exceden las 11,5 horas, y los obreros tienen que trabajar seis o hasta siete días a la semana si sus turnos cambian del horario diurno al nocturno, y viceversa. “Gildan es una de las compañías más explotadoras en el país”, nos dijo Regalado, “y uno de los peores violadores

de los derechos humanos de los trabajadores; podemos decir esto con confianza porque hemos documentado los casos; también tenemos los testimonios de los propios trabajadores". Pero, según ella, "las prácticas de Gildan y de otras maquiladoras se han hecho peores a raíz del golpe de Estado de 2009"[67]. La correlación de fuerzas entre la empresa y sus empleados cambió a favor de la corporación tras el golpe. Aunque Gildan es consciente de la atención internacional que el trabajo de difusión llevado a cabo por grupos como la Codemuh ha convocado la atención de agencias internacionales de supervisión de las maquiladoras, Regalado afirma que la empresa canadiense está más envalentonada que antes.

En su intervención ante el Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional (SCFAID), Regalado reforzó lo que dijimos antes sobre Gildan. "La compañía viola el código de trabajo", dijo. El máximo horario semanal es de 44 horas, pero ahí "trabajan hasta 69 horas a la semana", sin aire acondicionado y "con 15 minutos para comer, si bien les va". Peter Goldring, del Partido Conservador canadiense, ninguneó la larga experiencia de Regalado con las mujeres en el sector maquilador, y describió su relato como "una hipérbole" (SCFAID, 2011f).

La Codemuh le escribió una carta abierta a Stephen Harper cuando éste visitó Honduras en agosto de 2011. Harper fue a una de las plantas de Gildan durante esa visita. La carta decía: "Gildan Activewear viola la Constitución de la República Hondureña y la legislación laboral, al implementar larguísimas jornadas y un sistema de cuotas de producción inalcanzables". En seguida resaltaba "las prácticas antisindicales y antiorganización" de la compañía, y llamaba la atención sobre el hecho de que

> sus cuotas y objetivos de producción son lo más altos en la industria en todo el país. Para ganar 89,99 dólares americanos a la semana,

67 Entrevista de los autores con María Luisa Regalado (San Pedro Sula, 18 de junio de 2011).

> los trabajadores tienen que producir 550 docenas de piezas al día, y están expuestos a posturas incómodas, en las que tienen que ejecutar diariamente hasta 40 mil movimientos repetitivos, que dañan sus articulaciones, tendones y sus músculos. Muchos empleados sufren de lesiones ocupacionales músculo-esqueléticas.

La carta rechaza la idea, generada por la oficina de relaciones públicas de Gildan, de que la compañía contribuye al desarrollo humano del país. "Gildan está exenta del pago de impuestos", dice la carta, "así que es absurdo que una compañía con un nivel de explotación tan alto sea aplaudida como una de las 50 mejores corporaciones canadienses y una de las 20 más responsables". En conclusión: "Empleos sí, pero con dignidad" (Codemuh, 2011).

Turismo

Uno de los proyectos canadienses más grandes en desarrollo en Honduras es un complejo turístico del magnate Randy Jorgenson (fundador de la cadena de pornografía *Adult Video*). Este proyecto, que incluirá un muelle de 15 millones de dólares para cruceros de todo el mundo, es construido por su compañía Life Vision en la ciudad norteña de Trujillo, en tierra del pueblo Garífuna. Los Garífuna son una comunidad afro-indígena que se dispersó a lo largo de la costa centroamericana hace más de dos siglos después de que los británicos los expulsaran de la isla caribeña de San Vicente. El proyecto incluye un amplio desarrollo inmobiliario para los turistas que quieran hacerse de una casa en la costa atlántica (*La Prensa*, 07/03/2011). Una reseña del proyecto para la revista *Canadian Business* de junio de 2011 habla sin ironía de los "precios de remate", tan atractivos para los retirados que "están colonizando las costas de los países centroamericanos y caribeños" (Canadian Business, s/f).

Los permisos ambientales para los dos primeros proyectos fueron expedidos por la dictadura de Micheletti a finales de enero de 2010 (Parra, 2010), pero el apoyo declarado de Canadá al régimen

postgolpista y las relaciones del magnate Jorgenson con la familia Lobo le han traído todavía mejores resultados —Jorgenson es muy cercano al hermano de "Pepe" Lobo, Ramón—. El presidente Lobo invitó a Jorgenson a una reunión en Trujillo el 27 de noviembre de 2010, a la que también asistió Ramón (entre otros representantes del gobierno). El Presidente les ordenó a los funcionarios y al alcalde de Trujillo que empezaran la construcción del proyecto lo más rápido posible (*La Prensa*, 07/03/2011; Life Vision Properties, 2010). Durante la reunión del Concejo de Ministros en Trujillo siete meses después, en junio de 2011, Lobo reconoció las "contribuciones" que Jorgenson había hecho para la ciudad —el magnate orgullosamente exclamó que le dicen el "hijo adoptivo de Trujillo"— y prometió construir una carretera a través de las comunidades garífunas para conectar el desarrollo turístico a la ciudad (Life Vision Properties, 2010). Al Consejo de Ministros le siguió, el 8 de junio, otra reunión entre Jorgenson y Lobo en Trujillo. A ella acudieron también representantes del fondo de inversiones Canadian Shield Asset Management. Discutieron una posible inversión de dos mil millones de dólares canadienses (CAD) para construir una de las primeras "ciudades modelo" de Honduras en Trujillo, de la cual el proyecto turístico sería parte esencial.

Los activistas garífunas con los que hablamos en junio de 2011 dijeron que el proyecto está comprando ilegalmente la tierra que le pertenece a sus comunidades. En una declaración pública de condena a la visita a Honduras de Stephen Harper, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras llegó a decir que Life Vision y el Canadian Shield Fund "promueven el etnocidio contra el Pueblo Garífuna" (Copinh, 2011b).

Algunas personas de la comunidad han recibido amenazas de muerte, que creen se deben a su oposición al proyecto. El 22 de junio entrevistamos a Celso Alberto Guillén, un reconocido activista garífuna de la pequeña comunidad de Guadalupe, en las afueras de Trujillo. La gente de Guadalupe se ha opuesto al proyecto de Jorgenson. Guillén nos explicó que teme por su seguridad. Ha recibido amenazas

de muerte por parte de personas que asocia con Jorgenson. Ha sido personalmente amenazado con un arma, y alguien poco antes de que lo viéramos se acercó a su hija y le dijo que iba a balear a su padre[68].

Guillén dice que a pesar de que los derechos a la tierra de los garífunas siempre han estado amenazados, en los años noventa hubo "un proceso de redistribución de la tierra y el Estado se comprometió con las comunidades a entregarles certificados de propiedad para que pudieran tener propiedad absoluta de sus tierras", y en algunos casos, como en Guadalupe, en efecto hay certificados de propiedad. Pero el proyecto de Life Vision está haciéndose de tierras "sin el consentimiento de la comunidad". Los activistas garífunas como Guillén ven la lucha contra este proyecto como otra batalla más en una larga historia de resistencia: "Los garífuna hemos resistido durante más de 500 años contra la exclusión, la xenofobia, la marginalización y la discriminación".

El desarrollo turístico de Jorgenson quiere extenderse todavía más. Un área controversial de potencial expansión es el Parque Nacional Capiro Calentura, conocido por su biodiversidad. Junto con la Reserva Natural adyacente de la Laguna de Guiamoreto, el área cubre más de diez mil hectáreas. Las comunidades indígenas garífuna han residido en esta zona desde hace mucho tiempo, pero los pocos derechos que éstas tienen sobre la tierra han llevado a Naciones Unidas a alertar sobre el riesgo que corre esta región ante la expansión capitalista. "El idioma, la danza y la música del Pueblo Garífuna fueron añadidos a la lista de la ONU de tradiciones culturales que necesitan protección", dice el periodista de investigación Dawn Paley (2010) (Copinh, 2011b). La región —que incluye el parque y la reserva— fue declarada área protegida en 1992. En ese momento, las agencias del gobierno prometieron que establecerían fronteras definidas para el área protegida, pero nunca lo hicieron, y por tanto crearon una situación de ambigüedad legal explotada por Jorgenson hoy en día.

68 Entrevista de los autores con Celso Alberto Guillén Guadalupe (Honduras, 22 de junio de 2011).

Los dos primeros desarrollos en el área, Alta Vista y Campo del Mar, son construidos en una montaña y una playa que pertenecen al parque y a la reserva. Jorgenson dice que los terrenos fueron comprados legalmente a una familia (La Prensa, 27/04/2011), pero la verdad es que los garífuna recibieron a principios del siglo XX títulos colectivos de unos terrenos cerca de Trujillo, que incluyen las áreas en las que ahora Life Vision quiere construir. Ellos aseguran que en 2007 un exlíder local vendió la tierra ilegalmente, sin el permiso del resto de la comunidad (Paley, 2020). Los activistas de la zona tienen una radio comunitaria que visitamos en junio de 2011. Los contenidos de la emisora son críticos del desarrollo turístico. Los periodistas y los activistas que ahí conocimos son constantemente amenazados de muerte. Todo parece indicar que Jorgenson no será el único capitalista canadiense a la búsqueda de ganancias extraídas de las playas de las comunidades garífunas. Tras el éxito inicial de Life Vision y con la firma del TLC, los representantes de la compañía Transat Holiday visitaron Trujillo y anunciaron una inversión de 20 millones de dólares en la construcción del puerto para turistas (La Tribuna, 27/09/2011).

Los canadienses apostaron alto por un resultado apropiado para el capital en la minería, la maquila y el turismo. Los inversionistas tenían un interés directo en la estabilización del régimen postgolpe, buscaban asegurar las condiciones materiales de la reproducción de su capital en estos tres sectores.

La economía de la estrategia canadiense

Desde el punto de vista del capital y del Estado canadienses, el Acuerdo Tegucigalpa-San José limitaba la amenaza potencial de los movimientos sociales. Sobre esa base, los planes económicos y las estrategias de inversión podrían proceder sin problemas. Con la crisis política dejada atrás, la resistencia contenida y el hiperneoliberalismo de Lobo sobre ruedas, las perspectivas del capital canadiense en Honduras mejoraron considerablemente en comparación con el período

de Zelaya. Este era el verdadero objetivo de la política exterior canadiense hacia Honduras, y, por tanto, fue el principio que articuló su intervención en el escenario que se abrió tras el golpe.

El grueso de las energías diplomáticas canadienses se concentró en asegurarse que el gobierno de Lobo cumpliría con sus expectativas económicas. No había tiempo que perder, y al final la defensa por parte de Canadá del nuevo régimen daría sus frutos. El día después de la posesión de Lobo, Reeder y el líder de la Agencia de Desarrollo Internacional en Honduras, Daniel Arsenault, le hicieron una llamada de "cortesía" a Mario Canahuati, ministro de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno, empresario, y miembro de una de las familias más ricas de Honduras. Fue la primera llamada de un embajador a Canahuati, y fue un buen presagio de la actitud venidera, lo que le daría a Canadá la posibilidad de explotar su temprano apoyo ante una hostilidad internacional generalizada (Reeder, 2010c).

Las expresiones públicas más explícitas de la nueva diplomacia económica que siguió a la toma de posesión de Lobo fueron las visitas del ministro Peter Kent en febrero y agosto de 2010. Los objetivos de estas visitas eran terminar con el aislamiento político del nuevo gobierno, y a través de eso ayudar al capital canadiense a tener un mayor acceso al mercado hondureño. Expresar la solidaridad política de Canadá no era el único asunto en la agenda de las reuniones "de alto nivel" entre Kent, Lobo y otros políticos importantes. El Ministro de Estado canadiense y los funcionarios de la Embajada también se reunieron con representantes empresariales de Canadá. Estos viajes buscaban abrir un canal de diálogo entre el capital canadiense y la clase política hondureña, asegurando el compromiso de diversos funcionarios hondureños para "facilitar la inversión, particularmente extranjera", tal y como se lee en uno de los *Situational Reports* de la Embajada (Wimmer, 2010a; Arsenault, 2010b; Reeder, 2010a). La defensa de los intereses del capital canadiense a través del acercamiento con la clase política hondureña empezó desde mucho antes del golpe. El análisis de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional sobre Honduras,

el *Country Strategy Process*, identificaba "posicionar estratégicamente al sector privado canadiense" y aumentar "las oportunidades de negocio y la inteligencia [diplomática] para apoyar a las compañías canadienses" como un objetivo clave en el país (lo cual no es en lo absoluto algo específico a Honduras) (FAIT, 2006). Durante el golpe, los funcionarios de la Embajada y el representante de la Agencia de Desarrollo Internacional (cuya oficina está dentro de la misión diplomática) estuvieron en contacto regular con los representantes de las compañías canadienses para compartir opiniones sobre la situación política y discutir las inversiones de éstas[69].

En las oficinas de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) se dieron cuenta de que se podía aprovechar la oportunidad luego de haber apoyado negociaciones y al gobierno de Lobo, y estableció después del golpe un consejo de abogacía para las empresas canadienses compuesto por inversionistas canadienses para, citando un reporte, "facilitar el diálogo con el gobierno anfitrión"[70]. Ese "gobierno anfitrión" era la dictadura de Micheletti. El mismo reporte subraya que los funcionarios de la Embajada "están en contacto con los inversionistas canadienses en Honduras, y regularmente visitan sus instalaciones, incluyendo el sector extractivo y textil" (Wimmer, 2010a). Poco después de un mes de la asunción de Lobo, el Comisionado de Comercio de la Embajada se reunió con el ministro de Recursos Naturales y del Ambiente, Rigoberto Cuéllar. El embajador le escribió después al vicepresidente de Breakwater Resources que la reunión había sido "muy positiva" (Reeder, 2010d). Esta reunión fue parte de una estrategia de la Embajada y de la Agencia de Desarrollo Internacional para promover un mayor acercamiento entre la industria minera y el gobierno de

69 Estas reuniones fueron mencionadas en las comunicaciones entre la Embajada y Ottawa, y entre la Embajada y las compañías canadienses. Lo que es más interesante es que aunque la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) es una agencia de ayuda, y dado que la Embajada en San José, Costa Rica, es responsable por Honduras, el director de la Agencia a menudo actúa como agente de la Embajada en Honduras, lo que incluye estar en contacto y reunirse con los representantes de las mineras canadienses.

70 La cita viene de Wimmer (2010).

Lobo, con el objetivo de redactar una ley minera que se acomode a los intereses de los inversionistas canadienses (que discutiremos más tarde) (Singleton, 2010). Los funcionarios canadienses también organizaron reuniones a principios de 2010 entre Gildan y representantes del nuevo gobierno (Nombre del Autor Censurado, 2010). Al mismo tiempo, como dice Sandra Cuffe, el despacho de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (la fusión de FAIT con la Agencia de Desarrollo Internacional, CIDA, en 2013) había estado dando financiamiento en asistencia técnica —etiquetada como ayuda al desarrollo— al naciente sector de hidrocarburos hondureño (Cuffe, 2014).

Como parte del esfuerzo para generar un ambiente hospitalario a la inversión, el gobierno canadiense ha promovido desde hace tiempo lo que llama "reforma al sector público" y "disciplina fiscal", lo que generalmente quiere decir, respectivamente, privatización y austeridad (FAIT, 2006). Como parte de esta orientación, el reporte de Relaciones Exteriores previo al golpe —el denominado *Country Strategy Process* para Honduras— ya había notado cómo la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) podía jugar un rol importante en defender la causa de la reforma al sector público y en que esos "esfuerzos de asistencia al desarrollo se conviertan en el corazón de nuestra relación bilateral" (FAIT, 2009c). Desde una perspectiva similar, el Estado canadiense, a través de la Corporación Comercial Canadiense (CCC), ha ayudado silenciosamente en lo que muchos hondureños creen es la parcial privatización de una agencia estatal que recauda fondos a través de la lotería para programas de ayuda a los niños. El Patronato Nacional de la Infancia (Pani) estaba en números rojos, según el gobierno. Así que Honduras y la CCC negociaron un acuerdo financiero a través del cual la Canadian Banknote (una compañía que se especializa en productos para sistemas de lotería) inyectará 120 millones de lempiras (poco menos de seis millones de dólares) entre los años 2012 y 2016 para que el Pani le pague su deuda al gobierno hondureño y se modernice, a cambio del 45 por ciento de las futuras ganancias (*La Tribuna*, 14/10/2011a; *La Tribuna*, 14/10/2011b;

Comunicación personal con Joanna Lostracco, Canadian Commercial Communication, 9 de diciembre de 2011)[71].

Los vínculos económicos entre Canadá y Honduras no dependen exclusivamente de la inversión extranjera. Aparte de abrir las puertas del mercado local y pavimentar el camino para la explotación de los recursos naturales, los funcionarios canadienses promueven que las empresas canadienses utilicen a la muy barata fuerza de trabajo hondureña. En uno de sus comunicados a Ottawa, el embajador Reeder escribe que "la cooperación laboral parece en vías de crecimiento y Honduras se empieza a convertir en una fuente para paliar la escasez de fuerza de trabajo en Canadá" (Reeder, 2010b). El golpe permitió que Canadá metiera a Honduras en la órbita de países latinoamericanos y caribeños que proveen una amplia oferta de trabajo barato y vulnerable, sin ciudadanía, para las empresas canadienses intensivas en trabajo cuya rentabilidad depende en gran medida de mantener los salarios bajos y los derechos al mínimo.

El Tratado de Libre Comercio

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue el principal impulso para la captura de una gran proporción del mercado hondureño por parte del capital canadiense. La firma del tratado por Harper y Lobo en julio de 2011 fue la culminación de la agresiva diplomacia económica canadiense, que se hizo más digerible para la comunidad internacional a partir de la reintegración oficial de Honduras a la OEA. El TLC fue presentado como una expresión de la normalización de relaciones con una Honduras democrática. En agosto de 2010, el embajador Reeder en Honduras fue ascendido a Director General para América Latina y el Caribe del despacho de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, FAIT. Fue substituido por el ya mencionado Cameron

71 El Canadian Commercial Communication (CCC) es una agencia del Estado que negocia contratos e identifica la inversión o los socios comerciales canadienses para gobiernos del mundo en desarrollo.

Mackay. La designación de Reeder se vio influida por la idea de seguir avanzando en las negociaciones comerciales. El currículum de Mackay en Relaciones Exteriores, por su parte, es un buen ejemplo del tipo de rol que se le asigna a las embajadas canadienses: fue delegado permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC); delegado de comercio y economía; delegado en jefe de política comercial en la OMC; estuvo en la división de planeación de política comercial; subdirector de la división de política comercial regional, y director de la política comercial para las Américas (FAIT, 2010). Poco después de su designación (pero antes de que su nombramiento fuera oficialmente recibido por el gobierno hondureño), Mackay organizó reuniones con inversionistas canadienses y con miembros del gabinete hondureño para discutir propuestas a la ley minera (Wang, 2010).

Originalmente, Honduras era parte de las negociaciones entre los Cuatro Centroamericanos (CA4) y Canadá —que incluían a Guatemala, El Salvador y Nicaragua—. Sin embargo, y una vez que Canadá hubo amasado suficiente capital político en su papel de ardiente defensor de los gobiernos postgolpe en Honduras, y a sabiendas de que Lobo era partidario de la inversión extranjera y el libre mercado, el gobierno canadiense decidió empezar a negociar por separado con Honduras en diciembre de 2010, independientemente del resto del CA4. Como las negociaciones con el CA4 no avanzaban con suficiente rapidez, y con un gobierno necesitado de apoyos internacionales, Honduras se convirtió en un blanco fácil. Desde las dependencias de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) se escribió, en efecto, que "Canadá está más cerca de llegar a un acuerdo con Honduras que con los otros tres países". Una negociación bilateral con Honduras también fortalecería la posición canadiense con los tres restantes. Por tanto, Relaciones Exteriores tuvo el cuidado de señalar, en su anuncio, que el acuerdo con Honduras sería ahora bilateral y que "Canadá sigue abierta a continuar con las negociaciones" con Guatemala, El Salvador y Nicaragua (Global Affairs Canada, s/f).

No es sorprendente que los representantes de la industria minera canadiense atesoraran las oportunidades de una mayor inversión si se firmaba el TLC. La exploración se había detenido luego que de Zelaya puso en marcha una moratoria a las nuevas actividades de exploración hasta que se aprobara una nueva ley. Un comunicado de prensa de Relaciones Exteriores acerca de las negociaciones bilaterales resaltaba que "Honduras promete grandes oportunidades para las compañías y los trabajadores hondureños" (FAIT, 2011b). El presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica en Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carbajal, fue más específico cuando dijo que "sin duda [el TLC] aumentará la inversión" en la minería (*La Tribuna*, 02/08/2011). El TLC trata acerca de muchos otros aspectos económicos además de la minería, y su aprobación envió una clara señal de que Honduras está abierta a las compañías canadienses. Pero sobre todo representó un paso esencial en la apertura total de las puertas al capital minero. Después de años de incertidumbre en la industria debido a problemas legales relacionados con la antigua ley, y luego de la moratoria de Zelaya, no pasaron ni seis meses tras la firma del TLC para que la ley minera llegara al Congreso. Pero no fue sólo el sector minero el que expresó su felicidad ante las negociaciones. También Jesús Canahuati estaba exultante, como miembro de una de las principales dinastías maquiladoras y hermano del ministro de Relaciones Exteriores de Lobo. Canahuati describió las negociaciones como "un importante mensaje para otros inversionistas", y dijo que la Honduras postgolpe tiene "un ambiente favorable a la inversión" (*Proceso*, 04/02/2011; *La Tribuna*, 02/02/2011; Marotte, 2011). El TLC, sin duda, beneficiaría al sector maquilador, pero tal vez algo más importante: era una señal de que Honduras, a pesar de sus problemas políticos, es un destino legítimo para el capital extranjero.

El verdadero significado del TLC se vio reflejado en la asistencia de Harper a la firma del acuerdo en Honduras. No sólo anunció la firma del Tratado y se reunió con los líderes empresariales canadienses en Honduras (hizo un *tour* por la fábrica de Gildan), sino que fue el

primer mandatario extranjero en visitar el país y reunirse con Lobo tras la readmisión de Honduras a la OEA, el 1 de junio de 2011. La reunión entre Harper y Lobo fue una señal de que el régimen hondureño era miembro legítimo de la comunidad internacional. Y también expresó abiertamente en qué consistía una de las fuerzas motoras de la política canadiense. Como declaró Harper, "un Tratado de Libre Comercio es una parte fundamental en la agenda de nuestro gobierno de abrir nuevos mercados para las empresas canadienses, crear nuevas oportunidades para nuestros trabajadores y contribuir a la futura prosperidad de Canadá" (Prime Minister's Office, 2011a). Las referencias, al pasar, de las "oportunidades" para los trabajadores canadienses eran un modo de esconder a la pequeña alianza que había realmente ganado con el Tratado. Los principales beneficiarios son y serán, por mucho, los inversionistas en la maquila, la minería y el turismo.

Aunque Canadá ya había empezado a negociar un tratado con Honduras como parte del CA4, hay una línea directa que une al golpe de Estado con la firma final del Tratado. La destitución de Zelaya y su substitución por Lobo, que fue apoyada desde el primer día por Canadá, es el contexto en el que el acuerdo fue negociado y concluido. El estancamiento de las negociaciones del CA4, la presencia electoral de la centro-izquierda electoral y la creciente voz de los movimientos sociales implicaban que, sin un golpe, el acuerdo no hubiera nunca llegado a buen término. Los movimientos sociales eran conscientes de esto. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), traza una conexión directa entre el TLC y el golpe: "El acuerdo de libre comercio entre Canadá y Honduras es fruto del golpe de Estado y su continuación", es "un golpe apoyado por el gobierno y las compañías canadienses". El Copinh tiene total claridad acerca de las intenciones de Canadá. El TLC, dice, representa "una violación de nuestra soberanía" que conllevará "la usurpación de las tierras, la cultura y las vidas de los indígenas y los africano-hondureños", pues en esos territorios se encuentran "los recursos que las transnacionales canadienses quieren" (Copinh, 2011a).

Conclusión

El gobierno de Harper hundió a Canadá en el lodo de la represión y el fundamentalismo neoliberal en que Honduras se convirtió tras el golpe. Le ofreció apoyo crónico a los regímenes que nacieron de ese golpe. La transición Zelaya-Lobo fue anticonstitucional, pero como este último se presentó como un aliado de los intereses canadienses, las circunstancias de su llegada al poder podían ser ignoradas, lo mismo que los brutales abusos contra los derechos humanos. Como dijimos en la Introducción de este libro, se trata de un cálculo normal para el Estado canadiense. Si se tambalea un gobierno progresista visto como una amenaza a los intereses del capital canadiense, las violaciones a la Constitución y los abusos a los derechos humanos pueden ser permitidos.

El caso hondureño contrasta con el golpe de Estado en Mali de marzo de 2012. Ahí, un aliado canadiense, amigable a la minería, Amadou Toumani Touré, fue echado por un golpe militar. La respuesta canadiense se hizo sentir antes de que el golpe cristalizara. El ministro de Relaciones Exteriores, John Baird, declaró que estaba "profundamente consternado por los reportes que llegan de Bamako, Mali, en donde parece que algunos elementos de las fuerzas armadas han atacado el palacio presidencial". Y agregó, en un lenguaje mucho más directo del que alguna vez se usó en Honduras, que "la voluntad democrática del pueblo de Mali debe ser respetada" (FAIT, 2012a). Tras el golpe, Baird anunció que "Canadá condena firmemente este ataque a la democracia" y que "los perpetradores del golpe de Estado en Mali deben recibir un claro mensaje, que la democracia, el orden constitucional y la estabilidad deben volver a Mali" (FAIT, 2012b; Clark, 2012).

Por otro lado, mientras el ministro Kent promovía el Acuerdo Tegucigalpa-San José, la embajada canadiense animó a las ONG de Canadá —presentes casi exclusivamente en las áreas rurales más pobres, predominantemente pro Zelaya— a que se acercaran al gobierno de Micheletti "si lo consideraban necesario". Las ONG canadienses tienen una presencia importante en el país, y la estrecha relación

donador-receptor (Honduras era considerado por la Agencia de Desarrollo Internacional un "país clave", además de que Canadá lideraba un grupo de donadores internacionales en el momento del golpe) le hubiera permitido al gobierno canadiense usar la ayuda al desarrollo como una herramienta contra la dictadura militar. Tal vez quitarle la ayuda a un país para castigar a la dictadura que lo gobierna no sea lo mejor para los necesitados receptores de ese dinero (asumiendo que el dinero llegue a sus destinatarios y que no sea despilfarrado por los políticos), pero lo que queremos señalar es que, al contrario del golpe en Honduras, el gobierno de Harper detuvo toda ayuda al gobierno inconstitucional de Mali. El ministro de Cooperación Internacional, Bev Oda, declaró, en este caso, que Canadá no quería "contribuir a los males del maliense promedio" (Reeder, 2009d)[72].

A finales de enero de 2014, la historiadora Dana Frank escribió:

> En unos días, un nuevo presidente tomará el mando en Honduras: Juan Orlando Hernández. Es guapo. Es simpático. Es joven. Uno diría que nació con una camisa blanca bien planchada. Y es un mafioso de cuidado. Hernández fue uno de los principales líderes del golpe de 2009, y desde entonces tiene un historial impresionante en lo que a violar la ley se refiere (Frank, 2014b).

Hernández fue el candidato presidencial del Partido Nacional de Lobo en la elección de noviembre de 2013. Además de apoyar con entusiasmo el golpe de 2009, en su calidad de líder del Congreso organizó el llamado "golpe técnico" de 2013, en el que cuatro miembros de la Suprema Corte fueron súbitamente echados y reemplazados por incondicionales conservadores. Recientemente, Hernández apoyó la designación ilegal de un nuevo fiscal general por un período de cinco años. Hernández fue uno de los actores clave en la creación de un cuerpo militarizado de la policía durante el gobierno Lobo, e hizo

72 El ministro Oda es citado por Clark (2012: A4).

campaña con el aterrador lema "por un soldado en cada esquina" (Frank, 2014a; Frank, 2013c).

Durante buena parte del año 2013, quien encabezaba las encuestas era Xiomara Castro, la candidata presidencial de Partido Libre, una organización de izquierda que emergió de la resistencia. A veces alternaba el primer lugar con Salvador Nasralla, del también debutante Partido Anticorrupción. Sin embargo, en las últimas semanas antes de la elección, tanto el Partido Nacional como el Liberal empezaron a recuperar terreno en las encuestas. Los resultados oficiales publicados por el Supremo Tribunal Electoral el 12 de diciembre de 2013 le dieron la victoria a Hernández con el 37 por ciento de los votos, por delante del 29 por ciento de Castro (Achtenberg, 2013b). Detrás de los dos punteros quedaron Mauricio Villeda del Partido Liberal, con el 20 por ciento, y Nasralla con el 13 por ciento.

No es ninguna sorpresa que el gobierno canadiense estuviera encantado con los resultados. Lynne Yelich, ministra de Estado, viajó a Honduras del 25 al 27 de enero de 2014 para estar presente en la posesión de Hernández. En el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (Department of Foreign Affairs, Trade and Development, DFATD, por su sigla en inglés), dejaron en claro que Ottawa estaba ansiosa por profundizar relaciones con el nuevo gobierno. "Canadá y Honduras tienen una relación comercial cada vez más importante, y Honduras se beneficia de una larga y robusta cooperación para el desarrollo", dijo la ministra Yelich. "La firma del TLC Canadá-Honduras en noviembre de 2013 es un indicador de la fuerza creciente de nuestras relaciones bilaterales" (DFATD, 2014) [el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo era el despacho que precedió al de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, FAIT, por su sigla en inglés].

Los observadores electorales de la OEA y la Unión Europea, que declararon que la elección había sido justa y libre, ignoraron en sus reportes el contexto de militarización generalizada en la que ésta tuvo lugar. Durante la campaña, hubo intimidación y asesinatos de

opositores, particularmente de activistas y candidatos afiliados al Partido Libre (Achtenberg, 2013a). Veintidós militantes de esta organización fueron asesinados entre mayo de 2012 y el día de las elecciones (Achtenberg, 2013b). La sede del Partido Libre en Tegucigalpa fue rodeada por hombres enmascarados y armados dos días antes de la elección, aparentemente de la policía militar (Achtenberg, 2013a).

Hernández se comprometió a darle continuidad al proyecto político y económico de Lobo, basado en atraer a multinacionales extranjeras para que exploten los recursos naturales. Los datos estadísticos muestran la dimensión de la devastación social y económica provocada por ese modelo a partir de 2009 (Johnston y Lefebvre, 2013)[73]. El crecimiento económico se ha reducido considerablemente desde ese año. Entre 2010 y 2013, el crecimiento anual del PIB fue de un débil 3,5 por ciento. En contraste, entre 2006 y 2008 el promedio anual fue del 5,7 por ciento. En 2006 y 2007, el PIB creció más del seis por ciento, y alcanzó el 4,2 por ciento —el más alto en América Central— en 2008, a pesar de que su principal socio comercial, Estados Unidos, había entrado ya en la que sería la peor crisis global desde la Gran Depresión. En 2009, la recesión mundial desembarcó en Honduras. La demanda externa se redujo considerablemente y cayeron las remesas de los hondureños en Estados Unidos. Es claro que un ambiente exterior negativo influyó en las bajas tasas de crecimiento después de 2009. Sin embargo, varios economistas señalan que la amplitud del problema fue exacerbado por las políticas neoliberales del gobierno de Lobo. Había un cierto espacio para políticas contracíclicas que hubieran acolchonado el impacto, como fue el caso con la mayoría de los países latinoamericanos (Johnston y Lefebvre, *op. cit.*: 1-2).

La desigualdad también se ha amplificado desde el golpe, luego de una tendencia a la baja de cuatro años durante el gobierno

73 Los siguientes párrafos acerca de las tendencias económicas y sociales recientes están inspirados en ese excelente reporte.

de Zelaya. Pero ahora Honduras tiene la peor distribución del ingreso en América Latina, que es a su vez la región más desigual del mundo (*ibíd.*). A pesar del crecimiento relativamente más bajo en 2010 y 2011, al décimo más alto de la población hondureña le fue mejor que antes de la recesión. Ese diez por ciento más rico capturó prácticamente todo el aumento en el ingreso de esos dos años, mientras que el ingreso del resto de la población se redujo, y ahora está en el nivel más bajo desde 2006 (Johnston y Lefebvre, *op. cit.*: 9). La pobreza también ha empeorado. Con Zelaya, las tasas de pobreza y extrema pobreza se redujeron al 7,7 y 20,9 por ciento, respectivamente, y en el período postgolpe aumentaron alacanzando el 13,2 y 23,6 por ciento, respectivamente (Johnston y Lefebvre, *op. cit.*: 1).

Una de las principales causas de la amplificación de la desigualdad y la pobreza en Honduras tiene que ver con los patrones del gasto público. El gobierno de Zelaya redujo de una manera importante la pobreza y la extrema pobreza debido al alto crecimiento económico, pero el aumento en el gasto social, como porcentaje del PIB —especialmente en la salud y la educación—, jugó también un papel crítico. Entre 2005 y 2009, el gasto social respecto al PIB pasó del 10,4 al 13,3 por ciento, mientras que desde el año 2010 ha vuelto a caer al 10,9 por ciento (Johnston y Lefebvre, *op. cit.*: 10-11). Algo que ha empeorado la dinámica de pobreza y desigualdad que se puso en marcha con la reducción del gasto social es la cada vez peor tasa de desempleo desde el golpe. Entre 2008 y 2012, el porcentaje de trabajadores subempleados y desempleados pasó del 6,8 al 14,1 por ciento (Johnston y Lefebvre, *op. cit.*: 1).

La situación política y económica posterior al golpe ha sido devastadora para la mayoría de los hondureños, pero ha constituido una especie de época de oro para el capital canadiense. Aunque el apoyo sistemático al capital por parte del Estado canadiense ha sido particularmente brutal en el contexto de la dictadura, el caso hondureño no es una anomalía. La tendencia se extiende a

prácticamente toda la región. La dinámica de la política exterior de Canadá en Guatemala, que analizaremos en el siguiente capítulo, es otro buen ejemplo del compromiso de Ottawa con el imperialismo contemporáneo.

Guatemala: hacer negocios tras el genocidio

La historia contemporánea de Guatemala sintetiza la de América Latina durante la Guerra Fría. La revolución de octubre de 1944 generó esperanzas en una verdadera democracia social con la iniciativa de llevar a cabo una reforma agraria. El golpe militar de 1954, apoyado por Estados Unidos, terminó con ese sueño e instauró un régimen de terror y de contrainsurgencia. La izquierda se vio obligada a adoptar la lucha guerrillera cuando se cerraron todas las otras posibilidades de acción política. El número de asesinatos, violaciones, tortura, desaparición, secuestros y masacres —con el apoyo financiero y material de Estados Unidos— llegó a un cenit apocalíptico con el genocidio racial de 1981-1982. En 1996, con más de 200 mil asesinatos perpetrados por el Estado guatemalteco y con la izquierda derrotada, el ideal de un socialismo democrático estaba ya completamente aplastado (Grandin, 2004). "Escribir acerca de Guatemala", dice la antropóloga Carlota McAllister, "quiere decir escribir acerca del conflicto más sangriento del siglo XX latinoamericano. Un rapaz capitalismo agrario, combinado con la sistemática opresión de la mayoría indígena maya por parte de una minoría criolla hizo de Guatemala terreno fértil para el cambio radical, pero también dobló la apuesta por la represión y el castigo" (McAllister, 2011: 276).

Los acuerdos de paz de 1996 permitieron un giro plácido hacia la reestructuración neoliberal y la consolidación de un nuevo modelo

de acumulación basado en la inversión extranjera en distintos sectores extractivos. Es precisamente en este contexto que las compañías mineras canadienses han extendido sus tentáculos a lo largo y ancho del país. Como en el resto de la región, la expansión de la actividad minera por el capital multinacional se ha visto acompañada por un auge del conflicto social y la lenta remilitarización de la vida política —un esfuerzo por parte de la élite para contener el malestar—. Las comunidades indígenas mayas son la punta de lanza de esta nueva resistencia, y la oposición a la minería constituye el factor más poderoso de esta red de movimientos. La respuesta del Estado, de las compañías privadas de seguridad al servicio de las transnacionales, y de los grupos paramilitares, ha sido la intensificación de la represión. El rasgo que define a la actual coyuntura guatemalteca es la resistencia popular de los de abajo y la feroz violencia de los de arriba. El capital minero canadiense, y los aparatos de seguridad que trabajan para él, son un elemento esencial de esta dinámica.

Este capítulo está estructurado en tres partes. La primera estudia, a grandes rasgos, la trayectoria de la formación social guatemalteca al enfatizar los puntos de quiebre de su economía política a partir de la mitad del siglo pasado: el genocidio militar durante la guerra civil y la transición a través de los acuerdos de paz hasta el neoliberalismo de hoy en día. La segunda parte se centra en la geografía de las corporaciones mineras canadienses y explica el rol que han jugado en el desarrollo de nuevos patrones de acumulación, de explotación y de violencia. La tercera parte analiza la nueva ola de lucha de clases que se desarrolla en el campo guatemalteco, y la manera en la que el capital minero canadiense se ha convertido en uno de los principales blancos de esta resistencia.

Un esbozo histórico

La dictadura de Jorge Ubico Castañeda gobernó al país entre 1931 y 1944. Las elecciones de este último año abrieron una nueva etapa en

la política guatemalteca, con la llegada de Juan José Arévalo a la presidencia. Arévalo, quien se distanciaba del marxismo y del capitalismo individualista, se denominaba a sí mismo un "socialista espiritual". A través de una serie de modestas reformas sociales —entre ellas la Ley de Renta Forzosa que obligaba a los grandes terratenientes a rentar a bajos precios sus terrenos inutilizados, la implementación de un sistema de seguridad social en 1950 y el primer Código del Trabajo que permitió huelgas y la organización sindical—, Arévalo se ganó el odio de los estrategas de la política exterior estadounidense y de la oligarquía local (LaFeber, 1983: 113-114). Un memorándum del Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, decía que aunque las reformas "no eran una prueba de comunismo", tampoco se podía negar que hubiera una "inspiración comunista detrás de ellas" (McAllister, *op. cit.*: 115). La llegada de Jacobo Árbenz a la presidencia en 1950, con el 65 por ciento del voto popular, tranquilizó de entrada a los funcionarios estadounidenses y a los terratenientes guatemaltecos. Pero a los pocos meses, el Departamento de Estado cambió radicalmente de opinión sobre Árbenz, y luego de verlo como una alternativa moderada a Arévalo, se escandalizó ante "la curva ascendente de la influencia comunista" sobre el nuevo gobierno (McAllister, *op. cit.*: 116). La historiografía actual sobre Guatemala ha establecido, más allá de cualquier duda, que ni Arévalo ni Árbenz amenazaron en ningún momento la santidad de la propiedad privada o los parámetros institucionales de la democracia liberal, pero esto no constituyó un obstáculo para que sus enemigos los encasillaran como poco menos que una amenaza comunista (Mahoney, 2001: 212).

Lo que estaba en juego en realidad eran las enormes inversiones de la United Fruit Company. La compañía estadounidense era dueña del 42 por ciento de la tierra arable de Guatemala, el resto estaba repartida entre un pequeño puñado de familias. La mayoría de los campesinos no tenían tierra. La compañía tenía vínculos excepcionalmente cercanos con el gobierno de Dwight Eisenhower: el bufete de abogados del Secretario de Estado, John Foster Dulles, había representado legalmente

durante mucho tiempo a la compañía; el director de la Agencia Central de Inteligencia, Allen Dulles, había estado en la mesa directiva de la United; y el jefe de relaciones públicas, Ed Whitman, era esposo de la secretaria privada de Eisenhower, Ann Whitman. La influencia que estas conexiones no pudieran movilizar fue comprada con el pago de viajes a periodistas del *New York Times*, el *New York Herald Tribune* y el *New Leader*, que al volver de Guatemala escribían maravillas sobre el papel de la United Fruit en el país. La Ley de Reforma Agraria de 1953, a través de la cual Árbenz se comprometió a la expropiación (con compensación) de 234 mil hectáreas de tierras de la compañía, claramente tuvo que ver con la subsiguiente intervención de la CIA y la eventual caída del gobierno de Árbenz en 1954[74].

Pero hubo una serie de cambios regionales en la política de seguridad estadounidense en la región que se extendían más allá de la escena guatemalteca. La suerte le sonrió a la United Fruit, pues sus intereses coincidieron bien con los nuevos objetivos generales de la estrategia de Estados Unidos. A inicios de los años cincuenta, el Estado norteamericano explícitamente afirmó la importancia secundaria de la democracia en relación con el compromiso anticomunista de los gobiernos latinoamericanos. El relativo multilateralismo de las dos décadas pasadas había terminado. El historiador Greg Grandin observa cómo "aumentó la ayuda técnica y financiera a las fuerzas de seguridad, ahora parte de una política sistémica de contención, que incluía el apoyo y la organización de golpes y programas de desestabilización (en Guatemala, Honduras, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina) y, cuando todo lo demás fallaba, invasión: República Dominicana y Granada" (Grandin, 2001: 27).

En 1954 se marcó un profundo quiebre en la historia guatemalteca. La mesa estaba puesta para la consolidación del Estado contrainsurgente, la evaporación de los proyectos electorales reformistas de la izquierda, el inicio de los movimientos guerrilleros —primero

74 En este párrafo seguimos a LaFeber (1983: 113-120).

pequeños grupos de criollos organizados en focos y posteriormente una insurgencia de masas vinculada orgánicamente con las comunidades indígenas de las montañas— y eventualmente el aumento de la violencia militar hasta llegar al genocidio de principios de los años ochenta. Una narrativa que emergió de esta situación es la de los *dos demonios* —las guerrillas mestizas y criollas por un lado, y un ejército de la misma composición racial por el otro—. Atrapada entre la espada y la pared estaba una mayoría indígena maya victimizada, desprovista de objetivos políticos o actividad colectiva. Es cierto que las direcciones guerrilleras eran predominantemente mestizas o criollas, y que éstas mostraron poco interés en incorporar y representar adecuadamente a la mayoría maya, pero la tesis de los *dos demonios* es equivocada. "Decir que el Estado guatemalteco y su oposición armada son igualmente culpables por el genocidio", dice McAllister, "no sólo es ignorar las estadísticas que muestran que las fuerzas armadas estatales cometieron el 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos y las guerrillas el tres por ciento, sino también ocultar la participación maya en los grupos de izquierda, incluyendo las organizaciones armadas" (McAllister, *op. cit.*: 277).

A lo largo de los años setenta, las exigencias de reformas amentaron en dimensiones iguales con la actividad de los movimientos sociales. La respuesta del Estado y de la clase gobernante fue un sistemático aumento de la violencia perpetrada por la policía, el ejército y los escuadrones de la muerte. Los partidos reformistas como los Demócrata Cristianos fueron en última instancia incapaces de obtener nada para sus votantes rurales indígenas. La consecuencia fue que una parte importante de la base social de estas organizaciones se unió a la lucha armada (Grandin, 2000: 224). De manera paralela a este proceso de radicalización debido a la represión, se empezaron a formar organizaciones católicas de base, en la perspectiva de crear de una "Iglesia de los Pobres". Estos afluentes convergieron para contribuir a una generalizada politización indígena (Jonas, 2000: 23). Entre 1976 y 1978, estos distintos procesos cristalizaron en la creación del Comité de

Unidad Campesina (CUC), que incluía a trabajadores agrícolas mestizos pobres y campesinos mayas, y en el que estos últimos tenían la voz cantante (*ibíd.*). La CUC era una organización no militar que trascendía los límites de las distintas guerrillas, pero hay que decir que fue "bautizada en una reunión de la dirección nacional del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) del 15 de abril de 1978 y [...] rápidamente terminó por opacar a todas las otras organizaciones indígenas" (McAllister, 2011: 279). Otro factor importante en este proceso fue el cambio en la orientación de las propias guerrillas. A principios de los años setenta, las principales organizaciones guerrilleras llegaron a la conclusión de que la estrategia vanguardista del foco había fracasado porque era excesivamente militarista y adolecía de una base popular de masas.

Un síntoma de ese desinterés por hacerse de una base de masas fue la desatención de las necesidades e intereses materiales, políticos y culturales de la población maya. Para inicios de los años setenta, cuando las guerrillas comenzaron a reorganizarse bajo principios distintos, intentaron crear vínculos orgánicos con las comunidades indígenas. La lucha armada llegó a su cenit a inicios de la siguiente década, cuando contaban entre sus filas con entre seis a ocho mil combatientes armados, y entre 250 y 500 mil colaboradores activos. La expresión de esta nueva dinámica y del crecimiento de las guerrillas fue la convergencia de las distintas organizaciones guerrilleras en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que se fundó a inicios de 1982 (McAllister, *op. cit*: 279). Grandin concluye así su análisis etnográfico de los guerrilleros mayas de las montañas: "El marxismo, como una teoría para entender y actuar en el mundo, le proporcionó a los habitantes de una de las regiones más oprimidas —no sólo de Guatemala sino de toda Latinoamérica— una vía para su liberación" (Grandin, 2004: 182).

También en las ciudades, sobre la base de una larga historia de lucha sindical contra el terrorismo estatal (Levenson-Estrada, 1994) y de activismo estudiantil en grupos como el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, los años ochenta marcaron el tiempo de

una efervescencia radical. “En 1978, los habitantes de los suburbios, los transportistas, los obreros, los empleados estatales, los estudiantes y buena parte de la población de Ciudad de Guatemala, se unieron en la lucha por salarios más altos y contra el aumento al transporte”, escribe la historiadora Deborah T. Levenson:

> Hacia mediados de 1979, el grito de una Guatemala democrática y revolucionaria estaba en todos lados, y mientras la gente escuchaba en la radio las noticias de la toma de Managua por parte de los sandinistas, no parecía una locura ver una la revolución en el horizonte. Decenas de miles se unieron a los frentes revolucionarios al final de los años setenta e inicios de los ochenta, y en algunas áreas estos nuevos reclutas presionaron a la dirección guerrillera para que tomara iniciativas militares más contundentes” (Levenson, 2013: 2).

Sin embargo, a inicios de la década de 1980 se evidenció el inicio de un trágico giro para mal. La movilización de la década anterior había permitido una imprevista unidad entre las distintas facciones de la clase dominante y del Estado (especialmente de los aparatos coercitivos), que permitiría posteriormente desplegar una inesperada ola de violencia (Grandin, 2000: 224). La intensidad de la represión con la que el ejército había siempre lidiado con el descontento público aumentó considerablemente. Las ciudades vivieron una ola de terror, pero fue peor en “las comunidades mayas del campo, en donde el ejército cometió actos de genocidio emanados del racismo y del miedo histórico a la rebelión maya” (Levenson, 2013: 32-33). En 1981 se inició una campaña de tierra arrasada que dejó un saldo de más de cien mil asesinados, y el desplazamiento forzoso de incontables comunidades indígenas. Esta campaña continuó en 1982 y 1983. Junto a la violencia genocida, el ejército empezó a formar milicias locales de las que los hombres mayas tenían que ser parte —a la fuerza y bajo pena de muerte— de las acciones militares de exterminio de las comunidades vecinas. En términos militares, la incorporación de unos

900 mil hombres a esas milicias permitió no sólo un mayor control del ejército, sino también la sistematización de la disciplina militar y la diseminación de propaganda anticomunista (Dunkerley, 1988: 496-497).

"Para cuando terminó la Guerra en 1996", escribe Grandin, "el Estado había asesinado a unas 200 mil personas, desaparecido 40 mil y torturado a miles y miles más" (Grandin, 2004: 3). Sería difícil exagerar las consecuencias de largo plazo de la derrota militar de la izquierda a través de una guerra genocida. La cultura popular de oposición y resistencia fue completamente desarticulada. La contrarrevolución política del racismo militar permitió el salto posterior hacia una contrarrevolución económica de reestructuración neoliberal.

Y así fue como los acuerdos de paz de 1996 establecieron el marco para la profundización y la consolidación del programa de reestructuración neoliberal que había comenzado cautelosamente en el gobierno del demócrata cristiano Vinicio Cerezo (1986-1991). A inicios de 1997, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) empezó a implementar un programa de ajuste estructural de gran envergadura y amplitud (Robinson, W.I., 2003: 103). Este programa sentó las bases de una profunda transformación de las estructuras de clase en el campo y la ciudad, y de la penetración del capital en todas las dimensiones de la vida social. En el campo, la contrainsurgencia de los años ochenta abrió las esclusas de una enorme ola migratoria de campesinos desplazados y destruyó la economía campesina. Esto abrió el camino para la completa incorporación de la población indígena rural a los imperativos del mercado que definen al modo de producción capitalista. El resultado de esta dinámica de acumulación primitiva a través de la guerra fue que los antiguos latifundios y minifundios fueron reestructurados, y por primera vez se estableció un sistema de trabajo asalariado en el campo guatemalteco (Robinson, W.I., *op. cit.*: 105-106).

Millones fueron desterrados: huyeron a las zonas montañosas, cruzaron la frontera a los campos de refugiados en México o a los intersticios de la economía informal de ese país, y algunos llegaron a Estados Unidos. La estimación más conservadora es que 55 mil

desplazados internos llegaron a los barrios más pobres de Ciudad de Guatemala, a menudo escondiendo cualquier símbolo que traicionara sus orígenes mayas para evitar la persecución racial. Estas personas quedaron relegadas al desempleo o al empleo más precario, y se vieron obligadas a recurrir a una serie de estrategias de sobrevivencia en las esferas formal e informal de la economía (Levenson, 2013: 39). Una juventud psicológicamente dañada se unió a la fuerza de trabajo que aceita la maquinaria de la narcoeconomía. Para el año 2000, casi el 80 por ciento de la cocaína sudamericana que llegaba a Estados Unidos pasaba por Guatemala. La Mara Salvatrucha y la Mara 18 echaron raíces en esta economía política del postconflicto tras las deportaciones masivas de Los Ángeles en 1996 de las que surgieron.

La violencia del narcotráfico llegó como una pinza desde Colombia y México, para mezclarse en Guatemala con la violencia paramilitar ligada a los proyectos turísticos y mineros de multinacionales dispuestas a reprimir a las comunidades intransigentes. La tasa de homicidios pasó de 39 a 34 asesinatos por cada cien mil habitantes, la cifra más baja en una década, pero volvió a aumentar en 2013, y nunca dejó de ser altísima para los estándares internacionales (*The Economist*/EIU, 2013: 3). En términos políticos, la transición a la poliarquía que llegó con los acuerdos de paz fue completamente funcional a los intereses de una renovada acumulación capitalista interrumpida por la inestabilidad de la guerra.

El capital extranjero que salió de Guatemala durante la guerra fue seguido inmediatamente por el capital de la burguesía guatemalteca, que también decidió guardar su dinero fuera del país hasta que se estabilizara la situación. El sociólogo William I. Robinson afirma que "el cambio en el modelo de control social y en el sistema de dominación fue la precondición para la reorganización del proceso de acumulación del capital" (Robinson, W.I., 2003: 109). Como en el resto de Centroamérica, el cambio en el modelo de acumulación en Guatemala a lo largo de la década de 1990 y los años 2000 se expresó en un giro hacia los grandes proyectos turísticos, la industria extractiva

(particularmente la minería), el cultivo de biocombustibles, presas hidroeléctricas y maquiladoras dependientes del baratísimo trabajo femenino (Bird, 2012: 35-36; Robinson, W.I., 2012).

El impacto social del neoliberalismo fue más devastador en Guatemala que en el resto de América Central. Cerca del final del siglo, el 40 por ciento de la población era analfabeta, y el adulto promedio había recibido apenas 3,2 años de educación. Una tercera parte de los niños estaban malnutridos. La mitad de la población no tenía electricidad y el 64 por ciento no tenía agua. El sub y el desempleo no bajaban del 40 por ciento, y el 65 por ciento de los que sí tenían un trabajo luchaban para sobrevivir en la economía informal. La pobreza pasó del 70 por ciento en 1980 al 87 por ciento en 1991 (Robinson, 2003: 115-116). En el *boom* de los *commodities* de inicios del nuevo milenio, el PIB creció a un 4,1 por ciento entre 2003 y 2007, para luego bajar a un 3,3, 0,5, 2,9 y 3,9 entre 2008 y 2011, cuando los efectos de la crisis del sistema central se empezaron a sentir en América Latina (ECLAC, 2012b: 117). La pobreza se redujo moderadamente al pasar del 60,2 al 54,8 por ciento entre 2002 y 2006, aunque la pobreza rural se mantuvo más o menos igual: del 68 al 66,5 a lo largo del mismo período (ECLAC, 2012c: 65). Sin embargo, la desigualdad aumentó, pues el quintil más pobre de la población recibió en 2002 el 3,8 por ciento del ingreso nacional, y en 2006 tan sólo el 2,8 por ciento. El quintil más opulento, en cambio, pasó de absorber del 58,6 al 62,6 por ciento durante esos mismos años (ECLAC, *op. cit.*: 68). En términos del coeficiente Gini que mide la desigualdad en el ingreso (en donde 0 es una igualdad perfecta y 1 total desigualdad), Guatemala obtuvo un 0.542 en 2002 y un todavía peor 0.585 en 2006 (ECLAC, *op. cit.*: 70).

En 2010, la situación seguía siendo precaria. El promedio de escolaridad era de 5,6 años, pero en el campo era de apenas de 3,8. El 27 por ciento de la población seguía siendo analfabeta, la malnutrición infantil era de casi el 50 por ciento y tan sólo el 37 por ciento de los estudiantes terminaban el bachillerato. El desempleo estructural y el subempleo siguen afectando a buena parte de la población, y el salario

promedio de los que sí tienen un trabajo apenas cubre la canasta básica. Los únicos nuevos empleos son los de la ultra precaria economía informal (Yagenova, 2011: 214). En el año 2012, más del 78 por ciento de la fuerza de trabajo estaba en este sector (Yagenova, 2013: 137).

Aparte de alguna sofística populista, no ha habido en Guatemala ninguna desviación del dogma neoliberal a lo largo de los distintos gobiernos de las dos últimas décadas. Álvaro Arzú (1996-2000), Alfonso Portillo (2000-2004), Óscar Berger (2004-2008), Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015) han estado de acuerdo en lo esencial. Y tampoco hay signos de que se avecine un cambio económico importante. El *Country Report* sobre Guatemala de junio de 2013 de la unidad de inteligencia de la revista británica conservadora *The Economist* (EIU) proyectaba con satisfacción que para el período 2013-2017 "la posición general del gobierno será a favor de los negocios, y la administración macroeconómica se mantendrá ortodoxa" (*The Economist*/EIU, 2013: 2). Sin embargo, hay algunos signos preocupantes para los inversionistas, como la lenta rearticulación de los movimientos sociales después del largo eclipse en el que han estado sumidos desde los años ochenta. "La oposición de grupos campesinos e indígenas también ha retrasado los planes para aumentar la inversión en los sectores de energía y minero", se lamenta la EIU del *The Economist*:

> La tensión social y étnica se agravará a lo largo del período por el auge en la oposición (en forma de bloqueos carreteros y huelgas) a las actividades mineras y a la construcción de plantas hidroeléctricas en áreas protegidas o territorios indígenas. No es de descartar una ronda de protestas a gran escala si el gobierno decide adoptar una posición dura y continuar con el desarrollo de estos proyectos (*The Economist*/EIU, *op. cit.*: 3).

Es precisamente en el sector minero donde las nuevas formas de violencia asociadas al modelo neoliberal son más brutales. Es en este sector en el que se expresan las nuevas formas de resistencia

popular más radicales y donde el capital canadiense ha entrado con bombo y platillo.

Canadá y la nueva minería en Guatemala

Canadá es uno de los principales inversionistas extranjeros en Guatemala. Fue el segundo más importante en 2009 y 2010, después de Estados Unidos (ECLAC, 2012a: 65)[75]. Lo esencial de esta inversión va a la minería: en mayo de 2012, 16 de 17 concesiones activas (en la etapa de producción o exploración) eran canadienses[76]. La compañía canadiense Goldcorp, la segunda productora mundial de oro y la principal fuente de divisas extranjeras de Canadá, se ha convertido en un actor tan poderoso como controversial en Guatemala (lo mismo que en sus vecinos Honduras y México). Goldcorp ha sido la punta de lanza del resurgimiento de la minería industrial en este país[77].

La minería metalúrgica industrial fue una parte importante de la estrategia desarrollista de los años sesenta y setenta en Guatemala, pero perdió peso con la intensificación de la guerra civil. Como observa Michael L. Dougherty, "el régimen de políticas neoliberales que emergió en 1996 tras el final de la guerra civil, y la terminación del Acuerdo Multi–Fibra que gobernaba el sector maquilador, sentaron las bases de la impresionante expansión del capital minero" (Dougherty, 2011: 9). Las mineras canadienses han tenido importantes privilegios desde el final de la guerra y la firma de los acuerdos de paz, aunque también han provocado la oposición popular y, por tanto, han sufrido algunos fracasos. Guatemala aprobó una nueva ley minera "con gran ayuda de la naciente industria minera y de los intereses extranjeros"

75 Este acápite se enfoca ante todo en el sector minero, pero hay que decir que las petroleras canadienses se han expandido también. Por ejemplo, Quattro Exploration and Production adquirió casi 350 mil hectáreas de concesión en noviembre de 2011. Ver Paley (2012a).

76 Las estadísticas vienen de www.northernminer.org.

77 Marlin y Cerro Blanco, ambas de Goldcorp, son operadas por las subsidiarias Montana Exploradora y Entre Mares, respectivamente.

en 1997 (Dougherty, *op. cit.*: 10). El esfuerzo para ganarse la buena voluntad del capital canadiense y competir con sus vecinos centroamericanos hizo que la nueva ley facilitara la obtención de licencias, aumentara el tamaño de las concesiones y redujera los impuestos al uno por ciento. El ministro guatemalteco de Energía y Minas organizó congresos internacionales para los inversionistas extranjeros y visitó Canadá varias veces a lo largo de la década de 1990 para reunirse con los representantes de la industria minera (*ibíd.*). Más allá del apoyo formal en la legislación, las mineras canadienses también contaron con el apoyo del gobierno detrás de bambalinas. Por ejemplo, durante la presidencia de Oscar Berger (2004-2008), éste instruyó a los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales a que aceptaran los estudios de impacto ambiental proporcionados por las compañías. Bajo condiciones tan favorables, no es ninguna sorpresa que la exploración de las llamadas compañías menores aumentara en mil por ciento a lo largo de la década de los años 2000, y que el país se convirtiera en uno de los productores áureos de más bajo costo del continente (Dougherty, *op. cit.*: 9-11).

Sin embargo, el presidente Álvaro Colom instituyó en 2006 una moratoria a la emisión de nuevas licencias (la producción y la exploración en proyectos aprobados anteriormente continuó sin problemas) tras una controversia judicial promovida por el Centro para la Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) con sede en Ciudad de Guatemala. Esta entidad argumentaba que la nueva ley no protegía los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a tomar una decisión informada acerca de proyectos que los impactarían, tal y como lo estipula el artículo 15 (2) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Guatemala es parte (CIM, s/f b). Colom era visto como un presidente de centro izquierda, y le dio al Ministerio del Ambiente más libertad de decisión que el gobierno de Berger, pero apoyó sistemáticamente a las mineras canadienses y nunca intentó limitar el poder de éstas o defender los derechos de las comunidades afectadas, como veremos después (Dougherty, 2011: 11). Cuando un borrador de

ley sobre la minería fue discutido por el Congreso en septiembre de 2009, fue criticado por los activistas por no regular el uso del agua, por evadir el tema de la decisión informada de las comunidades potencialmente afectadas y, finalmente, por cobrar bajísimos impuestos: del uno al diez por ciento (Valladares, 2009).

Poco después de asumir el mando del Estado, el gobierno de Otto Pérez Molina puso manos a la obra para darle nuevos bríos al sector minero. Le hizo varias enmiendas a la ley minera y levantó la moratoria a la aprobación de nuevas concesiones —instituida en 2008 cuando la Corte Constitucional declaró que varios de los artículos de la ley minera eran inconstitucionales—. En los primeros seis meses de su gobierno se emitieron 68 nuevas licencias de exploración y explotación. Las propuestas de enmienda incluían una tasa de imposición un poco más alta que la anterior, pero a pesar de todo era realmente baja: cuatro por ciento para el oro y la plata, y tres por ciento para otros metales. Con los altos precios del petróleo y los *commodities*, en 2012 el gobierno de Otto Pérez consideró por un momento hacer una propuesta constitucional que permitiría que el Estado guatemalteco se quedara hasta con un 40 por ciento de los nuevos proyectos mineros y petroleros. Pero, como escribió poco después un consejero del Presidente, "nos dimos cuenta de que la propuesta estaba haciendo mucho ruido en el plano internacional, y decidimos echarla para atrás". Ante las críticas de la industria minera, Pérez Molina no tardó nada en someterse a los dictados del capital internacional (Bickis, 2012: 5; Mining Watch, 2012c; *Reuters*, 2012).

Es claro que la embajada canadiense en Guatemala, con el beneplácito de Ottawa, le proporciona apoyo a varias compañías a pesar de su largo historial de violaciones a los derechos humanos y abuso ecológico, aunque en la nueva situación de oposición generalizada a las compañías canadienses, los funcionarios de la Embajada se han dado a la tarea de defender a la industria en general. La lucha contra las mineras se intensificó a mediados de la década de los años 2000. El entonces embajador James Lambert —en un caso típico de "operador

de las mineras canadienses"— respondió a la creciente hostilidad pública con una columna en *Prensa Libre*, uno de los principales diarios guatemaltecos, exaltando las virtudes de la industria minera canadiense.

"En Canadá, la exploración y explotación minera se lleva cabo en todas las provincias y territorios, lo que crea oportunidades económicas y sociales para muchas comunidades, incluyendo unas 200 comunidades indígenas". Esto es lo que Lambert informaba a los guatemaltecos, en un relato con el que seguramente muchos grupos indígenas canadienses no se sentirían identificados. Y decía mucho más:

> A lo largo de una larga historia de más de 150 años de producción minera, nuestro país se ha convertido en uno de los más "inteligentes" administradores, promotores, usuarios y exportadores de recursos naturales en el mundo. El día de hoy, las empresas canadienses están a la vanguardia de la alta tecnología, protección ambiental y responsabilidad social. Es por esto que son los líderes de muchas de las más exitosas operaciones mineras en el mundo (Lambert, 2004).

Habrían de pasar algunos años para que el análisis empírico de conflictos mineros a lo largo y ancho del planeta, encargado por la Asociación Minera de Canadá, revelara que las compañías de este país tenían en efecto el peor historial de todo el mundo. Por supuesto, los guatemaltecos ya tenían desde tiempo atrás una enorme cantidad de evidencia de primera mano que contradecía la rozagante imagen pintada por Lambert. En diciembre de 2004, la Embajada en Ciudad de Guatemala organizó el Foro Minero Nacional, con el propósito de presentar a las mineras canadienses como actores responsables[78]. Al Foro llegó Jerry Asp, un líder indio de la nación Tahltan situada en la

78 La labor y opiniones del embajador Lambert en el Foro Nacional Minero se reiteraron poco después en un debate transmitido por el programa de televisión *Libre Encuentro* (s/f).

Columbia Británica [la provincia más occidental de Canadá; limita hacia el sur con Estados Unidos y al oeste con el océano Pacífico]. Asp les dijo a los guatemaltecos que su comunidad inicialmente tuvo también reservas respecto a los proyectos mineros, pero que desde entonces se habían beneficiado muchísimo por permitir que continuara el desarrollo. Dos meses después, la oficina de Asp fue tomada por miembros de su comunidad que exigían se le quitara de su cargo por venderse a intereses corporativos, luego de que apoyó los controvertidos planes mineros del gobierno provincial (Collins, 2005).

Después de su intervención en la prensa y en el Foro Minero, el embajador Lambert organizó un debate transmitido por televisión nacional en el que defendió las inversiones canadienses. Ignorando la larga historia de desastres mineros y desposesión de comunidades indígenas[79], Lambert le dijo a su audiencia:

> La experiencia canadiense puede ser importante aquí en Guatemala como lo ha sido para tantos países en desarrollo en los que hay operaciones mineras […]. Hemos aprendido mucho en este siglo y medio, especialmente en lo que se refiere a la administración de asuntos ambientales en nuestro país.

Luego, en una total manipulación de los hechos, Lambert le hizo creer a los televidentes que "hay una serie de estándares" que las compañías canadienses "deben cumplir antes de dar el salto a otros países". Lambert debe saber perfectamente que no existen esos estándares, ni dentro de Canadá ni mucho menos fuera de ella. A los no creyentes, el Embajador les dijo que la inversión minera extranjera es en cualquier caso una característica inevitable de las economías modernas y que, por tanto, "tarde o temprano, las comunidades indígenas de Guatemala tendrán que enfrentarse a la realidad de una sociedad global". En esta visión, los opositores a la minería son anacrónicos y provincianos. Y

79 Ver, por ejemplo, Gordon (2010, Cap. 2).

en un registro más piadoso, Lambert habló luego del fenómeno de los movimientos sociales que se negaban a someterse a la expansión de la industria minera, "actividades que están completamente dentro del marco legal del país". Para Lambert, era una pena que las corporaciones canadienses fueran pintadas como explotadoras de comunidades pobres y del medioambiente, cuando quienes verdaderamente debían ser el blanco del desdén y la crítica eran los activistas, los que bloqueaban el desarrollo económico. Su militancia, dijo el Embajador, "excede las normas de este país, y es preocupante"[80].

En vista de la sistemática y bien documentada violación del derecho internacional expresada en el desinterés de las compañías canadienses en buscar un acuerdo o consentimiento previo con las comunidades afectadas por los desarrollos mineros, y de la abjuración de la responsabilidad del gobierno guatemalteco para obligar a las mineras a llegar a tal acuerdo, la intervención de Lambert podría ser considerada una broma, si no fuera tan eminentemente trágica. En retrospectiva, el alegato del Embajador acerca de la ley y el orden se torna todavía más irónico, pues la represión contra los activistas no ha dejado de intensificarse, y se extendió en los años siguientes de la mina Marlin de Goldcorp a muchos otros proyectos canadienses. Pero para el despacho de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT), la vigorosa defensa de la minería de Lambert fue un gran mérito, y poco después fue ascendido a Director General para América Latina y el Caribe de esa institución.

El referido debate en el Foro Minero Nacional no fue la única defensa de las multinacionales por parte de la embajada canadiense en Ciudad de Guatemala. Con el apoyo de Ottawa, también se ha dedicado a ganarse la simpatía de varios altos funcionarios y políticos. De acuerdo con un funcionario, los diplomáticos tienen "contacto regular" con los representantes del Ministerio de Energía y Minas, incluyendo a los directivos del departamento de Hidrocarburos y Minería, y con

80 James Lambert citado por el programa de televisión *Libre Encuentro* (s/f).

un consejero ministerial (Luttman, 2008). Sin duda que una de las prioridades de la Embajada era resolver la situación de inestabilidad provocada por la moratoria de 2006, aunque es difícil aprehender la amplitud de este esfuerzo, ya que las comunicaciones entre la Embajada y el Ministerio referido han sido sistemáticamente censuradas para su publicación ante varias solicitudes de información.

A pesar de eso, en un reporte de la Embajada se lee que el objetivo de una reunión con un alto funcionario de Minería y Minas guatemalteco era discutir "las prioridades de la sección bajo su responsabilidad, y también hablar de su asistencia a la PDAC en 2008" (*ibíd.*)[81]. Para las embajadas canadienses, garantizar la asistencia a la PDAC de altos funcionarios de países en desarrollo —todo pagado por el gobierno canadiense— es una prioridad esencial. Los directivos de Energía y Minas guatemaltecos son constantemente invitados a esta reunión para que se reúnan con representantes de las mineras y del propio gobierno. En 2010, por ejemplo, cinco altos directivos de este Ministerio y un consejero del Presidente fueron llevados a Canadá. El *tour* de cuatro días incluyó reuniones con los representantes de Relaciones Exteriores en Ottawa, entre ellos el viceministro para América Latina y el Caribe. Luego fueron llevados a Toronto, donde se reunieron por separado con el director de la PDAC, de Goldcorp y con representantes del Ministerio de Recursos Naturales (Embajada de Canadá, 2010).

La Embajada también ha analizado las posibilidades de entrada en el sector energético guatemalteco. En otro reporte, se lee que "con nuestra amplia experiencia, la industria canadiense puede jugar un rol importante en el desarrollo del sector energético", y que "varias compañías canadienses ya están en la región [...] lo cual sitúa a Canadá en la primera línea para desarrollar el sector energético de Guatemala

81 Las reuniones de la PDAC (Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá) constituyen el encuentro más grande de la industria en el mundo.

[…] así como para entrar a los proyectos del plan Puebla Panamá" (Rojas-Arbulú, 2005).

Goldcorp: Marlin

El buque insignia del capital canadiense en Guatemala —y el proyecto más emblemático en términos de devastación ecológica y violencia social— es la mina Marlin, de la compañía Goldcorp. En parte financiada con 63 millones CAD del Plan de Pensiones canadiense, y ubicada en una zona montañosa a 130 kilómetros al noroeste de Ciudad de Guatemala, la Marlin ha estado rodeada de controversias mucho antes de que entrara en operación en 2005, pero la oposición se agudizó a partir de ese momento. Dos personas asociadas a la resistencia han sido asesinadas a la fecha.

La Marlin fue uno de los primeros grandes desarrollos mineros tras el final de la guerra en 1996, y es vista en la industria como un ejemplo de cómo las compañías extranjeras pueden entrar al sector de recursos naturales de Guatemala. En los años de la guerra (1960-1996), buena parte de las víctimas de los paramilitares eran indígenas maya quiché del departamento de San Marcos, en el que la mina Marlin está ubicada, y por ello no es ninguna sorpresa que la intrusión extranjera y el fuerte aparato de seguridad de la mina no hayan sido recibidos con los brazos abiertos por la gente de la zona. Son 18 las comunidades maya quiché y maya sipakapense que se han visto directamente afectadas por la mina. A lo largo de estos años, Goldcorp se ha hecho de tierras a través del fraude, aprovechándose de la pobreza de las comunidades indígenas (*ibíd.*).

Marlin destaca no sólo por su papel simbólico en el resurgimiento de la minería a gran escala en Guatemala, sino por su importancia económica. Como Peter Kent proclamó con orgullo en un discurso en Diálogo Interamericano en 2009 (en ese entonces Kent era ministro de Estado para las Américas de Canadá), Marlin fue ese año la fuente de ingresos individual más importante del Estado guatemalteco, lo que le otorga automáticamente a Goldcorp y a Canadá una fuerte

influencia en este país (Kent, 2009d). Veremos en un momento que Marlin ha recibido el apoyo sistemático del Estado canadiense y del gobierno guatemalteco.

Las comunidades indígenas de San Marcos afirman que, a pesar de los peligros ambientales, nunca fueron consultadas por el dueño original de la mina, Glamis Gold (Dougherty, 2011: 7). Glamis, que fue comprada posteriormente por Goldcorp, asegura que organizó cientos de reuniones de consulta en 2003 y 2004, pero los activistas indígenas aseguran que en realidad sólo se trató de reuniones promocionales sin ningún tipo de consulta a la población. Una evaluación de derechos humanos, comisionada por la propia Goldcorp, afirma que, en lo tocante a la cuestión de la previa consulta, "no se respetaron los derechos de los indígenas"[82].

Las comunidades de la zona, por otra parte, han expresado una gran preocupación en relación con el uso de cianuro para extraer oro (la mina contiene hasta 225 mil onzas de oro). Otro problema es que se necesitan 760 mil litros de agua al minuto para hacer funcionar la mina. Ambas cosas amenazan la sustentabilidad de la agricultura de la que depende una buena parte de la población. Cualquier mina es potencialmente tóxica, pero los problemas, en este caso, se han visto multiplicados por el total descuido con el que Glamis y Goldcorp han lidiado con esta cuestión. Doughery afirma que una Evaluación de Impacto científica de Marlin encontró "deficiencias de primer orden en el diseño ambiental de la mina, incluida la falla de Glamis de revestir el depósito de relaves estanque con revestimiento impermeable" (Dougherty, 2011: 8). Un estudio de la organización Físicos por los Derechos Humanos encontró que "la gente que vive en los alrededores de la mina tiene una alta concentración de arsénico en la orina", y que "uno

82 Sobre la evaluación citada, ver Common Ground Consultants, Inc. (2010). El reporte es crítico de Goldcorp y de su predecesor, pero su premisa —lo que no debe sorprender a nadie, dado que la evaluación fue solicitada por Goldcorp— es que la compañía, y la industria en general, son "partes interesadas" en las cuestiones de desarrollo relacionadas con las comunidades indígenas, incluso cuando acepta que el proceso de consulta no fue el adecuado.

de cada cinco participantes (en el estudio) tienen problemas cutáneos" (Basu y Hu, 2010; Physicians for Human Rights, 2010). Investigadores de la Universidad de Ghent encontraron también "un claro aumento en la concentración de muchos metales, incluyendo arsénico" y que "la concentración de arsénico en varios pozos alrededor de la mina Marlin supera por mucho los máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, así como los estándares canadienses y americanos de agua potable". Los investigadores de Ghent afirman también que "el agua clara está desapareciendo de la superficie" (Wauw, Evens y Machiels, 2010: 1, 3). La Asociación por el Desarrollo Integral de San Miguel (Adismi) conecta el problema del agua con el consumo de la mina, y afirma que diez pozos en el área se han secado ya (*ibíd.*). Un granjero dice que esta es la primera vez que algo así pasa en toda su vida (Russell, 2011).

Un estudio de 2011, llevado a cabo por economistas de la Universidad Tufts en Estados Unidos, afirma que los costos ambientales de la mina serán mucho mayores que cualquier beneficio económico. Esto debido a la baja tasa de imposición del gobierno guatemalteco; a que el dinero va al gobierno central y no necesariamente vuelve a la comunidad; a un riesgo ambiental "excepcionalmente alto y que seguramente aumentará más en la etapa final de la mina y después de su clausura"; y a que el proyecto "contribuye poco o nada a un desarrollo sustentable en el largo plazo" (Zarsky y Stanley, 2011). Goldcorp le dio un millón de dólares canadienses al gobierno guatemalteco como un depósito de garantía de que limpiaría la mina de un modo ambientalmente responsable, pero un estudio concluye que el costo de cerrar la mina será de unos 49 millones (Lewellyn, 2012). Pero no sólo es la salud de la población la que está en peligro. Pobladores de las comunidades aledañas afirman que las explosiones de dinamita en la mina han provocado cuarteaduras en sus casas.

Goldcorp ha sido multada varias veces ya por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN), incluyendo una por derramar cianuro en la carretera Panamericana cerca de la mina, y por no

tener una licencia apropiada para importar cianuro. El Ministerio le prohibió a la compañía importar cianuro hasta que no pagara la multa, una orden que la compañía simplemente ignoró. Entre septiembre y noviembre de 2010, la Unidad de Administración Ambiental del gobierno de Guatemala acusó a Goldcorp de echar agua tóxica de su depósito de desechos en un río —sólo se puede echar agua al río si ésta está limpia—. Como respuesta, la compañía pagó anuncios en los que se informaba que el proceso había sido supervisado por agencias regulatorias públicas. Pero los ambientalistas y la población de las comunidades afectadas responden que la compañía no le notificó al MARN ni tampoco tenía ningún permiso para echar ahí los desechos. Las multas, prohibiciones y acusaciones no han cambiado el comportamiento de la compañía, principalmente porque como uno de los principales inversionistas extranjeros en el país, Goldcorp tiene el apoyo de los gobiernos canadiense y guatemalteco. Ni el Ministerio de Energía y Minas ni ninguna otra institución gubernamental canadiense intervino en ninguno de estos casos para obligar a Goldcorp a cumplir con las regulaciones ambientales, o para penalizar a la compañía por violar la ley (Dougherty, 2011: 7-8; Ramírez, 2020; Rey Rosa, 2020).

El espaldarazo a Goldcorp por parte del Estado canadiense ha sido particularmente importante en la medida en la que se han aguzado las críticas a la mina. La resistencia de las comunidades indígenas ha atraído la atención internacional hacia las prácticas de Marlin y del gobierno guatemalteco por igual. Un reporte de inicios de 2010 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo, le "exigía al gobierno suspender la explotación en cuestión hasta […] que la consulta estipulada en el artículo 15 (2) de la Convención pueda ser llevada a cabo" (International Labour Conference, 2010: 770). A esta llamada de atención de la OIT le siguió una medida precautoria publicada el 21 de mayo de ese mismo año por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual tanto Canadá como Guatemala son parte. La medida incluía una orden para suspender las operaciones de la mina, puesto que concesión "fue otorgada,

y la explotación comenzó sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades mayas" (Mittelstaedt, 2010: B16; CIDH, 2010). La CIDH también resaltaba que las serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos y por contaminación de las fuentes de suministro de agua habían sido ignoradas. El gobierno canadiense aplaude con ruido las resoluciones de la CIDH cuando éstas encajan con sus intereses —como cuando criticaba a Hugo Chávez—, pero ha mantenido un silencio sepulcral respecto a las medidas legales contra Goldcorp en Guatemala.

En julio de 2012 nos encontramos con Javier de León, un dirigente de la Asociación por el Desarrollo Integral de San Miguel (Adismi). Nos dijo que "la explotación de oro y plata en San Miguel Ixtahuacán es la explotación ilegal del patrimonio del Pueblo Mam [...] porque no hay ningún permiso por parte de la comunidad: nunca hubo ningún proceso de consulta". Empatando con la OIT, De León dice que "de ninguna manera el gobierno llevó a cabo una consulta para saber si las comunidades estaban o no de acuerdo con la extracción de oro y plata"[83].

Las críticas de la CIDH y de la OIT fueron ignoradas tanto por la compañía como por el gobierno, y la mina siguió operando como si nada. Goldcorp se mantuvo apegada al libreto de siempre, afirmando contra toda evidencia que la operación de la mina no tendría consecuencias ecológicamente nocivas. "Las pruebas del gobierno guatemalteco y el constante monitoreo de la propia compañía demuestran que no hay evidencia de impactos adversos relacionados con la actividad minera en la explotación Marlin", insistió Goldcorp (Goldcorp, 2010).

La compañía tenía razón en no preocuparse demasiado acerca de las quejas de la CIDH, pues la mina no fue clausurada cuando la Corte emitió las críticas más duras. Lo más interesante, sin embargo, es que la CIDH modificó su posición hacia finales de 2011. Tras la publicación de nueva "evidencia" por parte de Goldcorp y del gobierno guatemalteco,

83 Entrevista de los autores con Javier de León (Sacmuj, Guatemala, 13 de julio de 2012).

la CIDH se mostró conforme, y dijo que todo lo que Goldcorp tenía que hacer era asegurarse de que se mantuviera la calidad del agua potable en la zona. La posición anterior, de crítica firme contra la mina y por la suspensión de sus actividades, se desvaneció en el aire (Nasdaq, 2011). Jennifer Moore, de Mining Watch, dijo al respecto:

> Es poco convincente que la CIDH se sienta satisfecha con la evidencia presentada por el gobierno guatemalteco y por un comité financiado por la propia compañía. El estudio más reciente presentado por el gobierno no resuelve la cuestión de si la mina está contaminando el agua de la zona, y las autoridades locales han criticado su parcialidad[84].

Todo el asunto del cambio de posición y el propio hecho de que no se detuvieran las actividades tras la resolución de la Corte está lleno de huellas que delatan la intervención y la maniobra del gobierno canadiense. Tras el pronunciamiento de la CIDH a finales de mayo de 2010 —el de la medida precautoria para que la mina suspendiera sus operaciones—, Relaciones Exteriores (FAIT) y la Embajada pusieron manos a la obra para ayudar a Guatemala y a Goldcorp a responder. Presionaron al gobierno guatemalteco cuando se inclinó a cerrar temporalmente la mina como una medida precautoria. También parece que el gobierno canadiense movió los hilos por detrás de bambalinas en la CIDH.

No sabemos con claridad cuál fue el verdadero rol del Estado canadiense en la revisión de la medida precautoria. Esta cuestión apenas recibió atención de la prensa (en Canadá o en cualquier otra parte) y los documentos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información de Canadá han sido censurados. Pero sí sabemos que hubo un gran tránsito de información y comunicaciones entre los funcionarios canadienses, guatemaltecos y los directivos de Goldcorp tras el

84 Moore citada por Mining Watch (2012d).

anuncio de la medida precautoria. Alexandra Bugailiskis, viceministra asistente para América Latina y el Caribe le aseguró a un ejecutivo de Goldcorp que "la embajada canadiense en Ciudad de Guatemala estará trabajando hombro con hombro con el gobierno de Guatemala para cerciorarnos de que se adopte un enfoque amplio [...] para que las autoridades guatemaltecas tengan toda la información necesaria para hacer frente a estos problemas" (Bugailiskis, 2010a). También sabemos que a principios de junio de 2011 el embajador canadiense, Leeann McKechnie, se reunió con el Vicepresidente guatemalteco, con el ministro de Minas y Energía, y con el ministro del Medio Ambiente (McKechnie, 2010). Poco después, los directivos de Goldcorp se reunieron en Ottawa con el Director General para América Latina y el Caribe de Relaciones Exteriores, James Lambert; con el Ministro de Estado para las Américas, Peter Kent; y con el Ministro de Comercio Internacional, Peter van Loan. En la minuta redactada por este último se lee que el gobierno "entiende la gran inversión llevada a cabo en la mina Marlin y su importancia para Goldcorp", y que "la Embajada está vigilando de cerca este asunto" (Marder, 2010a). A su vez, los representantes canadienses ante la Misión Permanente de la OEA en Washington se reunieron informalmente con personal de la CIDH en el mes de junio, de acuerdo con los cables entre Ottawa, la Embajada y la Misión. Esto también aparece en una comunicación entre el funcionario de las oficinas de Relaciones Exteriores Bugailiskis y un ejecutivo de Goldcorp (Patterson, 2010; Bugailiskis, 2010b).

Se dobló la apuesta cuando el gobierno guatemalteco anunció el 23 de junio de 2010 que, en respuesta a la medida de la CIDH, iba a comenzar el proceso para cerrar temporalmente la mina (a pesar de las declaraciones del presidente Colom de que las preocupaciones de la Comisión no tenían base alguna). Seguramente los funcionarios canadienses sabían de esta decisión de antemano. Sería en efecto sorprendente que no estuvieran al tanto en vista de la constante comunicación entre Goldcorp, la Embajada y el gobierno guatemalteco. Las relaciones de mutuo interés entre las élites sin duda que se han visto

fortalecidas a través de los viajes a la PDAC que la Embajada organiza para los tecnócratas del Ministerio de Minas y Energía guatemalteco. Todos estos factores ayudan a explicar el flujo de información con los funcionarios guatemaltecos, y también puede estar detrás la pronta carta que el ministro canadiense de Comercio Internacional le escribió a su contraparte guatemalteca el 18 de junio de 2010 (cuyo contenido es secreto) (Buss, 2010). Pero el anuncio de Colom desató otra tanda de mensajes y reuniones. El 24 de junio de 2010, los funcionarios de la Embajada y el propio Embajador se encontraron con el vicepresidente regional de Goldcorp para discutir la decisión del gobierno de clausurar temporalmente la mina (Moffett, 2010a).

También a finales de junio James Lambert se reunió otra vez con un alto ejecutivo de Goldcorp en Ottawa, y un mes después, Relaciones Exteriores (FAIT) le pidió a la Embajada que hiciera una lista de las "autoridades de alto nivel" del gobierno guatemalteco con los que Goldcorp no estuviera todavía en "comunicación constante"[85]. No conocemos los detalles de las reuniones, pero es evidente que después de haber declarado que buscaría clausurar temporalmente la mina, el gobierno guatemalteco nunca hizo nada concreto para que esto sucediera. Las reuniones continuaron a lo largo del otoño [entre septiembre y noviembre] de 2010, cuando se decidió la fecha de una audiencia para escuchar a los querellantes y al gobierno guatemalteco. Por ejemplo: el 8 de octubre, el nuevo Director General para América Latina y el Caribe de Relaciones (Lambert) y el exembajador en Honduras, Neil Reeder, se reunieron con directivos de Goldcorp (Dalby, 2010a). El 12 de ese mes el Comisionado Principal para el Comercio de Canadá, Sébatien Moffet, se encontró con un alto funcionario guatemalteco (no identificado), y Alan Culham, el embajador canadiense ante la OEA, se reunió con el presidente de la CIDH (Moffett, 2010b). Los mensajes entre Ottawa y la Embajada parecen indicar que los

85 Ambas citas provienen de una cadena de *emails* entre funcionarios de la Embajada y de las oficinas de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) en Ottawa entre el 9 y el 13 de julio de 2010. Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

canadienses estaban preparando a los funcionarios guatemaltecos para la audiencia. Culhan, por su lado, posiblemente más familiarizado con el funcionamiento de la Comisión, dijo que Relaciones Exteriores y la Embajada tenían que tener cuidado en sus apariciones públicas para que no dieran la impresión de que estaban interfiriendo con la independencia de la CIDH.

Posteriormente, la Embajada reportó a Ottawa que la audiencia "oficial" ante la CIDH "estuvo bien", y fue seguida ese mismo día por una segunda reunión "no oficial" en la sede de la propia Comisión, sobre la cual no se sabe nada más (Moffett, 2010c). Hubo reuniones entre directivos de Goldcorp, funcionarios guatemaltecos, canadienses y miembros de la CIDH durante todo el año 2011, hasta que la medida quedó diluida y la exigencia de clausura de la mina Marlin fue echada a un lado (Janoff, 2010; Dalby, 2020b).

Los vínculos entre el gobierno canadiense y Goldcorp no se terminan ahí. La prensa ignoró esto, pero un viaje organizado por los ejecutivos de la minera para funcionarios canadienses mostró los vínculos cercanos entre la compañía y el Partido Conservador. Entre los presentes se contaban los parlamentarios conservadores Dean Allison, jefe del Comité de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional (SCFAID) y Dave van Kesteren, miembre de ese Comité (y defensor del golpe contra Manuel Zelaya como parte de la estrategia de contención contra Hugo Chávez). La delegación también la conformaban el parlamentario liberal Massimo Pacetti y el independiente Bruce Hyer. Un *email* del exparlamentario liberal Don Boudria —hoy en día trabajando para Hill and Knowlton, una compañía que hace *lobby* para Goldcorp— a otro parlamentario conservador fue filtrado a Mining Watch en agosto de 2012. En éste, Boudria habla sobre el viaje organizado por el presidente y vicepresidente de Goldcorp, Ian Telfer y Brent Bergeron: una "visita fascinante" a Guatemala, viajando en "los aviones de Goldcorp". El viaje incluyó una visita a la mina y reuniones con ministros guatemaltecos. El presidente de la Comisión Legislativa de Guatemala, Edgar Cristiani, dijo que las pláticas con la

delegación canadiense girarían en torno a las "diferentes posiciones acerca de la minería, la experiencia de su país, la imposición fiscal, así como la cuestión de los conflictos"[86].

El viaje había sido organizado para varios meses después de que Bergeron testificara ante el Comité Permanente de Relaciones Exteriores (SCFAID), en donde abiertamente dijo:

> En Guatemala, me gustaría ver que se modernizaran las regulaciones mineras. Eso ayudaría a la estabilidad de la situación con la que lidiamos en el país. ¿Puedo ir como Goldcorp y entrenar a la gente del Ministerio de Energía y Minas? No puedo hacer eso. No se vería bien. Pero tiene más sentido que una institución del gobierno aquí en Canadá absorba nuestra experiencia —Recursos Naturales Canadá— y lleve esa experiencia a Guatemala[87].

Brent Bergeron, el vicepresidente de Goldcorp podía, por un lado, recomendar que su empresa adoptara una posición pública cauta para evitar que se generara una idea de demasiado poder sobre Guatemala, y, por el otro, admitía que apreciaba que el gobierno canadiense permitiera la extracción de recursos en casa y exportara esas prácticas agresivas a países en los que su compañía estaba presente. El viaje del que hablamos tuvo lugar luego de que el gobierno de Pérez Molina coqueteó con la idea de una reforma constitucional, discutida anteriormente, que le permitiría al gobierno guatemalteco quedarse con hasta el 40 por ciento de regalías de los nuevos proyectos. La propuesta no pasó a mayores, pero simboliza bien el clima de inestabilidad en el sector incluso en un país con un gobierno que generalmente es visto como totalmente favorable a los intereses del capital extranjero.

---

86 Cristiani, citado por Mining Watch (2012e).

87 La carta de Hill y Knowlton, y el testimonio de Bergeron, son citados por Mining Watch (2012f).

Goldcorp: Cerro Blanco

Hemos dicho que la mina Marlin ha sido la punta de lanza de la nueva ola de proyectos mineros canadienses. En la estela de su éxito, las inversiones canadienses han aumentado significativamente. Entre estas se encuentra otro proyecto de Goldcorp, Cerro Blanco, un proyecto de extracción de oro y plata en exploración avanzada, en la provincia de Jutiapa, en el sureste. La iniciativa Cerro Blanco ha encontrado oposición tanto en Guatemala como en El Salvador, pues se encuentra en la frontera de ambos países. Los críticos afirman que la mina contaminaría el lago Güija y los ríos en ambas naciones. Los salvadoreños están preocupados de que los desechos de la mina lleguen al colindante río Lempa, del cual dependen tres millones de personas. Un estudio llevado a cabo por la profesora de geoquímica e hidroecología de la Universidad de Ohio, Dina Larios, advierte que los desechos tóxicos de la mina podrían causar daños serios al ecosistema de los alrededores (Valladares, 2010b).

Skye/HudBay: Fenix

Otro ejemplo importante es la mina Fenix, localizada en la comunidad maya quiché de Las Nubes. Fenix podría convertirse en una de las minas de níquel más grandes del mundo. La historia de este proyecto se extiende hasta los años de la dictadura militar y de la Guerra Fría. En 1960, cuatro años después del golpe militar contra Jacobo Árbenz, el gigante canadiense de la minería, INCO, y la compañía americana Hanna Mining, formaron EXMIBAL. EXMIBAL obtuvo de los militares una concesión de 365 kilómetros cuadrados, tierras que Árbenz pensaba redistribuir en la reforma agraria que los militares anularon tras el golpe. Las comunidades mayas quiché afirman que nunca se les otorgaron esas tierras, ni tampoco fueron consultadas acerca del proyecto minero. A partir de los años setenta hubo un incremento en la oposición a INCO, con las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría y de la guerra civil de trasfondo. EXMIBAL y el gobierno guatemalteco respondieron con una ola de violencia. Los escuadrones de la muerte

asesinaron a varios opositores a la mina y amenazaron con matar a muchos otros[88]. Esto, aunado a las relaciones entre la compañía y la dictadura hicieron de la mina un blanco constante de ataques guerrilleros que la obligaron a clausurar. EXMIBAL volvió al país cuando la guerra terminó, y en 2004 le vendió la concesión a Skye Resources, cuyo director ejecutivo había sido director de INCO (Fitzpatrick, 2009; Rights Action, 2009b).

Skye se mantuvo leal a la tradición de violencia y desposesión una vez que sus planes de reactivar la mina se toparon con la oposición de la población. A fin de cuentas, incapaz de contener la crítica internacional y la intransigente oposición local a Fenix, la minera HudBay —que había comprado Skye en 2008 por 460 millones CAD para obtener la mina Fenix— le vendió el proyecto en agosto de 2011 al grupo financiero de Chipre Solway Group (Choc vs. Hudbay Minerals, 2011).

Tahoe Resources/Goldcorp: El Escobal

El Escobal es un proyecto minero platero en estado avanzado de exploración. Es propiedad de Tahoe Resources, con sede en Nevada, Estados Unidos —posiblemente para que pueda beneficiarse del acuerdo de comercio entre Estados Unidos y Guatemala—, pero cuyo principal accionista es Goldcorp. Con una inversión de 406 millones CAD, El Escobal posiblemente hará de Tahoe uno de los principales productores de plata en el mundo (Jamasmie, 2012). A pesar de las declaraciones del director general y presidente de la compañía de que El Escobal está "en una región receptiva a la industria minera", tres comunidades adyacentes al proyecto votaron masivamente en contra en referéndums. Un habitante de la comunidad de San Rafael las Flores ha resistido los intentos por parte de la compañía de comprarle su tierra, a pesar de que su parcela está totalmente rodeada y cercada por los terrenos de la mina (Rodríguez, 2012).

88 EXMIBAL e INCO fueron identificadas en el reporte de la comisión de la verdad y la reconciliación de Guatemala (también llamada Comisión para el Esclarecimiento Histórico), en un apartado sobre asesinatos (CVR, 1999: 99-104).

Radius Gold: El Tambor

El Tambor es un proyecto de oro y plata en fase de exploración que hasta hace poco pertenecía a la compañía canadiense Radius Gold[89]. El desarrollo está en El Carrizal, entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Goldo. Desde marzo de 2012, la gente de ambas comunidades protestó en la entrada de la mina en rechazo a su presencia. El Frente Norte del Área Metropolitana ha intentado detener la exploración y hacer que la compañía y el gobierno organicen una consulta pública que decida el futuro del proyecto. La población les llevó comida y dinero a los manifestantes que se plantaron a la entrada de la mina. Los activistas entienden perfectamente las consecuencias devastadoras de la minería (*Prensa Libre*, 10/04/2012). Johana Morales dice que "la mina podría contaminar las fuentes de agua, lo que podría dañar la salud de nuestros hijos debido a los químicos que usan para extraer metales. Es por esto que solicitamos que el proyecto detenga sus operaciones en nuestras comunidades" (*Prensa Libre*, 09/03/2012). El movimiento ha enfrentado represalias: los guardias de seguridad que trabajan para Radius llegaron a la comunidad de San José del Golfo a principios de abril y empezaron a disparar al aire hasta que los residentes los detuvieron.

La represión se hizo más intensa a partir del 13 de junio de 2012, cuando Telma Yolanda Oquelí Veliz casi fue asesinada por su activismo contra la mina. "Salía del campamento cuando su carro fue detenido por una motocicleta y un coche, y le dispararon tres veces", reportó la periodista canadiense Dawn Paley:

> Una de las balas atravesó su abdomen y sigue dentro de su cuerpo, demasiado cerca de la columna vertebral como para que se la pueda extraer sin problemas. Oquelí sufre de dolores constantes debido a los balazos. Sus atacantes, que ella cree que están vinculados con

89 Fue vendida a la empresa de Nevada Kappes, Cassiday & Associates en agosto de 2012.

> la alcaldía de San José del Golfo y con la compañía minera, no han sido identificados (Paley, 2012c).

Miguel Díaz Morales, un miembro de la comunidad de 83 años que pasó varias veladas en la barricada, le dijo a Paley que peleaba "por sus hijos y por nuestra tierra, en la que nacimos [...]. Defendemos nuestra tierra porque tenemos el derecho de hacerlo. Somos libres y tenemos el derecho de defender nuestra tierra".

Durante nuestra visita a San José del Golfo en julio de 2012, el tema principal de conversación era el de la represión y la intimidación con las que se había enfrentado la población. Jorge López nos explicó que la oposición había sido ignorada a pesar de que se había "mantenido apegada a la ley" y que sólo había organizado "manifestaciones pacíficas". "No quieren llegar a una solución. Intentamos hablar con el Ministerio de Energía y Minas y con el Ministerio del Medio Ambiente, pero no nos hacen caso". López dijo que los manifestantes:

> Hemos recibido amenazas de muerte por vía telefónica. Han aparecido grafitis en las casas de los miembros de la resistencia, a modo de advertencia. Pero aquí no hay líderes. Somos todos para uno, y uno para todos[90].

"Mira", nos dijo Antonio Reyes Romero, un activista contra la minería de la comunidad, "lo que nosotros queremos es esto: lo que queremos es que no haya explotación minera [...]. Y en este caso es Radius, una empresa canadiense, la que quiere explotar esta mina. El gobierno canadiense no lo va a evitar. Pero la gente en Canadá sí puede hacerlo. Pueden exigirle al gobierno canadiense que no deje que Radius venga y moleste a nuestro país"[91].

---

90 Entrevista de los autores con Jorge López (San José del Golfo, Guatemala, 8 de julio de 2012).

91 Entrevista de los autores con Antonio Reyes Romero (San José del Golfo, Guatemala, 8 de julio de 2012).

La dialéctica de la resistencia y la militarización

La expansión canadiense minera en Guatemala debe ser vista en el contexto de la transición hacia un nuevo modelo de acumulación, de la aguda resistencia popular y la polarización social que este modelo ha producido, y de la remilitarización de la política que el Estado ha desatado para mantener el control y asegurar la reproducción del sistema en condiciones de creciente inestabilidad. La inversión y la orientación geopolítica hacia Guatemala de las compañías y el Estado canadiense son cómplices de la devastación social. Si el ciclo de postguerra 1996-2003 fue uno de relativa desmilitarización, reducción de la violencia, despolitización y desarticulación de los movimientos sociales y de la izquierda, a partir de 2003 se ha abierto un nuevo ciclo de lucha de clases de una inédita intensidad (Yagenova, 2013: 135-149).

La economía política de la nueva coyuntura está caracterizada, primero, por las enormes ganancias de los bancos, la concentración de tierras en las manos de un puñado de capitalistas extranjeros y nacionales (incluyendo el capital ligado al narcotráfico); en segundo término, por el giro hacia el cultivo intensivo de azúcar de caña y palma africana, y por la construcción de enormes proyectos hidroeléctricos y megaproyectos como la autopista de la Franja Transversal del Norte (una carretera de 330 kilómetros que atravesará los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal) y el Corredor Tecnológico de Guatemala (un canal terrestre que conectará el Pacífico con el Atlántico a través de una enorme carretera); y, finalmente, lo más importante de todo, por la expansión de la extracción minera y petrolera (Yagenova, *op. cit.*: 137). La nueva estrategia de desarrollo de la clase dominante busca hacer de Guatemala un espacio de acumulación abierto al capital nacional e internacional que ignore el problema de la devastación ecológica, el desplazamiento de las comunidades indígenas y la destrucción de la economía campesina. Las consecuencias de esto han sido el aumento en la pobreza, el desempleo y el subempleo, la proletarización informal y el éxodo de trabajadores hacia México y Estados Unidos.

Estos padecimientos, tomados en su conjunto, han provocado la agudización del conflicto social.

Mario Godínez es un profesor universitario, miembro del Movimiento Nueva República, que a su vez fue parte del Frente Amplio, que participó en las elecciones de 2011 contra el derechista Otto Pérez Molina, del Partido Patriota. En una entrevista de ese año con el sociólogo uruguayo Raúl Zibechi, Godínez, sintetizó los principales componentes del nuevo modelo de acumulación y la violencia que conlleva:

> Estamos ante un fenómeno de expansión del modelo capitalista por dos vías: el crecimiento del agronegocio, sobre todo caña de azúcar y palma africana, y la expansión de la minería que conlleva la privatización del agua. En paralelo, el país se convirtió en un corredor del narcotráfico desde el sur hacia Estados Unidos, con una gran disputa territorial en la frontera entre Guatemala y México, lo que genera un escenario muy complejo. Las viejas oligarquías han entrado en alianzas con el narco y con las transnacionales que terminan por anular a un Estado ya de por sí muy débil, tanto en materia de derechos ciudadanos como en materia de seguridad. Buena parte de la violencia actual es provocada por "guardias blancas", ya que tenemos 60 mil efectivos de seguridad privada y 15 mil de policía. La llamada seguridad privada, legal o ilegal, protege en realidad a las mafias en un proceso de remilitarización del país (Zibechi, 2011).

El resultado de estos cambios económicos y políticos ha sido el mayor descontento social de los desposeídos y los explotados. Si este nuevo bloque de movimientos sociales ha sido por ahora incapaz de proyectar una alternativa nacional, en el nivel local y regional sí ha habido una aguda resistencia y una mayor militancia de las comunidades mayas. Las protestas más agudas han sido aquéllas ligadas a la degradación ambiental y la alienación humana —combinadas, casi

siempre— provocadas por la explotación de los recursos naturales a través de la minería, las presas hidroeléctricas y la explotación petrolera.

En el lustro 2005-2010 hubo 2.180 protestas registradas. En 2010 solamente hubo 242. Las más comunes fueron las manifestaciones (82), los bloqueos carreteros (53), las acampadas (27), las ocupaciones de edificios (15) y las huelgas (10). Los principales protagonistas de estas luchas, de acuerdo a la socióloga guatemalteca Simona Violetta Yagenova, fueron las comunidades campesinas mayas (Yagenova, 2011: 215-216). En 2011, estimuladas por una elección en la que la derecha era clara candidata, hubo 522 protestas. El siguiente año hubo 493, y el repertorio táctico se dividió de la siguiente manera: manifestaciones (225), bloqueos carreteros (90), ocupaciones de edificios (63), acampadas (47) y huelgas (28). En términos geográficos, hay más protestas en la parte occidental del país y en la capital. Con todo, durante los últimos años, las tradicionalmente tranquilas regiones orientales de Zacapa, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa también vivieron procesos de resistencia comunitaria ante el inicio de actividades mineras (Yagenova, 2013: 140).

A este proceso incipiente pero generalizado de resistencia rural e indígena contra el extractivismo, el Estado y el capital han respondido con una política igualmente generalizada de militarización y resurgimiento de las fuerzas paramilitares (Paley, 2012b). La "violencia acumulada" de la guerra genocida "no se resolvió con los acuerdos de paz". En palabras de Godínez:

> Ahora la seguridad se privatizó a través de una alianza entre las bandas criminales que actuaron en los años ochenta, que las integraban jóvenes pagados para destruir al movimiento popular, y militares anticomunistas. A esos grupos paramilitares le llamamos "guardias blancas". Con los acuerdos, esas bandas no desaparecieron y han adquirido un poder propio que ahora aparece ligado a las pandillas internacionales, las maras, vinculadas a los migrantes en Estados Unidos y en otros países centroamericanos. Hay una división del trabajo: las pandillas se encargan de la venta al menudeo de drogas,

> y el tráfico lo organizan los grandes carteles como el de Sinaloa en México, que ha ganado influencia en Guatemala. El cártel de los Zetas, por ejemplo, está integrado por militares guatemaltecos, grupos de élite como los kaibiles, y también mexicanos. Esos grupos fueron contratados por el cártel para cuidar sus negocios[92].

Entre 2002 y 2012 hubo por lo menos 120 activistas antiminería asesinados (Sosa, 2012: 19). La socióloga Yagenova reporta en su estudio de 2012 sobre los conflictos sociales que en ese año siete líderes comunitarios fueron asesinados, otros siete campesinos fueron masacrados por el ejército en Totonicapán durante un bloqueo carretero, y se intentó asesinar a un líder del movimiento antiminería (Yagenova, 2013: 142).

La política guatemalteca siguió una clara trayectoria hacia la militarización tras los acuerdos de paz. En éstos se recomendaba una serie de reformas para separar al ejército de puestos de seguridad doméstica, pero no fueron aprobadas —por poco— en el legislativo. En 1999, el Frente Republicano de Guatemala (FRG) ganó las elecciones presidenciales. Alfonso Portillo, el nuevo presidente, era un civil, pero el partido fue fundado por un dictador y, lo que es más simbólico, el General Efraín Gómez Montt, responsable del genocidio durante la guerra, se mantuvo como parlamentario y como principal líder.

En el año 2000 el ejército volvió con nuevos bríos a la vigilancia doméstica y se hizo cargo del patrullaje policiaco, las campañas antinarcóticos y de la seguridad en las cárceles. En 2003, los militares se empezaron a involucrar en actividades como la expulsión de campesinos ocupantes de tierras —el caso más sonado fue el de 800 familias expulsadas en el Valle del Polochic en 2011—. Para el año 2005, las fuerzas armadas ya estaban completamente involucradas en la represión del activismo antiminería, lo que

92 Citado por Raúl Zibechi (2012).

derivó en el asesinato de un hombre luego de que los soldados le dispararon a una protesta contra la mina Marlin. Durante las presidencias de Óscar Berger y Álvaro Colom se decretaron varias veces estados de emergencia y de prevención, durante los cuales se restringieron los derechos constitucionales y aumentaron las facultades de las fuerzas armadas. Esos estados de emergencia estuvieron motivados, sobre todo, por la iniciativa del Estado de reprimir las protestas contra los proyectos mineros e hidroeléctricos. En 2009, Colom reabrió la tristemente célebre base militar de Ixcán, donde se perpetraron una centena de masacres durante la guerra. La base colindará con una autopista cuyo desarrollo ha provocado ya un amplio descontento.

En 2010 se decretó el primer estado de emergencia desde el final de la Guerra; en 2011 y 2012 hubo otros más. Aunque el objetivo oficial de éstos era la lucha contra los cárteles, la ubicación geográfica los militares y, ante todo, los momentos en los que fueron anunciados, muestran que el verdadero objetivo consistía en derrotar las protestas sociales a través de la fuerza militar. Aunque posiblemente la expresión más nítida de la remilitarización de la política guatemalteca fue la victoria electoral en 2011 de Otto Pérez Molina, un general retirado responsable de la masacre de las comunidades de campesinos indígenas de la montaña durante la guerra (Granovsky-Larsen 2012)[93].

Godínez dice:

> Renace el militarismo en regiones en las que hay abundantes recursos naturales y proyectos megamineros. Por eso decimos que se trata un militarismo al servicio de las grandes multinacionales. Estamos ante una regresión dictatorial aunque haya elecciones. En Guatemala están ensayando formas de proteger a las inversiones neutralizando al Estado (Zibechi, 2011).

93 Para un mayor contexto sobre los conflictos agrarios en Guatemala durante la época neoliberal, ver Simon Granovsky-Larsen (2013: 325-350).

Las mineras canadienses son parte integrante de estas dinámicas[94]. Por ejemplo, el último estado de sitio declarado por Pérez Molina en mayo de 2013 entró en vigor en la región situada a 70 kilómetros al sureste de la capital donde la mina de plata de El Escobal, de Tahoe Resources, había provocado bloqueos carreteros y protestas de cientos de personas (*Prensa Libre*, 01/06/2013). Los guardias de seguridad de la compañía "dispararon e hirieron a varias personas el sábado (27 de abril del 2013) en San Rafael las Flores, en la carretera" en frente de la mina (Cuffe, 2013). La Ley Marcial fue decretada por Pérez Molina en los cuatro municipios que rodean a la mina —Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael las Flores—. Las libertades de tránsito, reunión, protesta, así como los derechos constitucionales básicos de los detenidos y los prisioneros fueron suspendidos. De acuerdo con varios reportes, Alberto Rotonda, el encargado de la seguridad en la mina Tahoe, fue "escuchado dando la orden de disparar, [...] mientras que varios heridos dicen que lo vieron sacar su arma y disparar también" (*ibíd.*). Rotonda fue arrestado y acusado por intento de homicidio cuando intentó huir del país.

El último estado de sitio se entiende a la luz de la larga historia de la mina Tahoe. Los representantes de la compañía y el gobierno guatemalteco "nos son hostiles", nos explicó Óscar Morales García en julio de 2012, cuando visitamos Las Flores. Él es un miembro del Comité Local por la Defensa de la Vida, un actor importante en la lucha contra Tahoe. Morales García nos dijo:

94 Por motivos de espacio, este capítulo se restringe a las protestas contra el imperialismo minero canadiense. Otra área de interés es el de las protestas de trabajadores migrantes. Unos cuatro mil guatemaltecos trabajan en el sector agrícola canadiense cada año, y enfrentan condiciones de explotación realmente duras. Uno de los signos más inspiradores de los últimos tiempos fue una manifestación de trabajadores migrantes frente a la embajada de Canadá en Ciudad de Guatemala, el 1 de septiembre de 2010, para protestar por las malas condiciones de trabajo, la violación de sus derechos por los empleadores, y el sistemático desinterés del Estado canadiense hacia esas violaciones. Ver United Food and Commerical Workers (2010).

> La compañía minera nos ha levantado cargos ante el Fiscal General por secuestro, terrorismo y coerción. Nos han tratado como criminales. Y sólo porque queremos que haya una consulta entre las comunidades. Nos han amenazado de muerte. Y ni siquiera tienen el valor de hacerlo ellos, cara a cara. Mandan a alguien a decirnos "oye, te van a matar"[95].

La hostilidad de la compañía hacia la gente ha provocado una oleada de respuestas y protestas, entre ellas una manifestación de más de 400 personas que bloqueó la entrada del proyecto, en enero de 2012. El 17 de septiembre de ese año, un camión que llevaba tubos metálicos y cables eléctricos fue interceptado por pobladores de la comunidad que confiscaron la mercancía. Al día siguiente, los depósitos de la mina y uno de los vehículos fueron quemados. Dos meses después, cuando las autoridades intentaron organizar un foro en Mataquescuintla, parte de la población quemó un hotel y robó dinamita de la mina (*Prensa Libre*, 01/06/2013). Amadeo de Jesús Rodríguez Aguilar es uno de los principales activistas del Comité Local por la Defensa de la Vida. Fue acusado por Tahoe de secuestrar al personal de seguridad luego de que entró pacíficamente a una reunión de accionistas. Quería dejar en claro la falsedad de la versión de Kevin McArthur, el fundador del Tahoe Resources, de que la mina cuenta con el apoyo popular y bienvenida. La compañía aprovechó el incidente para desatar una ofensiva contra la oposición, con la confianza de que el Estado y el ejército ven con simpatía a la industria minera (Rodríguez, 2012). "La plata, el oro y los metales de Tahoe están manchados de sangre", dice Morales García. "Puede que el gobierno le haya dado un permiso de explotación a la compañía, pero el permiso social, ese no existe. Y nunca existirá"[96].

95 Entrevista de los autores con Óscar Morales García (San Rafael las Flores, Santa Rosa, Guatemala, 9 de julio de 2012).

96 Cita en Cuffe (2013).

La expansión del capital minero canadiense a lo largo de las últimas dos décadas ha desatado un nuevo ciclo de lucha de clases cuyo epicentro es el campo guatemalteco (Yagenova y Garcia, 2009: 158). El caso más representativo posiblemente sea la mina Marlin. Este desarrollo inspiró a otros proyectos de exploración que, al no consultar a las comunidades, estimularon un nuevo movimiento antiextractivismo. Entre los años 2005 y 2008 hubo 1.482 protestas contra la minería (Yagenova y Garcia, 2009, *op. cit.*: 157). La columna vertebral del movimiento está formada por los campesinos indígenas, organizados para defender su tierra y la ecología. Una de las organizaciones más militantes formadas al calor de estas luchas, el Concejo de los Pueblos de Occidente, lucha contra la desposesión bajo el eslogan de "la defensa del territorio" (Yagenova y Garcia, *op. cit.*: 158). Su principio es la acción directa de las comunidades, en lugar del *lobbying* con el gobierno o las demandas legales (Urkidi, 2011: 567-568).

El apoyo del Estado canadiense hacia Goldcorp se ha traducido en la total impunidad y cinismo con la que la compañía se relaciona con el gobierno guatemalteco. Han sido las comunidades afectadas por la minería las que se han organizado para ponerle un alto. Los opositores, poniendo en riesgo su salud y su vida, han emprendido acciones para evitar que continúe con sus operaciones. A principios de diciembre de 2014, un grupo de manifestantes bloqueó un convoy de equipo minero durante 42 días. El bloqueo terminó cuando la policía, bajo órdenes del presidente Óscar Berger, les disparó a los manifestantes. Raúl Castro Bocel, uno de ellos, fue asesinado, y varias decenas resultaron heridos. En enero de 2005, un obispo local dirigió una protesta de más de tres mil personas en la capital provincial, y desde entonces recibe amenazas de muerte. El bloqueo y la violentísima respuesta estatal llevaron a la formación del Consejo Regional de Autoridades Indígenas de la Sierra Occidental, que exige respecto al territorio, consulta previa con las comunidades antes del inicio de cualquier proyecto, incluyendo la exploración, y ponerle fin a la criminalización de la protesta (Yagenova y Garcia, 2009: 161). Las organizaciones han tenido que capear

el temporal de la violencia. En marzo de 2005, por ejemplo, Álvaro Sánchez, un hombre de la comunidad, fue asesinado por un guardia de Glamis Gold —el dueño original de la mina Marlin— una noche que volvía a casa. Ese mismo mes, el carro de un líder indígena fue quemado, y él y otros dos activistas antiminería recibieron amenazas de muerte (Patterson, 2005b; Stueck, 2005: B14).

En enero de 2007, los representantes de las comunidades opositoras le enviaron a Marlin una carta a la compañía en la que hacían un listado de los agravios. La queja fue ignorada por la compañía, y los líderes de las comunidades dicen que los activistas fueron insultados por los directivos de la mina. De camino a casa, después de hacer entrega de la carta, la gente fue atacada por los servicios de seguridad de Goldcorp. Les echaron piedras, hubo disparos y los guardias intentaron introducir a una persona a un carro. Los activistas se defendieron y repelieron el ataque, pero la policía no hizo nada ante la denuncia de la agresión. Cuando corrió la voz acerca de la respuesta de Goldcorp a la carta, unas 600 personas de los pueblos colindantes se reunieron y bloquearon las carreteras que llevan a la mina. El gobierno llamó al equipo antimotines de la Policía Nacional Civil, que a su vez fue reforzado por medio millar de soldados. A pesar del despliegue de fuerza, las barricadas se mantuvieron durante más de diez días y la compañía tuvo que sentarse a negociar. Pero tan pronto éstas se levantaron, la compañía declaró que ya no iba a negociar, y presentó cargos contra 22 personas. El gobierno emitió órdenes de aprehensión contra siete de ellas. Los activistas dicen que Goldcorp presionó al gobierno guatemalteco para que emprendiera una acción judicial en contra de los manifestantes (Rights Action, 2009e). Dos de ellos fueron violentamente detenidos por la policía en sus casas durante la madrugada y transportados en vehículos de Goldcorp. Pero el asunto dio un giro positivo, que da una idea de lo absurdos que eran los cargos, pues los jueces absolvieron a cinco de los siete y a los otros dos les otorgaron libertad condicional (Rights Action, 2007; Intercontinental Cry, 2007).

La oposición a Goldcorp no reculó a pesar de la violencia con la que la compañía defendió sus intereses. En 2007, los activistas antiminería del municipio de Sipakapa lograron extender su resistencia a la arena electoral, a través del Comité Cívico Sipakapense. Dirigido por un activista, su lema "no a la mina" resultó ser ampliamente popular, y el comité derrotó a los candidatos financiados por la minera. Aunque la intimidación no se detuvo, la popularidad de la resistencia obligó a Goldcorp a cambiar de táctica y cambiar momentáneamente el palo por la zanahoria. La compañía abrió oficinas en cinco comunidades y ofreció dinero para proyectos comunitarios. Para contrarrestar los resultados de los estudios ambientales acerca de los dañinos efectos de la mina en el sistema acuífero, la compañía financió un análisis "independiente" del agua llevado a cabo por la Organización Comunitaria de Monitoreo Ambiental, que —no es casualidad— no encontró pruebas de contaminación (Urkidi, 2011: 569). Goldcorp pagó para que un grupo de promotores fuera puerta por puerta haciendo propaganda de la minería y para incentivar a la gente a vender su tierra. Goldcorp se aprovechó de la pobreza de la gente, y con sus proyectos de asistencia financiera y ofertas de empleo compró el apoyo a algunas personas, lo que dividió a la comunidad. Con eso, proclama que tiene el apoyo de la gente (Yagenova y Garcia, 2009: 163-164).

"Goldcorp insiste que la mina aumenta el bienestar social, pues el 64 por ciento de las 1.900 personas que trabajan en la mina son de San Miguel y Sipakapa", dice el sociólogo Leire Urkidi. "Sin embargo, han aumentado el alcoholismo, la prostitución y las violaciones; la comunidad se ha dividido y la protesta ha sido criminalizada" (Urkidi, 2011: 569). Esta opinión es compartida por Florencio Yoc, un activista con el que hablamos en julio de 2012: "Ese es el problema aquí en San Miguel, la mina sólo ha generado más división entre las familias"[97].

A pesar de la represión del Estado y de las fuerzas privadas de seguridad, y de los intentos de cooptación a través de las limosnas

97 Entrevista de los autores con Florencio Yoc (Sacmuj, Guatemala, 13 de julio de 2012).

distribuidas por la compañía, la resistencia no ha parado de crecer. "Dirigida por el cura y una red de líderes locales", explica Urkidi:

> La resistencia a la mina se ha extendido a lo largo y ancho de Sipakapa. Varios líderes han visitado otras zonas mineras en Centroamérica, como el Valle de Siria en Honduras, y formaron una asociación regional contra la minería. La Red Centroamericana Contra la Minería ha sido un componente clave del incipiente movimiento guatemalteco (Urkidi, 2011: 565).

En junio de 2008, Gregoria Pérez, una campesina maya y firme opositora a Marlin, dañó a propósito un cable de energía eléctrica de la compañía que atraviesa su propiedad. Cuando los empleados de la mina fueron a arreglar la instalación, los activistas no les permitieron la entrada. La lucha por el cable, y por la mina en general, continuó hasta julio, cuando la secretaria de Estado canadiense, Helen Guerguis, visitó Guatemala y se reunió con representantes de los inversionistas canadienses. El comunicado de prensa que anunciaba su visita describía a Guatemala como un importante socio regional (Hoffman, 2008: B1; FAIT, 2008).

Un año después, tras el fracaso de la tentativa de compra de tierras, Goldcorp metió vehículos y equipo de exploración a propiedad comunal y privada de la comunidad maya Mam de Sacmuj, en el pueblo de Ágel. Las quejas de la gente provocaron que el 12 de junio Goldcorp firmara un acuerdo para retirarse. Pero la compañía también solicitó la presencia del ejército y la policía, junto con sus guardias privados, para proteger a sus trabajadores. Cuando Goldcorp no cumplió con su acuerdo, la gente quemó uno de los equipos de exploración y un vehículo (Rights Action, 2009c). La tensión siguió aumentando a partir de ese incidente, y en agosto de 2009 un camión intentó atropellar a cuatro líderes comunitarios de San Miguel Ixtahuacan cerca de las oficinas de Adismi en Máquivil (Rights Action, 2009d). El 7 de julio de 2010, en Ágel, una activista fue gravemente herida al recibir un

disparo en la cabeza, en su casa. Antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte por participar en el movimiento. En esas semanas, varios activistas fueron atropellados (Rights Action, 2010). En septiembre del siguiente año, Goldcorp volvió a intentar entrar a Sacmuj para ampliar sus operaciones (Russel, 2010a)[98].

En San José Nueva Esperanza hablamos con Diadora Hernández, una opositora a la mina de origen maya, quien recibió un disparo en la cara a principios de 2012. Tiene un ojo de vidrio y perdió la audición en el oído derecho. "Quiero que se vaya la compañía", dice,

> porque ahora que la compañía empezó a explorar junto a mis terrenos habrá más problemas. Y ellos [la familia que vive en esa parcela] no han plantado maíz, y el rumor es que van a vender [la tierra a Goldcorp]. No hay tranquilidad. Estoy triste.

Con todo, Hernández no se ha quedado callada, y sigue al frente en la lucha, exigiéndole al gobierno que actúe en beneficio de la comunidad.

> ¿Y qué va hacer el gobierno? ¿Nos va a vender a la mina? ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Antes siempre pensaba que era bueno ir a hablar con el gobierno. Pero no nos hacen caso[99].

Como Tahoe y Goldcorp, Skye Resources también se ha tenido que enfrentar a la resistencia de la comunidad. Y del mismo modo que las otras compañías, su reacción ha sido la represión paramilitar y estatal. El permiso minero de Skye cubre los terrenos de 17 comunidades mayas q'eqchi. A principios de 2007, cinco de ellas fueron expulsadas con violencia extrema por varios cientos de

98 Además de la oposición a Marlin, el proyecto de Goldcorp en Cerro Blanco también ha suscitado una ruidosa oposición. Ver Valladares (2010a).

99 Entrevista de los autores con Diadora Hernández (San José Nueva Esperanza, Guatemala, 13 de julio de 2012).

policías, soldados y personal de seguridad de la empresa. En Lote 8 dispararon gas pimienta a los pobladores, varias familias huyeron al bosque cuando sus casas y cosechas fueron arrasadas. Volvieron una semana después para empezar a reconstruir, pero las fuerzas armadas volvieron y destruyeron un centenar de chozas y, durante el asedio, los hombres armados violaron tumultuariamente a por lo menos cinco mujeres (Russel, 2010b). La primera expulsión de Lote 8 fue filmada por el estudiante de doctorado canadiense Steven Schnoor. Schnoor grabó a una mujer protestando y tomó fotos de la violencia con la que se expulsó a la gente. La ONG Breaking the Silence le preguntó al embajador canadiense, Kenneth Cook, sobre el video de las expulsiones, y éste respondió que era una farsa, con actores pagados e imágenes de la guerra civil. Cook y Relaciones Exteriores se negaron a retractarse o a disculparse, así que Schnoor los demandó, y un juez declaró que los comentarios del Embajador eran "difamatorios" y "absurdos" (Balkissoon, 2010)[100].

Ante la presión de las comunidades y la atención internacional provocada por la violencia, Skye Resources vendió la mina a Hudbay Minerals a finales de 2008. Pero ni la resistencia ni la violencia disminuyeron. A finales de 2009, aumentó la intimidación contra los pobladores de Las Nubes, y un opositor a Hudbay fue asesinado. Los pobladores de la comunidad cuentan que en esas semanas llegaron la policía y la seguridad privada de la mina, les dijeron que se fueran, quemaron un edificio público y les dispararon. Luego, el 29 de septiembre, las fuerzas de seguridad arremetieron contra un bloqueo carretero en frente de las oficinas de la compañía. Varios manifestantes fueron heridos y Adolfo Ich Chub, un maestro maya de la comunidad de La Unión que había denunciado a la mina un par de semanas antes, fue secuestrado y acuchillado hasta la muerte por la seguridad de Hudbay. Unas horas después, en la madrugada del 30, un autobús que transportaba a varios líderes maya q'eqchi

100 El juez es citado en Olivera (2010).

fue ametrallado, lo que dejó a varias personas gravemente heridas. Uno de ellos, Paclo Bac —cuyo padre fue uno de los líderes contra EXMIBAL hasta su desaparición en 1981— murió meses después a causa de las heridas (Rights Action, 2009f). La respuesta de Hudbay a este baño de sangre fue decir que sus guaridas "dieron muestra de moderación y sólo actuaron en defensa propia" (Fitzpatrick, 2009).

Evidentemente, ese era un mensaje a los opositores a la minería, para que supieran que la compañía estaba dispuesta a echar mano de un terror similar al de la guerra civil. Sin ironía —o eso parece— la Asociación Minera de Canadá (MAC) le dio a Hudbay el premio a la "Minería Sustentable" en 2009, otorgado por el Parlamento en la reunión anual del "Día de la Minería" (Mining Watch, 2010).

La resistencia popular se mantuvo a pesar de todo, y a principios de 2011 Hudbay sufrió una inesperada derrota jurídica cuando la Corte Constitucional señaló que la comunidad del Lote 8 tenía derechos sobre la tierra concesionada por el gobierno a la compañía, y que la comunidad era dueña legal de los terrenos (Indian Law Resource Center, 2011). Mientras esto sucedía, en una corte de Toronto la viuda de Adolfo Ich y German Choc, quien quedó parapléjico tras un disparo, y las víctimas de los ataques sexuales, iniciaron un juicio contra Hudbay (Choc vs. Hudbay Minerals, 2012).

En un reflejo heredado de la Guerra Fría, es común que el gobierno guatemalteco y las mineras ninguneen las protestas como excentricidad de una pequeña minoría, escándalos de desafectos y parias incitados por agitadores extranjeros, a menudo ONG ambientalistas. La forma más efectiva de desmontar esta visión ha sido la organización de decenas de referéndums comunitarios, en los que la gente de la comunidad expresa su opinión sobre las mineras. Desde 2005 ha habido por lo menos 60 de ellos, con una abrumadora mayoría en contra de los desarrollos mineros en las comunidades.

Más de 700 mil personas, en un país de 14 millones de habitantes, han participado en referéndums municipales y le han dicho no a la minería (Dougherty, 2011: 3; Llewellyn, 2012). Una buena

muestra de este rechazo es el departamento de Huehutenango, en el que se han expedido la mayoría de las licencias mineras. Todos los municipios, con la excepción de la capital, han votado en contra de los proyectos mineros, siempre con una alta tasa de participación (Llewellyn, 2012). Por un lado, estas consultas están basadas en el artículo 169 de la OIT, que exige que todo proyecto que impacte a las comunidades indígenas de un Estado signatario debe ser precedido por consultas "con el objetivo de llegar a acuerdos y lograr el consentimiento hacia las medidas propuestas". El mismo artículo exige que "la reubicación sólo se llevará a cabo con el consentimiento libre e informado de los afectados" (International Labour Organization, 1989).

Pero es también claro que las consultas han sido impulsadas por activistas de comunidades pobres e históricamente oprimidas que han renovado una tradición de participación democrática de base, de auto organización y control sobre la vida de sus comunidades y de las actividades económicas que las afectan. "Pensamos que uno de los principios del movimiento por las consultas es que los medios no pueden ser separados de los fines", dijo uno de los representantes del Concejo de los Pueblos de Occidente:

> Pensamos que este es uno de los rasgos esenciales de las consultas comunitarias […]. Creemos que el primer paso es organizarnos y protestar contra el orden existente, contra los consorcios transnacionales, contra la explotación económica y sexual, el racismo, etc. Pero organizarnos de un modo en el que los medios sean coherentes con los fines, y donde podamos tejer las relaciones humanas que queremos. Quiere decir organizarnos sin una autoridad central, sin un líder carismático, de una forma en la que podamos crear la sociedad igualitaria del futuro[101].

101 Citado por Urkidi (2011: 573).

La respuesta a estas iniciativas de la industria minera y el Estado guatemalteco ha consistido en hacer oídos sordos. En junio de 2005, los pobladores del municipio de Sipakapa organizaron el primer referéndum comunitario sobre el proyecto Marlin. La mina fue rechazada por el 98 por ciento de los votantes. Glamis Gold ignoró los resultados (Koehl, 2006; Patterson, 2005a: C3). La Corte Constitucional de Guatemala declaró que el referéndum sobre la mina era inconstitucional y que por tanto no era vinculante. Para muchos, esto es una flagrante violación de los derechos indígenas expresados en el derecho internacional. Por su parte, el Comité de Expertos de la OIT criticó específicamente el régimen minero de Guatemala por violar sistemáticamente los derechos de los indígenas. Le exigió al gobierno guatemalteco "no otorgar ni renovar ninguna licencia de exploración y explotación de los recursos naturales [...] mientras no se lleven a cabo los procesos de consulta estipulados en la Convención" (International Labour Conference, 2009: 680).

Conclusión

"Estuve hace poco en Canadá y es claro que el problema no es la sociedad canadiense", nos dijo Óscar Morales García en San Rafael las Flores, hablando acerca de su participación en la resistencia a Tahoe Resources y Goldcorp:

> El problema es que estas compañías, esta gente viene a ver qué consigue aquí. No tengo nada contra la sociedad canadiense [...]. Son amigables y pacíficos. Nuestro problema tiene nombre y apellido, y es Tahoe Resources y Goldcorp[102].

102 Entrevista de los autores con Óscar Morales García (San Rafael las Flores, Santa Rosa, Guatemala, 9 de julio de 2012).

Estos sentimientos expresan bien el modo en el que las comunidades indígenas guatemaltecas se han visto obligadas a enfrentarse al capital minero canadiense y a las multinacionales de las industrias extractivas.

Este capítulo intentó poner la expansión minera canadiense en el marco más amplio de la guerra civil guatemalteca, los acuerdos de paz y la transición a un nuevo modelo de acumulación y violencia durante el período neoliberal. Al mismo tiempo, intentó poner el énfasis en la acción de las comunidades rurales indígenas que están en la primera línea de defensa contra la depredación del capital. Estas comunidades rompen cualquier esquema que las pinte como víctimas pasivas, especialmente porque se enfrentan a enemigos verdaderamente poderosos, dispuestos a echar mano de una fuerza desmedida con tal de aplacar la oposición. Después de haber analizado Guatemala y Honduras, las piezas centrales del rompecabezas del imperialismo canadiense y la resistencia popular en Centroamérica, el siguiente capítulo estudiará los patrones de expansión y de oposición al capital en el resto del istmo.

Desposesión y seguridad en centroamérica

Honduras y Guatemala son los casos más simbólicos de intervención imperialista canadiense en Centroamérica durante el período reciente, pero el patrón general analizado en los dos capítulos anteriores se puede ver también en el resto de la región. En este capítulo analizaremos los intereses políticos y económicos de Canadá en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá durante el período neoliberal, en el contexto del desarrollo histórico de cada país y en el de los ritmos de la resistencia a la que se ha enfrentado el capitalismo canadiense. Una vez que hayamos estudiado estos cuatro casos, trazaremos los principales rasgos de la estrategia de seguridad canadiense para Centroamérica en su conjunto, e intentaremos mostrar la manera en la que ésta emana directamente de los intereses materiales del capital y de las estrategias geopolíticas del Estado canadiense.

El Salvador

La Guerra civil salvadoreña terminó en 1992, tras un acuerdo de paz que emergió del empate militar entre el régimen anticomunista y el movimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El FMLN se transformó en un partido político electoral y la derecha encontró su principal expresión política en Arena, Alianza Republicana Nacionalista, originalmente formada en 1981. Las

fuentes de la insurgencia guerrillera se encuentran en el control de la oligarquía agraria —las tristemente célebres 14 familias— sobre la exportación de café y azúcar, y el consecuente control sobre la economía y la política. Los pobres, explotados y marginalizados, se rebelaron constantemente a lo largo de la historia moderna de El Salvador, y la oligarquía respondió sistemáticamente con la violencia militar. El éxito del llamado a las armas del FMLN era un claro indicador de lo insostenible de la situación[103].

Sin embargo, los acuerdos de paz no implicaron una ruptura con la economía neoliberal, todo lo contrario. La desigualdad económica y la exclusión social en El Salvador se mantienen hasta el día de hoy. El legado autoritario sobrevive en las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), que reemplazó a las fuerzas de seguridad militarizadas. En los años que siguieron a los acuerdos de paz, la PNC ha sido vinculada con los cárteles, ha sido acusada de torturar detenidos y de permitir a escuadrones de la muerte el asesinato de jóvenes de barrios marginados en campañas de "limpieza social" justificadas por políticas de mano dura contra el crimen. Ha habido un alza en la violencia en la sociedad en general, ligada en su mayor parte a la guerra contra el narcotráfico. El Salvador es uno de los países más violentos en América Latina y el Caribe (Wolf, 2009: 430, 444-445; Holland, 2013: 44-67).

La intensificación del neoliberalismo a lo largo de la guerra civil puede ser explicada en función del cambio de rumbo de los diferentes sectores de la clase capitalista salvadoreña, y por los efectos que esto produjo en las inclinaciones políticas de estas facciones. La guerra civil condujo al debilitamiento de la producción nacional y precipitó la fuga de capitales. El tradicional sector agroexportador redujo su importancia. En parte como una respuesta a la decadencia de los sectores tradicionales, las reformas neoliberales que abrieron el comercio y privatizaron las empresas de propiedad estatal, intentaron

103 El contexto histórico es proporcionado correctamente en Dunkerley (1982).

cambiar el modelo de acumulación hacia la exportación de productos agrícolas no tradicionales, nuevas actividades comerciales y el impulso al sector servicios.

La consecuencia de todo esto fue que grupos económicos emergentes se aliaron con el capital internacional, atraído a su vez por las iniciativas de privatización (Wolf, 2009; Albiac, 1999: 841-64; Paniagua, 2002: 609-93). Cuando quedó claro que las fuerzas armadas no iban a poder derrotar al FMLN, y que la inestabilidad de la guerra impedía una mayor atracción de inversiones, los sectores emergentes de la burguesía promovieron a Arena como la articuladora de una coalición conservadora, dirigida por un sector del empresariado, con el objetivo de llevar a cabo una transición afín a los intereses del capital. El establecimiento del gobierno de Arena con Alfredo Cristiani (1989-1994) como presidente, fue una muestra del éxito de la nueva orientación por parte de los sectores emergentes de la burguesía y permitió que los acuerdos de paz se encaminaran a su resolución final en 1992. Arena se puso a la cabeza de un sistema político descrito por la socióloga Sonja Wolf como "autoritarismo electoral" (Wolf, 2009: 430), y repitió la fórmula en las elecciones de los años 1994, 1999 y 2004, en las que se mantuvo en la presidencia.

Bajo los gobiernos de Arena se aceleró el proceso de privatización. Los sectores emergentes del empresariado consolidaron su poder, y algunas familias de la oligarquía tradicional recuperaron su peso económico al pasar del agronegocio al comercio, la construcción y otras ramas, a menudo en alianza con gigantes transnacionales (Bull, 2013: 265-295). Durante el gobierno de Francisco Flores Pérez (1999-2004) se firmó el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA), que asentó las condiciones de un buen ambiente de inversión para el capital extranjero, a pesar de la dura oposición de organizaciones como el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, y la red Sinti Techán, Red Ciudadana frente al Comercio e Inversión (Spalding, 2007: 85-114).

Como parte de la política de generar mejores condiciones para los inversionistas extranjeros, en 1995 se aprobó una nueva ley minera que reemplazó a la de 1922. La nueva legislación incluía regalías del tres por ciento sobre las ganancias netas. Recién saliendo de la guerra, el gobierno salvadoreño justificó los bajísimos impuestos en términos de la nueva realidad neoliberal y la consecuente necesidad de ser "competitivo" frente a sus vecinos. La respuesta guatemalteca fue reducir las regalías del seis al uno por ciento. A su vez, frente a la reducción en Guatemala y la ley minera hondureña aprobada tras el huracán Mitch, que reemplazó las regalías con un impuesto del uno por ciento, El Salvador reformó la ley de 1995 en el año 2001. Después de un acalorado debate en el Congreso, se adoptó una tasa del dos por ciento, aunque, como veremos más adelante, la llegada masiva de las mineras canadienses provocó un gran debate acerca de la política minera (Dougherty, 2011: 10).

No se puede saber con certeza cuál es el monto total de la inversión canadiense en El Salvador, pero es un hecho que gran parte de esta inversión está orientada hacia los sectores minero y bancario. Las tres multinacionales más grandes activas en este país son canadienses: Intrepid Minerals, Aura Silver Resources y Pacific Rim Mining (esta última fue vendida a una compañía australiana en 2013). Scotiabank, a su vez, compró — en 2007 y por 170 millones de dólares— el Banco de Comercio, uno de los principales del país (Dalby, 2010). El capital canadiense tiene también una modesta presencia en el sector maquilador, y recientemente Bell and Tellus entró al sector de telecomunicaciones. El Salvador fue parte de las negociaciones entre Canadá y los Cuatro Centroamericanos (CA4) para crear un nuevo tratado de libre comercio, pero, como mencionamos antes, las negociaciones se empantanaron y Canadá hizo un acuerdo separado con Honduras después del golpe en este país.

Sin embargo, como en el resto de Centroamérica, el capital canadiense se ha tenido que enfrentar a la resistencia popular. El posible daño ocasionado por la actividad minera al ya limitado suministro de

agua ha provocado una amplia oposición a la minería en general y a las compañías canadienses en particular. Ha habido manifestaciones frente a la embajada canadiense, lo que muestra la percepción de un claro vínculo entre las mineras y el gobierno de este país (Pérez, 2010; Sosa, 2012: 19-20). En la opinión pública también se vincula ahora a la minería canadiense con la devastación ecológica (*La Jornada*, 20/11/2012; Alerta Minera, s/f; *Voces*, s/f).

La compañía canadiense más famosa era de lejos Pacific Rim, que tenía tres proyectos de exploración. La casa matriz estableció una subsidiaria en Estados Unidos en 2007 para poder aprovecharse del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, que incluye a El Salvador. En 2002, Pacific Rim compró El Dorado, un depósito de oro y plata a cien kilómetros de la capital, en el pueblo de San Isidro, Cabañas. La mina, considerada la joya de la corona de Pacific Rim, es parte de un yacimiento áureo de 50 kilómetros que atraviesa Guatemala, El Salvador y Guatemala, y los estudios iniciales sugirieron que podría valer hasta 3.300 millones de dólares. La compañía recibió un permiso de exploración en 2005 (Zucker, 2010: 41; Lydersen y Wallach, 2010). Tras el inicio de esta etapa, Pacific Rim organizó una campaña para convencer a los campesinos de vender o rentar sus tierras. La población de la localidad de San Isidro reportó que en las reuniones comunitarias los representantes de la compañía les dijeron que es seguro beber agua contaminada con cianuro. Un vecino dijo que "la compañía cree que somos unos campesinos ignorantes de sombrero que no tienen idea de lo que están haciendo" (Broad y Cavanagh, 2011).

Desde el primer día Pacific Rim fue objeto de una dura oposición por parte de las comunidades de Cabañas, las ONG ambientalistas y la propia Iglesia católica. La veta está muy cerca del Río Lempa, una de las principales fuentes de agua clara de la capital y de Cabañas. La gente está preocupada por la posible contaminación del agua con mercurio, cianuro, arsénico y zinc, pues no ha habido evaluaciones independientes del impacto ambiental de El Dorado. Además, Pacific Rim hubiera pagado un nimio dos por ciento de regalías bajo la ley en

vigor (Lydersen y Wallach, 2010). La mina también consumiría, según un estudio científico, entre 75 y 110 litros de agua por segundo del río San Francisco, en un país que constantemente padece escasez y que es considerado el tercero más desigual en la región en acceso al agua potable (Ayala, 2010; Cavooris, 2011).

De cara a una elección, el presidente conservador de Arena, Elías Saca González, se dio cuenta del gran descontento que generó El Dorado y la megaminería cuando la exploración de Pacific Rim provocó que se secaran los pozos de agua de los rancheros, el sector que constituye su base social. El presidente Saca expresó públicamente su enfado con la mina a principios de 2009 y declaró que no se le otorgarían nuevos permisos a Pacific Rim, a pesar de que su partido es un aliado tradicional de las mineras. El descontento tuvo resultados concretos: 24 concesiones mineras, incluyendo El Dorado, fueron suspendidas por el gobierno mientras se discutía una nueva ley en el Congreso, como respuesta oficial a las preocupaciones ambientales generadas por la megaminería (Zucker, 2010: 42-47; Dyer, 2009; Wallach, 2009a).

Como el resto de las mineras canadienses, Pacific Rim echó a andar una campaña de relaciones públicas para ganarse a sectores de las comunidades. Patrocinó varias iniciativas de "responsabilidad social" en Cabañas como parte de su campaña denominada "minería verde". A pesar de eso, la compañía ha sido incapaz de comprar a las comunidades locales, y se la ha acusado de repartir dinero del portafolio de responsabilidad social a algunos alcaldes. Como dijo un activista de la radio comunitaria, "esa es la manera con la que la compañía controla a los alcaldes" (Zucker, 2010: 42; Wallach, 2009a).

Pero detrás de los dólares de la responsabilidad corporativa hay una campaña a sangre y fuego contra los activistas antiminería (Council of Canadians, Common Frontiers, Mining Watch Canada, s/f; Moore, J., 2011). La campaña incluyó cinco presuntos asesinatos entre junio de 2009 y julio de 2011, así como disparos, asaltos, secuestros y amenazas de muerte (*Radio Mundo Real*, s/f; La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, 2012a). En junio de 2009, por ejemplo,

un activista y militante del FMLN, Marcelo Rivera de San Isidro, fue secuestrado, torturado y ahorcado hasta morir; su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo. La policía quiso cerrar el caso diciendo que había sido atacado por pandilleros. En julio de ese mismo año, otro miembro del movimiento, el padre Luis Quintanilla, fue amenazado por hombres enmascarados luego de recibir amenazas de muerte. Dos semanas después, uno de los principales organizadores de bloqueos carreteros, Ramiro Rivera, recibió ocho disparos en las piernas y la espalda (Collins, D., 2009: 262). Radio Victoria, la radio comunitaria que le ha dado voz a las protestas, se ha convertido en un blanco constante. Varios empleados han recibido amenazas de muerte (CISPES, 2011; Mackey y Simon, 2012). "Hemos tenido que sacar a la gente de sus casas a la mitad de la noche", dice Óscar Beltrán, un periodista de Radio Victoria. "Creo que no han podido atacarnos porque actuamos antes que ellos. Si no fuera por eso, me parece que estaríamos llorando a por lo menos cinco de nuestros colegas"[104].

Pacific Rim insiste en que no tiene nada que ver con la que claramente es una campaña de terror organizado, y afirma que ha sido injustamente víctima de "acusaciones infundadas hechas por algunos grupos antiminería" (Lydersen y Wallach, 2010). La compañía y la policía salvadoreña dicen que estos son incidentes que no tienen ninguna relación con la mina (citan una pelea de borrachos que se salió de control, por ejemplo), pero el hecho de que los cuerpos de las víctimas tengan signos de tortura, y que en dos años y medio ya hayan sido asesinados cinco activistas antiminería hace poco creíbles estas versiones. Algunos activistas han acusado a los alcaldes de Arena involucrados en las campañas de responsabilidad social de Pacific Rim de ordenar o permitir los ataques contra sus organizaciones, y de acuerdo con la población de las comunidades, una de las personas identificadas en el tiroteo contra un opositor no sólo es personero de los alcaldes de Arena, sino que trabajó para la compañía como

104 Citado en *El Diario* (23/07/2013).

promotor (Colectivo de Derechos Humanos, 2009; Montalvo, 2010). Pero incluso si Pacific Rim no puede ser directamente vinculada con los ataques, es claro que sus opositores han sido las víctimas, y es por lo menos parcialmente responsable puesto que la violencia es un claro resultado de su presencia.

La represión sistemática no es la única amenaza que pende sobre los salvadoreños. Paralelo a la violencia ha habido un asalto legal contra el país, un asalto que no se puede tomar a la ligera dado que El Salvador es uno de los Estados más pobres en América Latina. Como dijimos antes, ante la amplia oposición, el gobierno no otorgó a la compañía más licencias de explotación o de exploración. La respuesta de Pacific Rim fue iniciar un juicio de arbitraje contra el gobierno ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial por más de cien millones de dólares en daños, incluyendo la pérdida de futuras ganancias, argumentando que el gobierno rompió los términos del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) y violó sus propias leyes de inversión (*The Globe and Mail*, 01/06/2010; HispanTV, s/f; Moronta, 2013). Hay que decir que el Banco Mundial difícilmente es un árbitro neutral, en vista de que financia proyectos de minería a cielo abierto como parte de su programa de desarrollo. El ICSID determinó que la demanda no podía proseguir al abrigo del CAFTA, porque la compañía "no tiene actividades substanciales en Estados Unidos", pero sí permitió que prosiguiera al abrigo de las leyes de inversión de El Salvador (*The Globe and Mail*, 01/06/2010)[105]. Pacific Rim continuó con la demanda, y en 2013, justo antes de ser comprada por una compañía australiana, reclamaba el pago de 315 millones de dólares (*Contrapunto*, 04/04/2013). Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UES), dice que la compañía está "extorsionando" al país. Ibarra afirma que

105 El caso llegó al Centro Internacional para la Resolución de Disputas Relativas a la Inversión en Washington, D.C. Ver también HispanTV (s/f) y Moronta (2013).

"es falso que la compañía haya promovido el desarrollo de Cabañas o de El Salvador. Actuaron como una organización criminal, robando y saqueando a la gente"[106].

Los problemas a los que Pacific Rim se ha enfrentado en El Salvador son emblemáticos del precario estado de las inversiones mineras extranjeras en el país. La movilización de las comunidades —y la extrema violencia vivida por los activistas— ha puesto los problemas de derechos humanos y de devastación ambiental provocados por la minería industrial en el corazón del debate público. Los salvadoreños han comenzado a organizarse con los guatemaltecos y los hondureños para plantarle cara a las mineras canadienses en el istmo. Los movimientos sociales comparten experiencias e información a través de las fronteras. Una muestra de esta tendencia es el establecimiento de un capítulo salvadoreño del Movimiento Mesoamericano Contra la Minería Metálica (M4) (OCMAL, 2013). Como resultado de esta y otras iniciativas de los movimientos sociales, los proyectos se han visto interrumpidos. Además, desde 2009 Arena se mostró como un aliado frágil de la industria, y el sucesor de Saca en la presidencia, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, tampoco cumplió las expectativas de la industria.

El FMLN pasó la mayor parte de los años de posguerra enfrascado en luchas internas entre una corriente de izquierda favorable a los principios revolucionarios originales de la organización, los ortodoxos, y los renovadores, una corriente de derecha favorable a alejarse de esos compromisos y llevar al partido al centro político. Entre 1994 y 2009, el partido tuvo algunos logros electorales en el Congreso y ganó varias alcaldías, pero los candidatos presidenciales de los ortodoxos no tuvieron éxito. La victoria de Funes cambió esta tendencia (Wolf, 2009: 447-450). De acuerdo con dos observadores de la política salvadoreña y simpatizantes de un FMLN renovado, Héctor Perla Jr. y Héctor Cruz-Feliciano, el FMLN

106 Citado por *Contrapunto* (04/04/2013).

> tomó el poder a través de las elecciones, con un candidato presidencial que ni siquiera era un militante del partido pero que tenía arrastre entre los votantes de centro y de clase media. Como resultado, el periodista Mauricio Funes ganó la presidencia sin comprometerse con los ideales revolucionarios originales, y su gobierno consiste en una mezcla de políticas sociales progresistas, ocasional confrontación con el FMLN, componendas con las élites locales y apaciguamiento de los Estados Unidos (Perla Jr. y Cruz-Feliciano, 2013: 84).

Algunos piensan que las referidas componendas influyen en que el gobierno del FMLN haya sido incapaz de tomarse suficientemente en serio el problema de la violencia contra los activistas opositores a la minería (La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, 2012b). Un periodista de izquierda, por ejemplo, escribió sobre la represión sufrida por los activistas contra Pacific Rim afirmando que Funes "ha hecho muy poco para castigar a los culpables de la violencia en Cabañas" (Wallach, 2009b).

Sin embargo, se prendieron las alarmas en la industria minera cuando la prensa anunció, poco después de la asunción de Funes, que el nuevo presidente quería implementar una prohibición total sobre la minería, y que había designado al exdirector de una ONG ambientalista, Hernán Rosa Chávez, como ministro de Medio Ambiente. "Uno de los asuntos más complicados en su portafolio", escribe el geógrafo Anthony Bebbington,

> fue colaborar con el Ministerio de Economía y Comercio para llegar a una nueva política nacional de minería en una situación en la que varios movimientos sociales y organizaciones exigían una cancelación inmediata de los proyectos [mientras] la élite empresarial quería lo contrario (Bebbington, 2012: 1154).

De hecho, Funes nunca asumió una posición clara (a pesar de que una encuesta señalaba que dos tercios de los salvadoreños apoyaban la prohibición de la extracción de metales preciosos), y más bien se comprometió a no admitir nuevos proyectos de explotación durante su gobierno. Esta posición fue reafirmada tras el quinto asesinato de un activista opositor a Pacific Rim en el verano [mayo a agosto] de 2011 (Hill, 2010; Achtenberg, 2011). Funes y el Congreso apoyaron luego activamente una Evaluación Ambiental Estratégica, con el objetivo de retrasar el proceso de discusión de una nueva ley minera y cambiar el eje de la discusión, de lo político a lo técnico (el establecimiento de una nueva ley minera, sin duda, constituye una espada de doble filo para Canadá). Una nueva ley favorable a la inversión extranjera sería, por supuesto, una gran victoria para los inversionistas, pero la sólida oposición a las compañías mineras implica que tal resultado no está garantizado, y, en efecto, surgió una propuesta legislativa que exige la prohibición total de toda actividad minera.

Los movimientos sociales no han dejado de presionar al gobierno del FMLN para que prohíba toda extracción de metales, y el más importante de los opositores extraparlamentarios es la Mesa Nacional contra la Minería Metálica de El Salvador. Carlos Flores, uno de los líderes de La Mesa, expresó la posición de esta organización en una intervención ante el Congreso en julio de 2013. Dijo que "venimos a la Asamblea a presentar una propuesta en la que reiteramos nuestra exigencia de los últimos siete años y es que la Asamblea Legislativa discuta y apruebe la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador", y enfatizó: "Tenemos que adoptar acciones concretas y tajantes para prohibir la minería metálica; el primer paso es que la Asamblea prohíba la minería por ley". La prohibición, explicaba un comunicado, "puede dar mayor legitimidad y fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a Guatemala y Honduras que suspendan proyectos mineros ubicados en las fronteras" (*América Economía*, 23/07/2013).

"Los empleos generados por la minería son irrelevantes comparados con el impacto negativo a la salud y el medio ambiente", continúa el comunicado. El documento, además, recuerda el caso de la actividad minera en San Sebastián, en el este del país, que dejó a la comunidad adyacente sin agua y con enormes problemas de salud:

> En todos lados se repite el escenario en el que los megaproyectos mineros destruyen el tejido social de las comunidades y provocan el desplazamiento y la migración forzosa; las comunidades son reprimidas cuando se oponen (*Periódico Correo*, 22/07/2013).

Las exigencias de La Mesa también han sido tomadas en cuenta por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Óscar Luna, director de esta institución, habló ante la asamblea en octubre de 2012. "Sabemos que estos proyectos tienen un impacto negativo sobre el derecho a la vida, la salud, la nutrición adecuada, el agua y muchos otros relacionados con el medio ambiente". Héctor Ibarra, de la Universidad de El Salvador, respaldó la intervención de Luna y criticó al gobierno del FMLN por no darle una respuesta adecuada a las propuestas de La Mesa (*Contrapunto*, 15/10/2012).

Durante la controversia referida a Pacific Rim, el embajador canadiense, Marianick Tremblay, y los funcionarios de la Embajada, promovieron los intereses de la industria minera cuando entró en vigor la moratoria "ilegal", ésta fue la palabra usada por un directivo de una de las mineras (Nota Diplomática [con el nombre del autor censurado], 2011)[107] y comenzó el debate acerca de la minería. Por supuesto, permitir que los salvadoreños tomaran una decisión acerca del futuro de la minería nunca fue una opción. Canadá se arrogaba el derecho de emitir una opinión o intentar cambiar el curso de las cosas, especialmente si un pequeño país tomaba decisiones equivocadas. La Embajada organizó una sesión con representantes de la

107 La fuente está censurada pero la carta fue enviada a personas de la Embajada.

Asociación Minera de El Salvador para discutir la estrategia a seguir y en la que se discutió cómo la misión diplomática podría defender de la mejor manera a las compañías canadienses, aunque este celo se vio templado por la advertencia de que la Embajada y la industria deberían ser cuidadosas en su defensa pública de la minería en vista de la ola de asesinatos.

Este intento de moderar los apetitos mineros fue apenas una medida de relaciones públicas, pues un mensaje emitido desde la Embajada en El Salvador a Ottawa, de principios de 2011, señalaba que a pesar de las dificultadas enfrentadas por la industria, "el debate político sobre la minería está lejos de haberse terminado", y apuntaba algunos "pasos positivos" —entre ellos que el Ministerio de Economía contrató a una consultora ambiental para estudiar la viabilidad de la minería, y que ésta buscó la ayuda de las compañías canadienses—, algunos avances que "indican que [palabras censuradas] las autoridades salvadoreñas puedan estar dispuestas a considerar el tema [palabras censuradas]". El mensaje señala, además, que "La Embajada se mantendrá al pendiente de las preocupaciones de las compañías canadienses" y considera la posibilidad de llevar "a un experto canadiense a El Salvador para discutir sobre la minería" con los funcionarios salvadoreños y con la consultora externa (Calderón, s/f)[108].

La Embajada se mostró todavía más optimista poco después, cuando un analista de la minería de la Asamblea Nacional salvadoreña buscó al embajador Tremblay para discutir la política minera, lo que fue interpretado por un funcionario de la misión diplomática como "una excelente oportunidad para ofrecerle al gobierno salvadoreño nuestro consejo y experiencia" (Calderón, 2011b).

Otra herramienta común del arsenal diplomático canadiense para defender a la industria minera de las críticas de los movimientos

108 Se había planeado la visita de un "experto" en cianuro para el año 2009, pero, de acuerdo con una carta de un representante de la compañía, la Embajada canceló el viaje. La misión diplomática comentó que no era un buen momento para la visita debido a la reciente ola de asesinatos.

sociales y convencer a los gobiernos dudosos, es la ya mencionada conferencia anual de la PDAC a la cual se invita a los funcionarios reacios. A principios de 2011, personal de la Embajada, de Relaciones Exteriores y de Recursos Naturales Canadá (Natural Resources Canada, NRCAN, por su sigla en inglés; NRCAN es el equivalente de un Ministerio de Recursos Naturales en América Latina), discutieron llevar a algunos funcionarios salvadoreños a Ottawa para que se reunieran con expertos sobre minería, con representantes de ministerios canadienses, y con la Asociación Minera de Canadá para que "puedan darse cuenta de que la minería conduce al desarrollo". Un representante de Relaciones Exteriores agregó, en un intercambio de mensajes con la Embajada, que "la PDAC ofrece una oportunidad única a las delegaciones extranjeras porque en unos pocos días tienen acceso a todas las cuestiones relacionadas con la minería" (Shaw-Wood, 2011).

Claramente, el objetivo de todo esto es influir sobre el proceso de toma de decisiones del gobierno salvadoreño al convencer a individuos en puestos clave sobre las bondades de la minería. Ni el Estado canadiense ni las compañías pueden cambiar la opinión de la mayoría del país, pero lo que sí pueden hacer es cortejar a un pequeño grupo de salvadoreños influyentes —varios de los cuales están más que felices de ser cortejados— y "ayudarlos" a tomar decisiones opuestas a los deseos de la mayoría. La cuestión no es que en la PDAC se hable de qué tan buena es la minería, sino que la conferencia es organizada y financiada por la industria minera canadiense y sus aliados dentro del Estado. La lista de agravios provocados por éstos es suficiente prueba de que la "experiencia" y el "consejo" que puedan dar en defensa del desarrollo a través de la megaminería no es honesto o neutral.

Costa Rica

Aunque la idea de una sociedad utópica de campesinos medios es una profunda exageración, hay algo de verdad en que Costa Rica tuvo patrones de desarrollo excepcionalmente igualitarios en comparación

con sus vecinos centroamericanos. Tras el fin de la corta Guerra Civil de 1948, Costa Rica ingresó en un período de economía mixta de inspiración socialdemócrata, de programas sociales amplios y de democracia liberal que duró hasta la década de los años ochenta. El sistema bancario fue nacionalizado, lo que le dio al gobierno un alto grado de control sobre la política de desarrollo y el crecimiento económico. Entrar al Mercado Común Centroamericano en 1962 estimuló a la vez que protegió el sector industrial, aunque las divisas extranjeras siguieron siendo obtenidas, en su mayoría, por la exportación de productos agrícolas tradicionales: café, plátano, arroz y carne. La cobertura pública en salud, educación y seguridad social ha sido, para los estándares regionales, excepcionalmente generosa (Vunderlink, 1990: 3-4; Mesa-Lago, 2001; Mahoney, 2001). En otras palabras, la desigualdad de clase en Costa Rica ha sido mucho menos extrema que en Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua.

Con todo, Costa Rica no escapó a la década perdida latinoamericana de los años ochenta, y un bajo ritmo de crecimiento, deterioro de los términos comerciales, así como el aumento en la deuda pública, implicaron primero estancamiento y luego crisis. A mitad de la década, el mercado común centroamericano colapsó. Costa Rica había mantenido cierta distancia de los imperativos económicos estadounidenses, pero en los años ochenta y noventa, el imperio impuso su agenda. Los principales canales de las presiones externas fueron las consabidas instituciones financieras internacionales: el FMI, el Banco Mundial y USAID (la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo). Golpeado por los acuerdos de ajuste estructural entre el Estado costarricense y las referidas Instituciones Financieras Institucionales (IFI), el orden socialdemócrata de posguerra dio pie a un modelo neoliberal enraizado en una extrema austeridad, liberalización del comercio y desregulación financiera, cuyo objetivo era cambiar el eje de la acumulación hacia el sector exportador: la expansión del sector maquilador dependiente del trabajo barato; la extensión de sectores agrícolas no tradicionales

y del turismo; y una mayor migración a Estados Unidos, al punto que las remesas se han hecho esenciales para el funcionamiento de la economía (Robinson, W.I., 1990: 529-563; Vunderlink, 1990: 4; Marois, 2005: 101-134).

El gobierno supuestamente de centro izquierda de Luis Alberto Monge (1982-1986), del Partido de Liberación Nacional (PLN), el partido "tradicional" de la socialdemocracia costarricense, echó a andar el proceso de reestructuración neoliberal. Óscar Arias le dio un mayor impulso durante su primer gobierno, lo que consolidó al PLN como un partido abiertamente neoliberal. Desde entonces, se ha mantenido un marco neoliberal constante bajo las presidencias de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) del conservador Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); de José Figueres Olsen (1994-1998) del PLN; de Miguel Rodríguez Echeverría (1998-2002), de Abel Pachecho (2002-2006) del PUSC; y, finalmente, de Óscar Arias (2006-2010) y de Laura Chinchilla (2010-2014) del PLN.

El capital doméstico costarricense vivió un proceso de rápida acumulación en torno a las principales compañías nacionales, al tiempo que éstas desarrollaban vínculos estrechos con los capitalistas regionales del resto de América Central y México, así como con el gran capital extranjero de Norteamérica y partes de Asia. El área de las finanzas es un buen ejemplo. Entre 1986 y 1997, la privatización del sector bancario multiplicó potencialmente el número de instituciones financieras privadas, de 25 a 42. Pero esta tendencia fue revertida tras un proceso de concentración en unos pocos bancos. A partir de 1997, apunta el economista Diego Sánchez Ancochea,

> la proporción de activos controlados por los tres bancos más grandes pasó del 30,8 al 48,8 por ciento en mayo de 2003. En ese año, los diez principales bancos privados controlaron más del 80 por ciento de todos los activos y el 70 por ciento de la riqueza neta del sector financiero privado […]. En 2003 los bancos públicos tenían sólo 1,6 veces más activos que los privados, comparado

> con el 5,1 por ciento en 1989 y el 3,3 por ciento en 1993 (Sánchez Ancochea, 2005: 697, 702).

El corte a los programas sociales y el debilitamiento de los sindicatos y las organizaciones campesinas frente a la clase gobernante produjo un aumento en la desigualdad, a niveles no vistos desde los primeros años del siglo pasado.

El ataque de las élites locales y de las instituciones financieras internacionales al arreglo socialdemócrata costarricense provocó la resistencia heroica pero finalmente vana de la población. Un análisis de la socióloga Sindy Morea Solano sobre las acciones colectivas reportadas en los diarios mostraba que entre 1995 y 2004 hubo un total de 3.904 eventos de protesta. La resistencia tuvo tres picos de intensidad en 1994, 2000 y 2004, con 450, 613 y 648 eventos de acción colectiva, respectivamente (Mora Solano, 2008: 140). En 1994, el incremento de estas acciones de movilización ciudadana tuvo que ver con una huelga nacional de maestros. En el año 2000, con una campaña contra la privatización de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones que se convirtió en una de las movilizaciones de masas más grandes de la historia reciente del país (Almeida, 2012: 1051-1072; Frajman, 2009: 42-62). La lucha contra la entrada al CAFTA fue otra batalla esencial contra el nuevo modelo de acumulación, y también dio pie a enormes movilizaciones a lo largo y ancho del país. Esto último explica el auge de las protestas en 2004. Cuando Arias volvió al gobierno en 2006, la negociación del Tratado de Libre Comercio se convirtió en un asunto tan polémico que tuvo que someter la ratificación del Tratado a un referéndum vinculante llevado a cabo en octubre de 2007. Al final, el sí ganó con el 52 por ciento contra el 48 por ciento del no. "Que la ratificación estuviera en tela de juicio", dice el sociólogo Eduardo Frajman,

> y que tuviera que hacerse un referéndum cuando el Tratado tenía el apoyo de dos presidentes sucesivos y de sus gabinetes, así como de una mayoría suficientemente amplia de legisladores, del capital

> financiero y de los principales conglomerados de medios del país y de Estados Unidos, es testimonio de la efectividad de la oposición durante cinco años de lucha (Frajman, 2012: 117).

Como sucedió en los otros países centroamericanos, la transición neoliberal fue esencial para que el capital canadiense pudiera entrar al mercado costarricense. La orientación generalizada hacia el libre comercio y el crecimiento basado en las exportaciones sentó las bases del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Costa Rica en 2002. A partir de ese año, la inversión extranjera canadiense ha crecido muchísimo, y Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) la estima en cerca de mil millones CAD al día de hoy. En el contexto de la privatización del sector bancario, el aumento en IED incluye la compra por parte de Scotiabank de dos bancos, incluyendo al principal banco privado de Costa Rica, Interfin, y de Groupe EBI, que tiene tres grandes instalaciones de tratamiento de residuos (Wimmer, 2010b). Aquí también la minería es uno de los principales ejes de la inversión canadiense, y ha estado en el centro de varias controversias políticas recientes.

En 1997, la población derrotó los planes de Lyon Lake, una empresa de Montreal, y de su subsidiaria costarricense Novontar S.A., de abrir minas a cielo abierto en los terrenos de Beta Vargas y Guaitilar, cerca de Puntarenas y de Lourdes de Abangares, respectivamente (*El País*, 16/09/2011; *The Northern Miner*, 09/06/1997). En 2013 había dos proyectos mineros activos, ambos propiedad de grupos canadienses. Bellavista, de B2Gold, era una mina en producción hasta que se vio obligada a cerrar debido a serios problemas estructurales en una pila de lixiviación construida sobre la ladera de una montaña. El intento de la compañía de reabrir la mina ha sido criticado por los ambientalistas. Pero ha sido Las Crucitas, la mina de Infinito Gold, la que ha generado el principal movimiento opositor, pues tras la derrota del movimiento anti TLC, el movimiento antiminería ha asumido una posición prominente en el paisaje de la resistencia contra el neoliberalismo.

Las Crucitas es un enorme proyecto de minería a cielo abierto que contiene un estimado de 1,24 millones de onzas de oro, y que ha generado controversias durante casi dos décadas. La mina está a 105 kilómetros al norte de San José, cerca del Río San Juan y de la frontera nicaragüense. Las comunidades aledañas y una gran cantidad de costarricenses han expresado su preocupación por el envenenamiento y destrucción de los ríos y el ecosistema (*El País*, 16/01/2012; *El País*, 23/12/2011). La compañía canadiense Placer Dome (posteriormente absorbida por Barrick) renunció en 1997 a sus planes para echar a andar la mina, debido a la oposición. Vanessa Ventures se hizo del proyecto en 2000 y recibió un permiso de explotación dos años después. Ese mismo año, el gobierno de Abel Pacheco emitió una moratoria contra la minería a cielo abierto, pero Las Crucitas fue protegida con el argumento de que ya había recibido un permiso (BNamericas, 2004). Sin embargo, los opositores a la mina obtuvieron un mandato judicial y en 2004 la Corte Constitucional anuló el permiso de explotación (Mining Watch, 2006a; Mining Watch, 2006b; Vaccoro, 2008).

Vanessa Ventures/Infinito Gold ha tenido aliados importantes. Fuera de la luz pública (en las palabras de un reporte escrito por funcionarios de la embajada canadiense y de Relaciones Exteriores), "la Embajada ha apoyado a la compañía y ha transmitido este mensaje a los principales políticos del país" (Wang y Dalby, s/f). La elección de Óscar Arias en 2006 fue una buena noticia para los intereses canadienses. A pesar de las órdenes judiciales, en 2008 (Vanessa Ventures cambió de nombre ese año a Infinito Gold) Arias levantó la moratoria a la minería a cielo abierto, Las Crucitas recibió nuevos permisos ambientales y mineros, y Arias declaró que la mina era parte del interés nacional de Costa Rica (REMA, 2010). Pero la total postración del Presidente ante los intereses mineros le dio nuevos bríos a la oposición.

La minera y sus aliados en la Embajada estaban profundamente preocupados de que hubieran perdido a un amigo leal cuando se terminó el período de Arias en 2010. Conscientes de que la nueva presidenta Laura Chinchilla podría estar a favor de la moratoria a la

minería a cielo abierto, la Embajada y los funcionarios de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) en Ottawa discutieron el impacto potencial que esto tendría sobre los intereses de Canadá, y Peter Kent —ministro de Estado para las Américas— fue enviado a reunirse con varios de los principales ministros del nuevo gabinete poco después de la posesión de la Presidenta (Rodriguez, J., 2010; Wimmer, 2010c). Chinchilla sí declaró una prohibición contra los nuevos proyectos, pero ésta no afectó a Las Crucitas porque el permiso para comenzar la construcción precedía la orden de la Presidenta (*Latin America Press*, 2010). Una de las principales expresiones de descontento por la exclusión de Las Crucitas de la moratoria minera fue una marcha de 170 kilómetros desde el palacio presidencial en San José hasta la mina, en julio de 2010 (*Latin America Press*, 14/07/2010). Otra muestra del poder del movimiento antiminería fue que en 2012 el viceministro de Medio Ambiente, Andrei Bourrouet, tuvo que dimitir cuando los ambientalistas lo acusaron de tener vínculos con Infinito (*El País*, 28/01/2012; *El País*, 30/07/2010).

Siguió aumentando la presión para que Chinchilla detuviera el proyecto — Relaciones Exteriores señaló en sus reportes que el movimiento seguía creciendo (Wimmer, 2010c)— y, a finales de agosto de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) costarricense declaró que consideraría la apelación de una organización ambiental que negaba que el proyecto de Las Crucitas se sujetara a los decretos de la presidencia de Arias. El ánimo opositor y la decisión del TCA provocaron un arranque público de ira por parte del embajador canadiense, Neil Reeder. Reeder exigió que Costa Rica respetara la ley y permitiera que Infinito Gold continuara con el proyecto, y amenazó al gobierno con que si violaba los derechos de la minera, su imagen internacional se deterioraría. Sus últimos comentarios públicos como Embajador —antes de ser ascendido a Director General para América Latina y el Caribe en Relaciones Exteriores— fueron a favor de la compañía, al declarar que "ellos

[Infinito] han respetado todas las reglas del juego". Reeder también tenía cosas que decir sobre el TCA, y advirtió que este tribunal "mandó un mensaje de falta de certeza a la comunidad internacional de inversionistas, en un momento en el que Costa Rica está buscando activamente atraer una mayor inversión extranjera" (*La Prensa*, 10/08/2010). Aparentemente, la controversia sobre Infinito atrajo también la atención de la Oficina del Consejeros Honorarios del Primer Ministro en Ottawa (Privy Council Office), que durante esos meses, entre septiembre y noviembre, le pidió a Relaciones Exteriores que la mantuviera al tanto (Marder, 2010b). Tal vez no sea casualidad que el principal accionista de Infinito, Ron Mannix, esté asentado en Calgary, corazón del Partido Conservador. Aunque no hay evidencia dura que vincule a Mannix con el gobierno de Harper, es importante mencionar que en las miles de páginas y archivos de acceso a la información que hemos estudiado como parte de la investigación para este libro, nunca encontramos otro caso de peticiones de información a Relaciones Exteriores por parte de los allegados al Primer Ministro.

La oposición a Las Crucitas y a la minería a cielo abierto no cejó hasta que el 24 de noviembre de 2010 el TCA anuló el permiso de Infinito, debido a lo que dijo eran múltiples irregularidades en la forma en que el gobierno de Arias le otorgó a la compañía el permiso de operaciones, lo que produjo una caída del 60 por ciento en el precio de las acciones de la compañía (Salazar, 2010). La decisión del Tribunal implicaba que posiblemente el gobierno de Arias, y particularmente su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, habían sido sobornados para apoyar el proyecto. Los abogados de Infinito pidieron a la Corte Suprema que anulara la decisión del TCA, pero ésta reivindicó el fallo en 2012 (*El País*, 15/11/2011), y además exigió que se abriera una investigación sobre las acciones de Arias y los funcionarios que otorgaron el permiso (Salazar Fernández, 2012). Para el abogado antiminería Edgardo Araya, la decisión de la Corte Suprema fue "una sentencia histórica, una gran lección que Costa Rica le ha dado al resto

de América Latina acerca de cómo deshacerse de compañías mineras que debilitan a nuestros sistemas institucionales"[109].

No es sorprendente, por todo esto, que en las consignas de los manifestaciones antiminería se pinte a Óscar Arias como poco más que el brazo político de Infinito Gold. Y esta no fue ni la primera ni la última vez que Arias o su familia usaron su influencia política con fines cuestionables o para obtener ganancias personales. Nacido en una familia acomodada, el expresidente ha sido por décadas una institución en la vida política y económica costarricense, y se ha alineado consistentemente con las ambiciones canadienses y, por tanto, con los intereses mineros. Recordemos que Arias fue parte esencial del esfuerzo diplomático y político para llegar a una solución negociada con Manuel Zelaya durante la crisis política que siguió al golpe de Estado en Honduras.

El hermano de Óscar Arias, Rodrigo, a su vez, dirigió la campaña legal para cambiar la ley que prohibía la reelección presidencial, un tema sobre el que Canadá no dijo nada, a pesar de que criticó los mismos intentos por parte de Zelaya o Hugo Chávez con el argumento de que intentaban debilitar las normas democráticas y concentrar el poder en sus manos. En 2005 corrieron rumores acerca del tráfico de influencias por parte de Rodrigo Arias, cuando la compañía canadiense Groupe EBI obtuvo un contrato de adjudicación directa por parte de la ciudad de San José para hacerse cargo del botadero de basura. De acuerdo con un cable de la embajada estadounidense, un contralor rechazó dos veces los intentos de EBI de quedarse con el proyecto, sobre la base de que la adjudicación directa no se justificaba. La compañía contrató al buffet de Rodrigo Arias, el cual presuntamente le hizo una llamada al contralor, y el contrato fue aprobado en el momento. Óscar Arias mantuvo a su hermano como jefe de campaña a pesar del escándalo (U.S. Embassy, 2006). La trama completa del apoyo de Arias a Infinito Gold todavía no ha sido escrita, pero sabemos, por

109 Citado en *El País* (08/12/2011).

ejemplo, que en 2008 Mannix —el principal accionista de Infinito— ofreció donar 250 mil dólares a la Fundación Arias, y que le hizo ese ofrecimiento directamente a Óscar Arias. Este último insiste en que no aceptó el dinero (Segnini, 2011).

Por supuesto, Canadá no ha dicho nada de las acusaciones de corrupción, pues Arias es un buen aliado y Mannix un amigo y donador al Partido Conservador[110]. De hecho, Infinito —junto con B2Gold— financió las celebraciones del "Día de Canadá" en la Embajada en San José, a pesar de la controversia y el enojo público hacia estas compañías[111]. Por otro lado, Infinito ha intentado desacreditar los estudios científicos críticos del proyecto como "pura especulación" o como "mal ejecutados", pero los representantes de la compañía han evitado participar en debates públicos con los opositores a la mina (*El País*, 26/09/2010)[112]. Tras haber enviado representantes en 2010 y 2011 al debate anual sobre la minería organizado por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en San José, los funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y los representantes de Infinito, se negaron a participar en años siguientes (*El País*, 08/12/2011). En un debate en 2010 en la Universidad Católica, en la capital, en el que Infinito mandó a su representante Juan Obando, éste combinó en sus intervenciones una retórica de responsabilidad corporativa con amenazas veladas de acción judicial contra cualquiera que manchara la reputación de la compañía. Obando enfatizó, por un lado, que el proyecto de Infinito era respetuoso del ambiente y habló de la apertura al debate público y del compromiso de la compañía con el acceso a la información. Luego sugirió que las afirmaciones de

110 Las donaciones a los partidos políticos pueden ser consultadas en la base de datos www.elections.ca.

111 En la lista de invitados había varias importantes corporaciones canadienses con presencia en Costa Rica, incluyendo a Ebbi, Air Canada, el periódico *La República* y Scotiabank (*El País*, 20/06/2011).

112 La minera Infinito Gold es citada en Salazar, C. (2012).

sus adversarios en el debate podrían llevar a una acción legal judicial contra ellos por parte de la corporación (*El País*, 29/09/2010).

En efecto, la corporación ha amenazado a varios opositores con demandarlos por difamación por los comentarios que han hecho sobre la compañía y sus relaciones con el gobierno, lo que incluye críticas que fueron expresadas por primera vez por el TCA. Dos académicos, un abogado y dos legisladores han sido demandados, algunos por hasta un millón de dólares —lo cual no ha hecho sino subir el tono de las críticas, esta vez por intentar criminalizar la protesta— (*Agence France Presse*, 24/06/2011; *El País*, 29/11/2011; *El País*, 23/11/2011). Edgardo Araya habló a nombre de muchos activistas cuando dijo: "Quieren que nos callemos, pero eso no va a pasar. Voy a seguir diciendo lo que tiene que ser dicho"[113]. El hostigamiento a los opositores y el intento de echar para atrás la decisión del TCA provocaron un día de protestas y de manifestaciones en noviembre de 2012, exigiéndole al gobierno que expulsara a la compañía (*Agence France Presse*, 22/11/2011). Poco después de eso, y con el agravante de las acusaciones por corrupción girando en torno a Arias e Infinito, la Corte Suprema rechazó la solicitud de Infinito de anular la decisión del TCA de detener el desarrollo en Las Crucitas (*El País*, 30/11/2011).

Nicaragua

La Revolución nicaragüense, dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue un faro de luz para buena parte de la izquierda internacional durante los momentos más oscuros de la era Reagan-Thatcher. Aunque nunca trascendieron los límites del capitalismo, los sandinistas tuvieron logros importantes en educación, salud y pobreza que beneficiaron a la minúscula población nicaragüense de tres millones de personas. Esto es más impresionante si tomamos en cuenta que las victorias sociales de la revolución no implicaron el

113 Citado en *El País* (23/11/201).

ejercicio autoritario del poder, a pesar de la campaña de contrainsurgencia dirigida por los *contras*, financiados por Estados Unidos (Zimmerman, 2001; Burbach y Nuñez, 1987; Dunkerley, 1988). Asediada desde fuera, y exhausta tras años de guerra civil, la revolución llegó oficialmente a su fin con la victoria electoral de la candidata (apoyada por los *contras*) de la Unión Nacional Opositora, Violeta Chamorro, en las elecciones de 1990. Durante su presidencia de siete años, Chamorro inició un proceso de reestructuración socioeconómica, reforzado posteriormente por Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), ambos del Partido Liberal Constitucionalista. Durante esos años, Daniel Ortega consolidó su poder dentro del FSLN y se hizo de un pequeño grupo de incondicionales que impulsaron un marcado giro a la derecha, rompiendo con los ideales y tradiciones del sandinismo revolucionario. Esto implicó una ruptura dentro del frente, que desembocó en la formación de un grupo disidente de izquierda, el Movimiento Renovador Sandinista[114].

Lo que quedó del FSLN hizo una serie de pactos con una constelación de fuerzas conservadoras para ganar las elecciones. En 2001, Ortega se alió con el expresidente y antiguo funcionario de Somoza Arnoldo Alemán para las elecciones presidenciales de ese año. En 2006, Ortega hizo un polémico pacto con el cardenal Miguel Obando y Bravo, una figura emblemática del catolicismo contrarrevolucionario de los años de la guerra civil. El oportunismo de la alianza cristalizó en la conversión de Ortega, y posteriormente en el apoyo legislativo que el FSLN le dio a la propuesta de ley para prohibir el aborto —una prohibición extrema que aplica también cuando la vida de la madre está en peligro—. Finalmente, Ortega eligió al exlíder de los *contras* Jaime Morales como su candidato a la vicepresidencia para la elección de 2006. A pesar de estas concesiones a la derecha, Ortega alcanzó un decepcionante 37,9 por ciento del voto popular, suficiente sin embargo

114 Uno de los principales líderes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) es Sergio Ramírez Mercado, quien fue vicepresidente entre 1985 y 1990, y escribió *Adiós Muchachos* (Ramírez, 2011).

para llevarlo a la silla presidencial, aunque sobre una base bastante endeble (Burbach, 2009: 33-37; Ross, 2010; Kampwirth, 2008: 122-136; Haase, 2011: 221-240).

No debe de sorprender, por tanto, la discordancia entre las victorias electorales de Ortega en 2006 y luego otra vez en 2010, discordancia entre "el discurso antiimperialista y obrerista" y las "políticas y acciones" que "a menudo parecen contradecir sus palabras", incluyendo "la adhesión al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y el mantenimiento de una economía dolarizada", entre otras políticas neoliberales (Perla Jr. y Cruz-Feliciano, 2013: 84). El reportero del *Financial Times* Adam Thomson recogió los elogios de los funcionarios estadounidenses sobre el comportamiento de Ortega en la "guerra contra las drogas", y la relación de su gobierno con los empresarios locales, a la que califica como "constructiva y fluida". "En el socialismo a la Ortega", escribió Thomson en un artículo de 2011, "el comercio exterior y la inversión extranjera se han más que duplicado en cinco años". Durante la primera mitad de ese año, la economía creció en más del cinco por ciento, una de las tasas más altas en América Latina" (Thomson, 2011). Sin embargo, Ortega se ha aliado con Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), lo que le ha generado conflictos con otros Estados.

De manera similar, Ortega ha provocado la ira diplomática del gobierno estadounidense por ofrecerle asilo político a Edward Snowden (Watts, 2013). Estas son facetas complejas de la actual situación política nicaragüense, en una época en la que el país se ha convertido en un destino importante para el capital canadiense, especialmente en los sectores de las finanzas, la energía, las telecomunicaciones y la minería. En 2010 y 2011 Canadá fue el primer inversor extranjero, con 1.300 millones de dólares tan sólo el primer año. Varias compañías canadienses son parte de importantes proyectos de infraestructura hidroeléctrica, y los 15 proyectos mineros en activo en agosto de 2012 pertenecen a consorcios canadienses (*Agencia EFE*, 07/01/2011; *Agencia EFE*, 07/01/2011; Mayoral, 2012).

Una de las principales publicaciones de la industria minera escribió que Ortega "ha promovido consistentemente un ambiente amigable para las empresas" (Vaccaro, 2012: 1). Aunque las regalías y los impuestos no han sido tan absurdamente bajos como en países vecinos, tampoco han sido desproporcionados. Ortega también ha apoyado a la industria para contener la lucha obrera. Durante una huelga en 2009 contra una de las minas más grandes en el país, propiedad de la canadiense B2Gold, en esa publicación se escribió que "el gobierno apoyó a B2Gold, y declaró la huelga como 'ilegal'" (Vaccaro, *op. cit*: 14).

Otra muestra del compromiso del gobierno sandinista con la inversión extranjera en el sector minero fue la participación de una numerosa delegación nicaragüense en la reunión anual de la PDAC en Toronto. Asistieron Francisco Campbell, embajador en Estados Unidos y Canadá; Álvaro Baltodano, Delegado Presidencial para la inversión; Carlos Zarruk, Director General de Minas en el gobierno de Ortega; y Sergio Ríos, presidente de la Cámara Minera de Nicaragua. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Agencia de Promoción de Inversiones de Nicaragua (ProNicaragua), en el seminario organizado por la delegación en la conferencia, titulada "Nicaragua, descubre las oportunidades para la minería", se enfatizaba el marco judicial pro industria, la alianza entre el gobierno y el sector privado, así como las grandes oportunidades para las futuras inversiones en exploración y explotación mineras (*La Prensa*, 01/03/2013).

A finales de noviembre de 2010, el presidente y director ejecutivo de B2Gold visitó Nicaragua para anunciar que su compañía invertiría siete millones de dólares durante el siguiente año en proyectos de exploración en los municipios de La Libertad, en el departamento de Chontales, y en El Limón, en el departamento de León. B2Gold terminaría por invertir otros 27 millones ese año. "El país tiene un buen sistema legislativo", dijo Clive Johnson, "y también un sistema fiscal muy justo, que demuestra que quiere atraer inversiones de corporaciones internacionales que generen empleos" (Álvarez Hidalgo, 2011). A pesar de la caída del precio del oro en la primera mitad de 2013, y en una

entrevista, el director de la compañía en Nicaragua, Pablo Venturo, dijo que los planes de inversión no iban a cambiar. "No se trata de que el sector esté perdiendo poder, sino que estamos en una nueva situación, caracterizada por la reciente caída en el precio internacional del oro". La caída en los precios era "una variable externa que no depende de las compañías, pero la producción y el desarrollo de los proyectos seguirá hacia adelante en todo el sector". En esa entrevista, Venturo afirmó que B2Gold calcula invertir unos 344 millones de dólares en las dos minas de La Libertad y El Limón[115].

Los proyectos de B2Gold en Chontales han provocado la resistencia de varias organizaciones comunitarias (Romero, E., 2013). Hacia finales de julio y principios de agosto de 2013, por ejemplo, 500 mineros artesanales pertenecientes a una organización llamada El Cafetal volvieron a bloquear una carretera usada por B2Gold, cerca de la mina. El bloqueo había sido instalado inicialmente en febrero de 2013, pero la policía reprimió a los activistas: hirió a siete y detuvo a 47, de los cuales 12 terminaron en la cárcel. Javier Amador, uno de los líderes del Cafetal, dijo en la protesta de agosto:

> Seguiremos de pie, con fuerza y valentía en esta lucha, para seguir peleando contra el monstruoso poder de B2Gold, que representa la muerte, el hambre y la destrucción, y el enriquecimiento de sus accionistas, sin dejar nada para nuestro pueblo, excepto la miseria y la enfermedad[116].

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó una queja formal por la represión policial contra los opositores a B2Gold ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA (Cruz, 2013).

115 Citado en Navas (2013).

116 Citado en Rothschuh (2013).

B2Gold también suscitó una fuerte oposición en la comunidad de Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa, una zona biodiversa de bosques y ríos, de pequeña producción campesina, a 213 kilómetros al norte de Managua. Todavía no hay mina en la región, pero en 2010 la compañía recibió una concesión para explorar el área. Desde ese momento, ha habido tres grandes manifestaciones contra la exploración, la última de las cuales, el 21 de marzo de 2013, movilizó a cuatro mil personas. Las asociaciones de base de la Iglesia católica en la región, influidas por la Teología de la Liberación, han sido la columna vertebral de este movimiento (Silva y Martínez, 2013).

Pablo Espinoza, uno de los 43 curas de la diócesis de Matagalpa opuestos a B2Gold, explica la oposición de la siguiente forma:

> La naturaleza es la única fuente de riqueza aquí. Pero más que eso, diría que [desarrollar la mina] sería terminar con la vida en toda la región de Matagalpa, y en Nicaragua en general. De aquí viene el oxígeno que todos necesitamos para respirar. Estas montañas, estos ríos, son la razón por la cual la población se ha congregado libre y voluntariamente en esta asamblea para hacer que se escuche su voz.

Espinoza condenó las limosnas que B2Gold dice que le ofrece a la gente de la comunidad a cambio de su apoyo a la compañía. Dijo también que a él que le ofrecieron un carro y un empleo con un buen salario si dejaba de oponerse a la mina. "¿Se imaginan el peso en mi consciencia si lo hubiera aceptado? Sería como mandar a toda esta gente al matadero"[117].

La Red de Mujeres de Matagalpa es otra organización comunitaria involucrada en la lucha contra B2Gold en Rancho Grande. Una de sus activistas, Carola Brantome, afirma que "la resistencia contra el establecimiento de la compañía minera es fuerte". Brantome lamenta que el gobierno de Ortega no se haya opuesto al proyecto. "Estamos

117 Citado en Silva y Martínez (2013).

seguros de que el gobierno está consciente del daño que esto le podría hacer al medio ambiente y a la población [...], de la destrucción, la miseria y la muerte que traerá, como antes las zonas bananeras"[118]. Norma Chavarría es otra de las principales activistas en Rancho Grande. "La gente conoce las consecuencias de que B2Gold reciba el permiso para extraer oro. La gente de la comunidad no sólo está pensando en el área inmediata, sino en la región entera y en todas las fuentes de agua [que serán contaminadas]". Chavarría rechaza la imagen de responsabilidad social corporativa y sustentabilidad ambiental de la que B2Gold presume, pues dice que la compañía "vende un discurso de pan para hoy, que vamos a tener recursos hoy, pero es pan para hoy y muerte para mañana"[119].

Podemos esperar una oposición similar si la mina a cielo abierto de la empresa de Vancouver Golden Reign Resources Ltd. sigue adelante en San Albino-Murra, en Nueva Segovia. La exploración ha indicado que hay grandes cantidades de oro en el subsuelo, y, luego de haber obtenido una concesión de 25 años por parte del gobierno de Ortega, la empresa tiene confianza en dar inicio a la producción en el mediano plazo (Navas, 2011).

A pesar de su apoyo a la industria minera, el respaldo de Ortega a Hugo Chávez lo hizo blanco de las críticas canadienses. La embajada y el gobierno canadienses han criticado lo que para ellos es un ataque a la democracia nicaragüense. Tras las elecciones municipales de 2008, en las que la oposición alegó fraude, Ottawa le envió instrucciones a la Embajada para que presionara a Estados Unidos a que no sólo exigiera un recuento de votos, sino también una investigación completa, como la oposición pedía. Cuando la Suprema Corte de Nicaragua eliminó la prohibición constitucional a la reelección consecutiva —lo que abría la puerta a otro período presidencial de Ortega—, el gobierno de Harper cuestionó la decisión, sobre la base de que "profundizaba la

118 Citado en Silva y Martínez (2013).

119 Citado en Silva y Martínez (2013).

preocupante tendencia hacia el debilitamiento de los espacios democráticos en Nicaragua" (FAIT, 2009d).

La modificación constitucional que permite la reelección en Nicaragua es inaceptable para los canadienses, a pesar de que no dijeron nada cuando su aliado Óscar Arias hizo lo mismo en Costa Rica, lo que permitió que éste se reeligiera como Presidente —por no hablar del hecho de que en Canadá los primeros ministros pueden reelegirse todas las veces que les sea posible—. Durante un viaje a Nicaragua en 2009 —poco antes de la elección de Lobo en Honduras—, el ministro de Estado para las Américas Peter Kent compartió con Ortega y con Samuel Santos, Ministro de Relaciones Exteriores, "la preocupación de Canadá por el debilitamiento de los espacios democráticos en este país". Tras la reelección de Ortega en 2009, Canadá volvió a criticar públicamente las supuestas "irregularidades y deficiencias en la preparación de la elección y durante su realización" y advirtió sobre la "falta de democracia y apego a las leyes", acusaciones que repitió ante la OEA (FAIT, 2011c; *El Confidencial*, 06/01/2012). Una consecuencia de esto fue que el gobierno de Harper transfirió 1,5 millones CAD previamente etiquetados para la ayuda al desarrollo, al rubro de reforma democrática y electoral en Nicaragua (FAIT, 2009d).

Panamá

Aunque ha recibido bastante menos atención que sus vecinos, Panamá se ha convertido en un importante nodo de resistencia contra el capital canadiense, a pesar del (o debido al) esfuerzo del gobierno de Harper en abrir el mercado doméstico a las empresas de su país (FAIT, 2009e). Esto culminó en la visita que Harper hizo a Ciudad de Panamá en agosto de 2009, durante uno de sus habituales *tours* por América Latina, durante el cual firmó un acuerdo de libre comercio y se encontró con el presidente Ricardo Martinelli, del conservador Cambio Democrático (Chase, 2009: A4). Panamá ha sido identificado como un aliado amigable y estable en una región en la que los procesos políticos

recientes no siempre han favorecido los intereses de las potencias extranjeras, así que en 2011 Export Development Canada seleccionó a este país como su centro para Centroamérica y el Caribe, y abrió oficinas ahí (Fast, 2011). La elección de Martinelli en 2009 consolidó un largo giro neoliberal que comenzó con los gobierno de Guillermo Endara (1990-1994) y Ernesto Pérez-Balladares (1994-1999) (Jiménez, Ramírez y Martínez, 2012: 111-136).

A pesar de todo, el capital canadiense no ha logrado alcanzar la estabilidad necesaria. Martinelli es un aliado de la industria minera, dominada por el capital canadiense también en Panamá. Desde el inicio de su presidencia, Martinelli intentó facilitar el acceso de las mineras a los recursos minerales del subsuelo, muchos de los cuales están en o cerca de tierras indígenas. En 2010, por ejemplo, el gobierno modificó más de 60 artículos de la Carta del Congreso General para limitar los derechos de autonomía y autogobierno de los Ngabe-Buglé, los dos principales pueblos indígenas panameños (*La Jornada*, 14/07/2012). Esta modificación legal allanó el terreno para cambiar la Ley Minera y así permitir el establecimiento de empresas mineras en el territorio de los Ngabe-Buglé. Martinelli también intentó acelerar la expedición de evaluaciones ambientales. Con este tipo de cosas es que los políticos del Sur se ganan el favor y el apoyo de las compañías mineras y del gobierno canadiense (Keevil, 2012: 13).

Pero la subasta de territorios a favor de las mineras produjo una fuerte reacción popular centrada, en gran medida, en la compañía Inmet Mining. En 2011, Inmet estuvo en el corazón de un debate nacional, sintomático de la potencial destrucción ambiental causada por la megaminería y de la postración del gobierno ante el capital extranjero. En febrero de ese año, en medio de grandes protestas por parte de los indígenas, el Congreso de Panamá finiquitó una antigua ley que impedía que los gobiernos extranjeros invirtieran en el sector minero. Tras estos cambios, Inmet —que buscaba financiamiento de fondos soberanos de Singapur y Corea del Sur— podría proceder con la construcción de la mina de cobre más grande de América Central

(se estima que producirá 266 mil toneladas de cobre al año). El proyecto Cobre Panamá está situado a 120 kilómetros al oeste de la capital (Embajada de Canadá, 2011: 2). Un mes después, tras el aumento de las protestas, Martinelli anunció su decisión de rechazar la decisión del Congreso de echar abajo la ley, lo que reinstalaría la prohibición a las inversiones por parte de Estados extranjeros (Kiladze, 2011: B11). Pero la intención declarada de Martinelli nunca se concretó en una nueva ley. Lo que es más, hay varios proyectos en fase de exploración para construir minas en tierras indígenas. El gobierno también anunció una licitación para explotar un gran yacimiento de cobre en Cerro Colorado. No debe sorprender a nadie que las protestas continúen.

En enero y febrero de 2012 las protestas contra la minería alcanzaron un pico, con una ola de bloqueos carreteros y manifestaciones que se inició cuando miles de Ngabe-Buglé bloquearon la carretera interamericana en San Félix, en la frontera con Costa Rica. Los manifestantes exigían que el gobierno anulara las concesiones mineras e hidroeléctricas otorgadas dentro de su territorio[120]. El gobierno de Martinelli envió a la policía antimotines, que disparó gas pimienta —y de acuerdo con varios testigos, también abrió fuego—, mató a dos e hirió a 32 personas. Muchos fueron detenidos. "Enviaron a la policía antimotines. Nuestra manifestación era pacífica y ellos nos reprimieron", dijo Omayra Silveira, una de las líderes involucradas en la organización del bloqueo. Carlos de la Cruz, un cura católico que estuvo en la manifestación, dijo que la policía —apoyada por un helicóptero— atacó a la gente sin motivo[121]. La revuelta de principios de 2012 fue una repetición de los bloqueos de febrero del año anterior, tras los cuales el gobierno había aceptado prohibir los proyectos mineros e hidroeléctricos en el territorio Ngäbe-Buglé. Cuando el gobierno incumplió su promesa, los bloqueos volvieron con más fuerza (*La*

120 Acerca del racismo en torno a los desarrollos hidroeléctricos en Panamá, ver Finley-Brook y Thomas (2011: 863-872).

121 Ver Finley-Brook y Thomas (2011: 863-872).

Jornada, 14/07/2012). Como estos actos de represión violenta fueron perpetrados por un aliado, Canadá no dijo nada. Pero la represión desató más manifestaciones a lo largo del país, incluyendo a Coclesito, donde los manifestantes bloquearon la entrada al proyecto de Inmet Cobre Panamá, y a una mina que pertenece a la empresa canadiense Petaquilla Minerals (Mining Watch, 2012g).

A pesar de la oposición popular, la evaluación ambiental de Inmet fue aprobada por el gobierno de Martinelli en enero de 2012 (Keevil, 2012: 13). Pero, posteriormente, la Suprema Corte de Panamá declaró que el área del proyecto está protegida porque pertenece al corredor biológico panamericano, así que la compañía tendría que recibir un permiso del Directorio de Áreas Protegidas. En abril de 2012, después de meses de protestas por parte de los grupos indígenas, el gobierno se vio obligado a aprobar una ley que cancela todo tipo de explotación mineral en los territorios Ngäbe-Buglé (Central America Data, 2012; Cultural Survival, 2012).

Hay otro asunto que no ha sido resuelto, y es que Martinelli estuvo involucrado en un escándalo de corrupción con las compañías canadienses Financial Pacific y Petaquilla Minerals. De acuerdo con el testimonio del principal acusado en el caso, Mayte Pellegrini, Martinelli usó información privilegiada y su cuenta secreta en Financial Pacific para manipular el precio de las acciones de Petaquilla Minerals (*La Jornada*, 30/12/2012). Los directivos de Financial Pacific fueron acusados de falsificar documentos, entre otros crímenes (*La jornada*, 06/01/2013).

El patrón de desposesión violenta y de vigilancia policial asociado con las inversiones canadienses en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, ha aumentado la necesidad de reforzar los aparatos coercitivos de esos Estados. La expansión de la inversión canadiense en Centroamérica ha corrido paralela a la preocupación del gobierno de Harper con la seguridad, pues ambas emanan de los intereses materiales del capital y de los intereses geopolíticos más generales del Estado canadiense. El resto del

capítulo subraya los principales rasgos de la estrategia de seguridad en la región.

Hacia una agenda de seguridad regional

Si tomamos en cuenta los intereses del capital canadiense en América Central, y la resistencia que éste ha encontrado entre los movimientos sociales y, en menor medida, entre los gobiernos, no es ninguna sorpresa que la región sea tan importante para la estrategia de seguridad canadiense. El pensamiento conservador acerca del istmo fue bien expresado por Peter Kent, quien como Ministro de Estado para las Américas en 2009, lo identificó como "la región clave en la que cuestiones de seguridad, prosperidad y gobernanza democrática son cruciales" (Kent, 2009e). La estrategia de seguridad conservadora para Centroamérica no había sido enteramente definida en ese momento, y sólo empezaría a ser develada dos años después, pero vincular la prosperidad con la seguridad y la democracia es un viejo tema, no es ni fue una invención del gobierno conservador o de los liberales que le precedieron. Es por esto que no hay que tener esperanzas en que el nuevo gobierno liberal de Justin Trudeau produzca un cambio profundo. Estos son temas que orientan desde hace mucho la estrategia del Estado canadiense hacia los países del Sur.

Con todo, el comentario de Kent ejemplifica bien cómo la clase dominante entiende actualmente a la región. La referencia a la "prosperidad" es necesariamente vaga —lo que quiere decir que están interesados por igual en cuestiones como el nivel de vida o los intereses económicos de los inversionistas canadienses—, pero, como hemos dicho, la política exterior canadiense en Centroamérica está claramente determinada por las necesidades de las compañías canadienses y por la resistencia de las comunidades hostiles y, cada tanto, de gobiernos no enteramente plegados a sus intereses. Kent no habla más sobre este tema, pero las acciones del gobierno de Harper que hemos discutido en este libro son poco ambiguas sobre sus preocupaciones respecto a

la democracia. No es una coincidencia que las declaraciones de Kent se hayan producido en un momento de enormes manifestaciones contra las compañías mineras en América Central, así como cuando tres gobiernos de izquierda estaban en el poder en Nicaragua, Guatemala y Honduras, con otro más a punto de ser electo en El Salvador.

Fue el gobierno de Harper el que realmente impulsó la estrategia —a partir de 2011— de insertar al Estado canadiense en los planes de seguridad de los gobiernos del istmo, lo que incluye ante todo desarrollar relaciones con las fuerzas de seguridad locales[122]. Tras anunciar su preocupación por el "deterioro de la situación de seguridad", la oficina de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) dijo en junio de ese año que daría 7,1 millones CAD para "reformar la seguridad y las instituciones de justicia", con la ayuda de la Policía Montada de Canadá (RCMP) (FAIT, 2011d).

La naturaleza exacta del "deterioro" no se menciona en el anuncio, y sin duda que buena parte del istmo está infestado por la violencia de las pandillas y el narcotráfico, pero no hay que olvidar que el embajador canadiense en Guatemala expresó en televisión su preocupación por la ley y el orden del país tras las manifestaciones antiminería unos años antes, mientras que un reporte de la Defensa Nacional de 2009 observa que "las dimensiones de la pobreza y la desigualdad siguen siendo una amenaza seria al frágil orden democrático", lo que implica por lo menos el reconocimiento implícito de que las medidas neoliberales impulsadas por Canadá pueden ser una fuente de inestabilidad (National Defence, 2009).

A esos siete millones CAD anunciados en 2011 les siguieron meses después otros 9,2 millones en gastos de seguridad en toda la región, lo que incluía apoyo a la guerra contra las drogas, seguridad portuaria

122 En 2008, Relaciones Exteriores le dio 88 mil dólares canadienses a un proyecto que buscaba proveer equipo para entrenamiento especializado en el Centro de Entrenamiento para el Resguardo de la Paz de Centroamérica (Central American Regional Peacekeeping Training Centre) en Guatemala. Ver, al respecto, Proactive Disclosure (2008a). A ese monto se sumaron 58 mil dólares canadienses más en asistencia técnica al contraterrorismo. Ver Proactive Disclosure (2008b).

y a los sectores de vigilancia e investigación de la policía hondureña después del golpe (Prime Minister's Office, 2011b). Menos de un año después, durante la Cumbre de las Américas de 2012, Harper anunció que Canadá aumentaría el gasto en seguridad para la región con el establecimiento de la Canadian Initiative for Security in Central América, a través de la cual gastará 25 millones CAD durante cinco años. La iniciativa incluye: entrenamiento por parte de la RCMP y donaciones de equipos de navegación para la policía nacional de Costa Rica; donación de chalecos antibalas por el Departamento de la Defensa Nacional (DND) a las fuerzas armadas de Belice; entrenamiento en el uso de equipo especializado para intervenir teléfonos, vigilancia y análisis de inteligencia para las fuerzas de seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras; así como un proyecto conjunto con Colombia para apoyar a las fuerzas policíacas de Honduras y Guatemala (Prime Minister's Office, 2012b; FAIT, 2012c; National Defence, 2012; FAIT, 2012d). A estos proyectos podemos agregar el entrenamiento impartido por el DND a los oficiales de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua a través del Programa de Cooperación y Entrenamiento Militar. Lo que es más, el ejército canadiense ha participado desde 2003 en los entrenamientos anuales del Plan Panamex, un simulacro de respuesta ante las potenciales amenazas al Canal de Panamá. Canadá participó en ese evento con destructores navales (National Defence, 2011).

En comparación con el presupuesto de seguridad asignado a la región por Estados Unidos, el canadiense es muy modesto (y Canadá, por supuesto, no tiene esa historia de intervención extranjera). De cualquier forma, el gasto es significativo para los intereses canadienses en América Central, así como para los países receptores. Éste se presenta a menudo como parte de la lucha contra el narcotráfico. Y aunque la violencia de los cárteles es real, la guerra contra las drogas ha tenido devastadoras consecuencias para los derechos humanos, y se ha tornado común en toda la región que las fuerzas de seguridad intervengan en los barrios marginales y que criminalicen a los pobres y a los jóvenes. Esto no ha afectado a las altas esferas de los

cárteles, que a menudo tienen vínculos con las élites económicas y políticas de los países. El financiamiento canadiense a esa guerra sólo intensificará más estos problemas. Pero ésta ha sido un pretexto útil para que los gobiernos centroamericanos echen a los indígenas y campesinos de sus tierras en el nombre de la lucha contra el crimen. Es cierto que no todas las operaciones militares de la guerra contra las drogas están dirigidas a castigar a los pobres y abrir el camino de los grandes proyectos, pero varias buscan hacer precisamente eso. Se ha establecido un patrón común entre las expulsiones violentas en las operaciones antinarcóticos y las tierras deseadas por el capital multinacional (Bird, 2012: 35).

Independientemente de lo importante que sea o no la guerra contra el narcotráfico para la política exterior canadiense, el gasto en la región no está dirigido únicamente a este sector, y, en efecto, el gobierno de Harper nunca dijo que así fuera. Su objetivo general es fortalecer a las fuerzas de seguridad de las naciones del istmo —y sus relaciones con ellas— en la lucha por imponer el orden contra cualquier comunidad u organización que sea considerada una amenaza. Esto puede por supuesto incluir al narcotráfico, pero los aparatos de seguridad financiados y entrenados por Canadá no se enfocan exclusivamente en eso, pues son las mismas instituciones las que disuelven los bloqueos antiminería en Guatemala, por ejemplo, o las que reprimen a los disidentes en Honduras, Guatemala y El Salvador. Para poder impulsar su agenda, Canadá ha tejido relaciones con fuerzas policíacas y militares con un largo historial de violaciones a los derechos humanos, fuerzas que han sido duramente criticadas por su manera de tratar a los disidentes y manifestantes.

La situación en Honduras es escandalosa desde el golpe de 2009, pues la policía (tanto en uniforme como a través de unidades paramilitares) ha estado involucrada en terribles actos de violencia. Cualquier afirmación de que el dinero canadiense mejorará o "reformará" el comportamiento de estas fuerzas de seguridad (lo que ni siquiera forma parte realmente del propio discurso del gobierno) se ve refutada

por la corrupción estructural endémica a estas instituciones, por la persistente desigualdad y por la fuerza que se necesita para desarticular a la oposición al neoliberalismo. La alianza entre Canadá y Colombia (el país con el peor historial en violaciones de derechos humanos en el hemisferio) para entrenar a la policía salvadoreña es una buena muestra del compromiso del gobierno canadiense con la protección de los derechos humanos.

Conclusión

Este capítulo ha intentado trazar los contornos de la dinámica de inversión canadiense y de la intervención diplomática en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Hemos intentado vincular este análisis con el de Honduras y Guatemala. Lo primero que salta a la vista es la defensa sistemática y estructural que ha hecho el Estado canadiense de los intereses del capital a lo largo y ancho de la región. Estos seis casos de estudio, así como el análisis de la estrategia de seguridad del Estado canadiense en Centroamérica, han hecho a un lado el delgado velo ideológico de promoción de la democracia y defensa de los derechos humanos, para revelar el núcleo imperialista de la política exterior canadiense.

El objetivo de este análisis de la estrategia y las tácticas concretas desplegadas por Canadá en América Central ha sido, por un lado, reconocer la complejidad histórica de la situación de cada país y, por el otro, mostrar la actividad de las clases populares en la defensa de sus derechos ante las amenazas de enemigos violentos y poderosos. Esta es una historia sobre la amenaza imperial canadiense tanto como es una historia de la resistencia heroica de los explotados y los oprimidos.

Segunda parte
Los andes

La mala hora en colombia

El fondo histórico

Export Development Canada (EDC) es la agencia federal responsable de financiar el comercio y asegurar a las compañías que buscan expandirse o penetrar nuevos mercados. La EDC abrió una sede en Bogotá en febrero de 2014, como parte de su estrategia de expansión en Centro y Sudamérica. El objetivo de la nueva oficina es fortalecer la presencia canadiense en la región andina de Colombia, y ayudar a las corporaciones canadienses a sacar provecho de una serie de proyectos de infraestructura previstos para los siguientes años.

De acuerdo con Rajesh Sharma, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Internacional en la EDC, "la gran demanda de capital por parte de los grandes proyectos de infraestructura es una buena oportunidad para que la EDC haga uso de sus robustas capacidades de financiamiento en beneficio de las compañías canadienses que ahí operan". Con un ojo en la expansión de las industrias de extracción de recursos naturales, la oficina de Bogotá ayudará a que las empresas canadienses "se inserten en las cadenas productivas de los proyectos venideros de infraestructura en los sectores del petróleo, gas y minería", de acuerdo con Sharma. "La experiencia de Canadá en redes inteligentes para el sector energético, en tecnologías limpias y en oferta de infraestructura a bajo precio para el sector del gas y petróleo, puede

generar un mayor comercio, pues lo que Colombia necesita coincide perfectamente con lo que Canadá puede ofrecer" (Isfeld, 2014).

La nueva oficina de la EDC es la punta del iceberg del poder imperial canadiense en los Andes. Su ubicación estratégica permitirá la coordinación de la inversión por el sur hacia Ecuador y Perú, y por el norte hacia Centroamérica. La base en Bogotá refleja también un interés cada vez mayor en la propia Colombia, particularmente en las industrias extractivas de la minería y el petróleo, pero también en las telecomunicaciones, la banca, la venta de armas, el calzado, el procesamiento de comida, la educación, la impresión y el papel (Mining Watch y CENSAT-Agua Viva, 2009: 11). El gobierno canadiense ha impulsado una nueva ola de inversión canadiense en Colombia a través de la ayuda al desarrollo, el Tratado de Libre Comercio bilateral y el apoyo a la militarización del campo, luego de que la ola anterior se secó a mediados y finales de la década de 1990 tras el aumento de la violencia.

La inversión canadiense en Colombia se ha más que cuadriplicado entre 2006 y 2012, de 414 a 1.716 millones CAD, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la oficina especializada de Canadá, CANSIM, aunque la embajada en Bogotá sugiere que si se toma en cuenta la inversión canadiense que entra vía los centros financieros caribeños *offshore*, las cifras podrían triplicarse (FAIT, 2007)[123]. Asad Ismi afirma que si se usan las cifras señaladas por los propios inversionistas canadienses, la inversión ronda los dos mil millones CAD para 2012 (Ismi, 2012: 31).

La minería es la punta de lanza de la penetración canadiense en Colombia. De 98 propiedades mineras en proceso de exploración, desarrollo o exploración a finales de 2013, 80 pertenecían a compañías canadienses[124]. Esta tendencia no hará sino aumentar pues más

123 Las cifras mencionadas proceden del Cuadro Estadístico 376-0051 de la CANSIM (Fecha de acceso: 02/10/2013).

124 Las estadísticas sobre las propiedades mineras vienen de la base de datos de www.northernminer.com (Fecha de acceso: 03/10/2013).

concesiones serán abiertas para la exploración en los siguientes años. Un estimado afirma que un 40 por ciento del territorio colombiano es cortejado por las compañías mineras para exploración y posible explotación (López, 2010, Webster, 2012). Las compañías canadienses de petróleo y gas también han participado con éxito en las subastas gubernamentales de concesiones; en 2010, Calgary Talisman y Ecopetrol compraron los activos colombianos de British Petroleum por casi dos mil millones CAD. Gran Tierra Energy —también canadiense— triplicó su producción en 2009 (*ibíd.*). En 2013, la inversión canadiense representaba el 36 por ciento de la producción petrolera de Colombia (DFATD, 2014b). Como dice *The Globe and Mail*, sin un dejo de ironía: "Estamos ante una invasión canadiense en Colombia" (Webster, 2012).

Esta primera invasión ha provocado que otras empresas canadienses vuelquen su mirada hacia Colombia. Menos por casualidad que por necesidad, el sector financiero sigue los pasos de la minería. Brookfield Asset Management anunció en 2009 que había formado el fondo de capital y de infraestructura más grande en el país. Su objetivo principal es financiar la construcción de oleoductos (*The Globe and Mail*, 10/09/2009: B10). Un año después, Scotiabank compró los activos de crédito del Royal Bank of Scotland por 64 millones CAD. "Todo parece indicar que este banco canadiense [Scotiabank] quiere convertirse en uno de los principales jugadores en América Latina", escribió la revista colombiana *Semana* sobre esta compra (*Semana*, 08/10/2011). En 2011, Scotiabank se hizo con el control del quinto banco más grande de Colombia, Colpatria, por mil millones de dólares. Ambas adquisiciones estuvieron motivadas por las ganancias esperadas del financiamiento de los sectores minero y petrolero tras la implementación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (Robertson, 2011; *La República*, 18/01/2012).

Canadá ha invertido en los sectores de la extracción de recursos y la banca en un contexto de incesante violencia y desposesión. Un largo proceso histórico, marcado por la derrota de la izquierda colombiana hacia el final del siglo XX, y la aplicación de un neoliberalismo

armado legal e ilegalmente —el ejército y los paramilitares, respectivamente— durante los años ochenta y noventa, preparó la pista de aterrizaje para los capitales canadienses. Ya aclimatado a este nuevo ambiente, la violencia que el capital estructuralmente necesita para su reproducción —para desbrozar las tierras de sus habitantes, destruir a los opositores armados o aterrorizar a movimientos sociales desarmados opuestos a la extracción en sus territorios— disipa rápidamente cualquier ilusión en que las compañías canadienses sean testigos neutrales en un conflicto esencialmente colombiano o, peor, víctimas inocentes del caos irracional que las rodea. Más bien, estas compañías están totalmente vinculadas a las redes de violencia en el campo y a la élite colombiana. Es esto lo que ha permitido el florecimiento de un capitalismo extractivista, para detrimento de las comunidades campesinas, las poblaciones indígenas y afrocolombianas y los mineros artesanales, por no hablar de los obreros mismos. Es a esta historia de sangre y fuego a la que hay que mirar ahora para poder entender cómo fue posible la situación actual.

Los movimientos sociales de la Colombia contemporánea operan en un terreno peligroso. Las grandes reservas de petróleo, gas natural, carbón, hierro, níquel, oro, cobre, esmeralda y energía hidroeléctrica, han atraído a multinacionales que tienen un interés particular en la perpetuación de la guerra civil, el terror militar y paramilitar, y la grotesca concentración de la riqueza. De acuerdo con el sociólogo Jaime Rafael Nieto López, Colombia es posiblemente el único país de América Latina en el que esas dos expresiones del poder del imperialismo están completamente unidas. Prácticamente todos los países de América Latina han padecido el neoliberalismo desde el último cuarto del siglo XX, pero Colombia también ha sufrido una guerra endémica de más de medio siglo que ha sometido todavía más al país al poder del sistema internacional y ha obstruido casi cualquier posibilidad de construir actores sociales robustos o movimientos fuertes (Nieto, 2011).

La lucha entre las guerrillas y el Estado colombiano emergió de la histórica y violenta injusticia de clase. Jorge Eliécer Gaitán, líder

del Partido Liberal, fue asesinado el 9 de abril de 1948. Estalló una insurrección popular en respuesta al crimen. El Bogotazo, como se le llamó a las protestas, inauguró una década de guerra entre los Conservadores y los Liberales por el control del campo, un conflicto que dejó un saldo de más de 200 mil muertos[125]. Los campesinos fueron excluidos del Frente Nacional que en 1958 acordó la paz entre los Conservadores del campo y los Liberales de las ciudades. La exclusión de los campesinos se expresó en el hecho de que la guerra los desplazó y los desorganizó como clase (Zibechi, 2012).

Buena parte del campesinado se transformó en un ejército guerrillero para poder sobrevivir a esta situación de violenta desposesión rural. Primero se formaron Comités de Autodefensa. Frente a la exclusión y la perpetua violencia de los de arriba, las autodefensas se transformaron en 1966 en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que abrió una nueva época de lucha campesina. Las ofensivas militares lanzadas por el Estado para destruir a la guerrilla fracasaron una tras otra y el territorio controlado por las FARC se expandió[126]. El Estado respondió, en dos momentos distintos, intentando abrir negociaciones de paz. Bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) se acordó una tregua y se formó la Unión Patriótica (UP) en 1985. La UP era una especie de frente del que formaban parte las FARC y el Partido Comunista Colombiano. En las primeras elecciones ganaron cinco curules en el Senado, 14 diputados en el Congreso Nacional y 23 alcaldías. Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores, la UP fue prácticamente exterminada por la ofensiva conjunta de paramilitares, fuerzas armadas y narcotraficantes (Hylton, 2006: 72-78).

Durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), las FARC recibieron una zona desmilitarizada en las playas del río Caguán como parte del proceso de negociaciones de paz. La zona incluía cuatro municipios y 110 kilómetros cuadrados de territorio. Sin embargo, el

125 Una historia clásica acerca de la violencia en el centro de Colombia está en Roldán (2002).
126 Para un contexto general, ver Richani (2014).

gobierno de Pastrana se adhirió al mismo tiempo al Plan Colombia (una iniciativa de EE.UU), que terminó con cualquier intención pacifista original y orilló otra vez al país a la guerra civil (Zibechi, 2012)[127].

La modernización neoliberal de las últimas décadas ha conllevado una profundización de las políticas de libre mercado. El Estado ha intervenido agresivamente para flexibilizar el mercado laboral, darle un impulso a los flujos comerciales y de capital, y agilizar la privatización de sectores clave de la economía, como las telecomunicaciones, la banca, el petróleo, los servicios públicos, la seguridad social, la educación y la salud. La transición económica hacia un nuevo modelo de desarrollo hizo sus primeros pinitos bajo el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y fue consolidada con la presidencia de Gaviria (1990-1994). Los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010) no han cejado en la profundización de sus líneas generales. Una buena muestra de esto han sido los recientes tratados de libre comercio, con Estados Unidos el firmado que entró en vigor en 2012, así como el rubricado con la Unión Europea en 2013 (Nieto, 2011: 127).

Hacia la mitad de la década de 1990, las FARC tenían su base en las planicies bajas y en las selvas del sur; y el más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN) tenía una fuerte presencia en el Pacífico suroccidental y en las planicies del este. Los movimientos guerrilleros tenían un verdadero peso social, aparatos militares y una alta presencia política. Las FARC, con 18 a 20 mil combatientes, controlaban el 90 por ciento de los municipios fronterizos y varias carreteras clave entre las principales ciudades, mientras que el ELN, con tres a cinco mil combatientes, era una cuña importante en la mitad del país controlada por el Estado (Hylton, 2014: 89-90). La reestructuración neoliberal continuó deprisa durante esa década (1990) y hacia el nuevo siglo, lo que intensificó lo patrones desiguales de concentración de riqueza, así como el ejercicio de la violencia desde las élites (Hylton, 2006: 80-86). "No es una coincidencia", dice la socióloga Jasmin Hristov, "que

127 Sobre el plan Plan Colombia, ver Petras (2001: 30-49).

la implementación del proyecto neoliberal se haya visto acompañada por la expansión de la capacidad de los aparatos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, el aumento de la violencia y la violación a los derechos humanos, y el uso de tácticas de exterminación contra los movimientos sociales" (Hristov, 2006: 14). Las amenazas, el terror y el asesinato por parte de las fuerzas militares y paramilitares han sido obstáculos persistentes para el desarrollo de movimientos populares desde hace varias décadas. William Avilés dice que "los activistas de derechos humanos, líderes de la izquierda, sindicalistas y los campesinos presuntamente del lado de los guerrilleros, han representado la gran mayoría de estas víctimas" (Avilés, 2006: 380). Las principales fuerzas guerrilleras, las FARC y el ELN, también han cometido atrocidades contra los movimientos sociales, aunque en un muchísimo menor grado (ver tabla 2).

Tabla 2
Porcentajes de responsabilidad por muertes de no combatientes y desapariciones forzosas

	1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Guerrillas	28%	38%	36%	23,50%	21,30%	19,60%	16,30%
Fuerzas de seguridad	54%	16%	18%	7,40%	2,70%	2,40%	4,60%
Paramilitares	18%	46%	46%	69%	76%	78%	79%

Fuente: Avilés (2006). Información derivada de la Comisión Colombiana de Juristas.

Según algunos datos estimativos, Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, pues 2.800 de ellos han sido asesinados entre 1986 y 2010 (Sankey, 2014)[128]. El 42 por ciento de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas tienen lugar en el sector de la minería y la energía. El 97 por ciento de los asesinatos de sindicalistas han sido perpetrados por el ejército o grupos paramilitares, y el restante tres por ciento por la guerrilla o por otros actores armados (Ramírez Cuellar, 2005: 86-87). Tres millones de

128 Ver también ICFTU (2006) y Campbell (2006: 36).

personas han sido desplazadas en lo que va del siglo XXI, y dos de esos tres millones lo han sido en regiones mineras (Hylton, 2006: 4; Ramírez Cuellar, 2005: 84-85). Los niveles de violencia en estas zonas son elevadísimos. En estos municipios, entre 1995 y 2002,

> ha habido un promedio anual de 828 homicidios, 117 heridos, 71 torturados, 335 amenazas de muerte y 150 detenciones arbitrarias. Esto sin contar las 433 masacres, que cuando se agregan a los homicidios anteriores hacen un total de 6.625 en ocho años (Ramírez Cuellar, 2005: 85).

A la violencia hay que agregarle una situación social verdaderamente terrible. El PIB per cápita era de 7.900 dólares en 2005 (CIA, 2006). Sin embargo, el 64 por ciento de la población vive debajo de la línea de pobreza, y el 23 por ciento en pobreza absoluta. Las peores tasas se encuentran en las zonas mineras (Ramírez Cuellar, 2005: 82-83). Once de los poco más de 43 millones de ciudadanos simplemente no consumen la suficiente cantidad de calorías (Hristov, 2006: 14). Un cuidado adecuado de la salud, la educación y el empleo seguro son privilegios exclusivos de una pequeña élite.

Lo que Hristov llama el "espectro del paramilitarismo" ha acechado en los años de implementación neoliberal y ha permitido una y otra vez la desposesión de los campesinos y la concentración de tierras[129]. En Colombia hay unos 15 millones de campesinos, el 38 por ciento de la población. El 60 por ciento de la población rural depende de distintas formas de explotación directa de la tierra, y "el resto viven del sector servicios, la minería artesanal, la pesca, el turismo, trabajan en corporaciones multinacionales extractivas o tienen empleos de otro tipo" (Richani, 2012: 51). Entre la década de 1980 y los años 2000, los grandes terratenientes "contrataron o financiaron a los paramilitares" para echar a los campesinos de sus tierras y confiscarla a través de

129 Ver J. Hristov (2014).

títulos de propiedad ambiguos o ilegales (Richani, *op. cit.*: 69). Entre 1984 y 2003 hubo un proceso de gran concentración de tierras, al punto que las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de representar el 32,7 por ciento de la masa de tierras cultivables, al 62,6 por ciento; esas tierras están en manos del 0,4 por ciento de los propietarios. Unos dos millones de pequeños campesinos poseen, entre todos, menos de 1,3 millones de hectáreas, mientras que 2.300 grandes propietarios tienen 39 millones. De acuerdo con el sociólogo Nazih Richani, "es posible que muchos de esos 2.300 terratenientes constituyan una clase social híbrida de rancheros ganaderos, narcoburgueses, especuladores de tierras y agroindustriales que, juntos, han conformado una alianza reaccionaria que sistemáticamente se opone a cualquier reforma agraria" (Richani, *op. cit.*: 68).

Buena parte de la desposesión reciente y la consiguiente concentración de tierras ha sido impulsada por la violencia paramilitar. "Entre 2002 y 2010", dice el historiador Forrest Hylton,

> en varias regiones, la derecha paramilitar se hizo con el control del Estado a través de todo tipo de métodos. En 2002, sus aliados tenían un tercio de los curules parlamentarios, y en 2006 gobernaban 22 de los 32 departamentos; entre 1999 y 2007, 5,5 millones de hectáreas fueron usurpadas o "abandonadas" a la fuerza. La ganadería ocupó 40 millones de hectáreas, frente a cuatro millones de la agricultura (Hylton, 2014: 91).

Con Uribe y Santos se han implementado nuevas reformas al mercado de trabajo, con el objetivo de hacer más fácil la contratación y el despido de los trabajadores, y el salario de los trabajadores públicos se ha estancado en comparación con la inflación. Los impuestos directos han aumentado, lo que afecta fundamentalmente a los pobres, mientras que las regalías e impuestos sobre el gran capital se han reducido. Junto con esto, ha habido varios recortes al gasto público en educación y salud, así como menos recursos transferidos del gobierno

federal a los municipios y departamentos (Nieto López, 2011: 127). La reestructuración neoliberal ha profundizado la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. En las palabras de Rafael Nieto López, el país ha vivido un proceso de desciudadanización en el que se ha vuelto imposible, para grandes capas de la sociedad, el ejercer los derechos de ciudadanía consagrados por la Constitución de 1991 (Nieto López, *op. cit.*: 129). El panorama social de la era neoliberal ha empeorado a consecuencia de la guerra. El conflicto armado ha obligado a unas cinco millones de personas a dejar sus tierras, pueblos y casas a través de desposesiones forzosas y agresiones.

Un reporte de Human Rights Watch afirma que el conflicto armado ha orillado a los pequeños campesinos a abandonar hasta seis millones de hectáreas de tierra, que han sido luego tomadas por los grandes terratenientes. De acuerdo con esta misma organización, hay más víctimas del desplazamiento forzoso en Colombia que en cualquier otro país del mundo. Encima de esto, el conflicto ha provocado el abandono de los sectores de seguridad social, educación, vivienda y salud, y que el gasto público se enfoque cada vez más en el sector militar (80 mil millones de dólares durante los dos gobiernos de Uribe) (Nieto López, *op. cit.*: 128)[130]. Durante la última década, una gran cantidad de campesinos ha perdido cerca de seis millones de hectáreas de tierra productiva ante los viejos y nuevos grandes terratenientes, esta vez integrados a las redes del narcotráfico y de los paramilitares que en los hechos controlan buena parte del país.

La estrategia de la "seguridad democrática", concebida por Uribe y heredada por Santos, consiste en profundizar la guerra contra las guerrillas hasta su derrota y sumisión total. Para sus ideólogos, en Colombia no hay un conflicto político armado, sino una "amenaza terrorista", lo que quiere decir que no hay ninguna posibilidad de diálogo con los "terroristas" (Nieto López, 2011: 129). Al mismo tiempo, el régimen de Uribe negoció la supuesta desmovilización de los grupos

130 El reporte de Human Rights Watch es citado por Zibechi (2013).

paramilitares organizados bajo el manto de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta desmovilización implicaba garantizarles inmunidad por sus crímenes y que se quedaran con las tierras que habían saqueado a fuego y plomo (Nieto López, 2011: 129-130). La estrategia de la seguridad democrática golpeó profundamente a las FARC. Muchos de sus frentes colapsaron o se redujeron. Se estima que entre 2008 y 2009 cerca de 12.700 soldados rasos de la guerrilla se rindieron ante las autoridades, así como más de mil cuadros medios. Esto obligó a las FARC a replegarse a las fronteras, a los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Arauca. La dispersión territorial redujo significativamente la capacidad militar de las guerrillas. El ELN también ha sido reducido a una resistencia pasiva, y en la medida de lo posible evita entrar en combate contra el ejército colombiano (*ibíd.*).

A pesar de la resistencia de las comunidades afrocolombianas e indígenas contra el proceso de desposesión de la década de 1990 y los primeros años del nuevo milenio, y de las permanentes luchas de los trabajadores y los pobres de las ciudades, el panorama hacia el final de la primera década del siglo XXI era bastante negativo:

> Una insurgencia militarmente fuerte de la izquierda, un fuerte apoyo del imperio a las fuerzas armadas y una coalición poderosa y semiautónoma de ejércitos privados de derecha o ligados al narcotráfico, debilitaron los movimientos populares y radicales. Los patrones de contrainsurgencia contra los civiles […] se vieron reforzados durante la Guerra Fría, y reempaquetados con una etiqueta terrorista luego del 11 de septiembre de 2001. No es la primera vez que el terror y la amnesia oficial se convierten en lengua franca de la política y la sociedad colombiana ante las luchas por la paz y la justicia (Hylton, 2006: 129).

El punto importante que hay que resaltar desde la perspectiva antiimperialista defendida por este libro, es que la actividad minera canadiense en Colombia está resurgiendo, y que está implicada en la

economía de guerra, y se beneficia de la desposesión provocada por la violencia. Esto es particularmente importante en vista del discurso del Estado canadiense acerca de América Latina. En una visita a la región en 2009, el Primer Ministro Stephen Harper hizo una alusión apenas velada al gobierno de Hugo Chávez, previniendo al resto de América Latina de los peligros "del síndrome del nacionalismo económico, el autoritarismo político y la guerra de clase". En contraste, y acerca del gobierno de Uribe, Harper dijo:

> Cuando vemos que un país como Colombia ha decidido resolver sus problemas sociales, políticos y económicos de una manera íntegra, que quiere aceptar la libertad económica, la democracia política, los derechos humanos y el desarrollo social, entonces decimos: "Estamos aquí para darles ánimos y estamos aquí para ayudarlos"[131].

Y en efecto, en 2011 el Consejo Canadiense para las Américas, que administra las relaciones económicas con la región, nombró a Uribe "estadista del año" —el mismo año en que le dio a Peter Minck, el magnate canadiense de Barrick Gold, un premio por sus "logros en la vida"—. Siguiendo a Hylton, "[El gobierno de] Uribe adoptó la forma semiautoritaria de gobierno parlamentario, y no respetó los derechos individuales ni las leyes internacionales" (Hylton, 2006: 129). Uribe fue el candidato de los paramilitares tanto en la elección de 2002 como en la de 2006. Antes de llegar a la presidencia, fue gobernador de Antioquia durante dos años. En ese corto período, las milicias antiguerrilleras conocidas como Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada) desplazaron a unos 200 mil campesinos (Hylton, 2006: 93). En las zonas bananeras de Antioquia la tasa de homicidios se disparó bajo su gobierno: "En 1995, se dobló a los 800; en 1996, a

131 A propósito de las opiniones de Harper sobre Colombia, ver Foot (2007a: A4); sobre Venezuela, ver Foot (2007b: A1).

1.200, y en 1997 a 700. En 1998, un año después de que Uribe dejara el gobierno, esa cifra cayó hasta los 300" (Hylton, *op. cit.*: 94).

A partir de 2012, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), una nueva coyuntura política abrió la posibilidad de un acuerdo general entre las guerrillas y el Estado para construir una paz duradera y terminar con 60 años de guerras (Zibechi, 2012). La correlación de fuerzas ha cambiado profundamente desde que las FARC tomaron el camino de la lucha armada hace 60 años. La sociedad colombiana no es la misma. Hoy, la mayor parte de la población es urbana, y la principal demanda de las clases populares ha pasado a ser la vivienda, más que la tierra. La población urbana quiere que termine el conflicto. En las principales ciudades (que no son gobernadas ni por los liberales ni por los conservadores) han estallado nuevos movimientos sociales.

Otro cambio tiene que ver con la transformación de las clases dominantes. El principal modelo de acumulación del siglo XXI implica la extracción pura y dura de recursos naturales —hidrocarburos, minerales y monocultivos industriales— antes que los viejos modelos de agricultura, dependientes de la explotación campesina. La opinión del sector dirigente de las clases dominantes —bien expresada por Santos— es que el Estado debe transferir los recursos gastados en el sector militar a la construcción de infraestructura que facilite la acumulación, a través de la inversión directa de corporaciones multinacionales (*ibíd.*). El citado sociólogo uruguayo Raúl Zibechi afirma que el agotamiento de la guerra entre las guerrillas y el Estado ha hecho visible otra guerra en formación, esta vez entre el capital multinacional y los pueblos indígenas y afrodescendientes del campo. La Constitución de 1991 reconoce los territorios ancestrales de los afrocolombianos y los indígenas bajo la designación de *resguardos*. El resultado de este reconocimiento es que se han creado 600 reservas indígenas que ocupan un tercio del territorio colombiano. Muchas de estas reservas están ubicadas precisamente en las áreas más atractivas para el capital extractivista, lo que ha convertido a estos grupos en protagonistas —a

pesar de sí mismos— de esta guerra larvaria. En 2011, empero, más del 80 por ciento de las tierras de las reservas indígenas reconocidas albergaban ya concesiones mineras, y los proyectos de extracción petrolera tenían la mira puesta sobre otras nueve millones de hectáreas (Peace Brigades International, 2011: 9-10, 14-15).

Durante las últimas décadas, las fuerzas armadas se han fortalecido numérica y tecnológicamente, y han mejorado su capacidad de combate y vigilancia. Estados Unidos ha jugado un rol esencial en ello. Al mismo tiempo, las FARC se han debilitado en términos militares, y han perdido buena parte de su legitimidad política como resultado de la urbanización y del desgaste de las relaciones con las comunidades campesinas. Al día de hoy, el fin de la guerra no implicaría en sí la paz para los movimientos populares, sino la continuación de la lucha en condiciones más favorables. Durante los períodos anteriores de conflicto declarado —enfrentándose a la represión y la muerte— varios movimientos pudieron todavía organizar enormes movilizaciones —como la Minga Social y Comunitaria en 2008, así como el establecimiento del Congreso de los Pueblos—. En la coyuntura actual, los indígenas y campesinos continuarán defendiendo su territorio contra las multinacionales. La "paz" del extractivismo, siguiendo a Zibechi, está abriendo, a su vez, un nuevo ciclo de luchas (Zibechi, 2012).

Una muestra de este naciente ciclo de lucha fue la huelga agraria nacional de agosto de 2013[132]. Ésta movilizó a miles de campesinos en todo el país, federados en torno a una serie de exigencias que expresaban los intereses de los choferes transportistas, los pequeños

132 Forrest Hylton tiene razón en recordarnos, en una evaluación sobria sobre el supuesto renacimiento de la izquierda colombiana tras las negociaciones de paz y la huelga en el campo, que la evidencia de una articulación sólida de la izquierda urbana es, en el mejor de los casos, fragmentaria. "A pesar de las protestas en Bogotá, no hay izquierda urbana que pueda capitalizar el descontento", escribe, "o [que pueda] superar, a través de la construcción de una coalición, los límites sectoriales de la protesta rural en el que es ya una país predominantemente urbano" (Hylton, 2014: 68). Sin embargo, el tamaño de las movilizaciones agrarias de 2013 es probablemente una buena señal de que se ha abierto un nuevo ciclo de lucha en el campo colombiano, en donde se resienten las peores consecuencias del extractivismo.

productores cafetaleros, los mineros artesanales y una amplia gama de campesinos afectados por la transformación neoliberal de la agricultura colombiana desde los inicios de la década de 1990. Los distintos sectores involucrados en las protestas se articularon a través de la formación de una Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (Zibechi, 2013a).

El gobierno de Santos respondió inicialmente haciendo uso de la represión (12 muertos, cuatro desaparecidos, 385 heridos, 262 detenidos y 660 casos de violaciones a los derechos humanos), y posteriormente hizo algunos cambios en el gabinete (una concesión cosmética, puesto que las nuevas elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina), junto con otros gestos simbólicos enmarcados en una estrategia general de contención (*ibíd.*). Con todo, la huelga se mantuvo firme durante cuatro semanas y logró incluir a los indígenas y a los afrodescendientes. Más sectores oprimidos se fueron sumando a la lucha. Las protestas de los mineros artesanales precedieron a las enormes movilizaciones del pequeño campesinado en agosto de ese 2013. Las principales demandas de los primeros incluían el reconocimiento oficial a través de un nuevo Código Minero, para que la policía y el ejército dejaran de reprimir el ejercicio de sus actividades cotidianas. También exigían que se reconociera a las comunidades indígenas y afrocolombianas que llevan a cabo esta actividad, y que se dejaran de emitir nuevas concesiones a las multinacionales dentro de estos territorios (*ibíd.*).

Violencia de extracción

Si la minería a gran escala ya era parte importante de la estrategia nacional de desarrollo colombiana en los años noventa, fue a partir de la siguiente década que el ritmo del extractivismo se aceleró lo suficiente como para realmente cambiar la situación en el campo (Zarate-Laun, 2011). Una nueva era comenzó con la promulgación de un Código Minero en 2001, que dio inicio al intento de Uribe de sentar las bases de un nuevo régimen de acumulación. Ese Código buscaba abrirle

paso a la gran minería a través de, por un lado, una serie de reformas legales que garantizaran un ambiente jurídico atractivo y una fuerza de trabajo amoldada a la inversión extranjera, y, por el otro, implicaba una política de Estado y de violencia paramilitar —bajo la rúbrica de la "seguridad democrática"— que "limpiara" regiones enteras de sus poblaciones para facilitar la extracción de recursos, y para destruir la resistencia que emergiera del avance del capital multinacional en esas áreas: mineros artesanales, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes (Sankey, 2014: 122, 126).

Es impresionante la velocidad con la que la minería conquistó al país. Entre 2005 y 2010, la contribución de la minería y el petróleo a las exportaciones se triplicó, hasta casi llegar al 50 por ciento del total. En términos absolutos, esto quiere decir que estos dos sectores representaron un valor de 39 mil millones de dólares en 2010, contra 19 mil millones en 2005. La inversión privada en la exploración, casi enteramente de capital multinacional, se triplicó en esos mismos años, y el área del territorio colombiano asignada a exploración se cuadruplicó. Casi un tercio de toda la inversión extranjera entre 2004 y 2009 fue precisamente al sector minero (Cuervo Sotelo, 2012: 140). Si se combina la inversión extranjera directa en los sectores de la energía y la minería, ésta se multiplicó por diez entre 2002 y 2010, y pasó del 42 al 57 por ciento; o de 466 a 4.500 millones de dólares (Sankey, 2014: 130). Más del 8,4 de las 114 millones de hectáreas del territorio colombiano son territorio de explotación minera, y 37 millones más han sido abiertas ya a la exploración petrolera (Peace Brigades International, 2011: 4). El capital canadiense es una parte esencial de este proceso. Hacia el final de 2011, las compañías canadienses representaban más del 65 por ciento de todas las que están involucradas en la exploración minera, y más del 75 por ciento de todas las que están buscando petróleo y gas (Sankey, 2014: 132).

El giro hacia un régimen de acumulación basado en la extracción de minerales y petróleo por el capital multinacional ha reconfigurado

la ecología social de lo que hasta hace poco eran zonas remotas del país, en las que sobrevivía la pequeña minería artesanal y la pequeña propiedad campesina, en donde los niveles de pobreza estaban significativamente por arriba de los del promedio nacional y apenas había servicios públicos. La transformación social del campo que conllevó la llegada del capitalismo extractivista ha sido un proceso altamente violento. Los intereses del capital multinacional han chocado de frente con los de las comunidades locales que viven, literalmente, sobre enormes depósitos de riqueza natural.

El largo conflicto armado en Colombia ha sido un buen pretexto para echar mano de las fuerzas militares o paramilitares en zonas de potencial minero o de extracción petrolera. La dinámica suele ser la siguiente: la corporación pide "seguridad" para sus inversiones, lo cual quiere decir, antes que nada, la extirpación de cualquier grupo insurgente del área en cuestión. Sin embargo, esta exigencia de protección provoca una violencia que excede ampliamente cualquier acción necesaria para desarticular a los grupos armados. La facilidad con la que el Estado identifica a cualquier movimiento de oposición con la guerrilla es impresionante (Cuervo Sotelo, 2012: 143). Envuelta en el discurso de la "seguridad", cualquier expresión de resistencia por parte de las comunidades locales contra las corporaciones mineras o petroleras puede provocar un enorme despliegue de violencia. Las compañías multinacionales no son inocentes. De acuerdo con la socióloga colombiana Yohana Cuervo Sotelo,

> de este modo, cuando una transnacional se asienta en un país en conflicto como Colombia, se hace pasar como si fuera víctima de ese conflicto, como un actor neutral, y fervientemente exige la intervención del Estado y de sus fuerzas militares para que garanticen la estabilidad de su inversión. La verdad es que es la necesidad de proveer seguridad y estabilidad a las grandes mineras, y de crear condiciones propicias para que se instalen sin gran resistencia, y a la vez reconfigurar estas regiones de acuerdo a la lógica de la

> extracción, lo que realmente impulsa la implementación de medidas violentas por parte del Estado (*ibíd.*).

La Consultora Colombiana en Derechos Humanos y Desplazamiento apunta que hay una importante presencia militar y paramilitar en las regiones mineras y, según el sindicato minero Minercol, el 87 por ciento de los desplazados han huido precisamente de estas regiones. El 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos suceden también ahí (Peace Brigades International, 2011: 6).

En efecto, parte esencial de la estrategia de la "seguridad democrática" de Uribe consistía en el despliegue de enormes contingentes militares en las zonas en las que operan las compañías mineras y transnacionales, para proteger su infraestructura. Durante su presidencia, el presupuesto de defensa llegó al 5,6 por ciento del PIB en 2008, contra el 2,2 por ciento en 1990. Como dijimos antes, su rol en la represión a los opositores a los proyectos extractivos y las conexiones de su gobierno con los paramilitares están bastante claras. Un tercio de la Cámara Baja del Congreso y un tercio también de los senadores durante el período de Uribe, han sido investigados por sus vínculos con los paramilitares (Sankey, 2014: 126). "Una de las características más polémicas de la llegada de las corporaciones transnacionales y del *boom* minero en el país", escribe Cuervo Sotelo, "es la utilización de la violencia, la militarización y la represión como un mecanismo para garantizar la inversión extranjera, lo que quiere decir: permitir la apropiación territorial en beneficio de las corporaciones" (Cuervo Sotelo, 2012: 142).

Como veremos en el capítulo "Un ejercicio de cinismo" de este libro, el resultado de las políticas de los gobiernos de liberales y conservadores en Colombia, a partir de los años noventa, ha sido que Canadá se inmiscuya más y más en el aparato de seguridad colombiano, lo cual ha beneficiado al capital canadiense tanto en Colombia como en el resto de América Latina.

Inversión canadiense y resistencia popular

La segunda fase de la invasión del capital canadiense, que podemos situar a partir de la segunda década de los años 2000, ha provocado una fuerte oposición popular y ha llevado a una confrontación violenta con las fuerzas de seguridad privada de las compañías. Anticipando las reacciones antiminería que se venían, el gobierno colombiano anunció a los grupos de inversionistas en Nueva York, Calgary, Toronto, Londres y Sidney, que garantizaría la seguridad de las compañías durante la fase de exploración con el despliegue de batallones militares en las regiones donde se los necesitara (Paley, 2010c). En otras palabras, la seguridad militar era un incentivo para que las multinacionales mineras y petroleras entraran al país.

Las organizaciones de derechos humanos y los sindicalistas colombianos han expresado su preocupación por la complicidad de las compañías canadienses en las atrocidades perpetradas en la industria minera desde la mitad de la década de 1990. Conquistador Mines Ltd., por ejemplo, fue identificada por los activistas por explorar depósitos áureos en el sur de Bolívar, en donde era bien sabido que "la guerrilla y los paramilitares se han peleado la simpatía de la gente", y donde, dicen los activistas de derechos humanos, "los grupos paramilitares han perpetrado masacres contra campesinos y mineros artesanales opuestos a las actividades de las compañías extranjeras" (Knox, 2011: A11). Amnistía Internacional y Friends of the Earth también "sonaron la alarma por los presuntos abusos que rodean [...] a los proyectos canadienses" (Patterson , 2005c: A4). El diario *Toronto Star* reportó en 1999 que: "Estas compañías operan dentro de una zona de guerra civil que tiene todo que ver con la riqueza y el poder. Nadie —las mineras extranjeras menos que nadie— es neutral" (*Toronto, Star*, 21/01/1999: A1). Un reporte publicado por una delegación de derechos humanos canadiense en 1997, compuesta por sindicalistas y miembros de iglesias, llegó a la siguiente conclusión:

> La presencia y los intereses de Conquistador Mines en el sur de Bolívar parecen haber fomentado el asesinato de líderes comunitarios locales y el enorme desplazamiento de campesinos, mineros artesanales y sus familias. Las otras compañías canadienses en Colombia no están vinculadas directamente con violaciones laborales o a los derechos humanos, pero aun así se benefician de "la economía de la represión". Las masacres sistemáticas y los desplazamientos de ciudadanos colombianos perpetradas por los militares y los paramilitares han tenido el doble efecto de crear una amplia reserva de trabajo barato y de permitirle a las compañías extranjeras el acceso a recursos naturales que de otra manera no habrían podido obtener. La represión reduce la resistencia organizada de los trabajadores y limpia el terreno de los potenciales opositores a la apropiación de la riqueza natural colombiana por parte del capital multinacional (Ismi, 2012).

Las corporaciones multinacionales extractivistas se han aliado con los paramilitares por cuestiones de "seguridad". "Debido a que los derechos de propiedad privada no son enteramente aceptados en buena parte de Colombia", dice Forrest Hylton, "no es sorprendente que las corporaciones extranjeras paguen por protección a los paramilitares como una especie de 'aseguradora capitalista'" (Hylton, 2006: 91). En más de una ocasión las mineras canadienses contrataron a la compañía mercenaria estadounidense especializada en aviación, AirScan, para tareas de seguridad. Los empleados de AirScan "han sido vinculados con un ataque contra las fuerzas rebeldes en 1998 en el que murieron 18 civiles armados, incluyendo a nueve niños" (Pugliese, 2005: A1). El Departamento Canadiense de Relaciones Exteriores concluía en un reporte de 2002 que Colombia ofrecía atractivas oportunidades en el sector de la minería, limitadas por cuestiones de seguridad: "El desafío consiste en balancear las oportunidades comerciales con una política inteligente en lo tocante a la seguridad personal" (*Vancouver Sun*, 04/05/2002: A2). Ken Luckhardt, representante nacional de los

Trabajadores Automovilísticos Canadienses, expresó la opinión de muchos activistas sindicales y de derechos humanos cuando dijo: "Si las mineras canadienses necesitan de fuerzas militares para poder operar, no deberían estar ahí" (Robinson, A., 2002: B3).

Uno de los objetivos esenciales de la presidencia Uribe fue hacer que resurgiera la confianza de los inversionistas tras el final de la primera ola de inversión minera canadiense al final de los años noventa. Los reportes de la prensa de negocios notaron que "Uribe [...] ha instalado uno de los ambientes fiscales más competitivos del mundo, no sólo de América Latina" (Robinson, A., *op. cit.*: B4). Peter Baxter, director de exploración de Bema Gold Corp., quedó impresionado con Uribe luego de una presentación que éste hizo ante una conferencia minera en Medellín: "Colombia está mucho mejor de que lo que pensaba. Ver al presidente Uribe fue una cosa impresionante"[133]. Las razones para la positiva recepción del capital minero son sencillas. En esa misma conferencia, Uribe declaró que "Colombia será atractiva para los inversionistas [...]. Colombia está lista para convertirse en una gran potencia minera"[134].

La resistencia a la megaminería y a la extracción petrolera empezó a hacerse más intensa con el inicio del siglo. Los principales opositores son las comunidades indígenas y afrocolombianas, los pequeños campesinos y los ambientalistas preocupados por los desastres ecológicos asociados a los grandes desarrollos mineros. Pero la resistencia también incluye a los pequeños mineros artesanales. Muchas de las áreas a las que las compañías canadienses

133 Citado en Robinson, A. (2002: B4).

134 Citado en Harris (2006: B4). Para Hristov, "La reelección de Uribe [en 2006] significa: 1) la continuación de un sistema caracterizado por relaciones sociales desiguales, explotadoras, alienantes y excluyentes; 2) la profundización de la posición subordinada del país en la jerarquía capitalista mundial; 3) la consolidación de la presencia imperial (económica y militar) de Estados Unidos; 4) La legalización de la ilegalidad, una fusión tan creativa de lo legal y lo ilegal, que el gobierno puede afirmar que los paramilitares han dejado de existir, cuando en realidad han penetrado el tejido de las instituciones sociales y la economía nacional; 5) El inicio de una nueva fase del modelo: el *paranarco* Estado colombiano; y 6) el fortalecimiento de las luchas sociales" (Hristov, 2006: 15).

están ingresando han sido regiones mineras desde hace décadas, y a veces siglos. Se trata de regiones explotadas por mineros de pequeñísima escala que intentan subsistir en regiones empobrecidas y olvidadas, con escasa infraestructura del Estado y servicios sociales. Las compañías canadienses presionan al gobierno colombiano para que implemente acciones concretas para defender sus inversiones al describir a estas prácticas mineras como ilegales y violatorias de sus derechos de propiedad. Esto dio sus frutos en abril de 2013, cuando la fuerza aérea colombiana —que, como veremos más adelante, ha sido entrenada en Canadá— bombardeó a los mineros artesanales en Antioquia y Caldas, regiones en las que las compañías canadienses buscan expandirse (Harris, 2013: B10).

Los opositores a la megaminería han implementado distintas tácticas como las huelgas, peticiones, bloqueos y la acción directa para impedir la expansión del capital minero en sus territorios. Cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia en 2010, se enfrentó al nuevo problema de las consultas populares en las comunidades afectadas por la minería. Este fenómeno, en el que la gente vota para decidir si acepta o no la exploración y el desarrollo de proyectos mineros o petroleros, se ha popularizado a lo largo de Centro y Sudamérica durante la última década. A partir de 2012, la táctica se extendió a Colombia. La coyuntura política actual, en la que ha habido una cierta disminución en la violencia y han avanzado las negociaciones de paz en La Habana, ha implicado que la organización de este tipo de experimentos de democracia local sea menos peligrosa.

Una ley de 1994 le otorga a los municipios el derecho de llevar a cabo esas consultas y de implementar los resultados. El artículo 55 de la Ley 134, en particular, indica que "la decisión tomada por la población en un referéndum popular es vinculante"[135]. Sin embargo, luego de que tres municipios del sudeste del departamento de Antioquia aprobaron acuerdos antiminería en 2013 tras consultas populares, el

135 Citado por Martínez Alier (2014).

Ministerio de Minas y Energía se empezó a preocupar. El gobierno de Santos emitió el decreto 0934 el 9 de mayo de 2013, en el que se intentaba clarificar la implementación del artículo 37 del Código Minero. A través de este decreto, el Ministerio de Minas y Energía pudo establecer que ninguna autoridad local o regional tenía el poder para excluir la actividad minera de su demarcación —esto es, ningún cuerpo municipal o regional tiene la autoridad para regular la minería—, una prerrogativa del gobierno nacional. El decreto, que contradice la legislación de 1994, fue impugnado un año después por la Corte Constitucional (Martínez Alier, 2014). La consulta popular es sólo la forma más reciente de resistencia.

En las siguientes páginas buscamos iluminar los casos concretos de varias compañías canadienses involucradas en los distintos sectores extractivistas en Colombia. Cada corporación se ha enfrentado a distintos tipos de oposición. Las compañías de las que hablamos son sólo una muestra de una lista que podría expandirse mucho más, pero creemos que éstas representan bien las dinámicas del sector.

Pacific Rubiales

La segunda corporación petrolera más importante en Colombia es Pacific Rubiales Energy (PRE). Con oficinas centrales en Toronto, está activa en distintas partes de América Latina. En septiembre de 2013 fue partícipe de uno de los acuerdos energéticos más importantes del año cuando acordó pagar 935 millones de dólares para comprar Petrominerales Ltd. (de Calgary). Esta transacción la ha fortalecido mucho en Colombia y Perú: PRE tendrá acceso a un petróleo más ligero con el que podrá diluir sus depósitos más pesados, así como a un oleoducto que le permitirá comercializar su petróleo de una manera mucho más barata. Parte de este proceso de adquisición incluye que Petrominerales compre a una empresa socia en un proyecto de exploración en Brasil, lo que a su vez permitirá que Pacific Rubiales forme una compañía de exploración y producción de 100 millones CAD, lista para operar inmediatamente (Tait, 2013).

Pacific Rubiales obtuvo y aseguró sus primeras concesiones petroleras en Colombia sólo cuando las fuerzas armadas intervinieron y desplazaron a las comunidades opositoras. Fue una verdadera campaña de terror y asesinato (López, 2010). Un artículo de 2009 en la revista *Forbes* subrayaba la importancia del ataque contra las guerrillas y el desplazamiento de la población local como condición *sine qua non* para la expansión de la compañía:

> Exxon abandonó el campo de Rubiales en los años ochenta. Hasta hace poco, la producción del pozo dependía de cuánto podían cargar los camiones —un contingente de 1.500 camiones cisterna llevaba unos 60 mil barriles de crudo al día hacia la civilización, en general a través de caminos lodosos—. Pacific Rubiales y los analistas dicen que la región, que alguna vez estuvo infestada de rebeldes, es ahora segura, y ninguno de los camiones ha sido atacado (Bogan, 2009).

El director general de Pacific Rubiales es Ronald Pantin, un magnate del petróleo nacido en Venezuela pero educado en Stanford que hizo carrera como alto funcionario de la compañía estatal de Venezuela PDVSA. Se mantuvo en esa posición hasta que el gobierno de Hugo Chávez derrotó el paro patronal orquestado por la junta directiva de PDVSA en los años 2002 y 2003 (el hecho fue parte del esfuerzo para desestabilizar al gobierno venezolano a través de un paro en la principal empresa estatal). Actualmente se acusa a Pacific Rubiales, bajo la dirección de Pantin, de financiar a la oposición de derecha contra Nicolás Maduro. Por supuesto, Pantin afirma que "las acusaciones son absurdas y no tienen ninguna base en los hechos" (Schipani, 2013a). En efecto, buena parte del equipo directivo de Pacific está conformado por exfuncionarios de PDVSA que fueron echados de sus puestos tras el fracaso del paro patronal.

Según John Galante, un especialista en temas de energía en América Latina de la consultora ESAI Energy, "la compañía se benefició

particularmente de una combinación de la reforma del sector energético en Colombia, del acceso al capital a través de su entrada a la bolsa de valores de Toronto, y de la integración del *savoir faire* de los expatriados venezolanos" (*ibíd.*). "La situación que tenemos en Venezuela, en la que el señor Chávez echó a los directivos de PDVSA, es buena para nosotros", dijo Andrés Jiménez, director de investigación en capital y bolsa en la firma de inversiones colombiana Interbolsa. "Son personas con una gran experiencia, experiencia que necesitas si quieres extraer petróleo pesado en Colombia". Desde 2009, el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) describió a Pacific Rubiales como un caso de éxito en el sector. De acuerdo con un reporte del analista del CIBC Robert Pare, publicado ese año, el banco "cree que la compañía sigue teniendo un buen impulso operativo y la actividad extractiva sigue en alza" (Bogan, 2009).

Pacific Rubiales empezó extrayendo 25 mil barriles de petróleo al día cuando comenzó operaciones en 2007. En 2013, la cifra se había multiplicado por diez. Este aumento fue parte de la aceleración más general de la producción petrolera en Colombia durante los años 2000, que situó firmemente al país como el cuarto productor regional, después de Venezuela, México y Brasil. De acuerdo con el *Financial Times*:

> El tiempo ha jugado a favor de la compañía. Durante la década pasada, Colombia se subió a la ola de los *commodities*. Al mismo tiempo, el gobierno echó a andar una campaña de seguridad que hizo retroceder a los insurgentes guerrilleros, aunque siguen activos. La compañía ha podido operar en territorios que antes estaban en el fuego cruzado (Schipani, 2013a).

Pantin tiene confianza en los inversionistas canadienses y por tanto tiene planes ambiciosos de expansión en Colombia y hacia otros países. "Los inversionistas canadienses se sienten cómodos con el riesgo en la exploración", y, por tanto, "las principales inversiones de los siguientes cinco a diez años serán en esa área. Este año

Pacific Rubiales invertirá 405 millones de dólares en exploración" (*ibíd.*). Pacific Rubiales y su equipo directivo cambiaron la dinámica del sector petrolero en Colombia", de acuerdo con Rupert Stebbings, vicepresidente de ventas de acciones en Bancolombia: "Son ágiles, saben exactamente lo que están haciendo en cuestiones de petróleo pesado y saben cómo hacer sus planes realidad y tomar en serio sus responsabilidades en todos los aspectos, no sólo en la cuestión de sacar petróleo del subsuelo cueste lo que cueste". Desde otra perspectiva, las FARC definieron a Pacific Rubiales como un "vampiro transnacional" (Schipani, 2013b).

Tras el conflicto generado por el desplazamiento de las comunidades para establecer el pozo petrolero, siguió el choque entre la compañía y sus trabajadores en Campo Rubiales, en el departamento oriental de Meta. En el verano de 2011, los trabajadores se fueron a huelga por las terribles condiciones laborales, que incluían jornadas de trabajo de 18 horas y 40 días seguidos, salarios no pagos y un ambiente de trabajo insalubre. Los huelguistas se enfrentaron a una gran fuerza militar y policial, y a las conocidas amenazas de muerte (Queiroz, 2011). La huelga, en la ciudad de Puerto Gaitán, movilizó a diez mil trabajadores y se desató a raíz del despido de un millar de empleados. Los huelguistas exigían su retorno, así como la mejora de las condiciones laborales y mejores salarios para todos (Nieto López, 2011: 139).

Las acciones de Pacific Rubiales cayeron en hasta el 5,4 por ciento durante uno de los días de huelga, en octubre de 2011. El gobierno colombiano envió a otros 400 policías a resguardar los campos petroleros. Éstos fueron enviados cuando la compañía amenazó repetidamente con suspender las operaciones a menos que se enviaran refuerzos para lidiar con las que, dijo, eran manifestaciones violentas. "Las fuerzas de seguridad han sido reforzadas por la Policía Nacional. Se ha emitido un decreto para coordinar las actividades policiales, con la instrucción específica de arrestar a cualquiera que viole la ley", declaró Mauricio Cárdenas, ministro de Energía y Minas (Acosta, L.J., 2011).

Los manifestantes y la policía chocaron en septiembre de 2011 en los campos petroleros, lo que obligó a la clausura de los pozos de Rubiales y Quifa en el departamento de Meta. En ese momento, ambos pozos producían un promedio de 225 mil barriles de crudo al día, un cuarto de los 953 mil barriles diarios producidos por la compañía. El gobierno envió a cientos de policías antimotines a Puerto Gaitán, la ciudad más cercana al área rural en la que se encuentran los pozos. La Policía Nacional declaró un toque de queda en la ciudad, luego de que los manifestantes bloquearan las carreteras que comunican con los pozos. La compañía fue clave en hacer que la policía agudizara el conflicto, puesto que Pacific Rubiales insistía en que no había violado ninguna ley y, por tanto, tenía todo el derecho de exigirle a las fuerzas armadas colombianas que restauraran el orden. Las protestas empezaron en julio de 2011, cuando los campos fueron cerrados por primera vez, y hasta la huelga de septiembre hubo choques y conflictos esporádicos. Pacific Rubiales no fue la única compañía canadiense en el ojo del huracán. En septiembre de ese año, Petrominerales —la petrolera canadiense a la que hicimos alusión antes, que fue posteriormente absorbida por Pacific Rubiales— fue obligada a detener la producción en dos campos en la región vecina de Casanare luego de que la población de las comunidades aledañas bloqueó las carreteras en protesta por la contaminación y el tráfico de los camiones pesados en los caminos rurales (Kraul, 2011).

Dave Coles, presidente del Sindicato de Trabajadores del Papel, Comunicaciones y Energía de Canadá, fue parte de una delegación canadiense para investigar las actividades de Pacific Rubiales en julio de 2012. Durante su visita, fungió como jurado del llamado Tribunal Popular contra las Políticas Extractivistas en Colombia. El Tribunal sesionó cerca de los pozos petroleros de Pacific Rubiales en los alrededores de Puerto Gaitán. De acuerdo con Coles:

> Los testimonios fueron conmovedores. Los representantes de las comunidades indígenas le dijeron al Tribunal que la exploración en

> sus tierras los había obligado a mudarse a pueblos improvisados, a casas construidas con láminas de plástico, carbón y palos. Las mujeres de las comunidades de los alrededores le mostraron al jurado botellas de agua naranja o color carbón, que decían venía de una fuente de agua cercana, un río al que desembocaban las aguas residuales del proceso extractivo de Pacific Rubiales Energy (PRE). Los sindicalistas describieron las condiciones de vida de los trabajadores, quienes tienen que dormir en camas ocupadas por otros tres trabajadores en los otros turnos (Coles, 2013).

Coles, durante la huelga en el verano de 2011, escribió:

> El senador colombiano Alexander López, quien testificó ante el Tribunal, dijo que las fuerzas de seguridad le habían impedido viajar libremente por carretera pública hacia los campos de Rubiales. López concluyó que las acciones de PRE eran motivo suficiente para expulsar a la compañía del país.

Durante ese período, varios de los principales activistas del movimiento y sus familias recibieron amenazas de muerte. En un contexto de terror paramilitar generalizado contra el sindicalismo colombiano, estas amenazas no pueden ser vistas como una cosa menor. Cole explica que la delegación canadiense

> llevó la información que habíamos recolectado acerca de los abusos de PRE a la embajada canadiense en Bogotá. Pero a los diplomáticos no les pareció interesar mucho, y nos dijeron que se reunían mensualmente con sus "clientes" como PRE. De hecho, el representante del Embajador se mostró más preocupado por la falta de interés de Pacific Rubiales en el financiamiento de la Canadian Export Development Corporation que por las prácticas de la compañía (*ibíd.*).

En 2013, los trabajadores echaron a andar una campaña contra lo que afirmaban era un intento de la compañía de debilitar al sindicato a través de una lista negra de trabajadores. Un 90 por ciento de los aproximadamente cinco mil empleados de Pacific fueron despedidos por apoyar el sindicato. Los sindicalistas también recibieron amenazas de muerte por su activismo, algo que —no es sorpresa— no apareció en el reporte de derechos humanos del despacho de Comercio Exterior de Canadá (Logan, 2013; López, 2010; Queiroz, 2011; Barber, 2013).

Si la situación de los colombianos que viven en las zonas petroleras y mineras es cada vez peor, para el capital, esas zonas son un paraíso. Pacific Rubiales no es en lo absoluto la única empresa que planea seguir expandiéndose. En la Conferencia de Gas y Petróleo de América Latina de abril de 2012, en Punta del Este, Uruguay, Colombia recibió el premio al lugar con el clima de inversiones más atractivo para el sector de hidrocarburos. En 2013, Pacific Rubiales había invertido poco más de siete mil millones de dólares en exploración y desarrollo (*Semana*, 11/05/2013). Para 2014, la compañía espera que sus inversiones en el país superen los dos mil millones, y piensa duplicar la cantidad de barriles que extrae al día en los siguientes cinco años (*Semana*, 29/09/2013).

Talisman

Talisman, el gigante de Calgary, se ha enfrentado a una gran resistencia durante los últimos años, como consecuencia de las explotaciones ubicadas en reservas indígenas asediadas por los paramilitares, en regiones bajo esporádica ocupación militar, financiada, en parte, por las propias compañías petroleras (Healing, 2011; Peace Brigades International, 2011: 39). Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana anunció en diciembre de 2013 que había descubierto dos yacimientos de petróleo en el departamento de Meta (en donde Talisman tiene contratos compartidos con Ecopetrol). Los nuevos depósitos aumentaron las reservas probadas de Ecopetrol en 40 millones de barriles, de

1,877 millones que tenía antes. Colombia, recordémoslo, es el cuarto principal productor de hidrocarburos de la región, con reservas conocidas de 2,377 millones de barriles. El problema para las compañías canadienses y el Estado colombiano es la oposición a las actividades petroleras. En el área de Meta donde se encontraron los nuevos depósitos, las acciones directas contra las distintas compañías —que el Estado llama "ataques terroristas"— sumaron 163 tan sólo en 2013 (*Semana*, 21/12/2013).

Durante ese período los plebiscitos comunitarios antiexplotación petrolera y los bloqueos comunitarios tuvieron un alza: pasaron de 308 en 2012 a 432 en 2013. Las comunidades de Guamal y Catilla, cerca del municipio de Acacias en el departamento de Meta, en donde opera un proyecto conjunto Ecopetrol-Talisman, llevaron a cabo una ocupación de 200 días para impedir que Ecopetrol explorara un potencial yacimiento petrolero que contaminaría el río que atraviesa las tres comunidades. En la consulta popular en Tauramena, 4.426 personas votaron contra la exploración, contra 151 a favor. El gobierno dijo que se sentaría a negociar, pero que había que entender que lo que está en el subsuelo de la comunidad pertenece a la nación. La conciencia ambiental, una cuestión marginal en los movimientos sociales colombianos hasta hace poco, se ha convertido en prioridad en muchas regiones en las que se han desatado luchas contra proyectos petroleros, especialmente si los involucrados son compañías canadienses (*ibíd.*).

Talisman y Ecopetrol —que tienen respectivamente el 45 y el 55 por ciento del contrato de producción— no parecen preocuparse por la oposición ambientalista al proyecto de Acacias. "Seguiremos adelante para llegar a un acuerdo sobre el plan de desarrollo y obtener las licencias ambientales necesarias. Este proyecto es un paso esencial para cristalizar el potencial de nuestra compañía aquí en Colombia", le dijo el presidente de Talisman Hal Kvisle a los medios colombianos en junio de 2014. Por su lado, el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, afirmó que "Acacias constituye uno

de los principales éxitos de la exploración de los últimos años en el país, y claramente muestra el potencial del petróleo pesado en las llanuras orientales". El departamento de Mata, hay que decirlo, es una región de planicies y áreas selváticas ecológicamente frágil (*Semana*, 09/12/2013).

Gran Colombia

En el pueblo de Marmato, en el departamento de Caldas, la minera canadiense Gran Colombia (tras su fusión con Medoro Resources) es el principal productor colombiano de oro y plata. Mientras escribimos esto, Gran Colombia espera trasladar a un pueblo entero y hacer estallar una montaña para construir una mina de oro en el área. El análisis de la compañía dice que Marmato puede ser uno de los depósitos de oro más ricos del mundo. Esta drástica técnica de extracción será implementada en un área en la que las laderas empinadas, las fuertes lluvias y la cantidad de piedra de desperdicio, han aumentado ya el riesgo de avalanchas (Bickis, 2011: 19). Este proyecto incluiría desplazar a cinco mil personas y ha generado por tanto una resistencia organizada, particularmente entre los mineros artesanales que trabajan en las faldas de la montaña desde hace décadas (*Semana*, 10/08/2013). El presidente de la compañía, Juan Carlos Santos, familiar del presidente Santos, dijo cínicamente que "podemos compensarlos abriendo la cartera". Al considerar la posibilidad de que la gente se niegue a aceptar ser comprada, dijo sin más que "cuando un país como Colombia tiene que explotar algunas áreas —y nuestro país está lleno de gente indígena y afro colombiana—, tenemos que pensar en el panorama general" (*Al Jazeera*, 05/07/2011). "El panorama general" en los planes de Gran Colombia parece no incluir el derecho a la tierra de los indígenas y los afrocolombianos. Para hacer todavía más aguda la tensión que rodeaba los planes de la minera, en septiembre de 2011 se encontró el cuerpo inerte del padre José Reinel Restrepo (*El Tiempo*, 05/09/2011; Conte, 2011). José Reinel era un opositor a

la mina y líder del Comité Cívico Prodefensa de Marmato, y había criticado los planes para desplazar a la comunidad y al "imperialismo canadiense" por estar detrás de todo esto (Webster, 2012). Con unas 11,8 millones de onzas en depósitos de oro, es poco probable que Gran Colombia se vaya sin más (*Semana*, 10/08/2013).

En julio de 2011, un líder sindical en otro proyecto de Gran Colombia en El Campo fue asesinado (Bickis, 2012a). A principios de 2014, en el noreste del departamento de Antioquia, hubo otro choque con opositores a la minera. Cuatrocientos manifestantes —mineros artesanales, sus familias y simpatizantes— se reunieron en las calles de la ciudad de Segovia para exigirle a Gran Colombia que respetara los derechos laborales de 500 trabajadores, de los cuales 340 son parte del Sindicato de Trabajadores Mineros de Segovia y Remedios. La compañía en cuestión se llama Estrategias y Minas, pero ésta es una contratista de Gran Colombia. Según los trabajadores, la fuerte caída en los precios del oro a lo largo de 2013 (28 por ciento) llevó a la compañía a suspender sus operaciones en Segovia y Remedios, lo que viola su contrato de trabajo. La compañía les pide a los trabajadores que rescindan voluntariamente su contrato, y que si lo hacen tendrán la posibilidad de ser contratados en el futuro, aunque con salarios y beneficios más bajos (Rojas T., 2014).

En respuesta a las controversias que acompañan sus actividades, algunas mineras canadienses han desarrollado vínculos con las élites políticas colombianas y han contratado a políticos bien conectados para defender sus intereses. Gran Colombia es un buen ejemplo. La mesa directiva de la compañía incluye al antiguo ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, quien emitió el mayor número de permisos de exploración en toda la historia de Colombia, según el exministro de Medioambiente y director del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Manuel Rodríguez Becerra. La expresidente de Gran Colombia es María Consuelo Araujo, exsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno de sus hermanos y su padre son políticos

poderosos, y han sido investigados por posibles vínculos con los paramilitares (Amat, 2012).

Eco Oro/Greystar

La multinacional canadiense Eco Oro (antes Greystar) invirtió 220 millones de dólares durante los últimos seis años en el municipio de California, cerca de Bucaramanga, capital del departamento de Santander en el noreste del país. Los proyectos no se han podido echar a andar, pues parte del área de explotación está en el páramo de Santurbán. La actividad de la compañía ha generado una fuerte reacción por parte de las comunidades que temen consecuencias ambientales nocivas para los ríos adyacentes y el ecosistema. La compañía está esperando a que el ministro de Medioambiente delimite claramente las fronteras del páramo (*Semana*, 10/08/2013).

La planicie montañosa de Santurbán, que atraviesa los departamentos de Santander y Santander del Norte, es uno de los principales campos de batalla entre las compañías mineras y el Estado, por un lado, y los ambientalistas y las comunidades, por el otro. Eco Oro descubrió el que podría ser uno de los depósitos de oro más grandes del planeta. La compañía calcula que podría extraer 240 toneladas del metal. Sin embargo, para poder llegar al oro tendría que abrir un enorme boquete a la mitad de la cordillera, de dos kilómetros de largo y uno de ancho.

Este proyecto ha generado enormes manifestaciones en Bucaramanga, y ha encendido las alarmas de los ambientalistas en todo el país. El principal problema ecológico tiene que ver con que esta cordillera es la fuente de buena parte del agua clara de Colombia. De esta planicie montañosa viene el 70 por ciento del agua consumida en el país. Unos dos millones de santandereanos dependen directamente del agua de Santurbán (*Semana*, 07/12/2013). La propuesta original de Eco Oro incluía utilizar 40 toneladas de cianuro al día como parte del proceso de extracción, lo que provocó una ola de temor y preocupación entre la población. El Comité por la Defensa del Agua y

del Páramo de Santurbán recolectó 75 mil firmas contra la presencia de Eco Oro, lo que ha detenido momentáneamente los planes de la compañía (Sankey, 2014: 137).

Otra petición, firmada por los principales activistas y líderes ecologistas fue enviada al presidente Santos en junio de 2014. Ésta exigía un nuevo Código Minero y la moratoria inmediata a la emisión de licencias y títulos a las corporaciones mineras. La petición hacía referencia específica al proyecto en Santurbán, pues posiblemente ningún proyecto minero en Colombia había generado tal nivel de controversia pública. La intensidad de la protesta social durante varios años es una de las razones por la que Greystar retiró su solicitud de una licencia ambiental hace tiempo, y luego cambió su nombre a Eco Oro. Lo que es más importante es que las luchas ambientales en la región obligaron al gobierno colombiano a declarar un territorio de 11.700 hectáreas como Parque Nacional. A primera vista, es una victoria para los ambientalistas. Sin embargo, el parque sólo podrá realmente impedir la construcción de la mina y proteger el páramo de la minería a cielo abierto si sus fronteras son rápida y claramente definidas.

Hasta ahora, sus límites son ambiguos y susceptibles de ser alterados (*Semana*, 01/06/2013). En agosto de 2014, Eco Oro seguía confiando en que podría construir la mina de cielo abierto en Santurbán. Los funcionarios de la compañía insisten en que los depósitos de oro que quieren explotar están fuera de la zona del nuevo Parque Nacional protegido (*Semana*, 11/05/2013). En uno de los estudios más completos y sistemáticos sobre las actividades de Eco Oro en Santander —*Land and Conflict: Resource Extraction, Human Rights, and Corporate Social Responsibility – Canadian Companies in Colombia*—, las ONG Mining Watch y CENSAT-Agua Viva llegan a conclusiones espeluznantes, luego de estudiar los documentos de inversión en el sector minero canadiense y entrevistar a activistas comunitarios, políticos de distintos partidos, representantes de las compañías y funcionarios de distintas agencias del gobierno

(Mining Watch y CENSAT-Agua Viva, 2009). Las conclusiones giran en torno a cuestiones de desplazamiento y desposesión, la ecología y la disrupción económica de la minería artesanal y la agricultura campesina. El reporte encuentra que hay "riesgos potenciales en un nivel medio a alto" de que Eco Oro (Greystar en el momento de la redacción del estudio)

> se beneficie del desplazamiento de las poblaciones locales, premiando inconscientemente a grupos o individuos que han cometido violaciones a los derechos humanos, impactando seriamente la estabilidad ambiental, especialmente del sistema acuífero, y alterando los fundamentos económicos de la vida de las comunidades y, sobre todo, su seguridad alimentaria (Mining Watch y CENSAT-Agua Viva, *op. cit.*: 42).

En términos de desplazamiento y desposesión, las referidas conclusiones del estudio señalan:

> El objetivo del ejército colombiano, al recuperar el control de la región y terminar con la larga presencia de las FARC en el área, era, por lo menos en parte, facilitar que Greystar reanudara sus operaciones; los grupos paramilitares se involucraron en esto también. La violencia tuvo como efecto el desplazamiento temporal o permanentemente a las comunidades locales, y destruyó para siempre su capacidad de producir alimentos (Mining Watch y CENSAT-Agua Viva, *op. cit.*: 43).

Respecto al impacto ambiental, los resultados del estudio no son menos devastadores:

> Las autoridades locales y ambientales han expresado una seria preocupación por el incontrolable impacto ecológico, especialmente a las fuentes acuíferas locales y regionales. El proyecto de Angostura

> está ubicado en una región ecológicamente sensible, que sufre ya la contaminación de la minería a pequeña escala. En el lugar de mejorar la práctica y la tecnología de esta forma de explotación, el proyecto aumentará la cantidad de agua usada y supondrá mayores riesgos de contaminación (*ibíd.*).

Y, finalmente, respecto a los campesinos y los mineros artesanales de la región, el reporte concluye:

> Los mineros en pequeña escala están siendo desplazados con poca o ninguna compensación, y sin ningún plan de reubicación. A la economía agrícola local le será muy difícil recuperarse de la violencia y la dislocación si la mina sigue ocupando más y más terrenos productivos (*ibíd.*).

Como en el caso de Gran Colombia y de muchas otras mineras canadienses, Eco Oro se ha vinculado con la élite política colombiana para poder lidiar con la resistencia a sus proyectos. Luego de que su mina en Angostura se encontró con la oposición de las autoridades locales, por ejemplo, Eco Oro nombró al exministro de Justicia Rafael Nieto como su presidente (Amat, 2012). De acuerdo con Mining Watch, Eco Oro también "proporcionó apoyo logístico para establecer una base de operaciones militares" en el departamento de Santander, donde, como hemos visto, están sus principales intereses. "Hay dos campos militares en el área de exploración de la compañía y el Batallón Montañés tiene la capacidad de albergar hasta 500 soldados. La compañía ha contratado a personal militar retirado". Los paramilitares están presentes en el área. Mining Watch afirma también que la compañía ha emprendido una campaña de responsabilidad social corporativa con el apoyo de los gobiernos canadiense y estadounidense, a través de la cual ha "canalizado recursos de USAID y CIDA a través de una fundación que provee programas comunitarios en el área, en donde la presencia del Estado es notablemente débil"

aunque no ha consultado a la comunidad local acerca de sus planes de explotación minera (Mining Watch, 2011).

El caso de Eco Oro refleja bien las dificultades producidas por la oposición organizada a la que las compañías tienen que hacer frente. Los planes para la mina de Angostura fueron interrumpidos recientemente por el Ministerio de Energía y Minas en el contexto de un amplio movimiento de las comunidades y las organizaciones ambientales. La compañía cambió sus planes, y barajó incluso la posibilidad de hacer una mina subterránea, pero el Ministerio del Medioambiente decidió prohibir la minería y hacer una reserva natural en Santander (*Agencia Reuters*, 09/01/2013). Hay que mencionar también que Eco Oro tiene una larga historia de conflicto con las comunidades del país. A mediados de los años noventa, cuando su nombre seguía siendo Greystar, la compañía estuvo involucrada en un caso de ataques violentos por parte de sus fuerzas de seguridad contra los opositores. Esto llevó al secuestro de un ejecutivo de Greystar por las FARC. El secuestro, que duró tres meses, precipitó la salida temporal de Greystar y de varias compañías canadienses de Colombia al final de los años noventa (*Agencia EFE*, 08/03/2011; *The Globe and Mail*, 19/03/2011: B9; Gordon, 2010: 209).

Cosigo Resources

En 2009 comenzó otro conflicto representativo entre las comunidades indígenas y el capital minero canadiense en el parque nacional Yaigojé-Apaporis, en el departamento de Vaupés, en la Amazonia colombiana, frontera con Brasil. La corporación canadiense Cosigo Resources busca extraer oro del parque, en donde unas 20 comunidades que viven ahí —incluyendo a los pueblos indígenas macuna, tanimuca y letuama— se oponen al proyecto extractivo.

El cuerpo del Estado colombiano que regula los Parques Nacionales creó el del Yaigojé-Apaporis en 2009. Fue una decisión motivada por rondas de consultas públicas en las que la mayoría de

los habitantes se declaró a favor del nuevo estatus. La decisión fue apoyada por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que concluyó que los valores espirituales y culturales de los pueblos indígenas de la región estaban íntimamente asociados con la conservación de su ambiente natural. Sin embargo, dos días después de que el parque nacional fue formalmente establecido, el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) le otorgó un permiso de minería a Cosigo Resources que cubre 9.973 hectáreas del parque. La compañía ahora moviliza sus recursos para avanzar en la explotación, y, por supuesto, muestra el permiso como el fundamento legal de su proceder. Tres jueces fueron enviados al parque a principios de 2014, junto con el Ministro del Medioambiente, para intentar resolver el componente legal de la disputa (Silva Herrera, 2014).

Las batallas legales no se han resuelto hasta la fecha, y las presiones sociales de los activistas comienzan a generar divisiones dentro del aparato del Estado. Por ejemplo, la directora de la Agencia Nacional Minera, María Constanza García, se niega a revocar los títulos de explotación minera. Su argumento es que éstos no implican en sí mismos permisos ambientales —el otro requisito para comenzar un proyecto minero— y por tanto no es necesario que los títulos sean cancelados. La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, cuestiona esta lógica. Cree que genera confusión porque "cualquiera con un título en la mano siempre va a intentar explotarlo". Y explica que, en el caso del parque Yaigojé-Apaporis, las comunidades indígenas están divididas por el permiso que el gobierno le dio a Cosigo. Juan Gabriel Uribe, ministro del Medioambiente, está del lado de Miranda, y arguye que negarse a cancelar los títulos es inconstitucional (*Semana*, 01/06/20139.

En junio de 2014, la oficina del Fiscal General colombiano se vio inmiscuida en la controversia. Éste tiene el poder de proteger ecosistemas estratégicos, y por tanto puede prohibir cualquier actividad minera que se estime amenace seriamente el medioambiente. Sin embargo, no ha querido declarar nulo el título de explotación concedido a Cosigo Resources, a pesar de las exigencias del sistema de Parques Nacionales

para que así lo haga. En el parque en cuestión se han concedido 36 títulos mineros, incluyendo el de Cosigo. En un lado del conflicto, están 20 comunidades indígenas que consideran que el área sobre la que la empresa tiene el permiso de explotación es un sitio sagrado, de hecho el lugar en el que se originó la vida. Pero también hay preocupaciones estrictamente ambientales y seculares que se suman a las preocupaciones de las comunidades indígenas. De acuerdo con la petición entregada a la oficina del Fiscal General por la autoridad de Parques Nacionales, en el millón de hectáreas del parque hay 362 especies de aves, 81 de reptiles, 73 de anfibios, 201 de peces, 443 de mariposas y 16 de mamíferos. Por el otro lado, Cosigo Resources afirma que obtuvo el título siguiendo las reglas, regulaciones y normas estipuladas por la ley colombiana, en un proceso legítimo. La compañía dice, contra toda la evidencia existente, que el proceso de exploración tendrá un mínimo efecto ecológico puesto que se utilizarán tecnologías limpias, y que habrá beneficios económicos y empleos para las comunidades (*Semana*, 14/07/2011).

En resumen, nuestra discusión sobre varias compañías canadienses involucradas en las distintas industrias extractivas ha mostrado, sin ninguna ambigüedad, que éstas son todo menos observadoras pasivas, o víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado del conflicto armado. Por el contrario, las corporaciones canadienses se benefician del terror militar y paramilitar contra las comunidades locales que están en el camino de la minería a gran escala y del capital multinacional. Las compañías son parte del proceso de desposesión y desplazamiento de los pequeños campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas y los mineros artesanos. En las minas ya en operación, el capital canadiense está involucrado en la súper explotación de los trabajadores. A la luz de esta realidad, los discursos sobre derechos humanos y responsabilidad social corporativa de las mineras canadienses, y del gobierno canadiense, son poco más que un vil intento de quitarle al capital canadiense la responsabilidad que tiene por las atrocidades cometidas durante las últimas décadas. En efecto, la estrategia

de responsabilidad social se parece a las negaciones de la industria cigarrera sobre los efectos adictivos de la nicotina. Obviamente, con los altísimos precios de los *commodities* desde 2003, las apuestas son altas para los inversionistas. Las industrias minera y petrolera quieren mejorar su imagen en Colombia y en el resto del mundo, como parte de una estrategia general en el campo de batalla de las ideas. Pero una vez que se disipa el humo, es claro que los verdaderos resortes del accionar del Estado y el capital canadiense se reducen a poco más que motivaciones geopolíticas y económicas. Esas motivaciones a las que ahora corresponde analizar.

El Jano del libre comercio

Uno de los principales avances para el capital canadiense en Colombia fue el Tratado de Libre Comercio acordado por el gobierno de Stephen Harper. El camino hacia el Tratado se abrió con la mejora en la situación de la seguridad (desde el punto de vista de los inversionistas). Visto como una gran oportunidad para fortalecer vínculos económicos y políticos, el TLC es uno de los principales blancos de las energías diplomáticas canadienses a partir de la apertura de negociaciones entre mayo y agosto de 2007. De esta manera, el gobierno canadiense, a través de una serie de visitas de alto nivel, se puso en posición para consolidar formalmente las condiciones establecidas durante la reciente invasión del capital de este país.

Como en muchos otros países de la región, las ya mencionadas reuniones de la PDAC [esas conferencias anuales de la Asociación de Desarrolladores y Prospectores de Canadá] han sido usadas como una herramienta para promover el capital canadiense, y los funcionarios colombianos han sido enviados a Canadá a conocer a los representantes de la industria y gobierno, así como para discutir el estado del sector de los recursos naturales y las estrategias para seguir explotándolo. Tener un espacio de discusión para que el capital y el Estado canadienses compartan sus ideas para abrir el sector en su propio beneficio fue

precisamente el objetivo de establecer un grupo de trabajo conjunto con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía colombiano (Des Rivières, 2010). Por supuesto, los viajes a Colombia por parte de los altos funcionarios y ejecutivos canadienses no se detuvieron tras la implementación del Tratado en agosto de 2011: en noviembre de 2012, por ejemplo, la ministra para las Américas Diane Ablonczy viajó junto con representantes del buffet legal Bay St. y de varias compañías constructoras que esperaban obtener contratos en la rápida expansión del sector minero y petrolero (FAIT, 2012e).

El TLC fue una gran victoria para el gobierno de Harper, dadas las enormes dificultades que el capital canadiense enfrentó en Colombia una década atrás. La espantosa situación de los derechos humanos provocó una mayor controversia pública en comparación con los otros tratados que Canadá ha firmado recientemente[136]. En febrero de 2014, por ejemplo, Amnistía Internacional promocionó la visita a Ottawa de una delegación de colombianos, entre ellos el diputado Federico Guzmán Duque y una activista indígena por los derechos humanos quien se negó a dar su nombre por miedo a represalias. Hablaron sobre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra contra los indígenas de Colombia. Guzmán Duque habló de la violación y la tortura contra las mujeres indígenas como una herramienta más de las fuerzas armadas. Enfatizó que ha habido una campaña de desplazamiento contra las comunidades indígenas que viven en territorios cortejados por las mineras canadienses. El diputado y la activista indígena afirmaron que Canadá tiene una responsabilidad especial a causa del TLC y por la presencia de compañías canadienses en los sectores extractivos de la economía colombiana. Guzmán Duque hizo notar que algunas de las compañías extractivistas canadienses están asociadas con grupos

136 A pesar de la importancia del TLC y de las relaciones entre Colombia y Canadá, la literatura convencional sobre la política exterior apenas le ha dado importancia. El análisis de Randall y Dowling sobre las relaciones entre estos dos países, una rareza en la literatura, por poco no menciona el TLC e ignora el asesinato de sindicalistas e indígenas (Randall y Dowding, 2008: 29-46).

armados que las protegen, en territorios que han sido vaciados de sus antiguos pobladores, "o simplemente se aprovechan de esa situación" (Payne, 2014).

El nuevo TLC le otorga derechos legales domésticos al capital canadiense, lo que, junto con la guerra en el campo llevada a cabo por Uribe y Santos, ha creado una situación mucho más "segura" para los inversionistas canadienses. Sin embargo, la brutalidad de la represión en Colombia y la mala prensa que el Tratado recibió, tanto en Canadá como fuera, obligaron al gobierno de Harper a incluir los derechos humanos. Los conservadores tenían un gobierno minoritario en ese momento, y, por tanto, sólo pudieron conseguir la aprobación del Tratado con el apoyo de los liberales, que a cambio exigieron la inclusión de cláusulas sobre derechos humanos. Con todo, estas concesiones son en el mejor de los casos superficiales, y no tendrán ningún impacto tangible sobre las prácticas de los inversionistas canadienses o del Estado colombiano. Son, como el discurso sobre los derechos humanos del gobierno de Harper en Honduras después del golpe, un pretexto para legitimar el saqueo de los recursos naturales del país, la explotación de sus trabajadores y el apoyo implícito o explícito a un gobierno que es un violador sistemático de esos derechos. Una de estas concesiones es el establecimiento de multas por el asesinato de sindicalistas en el acuerdo lateral de cooperación laboral (nótese que este es un acuerdo *lateral*, es decir, no es parte del corpus del TLC). La otra principal concesión, una enmienda agregada tras la exigencia de Scott Brison y los parlamentarios liberales a cambio de su apoyo, exige la redacción de un reporte anual sobre el impacto del Tratado sobre los derechos humanos.

El discurso público sobre los derechos humanos en Colombia que sale de las bocas tanto de los conservadores como de los liberales canadienses es que, aunque la situación no es perfecta, no es para nada tan mala como los críticos la pintan; liberales y conservadores dicen que Uribe hizo un gran esfuerzo para mejorar la situación (aunque, como lo dejan ver los reportes y las comunicaciones internas, tanto los

funcionarios de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional como los conservadores saben bien que la situación es mucho peor de lo que están dispuestos a aceptar en público) (Diebel, 2010: IN1, 2)[137]. Harper ha elogiado efusivamente a Uribe, quien "ha hecho un enorme progreso en la lucha contra el ciclo vicioso de conflicto, violencia y subdesarrollo que ha afectado a Colombia durante décadas" (Harper, 2007). Stockwell Day, en ese momento ministro de Comercio Internacional, llegó a un nuevo nivel del absurdo en su defensa del TLC en el Parlamento: "¿Que la gente sigue siendo asesinada en ese país? Sí, así es. Pero también se asesina gente en Canadá. ¿Que las cosas son perfectas en Colombia? No, pero sin duda que avanzan en la dirección correcta" (Day, 2009b). Así, no es sorprendente que la dimensión de la represión, los vínculos de los paramilitares con el Estado y los escándalos en torno a los "falsos positivos" (el asesinato por parte del ejército de no combatientes, a menudo muchachos de la calle, que son presentados como guerrilleros para mostrar que se está ganando la guerra) sean ignorados por los políticos pro TLC.

Como con Honduras, la posibilidad de un mayor desarrollo económico y de una mejora en la situación de los derechos humanos fue usada como justificación para el TLC[138]. "El libre comercio e inversión basados en reglas claras pueden […] contribuir a un ambiente doméstico en el que […] se respete el gobierno de la ley", se lee en un reporte de Relaciones Exteriores (FAIT, 2010b). El TLC traerá el imperio de la ley a Colombia y se extenderá más allá de los derechos de propiedad del capital —el único objetivo verdadero de los acuerdos de comercio— para proteger los derechos de la población. En estas fantasías, la inversión canadiense planta las semillas de un crecimiento económico del que a su vez florecerá un mayor respeto hacia los derechos humanos. Pero como en el caso hondureño, la teoría de

137 Los reportes de la embajada de Canadá en Bogotá y de Relaciones Exteriores (FAIT) sobre Colombia, a menudo comentan la mala situación de los derechos humanos.

138 Este argumento fue usado por el parlamentario Scott Brison durante los debates en el Congreso canadiense.

la cascada de derechos humanos es poco más que un barniz ideológico para la búsqueda implacable de ganancias: mayores vínculos políticos y económicos no han mejorado los derechos humanos. Un reporte interno del despacho de Relaciones Extranjeras y Comercio Internacional, la FAIT, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2010 —tres años después de los elogios de Harper a Uribe, y un año desde las ridículas declaraciones del ministro de Comercio Internacional Stockwell Day, en el Parlamento— acepta que "los homicidios y la desaparición forzosa de sindicalistas aumentaron en 2010" y que "la violencia y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos continúan", incluyendo las que son perpetradas por "agentes del Estado" (Yates, 2011). En lo que puede verse como un heraldo del impacto y significado del Tratado, dos días después de su aprobación en Ottawa, la policía colombiana atacó una huelga, lastimando gravemente a una docena de personas que protestaban contra la compañía canadiense Gran Tierra Energy (Paley, 2010b). La organización de derechos humanos Somos Defensores, a su vez, reporta que en 2012 (el año en que se implementó el TLC) hubo 69 asesinatos de defensores de derechos humanos, 14 veces más que en 2006. Somos Defensores le atribuye este incremento a una ley de restitución de tierras que le permite a los desplazados reclamar tierras robadas: en tanto más gente exigió sus tierras, más gente fue atacada (*Just the Facts*, 06/08/2013).

Esto no debería sorprender a nadie: los elementos de derechos humanos incluidos en el TLC nunca buscaron realmente alterar las condiciones sociopolíticas del país. El acuerdo *lateral* de cooperación laboral exige que ambos países respeten los estándares laborales más básicos (derecho a la sindicalización, no al trabajo infantil, no al trabajo forzado), pero no estipula ningún cuerpo institucional ante el cual los trabajadores colombianos puedan quejarse, aparte de los que ya existían y que claramente no habían tenido ningún impacto sustantivo sobre los derechos de los trabajadores antes del TLC. Así que no hay motivo para asumir que algo cambiará con el Tratado simplemente porque un

acuerdo *lateral* de cooperación laboral fue empotrado al final. El multar a un gobierno por la continua violación de los derechos humanos, en un contexto de asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos, es en el fondo una descriminalización de la violencia y la intimidación. Lo que es más, nada en el acuerdo *lateral* indica que el gobierno colombiano aceptará la responsabilidad por las actividades de los paramilitares, quienes representan una importantísima proporción de la violencia contra los sindicalistas, y actúan con el consentimiento tácito o explícito del ejército, pero mantienen una independencia nominal del gobierno.

Una falla garrafal del acuerdo *lateral* es que no incluye a los pueblos indígenas, quienes, como hemos dicho, son las principales víctimas de los proyectos mineros y petroleros. Respecto a los reportes anuales sobre la situación de derechos humanos, simplemente han sido totalmente inútiles. El primer reporte del gobierno canadiense, publicado en mayo de 2012, no decía nada de derechos humanos, y era más bien una descripción general de las relaciones económicas entre los dos países. El segundo reporte, publicado en junio de 2013, incluía algunas oraciones parcas acerca de los derechos humanos —lo suficiente para concluir que "no es posible establecer un vínculo directo entre el CCoFTA (Canada-Colombia Free Trade Agreement, el TLC entre Canadá y Colombia) y la situación de los derechos humanos en Colombia"—. No ayudó el hecho de que la embajada canadiense en Bogotá se enfocó en su colaboración al reporte en sólo dos industrias —la floricultura y el azúcar— y dentro de esas dos, sólo en el impacto de las reducciones tarifarias sobre los derechos humanos. Así que, aunque la inversión canadiense en Colombia está totalmente dominada por el sector minero y petrolero, los cuales están conectados con desplazamientos forzosos, violaciones de derechos laborales y asesinatos, estos sectores no merecieron ni siquiera una mención en la evaluación de derechos humanos que la ley exige[139].

139 Los referidos reportes se encuentran en: http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/hrft-co_2012-dple.aspx?lang=eng.

La ayuda al desarrollo como un caballo de Troya

La política canadiense de ayuda al desarrollo es claramente parte del esfuerzo por abrir los recursos naturales a la inversión extranjera, y por tanto es corresponsable de una tragedia humanitaria que tiene mucho que ver con las actividades extractivas en las regiones mineras y petroleras del país. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) presume su contribución a la paz en Colombia a través del financiamiento que le otorga a proyectos de desmovilización de combatientes y programas contra las minas antipersonales, pero la otra cara de la moneda es su papel en la liberalización del régimen minero. Ésta permitió los ataques de los militares y los paramilitares contra las comunidades que están en el camino de la explotación de los recursos. El régimen minero refleja la prioridad que Canadá le otorga a la minería dentro de la estrategia de desarrollo nacional colombiana, y ofrece un buen ejemplo de los intereses del capital canadiense y de su capacidad para canalizar la ayuda al desarrollo, independientemente de la crisis humanitaria que pueda causar. De acuerdo con un funcionario, entre 1997 y 2002 la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) financió un proyecto para ayudar al país a "reforzar su capacidad institucional tanto en el Ministerio de Minas y Energía como en el del Medioambiente, así como en las agencias regulatorias con las que éstos trabajan"[140].

Reforzar la "capacidad institucional" es un eufemismo para decir reforma neoliberal. El principal objetivo del gasto de la Agencia de Desarrollo Internacional fue precisamente establecer un Código Minero que permitiera al capital internacional penetrar en los territorios indígenas y en las comunidades campesinas. El Código facilita la expropiación unilateral de tierras, debilita las regulaciones ecológicas (permite la exploración sin autorización de las autoridades ambientales) y limita los derechos laborales. Es importante señalar, por ejemplo, que el Código también reduce la tasa de regalías que las mineras extranjeras deben

140 Citado en Arsenault (2006: 32).

pagarle al gobierno, del 15 al cuatro por ciento. También establece que los mineros artesanales deben firmar un contrato con el gobierno en tres años, so pena de perder el acceso a sus depósitos. Sin embargo, muchos de estos mineros tuvieron que irse al ser atacados o amenazados por los paramilitares. El Código, finalmente, encaja bien con el Plan Colombia apoyado por Estados Unidos que, dice Hristov, "garantiza el control del sector privado sobre los recursos naturales, incluso si esto implica el desplazamiento forzoso de la población" (Hristov, 2005: 110; Ramírez Cuellar, 2005: 38-41; Kuyek, 2006: 209).

En otras palabras, no fue una feliz coincidencia que el Estado y las corporaciones mineras canadienses se beneficiaran del Código Minero neoliberal de 2001. Jugaron un papel central en su concepción y desarrollo desde 1996, cuando se inició el proyecto de implementar uno nuevo. De acuerdo con el abogado laboral y activista Francisco Ramírez Cuellar,

> las agencias de cooperación del gobierno canadiense como CIDA y CERI [Canadian Energy Research Institute, una ONG que representa a las compañías canadienses mineras y del sector de la energía] tienen conflicto de interés con las mineras privadas. CIDA y CERI han ayudado en la creación de legislación minera, petrolera y ambiental en Colombia, y las multinacionales que le dan apoyo financiero a CIDA y CERI han estado en posiciones desde las cuales se han beneficiado de esas nuevas leyes (Ramírez Cuellar, 2005: 38).

En efecto, Ramírez Cuellar afirma que el Código Minero fue redactado por un abogado colombiano "conectado a la compañía canadiense Corona Goldfields" (*ibíd.*).

La posibilidad de una mejora en los indicadores sociales como resultado de un régimen minero apoyado por Canadá es cercana a cero. Si la minería multinacional a gran escala conduce sistemáticamente al desplazamiento y la violencia, como en Colombia, ¿cómo se puede esperar una mejora en el nivel de vida? La cuestión de las regalías y

los impuestos también desmiente la idea de que Canadá está apoyando el desarrollo económico de Colombia: a pesar de los altos niveles de inversión en el sector minero, la industria genera ingresos relativamente bajos para el Estado. En las palabras de un consultor ambiental:

> Las compañías extranjeras son las únicas capaces de hacer minería a gran escala. Ellas se quedan con el 96 por ciento de las ganancias y en teoría Colombia se queda con el cuatro por ciento. Sin embargo, ni siquiera es ese cuatro por ciento. Los colombianos financian a los extranjeros para que se enriquezcan no con el 96, sino con el 99 por ciento de las ganancias de nuestros recursos naturales[141].

Un estudio sobre la contribución de la minería al ingreso nacional colombiano, realizado por el economista Guillermo Rudas, encontró que en 2009 las regalías llegaron a los 1.930 millones de pesos, mientras que las exenciones fueron de 1.750 millones. Y entre 2005 y 2010, por cada cien dólares que las compañías pagaron en impuestos, recibieron 200 en exenciones y otras formas de apoyo financiero por parte del Estado (*Dinero*, 26/04/2013).

Junto a Perú y Bolivia, Colombia es parte de la Iniciativa Regional Andina de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, enfocada en la minería, y cuyos objetivos incluyen "proyectos de desarrollo sustentables" y mejorar "el diálogo entre las comunidades y el sector privado" (CIDA, 2011a). Seis y medio millones de dólares canadienses fueron asignados para Colombia. Entre 2008 y 2010, otros 67 mil dólares canadienses fueron entregados a proyectos para apoyar a la industria minera a través del Canada Fund for Local Initiatives (Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales), financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional y administrado por la Embajada. Por su parte, la Cancillería gastó 49 mil dólares canadienses en "mejorar las prácticas sociales del sector extractivo". La idea de fomentar mejores relaciones

141 El director de la compañía y el consultor ambiental son citados por *Al Jazeera* (05/07/2011).

entre el sector minero y la población desplazada y reprimida por él —pues de eso se tratan realmente estas iniciativas— está tan alejada de la realidad que, independientemente de cuánta publicidad haga el gobierno sobre el fondo, no cree realmente en el discurso que vende sobre la Responsabilidad Social Corporativa. Los derechos humanos y una mejor calidad de vida no son en lo absoluto los motores del programa canadiense de ayuda al desarrollo en Colombia.

Conclusión

Este capítulo ha mostrado las diversas formas en las que Canadá ha intentado asegurar sus intereses económicos y geopolíticos en Colombia, así como el rol estratégico que este país juega como eje de proyección del poder imperial canadiense en el resto de la región andina. La inversión canadiense llega a borbotones, especialmente al sector extractivo de una Colombia desgastada por la violencia y el conflicto. Al dibujar los contornos de la inversión canadiense en Colombia, hemos querido entender también la resistencia popular que ha provocado.

Hemos visto precisamente cómo, y en qué medida, el Estado canadiense ha usado a la ayuda al desarrollo y al comercio bilateral como puertas de entrada, y cómo ha protegido sus inversiones movilizando estos discursos. A través de esos mecanismos, los diplomáticos canadienses y el capital de este país han apoyado la militarización del Estado colombiano, y se han beneficiado de la impunidad con la que los grupos militares reprimen a los movimientos sociales. La inversión directa canadiense ha florecido en un contexto que para la gran mayoría de colombianos ha implicado inseguridad, represión y miedo. El violento sector minero ha sido una de las columnas del capital canadiense, seguido de cerca por las inversiones en el petróleo y el gas, todo esto apoyado por la infraestructura financiera de los bancos canadienses. La configuración del poder geopolítico canadiense en Colombia se beneficia y contribuye de un ambiente

de implacable violencia y desposesión. Las compañías canadienses están claramente vinculadas con las redes de violencia en el campo, así como con las menos visibles redes de la élite política colombiana. El capitalismo extractivista enriquece a los capitalistas canadienses al tiempo que intensifica el desplazamiento y la desposesión de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y de mineros artesanales, y explota a los trabajadores en los campos petroleros y las minas. La riqueza repatriada por las compañías canadienses está cubierta de lodo y sangre. Un patrón similar es visible en Perú, que ahora pasamos a analizar.

Los dolores de la dependencia mineral en Perú

Durante siglos, Perú ha sido el ejemplo clásico de dependencia de los recursos naturales: un país integrado a los ritmos de la economía global sobre la base del precio de sus materias primas. La principal demanda de estos productos ha venido en general de fuera de sus fronteras, y los peruanos rara vez han tenido el control de éstos. El país ha pasado por privaciones, caídas estrepitosas, violencia y constante interferencia externa que acompañan esta forma de incorporación al mercado mundial. El período neoliberal sólo ha extendido e intensificado un antiguo patrón histórico. El capital canadiense ha entrado al ring por el acceso a la riqueza mineral peruana, una competencia abierta tras la liberación de los mercados. Como en América Central, las compañías de Canadá, apoyadas por el Estado canadiense, están invirtiendo en un país que no ha dejado atrás los fantasmas de la violencia de la época colonial y de la Guerra Fría, consecuencias, a su vez, de su riqueza natural. Esta situación de violencia ha sido en el fondo una gran ventaja para los inversionistas canadienses, independientemente de que estén dispuestos a ignorarla. El capital canadiense tiene ahora una presencia significativa en Perú. Con casi ocho mil millones CAD invertidos para 2013, Canadá es uno de los principales inversionistas extranjeros en la nación andina. La minería, en particular, está en el centro del perfil de la inversión canadiense, y el conflicto con las

comunidades y la intervención política exterior se han convertido en rasgos dominantes del paisaje político peruano.

En la primera parte de este capítulo discutiremos al enorme *boom* minero neoliberal, y el rol de los inversionistas canadienses en éste. La segunda parte sitúa el momento actual de dependencia de los recursos naturales en el arco histórico más amplio de la extracción de materias primas en Perú y del legado de violencia racista colonial sufrida por la gran mayoría, particularmente las comunidades indígenas. A partir de ahí, analizaremos los patrones de depredación ecológica y conflicto que rodean al régimen de extracción actual, liderado por Canadá. Finalmente, discutiremos la manera en la que el Estado canadiense ha intervenido para defender los derechos de sus inversionistas, lo que ha reforzado la larga trayectoria de dependencia, pobreza y desposesión.

El *boom* minero

Desde hace cientos de años el territorio que hoy responde al nombre de Perú ha sido una de las áreas mineras más importantes de América Latina. Durante buena parte del período colonial bajo dominio español, y desde su fundación como una república independiente a principios del siglo XIX, el país se ha articulado a la economía mundial como un proveedor de materias primas (Pinto, 2009: 85). Sin embargo, la minería tuvo un salto sin precedentes en escala e intensidad a partir de la década de 1990. En un contexto mundial de altos precios de los metales, las estructuras políticas y económicas peruanas se transformaron bajo la presidencia autoritaria de Alberto Fujimori (1990-2000). Las nuevas políticas económicas fueron diseñadas para potencializar las oportunidades de inversión y darle mayor certeza jurídica al capital extranjero. A partir de inicios de los años noventa, la minería a gran escala y la extracción de hidrocarburos se ha expandido a nuevas áreas y se ha intensificado en las regiones tradicionales de exploración. Esta dinámica ha generado poco a poco una nueva ola de conflictos socioambientales, en los que las comunidades indígenas andinas se

han enfrentado a las multinacionales mineras, y los movimientos en la Amazonia peruana se han confrontado con los equivalentes petroleros de los gigantes mineros (Li, 2015; Arce, 2014; Bury, 2013; Bebbington y Scurrah, 2013; Postigo, Montoya y Young, 2013; Taylor, 2011; Lust, 2014).

La receta de neoliberalismo autoritario implementada por Fujimori generó un extraordinario ritmo de acumulación en Perú, lo que puso al país en la cima de las estadísticas de crecimiento en América Latina durante buena parte de las últimas dos décadas. Entre 2006 y 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) de Perú creció a una tasa promedio del 6,6 por ciento anual, con un bajo uno por ciento en 2009 tras la crisis económica mundial; el punto más alto en ese proceso continuo de crecimiento del PIB se produjo en 2008, con el 9,1 por ciento (CEPAL, 2014: 78). Entre 1990 y el año 2005, el sector minero fue uno de los principales motores de desarrollo: el PIB creció en 80 por ciento a lo largo del período, pero el sector minero creció en 221 por ciento (Sosa y Zwarteveen, 2012: 360). Del mismo modo, entre 2002 y 2007, la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada en el sector minero creció en 65 por ciento, en contraste con el 12 por ciento de toda la IED (Arellano-Yanguas, 2011: 620). La inversión minera creció exponencialmente, de 200 millones de dólares en 1993, a 1.500 en el año 2000, y a cinco mil millones una década después. Algunas estimaciones afirman que la inversión continuará creciendo a este ritmo, y que llegará a unos 35 mil millones de dólares entre 2010 y 2016 (Ponce y McClintock, 2014: 121). Sin embargo, es posible que este ritmo se haya empezado a desacelerar en el contexto de una situación económica mundial distinta. La reciente caída de los precios de los *commodities*, con una demanda más baja en China, ha provocado un menor ritmo de crecimiento en Perú, en general, y de su sector minero, en particular. En 2014, el país creció a tan sólo el 2,6 por ciento, la cifra más baja en varios años (Schipani, 2015).

Perú es uno de los principales productores regionales y mundiales de varios minerales: estaño, primer lugar latinoamericano y tercer lugar mundial; zinc, primero en la región y segundo en el mundo; plomo,

primero y cuarto; oro, primero y sexto; plata, primer lugar mundial; cobre, segundo en la región y el mundo; hierro, quinto y séptimo (De Echave, 2011: 68). Esta abundancia natural, junto a la reestructuración económica doméstica y la sed insaciable del capital minero durante el gran *boom*, explican las más de dos décadas de continua expansión e intensificación de la extracción mineral. Entre 1994 y 2009, la minería representó poco más del seis por ciento del PIB peruano, el 60 por ciento de sus exportaciones y el 21 por ciento de la inversión extranjera directa. Al mismo tiempo, fue responsable del uno por ciento de los empleos, una proporción escandalosamente baja (De Echave, 2011: 68). Entre 2002 y 2007, la contribución de la minería a los ingresos por impuestos internos saltó del 3,6 al 24,7 por ciento (De Echave, 2011: 70). En términos geográficos, las concesiones mineras se han multiplicado exponencialmente, de 2,3 millones de hectáreas al inicio de los años noventa, a 24 millones de hectáreas, o el 19 por ciento del territorio nacional, en noviembre de 2013 (Zibechi, 2013b). La minería fue una vez una actividad confinada a las partes altas de la región andina, pero la reciente expansión geográfica la ha llevado a los valles, a las zonas costeras y a la Amazonia (Zibechi, *op. cit.*: 77).

A fines de 2013, 180 de las 229 propiedades mineras en operación eran canadienses. Y hay una docena de compañías petroleras y gaseras de Canadá operando en Perú (Andina, 28/09/2013)[142]. En 2012, la compañía de ingeniería canadiense Dessau adquirió una empresa peruana que se especializa en infraestructura energética, y desde entonces es la segunda compañía de ingeniería más grande del país. La expansión de Dessau puede ser vista como una extensión de las adquisiciones canadienses en Colombia y Chile en 2011 (*Agencia Órbita*, 06/07/2012). El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, que entró en vigor en 2009, ha estimulado el predominio del capital canadiense en el sector de los recursos naturales. Estos dos elementos han servido, a su vez, de plataforma para la extensión del capital hacia otras áreas, las

142 Las estadísticas de propiedades mineras vienen de la base de datos de www.northernminer.com.

finanzas ante todo: Scotiabank era el tercer banco más grande del país en 2011, con el 17 por ciento del mercado. La expansión de Scotiabank en Perú ha estado estrechamente vinculada con el creciente peso de Canadá en los sectores de recursos naturales y energía (FAIT, 2009f). El impacto devastador de la minería es responsable de buena parte del aumento en la protesta social de años recientes. De acuerdo con los reportes mensuales sobre conflicto social publicados por el Ombudsman peruano, el 50 por ciento de las protestas están relacionadas con temas socioambientales, especialmente con cuestiones sobre la extracción de hidrocarburos y, particularmente, con la extracción minera. En 2010, por ejemplo, los conflictos mineros constituyeron el 64 por ciento de las disputas socioambientales documentadas (Arellano-Yanguas, 2011: 77).

El nivel de confrontación en las regiones mineras no debe sorprender a nadie que conozca las consecuencias de la extracción capitalista en América Latina durante los últimos años. Ahora tenemos evidencia detallada sobre el impacto del extractivismo más brutal –especialmente el de la minería a cielo abierto y la extracción de petróleo en la Amazonia—. Algunas de las principales consecuencias sociales y ambientales son la destrucción de los sistemas ecológicos y los hábitats naturales, la contaminación, el desplazamiento de las comunidades locales, la destrucción de las economías regionales, la manipulación de las comunidades indígenas por parte de los representantes de las mineras y el Estado, así como una rampante corrupción cotidiana (Gudynas, 2011: 190). Esto va de la mano con el tipo de desarrollo que esta minería produce, un desarrollo incapaz de mejorar la vida de los peruanos o proteger el medio ambiente, y en el que la presencia de las multinacionales mineras y petroleras implica la repatriación de las ganancias y la externalización de los costos sociales y ambientales de la producción (Gudynas, *op. cit.*: 199). Finalmente, está la cuestión básica del declive de los recursos mismos, esto es, los límites ecológicos a la capacidad extractiva, o la pérdida incalculable y permanente de esta riqueza natural una vez que ha sido extraída y sacada del país

(Gudynas, *op. cit.*: 190-91). Un artículo reciente de un grupo de economistas convencionales buscaba medir "la pérdida de capital natural y [corregir] la medida del ingreso económico generado por la minería metálica en Perú durante el período 1992-1996". En el lenguaje seco y acomedido de la economía, los autores mostraban que "las actividades de la minería han causado un significativo impacto ambiental" y que sus "estimados muestran que el ingreso económico corregido por la depreciación de los recursos minerales y la degradación ambiental ha sido significativamente sobreestimado por las medidas de PIB normales para el período" (Figueroa, Orihuela y Calfucura, 2010: 156, 165).

Escasez de agua

Algunos datos estimativos afirman que las actividades mineras afectan al 50 por ciento de las comunidades campesinas peruanas (Bebbington y Williams, 2008: 190). El agua es una de las principales fuentes de conflicto. El acceso y el control de este recurso han estado en el centro de muchas de las principales disputas entre las comunidades campesinas y las compañías mineras. "Perú es el país sudamericano con más problemas de acceso al agua", dicen Anthony Bebbington y Mark Williams, un geógrafo y un hidrólogo, respectivamente. "El agua de la sierra andina alimenta a la población río abajo y a las actividades agrícolas, incluyendo el dinámico sector de exportación" (Bebbington y Williams, *op. cit.*: 191). La escasez de agua hace de Perú el tercer país más vulnerable al cambio climático en el mundo.

Los problemas de agua han sido acentuados por la expansión de la minería. Muchas de las concesiones están en las regiones de origen de las fuentes de agua de los Andes, y el impacto de la minería sobre la calidad del agua —la filtración de ácidos (se utilizan metales pesados y ácidos para separar lo minerales) y la deposición de piedra fina a la que se le ha extraído el mineral— afecta a regiones más extensas que el sitio de extracción propiamente dicho (*ibíd.*). "En julio de 2008", dicen Bebbington y Williams, "Perú declaró el estado de emergencia

en una mina cerca de Lima por temores a que su depósito de desperdicios, dañado por la actividad sísmica y por la filtración subterránea de agua, pudiera echar arsénico, plomo y cadmio a la principal fuente acuífera que alimenta a la ciudad". Estos investigadores estiman que "cada año la minería y la metalurgia liberan más de 13 mil millones de metros cúbicos de desperdicios a los cuerpos acuíferos de Perú" (*ibíd.*).

En su estudio sobre el "acaparamiento del agua" de la industria minera peruana, Milagros Sosa y Magreet Zwarteveen documentaron cuidadosamente la expropiación de los recursos acuíferos del país por parte de las mineras multinacionales. Muestran el modo en que los grandes proyectos mineros han alterado fundamentalmente cómo y quién controla el agua (Sosa y Zwarteveen, 2012: 361). La industria extractiva ha reconfigurado la gobernanza del agua en Perú, pues las comunidades pobres han perdido el acceso a ésta. Están siendo, "en los hechos, desposeídas al perder su derecho al agua" (Sosa y Zwarteveen, *op. cit.:* 372).

Contexto histórico: raza, clase, geografía y terror

Un buen punto de partida para entender la trayectoria histórica de la economía política y las luchas sociales en Perú es la obra del gran teórico marxista de principios del siglo pasado José Carlos Mariátegui. Las cuestiones centrales que atraviesan sus escritos son las mismas —aunque bajo distinta forma— que hoy en día animan la política extranjera canadiense en América Latina: la historia del colonialismo, el mercado mundial y la dinámica del imperialismo en un sistema universal asimétrico de Estados-nación, el desarrollo desigual y combinado del capitalismo en las sociedades de industrialización tardía, y los legados del racismo, esclavitud y conquista.

Mariátegui parte de la premisa de que la conquista española del Perú "destruyó formas económicas y sociales que nacieron espontáneamente de la tierra y el pueblo peruanos", formas que habían sido "inspiradas por una concepción indígena de la vida"

(Mariátegui, 2011: 118). La conquista fue, ante todo, "una horrible carnicería", después de la cual "la organización política y económica de la colonia […] continuó con el exterminio de la raza indígena. El virreinato estableció un sistema de brutal explotación" (Mariátegui, *op. cit*.: 145). En *La cuestión agraria*, probablemente su ensayo más famoso, Mariátegui describe la economía peruana de principios de siglo como "colonial", en el sentido de que "su movimiento [y] su desarrollo están subordinados a los intereses y necesidades de los mercados en Londres y Nueva York" (Mariátegui, *op. cit*.: 111). Perú se ve reducido a proveer de materias primas a las grandes potencias imperiales, y a absorber sus productos manufacturados. En otro texto, Mariátegui muestra cómo buena parte de las ganancias de la minería, el comercio y el transporte, salen de Perú con dirección a las potencias imperialistas, lo que lo obliga a pedir de vuelta ese capital en la forma de préstamos y deuda (Mariátegui, *op. cit*.: 134). Mariátegui había enfatizado cómo el imperialismo "no permite que ninguno de estos pueblos semicoloniales, a los que explota como mercado para su capital y sus productos, y como fuente de materias primas, tenga un programa económico de nacionalización e industrialización". Las crisis recurrentes de la economía peruana "emergen de esta rígida determinación de la producción nacional generada por las fuerzas del mercado capitalista mundial" (Mariátegui, *op. cit*.: 238).

Algo único en la obra de Mariátegui durante este período es su tratamiento sistemático del carácter racial asumido por el desarrollo desigual y combinado en el Perú republicano. "Los elementos feudales y burgueses en nuestro país tienen el mismo desprecio que los imperialistas blancos hacia los indígenas, así como hacia los negros y los mulatos". Mariátegui dice lo siguiente en su mensaje disidente a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana en Buenos Aires en 1929 (leída en su ausencia):

> Los sentimientos racistas de la clase dominante son totalmente favorables a la penetración imperialista. El señor nativo (peruano,

> no indígena) o burgués, no tiene nada que ver con sus peones de color. La solidaridad de clase se suma a la solidaridad o prejuicio racial para hacer de la burguesía nacional un instrumento dócil del imperialismo yanqui o británico. Y ese sentimiento se extiende a buena parte de la clase media, que imita a la aristocracia y la burguesía en su desdén por el plebeyo de color, incluso cuando es claro que son mestizos (Mariátegui, *op. cit.*: 310).

"Es responsabilidad de la república el elevar el estatus del indio", escribió Mariátegui en su ensayo *La contradicción principal del Perú*. "Y contra su deber, la república ha empobrecido a los indios. Ha agregado a su depresión y exasperado la miseria. La república ha implicado para los indios la llegada de una nueva clase dominante que sistemáticamente les ha quitado sus tierras" (Mariátegui, *op. cit.*: 140). Al considerar la centralidad de la cuestión racial en el pensamiento de Mariátegui y su discusión sobre el desarrollo económico y político de Perú, no debe sorprender que una política antiracista, y especialmente de liberación indígena, sea omnipresente en su análisis de la estrategia de emancipación y las posibles fuentes de liberación.

Muchos de los temas presentes en la obra de Mariátegui —las divisiones raciales, de clase y geográficas entre las élites oligárquicas costeras predominantemente limeñas y las comunidades indígenas de las tierras altas andinas y de las simas de la Amazonia; la desposesión de los campesinos por las élites peruanas de tez clara aliadas con los capitalistas extranjeros; la subordinación de Perú a los poderes dominantes del mercado mundial: y la resistencia de los campesinos y los trabajadores— siguen siendo relevantes a la realidad peruana en los albores del siglo XXI.

La dinámica local de la Guerra Fría no hizo sino intensificar patrones antiguos. A principios de los años cincuenta se formó un poderoso movimiento campesino en las montañas andinas, lo que debilitó y amenazó la hegemonía de la clase dominante. La revolución cubana de 1959 inspiró a movimientos campesinos, guerrillas rurales y activistas

sindicales en la siguiente década, como en el resto de América Latina[143]. Las protestas campesinas y obreras se hicieron más intensas a lo largo de la década, y estimularon la creación de una nueva izquierda que nunca ha vuelto a tener esa influencia y extensión (Rénique, 2010: 320). El golpe militar de 1962 fue una primera reacción contra los movimientos sociales, y éste fue seguido seis años después por otro, esta vez bajo la dirección de generales nacionalistas reformistas. "El experimento de reforma nacionalista y autoritaria lanzado por los militares peruanos en 1968", dice el historiador Gerardo Rénique, "no solucionó la crisis de legitimidad de la oligarquía que comenzó a finales de los años cincuenta, simplemente pospuso su resolución" (Rénique, *op. cit.*: 328). De acuerdo con Rénique, una vez que el ejército permitió el regreso a la democracia en 1980, "el país se hundió en una situación mucho más volátil que la que había vivido dos décadas antes" (*ibíd.*).

La escena estaba lista para que se iniciara el período de mayor violencia en la historia de la república, la guerra civil entre 1980 y 1992 entre la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y el Estado peruano (Stern, 1988). La larga historia de desarrollo desigual, el racismo, la desigualdad de clase, la violencia represora del ejército y los paramilitares entrenados en las doctrinas de contrainsurgencia, chocó en los años ochenta e inicios de los noventa con la tendencia fundamentalista del maoísmo adoptada por Sendero. La combinación produjo niveles catastróficos de violencia. "Aunque el Estado peruano había previamente practicado detenciones arbitrarias, asesinatos, tortura, exilio y deportación para eliminar a los líderes de la oposición y debilitar a los movimientos de masas, durante la guerra de los años ochenta los modos 'tradicionales' de represión cedieron el paso a formas más duras de violencia ejemplar y punitiva dirigida contra civiles, hombres y mujeres" (Rénique, 2010: 308-309).

Rénique dice que las llamadas "caravanas de la muerte" organizadas por el ejército

143 Un relato ya clásico de esto es el de Blanco (1972).

> violaban, torturaban, desaparecían y ejecutaban no sólo a supuestos subversivos y sus familiares, sino también a profesores de universidad y estudiantes; acorralaban a los campesinos en aldeas estratégicas y detuvieron y acosaron arbitrariamente a miles de ciudadanos, incluyendo a muchos periodistas y abogados (*ibíd*.).

El Estado justificaba estas acciones haciendo referencia a la "guerra justa" que peleaba contra los terroristas. En una muestra del antiguo racismo de las élites de la capital, el ejército peruano veía a la población indígena de los Andes como la base social y aliados "naturales" de Sendero, y, por tanto, la represión del Estado y los paramilitares tuvo un carácter claramente racial.

Por su lado, Sendero Luminoso veía a cualquiera que no apoyara explícitamente al movimiento guerrillero como un obstáculo en su guerra revolucionaria contra el Estado peruano o, peor, como colaboracionista de ese Estado. "Ejecutó líderes de muchos sindicatos, federaciones campesinas, grupos feministas, organizaciones vecinales y federaciones estudiantiles que no le juraron lealtad", dice Rénique junto con la antropóloga Deborah Poole. "Activistas, funcionarios electos, monjas, padres, trabajadores de ONG y funcionarios locales del gobierno también fueron atacados, a menudo en ejecuciones públicas o juicios 'populares'" (Poole y Rénique, 2003: 153).

De acuerdo con el reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (junio 2001-agosto 2003), murieron unas 70 mil personas entre 1980 y el año 2000, de las cuales Sendero Luminoso es responsable de un 54 por ciento, una proporción anómala de crímenes perpetrados por un grupo guerrillero en cualquier conflicto civil latinoamericano en el siglo XX, pues en todos los otros casos la gran mayoría de los asesinatos fueron perpetrados por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares aliados[144]. Sin embargo, las atrocidades cometidas por el Estado y los paramilitares fueron casi iguales en número, dicen

144 Ver CVR (2003).

observadores cercanos como Poole y Rénique. El país se militarizó, y durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), el Ejecutivo recibió poderes especiales. "Curiosamente —dicen Poole y Rénique— los blancos más frecuentes del terrorismo de Estado eran los mismos que los del PCP-SL [Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso]. Los líderes locales y los representantes populares de la coalición de Izquierda Unida (en ese momento la segunda fuerza electoral más importante) fueron acusados de simpatizantes o terroristas. La legislación terrorista también justificó el acoso contra los *cholos* (gente de tez oscura) y los indios, que el Estado veía como aliados 'naturales' de Sendero Luminoso" (Poole y Rénique, 2003: 153).

Fujimori y el neoliberalismo autoritario

Alberto Fujimori fue electo presidente por una coalición de extrema derecha en 1990, al prometer una política de línea dura contra Sendero Luminoso, más poder al Ejecutivo, una mayor militarización de la sociedad peruana y el establecimiento de un servicio nacional de inteligencia coordinado y centralizado, que sería dirigido por el tristemente célebre Vladimiro Montesinos[145]. La popularidad de Fujimori se fue a los cielos cuando, gracias a una operación de vigilancia policiaca previa a su gobierno, fue capturado Abimael Guzmán, líder de Sendero. Con esto, la guerra llegaba a su fin. Insatisfecho todavía con sus poderes como presidente, Fujimori se dio un autogolpe en abril de 1992, con el que suspendió el Congreso y le otorgó autoridad irrestricta al Ejecutivo. Al hacer esto, Fujimori estableció un gobierno de autoritarismo duro que duraría hasta el año 2000. Como en el resto de América Latina, la concentración de poder en el Estado peruano y la violencia desatada contra cualquier expresión de oposición constituyó la base para la introducción de un programa de reestructuración

145 Montesinos está actualmente en la cárcel por corrupción. Fue arrestado meses después de huir del país, tras la caída de Fujimori en el año 2000. Fue acusado de extorsión, tráfico de armas y drogas, y de dirigir un escuadrón paramilitar. Ver *The New York Times* (21/05/2006).

económica radical. La dimensión económica del gobierno de Fujimori fue, en última instancia, la columna del *boom* minero del que el capital canadiense sería parte esencial. "Sobre este punto", dice Rénique,

> la contrainsurgencia contra Sendero y, en general, contra la izquierda peruana y el movimiento popular, reforzó la capacidad militar del Estado y, lo que es más importante, intensificó su control ideológico sobre la imaginación política y cultural de una sociedad en la que la memoria de la guerra y las privaciones de las reformas neoliberales se habían combinado para debilitar el atractivo de la organización colectiva y el pensamiento utópico (Rénique, 2010: 332).

Fujimori introdujo una tanda de reformas de mercado, pero el motivo subyacente de todas ellas fue garantizar un ambiente jurídico en el que los derechos de los inversionistas extranjeros en la industria minera estuvieran por encima de cualquier otra consideración. Los derechos comunales e inalienables a la tierra que las comunidades campesinas e indígenas obtuvieron en la década de 1920 eran vistos como obstáculos a los proyectos mineros privados. Del mismo modo, los condicionamientos legales para la aprobación de concesiones extranjeras en la industria extractiva eran vistos como demasiado burocráticos, especialmente los que implicaban restricciones u obligaciones ambientales. Fujimori pudo deshacerse de estos y otros elementos de la supuesta "burocracia" al concentrar un enorme poder en las manos del Poder Ejecutivo (Pinto, 2009: 87-93).

Sólo en un año, en 1991, se echó a andar un programa completo de reforma estructural. Éste incluía varias leyes diseñadas para garantizar la estabilidad de la inversión extranjera directa. Leyes ambientales, sobre la tierra y sobre las comunidades indígenas, fueron aprobadas una tras otra, todas ellas con el objetivo de ampliar la inversión extranjera en la minería en un momento en el que los precios de los *commodities* empezaban a subir en el mercado internacional. La dinámica de la legislación de 1991 culminó, en última instancia, en una nueva Ley Minera

y en una nueva Constitución dos años después. Ambas consolidaron las reformas al favorecer los derechos de los inversionistas extranjeros (De Echave, 2009: 107). Una nueva ley agraria de 1995, además, permitía la comercialización de las tierras comunales indígenas por primera vez desde la década de 1920 (Ponce y McClintock, 2014: 121).

Los pequeños propietarios campesinos también fueron obligados a vender sus tierras para abrirle paso a los proyectos de la megaminería controlados por el capital extranjero. Los derechos de propiedad de la tierra en Perú no se extienden al subsuelo, pues los minerales pertenecen al Estado. Las reformas de Fujimori permitían que si un propietario se negaba a vender su tierra al precio de mercado, el Estado podría expropiarlo. En los hechos, esto implicaba una transferencia de títulos de propiedad a la compañía minera. La mera amenaza de esta posibilidad legal estimuló la transferencia de grandes cantidades de tierras comunales o privadas a las mineras (Ponce y McClintock, *op. cit.*: 120-121). Fujimori también terminó con las protecciones laborales que quedaban en el Código de Trabajo, liberó la tasa de cambio y eliminó las restricciones a la repatriación de ganancias, dividendos y regalías (Bury, 2002: 5). La legislación liberó a los nuevos proyectos mineros del pago de regalías, y, bajo las nuevas reglas, las multinacionales mineras no tuvieron que pagar el impuesto estándar del 30 por ciento a las ganancias hasta que hubieran recobrado su inversión inicial (Arellano-Yanguas, 2011: 620). En la dimensión regulatoria, el Ministerio de Energía y Minas recibió las responsabilidades simultáneas de: "(i) promover la inversión en las nuevas operaciones mineras; (ii) otorgar concesiones mineras; y (iii) analizar y aprobar las evaluaciones de impacto ambiental requeridas para las nuevas actividades de exploración y extracción" (Arellano-Yanguas, *op. cit.*: 621). Además de los incentivos económicos y las flexibilidades regulatorias, la derrota militar de Sendero Luminoso hizo inmediatamente de Perú un lugar más atractivo para el capital internacional. El fin de las actividades guerrilleras en la región andina "permitió que los geólogos viajaran sin problemas por la cordillera en búsqueda de depósitos minerales

y para reivindicar derechos de explotación", dice el geógrafo Jeffrey Todd Bury. "En consecuencia, en 1992 se hicieron más solicitudes de explotación que en los 15 años precedentes" (Bury, 2002: 5).

Continuidades en la etapa post Fujimori

Poco cambió en la política económica entre el gobierno de Fujimori y sus sucesores inmediatos (Alejando Toledo, 2001-2006, y Alan García, 2006-2011). Las políticas neoliberales que hicieron del país un destino codiciado para los inversionistas mineros fueron continuadas con brutal fidelidad por Toledo, un exempleado del Banco Mundial, y por García, años atrás un presidente populista de izquierda (1985-1990) convertido en un recalcitrante neoliberal durante su segundo gobierno.

Si la trayectoria económica sufrió pocas modificaciones en el Perú post Fujimori, en todo caso el final del autoritarismo más cínico abrió espacios para la organización de los movimientos sociales, y las protestas antiminería se hicieron visibles de una manera dramática e inesperada. Por supuesto, las compañías mineras fueron las primeras en entrar en conflicto con las comunidades. Las protestas aisladas de los años noventa dieron un salto con la formación de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) en 1999 (Bury, 2002: 4; Hoetmer, 2006: 180).

Durante el gobierno de Fujimori, las huelgas y las protestas, en general, sufrieron un marcado declive. Pero esto cambió claramente bajo Toledo, al punto que el semanario *Caretas* documentó 800 protestas distintas en Lima solamente en 2002 (Arce, 2008: 43-44). Una gran protesta antineoliberal generó una crisis política en la ciudad de Arequipa en ese año, cuando los ciudadanos prácticamente se sublevaron contra la privatización de las compañías municipales de electricidad. Pero más que ningún otro sector, la minería se convirtió en el *locum tenens* del nuevo activismo. Estas protestas estaban geográficamente fragmentadas y en general organizadas sólo en un nivel local o regional, pero la suma de protestas locales empezó a impactar

económica y políticamente al sector minero (Arce, *op. cit.*: 53). Un detallado estudio sobre el conflicto social en Perú entre 2004 y 2011 señaló que "el número total de conflictos sociales [...] considerando todo tipo de disputas, ha aumentado considerablemente desde 2004". El estudio muestra que los conflictos en cuestión

> son variados, se extienden más allá de un solo episodio, y a menudo se mantienen sin resolver durante meses o años. El alza cuantitativa es en gran medida una consecuencia de la reacción de la población a las actividades de las compañías mineras y de otras industrias extractivas en áreas ambientalmente sensibles. De hecho, en 2011 estas disputas "socioambientales" representaron más de la mitad de todos los conflictos, y siguen enturbiando la política nacional (Bland y Chirinos, 2014: 75).

Las multinacionales mineras, y los inversionistas canadienses en primer lugar, han seguido de cerca el alza en la protesta social en los sectores extractivos. Una muestra de esta preocupación puede ser vista en los reportes anuales del Instituto Fraser, un *think tank* canadiense conservador, sobre las compañías de minería y exploración metalúrgica. Estos reportes buscan evaluar la riqueza mineral, así como la política pública, la carga fiscal y la regulación en el sector minero en distintas partes del mundo. La evaluación incluye dos índices basados en la información recolectada por el instituto, un Índice Político Potencial (IPP) y un Índice Minero Potencial (IMP). En las palabras del sociólogo Moisés Arce,

> estos índices funcionan como una boleta de calificaciones para los gobiernos acerca de qué tan atractivas son sus políticas desde el punto de vista del gerente de exploración. En la evaluación de 2005-6, el índice IMP situó a Perú en el primero de los 64 países evaluados, lo que claramente sugería que el potencial de explotación era altísimo. En contraste, en el índice IPP —que

> toma en cuenta, entre otras cosas, la estabilidad política y los conflictos sociales— Perú ha caído consistentemente desde 2003 (Arce, 2008: 53).

Incluso si las protestas no alcanzaron la escala de las cercanas Bolivia, Argentina y Ecuador, es un hecho que el activismo antiminero se convirtió en una fuerza importante en el paisaje político peruano (Hoetmer, 2006: 178).

Tambogrande y Ancash: conflictos contra las mineras canadienses

El capital canadiense ha sido la punta de lanza del auge minero desde la década de 1990 en Perú, y por tanto no es ninguna sorpresa que los gigantes mineros canadienses hayan sido los principales blancos del nuevo activismo ecologista de los últimos años (De Echave, 2005: 17). Las luchas antiminería que enfrentaban directamente al capital canadiense se habían hecho comunes ya al principio de los años 2000, y se extendían de las comunidades campesinas de Vicco, Tintaya-Marquiri y Yauli, hasta el distrito de San Marcos, en el departamento andino de Ancash (Stuek, 2006: B5; Szablowski, 2006 37-59; De Echave, 2005: 21-30). El caso de Tambogrande, que comenzó en 2001, es representativo de muchos de los conflictos del país.

Tambogrande está en la región norteña de Pira, a poco más de mil kilómetros de Lima. La corporación canadiense Manhattan Minerals Corp. empezó a inspeccionar la reserva de Tambogrande cuando obtuvo una concesión de exploración en 1999 (Orozco, 2002: FP4). En ese momento, Manhattan Minerals estimaba el valor de los depósitos de oro, plata, cobre y zinc en su concesión en aproximadamente 1.600 millones de dólares (Mauro, 2003: C2).

Desde el primer momento se presentó la preocupación por el desplazamiento a gran escala de los habitantes —proyectada entre ocho y 20 mil personas— debido a que partes de la concesión estaban en

la zona céntrica del pueblo (Leger, 2001: C1). Manhattan Minerals empezó las excavaciones poco después de obtener la concesión. Habían hecho planes para hacer una mina a cielo abierto de tres kilómetros de diámetro dentro de un área urbana. Los planes de reubicar a no menos de ocho mil personas a otro pueblo que pensaban construir se conocieron desde el principio (Haarstad y Fløysand, 2007: 296).

Se temía que la escasez y la contaminación del agua, así como los otros efectos nocivos de la minería pudieran impactar negativamente sobre los cultivos de exportación de 226 mil hectáreas de mango, limón y otros árboles frutales del área, que generan 26 mil empleos e ingresan 105 millones de dólares anuales a la economía regional (Orozco, 2002: FP4). El valle de San Lorenzo en el que se encuentra Tambogrande sufre de graves problemas por falta de agua. El uso de esos pocos recursos hídricos en la minería tendría consecuencias devastadoras para el consumo local y las actividades agrícolas. Los opositores al proyecto estaban también preocupados por los planes de la compañía de cambiar el curso del río Piura para explotar las vetas de oro actualmente bajo el agua (Kozak, 2002: FP10). Los activistas antiminería en Tambogrande creen que las enormes ganancias que se espera extraer de la concesión, del mismo modo que en el período colonial y republicano, terminarán en los bolsillos del capital extranjero, y que a la comunidad le tocará lidiar con la devastación.

Durante los años setenta y ochenta, el principal actor de la lucha popular en el sector minero fue la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, fundada en 1969. Los mineros fueron una de las principales fuerzas motrices del movimiento sindical. Desarrollaron una ideología enraizada en el antiimperialismo y la defensa de los derechos de los trabajadores (De Echave, 2005: 118-119). Sin embargo, la rápida expansión de las actividades mineras hacia nuevas áreas durante la década de 1990 modificó el eje del conflicto de los derechos laborales de los mineros en instalaciones ya existentes, hacia la resistencia

campesina y comunitaria a la construcción de las minas. Un punto de quiebre en este largo giro fue la fundación de la ya mencionada Conacami en 1999, que cristalizó tras varias reuniones entre líderes de 40 comunidades de seis regiones distintas del país a partir de 1998 (De Echave, *op. cit.*: 119-120). El conflicto en Tambogrande es parte de esta nueva ola de lucha que empezó cerca del final del siglo, y que se ha expandido de manera impresionante durante la década y media siguiente.

Una coalición de "pequeños y medianos campesinos, trabajadores agrícolas, maestros, comerciantes, la Iglesia católica y en general los distintos sectores sociales de la región", se opusieron a Manhattan Minerals a través de la formación del Frente de Defensa de Tambogrande —a su vez parte de la coalición de Conacami— (De Echave, *op. cit.*: 122). El frente desplegó varias tácticas para resistir contra Manhattan, como huelgas, ocupaciones y un referéndum sobre las actividades mineras. Durante una huelga a finales de febrero de 2011, "unos cinco mil habitantes atacaron las instalaciones de la compañía el día 28, y quemaron maquinaria" (Leger, 2001). De acuerdo con un testimonio de Francisco Ojeda Riofrío — alcalde de Tambogrande, Secretario de Derechos Humanos de la Conacami y Presidente del Frente de Defensa de Tambogrande—, la huelga estalló porque

> la gente estaba frustrada e indignada, porque nadie les hacía caso. La compañía contrató a 700 policías, pero la gente los confrontó. Cuando estalló la violencia, dijeron que habíamos contratado terroristas para que vinieran. Durante la huelga mataron a nuestro principal líder, a nuestro hermano Godofredo García Baca, y al día de hoy su asesino no ha sido capturado aunque todo mundo sabe que es un exsargento de la fuerza aérea (Ojeda Riofrío, 2006: 60-62).

A pesar de que García Baca era presidente de una asociación campesina y uno de los principales líderes del movimiento opositor, Manhattan Minerals mantuvo la posición de que su asesinato había

sido apolítico: la trágica consecuencia de un robo[146]. Ojeda Riofrío afirma que la infiltración de informantes de la compañía en las reuniones de la comunidad era común. Lo que es más serio es que tres meses después de la huelga en la que García Baca fue asesinado, "siete matones armados secuestraron a mi hija de la universidad y la dejaron tirada en la calle principal de Piura. Al día siguiente teníamos un debate programado con la compañía —no sé si ellos estuvieron detrás del secuestro de mi hija, pero en todo caso fue alguien que quería asustarme" —(Ojeda Riofrío, 2006: 61-62). Las amenazas de muerte contra Ojeda Riofrío y su familia no se detuvieron.

En 2002, el Frente por la Defensa de Tambogrande organizó un referéndum no vinculante sobre si debería o no continuar el proyecto minero de Manhattan. Este fue el primer referéndum autoorganizado por la población en América Latina, una herramienta que de ahí en adelante sería parte del repertorio de acción colectiva de los activistas antiminería desde México hasta Argentina (Martínez Alier, 2013). De 37 mil posibles votantes participaron más de 27 mil. El 94 por ciento votaron contra el proyecto minero (Kozak, 2002). La compañía negó la credibilidad del referéndum, y aparentemente llevó a cabo su propia encuesta —pero se negó a publicar los resultados, que reafirmaban los del referéndum previo— (Ojeda Riofrío, 2006: 61). Durante los siguientes tres años, el movimiento opositor de Tambogrande prosiguió en sus esfuerzos. En noviembre de 2003 hubo una aguda y radical protesta de tres días, por ejemplo. El activismo se mantuvo hasta que Manhattan Minerals abandonó la concesión en 2005, bajo presión del gobierno peruano, pero citando también las protestas como un obstáculo a la salud financiera del proyecto (Arce, 2008: 55). Los sociólogos noruegos Håvard Haarstad y Arnt Fløysand escriben:

146 Graham Chow, el presidente de Manhattan, dijo lo siguiente: "Se le ha robado a muchos terratenientes en los últimos dos meses, especialmente por los pagos mensuales. La policía identificó a un sospechoso, y es un criminal de poca monta con un extenso historial de crimen. La investigación seguirá su curso" (Leger, 2001).

> Bajo una intensa presión, nacional e internacional, el gobierno peruano revocó la licencia de Manhattan Minerals en Tambogrande, lo que en los hechos le puso punto final al proyecto. En un país tradicionalmente dominado por la minería y los intereses de la élite, una comunidad rural había detenido un gran proyecto extranjero a través de un amplio reportorio político y el apoyo de una red de organizaciones nacionales e internacionales (Haarstad y Fløysand, 2007: 296).

La dinámica de los conflictos en el sector minero se mantuvo durante el gobierno de Alan García y, como antes, las compañías canadienses se encontraron en el ojo del huracán. Durante la campaña electoral de 2006 García prometió revisar los contratos mineros. Se había hecho ya un tema de conocimiento y repudio público que las enormes ganancias eran expatriadas por las multinacionales, y se empezó a exigir un impuesto progresivo. Sin embargo, ya en el gobierno, García hizo redujo el impuesto progresivo a un compromiso voluntario por parte de las multinacionales. Si eso no era ya suficientemente ridículo, el Ministerio de Energía y Minas siguió siendo responsable de atraer nuevas inversiones y de analizar e implementar las evaluaciones de impacto ambiental requeridas antes de empezar cualquier actividad minera, dos tareas completamente contradictorias (Arellano-Yanguas, 2011: 621).

Uno de los conflictos sociales más simbólicos durante el gobierno de García involucró a otra compañía canadiense y estalló tan sólo un mes después de las elecciones presidenciales de 2006. Se trata de la mina de oro Pierina en la región de Ancash. El depósito había sido descubierto por una compañía de exploración asentada en Vancouver, que fue a su vez adquirida por Barrick Gold en 1996. Poco después, Barrick llevó a cabo una gran operación de adquisición de tierras en la que obtuvo unas 2.300 hectáreas para poder desarrollar la concesión. Estas tierras estaban en el centro de las corrientes fluviales de los valles de los alrededores, eran tierras que

los pequeños campesinos usan para el pastoreo común de su ganado y ovejas (Himley, 2013: 402-203).

Los habitantes acordaron vender sus tierras ante la promesa de proyectos de desarrollo social y trabajos en la nueva mina. "En los nueve años que han transcurrido desde entonces," dice el géografo Matthew Himley, quien llevó a cabo una investigación etnográfica de 13 meses en la región, "no ha habido empleo permanente para la mayoría de los habitantes de Pierina: aunque casi todos los 46 entrevistados en las dos comunidades mostraron interés en trabajar en la mina, ninguno había sido contratado a tiempo completo" (Himley, *op. cit.*: 403). A principios de mayo de 2006, personas de 17 comunidades bloquearon dos de los principales accesos carreteros a la mina durante la medianoche. Durante el segundo día del bloqueo, una unidad de operaciones especiales de la policía fue enviada para dispersar a los manifestantes. Una persona murió y por lo menos diez fueron heridas gravemente durante la batalla. Nueve policías también fueron heridos ese día (Himley, *op. cit.*: 395). De acuerdo con Himley, quien escribe basándose en las múltiples entrevistas que hizo entre 2006 y 2012,

> la visión de los habitantes sobre la historia local está a menudo basada en narrativas más amplias acerca de las consecuencias nocivas de la minería a gran escala. Junto con las referencias al impacto negativo de la minería sobre la disponibilidad de recursos y la vida social, estas narrativas a menudo mencionan el poco o ningún apoyo que las comunidades recibieron de Barrick para proyectos de desarrollo social (Himley, 2014: 185).

Las protestas contra Barrick continúan en Ancash, y la gente de la región sigue en resistencia, a pesar de la represión estatal que busca limpiar el camino para Barrick.

Más allá de Tambogrande y Ancash

Los dos casos anteriores son sintomáticos de los conflictos generados por la inversión minera en Perú. El gobierno canadiense ha apoyado consistentemente los intereses económicos de sus connacionales y se ha aliado con políticos peruanos dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para defender las inversiones canadienses. Alan García, por ejemplo, ha demostrado ser un gran activo canadiense para los inversionistas extranjeros. En un discurso ante la Cámara de Comercio Canadá-Perú, la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Helena Guerguis, hizo oídos sordos del oscuro récord de derechos humanos de este país y lo describió como un aliado amigable a la inversión extranjera. "Bajo la presidencia del presidente Alan García", dijo, "Perú ha mostrado una gran determinación para desarrollar mecanismos de gobernanza más fuertes y para abrirle la puerta al comercio y la inversión" (Guergis, 2007). Estos aspectos del "liderazgo" de García han sido presumidos por todos lados ante el capital extranjero. García se ha convertido en un aliado confiable de la inversión canadiense, y firmó en 2008 un Tratado de Libre Comercio que ha intensificado el proceso de apertura de distintos sectores al capital extranjero —como dijimos, en el período 2006-2010 se duplicó el área del país cubierta por concesiones mineras, hasta llegar al 16,7 por ciento del territorio—. Tan sólo en 2010 el gobierno peruano recibió siete mil solicitudes de permisos de exploración de 150 compañías diferentes (Páez, 2009; Salazar, 2010a; *ABC*, 07/02/2011).

García continuó con la política de sus predecesores y no aumentó las regalías ni implementó el prometido impuesto progresivo a las ganancias en el sector minero. Como dijimos antes, lo que hizo fue establecer un pago voluntario. La consecuencia de esta generosidad financiera hacia los grandes inversionistas fue enteramente predecible y demuestra lo absurdo del discurso de las mineras sobre las contribuciones financieras al desarrollo de los países pobres. A pesar del

boom mundial de los minerales, el impuesto voluntario recaudó unos patéticos 638 millones de dólares para el final de 2010, mientras que los ingresos netos de las cinco mineras más grandes en el país, entre 2005 y 2010 (incluyendo a Barrick), fueron de 20 mil millones. Durante ese mismo período, sólo el 12 por ciento de las ganancias de la industria fueron a pagos de impuestos y regalías. Lo absurdo de las fantasías neoliberales de García y las mineras canadienses se expresa bien en que en la región de Cajamarca, uno de los principales destinos para la inversión minera durante el período de mayor *boom*, la pobreza aumentó durante esos años (Stauffer y Cespedes, 2011; Páez, 2010).

García no ha tenido empacho en reprimir a los opositores a los proyectos mineros, lo que le ha granjeado un apoyo todavía mayor por parte del gobierno canadiense. En el que posiblemente haya sido el episodio más ignominioso de su gobierno, envió a principios de junio de 2009 a las fuerzas de seguridad a destruir un bloqueo en la región indígena de Bagua, en el norte de Perú. El bloqueo fue una respuesta a la firma del TLC que permitía el desarrollo de proyectos mineros, petroleros y madereros en el 70 por ciento de la selva Amazónica sin el consentimiento de los habitantes indígenas. Las fuerzas del orden dispararon contra la multitud, asesinaron a varias personas e hirieron a más de 200, varios policías murieron durante la confrontación. Como dice el periodista David Hills,

> El conflicto en el norte de Perú estalló luego de que los indígenas Awajúns y Wampis protestaran pacíficamente contra una serie de leyes que buscaban amoldarse al nuevo acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos y que facilitaban, entre otras cosas, la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Tras el bloqueo de una carretera cerca del pueblo de Bagua —y el acuerdo alcanzado el día anterior de que los manifestantes se retirarían y se irían a casa— temprano en la mañana del 5 de junio la policía rodeó el lugar y empezó a disparar. En el conflicto murieron diez policías, cinco civiles indígenas y otros cinco no indígenas; 200 personas

fueron heridas —de las cuales al menos 80 por bala— y, en otras partes de la región de Bagua, 11 policías fueron asesinados luego de ser tomados como rehenes (Hill, D., 2014).

El TLC entre Canadá y Perú fue ratificado por el gobierno de Harper apenas unos pocos días después de esta masacre, sin mención alguna de la violenta represión en Perú (Mining Watch, 2009-10; Páez, 2009; Zibechi, 2010a). Para el gobierno canadiense, el ataque contra docenas de manifestantes indígenas ni siquiera se puede comparar con el nuevo tratado comercial que, en las palabras del ministro de Comercio, Stockwell Day, "abrirá nuevas puertas en sectores clave como las industrias extractivas, la manufactura, la agricultura y los servicios financieros"[147].

En agosto del siguiente año, los pueblos indígenas awajún y wampis emitieron declaraciones exigiendo que Dorato Resources, una empresa de Vancouver, saliera de sus territorios ancestrales. Dorato recibió su concesión en estos territorios y el permiso ambiental para comenzar la explotación a pesar de no haber consultado a las comunidades indígenas. Pero los awajún y los wampis no sólo están peleando contra Dorato. Iamgold también opera en sus territorios sin su permiso, y de hecho sin haber siquiera haber obtenido el permiso del gobierno peruano, que en 2009 declaró que la compañía no había solicitado una licencia gubernamental y que, por tanto, sus operaciones eran "ilegales"[148].

Durante la primavera de 2010, los mineros artesanales de Chala, en el sur peruano, dirigidos por la Federación Nacional de Mineros Artesanales de Perú, bloquearon carreteras en oposición a la decisión del gobierno de liberar territorios a la explotación de los inversionistas extranjeros. El Estado respondió con una dura represión: la policía abrió fuego y mató a cinco manifestantes (Escobar, 2010). Las fuerzas

147 Stockwell Day, citado en FAIT (2009g).

148 Funcionario del gobierno peruano citado en Mining Watch (2009-10).

de seguridad lanzaron otro ataque contra los mineros artesanales en los últimos días de la presidencia de García, en febrero de 2011. Diecinueve lechos de ríos fueron dinamitados, lo que provocó protestas en todo el país en las que participaron unos 15 mil mineros. La amplitud de las protestas obligó al gobierno a dar un paso atrás y crear un registro nacional de mineros (Mapstone, 2011).

Para mostrar su compromiso con los inversionistas extranjeros, García puso la mirada en la región sureña de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. En junio de 2011 las fuerzas del orden fueron enviadas para terminar con un bloqueo que llevaba ya un mes contra Bear Creek y que había colapsado toda actividad económica en los alrededores. Los manifestantes exigían que se pusiera fin a toda práctica minera en la región, pero el presidente de la compañía de Vancouver respondió que la comunidad de hecho estaba a favor del desarrollo y que los manifestantes eran en realidad agitadores que venían de fuera y que "no sólo son antiminería" sino que "han absorbido el tono de la resistencia aymara a la presencia del Estado y de la inversión extranjera y peruana". Durante este tiempo, la compañía se reunió con funcionarios de la embajada canadiense "en numerosas ocasiones", de acuerdo con esos mismos funcionarios. El ataque policial inicial, sin embargo, no terminó con las protestas, sino que las intensificó y hasta empezó a atraer a manifestantes de Bolivia, de acuerdo con un reporte de la embajada canadiense. Las fuerzas de seguridad respondieron otra vez briendo fuego sobre los manifestantes en un aeropuerto local, en donde murieron cuatro de ellos. Pero esto desató protestas todavía más masivas, y el gobierno se vio obligado a revocarle el permiso a Bear Creek (*Agence France-Presse*, 26/05/2011; *Al Jazeera*, 25/06/2011)[149].

García no sólo tomó decisiones que agudizaron el conflicto, también descartó cualquier esfuerzo moderado para ponerle límites a la explotación de recursos y canalizar la oposición indígena. En junio

149 El Director Ejecutivo (CEO) de Bear Creek Mining es citado en Allan (2011); cita recogida también en Embajada de Canadá (s/f a).

de 2010, por ejemplo, el Congreso peruano aprobó una ley tras el enfrentamiento en Bagua que adoptaba partes de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero García bloqueó la ley, arguyendo con la hipocresía que uno sólo puede esperar de un cliente del imperio, que "Perú es para los peruanos […] y para que haya democracia, no podemos ponerle límites a las futuras legislaturas o gobiernos" (Carroll, 2010). García, por supuesto, ya había firmado el TLC con Canadá, cuyo principal objetivo era garantizar los derechos de las multinacionales canadienses y limitar la capacidad de los gobiernos de darle prioridad a las cuestiones sociales y ambientales.

La falsa promesa de Humala

El desagrado público con la masacre de Bagua y la militarización neoliberal bajo Fujimori —un proceso que, en las regiones mineras al menos, continuó con Toledo y García— fueron las principales razones por las que Ollanta Humala ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales de abril de 2011. Humala adoptó un programa de centro izquierda, y modeló su campaña en la del Partido de los Trabajadores de Brasil, ofreciendo una alternativa populista y nacionalista a la *doxa* neoliberal. Ya en el gobierno, sin embargo, inmediatamente se hizo evidente su compromiso con el programa de sus predecesores en el sector minero.

"En los dos primeros años del régimen de Humala", dice el investigador en estudios del desarrollo Jan Lust, "19 personas han muerto como consecuencia de la represión a las protestas sociales contra el capital minero (transnacional)" (Lust, 2014: 209). Lust afirma que

> la actitud del gobierno de Humala hacia las protestas antiminería es idéntica a la de gobiernos previos. Se declara el estado de emergencia en las regiones que sostienen una persistente lucha contra el capital extractivista, se criminaliza a los manifestantes, y

> los líderes son acusados de adherir a una ideología "arcaica", es decir, progresiva y de izquierda (Lust, *op. cit.*: 211).

El gobierno de Humala no ha tenido empacho en aplicar el Decreto 1085, introducido por Alan García. Este decreto autoriza la intervención de las fuerzas armadas para controlar el orden interno y califica a los manifestantes como "grupos hostiles", al tiempo que las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas represivas del Estado son juzgadas por tribunales militares, fuera del escrutinio público civil (Zibechi, 2013b).

Humala ganó la presidencia con un mensaje de reforma política y social y de desarrollo sustentable e inclusivo. Pero desde el primer año de su gobierno, la desviación de estas promesas era ya evidente (Duárez Mendoza, 2012: 186). La presión sobre Humala por parte del capital extranjero no se hizo esperar. Durante su campaña electoral, una de las principales exigencias de los grupos económicos más poderosos del país y de los representantes del capital extranjero era que Humala tenía que respetar las inversiones del capital minero transnacional (*La Jornada*, 08/04/2013). El "encargado en jefe de riesgos" de una consultora que le proporciona servicios a la industria minera expresa bien dónde yace la principal amenaza al capital minero en Perú. Aunque Humala "ha hecho de Perú un destino favorable para las inversiones en el sector minero y extractivo, en el nivel local, los proyectos mineros están en riesgo de ser interrumpidos, atrasados o cancelados debido a la oposición de la comunidad" (Dumbrille, 2012: 4).

El apoyo de Huamala a la industria explotadora de los recursos naturales no hizo sino agudizar los conflictos entre las compañías y las comunidades. El año 2012 fue uno de los de mayor conflicto social en Perú. En ese año, el primero de Humala en el gobierno, las protestas contra las mineras generaron dos cambios en el gabinete. La dinámica de las luchas socioecológicas ha estado condicionada por las mismas configuraciones de poder económico político que bajo los regímenes de García y Toledo. La megaminería del capital transnacional sigue

siendo uno de los principales motores de acumulación de capital. La resistencia campesina, a menudo indígena, estalla intermitentemente y el control estratégico del territorio es uno de los principales objetivos de estos movimientos. También es claro que el carácter localizado y fragmentario de las protestas antiminería está determinado, por un lado, por la incapacidad de construir una estructura organizativa estable en el nivel nacional, y, por el otro, porque han emergido nuevas formas de coordinación descentralizada y antiburocrática que no pueden ser fácilmente cooptadas o reprimidas por el Estado (Zibechi, 2013b).

En 2012, el Ombudsman registró 167 conflictos, de los cuales 123 fueron socioambientales y sólo siete laborales. Los movimientos indígenas y campesinos en defensa del territorio, el agua y contra las compañías mineras, son la punta de lanza de la resistencia al neoliberalismo y el imperialismo en Perú. Sus formas de lucha incluyen frentes de defensa local, la organización de referéndums municipales o provinciales sobre los proyectos mineros, marchas, huelgas y bloqueos carreteros. Una de las tácticas más interesantes es la renovación de las "rondas campesinas" en el nuevo contexto de la lucha antiminería. Éstas eran organizaciones de autodefensa de las comunidades indígenas y campesinas durante los años setenta, diseñadas para luchar contra el abigeato. Durante la guerra civil, jugaron un rol defensivo contra las incursiones tanto del ejército como de Sendero Luminoso (*ibíd.*). El sociólogo Lewis Taylor, sobre el papel de las rondas campesinas en las movilizaciones antiminería del Valle de Condebamba en la provincia de San Marcos, dice:

> La "memoria" histórica encarnada en el legado de las rondas campesinas jugó un rol muy importante en echar a andar el movimiento y permitió la rápida construcción de apoyo en torno a él. El punto crucial es que las patrullas de vigilantes creadas durante los años ochenta habían mantenido una amplia legitimidad entre la población rural. Aunque las rondas habían dejado de existir hacia el final de la década, o en algunos casos operaban clandestinamente

> fuera del radar del ejército y la guerrilla, seguían siendo vistos con una mezcla de nostalgia y orgullo, al haber emergido como una auténtica solución campesina a los problemas de los campesinos. Un modelo para la organización al nivel del pueblo estaba disponible, un modelo que tenía el apoyo de la gente y estaba basado en tradiciones comunitarias bien enraizadas y de discusión pública en asambleas abiertas (Taylor, 2011: 424).

Como hemos dicho, las protestas durante el gobierno de Humala a menudo han implicado confrontaciones directas con las corporaciones mineras canadienses. Hudbay Minerals, cuyas fuerzas de seguridad han aplicado extrema violencia contra opositores en Guatemala, incluyendo el asesinato, fue el blanco de una ola de protesta indígena a principios de 2012 que obligó a Humala, en un intento de contener la explosión social, a pedirle a la compañía que suspendiera operaciones a raíz de una revisión ambiental (Emery, 2012). Fortuna Silver (en México, opositores a las operaciones de esta compañía han sido asesinados) también fue objeto de bloqueos carreteros contra su mina en Caylloma (Bickis, 2012b: B2). En septiembre de 2012, Talisman se retiró de sus actividades exploratorias de petróleo en el territorio Achuar de la Amazonia ante una estridente oposición indígena, a pesar de que, según la compañía, había consultado y recibido el permiso de las comunidades locales. En las palabras de un líder indígena:

> Hemos peleado duro y por mucho tiempo contra las perforaciones de Talisman en nuestro territorio, pues sabemos del impacto ambiental negativo que la extracción de petróleo tiene en el mundo. Ahora que Talisman se va, podemos enfocarnos en alcanzar nuestra propia visión del desarrollo y dejar un territorio saludable para las generaciones venideras[150].

150 Líder indígena citado en Amazon Watch (2012).

Ese mismo mes, una persona fue asesinada y varias fueron heridas cuando la policía atacó un bloqueo contra la mina Pierina, de Barrick Gold, en el norte de Perú. Los opositores a Barrick protestaban contra la creciente escasez de agua vinculada a las actividades de la mina (*Agencia Reuters*, 20/09/2012). En 2013, el Pueblo Indígena Matsés se empezó a movilizar contra Pacific Rubiales, que extrae petróleo de sus territorios en la Amazonia (Vybiral, 2013).

Candente Copper y Cañarico Norte

Una de las luchas populares más emblemáticas contra el capital minero canadiense en la época de Humala ha sido la del proyecto de Candente Copper, Cañarico Norte. La comunidad campesina San Juan de Kañaris, en los Andes del norte en Lambayeque, se ha opuesto a este proyecto y votó contra él en un referéndum de octubre de 2012, lo que provocó la caída del precio de las acciones de la compañía. El 96 por ciento de la superficie concedida a Candente para explotación está en el distrito de San Juan de Kañaris. En éste hay unos 15 mil habitantes, de los cuales dos tercios hablan quechua (Zibechi, 2013c). Candente ignoró el voto, arguyendo que no era vinculante. El referéndum fue organizado con la presencia de la policía nacional, la Conacami, la Red Muqui y el Comando Unitario de Lucha de Lambayeque. El presidente de la comunidad, Cristóbal Barrios, le pidió a la compañía que respetara la voluntad de la gente tal y como se había expresado a través del voto secreto en un referéndum popular (Martínez Alier, 2013). La negativa de la compañía a plegarse a las exigencias de la comunidad no provocó ninguna reacción por parte del gobierno, lo que llevó a una ola de protestas, bloqueos carreteros y la detención de tres ingenieros geológicos por los manifestantes. Las protestas se extendieron hasta 2013, y varios de los manifestantes fueron heridos por la policía —heridos de bala—, cuando en enero de 2012 intentaron entrar a las instalaciones de la mina para clausurar sus operaciones. En mayo de 2013, Candente tuvo que suspender temporalmente sus operaciones

para que se calmara la protesta (Mulvany, 2012; MAC, 2012; *Associated Press*, 25/01/2013; *La República*, 18/05/2013).

De acuerdo con el sociólogo y periodista uruguayo Raúl Zibechi, la lucha contra Candente Copper ha tenido tres grandes rasgos, que representan las tendencias generales de las protestas antiminería en Perú. En primer lugar, dice Zibechi, el referéndum se ha convertido en un método de lucha. Su utilización tiene que ver menos con el sistema electoral o con el reconocimiento de la comunidad por el Estado, que con una demostración de cohesión comunitaria ante la presencia de la compañía minera y el aparato coercitivo del Estado. En segundo lugar, dice el sociólogo y periodista, la lucha contra Candente reveló nuevas formas de acción colectiva en las regiones mineras. Otra vez, las rondas campesinas jugaron un papel importante, cuando comités rotativos de campesinos acamparon en el lago adyacente al campamento minero, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar —resistiendo frente a las condiciones inclementes del clima y ante la posibilidad de una violenta represión estatal—. En tercer lugar, siguiendo todavía a Zibechi, la resistencia indígena de las regiones mineras ha nutrido, durante los últimos 15 años, una capa coherente de líderes jóvenes, con una alta presencia de mujeres y con vínculos sólidos con los movimientos locales (Zibechi, 2013c).

El siguiente comunicado de la resistencia a Candente Copper transmite bien la profunda dimensión ideológica presente en este tipo de movimientos:

> Exigimos, como condición para el diálogo, la salida inmediata de la policía de nuestros territorios, ya que de acuerdo con nuestro derecho comunal, la seguridad está garantizada por las rondas campesinas y no hay, por tanto, justificación para la presencia de una fuerza de seguridad tan grande y tan fuertemente armada […]. Somos autoridades aborígenes, comunales y de autodefensa, y no estamos dispuestas a abandonar los principios ni los derechos de nuestros pueblos, ni permitiremos la subordinación al

colonialismo, cuyo objetivo es romper con nuestras estructuras auténticas y naturales como pueblos indígenas (Zibechi, 2013b).

Diplomacia mineral canadiense

La embajada de Canadá en Lima y el despacho de Relaciones Exteriores en Ottawa siguen de cerca los distintos movimientos opositores a los que se enfrenta el capital canadiense. Trabajan día y noche, en público y tras bambalinas, para proteger su "derecho" a extraer ganancias del subsuelo peruano independientemente de los costos sociales y ambientales. Varios ministros de Estado canadienses han visitado Perú tras la firma del TLC en 2008, incluyendo una misión comercial presidida por Diane Ablonczy en noviembre de 2012 en la que participaron 16 compañías y el despacho corporativo Bay Street (Foster, 2012: 16; FAIT, 2012f). El ministro de Relaciones Exteriores John Baird viajó a Perú en febrero de 2013 para discutir inversiones con Humala y se encontró con los directivos de varias compañías canadienses (FAIT, 2013a).

La Embajada funciona como los ojos, oídos y voz de Ottawa en el terreno, y recientemente ha adoptado un papel más abiertamente activo. Esto no es una característica exclusiva del gobierno conservador. Durante la administración del liberal Paul Martin, la Embajada se alió con la diplomacia estadounidense para desarrollar una estrategia acerca de cómo enfrentarse a la cada vez más grande oposición a la minería en Perú. De acuerdo con un reporte de la Embajada estadounidense de agosto de 2005, publicado por Wikileaks, los "embajadores estadounidense y canadiense se reunieron [...] con los representantes de varias compañías mineras internacionales para estudiar las dificultades de operar en Perú y coordinar esfuerzos para mejorar el clima de inversión". El reporte continúa: "El consenso entre las compañías es que las fuerzas radicales (el Partido Comunista del Perú – Patria Roja, los narcotraficantes y los ronderos) están cada vez más activos en las comunidades rurales, y han hecho de los proyectos mineros su blanco". El reporte sugiere que esta no fue la primera reunión organizada

por las embajadas. Un ejecutivo minero supuestamente "sugirió que las embajadas le pidieran a la Iglesia católica que rotara a los obispos en estas regiones". Una sugerencia que "los embajadores acordaron considerar [...] pero necesitaban ejemplos específicos de curas antiminería que estuvieran involucrados en actividades inapropiadas" (*The Guardian*, 31/01/2011).

El reporte también menciona el papel que juegan las ONG en la oposición a la minería y en los esfuerzos de movilización comunitaria, lo que arroja luz sobre la pronta decisión del gobierno canadiense de terminar con el financiamiento a las ONG que le parecían demasiado cercanas a los críticos de la minería o que apoyaban a estos con asesoría legal. Por ejemplo, la Canadian Lutheran World Relief, que había sido apoyada por la Agencia de Desarrollo Internacional para su trabajo en Perú, recibió el mensaje de que dejaría de recibir dinero del gobierno si no rompía sus relaciones con las organizaciones antiminería (Bebbington *et al*., 2007).

La respuesta de la embajada de Canadá a los bloqueos de 2010 contra la mina de Antamina, que es propiedad parcial de la canadiense Teck Resources, fue publicar un artículo en su página de internet en el que valoraba el compromiso de la mina con la responsabilidad social (Keenan, 2010: 29-31).

La Embajada también vigiló de cerca las elecciones de 2010, y le reportó a Ottawa cómo le fue a la izquierda, especialmente a los políticos que relacionaba con los movimientos antimineros. Un *Situation Report* de la misión diplomática incluye un análisis detallado acerca de si la victoria de la candidata a alcalde en Lima, Susana Villarán, constituía un giro a la izquierda de la política nacional, y las implicaciones de la misma en las elecciones presidenciales del año siguiente. El análisis de la Embajada, correcto en vista de la victoria de Humala, era que no constituía tal cosa (Sabourin, 2010).

La industria minera canadiense ha intervenido activamente en la política peruana para defender sus intereses. Tensó los arcos en los últimos momentos de la presidencia de Alan García cuando resurgió

el debate sobre impuestos más altos tras un período de descontento social, hizo *lobby* por doquier para sepultar la discusión, y volvió a repetir la fórmula durante la campaña presidencial de 2011. A lo largo de esta campaña, la industria amenazó con desinvertir si "las promesas populistas" de algunos de los candidatos se traducían en un aumento importante de las regalías e impuestos (Stauffer y Cespedes, 2011; Salazar, 2010b; *Reuters*, 09/03/2011). Una buena muestra de su influencia sobre los actores políticos locales fue que el candidato presidencial Alejandro Toledo viajó a Vancouver en diciembre de 2010 para encontrarse con ejecutivos mineros para asegurarles que, si resultaba electo, "voy a llamarlos a todos a que se sienten a la mesa y vamos a establecer las reglas del juego, y una vez que hayamos hecho eso, no habrá sorpresas" (Donville y Emery, 2010). Cuando, durante la campaña, Humala —que tenía cierta reputación como izquierdista radical entre los ejecutivos mineros— alcanzó el primer lugar, el futuro Presidente le prometió a la industria que "siempre estaremos abiertos al diálogo [...]. Prometemos que mantendremos la prudencia macroeconómica y una posición fiscal balanceada" (*Agencia Reuters*, 03/04/2011). En ese momento de su carrera política, la actitud de Humala hacia las necesidades del capital no podía ser una sorpresa para los inversionistas, pues en una reunión con la embajada estadounidense, el futuro Presidente "dijo que radicales peligrosos y antisistema podrían amenazar la estabilidad del Estado". Agregó que él es "un nacionalista, no un izquierdista", y que sólo "representa [...] un cambio pragmático" (Embajada de Canadá, 2008).

Un área primordial en la que ha intervenido el Estado canadiense ha sido la ayuda al desarrollo. Entre los años 2002 y 2012, la Agencia de Desarrollo Internacional, a través de su proyecto PeruCan, gastó 13,8 millones CAD para liberalizar las reformas regulatorias en la industria minera peruana en beneficio de los inversionistas canadienses (DFATD, s/f). Perú es también un país emblemático de la trayectoria de la ayuda al desarrollo de los conservadores. En tanto que país de gran riqueza mineral, pero infestado de una

extendida oposición a la minería, Perú entró a la lista del programa "Countries of Focus" en 2009. Tras la elección de 2011, cuando la exigencia de reforma minera se extendió más, el gobierno de Harper elevó su intervención financiera en el sector de los recursos naturales a través del presupuesto a la ayuda al desarrollo. Ésta fue utilizada para darle apoyo financiero a un gobierno favorable a la explotación de los recursos naturales, y claramente influyó en una industria dominada por el capital canadiense. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) ha gastado más de 60 millones CAD en el sector de los recursos naturales entre 2002 y 2019, pero la mayor parte de ese gasto se ha producido a partir de 2011, lo que lo convierte en el componente más grande del total de la ayuda al desarrollo canadiense. En 2011, por ejemplo, anunció 4,9 millones CAD para "entrenamiento y desarrollo de capacidades en gestión de conflictos" en el sector extractivo, con el objetivo de promover "el diálogo en el nivel nacional, regional y local". El programa incluirá oficinas regionales, "asistencia técnica" para desarrollar herramientas que "traten con conflictos específicos" y "mesas de diálogo" (Prime Minister's Office, 2011c). Durante su visita en la primavera de 2013, en la que lo acompañaron inversionistas canadienses, Harper anunció un presupuesto de 38 millones CAD para el sector extractivo, arropado en la verborrea del desarrollo, lo que incluyó ayuda para redactar leyes regionales y regulaciones en el sector, y el establecimiento de un mecanismo para hacer evaluaciones de impacto ambiental, todo esto para "ayudar a que Perú maximice los beneficios de la explotación de sus recursos naturales" (Prime Minister's Office, 2013a). Como ha dicho Lee Berthiaume, la visita de Harper y el anuncio del financiamiento llegaron en el momento en el que más de siete mil millones CAD en proyectos mineros estaban atorados debido a las evaluaciones ambientales. El gobierno peruano buscaba desarrollar un nuevo sistema, más eficiente, que Canadá no tardó en apoyar con todos los medios necesarios (Berthiaume, 2013a).

Por supuesto, financiar un proceso de evaluación ambiental o entrenar al personal que lo llevará a cabo presupone precisamente la existencia de un sector de recursos naturales abierto a la explotación y potencialmente dominado por el capital canadiense, pero eso no es algo necesariamente aceptado por la población que vive en los territorios potencialmente explotables. El entrenamiento en "gestión de conflictos" no es nada si el Estado peruano no abre partes del país a los proyectos de las grandes compañías canadienses, con los conflictos que inevitablemente emanarán de esto. Así, en la medida en la que este programa depende de la existencia de grandes proyectos mineros, inevitablemente contribuirá a atizar los conflictos. El verdadero objetivo, no es difícil verlo, es generar una cubierta ideológica para la extracción de miles de millones de dólares de los territorios indígenas a cambio de poco más que devastación, y canalizar la ira y la militancia hacia caminos tan seguros e institucionales como inútiles.

La misma premisa subyace en la asociación entre la Agencia de Desarrollo Internacional y las compañías mineras, que fue formalmente anunciada en marzo de 2011 por el ministro de Cooperación Internacional Bev Oda. Esta "asociación" se tradujo en 27 millones CAD durante cinco años para iniciativas de responsabilidad social corporativa en África, Asia-Pacífico y América Latina. Perú fue uno de los primeros países en disfrutar los frutos de esta alianza. La Agencia de Desarrollo Internacional apoyó la muy criticada mina a cielo abierto de Barrick en Laguna Sur con un regalo de 500 mil dólares canadienses para proyectos de responsabilidad social ejecutados por World Vision. Este proyecto está ubicado en un área cercana a muchas pequeñas lagunas que surten de agua a miles de campesinos que viven en los alrededores (Arnold, 2012b). Como dijimos antes, Perú también entró en la Iniciativa Regional Andina de la Agencia de Desarrollo Internacional, que recibió cinco millones CAD para "mejorar el diálogo entre las comunidades y el sector privado" (CIDA, 2011b).

Conclusión

El futuro de Perú sigue en juego. Las comunidades, a pesar de los enormes obstáculos, mantienen su oposición contra el capital canadiense y siguen defendiendo sus tierras —no sin éxito—. La lucha, como en el resto de la región, es nadar a contracorriente. El yugo de la dependencia no se rompe fácilmente, y hay fuerzas poderosas, nacionales y extranjeras, cuyos intereses dependen de que el *statu quo* de pobreza, desposesión y destrucción ecológica se mantenga intacto. Este capítulo ha intentado transmitir las impresionantes dimensiones del reciente *boom* minero en Perú, y el rol de pivote jugado por los inversionistas canadienses y sus aliados políticos en llevar este proceso lo más lejos posible. Hemos intentado demostrar que la época neoliberal ha implicado la extensión y la intensificación de antiguos patrones históricos de dependencia de los recursos naturales. Hemos mostrado la manera precisa en la que el capital canadiense se beneficia actualmente del legado de violencia racista que las comunidades indígenas sufrieron durante la época colonial, después de la independencia y durante la Guerra Fría. Finalmente, el capítulo ha subrayado las dimensiones ecológicas específicas a la extracción capitalista actual, y la manera en la que la devastación ecológica está asociada a la estrategia geopolítica canadiense, ejecutada con el apoyo de la diplomacia oficial. En todos estos sentidos, es claro que Perú es uno de los casos más dramáticos de las tendencias más generales del nuevo imperialismo canadiense.

Las venas de ecuador

Luis Macas ha luchado durante décadas contra el racismo colonial sufrido por los pueblos indígenas y contra la explotación de las clases trabajadoras por la burguesía. A mediados de julio de 2010, cuando nos encontramos en Quito con este expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Nueva Patria, intercambiamos reflexiones acerca del gobierno de Rafael Correa. "Desde mi punto de vista" nos dijo Macas,

> éste no es un gobierno socialista, ni siquiera de izquierda. Es un gobierno populista, cuyo objetivo es cambiar el modelo en ciertos puntos, a través de reformas modestas, para que el modelo como un todo siga avanzando. Los cambios fundamentales, los cambios radicales que necesita este país, no van a llegar con este gobierno[151].

Correa llegó a la presidencia en la segunda ronda de la elección de 2006. Cuando ésta tuvo lugar, el movimiento indígena —de lejos la fuerza popular más importante en Ecuador desde hace varias décadas[152]— estaba apenas recuperándose de la grave derrota que sufrió

151 Entrevista de los autores con Luis Macas (Quito, 14 de julio de 2010).

152 Ver, entre otros, Becker (2008 y 2012).

como consecuencia de su apoyo y participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005)[153].

La iniciativa de Correa de convocar a una Asamblea Constituyente le dio una gran popularidad entre amplios sectores de la sociedad durante los años 2007 y 2008. Una nueva Constitución progresista recibió la aprobación del 64 por ciento de los votantes en el referéndum de septiembre de 2008, y Correa fue reelecto —esta vez en la primera ronda— con el 52 por ciento del voto popular en abril de 2009. La luna de miel se terminó poco después, cuando se hizo claro que la continuidad neoliberal no encajaba bien con el eslogan del "socialismo del siglo XXI" o con la "Revolución Ciudadana". Así, durante los siguientes años, el Presidente dedicaría sus esfuerzos a alinear la orientación cada vez más extractivista de la economía ecuatoriana con una retórica radical.

"Una de las paradojas recurrentes de la historia política de la burguesía", dice Catherine Conaghan sobre América Latina, "yace en su capacidad para oponerse hasta al más tibio reformismo. Políticas que no dañan directamente los intereses materiales de la clase dominante son respondidas con una intensidad fuera de proporción respecto al asunto en cuestión" (Conaghan, 1988: 6). La incongruencia entre la amenaza real de reforma y la hostilidad de la burguesía puede ser en parte explicada por "las impredecibles consecuencias políticas", dice Conaghan:

> Un giro político puede cambiar al diablo conocido por uno por conocer. Con este principio en mente, la comunidad empresarial tiende a oponerse a cualquier tipo de cambio político que altere el ambiente que ya dominan (*ibíd.*).

153 Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), participó en las elecciones de 2002 con un programa antineoliberal, pero capituló inmediatamente ante las prescripciones neoliberales del FMI una vez que tomó posesión como Presidente. La Conaie apoyó a Gutiérrez e incluso tuvo varios ministros en su primer gabinete, aunque a los pocos meses se oficializó la ruptura entre el movimiento indígena y el sector abiertamente neoliberal del gobierno, cuando los primeros renunciaron.

La fórmula de Conaghan explica mucho por sí sola, desde la dinámica de la burguesía doméstica hasta la reacción de las potencias imperialistas cuando enfrentan desafíos reformistas a sus intereses inmediatos. No es sorprendente, por tanto, que del mismo modo en el que la oposición más bien tibia al estatus neoliberal representada por Manuel Zelaya en Honduras haya sido suficiente para provocar un golpe de Estado en 2009, las consignas radicales de Correa y su antigua conexión con los movimientos sociales sea vista como una amenaza, tanto por los capitalistas ecuatorianos como por el imperialismo.

Por tanto, Ecuador se convirtió en un país pivote para la estrategia geopolítica canadiense a raíz de la elección de Correa. En los grandes medios de comunicación, Ecuador es a menudo puesto al lado de Venezuela y Bolivia como parte de la marea roja andina opuesta a la hegemonía del imperialismo. Este es, en gran medida, un diagnóstico equivocado: Ecuador no es tan grande ni políticamente influyente como Venezuela, el gobierno de Correa no ha nacionalizado los recursos naturales (ni siquiera parcialmente, como en Bolivia), y sus políticas sociales redistributivas son muy modestas cuando se les compara con las venezolanas.

En este contexto, los poderosos movimientos sociales ecuatorianos, muchos de los cuales han enfocado buena parte de sus baterías contra las petroleras y mineras de Canadá, son vistos como un obstáculo por los intereses económicos y geopolíticos de este país. De particular importancia para el Estado canadiense es la amenaza a las grandes multinacionales con grandes inversiones en el país (Privy Council Office, 2006). El gobierno de Correa, que llegó inicialmente a la presidencia con el apoyo de muchos movimientos sociales, es visto por los estrategas canadienses como ambivalente y poco firme ante el proyecto neoliberal imperial, especialmente si se le compara con sus vecinos en Perú y Colombia, que son mucho más obedientes. Las recientes alianzas estratégicas que Ecuador ha hecho con Venezuela y Bolivia son también vistas con preocupación.

El capital canadiense tiene mucho que perder en Ecuador. Sus intereses económicos están presentes en muchas ramas, y el nivel de importancia política que le ha otorgado el Estado canadiense sin duda refleja este hecho. Éste ha intentado sistemáticamente limitar cualquier giro hacia la izquierda —aparte de las florituras retóricas— del gobierno de Correa. La industria minera canadiense es la más importante en Ecuador, un país que depende de las exportaciones de recursos naturales, y, por tanto, las compañías canadienses son uno de los principales inversionistas extranjeros. Hacia el final de los años noventa y durante la primera década del nuevo siglo, se extendieron los intereses canadienses con más de 30 propiedades mineras en 2008. Con todo, la inversión disminuyó ante el aumento en la resistencia popular en los años 2000 y tras la falta de certeza durante los primeros momentos de la presidencia de Correa (Wagner, 2008). Una petrolera canadiense estuvo entre las que adquirieron contratos de exploración con el Estado ecuatoriano en febrero de 2012 (*El Diario* [Ecuador], 05/02/2012). La mayoría de las corporaciones mineras en Ecuador son *juniors*, es decir, exploradores que deciden si el ambiente general —geológico, político y económico— es apropiado para hacer negocios. Al final, la mayoría de los *juniors* son incapaces de encontrar depósitos lo suficientemente rentables como para atraer a un *major* que los compre y tenga el suficiente dinero para comenzar la extracción y la producción. Sin embargo, los pocos *juniors* que tienen éxito obtienen enormes ganancias (Sacher y Acosta, 2012: 30-31). En 2010, Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) estimó que había un total acumulado de 1.500 millones CAD invertidos en el sector minero ecuatoriano, con otros cuatro mil millones potenciales durante la siguiente década si Canadá lograba canalizar el proyecto de desarrollo ecuatoriano hacia sus propios intereses (Embajada de Canadá, 2010b; Council for Responsible Mining, 2009). Un análisis de Relaciones Exteriores sobre el contexto político-económico ecuatoriano desde 2010 señalaba:

> Ecuador tiene un potencial de explotación de sus recursos minerales similar al de sus vecinos Perú, Chile y Colombia, pero no tiene un industria minera bien desarrollada […] hay una oposición importante a la minería por parte de varios grupos indígenas (particularmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) (Kuffner, 2010).

Por tanto, en el *Country Strategy* se lee que la embajada canadiense en Quito constantemente subraya que la búsqueda de "comercio e inversión" y de mayores "oportunidades de inversión y de negocios" es uno de "sus principales intereses en Ecuador" (FAIT, 2008b).

La opinión canadiense sobre Correa tiene que ver con que se le asociaba con los activistas antiminería (un vínculo que se desvaneció rápidamente cuando llegó a la presidencia), la suspensión de actividades que su gobierno emitió contra las compañías canadienses EcuaCorriente y Ascendant Copper debido a la violencia y a la fuerte oposición local a sus proyectos, y, en general, con el tono reformista de su campaña electoral respecto a los proyectos de explotación de recursos naturales. A pesar de la posición firme que los movimientos sociales y hasta algunos miembros del gobierno de Correa adoptaron hacia el capital canadiense, esta corriente ha sido prácticamente derrotada dentro del gabinete debido en parte a la intervención tras bambalinas del gobierno de Canadá. En efecto, Correa ha estado dispuesto a sentarse y discutir varias veces con los ejecutivos de las empresas, con funcionarios de la Embajada y con ministros canadienses. Sin embargo, sigue sin ser *el* hombre de confianza. Sus relaciones ocasionalmente cercanas con sectores de la izquierda ecuatoriana y sus políticas redistributivas —modestas pero populares— son razones para preocuparse. La cercanía entre Correa y Hugo Chávez o Nicolás Maduro, y su participación en la Alianza Bolivariana de Pueblos de Nuestra América (ALBA), su impago de 3.900 millones de dólares de deuda externa, la renegociación de contratos con multinacionales petroleras que le han otorgado al Estado una mayor proporción de

los ingresos, y su enfrentamiento periódico con Estados Unidos en cuestiones de política internacional —como el hecho de ofrecerle asilo al fundador de WikiLeaks Julian Assange y (brevemente) a Edward Snowden— no son señales de dócil sumisión ante las grandes potencias (*Press Association*, 2013; *Democracy Now*, 09/07/2013). Lo importante es que, a pesar de los conflictos y la belicosidad de su gobierno contra los movimientos indígenas o activistas ecologistas, el hecho de que su país no se haya postrado enteramente ante los intereses mineros canadienses ha significado que Canadá no le tenga confianza, y esa desconfianza ha determinado la política canadiense en Ecuador[154].

Canadá ha resistido las tentativas de los movimientos sociales y del gobierno ecuatoriano de adoptar medidas ambientales firmes, límites a la inversión extranjera en el sector de los recursos naturales o un régimen fiscal y de regalías menos laxo. Desde la primera elección de Correa hasta que se aprobó una nueva ley minera, sólo dos años después, los funcionarios de la Embajada, ministros del gabinete y representantes de Relaciones Exteriores y de Recursos Naturales Canadá (NRCAN), se reunieron incontables veces con funcionarios ecuatorianos, incluyendo a Correa y a varios ministros. Esta ofensiva frontal de la Embajada fue halagada por la industria minera. Un ejecutivo de EcuaCorriente, Ian Harris, dijo en 2008 que "la embajada canadiense ha trabajado incansablemente para generar cambios en la política minera" (Harris, I., 2008: 4). "IAMGold se beneficia del poder y la influencia diplomática" del gobierno y la embajada canadiense en Ecuador y en la región andina, le dijo un ejecutivo de esta empresa a la prensa de negocios internacional. "Tenemos acceso, si lo necesitamos, al rápido apoyo diplomático canadiense en cuestiones de gestión en países como Ecuador, Perú y Colombia", lo que es extremadamente importante, dice él, porque "los grupos antiminería, de derechos indígenas y los

154 La preocupación canadiense por las relaciones de Correa con Chávez aparece en documentos como el de Pasquel (2009).

ambientalistas están mejor organizados, bien financiados y a menudo son muy belicosos" (Dube, 2010).

La campaña canadiense, coordinada por la Embajada en Quito, respaldada por Ottawa y con la activa participación de las compañías, influyó en el debate nacional sobre el futuro del desarrollo ecuatoriano y la justicia ambiental para hacer pasar los intereses de los inversionistas canadienses por los de los propios ecuatorianos y en aislar las voces que exigían estrategias de desarrollo alternas. Durante todo este proceso, la estrategia canadiense hizo del concepto imperialista liberal de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) su piedra de toque, y lo utilizó como excusa en su intento de modificar para su beneficio la política del gobierno ecuatoriano hacia los recursos naturales. Pero esta no fue la única forma de intervención. Como discutiremos a detalle en el capítulo "Un ejercicio de cinismo" de este libro, el gobierno canadiense se dedicó a repartir dinero en Ecuador a raíz de la victoria de Correa y de la redacción de una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente democráticamente electa. En palabras de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT), este flujo de recursos se dirigió hacia "la promoción de la democracia, el pluralismo y los derechos humanos" (FAIT, 2008b). La intervención canadiense está sustentada en la idea de que la elección de Correa y la adopción de una nueva Constitución suponen una amenaza a la democracia ecuatoriana. En la lógica del imperialismo canadiense, cualquier gobierno que no se someta enteramente a las normas del neoliberalismo, o que busque extender, aunque sea de la manera más tibia, los parámetros de la democracia liberal, es por definición una amenaza a la democracia misma.

Las arenas movedizas del gobierno de Correa

Para poder entender los conflictos que rodean a los proyectos mineros en Ecuador, la manera en la que el capital y la diplomacia canadiense se han involucrado en éstos, y, finalmente, la actitud que el gobierno de Correa ha adoptado hacia los mismos y hacia los intereses

del capital multinacional, es importante comenzar con el análisis de las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado durante los últimos años.

En abril de 2005, un estallido social de resentimiento y agitación en las calles de la capital obligó a que el presidente Gutiérrez, cubierto en el oprobio tras acusaciones de corrupción, dejara el poder. Las protestas canalizaron la politización de la clase media urbana antipartido, antineoliberal y anticorrupción, pero fueron incapaces de articular un proyecto político coherente propio (Ramírez Gallegos, 2020: 28-32). Las revueltas de abril de 2005 no implicaron una rearticulación consistente del poder o la capacidad organizativa del movimiento de masas —el movimiento indígena estuvo casi completamente ausente de la escena—, pero sí encapsularon una expresión espontánea de desdén hacia la élite política y de enojo visceral con la reestructuración neoliberal de la economía.

Este es el vacío que la nueva coalición de Correa, Alianza País (AP), intentó llenar durante la campaña electoral de 2006. Su principal adversario, el magnate bananero Álvaro Noboa, obtuvo más votos durante la primera vuelta, pero era tan odiado por los distintos sectores populares que en la segunda vuelta la AP cristalizó el voto castigo hacia Noboa y Correa ganó la elección. El equipo de campaña de la AP presentó a Correa como un *outsider* heterodoxo, un economista antineoliberal que —por su trabajo misionario de joven— hablaba quechua y estaba familiarizado con las necesidades y aspiraciones de los indígenas, los pobres y los campesinos. La Asamblea Constituyente de 2007-2008 cementó la temprana popularidad del Presidente, pues el país se polarizó entre un campo de derecha dura dirigido por Noboa, y uno progresista liderado por Correa. Dentro de la Asamblea Constituyente, como resultado de esta profunda división social, se formó un "megabloque" de la izquierda en torno a Correa, que incluía a Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático (MPD, maoísta) e Izquierda Democrática, siempre bajo la dirección hegemónica de la AP (Ramírez Gallegos, *op. cit.*: 38-39).

Como hemos dicho, la nueva Constitución que emergió de la Constituyente fue aprobada a través de un referéndum popular, y la resonancia de sus compromisos con la justicia social, política y económica, entre los ecuatorianos, se expresó a su vez en la facilidad con la que Correa ganó la primera ronda de la elección presidencial de 2009. "La nueva Constitución abrió la puerta a cambios de gran magnitud", dice Alberto Acosta, ministro de Energía y Minas durante el primer gobierno de Correa y Presidente de la Asamblea Constituyente en 2007 y 2008[155]:

> Sus estatutos garantizan la construcción de un Estado plurinacional. Esto implica la incorporación por primera vez de grupos marginalizados, como los pueblos y nacionalidades indígenas y los afroecuatorianos. La Constitución mandata el respeto a sus formas de vida y de organización comunitaria, y una nueva forma de estructurar el Estado en general.

Del mismo modo, en la Carta Magna ecuatoriana se incluyen lo que probablemente son los compromisos ambientales más avanzados de cualquier Constitución del mundo. El texto tiene, por ejemplo, un juramento "al 'buen vivir', o *Sumak Kawsay* en quechua", dice Acosta, "lo que es una manera totalmente distinta de entender el desarrollo". Una dimensión de esta nueva concepción se ve reflejada en que "la Constitución garantiza los derechos de la naturaleza. La naturaleza es un sujeto con derechos en la Constitución. La Constitución ecuatoriana es la única en el mundo con esta característica. La Constitución también reforzó una importante declaración de soberanía que Correa hizo durante la campaña electoral de 2006, aquella que indicaba que no renovaría la concesión de diez años a la base aérea estadounidense de Manta, en el Pacífico. La nueva Constitución oficialmente prohibía las bases militares extranjeras sobre el suelo ecuatoriano. Las últimas

155 Entrevista de los autores con Alberto Acosta (Quito, 8 de julio de 2010).

tropas estadounidenses en Manta se fueron del país en septiembre de 2009 (Solano, 2009). El intento de mantener la entelequia política de la Constitución se expresó en el eslogan de la campaña electoral de 2009, la "radicalización de la revolución ciudadana" (Unda, 2011: 138). Con todo, rápidamente se hizo obvio que habría un quiebre entre los contenidos que la Constitución había plasmado sobre el papel y la realidad cotidiana del país bajo Correa[156]. Poco después de las elecciones de 2009, Correa dio un claro giro hacia la derecha al presentar "al izquierdismo infantilista, el ambientalismo y el indigenismo" como las principales amenazas a la modernización económica y el progreso, particularmente en lo tocante a los planes gubernamentales de cambiar el eje extractivo del petróleo hacia la minería (Ramírez Gallegos, 2010: 41).

El "megabloque" de fuerzas parlamentarias de izquierda se desintegró con la salida del MPD y de Pachakutik ante el marcado giro a la derecha de la AP. Varias federaciones y cámaras empresariales que se habían enfrentado con Correa durante su primer período cambiaron su discurso y orientación hacia el gobierno después de 2009, posiblemente como premio por el compromiso del gobierno con la continuidad neoliberal (Unda, 2011: 138). Correa, ahora abiertamente "aliado con empresarios tradicionales de la derecha", en las palabras de Zibechi, "reserva sus dardos más ponzoñosos para la izquierda" (Zibechi, 2011b). Hacia el final de 2009, el gobierno había entrado en un conflicto abierto con el movimiento indígena. Se organizaron manifestaciones contra propuestas de legislación que hubieran privatizado los lagos y ríos en beneficio de los proyectos hidroeléctricos y de las corporaciones mineras. Al mismo tiempo, los sindicatos de los docentes y de los profesores universitarios estaban en un conflicto con el gobierno sobre una nueva ley que supuestamente buscaba regular la educación superior, pero que en realidad quería debilitar

156 Las reflexiones críticas más sistemáticas acerca de la economía política del período Correa están en Acosta (ed.) (2013) y en Ospina Peralta (2013: 177-278).

a los sindicatos. El año 2010 fue un año convulso. Los movimientos indígenas se organizaron contra los proyectos mineros, mientras que los trabajadores del sector público dieron varias batallas defensivas para mantener lo más básico de sus derechos laborales. De acuerdo con el sociólogo Mario Unda, la esencia de 2010 puede ser capturada en una frase: "un proyecto de modernización capitalista confrontado con los movimientos sociales" (Unda, 2011: 138).

La lucha indígena alcanzó su cenit el 5 de junio de ese año. Ecuador albergaba la cumbre presidencial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en la ciudad andina de Otavalo, de mayoría quechua. A pesar de que la cumbre fue supuestamente convocada para discutir temas acerca de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los países del ALBA, la principal organización indígena ecuatoriana, la Conaie, no estaba entre los invitados. El movimiento indígena organizó en respuesta una marcha de tres mil personas y simbólicamente se instaló un Parlamento Plurinacional en las calles y en las plazas (Zibechi, 2010b). La policía reprimió la manifestación y se presentaron cargos contra varios líderes indígenas, incluyendo a Marlon Santi de la Conaie. "Cuando los presidentes de los países del ALBA se reunieron aquí en Otavalo discutieron los derechos indígenas", dijo Santi,

> pero los principales representantes del movimiento indígena en el país, es decir la Conaie, no fueron invitados a la reunión. Y queríamos tener voz en el ALBA. Queríamos decirles a los gobiernos del ALBA que sin los pueblos indígenas de América Latina el ALBA no puede existir. Ya no podemos estar excluidos. Y por decir esto en protesta fuera de la cumbre del ALBA nos han dicho terroristas y saboteadores. Supuestamente estamos en contra de la nación. Pero creemos que la verdad sobre estas acusaciones saldrá a la luz[157].

157 Entrevista de los autores con Marlon Santi (Quito, 5 de julio de 2010).

Mientras escribimos este texto, unos 200 activistas enfrentan cargos por terrorismo y sabotaje que podrían implicar cárcel durante muchos años (Ospina Peralta, 2011). Para Luis Macas, hay un motivo claro para ensañarse con los movimientos indígenas. "No se trata sólo de que el gobierno quiera deshacerse de los indios, o de ser racistas por el gusto de ser racista. El objetivo es liquidar al movimiento indígena de este país, desmantelarlo y destruirlo", nos dijo Macas en la entrevista mencionada. Esto emana de que "el movimiento indígena es el principal actor social y político que ha luchado contra el modelo económico, contra el neoliberalismo". Desde la perspectiva de Macas, "Correa quiere tener luz verde para hacer todo lo que quiera. Y su proyecto de desarrollo consiste en la explotación de los recursos naturales. Nosotros en el movimiento indígena tenemos una idea enfáticamente distinta acerca de la Madre Naturaleza, y decimos que no". Los conflictos relacionados con la minería probablemente se intensificarán en los años venideros. Negociaciones a puerta cerrada con multinacionales que buscan asegurarse proyectos mineros a gran escala debían ser concretadas en julio de 2012, pero a la fecha no lo han sido. Los detalles son un secreto, pero se estima que 3.500 millones de dólares en inversión extranjera directa inundarán el sector minero a partir de 2012 (*The Economist/EIU*, 09/2011: 13). Es altamente probable que el capital minero canadiense juegue un papel esencial en estos planes.

Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, una organización indígena andina, nos describió una situación de enconada lucha en el sector minero cuando nos reunimos con él en agosto de 2011. "Para nosotros, es una cosa muy clara", dice Tenesaca,

> de repente, un burócrata o un tecnócrata del gobierno llega y le dice a las comunidades indígenas "déjenos entrar a estos territorios para explotar esta mina". Si te resistes, te sancionan, recibes amenazas de muerte y cosas así. Esto ha sucedido en todo el país.

> Cualquiera que se oponga, cualquiera que se resista, es considerado un terrorista[158].

El presidente Correa "está chocando con las comunidades indígenas", escribió el *Financial Times*. "Hace tiempo presumió defender sus derechos. Ahora su gobierno los acusa de terrorismo y sabotaje" (Rathbone, 2011).

Las diferencias entre los movimientos sociales organizados y el gobierno de Correa llevaron a la formación de una nueva coalición política, la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (UPI), durante la campaña electoral de febrero de 2013. La UPI eligió a Acosta como su candidato presidencial. Sin embargo, gracias a los altos precios de los *commodities* en los mercados internacionales, una menor pobreza y populares políticas sociales, Correa ganó las elecciones sin problemas con el 57 por ciento del voto, arriba del 52 por ciento que obtuvo en 2009; su principal opositor de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, obtuvo el segundo lugar con el 23 por ciento, mientras que Acosta fue hecho trizas con tan sólo el tres por ciento (*Associated Press*, 18/02/2013; Becker, 2013). El visible e innegable peso social de los movimientos ambientalistas e indígenas —aunque menor a su cenit en los años noventa e inicios de 2000— no ha encontrado una expresión clara e independiente en la arena electoral durante los años de Correa.

Los dolores de parto del orden minero neoliberal

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo ecuatoriano se ha visto alternativamente impulsado y agotado por los *booms* y las crisis de sus principales artículos de exportación —sucesivamente

158 Entrevista de los autores con Delfín Tenesaca (Quito, 10 de agosto de 2011). Ecuarunari es el acrónimo de "Ecuador Runacunapac Riccharimui", una frase quechua que significa "el despertar de los indios ecuatorianos".

cacao, plátano, petróleo y ahora minerales—[159]. Los principales recursos minerales son el oro, la plata, el cobre y el antimonio. Seguramente hay otros minerales como zinc, platino y plomo. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el propio Correa en 2007, basadas en las proyecciones optimistas de las compañías mineras, las reservas minerales de Ecuador eran de unos 200 mil millones de dólares, mucho más altas que sus reservas petroleras, de unos 70 mil millones (Varela, 2010: 130-131).

En la senda de la reestructuración neoliberal impulsada por el Consenso de Washington que buscó abrir a la región a la inversión extranjera y concretar la transición hacia el libre mercado en los años ochenta y noventa, Ecuador intentó atraer la inversión extranjera al sector minero, con la idea de construir zonas de minería industrial en gran escala.

Esto fue facilitado por varias nuevas leyes, que establecieron un régimen minero inclinado a reducir la vigilancia del Estado sobre el sector, una legislación que le daba ventajas a las mineras en términos de apoyo financiero, garantizaba el acceso a nuevos territorios, flexibilizaba las condiciones de trabajo, debilitaba la legislación ambiental, compartía información geológica con las multinacionales y hacía a un lado a la minería artesanal informal para darle espacio a las compañías de extracción a gran escala (Sacher y Acosta, 2012: 13). Las principales leyes a través de las cuales se impuso esta nueva orientación en la minería fueron la Ley 126 de Minería de 1991, la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, de 2000, y, en 2001, el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería. Estas leyes fueron implementadas, en parte, a través de un proyecto financiado por el Banco Mundial, el Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental y, posteriormente, a través del Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental. En el lenguaje del BM, el objetivo de estas iniciativas consistía en

159 Ver Acosta (2006).

modernizar la explotación minera y la gestión ambiental, al tiempo de conocer más profundamente los recursos naturales disponibles (Sacher y Acosta, *op. cit.*: 14).

Este nuevo marco jurídico permitió una verdadera marejada de inversión extranjera en la minería. Las nuevas concesiones fueron acaparadas por un reducido número de compañías. En 2008, antes de un mandato constitucional que confinó esas concesiones a un limbo legal (de lo que hablaremos en un momento), el área que había sido otorgada a la exploración minera equivalía a un 20 por ciento del territorio ecuatoriano, e incluía áreas protegidas y zonas selváticas, territorios indígenas, sitios arqueológicos y zonas agrícolas (Sacher y Acosta, *op. cit.*: 16). El capital canadiense respondió gustoso. De acuerdo con Alberto Acosta,

> las compañías canadienses fueron las principales beneficiarias de las nuevas leyes mineras de los primeros años de los 2000. El objetivo de estas consistía en fortalecer la presencia de las compañías mineras en Ecuador. Este proyecto fue respaldado por el Banco Mundial y recibió el apoyo de los gobiernos de la época. Estamos hablando de la época neoliberal. Las compañías canadienses fueron las que se aprovecharon con el mayor entusiasmo de las nuevas leyes, para invertir en Ecuador. Estas compañías han expandido su presencia en varias regiones del país, en la cordillera del Cóndor, en el valle de Intag, y en otras partes. Han conseguido una enorme cantidad de concesiones. Ecuador otorgó más de cinco mil concesiones de una manera irresponsable, sin ningún tipo de control o criterio. La gran mayoría de estas concesiones las obtuvieron un puñado de compañías, canadienses casi todas[160].

Con la marea de concesiones, no debe sorprender a nadie que antes de que Correa llegara a la presidencia proliferaran los conflictos

160 Entrevista de los autores con Alberto Acosta (Quito, 8 de julio de 2010).

entre las comunidades campesinas y las mineras canadienses. Los principales depósitos minerales de interés para las mineras están en las faldas orientales y occidentales de la cordillera andina en el norte, y en la cordillera Cóndor en el sur —como dijimos, estas regiones tienen una gran biodiversidad, ecosistemas frágiles, albergan territorios indígenas o campesinos y son el origen de buena parte de los ríos—. Cuando aumentó el ritmo de exploraciones a principios de los años 2000 —tras las políticas liberalizadoras y como respuesta al inicio del *boom* de los *commodities* impulsado por el crecimiento chino— los conflictos socioecológicos y políticos aumentaron también.

Uno de los primeros conflictos que habrían de tener una gran resonancia política a lo largo de los siguientes años es el del pueblo de El Pangui, en el cantón del mismo nombre, en la cordillera del Cóndor, en las provincias de Moronoa Santiago y Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú. En esta área, una de las más biodiversas del mundo, el paisaje económico está caracterizado por la crianza de ganado y la pesca. EcuaCorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del gigante minero canadiense Corriente Resources, comenzó a explorar esta zona a inicios del año 2000. La campaña preventiva de responsabilidad social corporativa incluyó que varios líderes de la comunidad indígena Shuar fueran contratados para el área de relaciones públicas de la compañía, y algunos pequeños proyectos de desarrollo fueron financiados por ésta (Warnaars, 2012: 227). Sin embargo, la larga historia de enfrentamiento y militancia de los shuar contra las multinacionales impidió que sus capacidades de reacción fueran fácilmente superadas, incluso por una campaña de responsabilidad corporativa sofisticada y bien financiada[161].

Y, en efecto, los que habían sido jaloneos subterráneos de descontento en 2006 se convirtieron en una oposición clara contra Corriente Resources y otras grandes mineras multinacionales. En octubre de

161 Sobre la historia de conflictos entre los shuar y las multinacionales petroleras, ver Sawyer (2004).

2006 hubo una marcha de 260 kilómetros desde El Pangui a Jimbotono en donde la gente se manifestó contra toda actividad minera y las presas hidroeléctricas. A esto le siguió, en noviembre de ese año, una marcha de la comunidad shuar de Warintz a la mina de Corriente Resources, de donde echaron a los empleados. A la resistencia colectiva de la comunidad de Warintz se sumaron otros actores, y este tipo de acciones se extendieron a otras minas de las que también se expulsó a los empleados. Un líder shuar se refirió a este proceso como "una limpieza de nuestros territorios de la minería" (Warnaars, 2012: 227). Durante los siguientes días siguió aumentando el ritmo de las movilizaciones y llegaron cientos de personas al sitio minero de El Pangui, donde se enfrentaron —con piedras, palos y dinamita— a la policía, los empleados de la mina, al ejército y a las facciones prominería de la comunidad shuar.

El conflicto llegó a su cúspide a principios de diciembre de 2006, cuando, tras una asamblea de mil personas en El Pangui, los activistas antiminería decidieron marchar a la mina del Mirador, en donde fueron atacados con balas y bombas de humo en lo que se convirtió en una batalla campal de tres días contra la policía y las fuerzas de seguridad de la mina. Al final, el gobierno se vio obligado a suspender las actividades de Corriente Resources en las dos provincias afectadas (*ibíd.*). En el momento más álgido de conflicto, los funcionarios de la embajada canadiense "animaron al gobierno ecuatoriano a que facilitara el diálogo entre EcuaCorriente y la gente para que [...] el conflicto se pudiera resolver de manera pacífica", como si el enorme problema se pudiera reducir a una mala comprensión de los opositores (Sunquist, 2007).

Junto con el conflicto en El Pangui, probablemente el movimiento más famoso contra la minería de los años 2000 es el que se desarrolló en Intag, un valle húmedo tropical en el cantón de Cotacachi, al norte de Quito. Allí está un depósito de cobre conocido como Junín. La primera exploración geológica fue llevada a cabo por los gobiernos ecuatoriano y belga en los años ochenta, pero fue la Agencia

Japonesa de Minería Metálica, financiada por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la que confirmó la existencia de un gran depósito subterráneo de cobre. En 1993, Bishi Metals, subsidiaria del conglomerado japonés Mitsubishi, se hizo cargo de la exploración en la región, pero las protestas de esos años hicieron que la compañía abandonara el proyecto en 1997. Después de un tiempo de indefinición en el que la concesión fue abandonada, Ascendant Copper Corporation, una compañía *junior* de Vancouver, adquirió el depósito (Bebbington *et.al.*, 2008: 2894). La ONG Acción Ecológica se vinculó durante esos años con las comunidades mestizas de la zona: hicieron talleres sobre temas ambientales e intentaron generar una conciencia colectiva acerca de los riesgos socioecológicos generados por la minería a gran escala. De esta primera fase de organización surgió un grupo local llamado Decoin, Defensa y Conservación Ecológica de Intag. Decoin estaba formado por organizaciones juveniles, activistas ambientalistas y hasta un cura de la Teología de la Liberación (Bebbington *et al.*, *op. cit.*: 2898). Una vez que Bishi Metals fue echado en 1997, las organizaciones aprovecharon los cinco años de falta de certeza respecto al proyecto (hasta el año 2002) para fortalecer sus bases organizativas y sus vínculos con los campesinos, así como para desarrollar un perfil nacional y relaciones internacionales a través del trabajo y los contactos de Acción Ecológica.

Cuando Ascendant Copper se apropió del depósito y comenzó el desarrollo del proyecto en 2002, el movimiento estaba listo para movilizar a la gente contra la compañía y quemó, varias veces, el centro de operaciones de las exploraciones. El conflicto continúa, pero la resistencia por lo menos ha podido ralentizar el proceso de exploración (Bebbington *et.al.*, *op. cit.*: 2899). En respuesta a las iniciativas de los activistas, Ascendant ha intentado cooptarlos y los ha reprimido. Por ejemplo, la compañía otorga algo de dinero o recursos a las comunidades que trabajan con ella, y construye caminos, puentes, escuelas, centros de salud y otros proyectos de infraestructura que el Estado

nunca ha proveído apropiadamente. Esto va de la mano con campañas ideológicas en las que propagandistas se suben al transporte público para alabar las ventajas que la mina le traería a la región y denunciar que Decoin y otros movimientos sociales son obstáculos al desarrollo y la prosperidad (Kuecker, 2007: 104). Pero la compañía no deja ni por un momento el garrote, en caso de que sus campañas promocionales y las relaciones clientelares con sectores de las comunidades no sean suficientes para derrotar a la oposición. Ha habido amenazas de muerte contra los organizadores de la resistencia, se ha vigilado el correo y *mail* de los activistas y, sobre todo, se ha demando al principal periódico de la oposición, el periódico *Intag* (*ibíd.*). Uno de los agentes de esta intimidación ha sido César Villacís, miembro de la mesa directiva de la compañía. Villacís es un antiguo general ecuatoriano y exjefe de la policía secreta, y no deja pasar ninguna oportunidad para recordarles a las comunidades que tiene el apoyo del ejército. Las intimidaciones a veces estallan en violencia directa, como en los casos ocurridos en 2004 cuando los que grupos pro mina, abiertamente armados, atacaron físicamente a la oposición y destruyeron su equipo de video (Kuecker, *op. cit.*: 105). Alberto Acosta nos contó acerca de su experiencia personal con ese tipo de tácticas:

> También hay compañías canadienses, como Ascendant Copper, que han intentado imponerse de una manera autoritaria. Han trazado planes de paramilitarización para dividir a las comunidades de Intag, para intimidarlas e imponer los proyectos mineros. Yo fui personalmente testigo de cómo esta compañía movilizó a gente para protestar contra mi presencia como [ex]Ministro de Energía y Minas porque estaba en contra de ese tipo de corrupción. Recuerdo que me amenazaron y me aventaron piedras durante una reunión en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Vimos cómo se comportan, y cómo amenazan a las comunidades. Gracias a las luchas de estas mismas comunidades logramos desarmar a los

> paramilitares y obtuvimos algo de justicia. Pero sigue habiendo muchos problemas en la región. Creo que es importante resaltar estos eventos y lo que implican[162].

En julio de 2010, nos encontramos con Gloria Chicaiza, coordinadora de la Campaña Minera de Acción Ecológica. Es una psicóloga clínica de profesión, y ha estado involucrada en varios movimientos populares urbanos desde los años ochenta, y en Acción Ecológica desde 1996. En su trabajo acompaña a las comunidades involucradas en la lucha contra la minería desde 1997. "Como en buena parte de América Latina", dice, "en Ecuador se han extendido las actividades de las mineras. En nuestro caso, sobre todo, es clara la presencia de compañías canadienses *junior* que se han impuesto en el escenario"[163]. Chicaiza nos habló de los asesinatos presuntamente relacionados con Ascendente Copper, y subrayó que hay un juicio en Canadá contra la compañía, por los abusos llevados a cabo en Ecuador. En 2009, tres campesinos de Intag, representados por un abogado progresista canadiense, intentaron demandar a Copper Mesa Mining Corporation (antes Ascendant Copper) y a la Bolsa de Valores de Toronto por no emprender las acciones necesarias para reducir los riesgos sufridos por los líderes comunitarios que han sido amenazados y agredidos por su oposición a la extracción de cobre. Una corte de Ontario desechó el caso en 2010, sobre la base de que "el silencio de los directivos no es suficiente para establecer el nexo personal necesario entre los actos y omisiones de los directivos y lo que supuestamente le sucedió en Ecuador a los querellantes"[164]. Pero para Chicaiza las actividades de Ascendant no son la excepción:

---

162 Entrevista de los autores con Alberto Acosta (Quito, 8 de julio de 2010).

163 Entrevista de los autores con Gloria Chicaiza (Quito, 7 de julio de 2010). Las siguientes citas de Chicaiza vienen de la entrevista.

164 Ver Business and Human Rights Resource Centre (07/05/2010). Y sobre el primer proceso judicial, ver Moore, J. (2009).

> Hay otras compañías activas en la cordillera del Cóndor en el sur, involucradas en actividades espantosas y que prácticamente no tienen ninguna visibilidad. En el sur está EcuaCorriente, o Corriente Resources, algunas de cuyas concesiones han pasado recientemente a manos chinas. Kinross está ahí, y hay otras compañías con un perfil más bajo. En el caso del valle del Intag, nos fue posible rastrear la cadena de responsabilidad hasta Ascendant Copper, pero en buena parte del resto del país eso es más difícil. Las actividades de las otras compañías son similares, pero no han sido conectadas con hechos y fechas concretas de la misma manera. Pero tenemos testimonios de personas que han sido echadas de sus tierras, o de gente que ha sido físicamente atacada. Sus testimonios dicen que los responsables de estos actos trabajan para las mineras. Ha habido enfrentamientos violentos.

Chicaiza nos describió una estrategia de relaciones públicas de divide y vencerás, de cooptación y promoción de sueños falsos, en la cual

> las mineras canadienses tienen la estrategia de llegar a un lugar, causar grandes conflictos, dividir a las comunidades y crear ilusiones acerca de los estándares de sus prácticas en Canadá que no son verdad. Hemos tenido visitas de indígenas canadienses que nos dicen que los indígenas allá están peor que aquí. El Estado canadiense ni siquiera respeta acuerdos internacionales básicos acerca de los derechos indígenas; los indígenas han perdido sus territorios. Pero las mineras canadienses hablan acerca de los altos estándares con los que funcionan en casa, que son del primer mundo y que todo lo que pasa en el primer mundo es mejor. La idea es convencer a la gente de que siguen estándares altos en Canadá y que harán lo mismo con sus proyectos aquí. Así que vienen y se inventan esta imagen para esconder el rostro real de las compañías.

Lo que es más, las compañías reciben un "enorme apoyo diplomático" a través de lo que Chicaiza llama el "caparazón diplomático" creado por la embajada canadiense, que consiste en el apoyo directo de la diplomacia y sus recursos para generar concitar la aceptación del público en las comunidades afectadas. Las compañías "distribuyen dinero en estas regiones para neutralizar y superar a la resistencia local", lo que crea un gran enojo y daño social en las comunidades. Sin embargo, según Chicaiza es importante subrayar que a pesar de la rica infraestructura del apoyo diplomático y del dinero usado para comprar a las comunidades, la resistencia continúa:

> En casi ninguna comunidad en la que haya una minera canadiense ésta ha sido capaz de borrar enteramente a la resistencia, a pesar del dinero y de los intentos de dividir a la gente. Ha habido intentos de criminalizar a comunidades enteras, llevar a los activistas a juicio y ensañarse con los líderes de los movimientos, con el objetivo de decapitarlos. Se enjuicia a activistas campesinos o indígenas que no tienen los recursos para defenderse, y que tienen que gastar muchísimo tiempo en estos juicios. Todos estos son signos de que las compañías no respetarán las exigencias de las comunidades. Sus actividades han generado una enorme convulsión social a lo largo del país. Cuando un proyecto minero se echa a andar, se inicia un conflicto. Pero todavía tenemos esperanza, como las comunidades en resistencia, de que podremos detener estas actividades, de que la resistencia triunfará y que los modelos locales de desarrollo triunfarán. Hay altas y bajas en la lucha.

Entre 2000 y 2006, algunos organizadores como el padre Juan de la Cruz o Gloria Chicaiza y Luis Suárez de Acción Ecológica, y organizaciones de base como la Coordinadora Campesina Popular, llevaron a cabo un arduo y a menudo invisible trabajo de base para vincular los conflictos del sur y del norte del Ecuador, y generar con esto una organización antiminería amplia, presente a escala nacional,

que pudiera tener un impacto sobre la política del Estado. En 2007, como parte de este esfuerzo se formó la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, pero debido a que se la asociaba con las tradiciones organizativas verticales del maoísmo, no fue del todo bien recibida por otros movimientos como el Movimiento Indígena Ecuatoriano, y rápidamente se fracturó y fragmentó en varios grupos. Otras organizaciones antiminería regionales que surgieron durante este período incluyen al Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala, formado en 2007, y a la Asamblea de los Pueblos, en 2008 (Latorre y Santillana, 2009: 14-17). A pesar de la incapacidad de los distintos movimientos para articularse en un único frente nacional, es evidente que la resistencia antiminería fue uno de los sucesos más importantes durante este período, y pudo influir sobre el carácter de los primeros años del gobierno de Correa.

La fuerza de las luchas locales y de las organizaciones regionales fue patente a lo largo del proceso que dio lugar a la Asamblea Constituyente, especialmente en el caso del mandato constitucional minero que se aprobó en la Asamblea, el cual implicó una importante derrota para el capital minero multinacional, especialmente para el canadiense. Volveremos a las especificidades de ese mandato minero en un momento, luego de un breve análisis de las actividades de la embajada canadiense tras la elección de Correa y en el período preparativo de la Constituyente. Los funcionarios canadienses eran conscientes de que el movimiento antiminería estaba incrementando su fuerza, a pesar de su dispersión geográfica.

La ofensiva de la Embajada

A pesar de la violencia que rodea a las inversiones canadienses y de la feroz oposición que ha generado, el gobierno canadiense apoyó con todo a la industria minera cuando la antigua ley pasó a mejor vida y la cuestión de la minería se convirtió en el ojo del huracán del debate político nacional. Tan pronto Correa fue presidente electo, el

15 de octubre de 2006 —y desde antes de que tomara posesión—, la Embajada se reunió con ejecutivos mineros para discutir "la protección de sus intereses". La Embajada inauguró el Club Canadiense de Inversionistas tras la elección de Correa para demostrarle al nuevo gobierno "que los inversionistas canadienses en Ecuador están unidos" (Embajada de Canadá, 2010c)[165]. Las compañías canadienses también establecieron una rama de la Cámara de Comercio Canadá-Ecuador en Cuenca, la cual, de acuerdo con el Embajador, "protegerá los intereses canadienses en la minería". Durante los tres meses después de la elección, hubo 30 reuniones entre ejecutivos de las mineras, el Embajador y otros diplomáticos como parte de la preparación de la estrategia para confrontar al gobierno que estaba por llegar. Poco después, hubo varias reuniones entre gente de la Embajada y de las compañías canadienses y los funcionarios del nuevo gobierno. En diciembre, el embajador Christian Lapointe escribió a Ottawa sobre una reunión con Correa ese mismo mes "durante la cual casi la mitad de la discusión estuvo dedicada a los intereses canadienses en la minería". En ese mismo período también hubo una "larga discusión" que "el HOM [jefe de la misión] tuvo con el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional sobre esto [la minería]"[166]. En el frente de la responsabilidad social —ahora un componente universal de la estrategia canadiense de ponerle una cara más amable a la depredación minera— se creó el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad

165 No son sólo las mineras las que han enfrentado problemas, pues los representantes de RIM (Blackberry) fueron a Ecuador a principios de 2010 para abogar contra una tarifa del 35 por ciento a los teléfonos móviles importados (Embajada de Estados Unidos, 2010).

166 Las tres últimas citas vienen del embajador Lapointe (2007) y Sunquist (2007). Aquí nos hemos enfocado principalmente en la minería, pues es el sector que ha predominado en las consideraciones estratégicas de la diplomacia. Pero la embajada de Canadá también organizó un seminario para la industria hidroeléctrica que incluyó al ministro ecuatoriano de la electricidad, evento que fue financiado por las compañías canadienses (Autor desconocido, 2008a; Kuffner, 2008a). Que las compañías paguen por eventos parece no ser raro, pues varias del sector minero y petrolero, así como Quiport, pagaron la fiesta por el "Día de Canadá" en la casa del Embajador, así como el concierto de piano que éste albergó en su casa (Shisko, 2010a).

Social (CERES) como un frente de las compañías, de las organizaciones de la industria y las ONG pro mineras.

Con la ayuda de la Embajada, el CERES promovió la ficción de que la minería es socialmente responsable y ambientalmente amigable. Se echó a andar una enorme campaña de relaciones públicas que incluyó seminarios sobre Responsabilidad Social Corporativa organizados para los empleados de las mineras y funcionarios del Estado ecuatoriano por igual (Autor desconocido, 2008b). La Embajada jugó un rol central en el diseño de la estrategia tras la elección de Correa, pero la cuestión ecuatoriana se convirtió en una de las prioridades de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) en Ottawa también, la cual estuvo en contacto permanente con los funcionarios de la Embajada para recibir reportes de coyuntura y para dar consejo sobre las relaciones con los ejecutivos de las mineras: qué tipo de apoyo podía ser esperado del gobierno canadiense, qué tipo de campañas de relaciones públicas eran más convenientes al ofrecer sus conocimientos sobre la ley comercial y de inversiones, y coordinar el trabajo entre la Embajada y Recursos Naturales Canadá (NRCAN) (Tink, 2007).

Los miedos iniciales de la Embajada aumentaron por lo que vio como una posible amenaza a la propiedad privada en un borrador de la Constitución redactado por la Constituyente. La Embajada escribió con alarma que "la propiedad privada sólo está garantizada [en la Constitución] si tiene un objetivo social", olvidando el putativo carácter social de la inversión minera canadiense que anuncia ante quien esté dispuesto a escuchar (Pasquel, 2007). Las compañías canadienses también observaban de cerca a la Constituyente y, como escribió la prensa ecuatoriana, intentaron influir sobre sus decisiones cuando se discutió la política minera, lo que llevó al presidente de la Asamblea a quejarse acerca de la presión ejercida por la industria (*Escopusa Noticias*, 05/02/2008).

Con su cinismo habitual, la Embajada, apoyada por Ottawa, llevó a Ecuador a un "representante" de los indígenas canadienses para que halagara las "virtudes" y buenas prácticas de las compañías canadienses

en casa. En abril de 2007, en una presentación sobre la minería para funcionarios de la Embajada, políticos ecuatorianos y ejecutivos mineros, entre abundante queso y vino, aparecieron representantes indígenas de Ecuador y Canadá "quienes incluyen a la minería responsable en su visión del desarrollo económico" (Autor desconocido, 2007). Esta táctica sería repetida luego de que la Asamblea Constituyente emitiera su mandato sobre la minería a principios de 2008, lo que elevó las apuestas para la Embajada sobre el nuevo régimen minero que se empezaba a discutir. Don Clarke, de la comunidad indígena Black River situada en la provincia canadiense Manitoba, llegó a Ecuador en 2007, poco después de la elección de Correa, como parte del esfuerzo político y diplomático para demostrar la responsabilidad social y ambiental de la minería en Canadá, así como los beneficios que potencialmente esperan a las comunidades indígenas ecuatorianas si la aceptan en sus territorios. Clarke transmitió el mensaje de que la minería puede ser buena para los indígenas, una posición que, por supuesto, la mayoría de los indígenas canadienses no comparten, pero estas voces no eran bienvenidas para la Embajada o la industria. En lo referido a las preocupaciones de que las mineras canadienses pueden representar una seria amenaza ambiental, Clarke subrayó que "la industria minera canadiense está comprometida con la minería responsable", y citó a Jerry Asp, un defensor de la minería de la nación Tahltan ubicada en la provincia Columbia Británica de Canadá, que fue llevado a Guatemala en 2004 a cuenta de la Embajada para que defendiera a los inversionistas (y cuya oficina, como dijimos en el capítulo referido a Guatemala fue ocupada por gente de su comunidad que exigía que se le quitara del cargo por haberse vendido a los intereses corporativos): "Una de las principales cosas" —Clarke cita aquí a Asp— "es que con suerte nuestra gente se dará cuenta de que está siendo usada por los grupos ambientalistas", quienes son "los misioneros modernos" (Clarke, 2007)[167].

167 Clarke dirige la entidad "Clarke Educational Services", la cual, en el idioma de los consultores, "se especializa en desarrollar alianzas entre distintos agentes involucrados en la industria de la extracción" (Clarke Educational Services and Wayne Dunn & Associates, 2007).

El mandato minero

Posiblemente la señal más clara de que la diplomacia canadiense tenía algo de razón en preocuparse por la actitud del primer gobierno de Correa hacia los intereses de la industria minera fue el mandato minero emitido por la Asamblea Constituyente el 18 de abril de 2008. Este mandato fue aprobado en un período en el que el movimiento antiminería, aunque regionalmente disperso, ejercía una fuerte influencia en la política nacional, y fue capaz de empujar el debate sobre los desarrollos mineros multinacionales al centro del debate político y a las discusiones de la Asamblea Constituyente. Lo que es más, esto ocurrió en un momento en el que el "megabloque" de la izquierda dentro de la Constituyente se mantenía intacto, y en el que los aliados de los movimientos sociales tenían puestos de decisión dentro del gabinete de Correa —como Alberto Acosta, Ministro de Minas y Energía y Presidente de la Asamblea; o Mónica Chuji, asambleísta y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre los Recursos Naturales y la Biodiversidad— (Moore y Velásquez, 2012: 118).

En este contexto, el mandato minero fue aprobado, lo que en los hechos impuso una moratoria a las nuevas concesiones y dio la señal de que el gobierno restablecería el control sobre muchas de las miles de concesiones que se le habían entregado a las multinacionales durante el período pasado. De acuerdo con el mandato, las concesiones que estaban ubicadas en zonas ecológicamente frágiles o en áreas protegidas o que habían sido adquiridas sin llevar a cabo las consultas necesarias con las comunidades afectadas, serían retomadas por el Estado sin compensación. El mandato minero establecía también que se deberían llevar a cabo reformas legales con el objetivo de revertir las concesiones que habían sido adquiridas a través de información confidencial otorgada por exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas y otros políticos neoliberales. También sugería un techo de no más de tres concesiones por compañía para evitar la formación de monopolios. Estas reformas de largo alcance provocaron inmediatamente la caída en el valor de las acciones de las compañías canadienses que

dominan la industria en Ecuador (Moore y Velásquez, *op. cit.*: 112). Cuando el mandato fue aprobado, apenas un siete por ciento de las concesiones que habían sido otorgadas estaban siendo explotadas, y el 93 por ciento restante estaban en distintos períodos de exploración o de especulación (Sacher y Acosta, 2012: 18). El mandato fue, por tanto, un intento de normalizar las actividades de una industria minera que apenas se preparaba para despegar, y también fue una manera de abrir un espacio para un debate nacional sobre su naturaleza. El mandato exigía, además, la formación de una compañía minera estatal que tuviera la capacidad de intervenir, regular y administrar el sector, al tiempo que invirtiera en tecnologías que limitaran la futura dependencia en las multinacionales extranjeras (*ibíd.*).

En síntesis, el mandato minero pareció indicar una victoria decisiva de los movimientos antiminería, en términos de obtener reformas positivas del gobierno de Correa en el que potencialmente sería el sector más importante de la economía en los años y décadas por venir. Es importante hacer notar que, en este momento del gobierno de Correa, el mandato constitucional minero mostraba bien los límites de la intervención diplomática canadiense, debido a que ésta estaba totalmente contra el mandato. Los movimientos y la izquierda dentro de la coalición gobernante, por tanto, parecían en alza, mientras que la derecha de la coalición, que incluía a Correa, así como las distintas manifestaciones del poder imperial canadiense, parecían estar a la defensiva. Desafortunadamente, esta correlación de fuerzas dentro de la industria minera, en particular, y en la arena política, en general, habría de ser invertida en el año posterior al mandato constitucional.

Poco después de que fue publicado el mandato minero, Correa empezó a asegurarle públicamente al capital internacional que sus intereses fundamentales serían protegidos a pesar de cualquier impresión contraria (Moore y Velásquez, 2012: 119). Correa se distanció retórica y políticamente de los movimientos sociales, y la represión estatal contra sectores del movimiento antiminería se hizo más aguda. Simultáneamente, comenzó una batalla contra la izquierda de la coalición en el

gobierno que llevó a la renuncia de Acosta y de Chují, así como al colapso del "megabloque". Muchos de los elementos centrales del mandato no fueron implementados, y comenzó un proceso de legislación "exprés" para aprobar una nueva ley minera, contraria en espíritu al mandato. El gobierno de Correa se negó a hacer un debate nacional acerca de las posibles consecuencias de esta nueva ley y su relación con el mandato constitucional y, en efecto, con los opositores el único diálogo fue el de la macana (Sacher y Actosta, 2012: 20).

Con el apoyo de Relaciones Exteriores, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y Recursos Naturales Canadá (NRCAN), y con el acuerdo explícito de las compañías canadienses, la Embajada puso manos a la obra para derrotar el mandato minero y proteger a los inversionistas a través de una estrategia de agresiva intervención diplomática. "Los intereses canadienses", se lee en un reporte de la Embajada escrito tras la publicación del mandato, "se verán gravemente afectados por esta decisión" (Lapointe, 2008a). Intentando tranquilizar a un ejecutivo de IAMGold, el embajador Christian Lapointe "había emprendido acciones diplomáticas al nivel más alto posible aquí en Ecuador" (Lapointe, 2008b). Una nueva ley habría de ser redactada en los 180 días siguientes a la publicación del mandato minero, una oportunidad para que la diplomacia canadiense intentara darle un nuevo curso al debate sobre la minería y limar la estridente exigencia de mayores protecciones ambientales y limitantes al poder del capital extranjero. Lapointe escribió a Ottawa que el mandato parecía, en su opinión, contradecir la apertura del Correa hacia la minería a gran escala "responsable", lo que sugería que el Presidente, aunque menos sumiso de lo preferido, podría, con todo, ser presionado para que protegiera los intereses canadienses y contuviera las fuerzas dentro y fuera de su gobierno que exigen reformas más profundas.

Del mismo modo, Patrick Anderson, ejecutivo en Jefe de Aurelian Resources, distinguía entre Correa y el sector de su partido conectado con los movimientos sociales, señalando que "es la facción de extrema izquierda del partido del Presidente la que tiene una agenda

antiminería"[168]. Por tanto, al tiempo que la Embajada defendía públicamente la minería ante los ecuatorianos, también le dedicó una gran energía a negociar tras bambalinas, presionando a Correa y a sus ministros directamente. En efecto, Correa se transformó en un firme —si no enteramente sumiso— defensor de los intereses canadienses y, como dicen Jennifer Moore y Teresa Velásquez, jugó un rol esencial en presentar a las compañías canadienses

> como inversionistas que habrían de ayudar a Ecuador a alcanzar sus objetivos nacionales […], [al tiempo que] todo debate acerca de la posibilidad del país de elegir un modelo económico distinto y de reducir la dependencia de las industrias extractivas fue descartado, y sus defensores caracterizados como renegados: mezquinos e infantiles, subversivos y manipulados por intereses extranjeros (Moore y Velásquez, 2012: 119).

De hecho, el día en que se publicó el mandato, Correa habló con ejecutivos de las mineras canadienses y emitió un comunicado de prensa que buscaba tranquilizar los intereses mineros y se dirigía a los que estaban preocupados (aunque no necesariamente opuestos) por las consecuencias de la minería a gran escala. La posición pública de Correa ante el mandato minero hacía eco de la estrategia de relaciones públicas promovida por la Embajada y la industria: reafirmar su compromiso con la minería adoptando un discurso de responsabilidad social, y citar a las compañías canadienses como ejemplos de minería socialmente responsable —contra toda evidencia contraria— (*ibíd.*). Las reuniones de los diplomáticos y los representantes de la industria con Correa y su gabinete, influyeron claramente en la manera en la que el Presidente respondió al mandato.

La Embajada y la industria se alarmaron tras la entrada en vigor del mandato minero, y su preocupación por el futuro de sus intereses

168 Citado en Moore y Velásquez (2012: 119).

era real, pero también sabían desde antes que era poco probable que una resolución de ese tipo se hiciera realidad. En otras palabras, la noticia no llegó de la nada. Desde meses antes de que el mandato se votara habían discutido con el Ministerio de Minas y Energía acerca de las posibles reformas al régimen minero, y los funcionarios de este Ministerio le aseguraron a la Embajada que las concesiones de la mayoría de las compañías no se verían afectadas (*ibíd.*). El Embajador y los representantes de comercio exterior canadienses se empezaron a reunir desde marzo con el Viceministro ecuatoriano para el comercio internacional —algunas semanas antes de que se aprobara el mandato minero— para discutir las relaciones comerciales y de inversión, y Lapointe se reunió también con representantes de las corporaciones canadienses para acordar una estrategia común en las reuniones con los funcionarios ecuatorianos (Hawkes, 2008). Éstas fueron una especie de respuesta proactiva, parte de la estrategia diplomática que se inició con la victoria electoral de Correa, que buscaba asegurar una relación cercana con el embajador Lapointe y con otros altos funcionarios.

Las reuniones continuaron una vez que se aprobó el mandato. En las semanas inmediatamente posteriores, Correa, sus consejeros y representantes del Ministerio de Minas se encontraron varias veces con representantes de la industria y con el embajador canadiense. El Ministerio de Comercio Internacional, Relaciones Exteriores y Finanzas de Canadá, así como el Embajador, enviaron cartas diplomáticas formales al gobierno de Correa que explícitamente le exigían que se defendieran las inversiones canadienses (Obiri-Yeboah, 2008; Valdez, R., 2008a; Hawkes, 2008)[169]. En estas reuniones, los canadienses pidieron claridad sobre el futuro de sus inversiones, les recordaron a sus interlocutores la importancia de la inversión canadiense para la frágil y pequeña economía ecuatoriana, y resaltaron los derechos de los

169 Todos estos documentos vienen de: Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-00778.

inversionistas bajo el acuerdo comercial bilateral (Lapointe, 2008c)[170]. El mandato minero, dijeron brutalmente, generaba "una total pérdida de credibilidad entre nuestros inversionistas" (Autor desconocido, 2008c). De acuerdo con un funcionario ecuatoriano, durante una de las reuniones Correa le pidió a los canadienses que "mantuvieran la calma" mientras el gobierno discutía la nueva ley minera, e invitó a los líderes de la industria a participar en un Diálogo Minero Nacional (cuyo objetivo era precisamente discutir la nueva ley) hacia finales de abril, algo que la Embajada y Ottawa ya tenían en mente desde antes de que se publicara el mandato (Moore y Velásquez, 2012: 120)[171].

El principal argumento de Embajada y la industria durante las reuniones con los funcionarios ecuatorianos era el supuesto compromiso con la responsabilidad social, algo que Correa usaría después para convencer a su base social. Esto sería un tema común en el debate que siguió a la publicación del mandato, y la Embajada y la industria no dejaron pasar una sola oportunidad para influir sobre la opinión pública y el propio gobierno. El Diálogo Minero Nacional, por ejemplo, que reunió a los altos funcionarios ecuatorianos, las ONG ambientalistas y los representantes de la industria, fue una inmejorable oportunidad para posicionar a Canadá, vía invitación de Correa, como un aliado del desarrollo ecuatoriano, ecológicamente sensible, además. La comunicación entre la Embajada y Ottawa muestra que los canadienses esperaban usar el concepto de Responsabilidad Social Corporativa y el proceso de la Mesa Redonda en Canadá —a la que Harper tuvo que convocar como respuesta a la presión por legislación que responsabilizara a las compañías canadienses por sus prácticas en el extranjero— para presentarse como un interlocutor válido y

170 De hecho, la posibilidad de utilizar los mecanismos de resolución de disputas del Acuerdo de Protección a la Inversión Extranjera (FIPA, la sigla en inglés del Acuerdo) fue discutida varias veces por la Embajada y las compañías, con la colaboración de Ottawa. Parece que esta opción fue descartada porque quedó claro que, a fin de cuentas, Correa estaba más que dispuesto a negociar (Kuffner, 2008b).

171 El funcionario ecuatoriano es citado por Spicer y Soto (2008: B3).

sensible en el debate público en Ecuador y, particularmente, en el Diálogo Minero Nacional.

La Mesa Redonda canadiense fue unánimemente condenada por los ambientalistas como una vil cubierta para no hacer nada, pero por supuesto esto no tuvo ninguna importancia ni para la Embajada ni, de forma más preocupante, para Correa (Autor desconocido, 2008d). También el Concejo de Minería Responsable, otro juguete de la industria formado con el apoyo de la Embajada, estuvo "en diálogo constante con el Gobierno de Ecuador" (Autor desconocido, 2008e), "como parte del esfuerzo" — escribió la Embajada a Ottawa— "de hacer ver a las compañías canadienses presentes en Ecuador como responsables y respetuosas de los derechos humanos y el ambiente" (Embajada de Canadá, 2010c). La Embajada organizó seminarios sobre Responsabilidad Social Corporativa conjuntos para los directivos de las mineras y los funcionarios canadienses y, de acuerdo con un reporte de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) sobre la minería en Ecuador, Recursos Naturales Canadá (NRCAN) "envió videos en los que se muestra a las mineras canadienses operando en ambientes sensibles, así como historias de éxito de prácticas de responsabilidad social en Canadá" (Sunquist, 2007).

A pesar del terrible historial de las corporaciones mineras canadienses en Ecuador, Correa, quien estaba abierto al diálogo y la influencia canadiense desde la primera elección, adoptó el discurso de la Embajada y la industria, y pintó a los inversionistas canadienses como la punta de lanza de la responsabilidad social y ambiental. Esta estrategia no fue ninguna casualidad, en vista de que entre la opinión pública ecuatoriana había una preocupación extendida acerca de los daños potenciales causados por estas compañías, una preocupación que se extendía mucho más allá de los opositores duros. Como dijimos antes, el mandato minero dio inicio a una ola de viajes a Ecuador por parte de altos funcionarios canadienses. El ministro de Comercio, Michael Fortier, fue a Ecuador en agosto de 2008, de acuerdo con los reportes de la Embajada, para "encontrarse con políticos clave"

ecuatorianos y mostrar "apoyo a la inversión minera canadiense en la región" (Lapointe, 2008d)[172]. Fortier asistió a una mesa redonda con los directivos de las compañías para ver "qué puede hacer el gobierno canadiense para profundizar su apoyo al comercio con Ecuador" (Autor desconocido, 2008f). Los ejecutivos dijeron que las visitas de altos funcionarios canadienses eran una herramienta importante. Las reuniones de Fortier con los políticos ecuatorianos, y su reiteración de la necesidad de claridad para los inversionistas, de las prerrogativas del capital canadiense bajo el derecho internacional y los tratados bilaterales, y de las prácticas social y ambientalmente responsables de las compañías mineras, "enviaron un claro mensaje a los funcionarios ecuatorianos de que las compañías canadienses no están solas en la defensa de sus intereses comerciales en Ecuador, pues el Gobierno de Canadá es solidario con ellas" (Kuffner, 2008c).

El Director General para América Latina y el Caribe y antiguo embajador de Canadá en Guatemala, James Lambert (a quien encontramos en el capítulo dedicado a ese país), acompañó al ministro Fortier a Ecuador, en diciembre de 2008, para reunirse con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, el ministro de Minas y Energía y el Asesor Presidencial sobre la minería, así como con varios ejecutivos de mineras (Kuffner, 2008d). Como sus contrapartes centroamericanas, la Embajada en Quito aprovechó las reuniones anuales de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores (PDAC) para tejer vínculos con políticos y funcionarios clave, e invitó a los ministros de Minería y Medioambiente a asistir a ese evento, entre marzo y abril de 2008, en pleno debate nacional.

No fueron sólo los representantes de Relaciones Exteriores los que visitaron Ecuador luego de promulgarse el mandato minero, para organizar su derrota. También llegaron funcionarios de Health Canada (Salud) quienes, junto con algunos líderes indígenas patrocinados por ellos, participaron en una conferencia organizada por esta institución

172 La primera cita viene de FAIT (2008c). La segunda es de Kuffner (2008c).

entre septiembre y noviembre de 2008 sobre los índices de salud entre los indígenas ecuatorianos. El viaje fue pagado por la Embajada (Kuffner, 2008e). Recursos Naturales Canadá (NRCAN) también jugó un rol importante en la que fue una estrategia "holística" de todo el Estado canadiense para defender al capital de este país contra las comunidades ecuatorianas[173]. Una compañía canadiense, EcuaCorriente —o, en palabras de la Embajada, "uno de nuestros principales clientes mineros"— envió a Ottawa, entre septiembre y octubre de 2008, a un directivo que trabaja en Ecuador a reunirse con funcionarios de NRCAN para ayudar a esta última a "darse una mejor idea de la situación" y para discutir "cómo el gobierno puede apoyar a la industria desde Ottawa"[174].

Durante este tiempo, cuando en Quito se inició el Diálogo Minero Nacional, aumentó la tensión entre los partidarios del mandato minero, por un lado, y la industria y la presidencia, por el otro. La Embajada y la industria observaban muy de cerca a sus opositores ecuatorianos. Las actividades de las organizaciones antiminería, manifestaciones y hasta los foros públicos (como la proyección del documental del cineasta canadiense Malcolm Rogge) fueron discutidos por la embajada canadiense. Ésta discutió con las compañías cómo responder a una movilización de la Conaie en octubre de 2008 que exigía la salida del país de las grandes mineras[175]. Las compañías canadienses, con el apoyo de la Embajada y del gobierno de Correa, ayudaron a organizar manifestaciones pro minería en varias ciudades "para generar simpatía y apoyo popular" (Comunicación personal con Jennifer Moore)[176].

---

173 Una "estrategia 'holística' del Estado", o "Gobierno holísitico" ("Whole-of-government"), se refiere a integrar a las distintas partes del aparato de Estado en aras de un objetivo de política exterior. Así lo presumían los conservadores con Stephen Harper, y el término fue usado ampliamente en Afganistán.

174 Las dos primeras citas vienen de Kuffner (2008f); la tercera es también de Kuffner (2008g).

175 Esta discusión se encuentra en correos de la Embajada de principios de octubre de 2008, pero casi todo el texto está censurado (Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186).

176 La cita es de Valdez, R. (2008b).

Correa tomó la palabra en una de estas manifestaciones en frente del Palacio Presidencial, el 6 de mayo de 2008, justo después de que el mandato minero fuera publicado, defendiendo los proyectos mineros canadienses como "responsables". Miles de personas fueron presuntamente acarreadas en autobuses desde todo el país para asistir a una marcha que defendía los empleos y el desarrollo económico ofrecido por la industria. Los manifestantes pro minería eran parte de lo que la Embajada llamó una "campaña pro imagen", que también incluía "una agresiva campaña promocional, a favor del desarrollo minero en Ecuador" (Valdez, R., 2008b).

Esta estrategia agresiva contra el mandato minero organizada por la Embajada, los altos funcionarios y distintas instituciones del Estado canadiense, les dio a las compañías mineras acceso directo a los políticos ecuatorianos con poder de decisión. Pero no era sólo una cuestión de *lobbying*; la industria tuvo la oportunidad, durante el Diálogo Minero y, más importante, en las reuniones privadas con los ministros ecuatorianos y funcionarios del Ministerio de Minas, de "ayudar" directamente en la redacción de la nueva ley minera. Se lee en un reporte de la Embajada que "las compañías reiteraron la importancia de su participación en la redacción de la nueva legislación minera y que trabajarán hombro con hombro con el Ministerio de Minas y Energía" (*ibíd.*). Como veremos después, la nueva ley que emergió del debate nacional tras el mandato minero no fue considerada un éxito incuestionable por la industria o la Embajada. Durante el proceso de redacción, los ejecutivos mineros expresaron su preocupación a Correa y a los funcionarios del Ministerio de Minas (quienes no necesariamente estaban siempre en la misma tónica que Correa en términos de qué tan dura debía ser la ley con los inversionistas extranjeros) acerca de una supuesta "ambigüedad", sobre todo en relación con la posible arbitrariedad del régimen fiscal, los requisitos para recomenzar proyectos en concesiones que ya tenían un dueño, y su posible inconstitucionalidad respecto a la nueva Carta Magna (la naturaleza exacta de esta última preocupación está censurada en el reporte de la

Embajada; los activistas antiminería han apuntado a la contradicción entre la ley minera y los derechos de la naturaleza consagrados por la Constitución y la Ley de Agua que, dicen, es jurídicamente superior a los derechos de los inversionistas) (Kuffner, 2008h; Kuffner, 2008i)[177]. Con todo, la ley era claramente un gran avance para los canadienses en relación con el mandato constitucional minero, y, por extensión, una derrota importante para los movimientos ambientalistas y antiminería. El mandato minero fue derrotado, y Correa le envió una nueva ley al Ministerio de Minas 80 días después del mandato, cien días antes de la fecha límite para hacerlo (Moore, J., 2008).

La nueva ley minera

El 12 de junio de 2009, una nueva ley minera fue firmada a las prisas por Correa, con el apoyo de la mayoría de Alianza País en una Comisión Legislativa y de Supervisión interina (Moore y Velásquez, 2012: 125).

Sin duda que la nueva ley minera representaba una ruptura con el marco jurídico neoliberal hasta entonces imperante. El Estado retornó a la industria minera como un actor con un mayor rol regulador, y una Compañía Nacional Minera fue establecida. La nueva ley requería que los estudios de impacto ambiental fueran evaluados por el Ministerio del Medioambiente antes de que se otorgara la concesión. También exigía que las compañías recibieran una licencia ambiental del mismo Ministerio antes de poder comenzar la exploración. Las compañías

177 Ambos documentos vienen de: Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078. La posible diferencia entre Correa y el Ministro de Minas y Petróleo es discutida en los reportes de la Embajada. Uno de ellos la menciona en el contexto de la visita de Lambert en diciembre de 2008, cuando discutió el asunto con el consejero presidencial sobre la minería, quien aceptó que el Ministerio "parece no entender del todo las intenciones (positivas) del Presidente […] y esto es una cosa que la oficina de la presidencia tendrá que clarificar". Parece, como dijimos, que había más reservas en el Ministerio acerca de qué tan amigables con los inversionistas deberían ser las nuevas leyes, y los canadienses estaban frustrados con las "señales contradictorias", señales que posiblemente contribuyeron a la "ambigüedad" que acabamos de mencionar (Kuffner, 2008d).

deben entregarle al Estado reportes ambientales anuales, y las concesiones mineras pueden ser revocadas si causan daños sociales, culturales o ambientales. La ley restauró las regalías como un concepto legal en la industria, y el Estado deberá recibir no menos del cinco por ciento del valor de venta de los minerales como regalías, con el 60 por ciento de éstas asignadas para proyectos de desarrollo local administrados por los gobiernos municipales. De hecho, las regalías deberán ser negociadas con el gobierno en cada caso. Lo que es más, se introdujeron varios impuestos, para darle al Estado una mayor proporción de los ingresos, particularmente si hay ganancias extraordinarias (Sacher y Acosta, 2012: 21). Entre estos ingresos se incluye un mecanismo para compartir el 15 por ciento de las ganancias con los trabajadores y proyectos sociales, aparte del impuesto a los ingresos extraordinarios (25 por ciento) y un impuesto al valor agregado a las actividades de exportación. Las concesiones, señala la ley, están limitadas a las cinco mil hectáreas y los contratos no pueden durar más de 25 años.

Sin embargo, la nueva ley no corresponde con varios aspectos ambientales, pluriculturales y sociales de la nueva Constitución, y se queda corta respecto a los principios guía expuestos en el mandato minero previo. La nueva ley, además, es débil en temas como las limitaciones a la monopolización de concesiones, en la regulación socioambiental de la industria minera, y les otorga poco poder de decisión a las comunidades afectadas, al tiempo que le da enormes facultades al Presidente. Es esencial, por ejemplo, que la ley no obligue a las compañías o al gobierno a obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas antes que inicien los proyectos (Sacher y Acosta, *op. cit.*: 22). Una muestra de los límites de la nueva ley es que fue vista con buenos ojos por varias mineras canadienses, y a la vez ha sido rechazada por los movimientos sociales.

La actitud canadiense hacia la ley se resume en una oración de un reporte de la Embajada: "Aunque no es una ley minera ideal en su forma actual, sí logra abrir el sector a la minería comercial"; el presidente de la Cámara Minera, por su parte, agregó que "la historia

tiene que empezar en algún lugar" (Kuffner, 2009)[178]. Poco después de que la ley en su forma final fue aprobada, Correa almorzó con el embajador Lapointe, tras lo cual declaró que "es impresionante la cantidad de cosas que podríamos alcanzar con Canadá [...] un país con una larga historia de paz y desarrollo"[179]. El 13 de marzo de 2009, la suspensión de las actividades de las compañías que se había producido por el mandato constitucional minero fueron levantadas, aunque se les anunció que tenían que obtener una nueva aprobación ambiental antes de continuar con sus actividades, un proceso que se ha retrasado bastante en algunos casos (*National Post*, 18/03/2009; FP6; *Yahoo*, 17/03/2010). Si consideramos la satisfacción general del capital minero multinacional, el giro a la derecha efectuado por Correa tras su reelección en 2009, y luego otra vez en 2013 —lo que ha incluido regaños públicos contra los movimientos indígenas, ambientales y antiminería, así como la represión contra éstos— podemos concluir que los componentes progresistas que estaban presentes al inicio de su gobierno han sido derrotados. La diplomacia canadiense jugó en esto un rol que no es menor.

En otras palabras, la derrota del mandato minero fue una victoria para el Estado y el capital canadiense. Correa quería la inversión canadiense, pero no podía simplemente ignorar a los críticos de ésta —dentro y fuera de su gobierno— pues varios lo habían apoyado y habían votado por él; y tampoco estaba dispuesto a postrarse enteramente ante Ottawa y los inversionistas canadienses. La ley, por tanto, aunque significó una derrota para los partidarios del mandato constitucional minero, tampoco era una legislación neoliberal pura y dura. Varias compañías siguieron preocupadas por la falta de claridad respecto a los impuestos y los permisos ambientales, porque son cuestiones que impactan las negociaciones individuales con el gobierno por las que tienen que pasar para obtener la autorización de reiniciar

178 El Presidente de la Cámara de Minas es citado en ese documento (Kuffner, 2009a).

179 Citado en Moore y Velásquez (2012: 127).

sus proyectos. La consecuencia es que la ofensiva diplomática que se inició con la elección de Correa continuó con la idea de garantizar que "las compañías [canadienses] […] tengan un ambiente de inversiones estable y transparente en el que se desarrollen sus operaciones" (Kuffner, 2009b)[180]. Pero en vista de la buena relación entre la Embajada, la industria y Correa, los canadienses confiaban en que, aunque la nueva ley fuera insatisfactoria, el Presidente podría ser convencido de seguir empujando al régimen minero en la dirección correcta. Tras la reelección de Correa en abril de 2009, la Embajada escribió en un reporte a Ottawa que "Correa ha mostrado estar del lado de la inversión minera canadiense", y que, tomando en cuenta los problemas que ésta ha enfrentado en la región, con Correa "Canadá tiene una oportunidad regional única en Ecuador" (Autor desconocido, 2009a). Esta frase debería terminar con cualquier esperanza en que Correa represente una alternativa radical o un modelo de desarrollo antiimperialista.

El día después de la aprobación de la ley, el embajador Lapointe se reunió con Correa (Sereda, 2009). Este almuerzo llevó a una segunda reunión, 15 días después, entre Correa, varios de sus ministros y un grupo de inversionistas canadienses, para discutir sus futuros proyectos en el país, así como las regulaciones necesarias para implementar y darle forma a la ley, regulaciones que no se habían redactado todavía. (Estaban presentes en la reunión las grandes corporaciones mineras, así como SNC Lavalin, AECON Construction y la Canadian Commercial Corporation.) Estas reuniones parecen haber desembocado en la participación directa de los canadienses en la redacción de las referidas regulaciones. De acuerdo con un reporte de un funcionario de

180 Claramente, hay relaciones personales entre el personal de la Embajada —incluyendo al Embajador— y los mineros ejecutivos y sus familias. Luego de que un ejecutivo de IAMGold organizó una visita a las minas de Quimsacocha y San Gerardo a principios de 2010, el Embajador le escribió para agradecerle por el viaje y por la asistencia del ejecutivo y su esposa a una reunión con motivo del inicio de las olimpiadas que organizó el Embajador, y para recordarle que "Por favor, no dudes en escribirme si la Embajada o yo podemos ayudarlos con alguna conexión o intervención estratégica con el gobierno ecuatoriano o con los funcionarios locales" (Shisko, 2010b).

Recursos Naturales Canadá, IAMGold, "a través del Concejo Minero de Ecuador, trabaja en cooperación con los ministerios relevantes en la preparación de las regulaciones necesarias" (*El Comercio*, 17/02/2009). Dos de las principales cuestiones que la industria intentaba resolver a través de las regulaciones eran, primero, un régimen fiscal más claro y, en su visión, más justo, que no les quitara ganancias más allá de lo aceptable, y luego, la preservación de las concesiones a las compañías de exploración que el gobierno de Correa sentía habían sido otorgadas de manera turbia por gobiernos previos. Estas cuestiones serían puntos nodales en las reuniones entre la Embajada, la industria y los funcionarios ecuatorianos entre mayo y agosto de 2009 (Kuffner, 2009c).

Los intentos de la Embajada y la industria por debilitar el régimen minero ecuatoriano tras la entrada en vigor de la nueva ley se vieron fortalecidos por las acciones de los representantes de Relaciones Exteriores y de Recursos Naturales Canadá (NRCAN), quienes siguieron interviniendo cotidianamente en la política interna de Ecuador. Stockwell Day, ministro para el Comercio Internacional, viajó a Ecuador en agosto de 2009 y se encontró con ejecutivos mineros, quienes expresaron su descontento por la dificultad de obtener permisos y aprobación gubernamental para sus proyectos, y se quejaron del débil imperio de la ley. Se reunió también con el Vicepresidente de Ecuador, con el ministro de Relaciones Exteriores, el de Minas y Petróleo y con el alcalde de Quito, para "reforzar la importancia de un ambiente de inversión claro, estable y transparente para los inversionistas canadienses, y la necesidad urgente de que se les autorice reiniciar las actividades de exploración" (FAIT, 2009h). Tras el viaje de Day, en octubre de ese año, una docena de altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano visitaron Ottawa y Toronto, viaje en el que se reunieron con representantes de Relaciones Exteriores y NRCAN, así como de la industria minera. En esos meses se organizaron varias reuniones de alto nivel en Ecuador entre ministros canadienses y ecuatorianos, altos funcionarios y representantes de la industria (Kuffner, 2009d; Autor desconocido, 2009b; Kuffner, 2009e).

Peter Kent, ministro de Estado y operador clave en Honduras tras el golpe contra Zelaya en 2009, visitó también Ecuador en agosto de 2010. Su visita, según el Embajador, "sirvió como un catalizador esencial para que la Embajada obtuviera acceso a actores clave" (Shisko, 2010c). Kent se reunió con ejecutivos de varias mineras y de Quiport, con representantes de la Organización para la Participación Ciudadana, que se dedica a supervisar la política del gobierno ecuatoriano hacia los medios de comunicación (al gobierno de Correa se le ha criticado por atacar la independencia de los medios), y con funcionarios del Latin American Centre for Political Studies, una organización dedicada a la promoción de la democracia (FAIT, 2010c; Autor desconocido, 2020). Kent, por otra parte, tuvo una reunión bilateral con Correa en mayo de 2010 durante un viaje a Buenos Aires para discutir "los beneficios de la inversión canadiense", así como con el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores durante una Asamblea General de la OEA en Lima, otra vez para discutir los intereses de los inversionistas canadienses (FAIT, 2010d; Kuffner, 2010b). Finalmente, en septiembre, el ministro canadiense de Relaciones Exteriores, Lawrence Cannon, se encontró con su contraparte ecuatoriana para discutir el estatus de la minería en el país (FAIT, 2010e).

Las ya varias veces referidas convenciones de la PDAC fueron durante todo este tiempo un foro de primera importancia para influir sobre los altos funcionarios ecuatorianos. La Embajada aumentó su apoyo a la delegación ecuatoriana en la reunión de 2009, y envió a 26 personas, para "mejorar las relaciones" entre la industria y los políticos locales. Los delegados ecuatorianos discutieron la nueva ley minera con ejecutivos de las corporaciones y con funcionarios de Recursos Naturales Canadá (NRCAN) y de Relaciones Exteriores, incluyendo al Director General para América Latina y el Caribe, y antiguo embajador en Guatemala, James Lambert (Stirling, 2009; Valdez, R., 2009). En 2010, la Embajada en Quito llevó a Canadá al Viceministro ecuatoriano para la minería, a un abogado del Viceministerio y a un representante de la nación Shuar a favor de la minería, quienes se reunieron con

delegados de Relaciones Exteriores y de NRCAN para discutir cómo conseguir el apoyo de las comunidades indígenas. Un representante de Kinross, una de las compañías mineras canadienses, al escribirle a la Embajada en Quito, comentó que la PDAC de 2010 es "una gran oportunidad para nosotros" (Autor censurado, 2009). De acuerdo con un reporte de la Embajada sobre la conferencia, los representantes del gobierno ecuatoriano habían dicho que el gobierno autorizaría nuevas exploraciones mineras —una preocupación de primer orden para los canadienses— "a un ritmo lento, para evitar [...] confrontaciones sociales y políticas en distintos flancos, incluyendo en esos conflictos, a los promovidos por la Confederación Indígena Ecuatoriana Conaie" (Valdez, R., 2010a).

La delegación ecuatoriana y los representantes de la industria discutieron durante la PDAC la posibilidad de que Canadá ayudara directamente en la redacción y desarrollo de un nuevo régimen minero a través de NRCAN. Esto incluía entrenar al personal del Ministerio de Recursos Naturales y No-renovables ecuatoriano, y la creación de programas de entrenamiento técnico para una nueva fuerza de trabajo minera, principalmente ingenieros civiles, geólogos, mecánicos industriales y de mantenimiento, y trabajadores de la producción (Valdez, R., 2010b). La Embajada y la industria siguieron exigiendo un proceso de emisión de permisos más claro para las compañías canadienses.

En julio de 2010, los representantes del frente "ambientalmente responsable" de la industria y el Concejo de Minería Responsable de Ecuador se reunieron con los funcionarios de la Embajada. De acuerdo con un informe de misión diplomática, la reunión incluyó a "funcionarios ecuatorianos de alto nivel de varios ministerios" y la discusión versó sobre "las necesidades de la industria minera ecuatoriana en términos laborales y de entrenamiento", y el "plan de entrenamiento nacional", así como "la necesidad de los ministerios del Medio Ambiente y Agua ofrezcan una mayor capacidad operativa", los cuales juegan un rol esencial en el proceso de otorgar licencias a las compañías. Estas necesidades fueron transmitidas posteriormente a Correa (Yared,

2010). La Embajada, los ejecutivos de las mineras y los funcionarios de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) en Ottawa, también hablaron sobre la importancia de llevar gente de NRCAN y de la Agencia Ambiental Canadiense para entrenar a los empleados del Ministerio del Medio Ambiente y de Minería (Kuffner, 2020c). La Universidad de la Columbia Británica ya había llegado a un acuerdo con las universidades del Azuay y de Cuenca para otorgar un diploma en geología minera, el cual, como el comisionado para el Comercio de la Embajada le dijo a un ejecutivo minero, es importante para las "necesidades futuras [de las compañías] de recursos humanos bien entrenados" (Valdez, R., 2008c).

Como con el mandato minero, "representantes" de las comunidades indígenas canadienses fueron usados una vez más para defender a la industria. Durante el debate nacional sobre la minería, Correa presumió públicamente las relaciones entre las mineras canadienses y las comunidades indígenas en ese país. A principios de 2009, Correa dijo en una entrevista de radio —en claro eco de la posición de la Embajada y la industria— que

> debido a la experiencia que Canadá tiene con la minería responsable, los primeros beneficiarios han sido los pueblos ancestrales, y es por eso que le he pedido a su Embajador que traiga representantes de esos pueblos antiguos, para que den su testimonio y muestren la falacia de los líderes de algunos grupos radicales quienes [intentan] hablar a nombre de todos pero de hecho no representan a nadie[181].

Correa, sin duda, quiso dejar muy claro que los "grupos radicales" en Ecuador están equivocados en su oposición a la minería, puesto que los indígenas canadienses apoyan y se benefician de la minería. El Presidente hablaba de Glen Nolan, jefe de los Missanabie Cree, quien

181 La cita de Correa está en: http://www.incakolanews.blogspot.ca/2009/02/studmuffin-heart-canada.html (Fecha de acceso: 18/02/2013).

ha estado desde hace mucho involucrado en la minería y se habría de convertir en el primer presidente indígena de la PDAC. Durante su viaje en Ecuador, Nolan enfatizó el compromiso de Canadá y de la industria con la responsabilidad social (Boivin, 2010; Ross, I., 2012). La Embajada, además, organizó un viaje a Canadá para varios funcionarios del Ministerio de Minería ecuatoriano, para que se reunieran con sus contrapartes canadienses y con grupos indígenas pro minería. En esa oportunidad, los funcionarios ecuatorianos le preguntaron a Kinross si no tenía una mina en Canadá cerca de un grupo indígena que pudiera ser "un buen ejemplo" de las relaciones con los indígenas: Kinross respondió que, desafortunadamente, no tenían minas en operación en Canadá (Kuffner, 2009f).

En esa misma oportunidad, la Embajada sacó, de entre sus variados recursos, un caramelo envenenado: apoyo para los tan necesitados proyectos de infraestructura a cambio de mayor seguridad para las compañías mineras. Necesitado de capital luego de negarse a pagar una deuda externa relativamente baja, el gobierno de Correa no pudo obtener suficiente dinero para cubrir sus necesidades de infraestructura. El gobierno ecuatoriano le hizo una solicitud de inversión en infraestructura y crédito al Embajador Lapointe durante una reunión a la que éste fue invitado por el Viceministro de Comercio Internacional. En ese momento, Lapointe escribe: "El Presidente Correa empieza a cumplir su promesa de una nueva ley minera y de abrir el sector". De todas maneras, el Embajador no estaba completamente satisfecho con la nueva ley y con el argumento del Viceministro de que "El Presidente había cumplido su parte del acuerdo", y entonces "afirmó repetidas veces que las preocupaciones de las mineras deben ser resueltas antes de que el diálogo pueda comenzar" y exigió que "el Ministerio de Minas restablezca el diálogo con todas las compañía canadienses [incluyendo las de exploración] lo más pronto posible". En su informe a Ottawa, Lapointe concluía que "Ecuador sería cada vez más dependiente del sector minero, y tenía pocas opciones de socios y

financiamiento"[182]. Canadá también sacó provecho de la discusión sobre un posible préstamo a Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo para reprenderlo públicamente. Aunque en última instancia Canadá apoyó el préstamo del BID, expuso su preocupación acerca de que Ecuador no respetara la inversión extranjera y si era suficientemente responsable como para que se le otorgaran préstamos. Este no es el único caso en el que Canadá ha usado los préstamos multilaterales de ayuda al desarrollo para reprender o amenazar con castigar a los países pobres que no han actuado responsablemente (a sus ojos) ante las mineras canadienses. Uno de los muchos ejemplos posibles ocurrió cuando Canadá intentó evitar que el Club de Paris redujera la deuda de la República Democrática del Congo en 2009 y 2010 (Clarke, E., 2009).

La preocupación de las compañías canadienses con la ley minera y su impredecible régimen fiscal terminó por ser corroborada cuando el gobierno ecuatoriano declaró en 2011 que tenía la intención de aumentar su proporción de las regalías arriba del cinco por ciento mínimo requerido por la nueva ley (Silva, S., 2011). El nuevo embajador canadiense, Andrew Shisko, describió al régimen fiscal ecuatoriano en una entrevista en la radio como uno de los más pesados del mundo (*El Comercio*, 04/07/2012). La posición del gobierno llevó a Kinross, que ya había obtenido permisos ambientales y de agua en 2009 —pero que todavía tenía que negociar sus compromisos fiscales—, a denunciar el régimen fiscal y a negarse a firmar cualquier acuerdo con el gobierno para comenzar su proyecto de Fruta del Norte. La compañía se quejó de que bajo el nuevo régimen tendría que pagar más de la mitad de sus ingresos post producción en impuestos y regalías, y que si el precio del oro subiera por sobre los 1.700 dólares la onza, el 70 por ciento de los ingresos extraordinarios irían a las arcas del Estado. Kinross declaró además que los impuestos eran excesivos, en un momento en el que había sufrido una pérdida importante en una

182 Todas las citas vienen de Lapointe (2009).

gran inversión en África. Su Director Ejecutivo, Tye Burt, amenazó con que la compañía "no seguiría allí [en Ecuador] a menos que lleguemos a un mejor acuerdo económico". El ministro ecuatoriano de Minas y Energía, Wilson Pastor, respondió públicamente diciendo que Kinross estaba respondiendo de manera excesiva y que no había otro acuerdo sobre la mesa (Araujo, 2012)[183].

Sin embargo, Correa dijo que las exigencias de Kinross eran "razonables", y apoyó una reforma legal en agosto de 2012 que permitía que las compañías no pagaran impuestos sino hasta que hubieran recuperado su inversión, y que establecía un límite máximo a las regalías, lo que había sido una fuente de gran preocupación para Kinross y otras compañías (Saavedra, 2012).

Unos años después de la entrada en vigor del mandato minero, y ya con una nueva ley, los canadienses han obtenido algunas victorias importantes. La posición más radical hacia los inversionistas canadienses, expresada sobre todo por los movimientos indígenas y ambientalistas y reflejadas en el mandato minero, ha sido contenida. Y Correa, quien nunca estuvo del lado de los "radicales" (a pesar de algunas declaraciones críticas de la minería durante su primera campaña y de haber detenido un par de proyectos mineros al principio de su primer gobierno), pero cuyas inclinaciones nacionalistas representaban una peligrosa falta de certeza para los inversionistas, ha dado un claro giro a favor de los intereses del capital tras la ofensiva de la diplomacia canadiense. Hay, de todas maneras, cuestiones que no se han resuelto enteramente, como el reinicio de las concesiones, los mecanismos para acordar nuevos contratos y el impuesto extraordinario. Estas cuestiones han generado tensiones entre el gobierno y la Embajada, la cual sin duda preferiría una ley abiertamente neoliberal con bajos impuestos. Este es el panorama en el que la angustia de algunos inversionistas respecto al nuevo contexto político ecuatoriano se ha expresado en las decisiones de algunas compañías. EcuaCorriente vendió sus activos a

183 Tye Burt es citado en Valencia. (2012).

la empresa china Tongling Non-Ferrous Metals en 2009. En junio de 2013, tras dos años de negociaciones y sin poder llegar a un acuerdo, Kinross decidió salir del país, exasperada y negándose a aceptar el impuesto extraordinario. En junio de 2012, IAMGold anunció que vendió su proyecto en Quimsacocha a una *junior* canadiense, INV Metals. IAMGold justificó su salida refiriéndose a los retrasos provocados por el gobierno ecuatoriano y a los riesgos políticos.

Sin embargo, en el acuerdo con INV Metals, IAMGold se quedará con el 40 ó 45 por ciento de las acciones de la compañía *junior*, lo que transmite el mensaje de que "le relega todo el riesgo de Ecuador a la *junior* al tiempo que mantiene una tajada importante de lo que podría ser un proyecto minero rentable si llega a desarrollarse" (*Mineweb*, 22/06/2012). La mayoría de las compañías canadienses de exploración siguen en el país. Lo que esto muestra es que, a pesar de la falta de certeza que hubo durante un cierto tiempo, y a pesar de la retórica nacionalista del gobierno de Correa, nada de esto fue visto como una verdadera amenaza por un sector importante del capital canadiense, gracias, en parte, a la agresiva intervención de la Embajada, de Ottawa y de la propia industria[184]. Con el mandato constitucional minero derrotado y con una nueva ley, un ejecutivo de Kinross dijo en 2009 que el gobierno había "clarificado la ley minera [y] había generado un marco claro para futuros proyectos" (*Agencia Reuters*, 11/03/2009).

El gobierno de Correa también ha manifestado en público su continuo apoyo a los grandes proyectos mineros privados con el despliegue de las fuerzas de seguridad en contra de los opositores a la minería a exigencia de la industria. Entre septiembre y noviembre de 2010, un ejecutivo de Kinross usó sus conexiones para "informarle a las autoridades acerca de las actividades de la minería artesanal […] para que las autoridades tomaran la decisión apropiada"[185]. Correa

184 Ver Santacruz (2008). Este artículo desgrana la respuesta de las compañías canadienses a la nueva Constitución.

185 Citado en Moore, J (2010b).

mandó a dos mil soldados a El Dorado en la provincia de Zamora luego de que un grupo de mineros indígenas artesanales —mineros "ilegales" en palabras de la Embajada— hicieran un bloqueo contra la concesión de Kinross.

En su reporte a Ottawa, la Embajada sugiere que la agresiva respuesta de Correa "ha demostrado claramente que el gobierno ecuatoriano se toma en serio la protección y el desarrollo de la industria minera" (Valdez, 2010c). En 2011, Correa envió al ejército a la provincia de Esmeraldas en el noroeste del país para detener la extracción artesanal de oro. Los soldados destruyeron las herramientas de los mineros (*Latin America Press*, 02/06/2011). A fin de cuentas, el Ecuador de Correa es favorable a la minería transnacional a gran escala, y la disputa con los canadienses se reduce a la porción con la que cada quién se quedará. En última instancia, el hecho de que el gobierno quiera exprimir un poco más a las compañías para quedarse con un pedazo más grande del pastel, no implica que Correa sea una verdadera amenaza a sus intereses. Es la resistencia de las comunidades la que representa el principal peligro para los inversionistas.

La santidad de la inversión extranjera

Otro problema para el capital canadiense en lo que respecta a la predictibilidad y la estabilidad —y un buen recordatorio de que Correa no es un aliado que merezca toda la confianza— llegó cuando el gobierno le informó a Canadá que dejaría el Acuerdo de Protección a la Inversión Extranjera (FIPA, por su sigla en inglés) el 30 de octubre de 2010. El FIPA entre Ecuador y Canadá entró en vigor en 1997, casi una década antes de la elección de Correa. Ecuador había anunciado en 2009 que abandonaría los 13 tratados bilaterales de inversión que tenía vigentes, con el argumento de que debido a que las disputas son resueltas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, los FIPA violan la nueva Constitución que estipula que las leyes ecuatorianas no pueden ser

discutidas fuera de Sudamérica. Bajo los términos del FIPA, Ecuador sólo puede retirarse de estos tratados un año después de haber anunciado formalmente su intención de hacerlo.

Canadá vio el anuncio no como una declaración formal sino como una expresión informativa de la intención de retirarse del Acuerdo en algún momento. La posibilidad de que Ecuador se saliera del FIPA, en un momento en el que había tan poca certeza sobre el futuro de las inversiones canadienses, predeciblemente causó más frustración y presión por parte de Canadá. Durante su visita en agosto de 2010 para discutir la inversión canadiense, el ministro Kent les recordó a sus interlocutores ecuatorianos que Canadá esperaba que el gobierno de Correa respetara el FIPA. En una carta a la Cámara de Comercio Canadiense en Guayaquil, el embajador Shisko, por su parte, comentó que el posible fin del Tratado de Inversión Bilateral (TBI, otra denominación para el FIPA) "está causando una profunda preocupación en Canadá. Un ambiente de inversión estable y transparente es fundamental para el éxito de la inversión canadiense en Ecuador" (Moore, 2010a). En marzo de 2012, el viceministro para las Américas, Jon Allen, fue a Ecuador para encontrarse con sus pares y subrayar la importancia del FIPA para Canadá, y luego de anunciar la posible llegada de mayores inversiones canadienses en recursos naturales e hidroelectricidad, volvió a su país con confianza en que el Acuerdo no se cancelaría (*El Comercio*, 03/03/2012).

Los usos de la ayuda al desarrollo

En 2005, antes de que Correa fuera electo, la Agencia de Desarrollo Internacional decidió clausurar el programa bilateral de ayuda (el último programa se extinguió finalmente en 2010) cuando el gobierno liberal en Canadá decidió concentrar su ayuda en un grupo más reducido de países. El gobierno de Harper continuó con esta estrategia, pero cambió el enfoque regional hacia los Andes, sin incluir a Ecuador. La Agencia de Desarrollo Internacional se

concentró en Bolivia, Colombia y Perú porque se pensaba que estos países tenían gobiernos susceptibles de adoptar políticas de libre comercio, y la ayuda al desarrollo era vista como una herramienta para lograr ese tipo de objetivos políticos (Tabah, 2009). La decisión original de los liberales canadienses de terminar con la ayuda a Ecuador fue continuada por los conservadores, y aparentemente la propia Agencia de Desarrollo Internacional estaba de acuerdo. En otro ejemplo de la politización de la ayuda al desarrollo canadiense, el fin del programa bilateral de ayuda se transformó en un asunto de preocupación entre la Agencia de Desarrollo Internacional, Relaciones Exteriores y la industria minera tras la elección de Correa, y particularmente cuando el nuevo Presidente llamó a Canadá a aumentar su ayuda al desarrollo. La discusión se centró en si el programa bilateral podía ser revivido, y si no era así, qué tipo de programa podría tomar ese lugar.

Al tiempo que se asumía que algún tipo de ayuda era importante para apoyar la expansión del capital canadiense, la discusión giraba en torno a si la Agencia de Desarrollo Internacional podría servir para responder a las amenazas contra la industria minera o para apoyar a las mineras a través de promover prácticas de responsabilidad social corporativa o a través de "intercambios indígenas" entre los dos países (Lévesque, s/f). La presión para replantear la orientación hacia Ecuador de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) vino de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT), que está en contacto más regular y directo con los inversionistas canadienses, y que quería que se reiniciara el programa bilateral. Los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Internacional, a su vez, tenían dudas acerca de esto, dado que ya había comenzado el proceso de extinción de los programas. Una ayuda bilateral de algún tipo, decían los funcionarios de Relaciones Exteriores, "sería positivo para ayudar a nuestros intereses comerciales" (Embajada de Canadá, 2009). Al final, el programa bilateral no fue reiniciado, pues el dinero de la ayuda al desarrollo ya había

sido asignado y el expediente de ayuda bilateral de la Agencia de Desarrollo Internacional ya había sido cancelado. La discusión se trasladó a la cuestión de cómo llenar este hueco.

Los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Internacional hicieron notar que cuando se discutiera con el gobierno ecuatoriano habría que resaltar los programas multilaterales en los que Canadá participaba, pero claramente esto no era suficiente para Relaciones Exteriores. Se discutió también aumentar el financiamiento del Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales (CFLI, pagado por la Agencia de Desarrollo Internacional pero administrado por las embajadas). Una opción era duplicarlo a 200 mil dólares canadienses (de cualquier forma un monto muy pequeño comparado con lo que un programa de *Country of Focus* implicaría) para "permitir un involucramiento más estratégico" (Tabah, 2008).

Cuando el viceministro para las Américas, Jon Allen, viajó a Ecuador en marzo de 2013 para discutir el FIPA, sugirió que la ayuda canadiense podría continuar por fuera del marco de la Agencia de Desarrollo Internacional para ayudar a desarrollar el sistema regulatorio ambiental y minero ecuatoriano (*El Comercio*, 03/03/2012). De hecho, este proyecto fue discutido por los funcionarios de Relaciones Exteriores y la Agencia desde por lo menos el año 2009, cuando vieron una posibilidad luego de que Correa hizo algunos comentarios respecto a reforzar las relaciones bilaterales con Canadá. Esto fue visto como una oportunidad de influir sobre la política minera en el marco de la responsabilidad social corporativa (Embajada de Canadá, 2009). En este mismo período, la Agencia de Desarrollo Internacional financió un curso de promoción de la inversión extranjera para llamada Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei), impartido por un exdiplomático canadiense (Autor desconocido, 2009c). Corpei es una organización basada en Guayaquil cuyo objetivo es desarrollar las relaciones entre el gobierno y el capital privado, bajo la idea de promover la inversión extranjera y la inserción de Ecuador en el mercado mundial.

Conclusión

Este capítulo ha intentado dar cuenta del papel jugado por el imperialismo canadiense en su intento de socavar cualquier tipo de democracia sustantiva, como parte de su estrategia de protección de las inversiones de las corporaciones canadienses, así como de los intereses estratégicos geopolíticos de largo plazo en Ecuador y en los Andes en general. Hemos intentado mostrar las complejidades y las sutilezas de la coyuntura actual, en la que Correa se separa de la demandas de los movimientos sociales al tiempo que choca con el imperialismo en algunas cuestiones. La Embajada de Canadá en Quito y los políticos en Ottawa, junto con los representantes de las corporaciones presentes en el país, han intentado navegar en estas aguas y salir adelante, buscando siempre el mejor resultado para el capital canadiense. Correa no es su interlocutor preferido, pero los canadienses se han dado cuenta de que su gobierno puede satisfacer sus principales necesidades en cuestiones como la minería. El Estado y el capital canadienses han sido incapaces de obtener todo lo que querían, pero este capítulo ha mostrado la medida en la que los componentes antineoliberales del mandato constitucional minero ecuatoriano han sido derrotados y cómo se ha establecido un nuevo marco legal favorable a las compañías extranjeras. Sin embargo, el poder canadiense no es omnipotente o inmutable. La principal amenaza al imperialismo canadiense, y por tanto la principal reserva de esperanza, es la resistencia popular que, a pesar de los intentos de reprimirla un día o de cooptarla el siguiente, sigue sin ser domesticada.

Venezuela: la amenaza de un buen ejemplo

El municipio de La Vega se encuentra en las faldas de las montañas del oeste de Caracas. Unas 13 mil personas viven sociológicamente separadas de El Paraíso, el vecindario aledaño de clase alta del que provienen los clientes del lujoso centro comercial que separa a las dos comunidades. En La Vega, el 20 por ciento de las familias viven con 125 dólares al mes, aunque el ingreso promedio familiar es de 409. Más de un tercio de las cabezas familiares son madres solteras. La economía informal del barrio da sustento a un proletariado de origen africano, indígena y europeo (Fernandes, 2010: 13-15).

En Venezuela, uno de los países más urbanizados de América Latina, este tipo de familias constituyen la base demográfica del chavismo. Hace seis años, el periodista Jacobo Rivero le preguntó a una mujer negra de 50 años de La Vega qué creía ella que pasaría si Chávez muriera. El proceso bolivariano "es irreversible", le dijo ella, sus raíces son demasiado profundas para que sea destruido por la ausencia del comandante. En los años que siguieron a la llegada de Chávez a la presidencia —una época de participación política sin precedentes y de educación para los pobres—, esta mujer había aprendido, por primera vez, la historia de la esclavitud africana y las historias de sus ancestros. Las raíces históricas de la injusticia estaban siendo desmitificadas, sus causas entendidas. La dignidad de los barrios miseria había sido restaurada, y su confianza política estaba en alza. Para ella, había

razones detrás del mantenimiento de la ignorancia de los desposeídos (Rivera, 2013). "El pueblo venezolano se levantó", dice el politólogo George Ciccariello-Maher, "y es difícil, si no imposible, decirle a un pueblo que se ha puesto de pie que se vuelva a poner de rodillas" (Ciccariello-Maher, 2013a).

Los residentes de La Vega, Petare, San Agustín y 23 de Enero, entre otros barrios pobres de Caracas, comenzaron un período de duelo público cuando el vicepresidente Nicolás Maduro anunció el 5 de marzo de 2013 que Chávez había muerto a sus 58 años, tras 14 como presidente, y después de luchar dos años contra el cáncer (*La Jornada*, 05/03/2013). La simpatía hacia este líder improbable estaba en la venas de las clases populares de la Venezuela contemporánea.

Hugo Chávez entró en funciones como presidente en febrero de 1999, y tras su fallecimiento fue sucedido por su mano derecha Nicolás Maduro, su exvicepresidente. Venezuela es el segundo principal mercado para las exportaciones canadienses en Sudamérica, y el acumulado de inversiones canadienses en este país pasó de 800 a mil millones CAD entre 2007 y 2012. El interés del capital extranjero en domesticar el radicalismo del régimen de Chávez no es menor. Uno de los objetivos de la embajada canadiense, tal y como lo explica un informe de *Country Strategy*, es "defender y promover los intereses empresariales de Canadá" (Embajada de Canadá, 2006a), una tarea cuya importancia emana de la selectiva aprehensión del gobierno chavista hacia la influencia del capital extranjero, y de sus actitudes públicamente hostiles hacia el imperialismo. Tal vez buscando un rayo de luz entre el cielo nublado del chavismo, la Embajada le escribió a Ottawa en 2006 que "las buenas noticias para los inversionistas y exportadores canadienses es que Venezuela sigue siendo muy dependiente del capital y la tecnología extranjeras, especialmente en las industrias extractivas". La verdad es que para muchas compañías canadienses las cosas han sido bastante más difíciles, y el período chavista ha sido uno de frustración y de falta de certezas (Embajada de Canadá, 2007a). La dependencia no ejerció su poder como Canadá hubiera querido.

Este capítulo comienza con una descripción de los intereses de los inversionistas canadienses en Venezuela, y analiza la preocupación geoestratégica más amplia de que este ejemplo de confrontación con el neoliberalismo se extienda a otras partes de la región. A partir de ahí, busca analizar el legado doméstico del chavismo, separándose de la demonización de la que ha sido víctima en la retórica de los grandes medios occidentales y de los políticos imperialistas. Posteriormente, el capítulo examina críticamente las afirmaciones de que Chávez es el responsable del giro venezolano hacia el autoritarismo, el clientelismo y la decadencia política. Sobre esta base histórica, procederemos a diseccionar el papel de Canadá en presentar al expresidente como un dictador. A partir de la evaluación del historial diplomático canadiense respecto a Chávez, otra sección explora el papel jugado por los medios de comunicación de Canadá en difamar al gobierno venezolano. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre la política exterior canadiense hacia Venezuela tras la muerte de Chávez.

El capital canadiense en Venezuela

Tres compañías canadienses demandaron al gobierno de Venezuela bajo el Acuerdo de Protección a la Inversión Extranjera (FIPA) entre Canadá y este país. Dos de estas demandas tuvieron que ver con el principal depósito de oro de Venezuela, Las Cristinas. La canadiense Placer Dome (después comprada por Barrick Gold) era copropietaria de Las Cristinas junto con una compañía estatal venezolana. Cuando Placer vendió su parte a Vannessa Ventures —que posteriormente se cambió el nombre a Infinito Gold y quiso demandar al gobierno costarricense por la mina de Las Crucitas— Venezuela finiquitó la copropiedad de la nueva empresa alegando que la venta había sido ilegal. Vannessa Ventures respondió con una demanda de más de mil millones de dólares, aunque el juicio fue descartado en 2013 cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, y a pesar de la intervención

diplomática canadiense a favor de la compañía, encontró que Venezuela no violó el FIPA (Crooks y Orozco, 2013; Canadá, 2006). Luego de sacar a Vannessa Ventures de Las Cristinas, el gobierno venezolano le dio la concesión a otra compañía canadiense, Crystallex International, lo que dio origen a una nueva saga. La inversión de Crystallex estuvo plagada de problemas y falta de certezas durante más de una década. Al gobierno venezolano le tomó más de tres años y medio aprobar su estudio de impacto ambiental, e incluso después de esto la compañía siguió enfrentando obstáculos por parte del gobierno.

Llegó la fecha en que la compañía había proyectado para comenzar la producción, en 2008, y las cosas estaban lejos de haber sido resueltas. En noviembre de ese año, el gobierno venezolano anunció que estaba planeando nacionalizar Las Cristinas, pues quería aumentar sus reservas áureas tras de la crisis económica mundial y el concomitante aumento del precio del oro en el mercado mundial. La nacionalización nunca llegó, pero tres años de ambigüedad carcomieron al proyecto y la inversión de Crystallex terminó en un limbo. La sentencia de muerte llegó en 2011, cuando el gobierno venezolano dio por terminados los derechos de la compañía a explotar la mina. Crystallex inició un juicio, amparado en el FIPA, por 3.800 millones CAD. Con una deuda impagable a cuestas, la compañía tuvo que declararse en bancarrota y salió de la Bolsa de Valores de Toronto. En 2012, Venezuela inició un acuerdo con una compañía estatal china para desarrollar Las Cristinas (Taylor, F., 2007: B14; *The Globe and Mail*, 01/05/2008: B3; Hoffman, 2008b: B1; *National Post*, 25/02/2012: FP4; Ebner, 2011: B11; Luke, 2006: A41; *National Post*, 24/12/2011: F2).

La experiencia de Crystallex simboliza el clima de inversiones que los canadienses tanto querían evitar. En 2009, por ejemplo, el permiso de Gold Reserve Inc. fue rescindido por el gobierno luego de que el Ministerio de Recursos Naturales y Ambientales le hubiera dado luz verde en 2007. Su respuesta fue demandar a Venezuela por dos mil millones de dólares en daños (Macleod, 2007: FP1; *The Province*,

26/05/2009: A20). PetroCanada, asimismo, dejó el país en 2007 debido a la falta de certezas en el sector petrolero.

El enojo de Canadá con el desafío venezolano al imperialismo neoliberal no se restringía a su política doméstica y a la suerte de las inversiones de Canadá. Los políticos y diplomáticos canadienses han estado acaso más preocupados con las implicaciones regionales que el chavismo puede tener para sus intereses, implicaciones regionales entendidas en términos tanto de lo que el "socialismo del siglo XXI" puede significar fuera de Venezuela, y de los esfuerzos de Chávez por influir sobre la economía política de la región para aumentar la autonomía latinoamericana frente a las potencias del Norte. La política canadiense hacia Venezuela ha estado determinada por estas dos preocupaciones geopolíticas. La carta que los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional le mandaron al nuevo embajador canadiense, Perry Calwood, tras su designación, era bastante transparente: "La presencia canadiense en Venezuela es nodal para nuestros intereses estratégicos generales" (Morin y Edwards, 2007).

Los reportes *Country Strategy* de la embajada canadiense en Caracas estaban perfectamente conscientes del rol jugado por Chávez dentro de la esfera de los gobiernos de centro izquierda latinoamericanos. Uno de esos reportes apunta que "Venezuela es un jugador regional cada vez más importante, que trabajaba hombro con hombro con Cuba así como con varios líderes recientemente electos, como el presidente boliviano Morales, el ecuatoriano Correa y el nicaragüense Ortega" (Embajada de Canadá, 2007b). Pero su influencia potencial se extendía más allá de estos aliados, e incluía los tentáculos lanzados a "la región del Caribe, donde se le provee a los Estados caribeños de petróleo subsidiado bajo iniciativa Petrocaribe" (Embajada de Canadá, 2007c). Éste es un acuerdo petrolero firmado en 2005 entre varios Estados del Caribe y Venezuela, bajo el cual los primeros tendrían acceso preferencial al petróleo venezolano, fuera del mercado abierto.

En 2013, Petrocaribe reforzó sus vínculos con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para promover una

alianza más profunda que las puras transacciones petroleras. El uso del petróleo subsidiado para granjearse aliados en la región estaría omnipresente en los análisis de Relaciones Exteriores sobre el gobierno de Chávez, lo que provocó que su División de Relaciones Interamericanas analizara el potencial de Canadá de contener la influencia regional venezolana a través del uso político de los recursos naturales canadienses: "Como una potencia energética emergente [censurado] Canadá es un socio serio y creíble que puede ofrecer un modelo diferente, uno en el que la gobernanza democrática es eficiente, transparente y responsable" (Ruta, 2007). Sin embargo, la realidad a la que los estrategas del Estado y el capital canadiense tenían que enfrentarse era, como la embajada en Caracas admitió, "la creciente popularidad de Chávez entre las masas de la región" (Embajada de Canadá, 2007b).

Haití es uno de los países en los que el despacho de Relaciones Exteriores identificó que la influencia de Chávez podría extenderse, y uno en el cual Canadá había jugado un rol de primer orden reforzando el orden imperialista. Ottawa y las embajadas en Puerto Príncipe y Caracas siguieron cada movimiento de Chávez durante su visita a la isla en marzo de 2007, y vieron con preocupación los intentos del presidente venezolano de acercarse a su par haitiano. Fue particularmente preocupante el acuerdo de financiamiento por 20 millones de dólares en el cual Venezuela y Cuba ayudarían al sector salud y energético. Aunque no fuera tanto dinero en comparación con la ayuda canadiense, "si el proyecto es llevado a buen término", escribió la embajada canadiense en Puerto Príncipe, "muy probablemente tendrá resultados muy visibles" que reforzarán la credibilidad de Venezuela y de Cuba en una nación pobre en la que la ayuda canadiense se ha enfocado en el altamente problemático sector de la seguridad[186].

Los políticos y estrategas canadienses estaban alertas ante la posible influencia de Chávez en Centroamérica, en el contexto de la

186 La cita es de la embajada canadiense en Puerto Príncipe (Embajada de Canadá, 2007d; Autor desconocido, s/f b).

elección de gobiernos de centro-izquierda en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, y ante el crecimiento de los movimientos sociales contra las compañías canadienses. El miedo a Chávez y a una nueva izquierda centroamericana a veces se amalgamaba en una sola cosa, pues éste era visto como el "instigador" del descontento contra el neoliberalismo. Como dijimos en el capítulo acerca de Honduras, el miembro conservador del Comité Permanente para las Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Dave van Kesteren, culpó al propio Zelaya del golpe de Estado que sufrió en 2009 por haberse acercado a Chávez, con el argumento de que

> estamos en una verdadera lucha por el poder, y es por lo que nosotros creemos que debe ser una sociedad libre: tener libertad de movimiento de bienes, lo que llamamos la mano invisible, contra el total control gubernamental, o, en otras palabras, libertad contra totalitarismo, prosperidad contra pobreza (SCFAID, 2011g: 18).

Antes de que Van Kesteren hiciera su aparición como soldado de la Guerra Fría, en 2007 un reporte del Secretariado de Evaluación e Inteligencia de la Oficina del Concejo Privado sobre la influencia de Chávez en Centroamérica (publicado pero altamente censurado) observaba que "el compromiso de Chávez con exportar su revolución [...] ha chocado con algunos gobiernos pragmáticos [...]". "Sin embargo", alerta el reporte, "es poco probable que estos fracasos iniciales lo detengan y seguirá metiéndose en los asuntos locales de Centroamérica". Canadá, por supuesto, nunca "se mete" en esos asuntos. El reporte posteriormente expresa su preocupación con que las encuestas siguen mostrando que "Chávez tiene una alta aceptación popular". Concluye con que "la derrota de Chávez" —es decir, la derrota de la izquierda centroamericana, que no termina de recuperarse de las sangrientas derrotas de los años setenta a noventa— "es una señal positiva para los intereses canadienses en ayudar al desarrollo de buenos gobiernos, y en negociar un acuerdo de libre comercio con la región" (Intelligence

Assessment Secretariat, 2007). El golpe en Honduras en 2009, la peor derrota para la izquierda durante este período, le ofreció también a Canadá la mejor oportunidad de cristalizar un acuerdo comercial regional. El pequeño asunto de los más de 300 asesinatos de disidentes o campesinos no fue suficiente para que los funcionarios canadienses repensaran su relación con el gobierno de Porfirio Lobo.

¿Quién fue Chávez?

En vivo y en directo, en la televisión nacional, el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro se atragantó. Hugo Chávez, improbable presidente, nacido en 1954 entre la pobreza rural de Sabaneta, en el estado de Barinas, había muerto. Para sus enemigos de dinero y tez clara, era el diablo en la tierra. Para muchos venezolanos pobres, su ideología contradictoria y ecléctica —una mezcla laberíntica inspirada en Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, un cierto militarismo de izquierda caudillista, anti-imperialismo, socialismo burocrático de inspiración soviética o cubana, socialcristianismo, economía neoestructuralista pragmática, y corrientes de socialismo autónomo— no representaba ningún problema en tanto Chávez viniera de abajo y hablara como ellos, y se hiciera de los enemigos apropiados.

Hay algo en Chávez que parece haber dado rienda suelta a una mayor mediocridad de lo normal en la gran prensa occidental. ¿Cómo explicar si no, el éxito de un periodista como Rory Carroll con sus fantasías distópicas sobre Venezuela expresadas en las páginas de *The Guardian*, el *New York Times* y el *New Statesman* en las semanas que siguieron a la muerte de Chávez[187]? Según Carroll, las clases populares venezolanas habían sido los títeres manipulables y silenciosos del "autócrata electo", un hombre que en realidad era mitad payaso mitad monstruo (Carroll, 2013c).

187 Rory Carroll fue durante muchos años el corresponsal de *The Guardian* en Venezuela. Es el autor de *Comandante: Hugo Chávez's Venezuela* (Carroll, 2013b).

Si alguna vez alguien pudo pensar que Chávez surgió en reacción al neoliberalismo de una élite decadente organizada en los impopulares partidos Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, de las fracturas en el orden político creadas por la explosión popular antineoliberal tras las revueltas del Caracazo de 1989, y del auge un tanto folklórico de un militar disidente hasta obtener el aura de héroe popular tras un intento fallido de golpe de izquierda contra el *establishment*, ahora, gracias a Carroll, podemos vislumbrar la verdad (Ellner, 2009; Fernandes, 2010; Ciccariello-Maher, 2013b; Wilpert, 2007; Gonzalez, 2014; Spronk y Webber, 2014)[188]. Para Carroll, la idea de que Chávez es el resultado del chavismo —un movimiento articulado en torno a una serie de exigencias de cambio social, liberación nacional y democracia participativa— es un fraude. La consigna de "¡Nosotros creamos a Chávez!" es una peligrosa ilusión popular[189].

"La autopercepción dramática de su propio significado", nos dice Carroll, es lo que "ayudó a llevarlo al poder como la reencarnación del libertador Simón Bolívar" —aquí está el tema del caudillo autocrático de carisma de cocodrilo—. Fue esta "actitud dramática" la que "dividió profundamente a los venezolanos" más que, digamos, el desarrollo desigual y combinado del capitalismo neoliberal en un país dependiente —el tema de la polarización impuesta—. "Gastó de manera extravagante en clínicas de salud, escuelas y subsidios" —el tema del clientelismo populista para pobres que no se lo merecen—. "Las elecciones no fueron justas" —el tema del autoritarismo—. Él "se hizo con el control de las ondas de telecomunicación" —el tema de la monopolización de los medios—. En última instancia,

188 Para un buen contexto histórico y un resumen analítico del auge y trayectoria del proceso bolivariano en Venezuela, ver Ellner (2009); Fernandes (2010); Ciccariello-Maher (2013); Wilpert (2007); Gonzalez (2014); Spronk y Webber (2014).

189 G. Ciccariello-Maher habla sobre esta noción popular en los movimientos sociales venezolanos: la idea de que ellos hicieron a Chávez, y no al revés (Ciccariello-Maher, 2013b).

sin embargo, su maldad era banal, pues "a final de cuentas" era "un pésimo administrador" (Carroll, 2013a). "Ahora que Venezuela inicia un nuevo capítulo en su historia", dijo Barack Obama tras la muerte de Chávez, "los Estados Unidos seguirán comprometidos con políticas que promuevan los principios democráticos, el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos", todos ellos, por simple asociación, ausentes en Venezuela (Johnson, 2013). "En este momento clave", dijo el primer ministro canadiense Stephen Harper, "espero que el pueblo de Venezuela pueda construirse un mejor futuro, basado en los principios de la libertad, la democracia, el imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos" (Blanchfield, 2013a).

Estos comentarios no eran nada inocentes, pero fueron bastante más moderados que los que el mismo Harper hizo en 2009, justo antes de una reunión en la Cumbre de las Américas. Ahí, dijo que Chávez representaba una corriente de líderes izquierdistas en la región quienes "están opuestos a políticas económicas estables, quieren volver al socialismo de la Guerra Fría […], quieren atrasar las manecillas del reloj del progreso democrático que se ha vivido en el hemisferio […]. No hay nada allá afuera que afirme que administrar un Estado autoritario con base en petrodólares te vaya a llevar muy lejos en el largo plazo" (*The Canadian Press*, 05/03/2013). El mensaje de estas declaraciones es que los buenos administradores prefieren la democracia liberal. La figura del buen administrador del siglo XXI está posiblemente representada por un tecnócrata designado por los mercados y no por los ciudadanos, como el primer ministro italiano Mario Monti, cuya derrota en las recientes elecciones italianas fue lamentada por los mismos medios de comunicación que demonizan a Chávez. *The Economist* escribió con enojo refiriéndose al necio electorado italiano que "se niega a aceptar las causas últimas del sufrimiento de su país", lo que alcanzaba su máxima expresión en "su negativa a apoyar a Monti" (*The Economist*, 02/03/2013). La oleada de sentimiento antichavista por parte de los amos del mundo

está enraizada en la negativa de los pobres y los desposeídos, de los explotados y los oprimidos, la negativa a seguir como siempre, de someterse al capitalismo neoliberal y seguir arrodillados ante el imperialismo. En otras palabras, es verdad que, desde ese punto de vista, Chávez era un pésimo administrador.

El 7 de marzo de 2013, los medios de la oposición conservadora venezolana reportaron cientos de miles de personas en las calles de Caracas, de luto ante la partida de Chávez. Un editorial en el diario mexicano *La Jornada* hablaba de millones de personas. Una rápida búsqueda en *Google* o *Youtube* arroja imágenes de verdaderas mareas de simpatizantes. A través del prisma de Carroll, estas multitudes han malentendido completamente el legado de los 14 años de Chávez: "La decadencia, disfunción y ruina aflige a la economía y a todas las instituciones estatales" (Carroll, 2013a). Seguramente esos venezolanos no son conscientes de la "profunda inseguridad" en la que Chávez ha abandonado a su país. Deben estar ciegos ante el "malestar burocrático y la corrupción" que los rodea (*ibíd.*).

¿Autocracia, clientelismo y decadencia?

Mark Weisbrot, un economista socialdemócrata radicado en los Estados Unidos, se quejó una vez de que Venezuela "es posiblemente el país del que se habla con mayor inexactitud en el mundo" (Weisbrot, 2012). En 14 años, Chávez ganó 14 competiciones electorales de distinto tipo, de las cuales 13 fueron triunfos con amplios márgenes. De acuerdo con el expresidente americano Jimmy Carter —quien ha monitoreado 92 elecciones en el mundo en su rol de director del Centro Carter— las elecciones venezolanas son "las mejores del mundo" (*ibíd.*). Durante la elección presidencial de 2006, fue el candidato de la oposición Manuel Rosales quien se vio involucrado en actos de clientelismo para ganarse el voto de los pobres. El caso más sonado fue la oferta de 450 dólares al mes a tres millones de venezolanos de escasos recursos a través de unas tarjetas de crédito

negras, como parte de un plan asistencialista llamado *Mi Negra*. A pesar de eso, los potenciales receptores favorecieron a Chávez con el 62 por ciento del voto (Grandin, 2013). El mantra de la "supresión" de los medios de comunicación es otro tema común de la oposición. Un reporte representativo de esta posición, del Comité para la Protección de los Periodistas (basado en los Estados Unidos), afirmaba que el gobierno de Chávez jalaba los hilos de un "imperio mediático" (Weisbrot, 2012). En realidad, la televisión estatal venezolana llega apenas a un cinco u ocho por ciento de la población. Por supuesto, Chávez puede interrumpir la programación de las otras cadenas cuando quiere darle un mensaje a la nación (bajo una ley anterior a su gobierno), cosa que hace con regularidad. Pero la oposición sigue teniendo la mayor parte de los medios de comunicación, incluyendo la radio y los periódicos —por no hablar de la mayor parte de la riqueza del país— (*ibíd.*).

Al caminar por las calles de la capital en los días previos a la elección presidencial de octubre de 2012, con anuncios espectaculares y afiches del candidato de derecha Henrique Capriles en todos lados, o al ver los puestos de periódicos vendiendo por millares publicaciones anunciando a ocho columnas el último desastre provocado por el régimen de Chávez, hasta al periodista más crédulo le costaría trabajo encontrar a algún fantasma de Stalin[190].

En el fondo, para explicar la popularidad de Chávez entre las clases populares no se necesita ni de la complejidad de la mecánica cuántica ni de teorías de psicología pop sobre masas atontadas por los hechizos de un líder carismático. Venezuela tiene en su subsuelo una de las reservas petrolíferas más grandes del mundo. Otros petroEstados, como los del Golfo, han usado la renta para desplegar el mal gusto y los proyectos grotescos de los ultra ricos —rascacielos, parques temáticos y archipiélagos artificiales— construidos sobre los

190 Jeffery R. Webber, uno de los autores de este libro, ha hecho trabajo de campo en Venezuela en varias ocasiones y entre los años 2008 y 2013.

hombros de migrantes semiesclavizados del subcontinente indio. Al mismo tiempo, se han cobijado bajo el ala del imperio estadounidense —al apoyar sus guerras e intentar contener las revueltas árabes—. El Estado venezolano ha tenido otras prioridades durante los últimos 14 años (James, 2012). Tras recuperarse del profundo colapso en el PIB de los años 2002 y 2003 —que llegó a decrecer— con cifras del 8,9 y 7,8 por ciento, respectivamente, y como consecuencia de una crisis política producida por un golpe de Estado fallido y un paro patronal petrolero, el PIB volvió a subir gracias a los altos precios del petróleo a 18,3, 10,3, 9,9 y 8,2 por ciento entre 2004 y 2007. Hubo una caída de cerca del cinco por ciento en 2008 tras la caída del crudo —de 118 a 58 dólares el barril—. Seis meses después, los precios del petróleo ya se habían recuperado y una serie de políticas contracíclicas llevaron a la economía venezolana a volver a crecer en 4,2 por ciento en 2011 y 5,6 por ciento en 2012 (Weisbrot y Johnston, 2012; *The Economist*/ EIU, 03/2013b: 8).

Después de un primer período de modestas políticas públicas entre 1999 y 2002, la reacción de la derecha venezolana provocó una imprevista autoorganización de la gente en los barrios pobres urbanos de Caracas y de las principales ciudades. El cascarón de la primera coalición electoral de Chávez empezó a llenarse y a radicalizarse en la medida en la que se crearon decenas de organizaciones populares y se revitalizaron los movimientos sociales a partir de 2003. Nuevas formas de asambleas populares, iniciativas de las bases obreras en los sindicatos y las comisiones de fábrica, experimentos de control obrero, concejos comunales y municipales, y comunas, fueron una inédita inyección de sangre y energía a la democracia venezolana. Los pobres y los desposeídos estaban enteramente con Chávez en contra del intento de golpe de Estado de los *escuálidos* (así nombraba Chávez a los partidos de oposición), y se organizaron contra las maquinaciones de la intervención estadounidense y las presiones del capital internacional, pero también empezaron a ir más allá de los estrechos límites de la política gubernamental.

Desde el Estado empezaron a fluir más recursos para alimentar la expansión de los sistemas de salud y educación[191]. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la pobreza se redujo en 37,6 por ciento durante la presidencia de Chávez, del 42,8 en 1999 al 26,7 por ciento en 2012. La pobreza extrema se redujo en 57,8 por ciento, del 16,6 al 7 por ciento entre 1999 y el 2011 (Weisbrot y Johnston, 2012: 26). Si estos índices de pobreza por ingresos son expandidos para incluir cuestiones como la escolaridad —que se duplicó en comparación con la que existía en 2004—, o la entrada de millones al sistema de salud, o los subsidios en créditos para casas de habitación, es fácil ver que la narrativa de la decadencia social no se sostiene. Estas políticas explicaban la marea roja de personas de luto en las calles de Caracas el 7 de marzo de 2013, algo que no puede hacerse a un lado como si se tratara de una ilusión de tontos e ignorantes.

Canadá y el argumento del autoritarismo

Canadá y Estados Unidos circularon la idea de que Chávez era un gánster autoritario que se mantenía en el poder gracias a una combinación de promesas populistas, intimidación y represión. La perspectiva de la embajada canadiense estuvo completamente dominada por estas ideas. El mandato que el embajador canadiense recibió de los altos funcionarios de Relaciones Exteriores emanaba de esta visión de Chávez, y, en general, la estrategia de la Embajada consistió en apoyar a organizaciones críticas del gobierno. Las visiones de Ottawa y la Embajada —la primera, al proveer un mandato y una estrategia, y la segunda, en respuesta a ese mandato, entregando reportes e inteligencia— eran una y la misma: en contradicción patente con toda la evidencia disponible, ambas declararon que Chávez era un autoritario represor con ambiciones regionales. El reporte *Country Strategy* de la

191 Estos programas sociales son discutidos en Wilpert (2007) y en Bruce (2009). Sobre las distintas formas de poder popular en la periferia de Caracas, ver Fernandes (2010), Ciccariello-Maher (2013) y Azzellini (2010: 8-31).

Embajada de 2008-2009 describe a "la Revolución Bolivariana comandada por el Presidente Hugo Chávez" como "un intento de convertir a Venezuela en un estado socialista autoritario" en el que "el gasto público del Estado seguirá estando definido por las preocupaciones de las clases bajas" (Embajada de Canadá, 2007a).

La implicación de todo esto, antes que nada, es que enfocarse en "las preocupaciones de las clases bajas" es en sí mismo equivocado. Para la Embajada, esas "clases bajas" se oponen a la presencia del capital canadiense, y un gobierno que las tome en serio inevitablemente tendrá una economía frágil, dependiente de la intervención del Estado y la distribución de la riqueza. En segundo lugar, y de una manera todavía más absurda, el simple acto de enfocarse en "las preocupaciones de las clases bajas" estaría atado a una deriva autoritaria. En esta visión del mundo, maniquea y fantasiosa, en que el sentido común es puesto patas para arriba, cualquier límite al poder y los privilegios de los ricos (incluyendo a los inversionistas extranjeros) es, en sí mismo, antidemocrático. Sin embargo, es verdad que durante el gobierno liberal en Canadá, y todavía en el primer año de Stephen Harper, la Embajada y Ottawa conscientemente contrastaron su política hacia Venezuela con la de los Estados Unidos, la cual rápidamente se convirtió en una conflagración verbal y diplomática entre los dos gobiernos. Durante este período, los reportes *Country Strategy* anuncian el deseo de "mantener los canales de comunicación abiertos" y seguir siendo críticos. Esta fue una estrategia calculada del gobierno canadiense, cuyo objetivo consistía en mantenerse lo más lejos posible del radar y evitar el rechazo público del gobierno venezolano y el oprobio ante los pueblos latinoamericanos en los que Estados Unidos cayó debido a su postura tan agresiva ante Chávez.

Sin embargo, no hubo en ningún momento un esfuerzo genuino por establecer un diálogo con Chávez. Canadá prefirió acercarse a funcionarios que parecían ser más suaves, y usó las pocas reuniones que tuvo con éstos para criticar al gobierno venezolano. Parece ser que la estrategia consistía en poner a prueba el compromiso de varios

de ellos con las ideas más radicales del proceso bolivariano. Así, por ejemplo, uno de los objetivos declarados de la visita del ministro Peter Kent a Venezuela en enero de 2010 era establecer una relación personal con el vicepresidente Nicolás Maduro (Embajada de Estados Unidos, 2009; Autor desconocido, s/f c; Autor desconocido, s/f d). A fin de cuentas, el gobierno de Harper no creía que a Chávez se le debiera tratar de un modo suave. Harper veía al presidente venezolano como una amenaza peligrosa que requería ser contenida directamente, y rápidamente se hizo públicamente hostil al régimen venezolano, lo que le granjeó respuestas públicas de Chávez y la reputación de ser imprudente y entrometido. En clara referencia a Venezuela, Harper declaró en un discurso de 2008 que "aunque muchas naciones buscan el desarrollo democrático y las reformas de mercado, otras vuelven a caer en el nacionalismo económico y el proteccionismo, en el populismo político y en el autoritarismo" (Harper, 2008). Otra vez, los límites a la libertad del mercado y de los inversionistas son amalgamados con el autoritarismo.

Peter Kent, el ministro de Estado para las Américas, quien como vimos antes le echó la culpa del golpe de Estado en Honduras al propio presidente depuesto Manuel Zelaya, jugó un papel de primera línea en pintar a Chávez como a un autoritario. En enero de 2010, cuando seis cadenas televisivas fueron suspendidas, Kent salió a denunciar "el acortamiento del espacio democrático en Venezuela" y las "violaciones al derecho a la libertad de expresión y otras libertades básicas", a pesar de que los medios de comunicación siguen siendo dominados por las cadenas privadas, antichavistas, y de que la libertad de expresión nunca estuvo en peligro durante el gobierno de Hugo Chávez (FAIT, 2010f). Los seis canales de televisión de paga en cuestión fueron sólo temporalmente suspendidos, pues no cumplieron con la Ley de Responsabilidad Social en la Radio y la Televisión. Esta ley busca regular los parámetros y estándares de la programación para adultos y niños al prohibir contenidos racistas y sexistas e incitaciones a la violencia, limita los espacios comerciales y obliga a los canales a emitir anuncios

gubernamentales considerados esenciales. La mayoría de los canales de cablevisión no se ven afectados por la ley, pero para aquellos con más del 70 por ciento de contenido doméstico, ésta sí aplica (Janicke y Sugget, 2010).

Chávez respondió a la provocación del gobierno canadiense criticando a los conservadores por clausurar el parlamento en Ottawa. En marzo de 2010, Kent volvería a criticar el "acortamiento del espacio democrático en Venezuela", y sugeriría que "el poder judicial está siendo usado para amenazar a las voces críticas del gobierno", tras el arresto del exgobernador del estado de Zulia, Oswald Álvarez Paz, en marzo de 2010 (FAIT, 2010g). Álvarez Paz fue encarcelado y sentenciado a dos años de arresto domiciliario por "compartir información falsa" luego de que afirmó en la televisión que Venezuela "se había convertido en un refugio para narcotraficantes y terroristas" y "grupos subversivos y terroristas de todo el mundo", en una clara referencia a las FARC colombianas y a la ETA vasca, en un momento de tensas relaciones con Colombia y España. Álvarez Paz fue sentenciado por violar el artículo 296-A del Código Penal venezolano, que prohíbe "a cualquier individuo, a través de la palabra impresa, radio, televisión, correo electrónico o volantes, el usar información falsa para provocar pánico o ansiedad entre el colectivo general" (Rosales, F., 2011).

Durante la visita de enero de 2010, Kent se reunió con "representantes de la sociedad civil" (FAIT, 2010h). Los nombres de esos "representantes" no han sido publicados por el gobierno canadiense. Un asistente especial de Kent dijo que Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) no publicará los nombres de los grupos o los individuos con los que Kent se reunió para proteger su seguridad. "Al contrario de Colombia, en donde los derechos son protegidos", dijo —ignorando que ese país tiene la tasa más alta de asesinatos de sindicalistas en el mundo— "en Venezuela no lo son" (Comunicación personal con Eleanor Johnston, 09/02/2010). El episodio, más que mostrar el supuesto peligro que correrían esas personas, muestra que Kent

se reunió con las fuerzas de la oposición. Volveremos en un momento a las relaciones entre Canadá y los grupos opositores.

Ni siquiera la amplia base electoral del gobierno de Chávez —un componente clave para los estándares de cualquier democracia liberal— era un buen argumento para suavizar el argumento canadiense de que Venezuela estaba en el precipicio del autoritarismo. La cuarta reelección de Chávez en octubre de 2012 —con un amplio margen sobre el candidato de la oposición Henrique Capriles— no fue interpretada como una expresión de su duradera popularidad entre los votantes venezolanos. Harper no hizo ninguno de los gestos diplomáticos estándar de felicitación por su reelección como jefe de Estado.

Esta hostilidad es todavía más clara si se la pone de relieve frente a la calidez con la que Ottawa ha tratado a líderes regionales de otro color. Canadá felicitó a Porfirio "Pepe" Lobo tras su elección en noviembre de 2009, y anunció el regreso a Honduras de la normalidad democrática, a pesar de la ola de asesinatos políticos que acompañaron la llegada de Lobo a la presidencia; Otto Pérez Molina también fue felicitado tras su elección en Guatemala, a pesar de su responsabilidad en la campaña genocida contra los mayas durante la guerra civil, o del aumento en la represión política que siguió a su elección; Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron también felicitados con todas las formalidades diplomáticas tras sus respectivas victorias presidenciales en Colombia, a pesar del lastimoso estado en el que se encuentran los derechos humanos en ese país.

En otras palabras, el gobierno canadiense felicitó y mantuvo el diálogo con gobiernos con un historial de derechos humanos mucho peor que el de Chávez, al tiempo que este último fue constantemente acusado y criticado por Harper ante la "comunidad internacional". Canadá no podía simplemente ignorar que las elecciones de 2012 habían sido limpias bajo cualquier criterio, y por tanto se vio en la necesidad de aceptar que ésta "demostraba el compromiso del *pueblo* venezolano con la democracia" (FAIT, 2012g). Por supuesto, el nombre de Chávez estaba extrañamente ausente de ese elogio. Lo que es más preocupante

es que cuando los sindicalistas son los blancos de la violencia, como en el caso de los siete que fueron asesinados en Aragua entre 2008 y 2010 —víctimas de sicarios contratados por una multinacional, según la Unión Nacional de Trabajadores (Unete)— Canadá no dijo nada (Pearson, 2010). La violencia de la derecha no es motivo de preocupación, ni es vista como fuente de inestabilidad.

La verdad es que el hecho de que el gobierno canadiense etiquetara para siempre a Chávez como un autoritario habla más del gobierno canadiense que del propio Chávez. Venezuela, como hemos mostrado, era claramente una sociedad democrática, de hecho, más democrática que la estrecha democracia liberal canadiense, tanto sobre el papel como en la práctica. Para el gobierno de Harper y Relaciones Exteriores, ponerle límites al libre mercado, criticar al imperialismo o al neoliberalismo o intentar ir más allá de la democracia liberal son, por definición, indicadores de autoritarismo. Esta es claramente la lógica detrás del llamado a las armas del parlamentario conservador Dave van Kesteren contra la supuesta influencia de Chávez en Centroamérica, los comentarios en los que Harper amalgama el libre mercado y la democracia, y la importancia estratégica que Relaciones Exteriores le asigna a Venezuela. Los derechos de los inversionistas extranjeros, mercados completamente libres y la reducción de la participación popular a elecciones cada tantos años, esto es lo que el imperialismo canadiense entiende por democracia. Romper con estas estructuras —en términos de una mayor participación popular en el proceso político, o dándole mayor margen de acción a las comunidades frente al capital extranjero— constituye, por tanto, una ruptura con la democracia.

Cuando cae la máscara canadiense de la devoción y el sacrificio por los derechos humanos, y uno excava más allá de la superficie retórica de la política exterior, es fácil ver que lo que realmente preocupa a los políticos canadienses es la potencial amenaza a los derechos del capital de invertir donde quiera, hacer lo que desee con el medio ambiente y repatriar las ganancias sin que nadie interfiera.

Como escribimos en el capítulo dedicado a Honduras, esta preocupación por los derechos de las multinacionales canadienses, arropada en un discurso humanitario, fue hecha explícita durante las sesiones sobre Honduras en el Subcomité de Derechos Humanos del Comité Parlamentario de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional canadiense. En estas sesiones, el conservador Gary Schellenberger y un ejecutivo de la maquiladora Gildan, dijeron que un acuerdo de libre comercio sería beneficioso para Honduras porque llevaría el imperio de la ley a este país (SDIR, 2013: l-1355). Esa afirmación es enteramente falsa si uno entiende el imperio de la ley como igualdad ante la ley para *todos* los hondureños, el uso común bajo la democracia liberal. En realidad, lo que el TLC haría, su propósito último, es establecer los fundamentos jurídicos de la libertad del capital canadiense para invertir y repatriar ganancias en un contexto en el que las leyes de inversión, en la fórmula de los negociadores, sean *transparentes y predecibles*. Las preocupaciones sobre Chávez no tienen otra motivación, excepto que en este caso, la supuesta influencia regional del presidente venezolano constituía una amenaza para el capital canadiense.

Los medios de comunicación canadienses ante Venezuela

Este libro no es un estudio de los grandes medios, pero estos han jugado un rol de primer orden en la formación de una percepción pública de la política exterior canadiense como humanitaria y desinteresada. Se pueden encontrar algunas críticas ocasionales acerca de incidentes o aspectos concretos de la política exterior, pero éstas rara vez son integradas en investigaciones de conjunto acerca de las fuerzas subyacentes que condicionan esa política, o de las ambiciones generales del Estado en Canadá. El resultado es que los incidentes con mala prensa son presentados como errores o anomalías, antes que como expresiones naturales de las prioridades de la política exterior canadiense. La cobertura periodística de Venezuela bajo Chávez es posiblemente uno de los ejemplos

más claros de lo obsequiosos que pueden ser los medios de comunicación. Con raras y parciales excepciones, los grandes medios canadienses adoptaron y regurgitaron sin miramientos la línea oficial sobre Chávez que manufacturaron los gobiernos canadiense y estadounidense.

El principal diario canadiense, el *Globe and Mail*, fue la punta de lanza de este servilismo pintado de periodismo serio. El sometimiento del *Globe* a la causa del imperialismo alcanzó su cenit cuando murió Chávez, y su cobertura no le hizo el feo a ninguna acusación injustificada: un artículo lo acusó de usar "la fuerza bruta" para mantenerse en el poder, y otro de ser "un dictador polarizador". También celebró a su adversario en la última elección, pues dijo que Henrique Capriles "galvanizó a los opositores a Chávez como nunca antes y obtuvo para su partido un impresionante 44 por ciento", sin caer en cuenta de que esta observación implica que, por un lado, el "dictador" ganó la presidencia a través de elecciones y, segundo, que lo hizo en su cuarta victoria consecutiva con el 56 por ciento del voto. Que sólo un partido canadiense haya recibido más del 56 por ciento del voto popular una vez en la historia —los conservadores en 1917— o que Stephen Harper ganó con el 39 por ciento pero tiene total control sobre el Estado federal es algo que, por supuesto, no se menciona, puesto que va contra la narrativa de un presidente sudamericano autoritario y enloquecido (Carlson, 2013).

El *Globe* se dio el lujo de escribir perfiles psicológicos. Describió a Chávez como "físicamente imponente cuando alzaba su dedo y gesticulaba. Uno podría sentir la crueldad acumulándose debajo de la superficie" (*The Globe and Mail*, 06/03/2013a). Con su metro setenta y poco, Chávez difícilmente era Goliat, pero sus rasgos afrovenezolanos fueron una fuente constante de comentarios racistas por parte de la oposición, en Venezuela y fuera de ella. El *Globe* escribió que sus seguidores eran "devotos" fácilmente manipulables. Chávez, supuestamente "jugó con sus inseguridades y alimentó sus pasiones nacionalistas". Los venezolanos pagaron por su falta de sentido

común, y sufrieron el aumento de la violencia durante su gobierno, cuando "Caracas se transformó en uno de los lugares más peligrosos de América Latina" (*ibíd.*).

Por supuesto, el estancamiento económico, la pobreza y la represión sangrienta en Honduras tras el golpe no han ameritado ninguna reflexión similar por parte de la gran prensa canadiense, y el *Globe* ha ignorado que este país tiene la peor tasa de homicidios del mundo. Lobo era un aliado y, por tanto, oficialmente, un presidente responsable, comprometido con la democracia y la estabilidad. El *Globe* apoyó su elección en 2009, a pesar de que tuvo lugar en una situación de asedio, en la que no participó ningún candidato del movimiento antigolpista, en condiciones sin duda mucho peores que cualquier cosa experimentada por los venezolanos bajo Chávez.

Otra reflexión en el *Globe* tras la muerte de Chávez repetía la idea de que los venezolanos sin duda habían sido engañados al apoyar al difunto presidente, y describía el "control casi mesiánico" que tenía sobre sus seguidores. Luego de aceptar de mala gana que posiblemente habían mejorado algunos indicadores sociales, cita al latinoamericanista Max Cameron, quien afirma que Chávez "erosionó la calidad de la democracia en un país con una larga historia democrática" (*The Globe and Mail*, 06/03/2013b) —una afirmación sorprendente en vista de lo estrecho de la democracia formal venezolana antes de la llegada de Chávez al poder, y de la profundización de la participación popular durante el gobierno de éste—. El único artículo del *Globe* publicado durante esta época que no sigue la línea de que Chávez es un autoritario, proclama, contra los datos que afirman lo contrario, que los límites que Chávez le impuso al libre mercado han dejado a la economía en ruinas y que la situación de los pobres es más vulnerable que antes (Saunders, 2013)[192]. La sección de negocios del *Globe* también publicó algunas reflexiones sobre Venezuela, y encontró una oportunidad

192 El artículo, que extrañamente contrasta el "socialismo" de Chávez con la socialdemocracia de otros países, especialmente Brasil, junta a Venezuela con Argentina.

para el capital canadiense pues "la muerte de Hugo Chávez promete cambios en el mercado doméstico del petróleo que podrían alterar el mundo de la energía y abrirle oportunidades importantes a las petroleras canadienses" (Vanderklippe, 2013: B1).

El *Toronto Star*, el principal diario por circulación, y un aliado tradicional del Partido Liberal, también ha contribuido a la desinformación sistemática sobre el gobierno de Chávez. De hecho, el *Star* fue censurado formalmente en el Consejo de Prensa de Ontario tras una queja formal por una serie de artículos inexactos de Tim Harper publicados en 2006, acerca del alza del crimen violento y la pobreza como resultado del gobierno de Chávez, unos artículos cuyas fuentes se basaban casi exclusivamente en voceros opositores al gobierno (*Toronto Star*, 13/03/2007). Tras la muerte de Chávez, el *Star* publicó artículos que contradecían la línea imperialista acerca de su supuesto autoritarismo, pero también incluyó un artículo de Oakland Ross que lo comparaba con Kim Jong Il, Francois Papa Doc Duvalier y con Rafael Trujillo. Chávez no estaba "en ese grupo", pero sí era —no nos hagamos ilusiones— "autoritario, grandilocuente y un pésimo administrador de principio a fin" (Ross, O., 2013: A3).

La política canadiense hacia la Venezuela post Chávez

Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Canadá, como Estados Unidos, vio una oportunidad para terminar con la herencia y las conquistas de la revolución bolivariana. De hecho, dos semanas antes de la muerte de Chávez, el ministro de Relaciones Exteriores John Baird, anticipando el curso de los acontecimientos, había planeado una reunión con el entonces vicepresidente Nicolás Maduro. El viaje se canceló cuando Chávez volvió inesperadamente tras una larga convalecencia en Cuba.

El gobierno canadiense apoyó sin rechistar la elección de Porfirio Lobo en Honduras a pesar de que tuvo lugar tras un golpe militar, que se enfrentó a un boicot por parte de la oposición, y pese a las

extendidas acusaciones de compra de votos; en contraste, criticó públicamente la ajustada victoria electoral (1,8 por ciento) de Maduro contra Henrique Capriles, y dio a entender que la legitimidad del resultado era cuestionable. Canadá exigió una auditoría del voto para asegurarse de que las elecciones habían sido justas, y la ministra Diane Ablonczy declaró que "necesitamos un debido proceso para estar seguros" (FAIT, 2013b). Canadá y Estados Unidos fueron los únicos países que cuestionaron la legitimidad de la elección, una estrategia que le dio credibilidad a Capriles, quien a su vez usó las críticas internacionales a la elección para fomentar protestas violentas entre su base de derecha y seguir exigiendo un recuento.

Esta demanda fue descrita por Mark Weisbrot como "una farsa" puesto que Venezuela tiene uno de los procesos de votación más rigurosos del mundo, un proceso que permite votar a través de pantallas táctiles que a su vez imprimen un recibo para que el votante se asegure de que su voto fue registrado de una manera apropiada, voto que luego se pone en una urna. Cuando la votación termina, se hace una auditoría del 53 por ciento de las máquinas receptoras de votos frente a testigos de los distintos partidos, quienes comparan los resultados electrónicos con los resultados en papel. Weisbrot calcula que la posibilidad de que haya un fraude con este sistema "sería de menos de uno en 25 mil trillones". Las acusaciones de Capriles de un supuesto fraude electoral fueron claramente una fachada para legitimar una intervención política diseñada para galvanizar a la oposición doméstica e internacional al chavismo. Es simbólico que cuando el Consejo Nacional Electoral aceptó su exigencia de un recuento completo de todas las boletas o recibos de papel impresas por las máquinas, Capriles planteó una nueva serie de exigencias y dijo que boicotearía la auditoría previamente exigida por él como algo completamente insuficiente (Weisbrot, 2013; CEPR, 2013).

Conclusión

Este capítulo ha demostrado la manera en que los principales estrategas canadienses han respondido a la "amenaza" de una oposición venezolana exitosa al neoliberalismo, y a la posibilidad de que se extienda al resto de América Latina y el Caribe, es decir, la amenaza de un buen ejemplo. El capital canadiense ha estado directamente involucrado en los conflictos con el gobierno venezolano, como lo hemos mostrado en la discusión acerca de las demandas en el sector minero. De mayor importancia que la protección directa de las inversiones canadienses, sin embargo, ha sido la preocupación geopolítica del Estado canadiense de que la Venezuela de Chávez y Maduro se convierta en una potencia regional que impulse un giro más amplio hacia la izquierda en toda la región.

La contención de esta influencia regional ha sido el motivo central detrás de la campaña de demonización lanzada por el Estado canadiense y los principales medios de comunicación contra Chávez y su sucesor. En este sentido, los canadienses se hacían eco de una proliferación general de información inexacta acerca de la política venezolana presente en los medios internacionales. Nuestra discusión, en estas páginas, ha contrastado las afirmaciones acerca del giro al autoritarismo, clientelismo y decadencia institucional con las realidades de la economía política venezolana bajo Chávez y la primera época del gobierno de Maduro. Antes que nada, este capítulo ha buscado mostrar que el capital canadiense y sus aliados dentro del aparato de Estado no aceptarán ninguna desviación de la ortodoxia neoliberal en América Latina y que harán lo que sea necesario, con los medios necesarios, para evitarlo.

Un ejercicio de cinismo: "democracia" y "seguridad" en los andes

La promoción de la democracia y la política de seguridad son dos modos específicos de la intervención canadiense, cuyo objetivo es debilitar los proyectos democráticos y los movimientos de resistencia. En vista de lo subestudiadas que están estas estrategias de la política exterior, este capítulo ofrece un examen detallado de sus dinámicas. Formalmente se trata de dos estrategias distintas, pero en realidad son dos caras de la misma moneda: una financia a organizaciones de la "sociedad civil" con el objetivo oficial de promover el diálogo político y una mayor participación cívica en el país en cuestión, y la otra funciona como un refuerzo, en caso de que la primera fracase, al generar lazos y apoyar financieramente a los aparatos de seguridad aliados. El auge de la promoción de la democracia y de la seguridad como tácticas del arsenal de política exterior claramente corresponde a, por un lado, la expansión del capital canadiense y, por el otro, al mayor peso político y electoral de la izquierda durante los últimos 15 años. El imperialismo canadiense es a la vez una causa y una respuesta a los movimientos de resistencia: la explotación de los recursos andinos genera resistencia, lo que a su vez requiere una intervención política que la desarticule.

Promoción democrática

Durante los años ochenta, la promoción de la democracia se convirtió en uno de los ejes estratégicos de la política exterior estadounidense en América Latina. Ocurrió cuando Estados Unidos, poco a poco, decidió apoyar a nuevas fuerzas políticas de confianza, oficialmente democráticas, para mantener la necesaria estabilidad para el capital internacional, en detrimento de las viejas dictaduras militares. El Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) otorgaba financiamiento canalizado por el International Republican Institute, y su contraparte Demócrata apoyaba a los partidos políticos, organizaciones empresariales, grupos de derechos humanos y periodistas cercanos a los postulados neoliberales. La liberalización de los mercados y la implantación de una democracia entendida en los términos más estrechos —lo que el sociólogo William I. Robinson define como *policracia*— eran los objetivos de estas nuevas fuerzas, y las columnas del nuevo orden mundial[193].

No fue sino hasta la década iniciada el año 2000 que Canadá comenzó a involucrarse activamente en esta forma de promoción de la democracia, tras la expansión del capital canadiense en la década previa[194]. Entre 2009 y 2012, Relaciones Exteriores gastó casi cinco millones CAD en iniciativas de promoción de la democracia en Sudamérica, la mayoría en la región andina, además de otra cantidad para Ecuador y Venezuela (que no incluye el dinero de la iniciativa Derechos y Democracia, que se enfocó casi exclusivamente en América Latina antes de que fuera clausurada)[195]. Los proyectos financiados por

193 Ver Robinson, W.I. (1996).

194 "Promoción de la democracia" y "promoción de los derechos humanos" se usan de manera equivalente en los círculos canadienses de la política exterior.

195 Muchos de estos proyectos fueron financiados por el Fondo Glyn Berry de Relaciones Exteriores y Comercio Internacinal (FAIT), que tiene una lista con las iniciativas a las que apoyó en la página de Relaciones Exteriores. Los proyectos más recientes se pueden encontrar en el link "Proactive Disclosure" de Relaciones Exteriores. El gasto canadiense en la promoción de la democracia fue ejercido a través de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), hasta que Harper decidió concentrarlo —para tener un control estratégico del mismo— dentro de Relaciones Exteriores (FAIT).

Relaciones Exteriores incluyen un reporte sobre las supuestas amenazas a la democracia, redactado por el conservador World Movement for Democracy, seminarios para los partidos políticos, entrenamiento en el uso de nuevas tecnologías, proyectos contra las iniciativas de limitar el financiamiento extranjero de las ONG andinas (un asunto importante en Venezuela y Ecuador, debido al amplio financiamiento de organizaciones opositoras por parte de Estados Unidos), y el desarrollo de una red de análisis y supervisión política. Muchos de estos proyectos incluyen el apoyo directo y coordinado a los grupos opositores de estos países, como la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que fue creada en 2008 en una reunión organizada por la embajada canadiense en Panamá con el apoyo del National Endowment for Democracy (NED) estadounidense. Esta Red funciona como un foro de encuentro para los líderes opositores de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba (Engler, 2010).

Todas estas iniciativas están basadas en la idea de que la democracia está en peligro en estos países —un modo de decir que los movimientos sociales y/o los gobiernos de izquierda van más allá de los estrechos parámetros de la política liberal—. Desde esta perspectiva, la buena salud de la democracia se mide en una elección cada tantos años, y el debate político no debe inmiscuirse con la liberalización de los mercados. En palabras de un reporte diplomático canadiense, "el apoyo popular a la democracia ha decaído a lo largo de la región, en gran medida en respuesta a las expectativas poco realistas de lo que la democracia puede dar". Pero es mentira que el apoyo a la democracia haya decaído, de hecho, han aumentado las exigencias por una mayor participación popular. Lo que ha disminuido es la fe en las instituciones liberales tradicionales que desestimulan una mayor participación política, lo que el reporte antes citado acepta cuando habla del "encarnecido debate" "entre los defensores de la democracia directa y los de la democracia representativa". Ante esta realidad, el reporte sugiere "actividades prácticas para que los ciudadanos se involucren más en las funciones supervisoras y legislativas de las cámaras", esto es, en las

instituciones que cada vez más gente ve como reflejos distorsionados de sus intereses (FAIT – Global Peace and Security Fund, 2007). En la política canadiense de promoción de la democracia, ésta es definida de la manera más estrecha posible, y cualquier cosa más inclusiva o participativa es vista como una amenaza.

En un discurso en 2009, el ministro Peter Kent expresó bien las prioridades de su gobierno en la región y la manera en la que la democracia y los derechos humanos encajan en éstas. La gran desigualdad en América Latina, dijo, "puede alimentar la oposición al libre mercado y la democracia", así que la respuesta canadiense debe ser "el compromiso con la promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley". Kent, por supuesto, no menciona las cuestiones económicas (Kent, 2009f). El problema, según el ministro, no es de hecho la alta desigualdad, y, por tanto, no es posible pensar en alternativas al neoliberalismo y al vaciamiento democrático. No hay solución al viejo problema de la pobreza y la desigualdad. Los estrategas y políticos canadienses, al servicio del capital, ni siquiera pueden concebir que cualquier otra alternativa pueda ser democrática.

El problema, entonces, es la amenaza a la democracia representada por las fuerzas políticas que buscan terminar con la desigualdad. En las palabras del politólogo Neil Burron, "la promoción canadiense de la democracia se usa cada vez más como un instrumento político para promover el libre mercado y criticar a los gobiernos que se han apartado del Consenso de Washington" (Burron, 2011: 392)[196]. Cuando dirigía el ahora difunto Rights and Democracy, financiado por el gobierno, Gérard Latulippe intentó justificar el involucramiento

196 Cameron y Hecht afirman que la promoción canadiense de la democracia en la década de 1990 estuvo determinada por la idea de que la democracia y el libre mercado son la misma cosa. Burron afirma que el giro más explícitamente instrumental en la promoción canadiense de la democracia llegó a principios de los años 2000. Coincidimos con esto, y afirmamos que su importancia —incluyendo el dinero gastado y su relevancia en la discusión en las embajadas y en Ottawa acerca de la intervención estratégica en algunos países latinoamericanos— creció durante esa década, para después extenderse con los conservadores. Ver Cameron y Hecht (2008: 11-28).

canadiense en América Latina en términos similares: "Uno puede ver ahí la emergencia de un nuevo modelo de democracia, cuando lo que en realidad se intenta es encontrar una alternativa a la democracia al decirle a la gente que pueden tener una vida mejor incluso si no hay democracia"[197].

Es importante notar que al tiempo que Canadá pontifica acerca de su apoyo a la democracia y a los derechos humanos en el continente, no ha firmado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y por tanto no está sujeta a la jurisdicción de la Comisión o de la Corte (los cuerpos supervisores de la Convención), más allá de sus funciones como consejeras. Sin embargo, durante los últimos años Canadá ha sido el segundo principal financiador de la Comisión, con 2,4 millones de dólares entre 2008 y 2012 (el 11 por ciento del presupuesto de la Comisión proveniente de Estados y organizaciones internacionales). El hecho es que Estados Unidos y Canadá tienen una gran influencia financiera sobre uno de los órganos supervisores de la referida Convención, aunque ninguno de los dos la ha firmado[198].

Venezuela

El principal blanco de las actividades de promoción de la democracia y los derechos humanos en la región es Venezuela. Nombrar al gobierno de Chávez como un régimen autoritario se ha convertido parte del quehacer cotidiano de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT), así como de los partidos Liberal y Conservador. Venezuela también ha sido catalogada como un país con un pobre

197 Latulippe es citado por Berthiaume (2010b: 4).

198 Las contribuciones a la Convención pueden ser encontradas en: "Financial Resources" de www.oas.org (Fecha de acceso: 24 de mayo de 2013). El Comité Permanente del Senado para los Derechos Humanos publicó un reporte, en mayo de 2003, sobre las razones por las cuales el gobierno canadiense no ratificó la Convención y justifica esta decisión en términos de su incompatibilidad con el derecho canadiense e internacional. El reporte del Senado cita al exministro liberal Lloyd Axworthy, quien describió a la Convención como "vaga" y "pasada de moda". Sin embargo, el reporte afirma que Canadá podría adherirse a la Convención al tiempo que discute las cuestiones relacionadas con la compatibilidad jurídica (The Standing Committee on Human Rights, 2003).

historial democrático y de derechos humanos por los miembros conservadores del Comité Permanente para las Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional[199].

La carta-mandato que los subdirectores de Relaciones Exteriores le enviaron a Perry Calwood, el embajador en Venezuela tras su designación en 2007, afirmaba con claridad que la atención de la Embajada debía dirigirse a los "derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley" (Morin y Edwards, 2007). Esta directiva se ve reflejada en los reportes *Country Strategy* redactados por Ottawa para las embajadas. Los reportes de la Embajada en Caracas, a su vez, escriben cosas como que "organizaciones de derechos humanos venezolanas tales como [censurado] están en una situación financiera crítica" (Embajada de Canadá, 2007c) y que su objetivo es "apoyar a toda la sociedad civil", aunque, claramente, para la Embajada "sociedad civil" quiere decir oposición a Chávez (Embajada de Canadá, 2007b).

Durante un peculiar viaje a Venezuela, en enero de 2010 (ya mencionado en el capítulo anterior), el ministro Peter Kent se reunió con "representantes de la sociedad civil", líderes empresariales y políticos (FAIT, 2010h). Los nombres de las personas con las que se reunió no han sido hechos públicos por el gobierno canadiense, sobre la base de que su seguridad estaría en peligro si esto pasara. En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, en noviembre de 2010 —unos meses después de su viaje a Venezuela— Kent le dedicó un buen rato a subrayar la importancia para Canadá de la promoción de la democracia, y en un comentario claramente dirigido a Venezuela proclamó el compromiso de Canadá con la "defensa vigorosa" de los derechos humanos y las instituciones democráticas "ante los esfuerzos para debilitarlos y desacreditarlos" (Kent, 2010b).

Al parecer, el contacto directo de los principales políticos canadienses con los líderes de la oposición no se extendió más allá de la

199 Ver, por ejemplo, el interesante estudio de la ahora difunta Rights and Democracy (2010). El reporte de 2012 del Comité sobre los Derechos Humanos en Venezuela adopta una posición similar.

visita de Kent, debido a la fuerte reacción diplomática que generó del gobierno venezolano. Como dijimos antes, el ministro de Relaciones Exteriores John Baird planeaba un viaje a Venezuela a principios de 2013 —cuando Chávez estaba en Cuba peleando contra el cáncer— en una suerte de intento de medir la temperatura de la Venezuela post Chávez. Baird tuvo que cancelar la visita abruptamente cuando el Presidente volvió a Caracas casi sin avisar.

En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley que prohíbe el financiamiento extranjero a las ONG y los partidos políticos. La ley fue una reacción al rol de estas organizaciones en la iniciativa de construir una derecha antichavista, y al apoyo de éstas al golpe fallido de 2002. Ottawa respondió pidiéndole a las embajadas latinoamericanas de países "de ideas similares" que se reunieran con los gobiernos para movilizar la oposición y censurar públicamente al gobierno venezolano. En ese momento, el viceministro de Relaciones Exteriores canadiense viajó a Venezuela y, junto con los diplomáticos de la Embajada, se reunió varias veces con ONG venezolanas, académicos y organizaciones "de base" para discutir la oposición a la ley y su potencial impacto sobre el apoyo exterior a estas organizaciones (Prefontaine, 2011; Duguid, 2011). La oposición presentó la ley ante los observadores internacionales como un ataque al disenso político, pero para Chávez fue una defensa de la soberanía nacional, en vista del papel jugado por el dinero extranjero en desestabilizar al país (*Associated Press*, 22/12/2010). La Embajada entendió que esta iniciativa del gobierno de Chávez estaba dirigida, primero que nada, a socavar el papel que juega Estados Unidos en el apoyo a ONG y partidos políticos de oposición, y, por tanto, esto justificaba que Canadá aumentara su propio programa de promoción de la democracia, para recoger la posta americana (Embajada de Canadá, 2007a)[200].

200 La ley también fue discutida por los funcionarios de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), que financia el Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales (CFLI), pero los documentos sobre esto están completamente censurados.

Los ataques del gobierno de Canadá al "autoritarismo" de Chávez se tradujeron en un presupuesto cada vez mayor para la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Esto comenzó bajo los gobiernos liberales, pero se intensificó cuando los conservadores tomaron el poder en 2006. El Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales (CFLI, por su sigla en inglés) de la Agencia de Desarrollo Internacional, que es distribuido por las embajadas, ha sido un importante mecanismo de financiamiento para este tipo de actividades. Hasta el período 2003-2004, poco dinero del CFLI iba a la promoción de la democracia y los derechos humanos. Después, estas actividades se transformaron en un importante componente de su presupuesto y a partir de período 2007-2008 el CFLI en Venezuela se dedica exclusivamente a este tipo de programas. Entre 2005 y 2006, el CFLI financió a varios reconocidos partidarios del golpe y a varias organizaciones abiertamente antichavistas. La principal de estas es Súmate. En 2005, el gobierno liberal llevó a María Corina Machado, dirigente de Súmate, a Ottawa a hablar con los parlamentarios.

Como escribe Anthony Fenton, Machado apoyó el golpe de 2002 y luego fue "acusada de conspiración al cometer traición por presuntamente utilizar fondos de la National Endowment for Democracy, NED, para hacer campaña contra Chávez en el referéndum revocatorio organizado por la oposición". John Graham, presidente de la organización derechista Focal, financiada por Relaciones Exteriores (ahora extinta), participó en 2005 en reuniones de alto nivel en Washington con Machado y varios altos mandos de la diplomacia estadounidense, como Condoleeza Rice y Roger Noriega, para discutir "el fortalecimiento de la democracia en la región"[201]. Focal recibió dinero de la NED para promover la democracia en Venezuela y los Andes. Canadá también financió a la organización denominada Fundación Justicia de Paz Monagas, partidaria del golpe (Gordon, 2010: 375). Desde los años 2007 y 2008, la Agencia de Desarrollo Internacional y la Embajada se

201 Ambas citas vienen de Fenton (2009).

negaron a hacer público el nombre de las organizaciones que financiaban, con el argumento de que esto las pondría en peligro. El "riesgo de seguridad" es una exageración, pero la justificación implica que, en efecto, están financiando organizaciones opositoras.

En ese mismo período (2007-2008), el presupuesto de la CFLI (Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales) para proyectos de promoción democrática y de derechos humanos en Venezuela aumentó hasta superar los 227 mil CAD, se redujo el siguiente año a menos de cien mil dólares canadienses y volvió a aumentar hasta casi 200 mil en el período 2010-2011 y a más de 175 mil en 2011-2012. Durante esos mismos años, la ayuda bilateral no relacionada con los dos anteriores rubros se redujo considerablemente, hasta el punto de desaparecer por completo en el período 2011-2012[202]. Del presupuesto de la Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (FAIT) entre 2008 y 2012 que se ha hecho público, más de 715 mil CAD se asignaron a la promoción de la democracia en Venezuela. Esta cifra sería considerablemente más alta si se incluyera el financiamiento a proyectos regionales que incluyen a Venezuela entre sus beneficiarios.

En 2010, como parte de la iniciativa canadiense antivenezolana, la ahora difunta Rights and Democracy (financiada por el Estado) —dirigida por el exempleado del Instituto Nacional Demócrata Gérard Latulippe— le otorgó el Premio Humphrey al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), abiertamente crítico del gobierno de Chávez. El premio incluía un estipendio de 30 mil dólares canadienses (Engler, 2010). Un reporte de 2010, *Assessing Democracy Support in Venezuela*, redactado por el *think tank* español Instituto Fride, financiado parcialmente por el Movimiento Mundial por la Democracia —que a su vez ha recibido cientos de miles de

202 La lista de proyectos del Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) viene de: Solicitud de acceso a la información-CIDA: expedientes A-2008-00156 y A-2010-00197. La CFLI es mencionada en el buscador de proyectos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) pero no se ofrece casi ninguna otra información aparte del monto de gastos. La ayuda al desarrollo para Venezuela se encuentra en los reportes anuales de: www.acdi-cida.gc.ca/reports.

dólares de Canadá, y cuyo presidente fue el ex primer ministro Kim Campbell— mostró que Canadá era el tercer principal "promotor de la democracia" en Venezuela después de Estados Unidos y España. El reporte describe a Venezuela como un país "semiautoritario" y, ante los éxitos electorales de Chávez, dice que de hecho "las elecciones son el principal vínculo entre la democracia y la dictadura" y hace un llamado por un mayor financiamiento a la oposición (Golinger, 2010)[203]. Sin un dejo de ironía, en su reporte *Country Strategy* la Embajada en Caracas justifica el mayor gasto en promoción de la democracia fundamentándose en la polarización y la inestabilidad doméstica. Pero cuando Canadá se ha convertido en un "inversionista" de peso en este renglón, hablar de inestabilidad y luego financiar a la oposición no es otra cosa que una especie de profecía autocumplida: se interviene para fortalecer a la oposición, lo que genera polarización, y, por tanto, Canadá justifica la intervención para apoyar a la democracia o los derechos humanos. El gasto canadiense no es una respuesta a la polarización, es parte de su causa.

La posición canadiense en lo concerniente a la promoción de los derechos humanos fue reiterada por el gobierno en octubre de 2012, cuando el Comité Permanente para las Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (dominado por los Conservadores) emitió su reporte sobre los derechos humanos en Venezuela. En éste, exigía al gobierno continuar sus proyectos de promoción de la democracia, incluyendo el financiamiento a los "defensores de los derechos humanos". El gobierno respondió asegurándole al Comité que su compromiso se mantenía inquebrantable (Canadá, 2012).

---

203 El reporte subraya el papel potencialmente importante que Canadá puede jugar en Venezuela a la luz de la atención negativa que recibe Estados Unidos, con su historia de intervención y abierta hostilidad a Chávez. La "neutralidad" canadiense sirve bien a la promoción de la democracia. "Gracias a su diplomacia silenciosa, Canadá no ha provocado la atención del gobierno de Chávez" (Gratius, 2020: 8). Sin embargo, el involucramiento canadiense en Venezuela no ha sido neutral ni particularmente silencioso durante el gobierno de Harper.

Ecuador

En tanto que recipiendario de una importante inversión canadiense a partir de mediados de los años noventa, sitio de movimientos sociales de envergadura y gobernado por un presidente de izquierda, Ecuador también ha estado en el blanco de los esfuerzos de promoción de la democracia y los derechos humanos. Allan Culham, representante ante la OEA, ha hablado de la preocupación canadiense ante la "clausura del espacio democrático" en este país. Culham se refería en ese momento a lo que el gobierno de Correa describió como un fracasado intento de golpe de Estado a finales de septiembre de 2010 (*El Comercio*, 01/10/2010a). El día 30, la policía bloqueó avenidas en Quito, Guayaquil y Cuenca y, junto con un pequeño sector de las fuerzas armadas, tomó varios cuarteles y temporalmente clausuró el aeropuerto nacional al ocupar la pista de aterrizaje. La Asamblea Nacional fue ocupada. Estas acciones fueron una reacción a una serie de recortes al presupuesto público que tocaron a la policía y las fuerzas armadas. Luego de que Correa habló ante un grupo de policías hostiles en uno de los cuarteles tomados, le dispararon un proyectil de gas pimienta mientras salía del lugar.

El proyectil no lo alcanzó, pero sí inhaló el gas y tuvo que ser llevado al hospital. La policía rebelde rodeó el hospital y Correa no pudo salir del lugar durante varias horas, hasta que fue liberado por soldados leales que se enfrentaron a la policía, lo que provocó varios muertos. En retrospectiva, la lealtad de la mayoría de las fuerzas armadas nunca vaciló (*BBC*, 01/10/2010). Sin embargo, en ese momento eso no era obvio, y los presidentes de varios países latinoamericanos, así como el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, creyeron necesario denunciar el accionar de la policía insurrecta y de un sector de las fuerzas armadas, y declarar públicamente su apoyo a la continuidad del gobierno constitucional de Correa (*El Comercio*, 01/10/2010b).

Canadá minimizó la importancia de la amenaza policial. Como con Honduras, se rehusó a identificar a la policía y a la oposición de

derecha como los responsables de la violencia y en su lugar dio a entender que el gobierno y sus partidarios eran igualmente responsables. Peter Kent, ministro de Estado para las Américas, llamó a "que todas las partes eviten el conflicto y cualquier actividad que pueda poner en peligro el estado de derecho y las instituciones democráticas"[204]. Esta posición fue repetida por Allan Culham durante una reunión especial en el Concejo Permanente de la OEA. Canadá apoyó una resolución que criticaba la amenaza al estado de derecho y Culham expresó su apoyo al "gobierno electo", pero agregó que "Me gustaría [...] usar esta oportunidad para recordar lo que me parece es un elemento importante del gobierno que no deberíamos olvidar, y es la necesidad de crear espacios democráticos respetuosos del diálogo en el que todos los sectores de la sociedad tengan la oportunidad de expresar sus opiniones"[205]. Culham daba a entender que la rebelión policial y la insubordinación de las fuerzas armadas eran una reacción natural ante el estrechamiento del espacio democrático bajo Correa.

En los reportes subsiguientes a Ottawa, la Embajada en Quito culpó a Correa del conflicto, pero al mismo tiempo percibió en esta coyuntura la oportunidad para presionar a Correa a que se acercara al abrazo imperial. El embajador Shisko, por ejemplo, escribe en un *Situation Report* que el intento de golpe ha mostrado "la vulnerabilidad de la instituciones ecuatorianas", exacerbada por "una constante concentración del poder en las manos del Presidente", y considera la posibilidad de que Correa pueda intentar usar la oportunidad abierta por los eventos del 30 de septiembre "para seguir el ejemplo de Chávez y radicalizar su posición sin negociaciones ni diálogo y con una mayor concentración del poder" (Shisko, 2010d). En un mensaje posterior, Shisko le asegura a Ottawa que "deseamos explorar ideas creativas y puntos de entrada para que Canadá apoye la gobernanza democrática en este país" (Shisko, 2010e). La "evidencia" del Embajador sobre la

204 Kent, citado en FAIT (2010i).

205 Allan Culham, citado en OAS (2010).

"centralización y radicalización del poder" consistía en que el partido de Correa, Alianza País, tenía la mayoría del Congreso y podía por tanto aprobar leyes sin consultar a la oposición.

Unos meses después, Canadá le dio 120 mil dólares canadienses a la Corporación Participación Ciudadana (CPC), la cual, de acuerdo con Relaciones Exteriores, tiene el objetivo de "empoderar a los ciudadanos para que se involucren de una manera más efectiva en el proceso político a través del fortalecimiento de la sociedad civil en Ecuador" (FAIT, s/f a). La CPC fue identificada por Shisko como un "crítico activo de algunas prácticas del gobierno" (Shisko, 2011), y, por tanto, adecuada para recibir dinero canadiense. El embajador acentúa su razonamiento y el apoyo a la CPC por "el claro debilitamiento de la sociedad civil […] debido a la falta de acción por parte de sus organizaciones". El objetivo del proyecto que encabezará la CPC será "crear un espacio […] para la discusión pública de cuestiones de primera importancia para el país", así como "generar capacidades de liderazgo, supervisión política y estrategias de comunicación" (CPC, 2010)[206]. Una vez más, la premisa implícita del apoyo canadiense es la desconfianza hacia Correa y la idea de que la derecha ecuatoriana —y todos los partidarios de la inversión canadiense— deberían tener una mayor oportunidad para ser escuchados y, en última instancia, ser políticamente más efectivos y tener una mayor influencia sobre el proceso de toma de decisiones. Hay que hacer notar que la Unidad Andina para la Gobernanza Democrática, la columna vertebral de la campaña canadiense de promoción de la democracia, que tiene su oficina central en Perú, tiene desde noviembre de 2010 una oficina en Quito.

Cuando Canadá habla de su preocupación por las amenazas a la democracia en Ecuador, lo que teme no es tanto alguna forma de dictadura o de deriva autoritaria, lo que teme es que el gobierno de Correa busque imponer límites —bastante modestos— al poder del capital

206 Los grupos que participaron en los talleres del proyecto no son identificados. La Embajada los describe como "de base" y que representan "intereses diversos" (McGuire, 2011).

canadiense. Los movimientos sociales también son vistos como un obstáculo a la democracia, especialmente aquellos que exigen formas más participativas para tomar decisiones —a menudo enfrentados con el propio Correa— en cuestiones como la tierra y el medio ambiente, y que son, en forma y substancia, ejemplos de una democracia mucho más profunda que el neoliberalismo electoral defendido por Canadá. La búsqueda de alternativas al modelo de libre mercado preconizado por Canadá —ya sea en la forma populista de izquierda de Correa, o en las demandas por una democracia más inclusiva de algunos de los principales movimientos sociales del país— no puede ser ignorada por los estrategas canadienses. La Embajada, escribiéndole a Ottawa, reconoció tras la victoria de Correa que "los ecuatorianos lo apoyan y […] quieren ver un cambio en las instituciones" (Autor desconocido, 2008d). Buena parte de la izquierda y de los movimientos sociales se han alejado de Correa, pero el deseo de cambio sigue ahí.

Ninguna de estas alternativas es aceptable para los intereses canadienses. Implican salirse de la llamada "buena gobernanza", y supuestamente implican un desafío a la democracia: se necesita por tanto de la intervención canadiense. El libre mercado y los derechos del capital internacional son, desde esta perspectiva, inviolables, y por tanto Ecuador —como Venezuela— se convierten en blancos de estrategias de promoción de la democracia. Entre el año 2008 —poco después de la llegada de Correa a la presidencia— y 2011, Canadá gastó más de un millón de dólares en este tipo de campañas en Ecuador. Desde el año 2008, Relaciones Exteriores le dio 400 mil dólares canadienses a un proyecto coordinado por la estadounidense NED para la región. El objetivo del proyecto era ofrecer apoyo organizativo, financiero y educativo a las organizaciones de la sociedad civil en "países en los que la sociedad civil se enfrenta a amenazas inmediatas a su libertad de asociación, como Venezuela o Ecuador" (NED, 2009). Lo absurdo de la oración habla por sí misma.

En 2009, la FAIT encaminó 336 mil dólares canadienses para el Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), a pesar de

que Ecuador tiene una democracia multipartidista, para "fomentar el diálogo sobre la Constitución de Ecuador" (un diálogo que ya existía), y luego otros 302 mil en 2011 para alentar una mayor participación política de la juventud, "con el objetivo de fortalecer la cultura democrática y las instituciones del país" (FAIT, s/f b). La propuesta de 2009 del NIMD justifica el apoyo a estos rubros diciendo que "el paisaje político latinoamericano ha resultado ser un ambiente turbulento y de rápido cambio, en el que la evaluación y reapreciación de los postulados es una necesidad", lo que incluye "la emergencia de nuevos partidos políticos, líderes y movimientos sociales, especialmente en la región andina" (NIMD, 2008a).

Lo que este proyecto quiere decir, en realidad, es que la izquierda ha estado a la ofensiva en Ecuador tanto en forma de movimientos sociales como de partidos políticos, que se ha enfrentado directamente contra el capital extranjero y que ha ganado poder político, y, en algunos casos, ha modificado las instituciones y las normas, algo que decididamente no beneficia a los inversionistas canadienses. Al mismo tiempo, los partidos de la derecha que hasta hace no mucho estaban en el poder, se han visto debilitados por su asociación con el legado del neoliberalismo, y han sido incapaces de incidir en el debate público reciente. Los estrategas canadienses, en respuesta, han criticado esta situación como una de "falta de diálogo político" y de decadencia de las prácticas democráticas. Canadá rara vez hizo este tipo de críticas a los gobiernos de la derecha que precedieron a la emergencia de la izquierda andina.

Es claro que los estrategas canadienses que apoyan este tipo de proyectos de promoción de la democracia no están preocupados por los problemas de las comunidades indígenas y los activistas ambientalistas opuestos a la política minera de Correa, puesto que Canadá se ha dedicado a exigir un régimen minero más favorable a sus intereses, contra las exigencias de este tipo de grupos. La propia propuesta de la NIMD se identifica explícitamente con las experiencias de los "partidos de oposición", que no tuvieron representación en la

Asamblea Constituyente, cuyos intereses "no son tomados en cuenta por la mayoría gubernamental". Aunque la Constitución fue "aprobada por una gran mayoría de la población", de acuerdo con la NIMD ésta expresa un déficit democrático, puesto que la "oposición" —es decir, los partidos de derecha— no tuvieron suficiente influencia sobre ella (NIMD, 2008b). En última instancia, la cuestión de fondo de por qué la derecha es débil en Ecuador no es planteada por estos análisis, que se enfocan en la supuesta falta de un "debate abierto y amplio". La fortaleza de la izquierda —en todas sus formas— y la debilidad de la derecha son entendidas por la inteligencia canadiense como un déficit de la democracia ecuatoriana.

Sin contar las inconsistencias internas de la lógica canadiense de la promoción de la democracia en Ecuador, hay una enorme hipocresía en la agenda de Ottawa hacia esta cuestión. Antes de la elección de Correa, el Estado canadiense apenas se interesaba en promover el diálogo o un "debate abierto y honesto" entre las partes concernientes. No había llamados a una mayor inclusión, a pesar de la violencia ejercida contra los opositores a la minería por el Estado y las fuerzas de seguridad privadas.

Fue sólo cuando Correa llegó a la presidencia que Canadá se dio cuenta de este tipo de enfoque. A partir de ese momento, el financiamiento canadiense se ha dirigido a "fortalecer el papel de los ciudadanos como partes fundamentales del proceso constitucional actual" —esto, luego de que la Asamblea Constituyente terminara su trabajo con un alto grado de aporte popular, ciertamente mucho más de lo que se vio durante el proceso constitucional canadiense tres décadas antes—. El dinero canadiense fue a imprimir folletos que explicaban el contenido de la Constitución para el periódico de derecha *El Comercio*, y la organización de talleres para crear "ciudadanos mejor informados sobre sus derechos y obligaciones" (NIMD, 2008a).

El objetivo del proyecto juvenil de la NIMD era estudiar la participación electoral de los jóvenes para "expandir la inclusión y representatividad del sistema político", aunque en la elección pasada la

participación electoral había superado el 75 por ciento —más que las seis elecciones ecuatorianas anteriores, y mucho más alta que cualquier elección canadiense reciente—[207]. En un *email* a Relaciones Exteriores, el embajador Shisko expresaba su apoyo al proyecto pero, al mencionar que la nueva Constitución permitía el voto desde los 16 años, decía que a esa edad las personas "no están preparadas para participar de ninguna manera responsable". Y agregó que "a Ecuador le faltan líderes políticos y los partidos no saben formar a las nuevas generaciones", y que los programas democráticos financiados por Canadá "pueden ayudar a resolver, en el largo plazo, las debilidades de las prácticas partidarias del sistema político en su conjunto" (Shisko, 2010f).

La hipocresía canadiense se hace más transparente si vemos su agenda de promoción democrática y de derechos humanos desde una perspectiva regional. Canadá no ha buscado promover un "debate honesto" en países aliados, como en Colombia, a pesar del terrible historial de derechos humanos de este país. Perú tampoco ha recibido la misma atención de las iniciativas canadienses durante el gobierno de Harper, a pesar de la constante violencia contra las comunidades indígenas. Perú, de acuerdo con Relaciones Exteriores, es un "socio que piensa como nosotros en cuestiones de democracia, derechos humanos y prosperidad" (Revil, Utting y Rivera, s/f). Relaciones Exteriores gastó ahí 167 mil dólares canadienses para ayudar a los partidos a "desarrollar competencias para redactar programas de partido", con un enfoque particular en involucrar a la gente de fuera de Lima —donde la resistencia a la minería es más fuerte— de una manera más efectiva (FAIT, 2011e). Lima es la sede de la Unidad Andina para la Gobernanza Democrática (AUDG), una oficina canadiense fundada en 2009 con el objetivo de coordinar las iniciativas regionales. Un reporte de la FAIT acerca de la inauguración de la Unidad hacía notar que "Canadá considera a Perú como un socio importante en el hemisferio para

207 Los porcentajes de participación se encuentran en: http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=67 (Fecha de acceso: 18/02/2013). La propuesta del Netherlands Institute for Multiparty Democracy es citada en NIMD (2009).

ayudarnos a desarrollar democracias fuertes, efectivas y responsables" (FAIT, s/f c)[208]. El mismo año que Canadá abrió la Unidad en Lima, las fuerzas de seguridad de Alan García mataron a más de 30 indígenas opositores a distintos megaproyectos. Pero, porque el gobierno peruano es un aliado, es democrático.

Política de seguridad

La interferencia diplomática y política que hemos descrito se ha visto acompañada por otro tipo de interferencia todavía más siniestra. La oposición a los intereses canadienses en los Andes es vista por los políticos canadienses como una amenaza a la seguridad regional. Hay que entender que las preocupaciones de seguridad de los países imperialistas no son simplemente amenazas físicas contra ellos, y, en este caso, no existe la posibilidad de que ningún país latinoamericano pueda constituir una amenaza para Canadá. La amenaza es a la seguridad del capital canadiense. Los intereses de su capital son, después de todo, el motor del involucramiento canadiense en la región. En Centroamérica, este desafío ha consistido en movimientos sociales en primer lugar, pero en los Andes incluye gobiernos, lo que dobla las apuestas. Lo que estamos presenciando es, por tanto, eso que se nombra como "securitización" de la política exterior canadiense en el continente, es decir, la creación de una alianza —de una política de seguridad— con algunos Estados como un frente contra los movimientos sociales y los gobiernos que no están suficientemente sometidos al imperialismo.

Venezuela

Sin duda que Estados Unidos ha sido la punta de lanza del giro "securitario" en Sudamérica, tanto en términos prácticos como ideológicos. Estados Unidos, como Eva Golinger lo demostró, actuó tras

208 Un reporte sobre un taller organizado por la Unidad Andina con funcionarios de las embajadas en Perú, Venezuela y Ecuador, así como con representantes de la sociedad civil, estaba altamente censurado.

bambalinas para apoyar el golpe de 2002 contra Chávez. Mantiene una constelación de bases militares a lo largo de la región. La derecha estadounidense ha intentado vincular a Venezuela con el terrorismo islámico, por supuesto sin éxito. El Subcomité del Congreso para el Contraterrorismo e Inteligencia, de hecho, tuvo sesiones sobre el posible apoyo a Hezbollah en América Latina. El neoconservador Roger Noriega, quien fue llamado como testigo, buscó conectar al gobierno venezolano con el terrorismo, basándose en parte en la alianza entre Chávez e Irán. El punto es que, para el *establishment* político estadounidense, Venezuela y el populismo de izquierda son amenazas a su seguridad (Fernandez, 2011; Golinger, 2007).

Como hemos dicho, el gobierno canadiense afirmaba que Chávez era un autoritario. De proclamar que el expresidente venezolano es un autoritario y del miedo a su creciente influencia regional, a considerar a Venezuela como una amenaza a la seguridad que tenía que ser contenida, había un solo paso. En las discusiones internas de Relaciones Exteriores (FAIT) sobre Venezuela, el peligro representado por el ejército venezolano es un tema común. "Canadá —dice un reporte— está [censurado] observando el rearmamento de Venezuela y su creciente compra de armas" (Autor desconocido, s/f b). El aumento en el gasto militar con Chávez es visto como parte de su peligrosa agenda antineoliberal, más que como una respuesta razonable a las amenazas externas. Venezuela se ha enfrentado a la interferencia de potencias extranjeras, incluyendo un intento de golpe, y a la violación de su soberanía por el ejército colombiano, al tiempo que en 2009 Estados Unidos llegó a un acuerdo con Colombia para usar siete de sus bases militares. Los autores de los informes de Relaciones Exteriores, sin embargo, aceptan que el gasto militar venezolano como porcentaje del PIB es menor que el de la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia (*ibíd.*). Y es importante considerar, también, que las proyecciones del gasto de defensa de Venezuela durante la siguiente década no alcanzarán las canadienses. Pero el creciente gasto militar canadiense (consistentemente uno de los 15 más altos

del mundo), su mayor cooperación militar con Colombia, el apoyo a las fuerzas armadas en Honduras y Guatemala y el establecimiento de una nueva base militar en Jamaica, no son, por supuesto, amenazas a la estabilidad o la seguridad regional.

Colombia

El gobierno colombiano es el más cercano a los intereses del capital extranjero en la región, y ha desarrollado un poderoso aparato de seguridad para defender al imperialismo. Colombia es el ancla y eje de la estrategia canadiense de seguridad andina. Desde el final de la década de los años 2000, ha recibido entrenamiento y financiamiento a través del Programa para el Desarrollo de Capacidades de Contraterrorismo y Lucha Anticrimen, del ministerio canadiense de Relaciones Exteriores, y a partir de 2011 ese apoyo ha sido otorgado a través del Programa de Cooperación y Entrenamiento Militar de la Defensa Nacional.

El interés geopolítico de Canadá por Colombia está bien expresado en el reporte *Country Strategy* de 2006-2007 de la Embajada, que acepta la espantosa situación de los derechos humanos en el país, pero dice que, a pesar de todo, Colombia "es, de una manera esencial para Canadá, un bastión de estabilidad en la región a pesar de sus conflictos internos" (Embajada de Canadá, 2006b). No se trata de que la embajada canadiense aprecie la "estabilidad" de los trabajadores, los indígenas, los campesinos o cualquier otro que esté en el lado equivocado del terror paramilitar; se trata de que la diplomacia canadiense aprecia la estabilidad del Estado colombiano en la medida en la que apoya los intereses geopolíticos y económicos de Canadá, en una región en la que otros gobiernos no son tan sumisos a sus intereses. El Estado canadiense es indiferente a la condición de los grupos que mencionamos antes. En un contexto político como el sudamericano, es importante tener un aliado como el Estado colombiano.

En una entrevista con el *Wall Street Journal* en 2009, Harper no dejó lugar a dudas al hablar acerca de la importancia geopolítica de Colombia para Canadá. Colombia, dijo, es un importante "aliado" en una

región "con serios enemigos y adversarios"[209]. Esta visión es compartida por personajes claves del Partido Liberal —hay que recordar que fue el gobierno de Chretien a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 el que sentó las bases de la alianza con Colombia—. El gobierno de Harper no hizo sino construir sobre cimientos diplomáticos ya existentes. Scott Brison, un ex Tory que coordinó el apoyo de los liberales al TLC con Colombia, defendió este supuesto tratado económico en términos geopolíticos (con su necesaria dosis de exageración): "Si aislamos a Colombia en la región andina y la dejamos expuesta y vulnerable a los ataques ideológicos de Chávez, estaremos permitiendo que florezca el mal" (Brison, 2009).

Las fuerzas armadas de ambos ejércitos empezaron a discutir formas de cooperación desde 2009, a raíz de la visita a Colombia de varios mandos militares canadienses. Esa reunión se organizó luego de que el jefe del Estado Mayor canadiense fuera a Colombia meses antes, y de una reunión entre el Consejero de Seguridad Nacional de Harper, Marie-Lucie Morin, y el presidente Uribe (todos los documentos que obtuvimos vía transparencia acerca del viaje de Morin están completamente censurados)[210].

Las relaciones se fortalecieron con la firma, en marzo de 2014, de un Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés) para la cooperación en temas de defensa. El Memorándum indica la creación de "un marco estratégico para aumentar las relaciones militares" entre los dos países. El ministro de Defensa Peter MacKay subrayó que estaba "muy satisfecho" con la firma de este Memorándum con el ministro Pinzón. "Con el énfasis que Canadá tiene en América Latina, y en vista de la importancia colombiana en el continente, hay mayores oportunidades para que Canadá y Colombia aprendan el uno del otro" (Office of the Chief Military Personnel, 2010).

209 Harper es citado en O'Grady (2009).

210 Los documentos sobre el viaje de Morin vienen de: Solicitud de acceso a la información-Privy Council Office: Expediente A-2012-00269.

Un reporte de Defensa Nacional señala que Colombia tiene "un ejército profesional que busca expandir su influencia fuera de sus fronteras" y que, en línea con el pensamiento geopolítico de Canadá que discutimos antes, hoy "Colombia tiene una importancia estratégica para Canadá" (Embajada de Estados Unidos, 2008). De hecho, Colombia ya había expandido extendido su influencia por fuera de las fronteras en 2008, un año antes de las discusiones acerca de una mayor cooperación militar con Canadá, cuando causó una crisis diplomática en la región luego de que violó la soberanía ecuatoriana al atacar un campamento de las FARC. Aunque las acciones colombianas fueron condenadas por la mayoría de los países de la región, un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Ottawa menciona comentarios de James Lambert, director de Relaciones Exteriores para América Latina, dirigidos a los diplomáticos estadounidenses, expresando el apoyo de Canadá a Colombia, aunque se muestra temeroso acerca de cómo expresar públicamente su apoyo, para no generar tensiones innecesarias (Webber, 2010). El régimen de Uribe también es conocido por sus constantes choques con Venezuela (*Semana*, 17/11/2012).

El aumento en la cooperación en seguridad está vinculado con el papel que Colombia juega en la región, pero no es casualidad que el citado Memorándum de Entendimiento llegue en un momento en el que la inversión canadiense ha aumentado tanto a raíz de TLC. El gobierno y el capital canadienses son conscientes de que aunque se hayan hecho avances importantes en la mejora de las condiciones de los sectores petrolero y gasero, el proceso no ha llegado a buen término: las fuerzas guerrilleras siguen activas —un recordatorio de esto fue el secuestro durante siete meses de un ejecutivo minero canadiense— y las comunidades siguen resistiendo contra el desarrollo de megaproyectos. Durante su visita a Colombia en agosto de 2011, Harper anunció un mayor apoyo a la seguridad colombiana, de donde se desprendió el Memorándum de Entendimiento. Harper y Santos discutieron los dispositivos y condiciones de seguridad para las compañías canadienses que operan en Colombia. El Primer Ministro canadiense

dijo que aunque se ven avances, todavía hay problemas que tienen que ser resueltos (*El Nuevo Herald*, 10/08/2011).

Canadá ha intentado reforzar al aparato de seguridad colombiano a través de la venta de armas. De hecho, el gobierno liberal autorizó, durante la década de 1990, la venta de decenas de helicópteros que pueden ser usados en batalla (Gordon, 2010: 371). En 2012, el gobierno de Harper agregó a Colombia a la Lista de Control de Armas Automáticas (y también a Perú). Esto quiere decir que Colombia es uno de los pocos países que puede comprar armas de asalto automáticas canadienses —armas prohibidas en Canadá—. El gobierno canadiense afirmó fríamente que agregar a Colombia a la lista "abre nuevas oportunidades de mercado" para los exportadores de armas, pero la otra cara de la moneda de esta oportunidad de negocio es el armar a un ejército esencial para los intereses canadienses, más allá de las ganancias inmediatas de la industria armamentística[211]. Apenas unas pocas semanas después de que Colombia fue agregada a esta lista, General Dynamics Land Sytems Canada, apoyada por la Canadian Commercial Corporation, obtuvo un contrato de 65,3 millones CAD para vender 24 vehículos blindados ligeros al Ministerio de Defensa Nacional colombiano (*Daily Markets*, 10/01/2013). En 2013, Canadá le otorgó 550 mil dólares canadienses en equipo a la Policía Nacional colombiana para detección y protección contra explosivos biológicos, químicos y nucleares (DFATD, 2013).

La exportación del modelo colombiano

Como dijimos en el capítulo sobre Centroamérica, Canadá quiere ayudar a extender el alcance militar colombiano hasta el istmo —lo cual abona a la militarización de la región— a través de una alianza entre las fuerzas armadas colombianas y hondureñas. De hecho, el apoyo canadiense al ejército colombiano ha contribuido a una forma cada vez más militarizada de democracia en buena parte de América

211 El gobierno canadiense es citado por Blanchfield (2013b). Ver, además, Berthiaume (2013b).

Latina, en donde el electoralismo y la existencia nominal de derechos liberales se cruza con el vasto poder de los aparatos de seguridad —estatales y privados— y con la consiguiente normalización de la violencia contra los opositores.

Canadá también ha desarrollado vínculos más estrechos en cuestiones de seguridad con Perú, al que considera un aliado regional[212]. Varios ministros canadienses visitaron el país andino durante los últimos años, para supervisar las inversiones pero también para establecer acuerdos de cooperación en seguridad (uno de los cuales incluye a la Canadian Commercial Corporation), en medio de promesas del gobierno de Perú de comprar tecnologías de seguridad canadienses. La oficina del Primer Ministro canadiense reportó tras las firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) que Canadá "busca profundizar las relaciones de defensa y seguridad entre los dos países, y permitir y mejorar la cooperación para la compra de servicios o de equipo militar de las compañías canadienses por el Ministerio Peruano de Defensa" (Prime Minister's Office, 2013b). Uno de los MoU entre Canadá y Perú llevó a la creación de Instituto Técnico de las Fuerzas Armadas en 2012 (Foster, 2012; *Tv Perú*, 03/12/2012). En 2013, Canadá le vendió a Perú aviones Twin Otter, que tienen un uso militar (Berthiaume, 2013b). La fuerza aérea peruana, como dijimos antes, recibió entrenamiento de la fuerza aérea canadiense.

Finalmente, la lógica "securitaria" de la política exterior canadiense llevó a los conservadores a abrir una base militar en Jamaica. Los voceros militares hablan de amenazas terroristas y operaciones de antinarcóticos —y la Marina canadiense ha intervenido buques sospechosos de transportar drogas en el Caribe, así como (ilegalmente) en aguas territoriales jamaiquinas—, pero sería ingenuo comprar el

212 De hecho, las fuerzas especiales canadienses fueron enviadas a Perú en 1996 en respuesta a un ataque del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra la residencia del embajador japonés, que llevó a una toma de cientos de rehenes. Las fuerzas especiales de Canadá fueron enviadas como parte de una estrategia canadiense para negociar un tránsito seguro a Cuba para los guerrilleros. El plan era atacar a estos últimos durante el tránsito. Esto nunca pasó porque las negociaciones no prosperaron.

discurso oficial, en vista de los grandes intereses económicos canadienses y de su vulnerabilidad. La base tiene que ver con el deseo de proyectar el poder de Canadá y de reaccionar frente a situaciones de "inestabilidad" en una región en la que el capital canadiense es una de las principales fuerzas económicas.

Conclusión

Canadá ha sentado las bases de mayores vínculos en temas de seguridad con varios Estados de América Latina y el Caribe. Los proyectos de un supuesto apoyo a la democracia y los derechos humanos han tenido un impacto limitado como estrategias de intervención canadiense en Ecuador y Venezuela, aunque estos proyectos, inspirados por ambiciones de corto plazo, también son vistos como proyectos de largo plazo. Si se abre la oportunidad en algún momento, las organizaciones financiadas y entrenadas bajo la batuta de Canadá estarán listas para ejecutarlos. Los fuertes vínculos entre los aparatos de seguridad, a su vez, constituyen una opción más para alcanzar un objetivo conocido: desestabilización para las fuerzas progresivas y estabilidad para el capital canadiense. Independientemente de lo que Canadá pueda decir acerca de estas políticas, su objetivo es transparente. Los gobiernos más violentos y autoritarios de la región son presentados como faros de la democracia, y sus fuerzas de seguridad son consentidas por el Estado canadiense. Al mismo tiempo, los movimientos sociales y gobiernos que ponen en tela de juicio la reproducción del neoliberalismo son vistos como amenazas inminentes a la seguridad y la democracia en América Latina.

Conclusión

Continúa la expansión, pero la resistencia no ceja

Los países centroamericanos y andinos a los que se refiere este libro ofrecen los ejemplos más transparentes de la dialéctica de la expansión del capitalismo y la resistencia popular en años recientes. Como Canadá es uno de los inversionistas más grandes en América Latina, la dialéctica se extiende al resto de la región. Los intereses canadienses, las intervenciones en su defensa, y la oposición a la que se enfrentan, están por todos lados.

Las geografías del capital canadiense

Con unos 16,6 mil millones CAD invertidos en la minería, infraestructura y la banca en Chile, Canadá es uno de los principales inversionistas en este país. El más grande es el controversial proyecto de la Barrick Gold, Pascua Lama, de 8,5 mil millones CAD. Pascua Lama será una enorme mina a cielo abierto en una montaña en la frontera entre Chile y Argentina. Su avance requiere la destrucción de glaciares y, por tanto, dejaría sin agua a miles de campesinos en la región. Pero la fuerte oposición y la arrogancia que la Barrick mostró al intentar saltarse las evaluaciones ambientales y el proceso de obtención de permisos, ha provocado suspensiones en el proyecto, retrasos importantes y fuertes multas (Henao, 2013; *Associated Press*, 10/04/2013; *Latin American Press*, 16/11/2012). Pero la corporación minera más

grande del mundo no le da la espalda a la pelea, especialmente en vista del enorme tamaño de Pascua Lama, y menos si tiene el apoyo de Stephen Harper, quien se reunió con los directivos de la compañía y la defendió ante los políticos chilenos[213].

Del otro lado de Pascua Lama, en Argentina, compañías canadienses como Barrick y Goldcorp dominan el sector minero y tienen, con el apoyo del gobierno canadiense, una importante influencia política. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo una fuerte presión de los inversionistas canadienses, vetó la legislación aprobada por el Congreso argentino destinada a proteger los glaciares de la minería a gran escala, lo que ponía en riesgo las inversiones actuales y futuras de Barrick, Cuando el Congreso volvió a aprobar una ley para proteger los glaciares a través de su inclusión en los mapas, la Barrick obtuvo un mandato contra la aplicación de la ley en la provincia de San Juan, para que la mina de Veladero no se viera afectada. El argumento legal era que la ley aprobada por el Congreso era inconstitucional porque interfería con la obtención de ganancias a partir de una inversión ya hecha (Keenan, 2010: 30; Valente, 2012). En 1997, Barrick obtuvo de los presidentes de Chile y Argentina —Eduardo Frei y Carlos Menem, respectivamente— lo que un comentarista no dudó en llamar "un país virtual". Le otorgaron tres mil kilómetros cuadrados en la cordillera de los Andes para que los explotara con pocas regulaciones o condiciones. La ley que permite este "país virtual" fue aparentemente redactada con la ayuda de la propia Barrick (*Piensa Chile*, 18/03/2012). En Catamarca, los piquetes de los manifestantes han sido violentamente atacados por la policía, y en 2010, cuando una protesta contra la mina Yamana Gold fue reprimida con saldo de sesenta heridos, hubo un "levantamiento popular" contra el proyecto (AIM, 09/02/2012).

213 Barrick Gold no es la única minera en pleitos en Chile. La construcción de la mina de Goldcorp en el Morro, valuada en casi cuatro mil millones CAD, fue detenida en abril de 2012 cuando la Corte Suprema chilena suspendió la aprobación de un permiso ambiental tras acusaciones de que era deficiente y de que una comunidad indígena del lugar no había sido consultada antes de que comenzara la construcción (Jordan, 2012).

Al testificar ante el Comité Permanente del Parlamento sobre Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional en 2009, Romina Picolotti, ministra argentina de Medio Ambiente entre 2006 y 2008, habló sobre el poder de la Barrick en su país: "Barrick Gold es un ejemplo moderno de un poderoso gigante económico que no tiene escrúpulos en manipular la política local y puede hacer a un lado los controles ambientales y sociales para maximizar su ganancia". La exministra dijo que la compañía puede blandir lo que los argentinos llaman el "veto Barrick" sobre la política ambiental o de recursos naturales de su país. Y lo que es más siniestro: "Mis colaboradores más cercanos y yo", dijo Picolotti, "fuimos personal y físicamente amenazados a raíz de nuestra intervención en el sector minero [...]. Mi oficina fue espiada e intervenida, mis empleados fueron comprados y los funcionarios públicos que antes controlaban Barrick se volvieron empleados de la mina" (Picolotti, 2009)[214]. El "veto Barrick" es, de hecho, algo que se extiende a las compañías canadienses en general. Luego de que Argentina anunció nuevos impuestos a la exportación en 2008 —lo que provocó la ira de las compañías canadienses—, un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires reportó que "la Secretaría de Minería, a la cabeza del Gobierno de A, está trabajando en silencio con las compañías canadienses para encontrar un modo de darle la vuelta a las nuevas regulaciones federales"[215]. Este libro muestra que es muy poco probable que ese trabajo tras bambalinas haya sido llevado a cabo sin el apoyo de la embajada de Canadá.

En México, Canadá es la cuarta principal fuente de inversión extranjera. A raíz del Tratado de Libre Comercio de 1994 (el TLC de Norteamérica se ha convertido en el modelo de los acuerdos de libre comercio) y de décadas de liberalización de la economía mexicana, Canadá tiene una influencia importante en los sectores maquilador y

214 En 2010, el Secretario de Minería argentino, Jorge Mayoral, fue acusado de tener vínculos pecuniarios con Barrick (*Clarín*, 15/07/2010).

215 La cita viene de un cable de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, fechado el 21 de enero de 2009, y publicado por wikileaks el 14 de marzo de 2011.

financiero, aunque poco más de la mitad de los 12,3 mil millones CAD (cifras del 2013) están en el sector minero. Goldcorp, por ejemplo, fue el principal inversionista extranjero en México en 2010, y más del 70 por ciento de las mineras extranjeras que operan en México son canadienses. La cámara minera, Camimex, pronostica una inversión de 13 mil millones de dólares en exploración durante los siguientes años, monto del cual por lo menos la mitad vendrá de compañías canadienses (Meyer, 2010; Secretaría de Economía, 2013; *Forbes*, 17/06/2010; Mexidata, 2011). Canadá también le ofreció asistencia técnica al gobierno mexicano en la privatización de la industria petrolera.

Como en el resto de la región, la inversión canadiense ha suscitado una resistencia enconada en varias partes de México. Las comunidades bloquean carreteras, clausuran minas y estallan huelgas para mejorar los salarios y las condiciones laborales. La represión y la violencia han sido aquí también la norma para los que desafían los intereses canadienses. Seis opositores a proyectos mineros canadienses fueron asesinados entre 2009 y 2014. Muchos otros han sufrido amenazas de muerte. En mayo de 2008, el gobierno mexicano envió al ejército y a la policía a terminar la ocupación de la mina Trinidad, de Fortuna Silver, y en el operativo arrestó a decenas de personas y entró a las casas de los opositores (Rights Action, 2009g). Una compañía canadiense, Gammon Gold, respondió a un paro laboral en 2010 con el despido de 400 trabajadores (Paley, 2011; *Canadian Press*, 18/06/2010: B8).

Las compañías canadienses en México pueden contar con el pronto apoyo de la Embajada. Luego de los bloqueos de los pobladores, la agencia ambiental del Estado mexicano le ordenó a la New Gold Mining Co. detener sus operaciones en San Javier, una orden que la compañía ignoró. Se supo, después, que varios de los contratos con los propietarios comunales de los terrenos en los que operaba eran fraudulentos, y su permiso ambiental era ilegal (DeFrancesco, 2010). A raíz de la orden para que detuviera las operaciones, circuló una andanada de correos en la Embajada, y la respuesta pública de ésta —que

por supuesto apoyaba a New Gold— fue redactada con el apoyo de la propia compañía (Connors, 2009).

El 27 de noviembre de 2009, un conocido activista antiminería, Mariano Abarca, fue asesinado. Abarca era uno de los dirigentes de la oposición contra Blackfire Exploration, que buscaba barita [hidróxido de bario] en Chiapas. Su asesinato provocó una ola de manifestaciones contra la compañía, lo que obligó al gobierno mexicano a clausurarla temporalmente, por supuestas preocupaciones ambientales (Montgomery, 2009: A19). La respuesta de Blackfire consistió en demandar al gobierno mexicano por 800 millones CAD, de acuerdo con el capítulo 11 del TLC, reclamando daños y ganancias no obtenidas debido a la clausura. Blackfire fue posteriormente investigada por la Policía Montada de Canadá por presuntos pagos al alcalde para que lidiara con la oposición a la mina (McArthur, 2011: A3).

Según Jennifer Moore y Gillian Colgrove, quienes estudiaron cientos de documentos de la Embajada para redactar un reporte acerca de su papel en el *affaire* Blackfire, ésta jugó un papel central en la campaña de apoyo a la compañía, "incluso después de que Abarca fuera asesinado, la mina suspendida y los escándalos de corrupción fueran hechos públicos". Moore y Colgrove añaden que "la Embajada siguió defendiendo a la compañía ante los funcionarios mexicanos y les entregó información acerca de cómo demandar al estado de Chiapas bajo las normas del TLC por haber cerrado la mina", y concluyen que "el apoyo activo y sin titubeos de la Embajada pudo haber fungido como un incentivo para que Blackfire no cumpliera con las leyes locales e internacionales" (Moore y Colgrove, 2013).

El apoyo de la Embajada a violadores a los derechos humanos en México no es ninguna sorpresa. Está haciendo lo mismo que sus contrapartes hacen en el resto de la región, y el gobierno canadiense, con la firma del TLC a cargo de los liberales y con el apoyo inmediato de los conservadores al presidente Felipe Calderón en una polémica elección, ha dejado en claro dónde están sus prioridades. Recientemente, los conservadores han apoyado la militarización de

México. En 2009, la Policía Montada empezó a entrenar a la Policía Federal mexicana —una fuerza con serios problemas de corrupción, que ha estado implicada en casos de flagrante abuso a los derechos humanos—. México también es parte del Directorado para el Entrenamiento y la Cooperación Militar canadiense, lo que no ha tenido ningún impacto discernible sobre su historial de derechos humanos (Paley, 2012d). Pero en estos casos, por supuesto, la cuestión no gira en torno a la reforma de los aparatos de seguridad. Lo que Canadá busca en México es construir lazos formales e informales y, a través de ellos, asegurarse de que sus inversiones y proyectos sean estables y seguros. En 2012, el ejército mexicano y la policía federal rompieron un bloqueo en la mina La Platosa de Excellon Resources (ProDESC, 2012). Anticipándose a la apertura de la industria petrolera mexicana, Public Safety Canada y el gobierno mexicano han trabajado en una evaluación de las necesidades de seguridad de los proyectos petroleros y gaseros costeros[216].

Otro país que hay que destacar es República Dominicana, en donde Canadá es el principal inversionista extranjero con 548 millones CAD en minería, maquilas y capital bancario. La inversión canadiense que ha atraído más atención y oposición es la mina de oro Pueblo Viejo, de Barrick, en Cotuí (Goldocorp tiene una participación minoritaria). Esta es una de las minas de oro más grandes del mundo, y ha recibido financiamiento de Export Development Canada por más de 500 millones CAD (Halifax Initiative, 2010). Pueblo Viejo ha provocado manifestaciones y una campaña para la prohibición del uso de cianuro. En 2010, todavía durante el período de construcción, un accidente provocó el envenenamiento de más de 400 trabajadores. Aunque éstos atestiguaron haber escuchado una explosión antes de sentirse enfermos, Barrick dijo que se habían envenenado por comer comida podrida (*Listin Diario*, 15/03/2010; *Dominican Today*, 24/03/2010).

216 Los planes de Public Safety Canada hacia México son discutidos en un cable de la embajada de Estados Unidos en Ottawa, un documento publicado por wikileaks y escrito el 15 de abril de 2009.

En respuesta a las críticas de los movimientos ambientales, los científicos y campesinos que afirman que Barrick les robó la tierra sin permiso ni compensación, el proyecto fue defendido públicamente por el embajador canadiense, quien afirmo que "No sólo es importante lo que obtendremos en términos económicos, sino también ambientalmente" (*Dominican Today*, 11/02/2010). No es claro qué se "obtendrá" ambientalmente. República Dominicana fue visitada varias veces por ministros canadienses para discutir los intereses de los inversionistas —en ninguna de estas reuniones se habló de la campaña anti Pueblo Viejo o de la contaminación de los trabajadores—. La ministra de Estado para las Américas, Diane Ablonczy, visitó República Dominicana en 2011 y 2012, y otros dos ministros viajaron en agosto de 2012. Poco después de la última visita, una protesta contra Pueblo Viejo terminó con el saldo de 40 personas heridas por la policía (Vásquez, 2012). Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Barrick. En un contexto de oposición pública a la mina y potenciales súper ganancias por los altísimos precios del oro cuando comenzó la producción en 2013, el gobierno dominicano detuvo las exportaciones de oro y exigió el pago de impuestos más altos de los que originalmente habían sido acordados en 2009. El gobierno argumentaba que por cada 100 dólares que Barrick exportaba, la compañía se quedaba con 97, y la obligó a pagar un impuesto más alto (Northern Miner, 2013).

Derechos humanos y ecología

La dinámica del desarrollo desigual, la pobreza y la violencia en América Latina está ligada a la economía política de un capitalismo extractivista destructor del ambiente, en el que las corporaciones multinacionales desplazan a los campesinos y a los indígenas para apropiarse de las enormes ganancias de la explotación de recursos naturales en medio de un enorme *boom* de los precios de los *commodities*. La proliferación de la maquila, basada en el trabajo baratísimo (a menudo femenino), en la que las compañías canadienses han jugado un rol

tan importante, no es realmente una alternativa a la dependencia de la explotación de los recursos naturales. El objetivo de este libro ha sido subrayar el papel protagónico del capital y el Estado canadiense en la extensión y profundización de este desastre social y ecológico.

La cantidad de empresas canadienses que operan en América Latina se ha expandido dramáticamente desde finales de los años noventa, especialmente en el sector financiero y en el de los recursos naturales. Las consecuencias para los derechos humanos en las comunidades afectadas, así como para el medio ambiente, han sido terribles. La presencia de estas corporaciones y la defensa de sus intereses dependen de la intervención del Estado canadiense. Los latinoamericanos han respondido con heroicos movimientos de resistencia, a menudo enfrentándose con fuerzas militares y paramilitares. La expansión del capital canadiense ha provocado siempre descontento popular, y éste se ha expresado en disputas legales o incluso como confrontación directa contra las corporaciones mineras. Esta dialéctica inestable de la expansión del capital canadiense y la consiguiente protesta popular ha estado en el centro de nuestra investigación teórica acerca del imperialismo canadiense en América Latina.

Hemos intentado mostrar que no se trata de incidentes aislados llevados a cabo por un pequeño grupo de "manzanas podridas", sino que la impresionante violencia e injusticia social que acompañan las actividades del capital canadiense en América Latina son características sistemáticas del imperialismo del siglo XXI. Hemos afirmado que el único marco capaz de entender los motores de la política exterior canadiense en la región, y sus consecuencias para las poblaciones, es uno que sitúe a Canadá como a una potencia imperialista secundaria dentro de un sistema mundial que sistemáticamente beneficia al capital de Primer Mundo en detrimento de los pueblos y el medio ambiente de los países del Sur.

Este sistema mundial imperialista es completamente capitalista en el siglo XXI. Una de las características esenciales del capitalismo como sistema social es una compulsión inherente hacia la autoexpansión. La

historia del imperialismo capitalista es la de la producción y reproducción de las desigualdades estructurales entre las regiones y los distintos Estados del sistema mundial. El capitalismo mundial ha avanzado al ritmo del desarrollo desigual y gracias a la reproducción consciente de esta desigualdad asumida por las instituciones financieras internacionales y las principales potencias estatales, lo que incluye, en un segundo plano, al Estado canadiense. El sistema mundial tal y como está organizado tiene el efecto de extraer riqueza y recursos de los países subordinados, y redirigirlos hacia los poderosos. Esta desigualdad es inherente a la lógica de la acumulación capitalista. Pero aunque la propia lógica de la acumulación crea desigualdad en los patrones de desarrollo, estos patrones son reproducidos por la intervención intencional de las potencias imperialistas. El objetivo de estas potencias es hacer del mundo un lugar seguro para la acumulación capitalista en general, y en especial para sus propios capitales.

Hemos intentado demostrar también que el imperialismo tiene una lógica ecológica. La dinámica del imperialismo contemporáneo depende de regímenes ecológicos en la medida en la que la acumulación depende de recursos naturales distribuidos de manera dispar a lo largo del mundo. La geografía de la acumulación proviene de la intervención sistemática en esas regiones, y en la transformación de las ecologías regionales y locales en las que se encuentran esos recursos. La sustentabilidad de esas ecologías no es una prioridad en comparación con la búsqueda de ganancias y la autoexpansión del capital. La destrucción ecológica, como hemos mostrado en este libro, es un subproducto inevitable de un sistema institucionalmente estructurado en torno a las necesidades del capital por encima de cualquier otra consideración.

De la misma manera en la que el imperialismo y el racismo han ido juntos a lo largo de la historia, el desarrollo del imperialismo canadiense actual mantiene uno de los principios que lo caracteriza: la cínica desposesión de las comunidades locales. Los pueblos indígenas latinoamericanos han sido sometidos a patrones de abuso por el capital

canadiense, paralelos a la relación entre el capital y los indígenas dentro de Canadá. La visión del mundo del capital canadiense es que las corporaciones tienen la capacidad única de apreciar y apropiarse de las riquezas escondidas bajo tierra. Las comunidades que viven encima de esos depósitos no tienen ni el interés ni el conocimiento, y son por tanto obstáculos que deben ser removidos —a través de la cooptación si se puede, o a través de la coerción, si se la necesita— para que el desarrollo económico se pueda echar a andar. La expansión del capital canadiense en el sector de recursos de América Latina ha dependido en gran medida de este principio operativo racista, con consecuencias desastrosas para las comunidades que son vistas como impedimentos al progreso.

Las súper ganancias disponibles para las corporaciones canadienses han provocado el involucramiento del Estado canadiense y han catalizado los instintos depredadores del capital. En efecto, la profundidad de la penetración canadiense en América Latina nunca hubiera sido posible sin el apoyo de la oficina del Primer Ministro, la de Relaciones Exteriores (FAIT), las Embajadas, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) —todas estas parte del nuevo departamento denominado Global Affairs— y la de las oficinas de Defensa Nacional, Recursos Naturales y Salud Canadá. Éste es el rostro y la naturaleza de la estrategia de relaciones exteriores que han llamado "gobierno holístico" (whole-of-government aproach). Estas distintas agencias del Estado canadiense han actuado con el común objetivo de asegurar la expansión del capital canadiense a costa de las poblaciones locales.

La represión de los movimientos sociales se ha convertido en una necesidad debido a la resistencia generada por la expansión. Ideológicamente, esto es justificado en términos de "seguridad" y "democracia". "Seguridad" entendida como seguridad de la propiedad privada y de las corporaciones para generar ganancias, y "democracia" como el ambiente político y jurídico que garantice lo anterior. La política exterior canadiense en América Latina, incluyendo sus políticas y su verborrea

acerca de la seguridad y la democracia, está abiertamente motivada por el deseo de asegurar las mejores condiciones posibles para los inversionistas. Probablemente no hay una expresión más clara de estos presupuestos ideológicos que la cínica defensa de la "democracia" en un lugar como Honduras actualmente.

Otras facetas de la caja de herramientas del imperialismo contemporáneo incluyen la ayuda al desarrollo y la llamada Responsabilidad Social Corporativa (CSR). El gasto canadiense en ayuda al desarrollo es irrisorio, pero incluso esta pequeña cantidad busca reproducir las condiciones de acumulación del capital, y especialmente ayudar a las compañías canadienses. La CSR es el hermano todavía más feo de la ayuda al desarrollo. Como hemos demostrado, la CSR emergió precisamente como un modo de contener las potentes contradicciones sociales generadas en las comunidades tras el avance del capital. Incluso las más pequeñas dádivas —minúsculas en comparación con las ganancias— dependen de la total sumisión a los intereses de las compañías. Detrás de esta zanahoria se esconde el palo de la represión contra los que se pongan en el camino. La CSR es una trampa ideológica completamente cínica, diseñada para comprar a las comunidades por apenas unos centavos una vez que los megaproyectos se han transformado en hechos consumados.

El aumento en la inversión extranjera directa canadiense en América Latina ha tenido lugar en medio de un auge en la demanda por materias primas de la cual China es la principal responsable. La respuesta a los altos precios fue la extensión e intensificación de la minería, la extracción del petróleo y el gas, y la siembra de monocultivos. Estos procesos, como hemos demostrado, conllevan estrategias violentas de acumulación por desposesión, estrategias en las que las comunidades campesinas e indígenas son desplazadas y la propiedad comunal es transferida a las grandes corporaciones. El acompañante inevitable de este giro hacia el extractivismo es un cambio en la posición de la región dentro de la división internacional del trabajo. Se trata, en cierto modo, del retorno hacia una época anterior en la que la

América Latina fungía exclusivamente como un productor de materias primas para el centro del sistema mundial.

Hemos demostrado que el extractivismo en la América Latina contemporánea está unido a un neoliberalismo militarizado. La violencia, el fraude, la corrupción y las prácticas autoritarias son, cada vez más, una rutina para los militares y los paramilitares al servicio de las grandes mineras. El asesinato de líderes de movimientos sociales y de activistas de base se ha convertido en una práctica común. Los movimientos sociales han sido criminalizados a través del etiquetamiento de sus participantes: narcotraficantes, terroristas o, incluso, narcoterroristas.

Este libro ha intentado vincular la dinámica mundial del imperialismo y el lugar ocupado por Canadá en esas dinámicas y su relación con la América Latina contemporánea. Canadá ha actuado tras bambalinas en Honduras, un país centroamericano excepcionalmente pobre, apoyando a fuerzas golpistas que han abierto un mayor espacio para los inversionistas canadienses en la minería y la maquila. Canadá ha profundizado sus vínculos económicos con Colombia, donde oponerse al extractivismo o pertenecer a un sindicato en este sector puede ser una sentencia de muerte. En efecto, los opositores a los proyectos mineros canadienses han sido asesinados no sólo en Colombia, sino también en Guatemala, El Salvador, Perú y México. Además de esto, Canadá ha desarrollado relaciones con algunos de los más violentos aparatos de seguridad de la región, los cuales están implicados en asesinatos, detenciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por supuesto, estos aparatos represivos apoyan a los inversionistas extranjeros contra las comunidades rebeldes. Canadá ha entrenado, financiado y le ha vendido armas a las fuerzas armadas o policías de Colombia, Perú, Honduras y Guatemala.

El capital canadiense influye en la vida del latinoamericano de a pie. Negativamente. La evidencia que hemos acumulado a lo largo de este libro deja en ridículo las declaraciones de los ejecutivos de las mineras o las maquilas que se lavan las manos y señalan los compromisos de sus empresas con la responsabilidad social corporativa.

Del mismo modo, hemos expuesto la cruel hipocresía de Canadá al declararse partidario de la democracia en la región. Lo que es más importante, hemos revelado un patrón de comportamiento sistemático, predecible y repetido por parte del capital y el Estado canadiense. Concluir cualquier otra cosa sería autoengañarse. Además de revelar este patrón, hemos intentado explicar su recurrencia. Para hacerlo, hemos situado a Canadá en un sistema imperialista jerárquico y en la acumulación desigual del capital en el mundo. Canadá es una potencia capitalista secundaria que obtiene sus privilegios de un sistema más amplio estructurado en torno a la subordinación del Tercer al Primer Mundo. Pero no hay nada inevitable en el desarrollo de estas tendencias. Son impredecibles y están llenas de contradicciones. De las grietas de este sistema internacional de dominación han emergido formas novedosas de autoorganización y resistencia. Ellas representan la principal amenaza a la reproducción del imperialismo, y, por tanto, la principal esperanza para la humanidad, la justicia social y la sustentabilidad ecológica.

Bibliografía

ACHCAR, GILBERT

2023 *The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising*. Berkeley: University de California Press.

ACHTENBERG, EMILY

2013a "Report from Honduras: How the Election Was Stolen", en *NACLA Report on the Americas* (09/12/2013). Disponible en: https://nacla.org/blog/2013/12/9/report-honduras-how-election-was-stolen. Fecha de acceso: 29/05/2014.

2013b "In Post-Election Honduras, Challenges and Opportunities for the Resistance", en *NACLA Report on the Americas* (21/12/2013). Disponible en: http://NACLA.org/blog/2013/12/21/post-election-honduras-challenges-andopportunities-resistance. Fecha de acceso: 28/05/2014.

2011 "El Salvador: Funes Opposes Mining, But Legal Ban Uncertain", en *NACLA Report on the Americas* (08/07/2011). Disponible en: https://NACLA.org/blog/2011/7/8/el-salvador-funes-opposes-mining-legal-ban-uncertain. Fecha de acceso: 11/07/2011.

ACOSTA, ALBERTO (ed.)

2013 *El correísmo al desnudo*. Quito: Montecristi Vive.

2006 *Breve historia económica del Ecuador*. 2da. edición, 9na. impresión. Quito: Corporación Editora Nacional.

ACOSTA, LUIS JAIME

2011 "Colombia Increases Security at Largest Oil Field", en *National Post* (26/10/2011). Disponible en: http://business.financialpost.com/2011/10/26/colombia-increases-security-at-largest-oil-field/?__lsa=760c-1710. Fecha de acceso: 12/02/2014.

ALBIAC, M. DOLORES
1999 "Los ricos de El Salvador", en *Estudios Centroamericanos*, vol. 612: 841-864.

ALBO, GREGORY
2007 "Neoliberalism and the Discontented", en Leo Panitch y Colin Leys (eds.), *Socialist Register 2008: Global Flashpoints, Reactions to Imperialism and Neoliberalism*. New York: Monthland Review Press.

ALERTA MINERA
s/f "Expertos y colectivos sociales reflexionan sobre el agua y los impactos de la minería del oro". Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/13058-expertos-y-colectivos-sociales-reflexionansobre-el-agua-y-los-impactos-de-la-mineria-del-oro. Fecha de acceso: 01/08/2013.

ALMEIDA, PAUL
2012 "Subnational Opposition to Globalization", en *Social Forces*, vol. 90, núm. 4: 1051-1072.

ALMENDAREZ, JUAN
2011 "Cover-Up: Goldcorp (Entre Mares) and the Government of Honduras Hide Information About the Poisoning of Children", en *Rights Action, Boletín electrónico* (08/11/2011).

ÁLVAREZ HIDALGO, WENDY
2011 "Altos precios del oro animan exploración minera", en *La Prensa* (29/11/2011). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2010/11/29/economia/44935. Fecha de acceso: 08/08/2013.

ALLAN, MATTHEW
2011 "Peruvians protest against Bear Creek's Santa Ana", en *Northern Miner* (6-12/06/2011).

AMAT, YAMID
2012 "'Colombia está al borde de un desastre ambiental': Sandra Morelli", en *El Tiempo* (14/10/2012). Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12303681. Fecha de acceso: 18/02/2014.

AMAZON WATCH
2012 "Talisman Energy Withdraws from Peruvian Amazon" (13/09/2012). Disponible en: http://amazonwatch.org/news/2012/0913-talisman-energy-withdraws-from-peruvianamazon. Fecha de acceso: 14/09/2012.

ANTENTAS, JOSEP MARÍA Y ESTHER VIVAS
2012 *Planeta indignado: Ocupando el futuro*. 2da. edición. Madrid: Sequitur.

ARAUJO, ALBERTO
2012 "Dos escenarios parar la reforma minera", en *El Comercio* (25/10/2012). Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/escenariosreforma-minera.html. Fecha de acceso: 22/01/2013.

ARELLANO-YANGUAS, JAVIER
2011 "Aggravating the Resource Curse: Decentralisation, Mining and Conflict in Peru", en *The Journal of Development Studies*, vol. 47, núm.4: 617-638.

ARNOLD, RICK
2012a "Mining, cida partnership in Peru is pacification program, not development", revista *Embassy* (05/03/2012). Disponible en: http://m.embassynews. ca/opinion/2012/03/07/mining-cida-partnership-in-peru-is-pacification-programnot-development/41338?device=mobile.. Fecha de acceso: 06/03/2012.
2012b "Mining, CIDA partnership in Peru is pacification program, not development". Embassy (05/03/2012). Disponible en: http://m.embassynews.ca/news/2012/03/05/mining-cida-partnership-in-peru-is-pacification-programnot-development/42195. Fecha de acceso: 06/03/2012.

ARCE, MOISÉS
2014 *Resource Extraction and Protest in Peru*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
2008 "The Repoliticization of Collective Action After Neoliberalism in Peru" en *Latin American Politics and Society*, vol. 50, núm.3: 37-62.

ARSENAULT, DANIEL
2010a *Situational Report*. Tegucigalpa: Embajada canadiense (30/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-00539.
2010b *Situational Report*. Tegucigalpa: Embajada canadiense (30/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-01177.
2009a *Situation Report*. Tegucigalpa: Office of the Canadian Embassy (25/06/2009). Acceso a la información: Expediente A-2009-00780.
2009b *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (24/09/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.
2006 "Digging Up Canadian Dirt in Colombia", en *Canadian Dimension* (noviembre/diciembre).

AUTOR CENSURADO

2009 "Meeting with [censurado]". Quito: Kinross (28/11/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01197.

AUTOR DESCONOCIDO

2010 "Roundtable with Club of Canadian Investors". Quito: Canadian Embassy (fecha exacta desconocida, 2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.

2009a "Preliminary results of Presidential and General Elections". Quito: Canadian Embassy (27/04/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02391.

2009b "Thanksgiving Dinner". Quito: Ecuador-Canada Chamber of Commerce (30/09/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01185.

2009c "Invest Ecuador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (06/12/2009).

2008a "Reunión con Embajador —Seminario Hidroeléctrico". Quito: Ecaudorian-Canadian Chamber of Commerce (06/08/2008).

2008b "Re: Responsabilidad Social y Mineria —CERES y Embajada de Canada". Quito: Kinross Gold (13/02/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01198.

2008c "Talking points for Canadian mining industry meeting with President Correa". Quito: Aurelian Resources (24/04/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01198.

2008d "Update on the Situation in Ecuador". Embassy in Quito (fecha exacta desconocida, 2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00052.

2008e "Canadian Mining Companies in Ecuador: discussion points with Government of Canada" Quito: Aurelian Resources (05/08/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01198.

2008f "Roundtable with Canadian/Ecuadorian Investors" (ubicación y fecha desconocidas, 2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186.

2007 "Mining and Community Development Social April 26". Quito (20/04/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01191.

s/f a "Canadian Contribution to Honduran Truth Commission —Background". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (sin fecha). Acceso a la información: Expediente A-2010-01236.

s/f b "Venezuela" [origen desconocido]: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Acceso a la información: Expediente A-2008-00058.

s/f c "Bilateral with Venezuela". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00058.

s/f d "Meeting with Foreign Minister Nicolas (sic) Maduro". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01155.

AVILÉS, WILLIAM

2006 "Paramilitarism and Colombia's Low-Intensity Democracy", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 38, núm. 2: 379-408.

AYALA, EDGARDO

2010 "Most Water-Stressed Country in Central America", en *Inter Press Service* (09/12/2010). Disponible en: http://www.ipsnews.net/2010/12/el-salvador-most-water-stressed-country-in-central-america/. Fecha de acceso: 06/12/2010.

AZZELLINI, DARIO

2010 "Constituent Power in Motion: Ten Years of Transformation in Venezuela", en *Socialism and Democracy*, vol. 24, núm. 2: 8-31.

BALKISSOON, DENISE

2010 "Canadian Ambassador guilty of slander", en el *Toronto Star* (17/06/2010). Disponible en: http://www.thestar.com/news/article/824518--formercanadian-ambassador-guilty-of-slander. Fecha de acceso: 01/05/2012.

BANCO MUNDIAL

s/f "Migration and Remittances Data". Disponible en www.worldbank.org. Fecha de acceso: 14/03/2014.

BANK OF CANADA

s/f Disponible en: http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-converter/.

BARBER, JOHN

2013 "Is this how the system works? Canadian government looks away as Pacific Rubiales faces accussations in Colombia", en *Rabble* (20/09/2013). Disponible en: http://rabble.ca/blogs/bloggers/comfront/2013/09/this-how-system-works-canadian-government-looks-away-pacific-rubiale. Fecha de acceso: 20/09/2013.

BARRY-SHAW, NIK Y D. OJA JAY

2012 *Paved With Good Intentions: Canada's development ngos from idealism to imperialism*. Halifax: Fernwood.

BASU, NILADRI Y HOWARD HU

2010 "Toxic metals and indigenous peoples near the Marlin mine in western Guatemala". *Technical Report for Physicians for Human Rights* (05/2010), citado en J. Van de Wauw, R. Evens y L. Machiels, "Are groundwater overextraction and reduced infiltration contributing to arsenic related health problems near theMarlin mine?" (14/10/2010). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/266274045_Are_Groundwater_overextraction_and_reduced_infiltration_contributing_to_Arsenic_related_health_problems_near_the_Marlin_mine_Guatemala. Fecha de acceso: 02/05/2012.

BEA – BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE)

s/f a "Balance of Payments and Direct Investment Position Data". Disponible en: http://www.bea.gov/international/di1usdbal.htm. Fecha de acceso: 05/05/2014.

s/f b U.S. Department of Commerce. Disponible en: http://www.bea.gov/iTable/index_MNC.cfm).

BEBBINGTON, ANTHONY

2012 "Underground Political Ecologies: The Second Annual Lecture of the Cultural and Political Ecology Specialty Group of the Association of American Geographers", en *Geoforum*, vol. 43, núm. 6: 1152-1162.

BEBBINGTON, ANTHONY (*et al.*)

2008 "Mining and Social Movements: Struggles Over Livelihood and Rural Territorial Development in the Andes", en *World Development*, vol. 36, núm. 12: 2888-2905.

2007 *Mining and Development in Peru*. Londres: Peru Support Group.

BEBBINGTON, ANTHONY Y MARTIN SCURRAH

2013 "Hydrocarbon Conflicts and Indigenous Peoples in the Peruvian Amazon: Mobilization and Negotiation Along the Río Corrientes", en A. Bebbington y J. Bury (eds.), Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America. Austin: University of Texas Press.

BEBBINGTON, ANTHONY Y MARK WILLIAMS

2008 "Water and Mining Conflicts in Peru", en *Mountain Research and Development*, vol. 28, núms. 3-4: 190-195.

BECKER, MARC

2013 "Ecuador's Rafael Correa Re-elected by a Wide Margin", en *Upside Down World* (18/02/2013). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/4135-ecuadors-rafael-correa-re-elected-by-a-widemargin. Fecha de acceso: 15/08/2014.

2012 *Pachakutik: Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador*, 2da. edición, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

2008 *Indians and Leftists in the Making of Ecuador's Modern Indigenous Movements*. Durham y Londres: Duke University Press.

BERNSTEIN, HENRY

2000 "Colonialism, Capitalism, Development", en Tim Allen y Alan Thomas (eds.), *Poverty and Development in the 21st Century*. Oxford: Oxford University Press.

BERTHIAUME, LEE

2013a "Questions raised as Canada moves to help Peru streamline environmental assessments for mining projects", en *Canada.com* (22/05/2013). Disponible en: http://o.canada.com/business/questions-raised-as-canada-moves-to-helpperu-streamline-environmental-assessments-for-mining-projects. Fecha de acceso: 23/05/2013.

2013b "Conservative government looking to bolster Canada's arms trade with developing countries", en *Calgary Herald* (24/07/2013). Disponible en: www.calgaryherald.com. Fecha de acceso: 14/08/2013.

2011 "Harper dials up vision of activist Canada prepared to face new, emerging threats", en la revista *Embassy* (13/06/2011). Disponible en: http://www.embassynews.ca/news/2011/06/13/harper-dials-up-vision-of-activist-canadaprepared-to-face-new-emerging-threats/42083, Fecha de acceso: 14/06/2011.

2010a "Did Kairos Defunding come down to Mining Interests and one Hand-Written Note?", en la revista *Embassy* (27/10/2010).

2010b "Leading the Change at Rights and Democracy", en la revista *Embassy* (22/09/2010).

BIANCHINI, FLAVIANO

2006 *Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin, en el Valle de Siria y repercusiones sobre la salud humana*. Disponible en: http://www.miningwatch.ca/dangerous-contamination-levels-siria-valleydemonstrated-independent-study. Fecha de acceso: 08/01/2011.

BICKIS, IAN

2012a "Guatemala Proposes 40% Stake in Mining Companies", en *The Northern Miner*, núm. 22 (16-22/07/2012).

2012b "Mid-tier Producers Grapple with Peru's Growing Pains", en *The Northern Miner* (25/06-01/07/2012.

2011 "Gran Colombia Struggles with Violence in Colombia", en *The Northern Miner* (31/10-06/11/2011).

BID – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2012 *Annual Report 2012: Financial Statement*. Washington, DC: BID.

BIRD, ANNIE

2012 "Drugs and Business: Central America Faces another Round of Violence", en *NACLA Report on the Americas*, vol. 45, núm 1.

2011 "Community Leaders Arrested on Trumped Up Charges for Protecting Forests From Illegal Loggers Linked to Goldcorp". Washington, DC: Rights Action (05/07/2011).

BLACKWOOD, ELIZABETH Y VERÓNICA STEWART

2012 "CIDA and the Mining Sector: Extractive Industries as Overseas Development Strategy", en S. Brown (ed.), *Struggling for Effectiveness*. Montreal: Mc Gill-Queen's University Press.

BLANCO, HUGO

1972 *Land or Death: The Peasant Struggle in Peru*. New York: Pathfinder Press.

BLANCHFIELD, MIKE

2013a "Venezuela Slams Harper for 'Blunt, Insensitive, Impertinent' Remarks on Hugo Chávez's Death", en *National Post* (07/03/2013). Disponible en: http://news.nationalpost.com/2013/03/07/venezuela-slams-harper-for-bluntinsensitive-impertinent-remarks-on-hugo-chavezs-death/. Fecha de acceso: 16/01/2014.

2013b "Canada quietly Loosens Limits on Assault-Weapon Exports to Colombia", en *The Globe and Mail* (02/01/2013). Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadaquietly-loosens-limits-on-assault-weapon-exports-to-colombia/article6861525/. Fecha de acceso: 03/01/2013.

BLAND, GARY Y LUIS A. CHIRINOS

2014 "Democratization Through Contention? Regional and Local Governance Conflict in Peru", en *Latin American Politics and Society*, vol. 56, núm. 1: 73-97.

BOGAN, TOM
2009 "A Crude Climber in Colombia", en *Forbes* (29/09/2009). Disponible en: http://www.forbes.com/2009/09/29/pacific-rubiales-colombia-businessenergy-old.html. Fecha de acceso: 12/02/2014.

BOIVIN, CAROLINE
2010 "OAS and Aboriginal Cooperation With Ecuador". Foreign Affairs and International Trade (fecha exacta desconocida, 2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.

BONEFELD, WERNER
2001 "The Permanence of Primitive Accumulation: Commodity Fetishism and Social Constitution", en *The Commoner*, núm. 2. Disponible en: http://www.commoner.org.uk/02bonefeld.pdf. Fecha de acceso: 12/10/2014.

BOOTH, JOHN A.
1991 "Socioeconomic and Political Roots of National Revolts in Central America", en *Latin American Research Review*, vol. 25, núm. 1: 33-73.

BOOTH, JOHN A.; CHRISTINE J. WADE, Y THOMAS W. WALKER
2006 *Understanding Central America: Global Forces, Rebellion, and Change*. 4ta. edición. Boulder: Westview.

BORON, ATILIO
2013 *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Hondarribia: Editorial Hiru.
2009 "Honduras: la futilidad del golpe", en *Rebelión* (29/06/2009).

BOUCHER, STEPHEN R.; BRADFORD L. BARHAM Y MICHAEL R. CARTER
2005 "The Impact of 'Market-Friendly' Reforms on Credit and Land Markets in Honduras and Nicaragua", en *World Development*, vol. 33, núm. 1: 107-128.

BRACKEN, ALISON
2008 "Honduras: Murder Never Went Away", en *Le Monde Diplomatique*, English Edition (10/2008). Disponible en: http://mondediplo.com/2008/10/13honduras. Fecha de acceso: 25/07/2009.

BRENNER, ROBERT
2006 "What Is, and What Is Not, Imperialism?", en *Historical Materialism*, vol. 14, núm. 4: 79-105.

BRISON HANSARD, SCOTT
2009 40th Parliament, 2nd Session. Number 080 (14/09/2009).

BROAD, ROBIN Y JOHN CAVANAGH
2011 "Like Water for Gold in El Salvador", en *The Nation* (11/07/2011). Disponible en: http://www.thenation.com/article/water-gold-elsalvador/. Fecha de acceso: 19/07/2011.

BROCKETT, CHARLES D.
1991 "The Structure of Political Opportunities and Peasant Mobilization in Central America", en *Comparative Politics*, vol. 23, núm. 3: 253-274.

BROWN, STEPHEN
2012 "Aid Effectiveness and the Framing of New Canadian Aid Initiatives", en S. Brown (ed.), *Struggling For Effectiveness: CIDA and Canadian Foreign Aid*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

BRUCE, IAIN
2009 *The Real Venezuela*. Londres: Pluto.

BUGAILISKIS, ALEXANDRA
2010a "Follow up on Your Meeting with DG Jamie Lambert". Ottawa, Foreign Affairs and International Trade (29/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-02408.
2010b "Follow up on Your Meeting with DG Jamie Lambert". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (29/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

BULMER-THOMAS, VÍCTOR
1990 "Honduras Since 1930", en *The Cambridge History of America Latina*, Part Two, Central America. Cambridge: Cambridge University Press.

BULL, BENEDICTE
2013 "Diversified Business Groups and the Transnationalisation of the Salvadorean Economy", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 45, núm. 2: 265-295.

BUNCOME, ANDREW
2006 "The world's riches and the poor: dark side of the gold rush", en *The Independent* (11/05/2006). Disponible en: http://news.independent.co.uk/world/americas/article363616.ece. Fecha de acceso: 01/10/2009.

BURBACH, ROGER
2009 "Et tu, Daniel? The Sandinista Revolution Betrayed", en *NACLA Report on the Americas,* vol. 42, núm. 2 (03-04/2009).

BURBACH, ROGER Y ORLANDO NUÑEZ
1987 *Fire in the Americas: Forging a Revolutionary Agenda*. Londres: Verso.

BURCHARDT, HANS-JÜRGEN Y KRISTINA DIETZ
2014 "(Neo-)Extractivism —A New Challenge for Development Theory from Latin America", en *Third World Quarterly*, vol. 35, núm. 3: 468-486.

BURRON, NEIL A.
2011 "Reconfiguring Canadian Democracy Promotion", en *International Journal*, vol. 66, núm. 2: 391-417.

BURY, JEFFREY
2002 "Livelihoods, Mining and Peasant Protests in the Peruvian Andes", en *Journal of Latin American Geography*, vol. 1 núm. 1: 3-16.

BURY, JEFFREY Y TIMOTHY NORRIS
2013 "Rocks, Rangers, and Resistance: Mining and Conservation Frontiers in the Cordillera Huayhuash, Peru", en A. Bebbington y J. Bury (eds.), *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. Austin: University of Texas Press.

BURNETT, HENRY G.; CALINE MOUAWAD Y LOUIS-ALEX BRET
2013 "Resource Nationalism and Mining Reforms: An increased potential for international disputes", en *The Northern Miner* (26/09/2013). Disponible en: http://www.northernminer.com/news/commentary-resource-nationalism-and-mining-reforms-could-mean-moreinternational-disputes/1002758767/. Fecha de acceso: 30/09/2013.

BUSS, JULIA
2010 "Omint Request: Letter to mint's Guatemalan counterpart". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (18/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-02408.

CALDERON, ROMEO
2011a "Mining issues" . San Salvador: Canadian Embassy (27/06/2011). Acceso a la información: expediente A-2012-00533.
2011b "Solicitud entrevista sobre minería". San Salvador: Embajada canadiense (04/03/2011). Acceso a la información: Expediente A-2011-02152.

s/f "Mining in El Salvador, an update". San Salvador: Embajada canadiense, sin fecha. Acceso a la información: Expediente A-2011-02152.

CÁLIX, ÁLVARO

2010 "Honduras: de la crisis política al surgimiento de un nuevo actor social", en *Nueva Sociedad*, núm. 226.

CALLINICOS, ALEX Y SAM ASHMAN

2006 "Capital Accumulation and the State System: Assessing David Harvey's The New Imperialism", en *Historical Materialism*, vol. 14, núm. 4: 107-131.

CAMERON MAXWELL Y CATHERINE HECHT

2008 "Canada's Engagement With Democracies in the Americas", en *Canadian Foreign Policy*, vol. 14, núm. 3: 11-28.

CAMPBELL, BONNIE

2004 "Peace and Security in Africa and the Role of Canadian Mining Interests: New Challenges for Canadian Foreign Policy", en *Labour, Capital and Society*, vol. 37, núms. 1-2: 98-129.

CAMPBELL, COLIN

2006 "Addicted to Blood Coal", en la revista *Maclean's* (20/03/2006).

CANADA

2012 "Government Response to the Third Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development Entitled 'The Situation of Human Rights in Venezuela'". Ottawa, Canada (18/10/2012). Disponible en: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5763305&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=1. Fecha de acceso: 26/10/2012.

2006 Application of the Government of Canada for Standing as a Non-Disputing Party, Arbitration Under the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (07/08/2006). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00057

CANADIAN BUSINESS

s/f "Next-generation havens", en *Canadian Business*. Disponible en: http://www.canadianbusiness.com/business-news/next-generation-havens/. Fecha de acceso: 27/06/2011.

CANO, ARTURO

2009 "Zelayistas desafían el toque de queda; hay decenas de heridos", en *La Jornada* (29/06/2009).

CARLSON, KATHRYN

2013 "Death of a revolutionary", en *The Globe and Mail* (06/03/2013).

CARROLL, RORY

2013a "In the End, an Awful Manager", en *The New York Times* (05/03/2013). Disponible en: http://www.nytimes.com/2013/03/06/opinion/in-the-end-chavez-wasan-awful-manager.html?pagewanted=all&_r=0. Fecha de acceso: 16/01/2014.

2013b *Comandante: Hugo Chávez's Venezuela*. New York: The Penguin Press.

2013c "Hugo Chávez: An Elected Autocrat", en *New Statesman* (30/01/2013). Disponible en: http://www.newstatesman.com/world-affairs/southamerica/2013/01/elected-autocrat. Fecha de acceso: 16/01/2014.

2010 "Peru's tribal groups chide president for vetoing rainforest law", en *The Guardian* (24/06/2010). Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2010/jun/24/peru-president-blocks-conservation-law. Fecha de acceso: 06/07/2010.

2009 "Gold Giant Faces Honduras Inquiry into Alleged Heavy Metal Pollution", en *The Guardian* (31/12/2009). Disponible en: http://www.theguardian.com/environment/2009/dec/31/goldcorp-honduras-pollution-allegations. Fecha de acceso: 26/07/2013.

CAVOORIS, ROBERT

2011 "Obama's Final Stopover: Ignoring cafta Protests in San Salvador". Council on Hemispheric Affairs (23/03/2011). Disponible en: http://www.coha.org/obama%E2%80%99s-final-stopover-ignoring-cafta-protestsin-san-salvador/comment-page-1/. Fecha de acceso: 14/04/2011.

CENTRAL AMERICA DATA

2012 "More conditions for mining project", en *Central America Data* (16/01/2012). Disponible en: http://www.centralamericadata.com/en/article/home/More_Conditions_for_Mining_Project. Vecha de acceso: 10/08/2012.

CEPAL – COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

2014 *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2014*. Santiago: CEPAL.

2008 *Panorama Social de América Latina 2008*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

2000 *Panorama social de América Latina 1999-2000*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPR – CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH

2013 "Venezuelan Audit Can't Find Any Different Result in Presidential Election, Statistical Analysis Shows". Washington: Centre for Economic Policy Research (26/04/2013).

CHASE, STEPHEN

2009 "Harper signs trade deal with Panama", en *The Globe and Mail* (12/08/2009).

CHOC VS. HUDBAY MINERALS

2012 Disponible en: www.chocversushudbay.com. Fecha de acceso: 22/05/2012.

2011 "Hudbay Minerals Sells Nickel Mine in Guatemala" (09/08/2011). Disponible en: http://www.chocversushudbay.com/. Fecha de acceso: 10/08/2011.

CHOMSKY, NOAM

1987 *Turning the Tide: The U.S. and Latin America*. 2da. edición. Montreal: Black Rose Books.

CIA – CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

2006 *CIA: World Fact Book*. Washington, D.C.: CIA.

CICCARIELLO-MAHER, GEORGE

2013a "Preparing for a Post-Chávez Venezuela", en *Counterpunch* (06/03/2013). Disponible en: http://www.counterpunch.org/2013/03/06/preparing-for-a-post-chavez-venezuela/. Fecha de acceso: 15/04/2013.

2013b *We Created Chávez: A People's History of the Venezuelan Revolution*. Durham y Londres: Duke University Press.

CIDA – CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional)

2013 Project Browser, "Indigenous Peoples' Partnership Program". Disponible en: http://www.acdicida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebWBSEn?OpenView&RestrictToCategory=A031825. Fecha de acceso: 25/02/2013.

2012a "Extractive Sector Program in the Americas". Ottawa: Canadian International Development Agency (04/2012). Acceso a la información: (CIDA, 2011) p. 323-382.

2012b "Minister Fantino announces ubc-sfu to partner with Government on new extractive institute". Toronto: Canadian International Development Agency (23/11/2012).

2012c *Statistical Report on International Assistance, 2011-2012*. Ottawa: (CIDA, 2011) p. 323-382.

2011 "Minister Oda announces initiatives to increase the benefits of natural resource management for people in Africa and South America" (29/09/2011). Disponible en: www.acdi-cida.gc.ca. Fecha de acceso: 29/09/2011.

CIDH – COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

2010 "Government of Guatemala Ordered to Suspend Goldcorp's Marlin Gold Mine Operation", en *Rights Action, Boletín electrónico* (01/06/2010).

CIDP – CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLATFORM

2013 "Canadian Mining Investments in Latin America" (06/2013). Disponible en: http://cidpnsi.ca/canadian-mininginvestments-in-latin-america/. Fecha de acceso: 08/04/2014.

CIM – INSTITUTO CANADIENSE PARA LA MINERÍA

s/f a "Disclosure of Grant and Contribution Awards Over $US25,000: Foreign Affairs". Disponible en: http://www.international.gc.ca/department-ministere/transparency-transparence/grant-subvention.aspx?lang=eng. Fecha de acceso: 08/12/2010.

s/f b "Guatemala Laws and Regulations". Disponible en: www.cim.org. Fecha de acceso: 18/05/2012.

CISPES – COMMITTEE IN SOLIDARITY WITH THE PEOPLE OF EL SALVADOR

2011 "CISPES Action Alert" (31/01/2011). Disponible en: www.cispes.org. Fecha de acceso: 03/02/2011.

CLARK, CAMPBELL

2012 "Canada halts aid to Mali after military coup", en *The Globe and Mail* (24/03/2012).

2011 "Speaker rebukes Oda in Kairos case", en *The Globe and Mail* (11 /02/2011).

2010 "Aid groups told to keep quiet on policy issues", en *The Globe and Mail* (12/02/2010).

CLARKE, DON

2007 "Community Development —Mining as a Tool for Development". Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01187.

CLARKE, ELIZABETH

2009 "Meeting Note for Minister of International Trade —Mining Authorizations for Canadian Companies". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (08/10/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.

CLARKE EDUCATIONAL SERVICES AND WAYNE DUNN & ASSOCIATES

2007 "Ecuador Mining [título censurado]: Building Strategic Plan and Proposal". Quito: Ecuador (02/02/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01191.

CODEMUH – COLECTIVA DE MUJERES HONDUREÑAS

2011 "Open Letter to The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada". Choloma, Honduras (12/08/2011).

COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS

2009 "A Canadian Mining Company Making a Killing in El Salvador… Again", en *Rights Action, Boletín electrónico* (23/12/2009).

COLES, DAVE

2013 "Shame on this Canadian Company", en *The Huffington Pos*t (Canada) (08/01/2013). Disponible en: http://www.huffingtonpost.ca/dave-coles/pacific-rubiales-energy-colombia-_b_3683318.html. Fecha de acceso: 12/02/2014.

COLLINS, DENIS

2009 "The Failure of Socially Responsive Gold Mining", en *Journal of Business Ethics*, vol. 88: 245-268.

COLLINS, RON

2005 "Tahltan Chief Jerry Asp Removed from Office by Elders", en *MAC: Mines and Communities* (10/02/2005). Disponible en: http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=1412. Fecha de acceso: 15/05/ 2012.

COMITÉ POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

2011 "Representante de minera amenaza a periodistas en el occidente de Honduras", en *C-Libre* (24/11/2011). Disponible en: http://www.clibrehonduras.com/alerta/representante-de-minera-amenazaperiodistas-en-el-occidente-de-honduras. Fecha de acceso: 25/11/2011.

COMMON GROUND CONSULTANTS, INC.

2010 *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine, Executive Summary*. Mayo 2010, 12. Disponible en: http://www.hria-guatemala.com/en/MarlinHumanRights.htm. Fecha de acceso: 20/05/2012.

CONAGHAN, CATHERINE M.

1988 *Restructuring Domination: Industrialists and the State in Ecuador*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

CONNORS, P.

2009 "Re: Semarnat-Canada: Solicitud de audiencia". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (13/11/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01152.

CONTE, GABRIEL

2011a "La historia más infame: la montaña de oro que mató a un joven cura en Colombia", en *MDZ* (14/09/2011). Disponible en: http://www.mdzol.com/nota/326116-la-historia-mas-infame-la-montana-de-oro-quemato-a-un-joven-curaen-colombia/. Fecha de acceso: 04/09/2013.

COPINH – CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS

2011a "Condenamos la llegada de Stephen Harper". www.copinh.org (12/04/2011). Fecha de acceso: 12/04/2011.

2011b "Condenamos la llegada de Stephen Harper" (12/08/2011). Disponible en: http://www.copinh.org/article/condenamos-la-llegada-de-stephenharper-primer-min/. Fecha de acceso: 24/12/2015.

CORR, ANDERS

1999 *No Trespassing: Squatting, Rent Strikes and Land Struggles Worldwide*. Cambridge, MA: South End Press.

COUNCIL FOR RESPONSIBLE MINING

2009 "Update on the reactivation process for Exploration and Mining activity by Canadian Companies in Ecuador". Quito: Council for Responsible Mining (23/08/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01197.

COUNCIL OF CANADIANS, COMMON FRONTIERS, MININGWATCH CANADA

s/f "Murder in El Salvador Calls Canadian Mining Interests into Question". Comunicado. Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/murder-el-salvador-calls-canadianmining-interests-question. Fecha de acceso: 01/08/2013.

CPC – CORPORACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2010 Project Concept Paper —"Strengthening Ecuadorian Civil Society Through Empowering Citizen Participation". Quito: Corporación Participación Ciudadana. Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2011-01180.

CROOKS, NATHAN Y JOSE OROZCO

2013 "World Bank Court Rules for Venezuela in Gold Mining Case", en *Bloomberg* (18/01/2013). Disponible en: http://www.bloomberg.com/

news/articles/2013-01-18/world-bank-court-rules-for-venezuela-in-miningcase-correct-. Fecha de acceso: 24/05/2013.

CRUZ, J. DENIS

2013 "Casos de mineros a la CIDH", en *La Prensa* (04/03/2013). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/03/04/ambito/136792. Fecha de acceso: 08/08/2013.

CUERVO SOTELO, YOHANNA

2012 "Una aproximación a la megaminería en Colombia", en *Revista Theomai*, núm. 25: 137-147.

CUEVAS, FREDDY Y HILL WEISSERT

2009 "World Leaders Increase Pressure on Honduras", en *The Globe and Mail* (30/06/2009).

CUFFE, SANDRA

2014 "Canadian Aid, Honduran Oil: Ottawa funds set to encourage oil investment", en *The Media Co-op* (12/03/2014). Disponible en: http://www.mediacoop.ca/story/canadian-aid-honduran-oil/20987. Fecha de acceso: 13/03/2014.

2013 "State of Siege: Mining Conflict Escalates in Guatemala", en Upside Down World (02/05/2013). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/4270-state-of-siege-mining-conflict-escalates-in-guatemala. Fecha de acceso: 10/07/2013.

CULHAM, ALLAN

2011 "Special Period of Session of the General Assembly". Washington: OAS (01/06/2011). Disponible en: www.oas.org. Fecha de acceso: 02/06/2011.

CULTURAL SURVIVAL

2012 "Panama Campaign: President Re-establishes Mining Code", en *Cultural Survival* (11/04/2012). Disponible en: https://www.culturalsurvival.org/news/good-news-panama-campaign-president-re-establishes-mining-code. Fecha de acceso: 14/04/2012.

CURRY, BILL

2010 "Ethical mining bill defeated after fierce lobbying", en *The Globe and Mail* (28/10/2010).

CURRY, BILL Y GLORIA GALLOWAY

2011 "Oda admits to changing memo, Harper Tories accused of secrecy", en *The Globe and Mail* (15/02/2011).

CVR – COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

1999 *Guatemala Memoria del Silencio*. Tomo VI, Casos ilustrativos, Anexo 1. Guatemala: United Nations.

CVR – COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN

2003 "Final Report". Lima, Perú. Disponible en: http://www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/conclusiones.php. Fecha de acceso: 28/02/2015.

DALBY, LAURA

2010 "RE: Marlin Mine". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (08/10/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

2001 "Canada-El Salvador Commercial Relations". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (02/2001). Acceso a la información: Expediente A-2011-02152.

DAVIS, MIKE

2006 *Planet of Slums*. Londres: Verso.

DAY, STOCKWELL

2009a "Address by the Honourable Stockwell Day, Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific Gateway, to the Canadian Council of the Americas". Otawa: Foreign Affairs and International Trade (01/05/2009). Disponible en: http://www.international.gc.ca/media_commerce/comm/speechesdiscours/2009/387207.aspx?lang=eng. Fecha de acceso: 03/02/2011.

2009b Hansard, 40th Parliament, 2nd Session, Number 080 (14/09/2009).

DE ANGELIS, MASSIMO

2001 "Marx and Primitive Accumulation: The Continuous Character of Capital's 'Enclosures'", en *The Commoner*, núm. 2. Disponible en: http://www.commoner.org.uk/02deangelis.pdf. Fecha de acceso: 12/10/2014.

DE ECHAVE, JOSÉ

2011 "La minería peruana y los escenarios de transición", en A. Alayza Moncloa y E. Gudynas (eds.), *Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales.

2009 "Minería y conflictos sociales en el Perú", en J. de Echave C., R. Hoetmer y M. Palacios Panéz (eds.), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.

2005 "Mining and Communities in Peru: Constructing a Framework for Decision-Making", en L. North, T. David Clark y V. Patroni (eds.), *Community Rights and Corporate Responsibility: Canadian Mining and Oil Companies in Latin America*. Toronto: Between the Lines.

DEFRANCESCO, MEREDITH

2010 "Protest Against Canadian Mine in Mexico", en *Upside Down World* (27/07/2010). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/mexicoarchives-79/2606-protest-against-canadian-mine-in-mexico. Fecha de acceso: 28/07/2010.

DESMARAIS, ANNETTE

2007 *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Londres: Pluto.

DES RIVIÈRES, GENEVIEVE

2010 "Embajada de Canadá —Mensaje para el Dr. Tomás González, Viceministro de Minas". Bogotá: Embajada canadiense (27/08/2010). Solicitud de transparencia: Expediente A-2010-02416.

DEVELOPMENT AND PEACE

2007 "The Honduran Mining Law —the Debate over Reforms or a New Law". Montreal (09/2007).

DFATD – DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT
(Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo)

2014a "Canada Strengthens Ties with Honduras". Comunicado de prensa (14/01/2014). Disponible en: http:// www.international.gc.ca/media/state-etat/news-communiques/2014/01/24a.aspx?lang=eng. Fecha de acceso: 29/05/2014.

2014b "Minister Fast Holds Extractive-Sector Round Table with Canadian Companies in Colombia". Bogotá: Foreign Affairs, Trade and Development (12/08/2014).

2013 "Canada Enhances Security in Colombia" Bogotá: Foreign Affairs, Trade and Development Canada (01/08/2013)

s/f "Peru-Canada Mineral Resources Reform Project". Buscador de los proyectos de desarrollo, proyecto n. A031548-001.

DICKENS, PETER

2011 *Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy*. 6ta. edición. New York: The Guilford Press.

DIEBEL, LINDA
2010 "How free, this deal?", en *Toronto Star* (04/04/2010).

DONVILLE, CHRISTOPHER Y ALEX EMERY
2010 "Toledo Pledges 'No Surprises' for Foreign Metal Miners in Peru", en *Bloomberg* (02/12/2010). Disponible en: http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-02/peru-president-candidate-toledo-pledges-nosurprises-for-foreign-miners. Fecha de acceso: 09/12/2010.

DOUGHERTY, MICHAEL L.
2011 "The Global Gold Mining Industry, Junior Firms, and Civil Society Resistance in Guatemala", en *Bulletin of Latin American Research*, vol. 30, núm. 4: 403-418.

DUÁREZ MENDOZA, JORGE LUIS
2012 "Conflictos socioambientales en el Perú neoliberal", en *Observatorio Social de América Latina*, vol. 13, núm. 32: 173-188.

DUBE, R.
2010 "Strong diplomatic presence benefits miners —IAMgold— Regional", en *BN Americas* (25/06/2010). Disponible en: http://www.bnamericas.com/en/news/mining/Strong_diplomatic_presence_benefits_miners_-_iamgold. Fecha de acceso: 08/03/2013.

DUGUID, KIRK
2011 "Report from Demarches". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (11/01/2011). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01863.

DUMBRILLE, CHARLES
2012 "The risks of gold mining in Peru", en *The Northern Miner* (23-29/04/2012).

DUNKERLEY, JAMES
1988 *Power in the Isthmus: A Political History of Modern Central America*. Londres: Verso.
1982 *The Long War*. Londres: Verso.

DYER, ZACH
2009 "El Salvador Faces cafta Suit Over Mine Project", *en NACLA Report on the Americas* (06/02/2009). Disponible en: https://NACLA.org/news/el-salvador-faces-cafta-suit-over-mineproject. Fecha de acceso: 13/02/2009.

EBNER, DAVID

2011 "Crystallex loses control of Venezuela gold mining project", en *The Globe and Mail* (08/02/2011).

ECLAC – ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL)

2012a *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2011*. Santiago: ECLAC.

2012b *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2012*. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean [Las cifras de 2011 no son definitivas].

2012c *Anuario Estadístico 2012*. Santiago: Economic Commision for Latin America and the Caribbean.

2009 *Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2008*. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

2007 *Foreign Investment in Latin America and the Caribbean*. Santiago: ECLAC.

2006 *Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2005*. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

2005 *Foreign Investment in Latin America and the Caribbean*. Santiago: ECLAC.

EDELMAN, MARC

2008 "Transantional Organizing in Agrarian Central America: Histories, Challenges, Prospects", en *Journal of Agrarian Change*, vol. 8.

EDWARDS, LEONARD

s/f "Canadian Contribution to Honduran Truth Commission —Memorandum for Action". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade. Acceso a la información: Expediente A-2010-01236.

ELLNER, STEVE

2009 *Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict and the Chávez Phenomenon*. Boulder: Lynne Rienner.

EMBAJADA DE CANADÁ

2011 "Panama gives copper mine go-ahead". Embassy (16/02/2011).

2010a "Itinerario Final: Visita del Viceministro Estuardo Roldán y la Delegación de Guatemala a Canadá". Ciudad de Guatemala: Embajada canadiense (26/02/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-02404.

2010b "Roundtable with Representatives of Most Active Canadian Mining and Oil and Gas Companies with Operations in Ecuador". Quito: Embajada Canadiense (18/05/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.
2010c *Situation Report*. Quito: Embajada canadiense (fecha exacta desconocida, 2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02389.
2009 "Bilateral Consultations Report". Quito: Canadian Embassy (17/09/2009). Solicitud de acceso a la información-CIDA: Expediente A-2010-00388.
2008 "Ollanta Humala Claims He Can Save Peru from Extremists" (26/06/2008). Publicado en *Wikileaks* (20/02/2011). Fecha de acceso: 11/03/2011.
2007a "Country Strategy —Venezuela 2008-09". Canadian Embassy: Caracas (19/12/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02403.
2007b "Country Strategy —Venezuela 2007-08". Caracas: Canadian Embassy (18/01/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02394.
2007c "Country Strategy —Venezuela 2006-07". Caracas: Canadian Embassy.
2007d "Visit of Venezuelan President Hugo Chavez (sic) to Haiti". Port-au-Prince Canadian Embassy (14/03/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00058.
2006a "Country Strategy —Venezuela 2006-07". Caracas: Canadian Embassy (22/01/2006). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02394.
2006b "Country Strategy, 2006-07". Bogotá: Embajada de Canadá. Solicitud de acceso a la información: Expediente 2010-02394.
s/f "Bear Creek Mining Corporation, Santa Ana Project, Puno, Peru". Lima: Embajada de Canadá (fecha desconocida). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2012-00533.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

2010 "Ecuador Rebuffs International Companies on Balance of Payments Safeguards". Wikileaks (02/02/2010). Disponible en: wikileaks.org. Fecha de acceso: 10/01/2012.
2009 "Canada and the Americas". Ottawa: Embajada de Estados Unidos (15/04/2009). Wikileaks. Disponible en: www.wikileaks.org. Fecha de acceso: 21/09/2011.
2008 "Canada on 3/17 Ministerial". Ottawa: U.S. Embassy (14/03/2008). Disponible en: www.semana.com/wikileaks. Fecha de acceso: 17/11/2011.

EMERY, ALEX

2012 "Peru to Request Hochschild, Hudbay Suspend Mining Activity", en *Business Week* (09/02/2012). Disponible en: http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-02-09/peru-to-request-hochschild-hudbay-suspend-miningactivity-1-. Fecha de acceso: 01/01/2016.

ENGLER, YVES

2010 "Canada Attempts to Undermine Democracy in Venezuela", en *Dissident Voice* (13/12/2010). Disponible en: http://dissidentvoice.org/2010/12/canada-attempts-to-undermine-democracy-in-venezuela/. Fecha de acceso: 14/12/2010.

ESCOBAR, RAMIRO

2010 "Small-scale miners' protest turns deadly", en *Latin America Press* (23/04/2010). Disponible en: http://www.lapress.org/articles.asp?art=6110. Fecha de acceso: 29/04/2010.

FAIT – FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE (Relaciones Exteriores y Comercio Internacional)

2013a "Foreign Affairs Minister John Baird meets with Peru's President, Ollanta Humala". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (18/02/2013).

2013b "Canada Congratulates Venezuelans, Calls for Calm and Peaceful Resolution". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (17/04/2013).

2012a "Baird, Ablonczy React to Mali Coup Attempt". Ottawa (21/03/2012).

2012b "Canada Supports Suspending Mali from La Francophonie". Ottawa (30/03/2012).

2012c "Canada Reinforces Support for Improved Security in Americas". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (05/06/2012).

2012d "Canada Announces Regional Support to Combat Illicit Drug Trafficking in Washington D.C.". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (02/07/2012).

2012e "Minister Ablonczy to Lead Trade Mission to Peru, Colombia and Panama". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (09/11/2012).

2012f "Minister Ablonczy to Lead Trade Mission to Peru, Colombia and Panama". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (09/11/2012).

2012g "Minister Ablonczy Statement on Venezuela's Presidential Election". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (08/10/2012).

2011a "Canada Pleased With Release of Honduran Truth and Reconciliation Commission Final Report". Ottawa (07/07 2011).

2011b "Canada Pursuing Free Trade Agreement with Honduras". Ottawa (11/02/2011).

2011c "Canada Calls for Strengthened Democracy in Nicaragua Following Elections". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (09/11/2011).
2011d "Canada Committed to Peace, Justice and Security in Guatemala". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (23/06/2011).
2011e Publicación de premios y contribuciones de más de $25,000. "Asociación Civil Transparencia". Disponible en: www. international.gc.ca. Fecha de acceso: 17/08/2011.
2010a "Diplomatic Appointments". Ottawa (12/08/2010).
2010b "Canada-Colombia Bilateral Relations". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade. Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02392.
2010c "List of Businesspeople and Civil Society Members that Minister of State (Americas) Kent Met With During a Visit to Quito, August 19–20, 2010". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade, Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01157.
2010d "Bilateral Meeting with Ecuador President Rafael Correa". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha exacta desconocida, 2010). Solicitud de acceso a la información, expediente A-2010-02402.
2010e "Meeting with Ecuador" (fecha exacta desconocida, 2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02389.
2010f "Canada Concerned over Venezuelan Suspension of TV Stations". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (28/01/2010).
2010g "Canada Expresses Concern over Venezuela's Arrest of Oswald Álvarez Paz". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (25/03/2010).
2010h "Minister of State Kent to Visit Venezuela and Bolivia". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (19/01/2010).
2010i "Canada Expresses Concern Over Unrest in Ecuador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (30/09/2010).
2009a "Building the Canadian Advantage: A Corporate Social Responsibility Strategy for the Canadian International Extractive Sector" (03/2009). Disponible en: http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/8776. Fecha de acceso: 08/04/2014.
2009b "Memorandum for Action —Recommended Canadian Policy Tools for Possible Use in Upcoming OAS Mission to Honduras". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (30/11/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-0242.
2009c "Honduras Country Strategy Process 2008-09". San José: Canadian Embassy. Acceso a la información: Expediente A-2010-02422.
2009d "Canada Concerned by Nicaraguan Re-election Ruling". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (29/10/2009).

2009e "Canada Enhances Trade Links with the Americas". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (11/12/2009).
2009f "Briefing Book for the Minister and Deputy Minister of Foreign Affairs: Peru, Argentina, Uruguay and Colombia". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha exacta desconocida, 2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-00541.
2009g "Trade Agreement with Peru Opens Doors to Latin America". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (18/06/2009).
2009h "Minister Day Promotes Canadian Business in Ecuador".
2008a "Secretary of State Guergis to Visit Belize and Guatemala" (10/07/2008). Global Affairs Canada. Disponible en línea en: //w01.international.gc.ca/MinPub/Publication.asp?Language=E&publication_id=386372&docnumber=159. Fecha de acceso: 10/07/2008.
2008b "Ecuador Country Strategy Process 2008–09". Quito: Embajada canadiense. Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02401.
2008c "Minister Fortier to Visit Mexico, Panama and Ecuador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (11/08/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186.
2007 "An fta with the Andean Community countries of Colombia and Peru: Qualitative Economic Analysis" (06/2007). Disponible en: www.international.gc.ca. Fecha de acceso: 01/11/2008.
2006 "Honduras Country Strategy Process 2006-07". San José, Costa Rica. Acceso a la información: Expediente A-2010-02422.
s/f a Publicación de premios y contribuciones de más de $25,000. "Corporacion Participacion Ciudadana [CPC]". Disponible en: www.international.gc.ca. Fecha de acceso: 01/01/2016.
s/f b Publicación de premios y contribuciones de más de $25,000. "Netherlands Institute for Multiparty Democracy". Disponible en: www.international.gc.ca. Fecha de acceso: 01/01/2016.
s/f c "Opening of Andean Unit for Democratic Governance". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-00548.

FAIT – GLOBAL PEACE AND SECURITY FUND

2007 "Bringing a Citizen Focus into the Functioning of Legislatures". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade, 2007. Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01201.

FANTINO, JULIAN

2013 "Effectiveness, not religion, part of aid decisions", en la revista *Embassy* (30/01/2013).

2012 "Address of the Honourable Julian Fantino, Minister of International Cooperation, for The Economic Club of Canada, 'Reducing Poverty –Building Tommorow's Markets'" (23/11/2012). Toronto: CIDA.

FAST, ED.
2011 "Address by Minister Fast to Panama Investment Mission". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (17/06/2011).

FENTON, ANTHONY
2009 "The Revolution Will Not Be Destabilized", en *Dominion* (03/04/2009). Disponible en: http://www.dominionpaper.ca/articles/2557. Fecha de acceso: 01/05/2009.

FERGUSON, SUSAN Y DAVID McNALLY
2014 "Precarious Migrants: Gender, Race and the Social Reproduction of a Global Working Class", en *Socialist Register 2015: Transforming Classes*. New York: Monthly Review Press.

FERNÁNDEZ, BELÉN
2011 "The Islamo-Bolivarian threat", en *Al Jazeera* (17/08/2011). Disponible en: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/2011810104313405606.html. Fecha de acceso: 17/08/2011.

FERNANDES, SUJATHA
2010 *Who Can Stop the Drums? Urban Social Movements in Chávez's Venezuela*. Durham y Londres: Duke University Press.

FIGUEROA, EUGENIO; CARLOS ORIHUELA Y ENRIQUE CALFUCURA
2010 "Green Accounting and Sustainability of the Peruvian Metal Mining Sector", en *Resources Policy*, vol. 35, núm. 3: 156-157.

FINLEY-BROOK, MARY Y CURTIS THOMAS
2011 "Renewable Energy and Human Rights Violations: Illustrative Cases from Indigenous Territories in Panama", en *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 101, núm. 4: 863-872.

FITZPATRICK BEHRENS, SUSAN
2009 "Nickel for Your Life: Q'eqchi' Communities Take on Mining Companies in Guatemala", en *NACLA Report on the Americas* (25/10/2009). Disponible en: https://NACLA.org/news/nickel-your-life-qeqchi-communitiestake-mining-companies-guatemala. Fecha de acceso: 01/11/2009.

FLYNN, PATRICIA

1984 "The United States at War in Central America: Unable to Win, Unwilling to Lose", en Roger Burbach y Patricia Flynn (eds.), *The Politics of Intervention: The United States in Central America*. New York: Monthly Review Press.

FRAJMAN, EDUARDO

2012 "The People, Not the Movement: Opposition to CAFTA in Costa Rica, 2002-2007", en *Latin American Perspectives*, vol. 39, núm. 6: 116-132.

2009 "Information and Values in Popular Protests: Costa Rica in 2000", en *Bulletin of Latin American Research*, vol. 28, núm. 1: 44-62.

FRANK, DANA

2014a "The Thugocracy Next Door", en *Politico Magazine* (27/02/2014). Disponible en: http://www.politico.com/magazine/story/2014/02/hondurasthe-thugocracy-ext-door-103883.html#.U4TbbU0U_cs. Fecha de acceso: 27/05/2014.

2014b "Hernández's Election was Built on Corruption: U.S. Support for Nation's New Leader is Misguided and Unethical", en *San Francisco Chronicle* (25/01/2014). Disponible en: http://m.chron.com/opinion/outlook/article/Frank-Hernndez-s-election-was-built-on-5174987.php?cmpid=opedhphcat. Fecha de acceso: 28/05/2014.

2013a "A High-Stakes Election in Honduras", en *The Nation* (02/11/2013). Disponible en: http://www.thenation.com/article/177028/high-stakeselection-honduras. Fecha de acceso: 28/05/2014.

2013b "Hopeless in Honduras? The Election and the Future of Tegucigalpa", en *Foreign Affairs* (22/11/2013). Disponible en: http://www.foreignaffairs.com/articles/140283/dana-frank/hopeless-in-honduras. Fecha de acceso: 28/05/2014.

2013c "In Honduras, Military Takes Over with U.S. Blessing", en *The Miami Herald* (11/09/2013). Disponible en: http://www.miamiherald.com/2013/09/10/3618867/in-honduras-military-takes-over.html. Fecha de acceso: 28/05/2014.

2010 "Repression's Reward in Honduras?", en *Counterpunch* (25/09/2010). Disponible en: http://www.counterpunch.org/frank09232010.html. Fecha de acceso: 25/09/2010.

FRENCH, CAMERON

2012 "Scotia hikes Latin American footprint", en *National Post* (15/08/2012).

FOSTER, ALLY
2013 "The private sector and development: More than just mining companies", en la revista *Embassy* (24/04/2013).
2012 "Peru's defence minister invited to Canada, says vice foreign minister". Embassy (31/10/2012).

FOOT, RICHARD
2007a "PM Defends Entering Free Trade Talks with Colombia", en *National Post* (17/07/2007).
2007b "Harper Touts Third Way, Emulate Canada Not U.S. PM Says in Chile", en *National Post* (18/07/2007).

GILL, LESLEY
2004 *The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas*. Durham: Duke University Press.

GILLY, ADOLFO Y RHINA ROUX
2009 "Capitales, tecnologías y mundos de la vida: El despojo de los cuatro elementos", en *Herramienta 40*. Disponible en: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-40/capitales-tecnologias-y-mundos-dela-vida-el-despojo-de-los-cuatro-elemento. Fecha de acceso: 13/10/2014.

GINDIN, SAM Y LEO PANITCH
2013 *The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire*. Londres: Verso.

GLOBAL AFFAIRS CANADA
s/f "Canada-Central America Four (CA4) Free Trade Negotiations". Disponible en: www.international.gc.ca. Fecha de acceso: 10/01/2012.

GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL DE HONDURAS
2011 *Honduras: A Country Open for Investment*. Tegucigalpa: Gobierno de Unidad Nacional de Honduras.

GOLDCORP
2010 "Goldcorp Reports Action Regarding Marlin Mine" (09/06/2010). Disponible en: http://www.goldcorp.com/English/Investor-Resources/News/News-Details/2010/Goldcorp-Reports-Action-Regarding-Marlin-Mine1122161/default.aspx. Fecha de acceso: 15/06/2010.

GOLINGER, EVA

2010 "NED Report: International Agencies fund Venezuelan opposition with $40-50 million annually", en *Znet* (22/06/2010). Disponible en: www.zcommunications.org. Fecha de acceso: 22/06/2010.

2007 *The Chávez Code: Cracking U.S. Intervention in Venezuela*. Londres: Pluto Press.

GONZALEZ, MIKE

2014 *Hugo Chávez: Socialist for the Twenty-First Century*. Londres: Pluto.

GORDON, TODD

2010 *Imperialist Canada*. Winnipeg: Arbeiter Ring.

2009a "Canada, Empire and Indigenous People in the Americas", en *Socialist Studies*, vol. 2, núm. 1: 47-75.

2009b "Acceptable versus Unacceptable Repression: A Lesson in Canadian Imperial Hypocrisy", en *Counterpunch* (30/06/2009). Disponible en: http://www.counterpunch.org/2009/06/30/acceptable-versus-unacceptablerepression/. Fecha de acceso: 30/06/2009.

GORDON, TODD Y JEFFERY R. WEBBER

2013 "Honduran Labyrinth", en *Jacobin*, núm. 10. Disponible en: https://www.jacobinmag.com/2013/04/honduran-labyrinth/. Fecha de acceso: 29/05/2014.

2012 "Paraguay's Parliamentary Coup and Ottawa's Imperial Response", en *The Bullet* (26/06/2012).

GOWAN, PETER

1999 *The Global Gamble: Washington's Faustian Bid for World Dominance*. Londres: Verso.

GRANDIN, GREG

2013 "On the Legacy of Hugo Chávez", en *The Nation* (05/03/2013). Disponible en: http://www.thenation.com/article/173212/legacy-hugo-chavez. Fecha de acceso: 16/01/2014.

2011 "Building a Perfect Machine of Perpetual War: The Mexico-to-Colombia Security Corridor Advances", en *The Nation* (11/02/2011). Disponible en: http://www.thenation.com/blog/158492/building-perfect-machine-perpetualwar-mexico-colombia-security-corridor-advances. Fecha de acceso: 15/01/2013.

2009a "Democracy Derailed in Honduras", en *The Nation* (30/06/2009).

2009b "Battle for Honduras —And the Region?", en *The Nation* (31/08/2009).

2006 *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism*. New York: Owl Books.
2004 *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*. Chicago: University of Chicago Press.
2001 "Living in Revolutionary Time: Coming to Terms with the Violence of Latin America's Long Cold War", en Grandin y Joseph (eds.), *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence During Latin America's Long Cold War*. Durham y Londres: Duke University Press.
2000 *The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation*. Durham y Londres: Duke University Press.

GRANOVSKY-LARSEN, SIMON
2013 "Between the Bullet and the Bank: Agrarian Conflict and Access to Land in Neoliberal Guatemala", en *The Journal of Peasant Studies*, vol. 40, núm. 2: 325-350.
2012 "Timeline: The Return of the Guatemalan Military", en *Briarpatch* (01/07/2012). Disponible en: http://briarpatchmagazine.com/articles/view/thespoils-of-an-undeclared-war. Fecha de acceso: 19/08/2013.

GRATIUS, SUSSANE
2010 "Assessing Democracy Assistance: Venezuela", en *Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior*, FRIDE (05/2010).

GREEN, DUNCAN
2003 *Silent Revolution: The Rise and Crisis of Market Economics in Latin America*. 2da. edición. New York: Monthly Review Press.
1999 "A Trip to the Market: The Impact of Neoliberalism in Latin America", en Julia Buxton y Nicola Phillips (eds.), *Developments in Latin American Political Economy: States, Markets, and Actors*. Manchester: Manchester University Press.

GRINBERG, NICOLÁS Y GUIDO STAROSTA
2015 "From Global Capital Accumulation to Varieties of Centre Leftism in South America: The Cases of Brazil and Argentina", en S. Spronk y J.R. Webber (eds.), *Crisis and Contradiction: Marxist Perspectives on Latin America in the Global Economy*. Leiden: Brill.

GUDYNAS, EDUARDO
2011 "Caminos para las transiciones post extractivistas", en A. Alayza Moncloa y E. Gudynas (eds.), *Transiciones: Post extractivismo y alternativas*

al extractivismo en el Perú. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES.

GUERGIS, HELENA

2007 "Notes for an Address by the Honourable Helena Geurgis, Secretary of State for Foreign Affairs and International Trade and Secretary of State for Sport, to the Canada-Peru Chamber of Commerce. Foreign Affairs and International Trade (23/07/2007). Lima, Perú.

HAARSTAD, HAVARD Y ARNT FLØYSAND

2007 "Globalization and the Power of Rescaled Narratives: A Case of Opposition to Mining in Tambogrande, Peru", en *Political Geography*, vol. 26, núm. 3: 289-308.

HAASE, DWIGHT

2011 "Revolution, Interrupted: Gender and Microfinance in Nicaragua", en *Critical Sociology*, vol. 38, núm 2: 221-240.

HALIFAX INITIATIVE

2010 "EDCc backs another controversial mine" (30/04/2010). Disponible en: http://www.halifaxinitiative.org/content/monthlyissue-update-april-30-2010. Fecha de acceso: 05/05/2010.

HALLWARD, PETER

2007 *Damming the Flood: Haiti, Aristide and the Politics of Containment*. Londres: Verso.

HANIEH, ADAM

2013 *Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East*. Chicago: Haymarket.

HARPER, STEPHEN

2008 "Canada's Prime Minister Stephen Harper", en *Latin Business Chronicle* (01/10/2008). Disponible en: www.latinbusinesschronicle.com. Fecha de acceso: 01/05/2008.

2007 "Statement by Prime Minister Harper on his visit to Colombia following meetings with President Uribe" (16/07/2007). Disponible en: www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=1755. Fecha de acceso: 01/05/2008.

HARVEY, DAVID

2005 *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

2003 *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

HARRIS, IAN
2008 "Ecuador's Mineral Crossroads: Canada's Commitment?", en *Focal Point* (06/2008).

HARRIS, PAUL
2013 "Illegal mining Colombia's New Bane", en *The Globe and Mail* (09/05/2013).
2006 "Colombia's Troubles Pale Next to Golden Opportunities", en *The Globe and Mail* (04/02/2006).

HAWKES, W.
2008 "Strategic Planning Session for Upcoming Meeting with Vice-Minister of International Commerce, Eduardo Egas". Quito: Canadian Embassy (27/03/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186.

HEALING, DAN
2011 "Colombia oil and gas protests could undermine shareholder confidence: Analysts", en *Montreal Gazette* (22/09/2011). Disponible en: www.montrealgazette.com. Fecha de acceso: 28/09/2011.

HENAO, LUIS A.
2013 "Chile blocks Pascua-Lama mine, fines Barrick $16M for environmental violations", en *Winnipeg Free Press* (24/05/2013). Disponible en: www.winnipegfreepress.com. Fecha de acceso: 24/05/2013.

HERNÁNDEZ NAVARRO, LUIS
2009 "La conversión de Manuel Mel Zelaya", en *La Jornada* (01/07/2009). Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2009/06/30/opinion/017a2pol

HILL, DAVID
2014 "Peru Now Has a 'Licence to Kill' Environmental Protesters", en *The Guardian* (29/06/2014). Disponible en: http://www.theguardian.com/environment/andes-tothe-amazon/2014/jun/29/peru-licence-to-kill-environmental-protestors. Fecha de acceso: 02/03/2015.

HILL, MATTHEW
2010 "El Salvador intends total ban on mining", en *Mining Weekly* (06/08/2010). Disponible en: http://www.miningweekly.com/article/el-salvadorintends-total-ban-on-mining---report-2010-08-06. Fecha de acceso: 12/08/2010.

HIMLEY, MATTHEW
2014 "Mining History: Mobilizing the Past in Struggles Over Mineral Extraction in Peru", en *Geographical Review*, vol. 104, núm. 2: 174-191.
2013 "Regularizing Extraction in Andean Peru: Mining and Social Mobilization in an Age of Corporate Social Responsibility", en *Antipode*, vol. 45, núm. 2: 394-416.

HOETMER, RAPHAEL
2006 "Lo visible, lo posible y lo ausente: movimientos y conflictos sociales en el Perú", en *Observatorio Social de América Latina*, vol. 8, núm. 20: 177-185.

HOFFMAN, ANDY
2008a "Goldcorp bested by Mayan mother", en *The Globe and Mail* (10/07/2008).
2008b "Venezuela's bid to boost gold reserves bad news for Crystallex", en *The Globe and Mail* (16/11/2008).

HOLLAND, ALISHA C.
2013 "Right on Crime? Conservative Party Politics and Mano Dura Policies in El Salvador", en *Latin American Research Review*, vol. 48, núm. 1: 44-67.

HRISTOV, JASMIN
2014 *Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond*. Londres: Pluto Books.
2006 "Uribe and the Paramilitarization of the Colombian State", en *New Socialist*, vol. 59: 14-15.
2005 "Indigenous Struggles for Land and Culture in Cauca, Colombia", en *Journal of Peasant Studie*s, vol. 32, núm. 1: 88-107.

HUDSON, PETER J.
2010 "Imperial Designs: the Royal Bank of Canada in the Caribbean", en *Race & Class*, vol. 52, núm. 1: 33-48.

HYLTON, FORREST
2014 "The Experience of Defeat: The Colombian Left and the Cold War that Never Ends", en *Historical Materialism*, vol. 22, núm. 1: 67-104.
2006 *Evil Hour in Colombia*. Londres: Verso.

IBBITSON, JOHN
2013 "Ottawa's 'economic diplomacy' marks historic shift", en el *The Globe and Mail* (27/11/2013).

ICFTU – INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS

2006 Annual Survey of Violations of Trade Union Rights.

INDIAN LAW RESOURCE CENTER

2011 "Guatemala Court Makes Landmark Ruling in Indigenous Rights Cas" (08/02/2011). Disponible en: http://indianlaw.org/content/guatemala-court-makes-landmark-ruling-indigenous-rights-case. Fecha de acceso: 21/04/2011.

INTELLIGENCE ASSESSMENT SECRETARIAT

2007 Reporte sin título (Ottawa: Privy Council Office, 02/04/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00058.

INTERCONTINENTAL CRY

2007 "Goldcorp Seven Verdict is in… Justice in Guatemala?", en *Intercontinental Cry* (17/12/2007). Disponible en: http://intercontinentalcry.org/goldcorp-7-verdict-is-injustice-in-guatemala/. Fecha de acceso: 12/01/2008.

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

2010 *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. International Labour Office, 99a session.

2009 *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*. International Labour Office: 98th Session.

1989 C169 Indigenous and Tribal Peoples' Convention, 1989. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169. Fecha de Acceso: 24/12/2015.

ISFELD, GORDON

2014 "Export Development Canada Opens Bogotá Office amid Central, South America Push", en *The Financial Post* (05/02/2014). Disponible en: http://business.financialpost.com/2014/02/05/export-development-canada-opens-bogota-officeamid-central-south-america-push/. Fecha de acceso: 10/02/2014.

ISMI, ASAD

2012 *Profiting from Repression: Canadian Investment in and Trade with Colombia*. 3ra. edición.

JAMASMIE, CECILIA

2012 "Guatemala's Escobal Mine to Become One of the Top Silver Projects in the World", en *Mining[dot]Com* (25/05/2012). Disponible en:

http://www.mining.com/ guatemalas-el-escobal-mine-to-become-one-of-the-top-silver-projects-in-the-worldreport/. Fecha de acceso: 24/05/2012.

JAMES, IAN

2012 "Venezuela Oil Production Growth: Chávez Presidency May Have Squandered Oil Riches", en *Huffington Post* (23/09/2012). Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2012/09/23/venezuela-oil-production_n_1907170.html. Fecha de acceso: 16/01/2014.

JANICKE, KIRAZ Y JAMES SUGGET

2010 "Venezuela Sanctions Cable Television Channels for Failure to Complyl with Media Law", en *Venezuelanalysis* (25/01/2010). Disponible en: http://venezuelanalysis.com/news/5101. Fecha de acceso: 16/01/2014.

JANOFF, DOUGLASS

2010 "Meeting with Goldcorp V.P. David Deisley". Washington: Misión permanente de Canadá ante la OEA (15/11/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

JIMÉNEZ MONTERO, MANUEL DE J.; BENITO RAMÍREZ V. Y JUAN P. MARTÍNEZ D.

2012 "Construcción de territorios en Donoso, Panamá: Período 1970-2008", en *Historia Crítica*, Bogotá, núm. 48 (09-12, 2012).

JOHNSON, KEITH

2013 "Obama Reacts to Chávez Death", en *The Wall Street Journal* (05/03/2013). Disponible en: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324678604578342880614535550?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424127887324678604578342880614535550.html. Fecha de acceso: 16/01/2014.

JONAS, SUSANNE

2000 *Of Centaurs and Doves: Guatemala's Peace Process*. Boulder: Westview Press.

JORDAN, PAV

2012 "Goldcorp halts work on Chilean mine", en *The Globe and Mail* (30/04/2012). Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/goldcorp-halts-work-at-chilean-mine/article4103975/. Fecha de acceso: 30/04/2012.

JORGENSON, ANDREW Y EDWARD KICK (EDS.)
2009 [2006] *Globalization and the Environment*. Chicago: Haymarket.

KAMPWIRTH, KAREN
2008 "Abortion, Antifeminism, and the Return of Daniel Ortega: In Nicaragua, Leftist Politics?", en *Latin American Perspectives*, vol. 35, núm. 6: 122-136.

KATZ, CLAUDIO
2011 *Bajo el imperio del capital*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
2009 *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
2007 "Socialist Strategies in Latin America", en *Monthly Review*, vol. 59, núm. 4.

KAY, CRISTÓBAL
2013 [1989] *Latin American Theories of Development and Underdevelopment*. Londres: Routledge.

KEENAN, KARYN
2010 "Canadian Mining: Still Unaccountable", en *NACLA* [*North American Congress on Latin America*]: *Report on the Americas* (05-06/2010).

KEEVIL, MATTHEW
2012 "Inmet keeps wary eye on smouldering Panama policy debate", en *The Northern Miner* (26/03-01/04/2012).

KENT, PETER
2010b "Minister of State Kent Concludes Successful Visit to Honduras" (22/02/2010).
2010b "Special Meeting of the Permanent Council to Welcome the Honourable Peter Kent, Minister of State of Foreign Affairs of Canada". Washington: OAS (10/11/2010). Disponible en: www.oas.org. Fecha de acceso: 21/11/2010.
2009a "Statement by Minister Kent on the Situation in Honduras". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (19/07/2009).
2009b "Canada Calls for Restraint and a Negotiated Solution in Honduras". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (22/09/2009).
2009c "Canada Congratulates Honduran People on Elections" (01/12/2009).
2009d "Notes for an Address by the Honourable Peter Kent, Minister of State of Foreign Affairs (Americas), to the Inter-American Dialogue". Global Affairs Canada (16/03/2009). Disponible en: http://www.international.gc.ca/media/state-etat/speeches-discours/2009/387072.aspx?lang=en. Fecha de acceso: 03/02/2010.

2009e "Minister of State Kent to Visit Nicaragua, Guatemala and El Salvador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (12/01/2009).
2009f "Notes for an Address by the Honourable Peter Kent, Minister of State for Foreign Affairs (Americas) Keynote Address to the Experts' Dialogue on Canada's Engagement in the Americas". Ottawa: Foreign Afairs and International Trade (25/02/2009).

KERSSEN, TANYA
2011 "The Military-Aid Complex, Agrofuels and Land Struggles in Aguán, Honduras", en *Food First* (06/10/2011). Disponible en: http://www.foodfirst.org/en/Honduras+land+grabs. Fecha de acceso: 02/02/2013.

KILADZE, TIM
2011 "Panama mining code proposal rattles Inmet project", en *The Globe and Mail* (05/03/2011).

KLASSEN, JEROME
2014 *Joining Empire: The Political Economy of the New Canadian Foreign Policy*. Toronto: University of Toronto Press.

KLASSEN, JEROME Y GREGORY ALBO (EDS.)
2012 *Empire's Ally: Canada and the War in Afghanistan*. Toronto: University of Toronto Press.

KNACK, STEPHEN, F. HALSEY ROGERS Y NICHOLAS EUBANK
2010 "Aid Quality and Donor Rankings", en *World Bank Policy Research Working Paper* (05/2010). Disponible en: http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-5290. Fecha de acceso: 27/01/2013.

KNOX, PAUL
2001 "Canada's Role in Colombia Probed", en *The Globe and Mail* (01/06/2001).

KOEHL, ALBERT
2006 "Billions, Millions, and the Peasant", en *Mining Watch* (18/01/2006). Disponible en: www.miningwatch.ca/index.php?/Glamis_Gold/Koehl_billions. Fecha de acceso: 10/07/2007.

KOK, KASPER
2004 "The Role of Population in Understanding Honduran Land Use Patterns", en *Journal of Environmental Management*, vol. 72, núms. 1-2: 73-89.

KOSICH, DOROTHY
2004 "No love lost between Honduran ngos and miners", en *Mineweb* (18/08/2004). Disponible en: http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/%20page15831?oid=14930andsn=Detail. Fecha de acceso: 29/08/2009.

KOUVELAKIS, STATHIS
2011 "The Greek Cauldron", en *New Left Review*, vol. II, núm. 72.

KOZAK, ROBERT
2002 "Manhattan Mine Scheme Rejected: Citizens in Peruvian Village Vote Solidly to Disallow Project", en *The National Post* (04/06/2002).

KRAUL, CHRIS
2011 "Colombia Seeks Truce in Oil Workers Strike", en *Los Angeles Times* (22/09/2011). Disponible en: http://articles.latimes.com/2011/sep/22/business/la-fi-colombia-oil-strike-20110922. Fecha de acceso: 12/02/2014.

KUECKER, GLEN DAVID
2007 "Fighting for the Forests: Grassroots Resistance to Mining in Northern Ecuador", en *Latin American Perspectives*, vol. 34, núm. 2: 94-107.

KUFFNER, RYAN
2010a "Pull-Aside With Ecuador Foreign Minister Ricardo Patiño at the OAS General Assembly". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha exacta desconocida, 2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.
2010b "With Ecuador Foreign Minister Ricardo Patiño at the OAS General Assembly". Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.
2010c "RE: training plan for Ecuador ministry officials". Quito: Canadian Embasy (22/07/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01196.
2009a "Ecuadorian Mining Law Approved by Congress, Few Steps Remain". Quito: Canadian Embassy (21/01/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.
2009b "Pull-Aside With Ecuador Foreign Minister Ricardo Patiño at the oas General Assembly". Quito: Canadian Embassy (24/08/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.
2009c "Please update your company proexpediente for President Correa". Quito: Canadian Embassy (04/07/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01193.

2009d "Minister Day Visit to Ecuador August 23-24, 2009". Quito: Canadian Embassy (10/09/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente 2009-0078.
2009e "RE: Ecuador Delegation". Quito: Canadian Embassy (07/19/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01193.
2009f "Potential Visit to Kinross Mine in Canada". Quito: Canadian Embassy (09/01/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01197.
2008a "Re: hidro seminar". Quito: Canadian Embassy (02/09/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186.
2008b "Canada's fipa with Ecuador Really Matters". Quito: Canadian Embassy (12/11/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009 0078.
2008c "Visit to Ecuador by the Minister of International Trade". Quito: Canadian Embassy (25/08/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-00778.
2008d "GLD Visit to Ecuador". Quito: Canadian Embasy (30/12/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.
2008e "RE: NUNA". Quito: Canadian Embassy (24/10/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186.
2008f "Request for Meeting". Quito: Canadian Embassy (24/11/2008).
2008g "Meetings with NRCAN and DFAIT in Ottawa". Quito: Canadian Embassy (25/112008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01186.
2008h "Promising Days and Sleepless Nights for Canadian Mining Companies in Ecuador". Quito: Canadian Embassy (09/10/2008).
2008i "Ecuador Mining Update". Quito: Canadian Embassy (27/11/2009).

KUYEK, JOAN

2006 "Legitimating Plunder: Canadian Mining Companies and Corporate Social Responsibility", en L. North, T. Clark y V. Patroni (eds.), *Community Rights and Corporate Responsibility: Canadian Mining and Oil Companies in Latin America*. Toronto: Between the Lines. (pp. 203-221).

LACEY MARC Y GINGER THOMPSON

2009 "Envoy prepares to visit Honduras, warning of obstacles", en *The New York Times* (03/07/2009). Disponible en: http://www.nytimes.com/2009/07/03/world/americas/03honduras.html?_r=0. Fecha de acceso: 04/07/2009.

LaFEBER, WALTER

1983 *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. 2da. edición. New York: W.W. Norton & Company.

LAMBERT, JAMES

2004 "Minería en Canadá", en *Prensa Libre* (04/11/2004). Disponible en: http://www.prensalibre.com/. Fecha de acceso: 15/05/2012. (Traducción de Rosalind Gill para www.rightsaction.org).

LA MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA DE EL SALVADOR

2012a "Asesinato de ambientalista sin esclarecer y la megaminería en pie". Comunicado (17/06/2012). Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/10307-asesinato-deambientalista-sin-esclarecer-y-la-megamineria-en-pie. Fecha de acceso: 01/08/2013.

2012b "Comunidades y organizaciones rechazan resolución emitida por asesinatos de ambientalistas". Comunicado (26/04/2012). Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/10038-comunidades-y-organizaciones-rechazanemitida-por-asesinatos-de-ambientalistas. Fecha de acceso: 01/08/2013.

LAPOINTE, CHRISTIAN

2009 "Meeting with Vice-Minister of International Trade Eduardo egas pena". Quito: Canadian Embassy (26/01/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.

2008a "Canadian Mining Interests at Serious Risk of Being Wiped-out for at Least Six Months in Ecuador". Quito (17/04/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.

2008b "Re: From Quito". Quito: Canadian Embassy (17/04/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01194.

2008c "Messages brought to Correa today by Ambassador Lapointe". Quito: Canadian Embassy (24/06/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01194.

2008d "Official visit to Ecuador of Canada's Minister of International Trade". Quito: Canadian Embassy (01/08/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01194.

2007 "RE: Ecuador Mining Update," Quito: Canadian Embassy (13/02 2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01187.

LATORRE, SARA Y ALEJANDRA SANTILLANA

2009 "Capitalismo estatal o convergencia popular". *Íconos*, núm. 34: 13-18.

LEBLANC, DANIEL
2012 "Miners show new way for CIDA", en *The Globe and Mail*. (30/01/2012).

LEGER, KATHRYN
2001 "Murder, Mayhem and Mining: Canadian Company Caught in Fracas over Peruvian Plans", en *The National Pos*t (15/05/2001).

LEVENSON-ESTRADA, DEBORAH
1994 *Trade Unionists against Terror: Ciudad de Guatemala, 1954-1985*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

LEVENSON, DEBORAH T.
2013 *Adiós Niño: The Gangs of Ciudad de Guatemala and the Politics of Death*. Durham y Londres: Duke University Press.

LÉVESQUE, LOUIS
s/f "Memorandum of Information to Minister of International Trade: Canada's Bilateral Cooperation Program With Ecuador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Solicitud de acceso a la información-CIDA: Expediente A-2010-00388.

LI, FABIANA
2015 *Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru*. Durham y Londres: Duke University Press.

LIFE VISION PROPERTIES
2010 "Randy Jorgensen Meets with President Lobo". Disponible en: http://lifevisionproperties.wordpress.com/2010/11/29/randy-jorgensenmeets-with-president-lobo/. Fecha de acceso: 28/06/2011.

LITTELL, JONAHTAN
2012 "Lost in the Void", en *Londres Review of Books*, 34, 11 (07/06/2012).

LLEWELLYN, ROBIN OISÍN
2012 "Gold flows as the wells run dry", en *Le Monde diplomatique* (25/04/2012). Disponible en: https://mondediplo.com/outsidein/gold-flows-as-the-wells-run-dry.

LOGAN, NICK
2013 "Colombian Labour Union Accuses Canada's Pacific Rubiales Energy of intimidation", en *Global News* (19/07/2013). Disponible en: http://globalnews.ca/news/729796/colombian-labour-union-accuses-canadas-pacific-rubiales-energyof-intimidation/. Fecha de acceso: el 21/07/2013.

LÓPEZ, NANCY
2010 "Mining and oil boom propel investment in Colombia", en *Bloomerg Business* (15/08/2010). Disponible en: http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9HK2EV01.htm. Fecha de acceso: 18/08/2010.

LUDEÑA, ALEJANDRO F.
2011 "Still no mining law", en *Latin America Press* (01/04/2011). Disponible en: http://www.latinamericapress.org/articles.asp?item=2&art=6345. Fecha de acceso: 04/05/2011.

LUKE, PAUL
2006 "Investors remain wary of Venezuelan contract's veracity", en *The Province* (14/06/2006).

LUST, JEAN
2014 "Peru: Mining Capital and Social Resistance", en Veltmeyer y Petras (eds.), *The New Extractivism*. Londres: Zed.

LUTTMAN, CHRISTINE
2008 "Meeting with MEM new officials". Ciudad de Guatemala: Embajada canadiense (11/02/2008). Acceso a la información: Expediente A-2010-02420.

LYDERSEN, KARI Y JASON WALLACH
2010 "Is Free Trade a Gold Mine?", en *The Progressive* (07/2010). Disponible en: http://progressive.org/news/2010/07/145875/freetrade-gold-mine. Fecha de acceso: 29/07/2010.

MAC - MINES AND COMMUNITIES
2012 "Peru: Blockade at Cañariaco Norte project", en *MAC: Mines and Communities* (06/12/2012). Disponible en: http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=12047. Fecha de acceso: 13/12/2012.

MACKAY, CAMERON
2011 "Canadá y Honduras, trabajando juntos", en *El Heraldo* (01/07/2011). Disponible en: http://expediente.elheraldo.hn/Ediciones/2011/07/01/Opinion/Canaday-Honduras-trabajando-juntos. Fecha de acceso: 01/07/2011.

MACKEY, DANIELLE Y THEODORA SIMON
2012 "Threats and Violence Continue against Salvadoran Environmentalists", en *Upside Down World* (26/01/2012). Disponible en: http://

upsidedownworld.org/main/el-salvador-archives-74/3428-threats-and-violencecontinue-against-salvadoran-environmentalists. Fecha de acceso: 01/08/2013.

MACKRAEL, KIM

2014 "Ottawa stresses trade prospects in foreign aid decisions", en *The Globe and Mail*, 08/01/2014.

MACLEOD, LISA

2007 "Venezuela lets in Canadian miner", en *National Post* (29/03/2007).

MAHONEY, JAMES

2001 *The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

MALKIN, ELIZABETH

2014 "World Bank is Criticized for Honduran Loan", en *The New York Times* (10/01/2014). Disponible en: http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/americas/world-bank-is-criticized-for-honduranloan.html. Fecha de acceso: 29/05/2014.

MAPSTONE, NAOMI

2011 "Peru halts drive against illegal gold miners", en *The Financial Time*s (02/03/2011). Disponible en: http://www.ft.com/cms/s/0/056af080-44e4-11e0-a8c6-00144feab49a.html#axzz3vzndWmJV. Fecha de acceso: 03/03/2011.

2009 "Remittance Flows to Latin America Fall Sharply", en *The Financial Times* (12/08/2009).

MARDER, JEFFRY

2010a Título censurado. Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (14/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

2010b "Urgent: PCO inquiry on Las Crucitas" (17/09/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01630.

MARIÁTEGUI, JOSÉ CARLOS

2011 "The Economic Factor in Peruvian History", en H.E. Vanden y M. Becker (eds.), *José Carlos Mariátegui: An Anthology*. New York: Monthly Review Press.

MAROIS, THOMAS

2005 "From Economic Crisis to a 'State' of Crisis? The Emergence of Neoliberalism in Costa Rica", en *Historical Materialism*, vol. 13, núm. 3: 101-134.

MAROTTE, BERTRAND
2011 "Gildan becomes global sock king with U.S. purchase", en *The Globe and Mail* (12/04/2011).

MARTÍNEZ ALIER, JOAN
2014 "Consultas populares en Colombia contra industrias extractivas", en *La Jornada* (09/02/2014). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/02/09/economia/022a1eco. Fecha de acceso: 10/02/2014.
2013 "Referendos mineros locales: Kañaris, en Perú", en *La Jornada* (22/02/2013). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/22/opinion/025a1pol. Fecha de acceso: 01/03/2015.

MARTÍNEZ, L. EDUARDO
2013 "Mujeres tampoco creen en minería", en *La Prensa* (23/03/2013). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/03/23/ambito/139407-mujeres-tampoco-creen-mineria?movil. Fecha de acceso: 08/08/2013.

MARX, CARL
1990 *Capital*, vol. 1. New York: Penguin

MARX, KARL Y FRIEDRICH ENGELS
2002 *The Communist Manifesto* [1888]. New York: Penguin.

MAURO, CRAIG
2003 "Peruvian Farmers Try to Prevent Strip Mining", en *The Vancouver Sun* (12/02/2003).

MAYORAL, MARÍA JULIA
2012 "Nicaragua notifica récord en inversión extranjera directa", en *Prensa Latina* (22/03/2012). Disponible en: www.prensa-latina.cu. Fecha de acceso: 22/03/2012.

McALLISTER, CARLOTA
2011 "A Headlong Rush into the Future: Violence and Revolution in a Guatemalan Indigenous Village", en G. Grandin y G.M. Joseph (eds.), *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence During Latin America's Long Cold War*. Durham y Londres: Duke University Press.

McARTHUR, GREG
2011 "Miner raided over bribery allegations", en *The Globe and Mail* (29/08/2011).

McFARLANE, PETER
1989 *Northern Shadows: Canadians in Central America*. Toronto: Between the Lines.

McGILL, HUNTER
s/f "Canada Among Donors: How Does Canadian Aid Compare?", en Brown (ed.), *Struggling For Effectiveness*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

McGUIRE, MARGARET
2011 "AUDG Program Report —Strengthening Civil Society by Empowering Citizen Participation". Quito: Canadian Embassy (17/05/2011). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2011-01180.

McKECHNIE, L.
2010 "RE: MINING/GUATEMALA/HUMAN RIGHTS: Goldcorp's Marlin mine at centre of a human rights battle over licensing process". Ciudad de Guatemala: Embajada de Canadá (09/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

McNALLY, DAVID
2010 *Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance*. Oakland: PM Press.
2009 "From Financial Crisis to World-Slump: Accumulation, Financialisation, and the Global Slowdown", en *Historical Materialism*, vol. 17, núm. 2.
2006 *Another World is Possible: Globalization and Anti-Capitalism*. 2da. edición. Winnipeg: Arbeiter Ring Publishing.

MESA-LAGO, CARMELO
2001 *Market, Socialist, and Mixed Economies: Comparative Policy and Performance in Chile, Cuba, and Costa Rica*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

MEXIDATA
2011 "Canadian Businesses Continue to Invest in Mexico", en *Mexidata* (14/02/2011). Disponible en: www.mexidata.info. Fecha de acceso: 17/02/2011.

MEYER, CARL
2012 "dnd cuts billions, military heads into 'lower pace of operations'", en la revista *Embassy* (29/03/2012). Disponible en: http://www.embassynews.ca/news/2012/03/29/budget-2012-dnd-cuts-billions-military-

heads-into-%E2%80%98lower-pace-of-operations%E2%80%99/42209?absolute=1. Fecha de acceso: 31/03/2012.

2010 "Where's the beef? Sizing up Canada-Mexico relations", en la revista *Embassy* (26/05/2010). Disponible en: http://m.embassynews.ca/news/2010/05/26/wheres-the-beef-sizing-up-canada-mexico-relations/38958. Fecha de acceso: 27/05/2010.

MINAKER, ARSENAULT Y REEDER

2009 "Honduras: Internal Dynamics and the ALBA Dimension". Tegucigalpa: Office of the Canadian Embassy (fecha específica de publicación desconocida). Acceso a la información: Expediente A-2009-00780.

MINING WATCH

2012a "Canadian Embassies Bring Journalists to Mining Convention from Countries Mired in Conflict" (06/03/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/canadian-embassies-bring-journalists-mining-conventioncountries-mired-conflict. Fecha de acceso: 06/03/2012.

2012b *Comunicado*: "Honduran organizations reject the National Congress' proposed mining law because it violates the rights of the Honduran people" (24/01/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/honduran-civil-societygroups-reject-proposed-mining-law-puts-corporate-interests-human-rights. Fecha de acceso: 25/01/2012.

2012c "Guatemala's Highest Court to Hear Landmark Indigenous Challenge against Mining Law"(20/07/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/guatemala-s-highest-court-hearlandmark-indigenous-challenge-against-mining-law. Fecha de acceso: 20/07/2012.

2012d "A Wake-up Call for Human Rights Defenders in the Americas, Not Indicator of Goldcorp's Performance" (05/01/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/human-rights-commissions-climbdown-wake-call-human-rights-defenders-americas-not-indicator. Fecha de acceso: 06/01/2012.

2012e "Canadian Parliamentarians Meet with Guatemalan Legislators on Goldcorp's Ticket" (11/09/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/canadian-parliamentarians-meetguatemalan-legislators-goldcorp-s-ticket. Fecha de acceso: 13/09/2012.

2012f "Goldcorp organizes junket for Canadian parliamentarians to Guatemala", en Mining Watch (28/08/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/goldcorp-organizes-junket-guatemala-canadian-parliamentarians. Fecha de acceso: 28/08/2012.

2012g "Two Killed in Panama Mining Protests" (08/02/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/two-killed-panamamining-protests. Fecha de acceso: 08/02/2012.

2011 "Defending land and life against an impending train wreck: Canadian mining in Colombia" (04/12/2011). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/article/defending-land-and-life-against-impending-trainwreck-canadian-mining-colombia. Fecha de acceso: 15/01/2012.
2010 "Award Winning Mining Company Being Sued for Violent Death of Community Leader" (02/12/2010). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/award-winning-mining-company-being-sued-violentdeath-community-leader-industry-out-step-canadi. Fecha de acceso: 16/05/2012.
2009-10 "Boletín 27". Ottawa. Disponible en: www.miningwatch.ca. Fecha de acceso: 01/03/2010.
2006a "Vannessa Ventures drops defamation charge against Costa Rican environmentalist" (26/10/2006). Disponible en: http:// www.miningwatch.ca/vannessa-ventures-drops-defamation-charges-against-costarican-environmentalist. Fecha de acceso: 06/08/2012.
2006b "Costa Rican constitutional court upholds cancellation of Crucitas gold mining permit" (06/12/2006). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/costarican-constitutional-court-upholds-cancellation-crucitas-gold-mining-permit. Fecha de acceso: 06/08/2012.

MINING WATCH Y CENSAT – AGUA VIVA
2009 *Land and Conflict: Resource Extraction, Human Rights, and Corporate Social Responsibility—Canadian Companies in Colombia*. Ottawa: Inter Pares.

MITTELSTAEDT, MARTIN
2010 **"**Goldcorp mine in Guatemala ordered to shut", en *The Globe and Mail* (08/06/2010).

MOFFETT, SÉBATIEN
2010a "Recontre avec Goldcorp —24 jun— Guatemala". Ciudad de Guatemala: Embajada de Canadá (24/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-02408.
2010b "Plainte à l'iachr contre le gouvernement du Guatemala". Ciudad de Guatemala: Embajada de Canadá (13/10/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.
2010c Título censurado. Ciudad de Guatemala: Foreign Affairs and International Trade (26/10/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

MONTALVO, GEOVANI
2010 "Fallen Anti-Mining Activists Honored With Vigil", en *Upside Down World* (14/01/2010). Disponible en: http://upsidedownworld.org/

main/el-salvador-archives-74/2314-solidarity-with-environmentalists-killed-in-elsalvador. Fecha de acceso: 14/01/2010.

MONTGOMERY, SHANNON

2009 "Mexico shuts down Canadian mine", en *Toronto Star* (09/12/2009).

MORIN, MARIE-LUCIE Y LEONARD EDWARDS

2007 Mandate Letter to Perry Calderwood, Ambassador of Canada to the Bolivarian Republic of Venezuela. Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (27/12/2007).

MOOERS, COLIN

2014 *Imperial Subjects: Citizenship in an Age of Crisis and Empire*. Londres: Bloomsbury.

MOORE, JASON W.

2015 *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. Londres: Verso.

MOORE, JENNIFER

2012 "Canada's Subsidies to the Mining Industry Don't Stop at Aid", en *Mining Watch* (06/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/expedientes/Canada_and_Honduras_mining_law-June%202012.pdf. Fecha de acceso: 28/06/2012.

2011 "Corporate Rights Over Human Rights: Canadian Mining in Central America". *Discussion paper prepared for a public event hosted by Territorio Libre: Canada's Dirty Gold Rush in Central America, University of Ottawa* (12/01/2011). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/article/corporate-rights-over-human-rights-canadian-mining-central-america. Fecha de acceso: 01/08/2013.

2010a "Ecuador's Fickle Friend", en *Dominion* (06/12/2010). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2812-ecuadors-ficklefriend-. Fecha de acceso: 06/12/2010.

2010b "Ecuador: Small-Scale Miners Questioning Large-Scale Interests in Southern Amazon", en *Upside Down Wo*rld (22/09/2010). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2703-ecuador-smallscale-miners-questioning-large-scale-interests-in-southern-amazon-. Fecha de acceso: 22/09/2010.

2009 "Canadian Mining Firm Financed Violence in Ecuador: Lawsuit", en *The Tyee* (03/03/2009). Disponible en: http://thetyee.ca/News/2009/03/03/CanMining/. Fecha de acceso: 04/03/2009.

2008 "Canada Throws Ecuador into Reverse", en *The Tyee* (11/07/2008). Disponible en: http://thetyee.ca/News/2008/07/11/CanMining/. Fecha de acceso: 12/07/2008.

MOORE, JENNIFER Y GILLIAN COLGROVE

2013 "Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy", en *Mining Watch* (05/2013). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/expedientes/blackfire_embassy_report_eng_0.pdf. Fecha de acceso: 30/05/2013.

MOORE, JENNIFER Y TERESA VELÁSQUEZ

2012 "Sovereignty Negotiated: Anti-Mining Movements, the State and Multinational Mining Companies under Correa's '21st Century Socialism'", en A. Bebbington (ed.), *Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America*. Londres: Routledge.

MORA SOLANO, SINDY

2008 "Diez años de acciones colectivas en Costa Rica", en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociale*s, vol. 5, núm. 1: 131-168.

MORONTA, GLORIA

2013 "La minera Pacific Rim demanda 315 millones de dólares al Estado salvadoreño", en *Conflictos Mineros* (04/04/2013). Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/12656-la-minerapacific-rim-demanda-315-millones-de-dolares-al-estado-salvadoreno. Fecha de acceso: 02/08/2013.

MULVANY, LYDIA

2012 "Candente Copper Falls After Mining Veto in Peru", en *Bloomberg* (02/10/2012). Disponible en: http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-10-02/candente-copper-falls-after-mining-veto-in-peru. Fecha de acceso: 04/10/2012.

NASDAQ

2011 "Goldcorp Guatemalan Mine Restrictions Modified by IACHR; Goldcorp Gratified by Announcement", en *Nasdaq* (19/12/2011). Disponible en: http://www.nasdaq.com/article/goldcorp-guatemalan-mine-restrictions-modifiedby-iachr-goldcorp-gratified-by-announcement-cm109730. Fecha de acceso: 19/12/2011.

NATIONAL DEFENCE

2012 "Canada to Donate Equipment to Belize Defence Forces". Ottawa: National Defence (12/06/2012).

2011 "Minister MacKay Announces Canadian Participation in Exercise panamax". Ottawa: National Defence (12/08/2011).
2009 "Estimate of Ongoing Instability in Guatemala". Solicitud de información: Expediente A-2010-00795.

NATURAL RESOURCES CANADA
s/f Disponible en: http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/15382. Fecha de acceso: 06/05/2014.

NAVAS, LUCÍA
2013 "Con la mirada en el mercado", en *La Prensa* (22/05/2013). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/05/22/activos/147593-mirada-mercado. Fecha de acceso: 08/08/2013.
2011 "Potencial minero en San Albino-Murra", en *La Prensa* (03/02/2011). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2011/02/03/economia/50920-potencial-minero-san-albino. Fecha de acceso: 08/08/2013.

NED – NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
2009 "Interim Project Report". Washington: National Endowment for Democracy (15/07/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01636.

NIETO LÓPEZ, J. RAFAEL
2011 "Resistencia social en Colombia: Entre Guerra y neoliberalismo", en *Observatorio Social de América Latina* (OSAL) (30/10/2011).

NIMD – NETHERLANDS INSTITUTE FOR MULTIPARTY DEMOCRACY
2009 Global Peace and Security Fund Project Proposal Sheet. Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha exacta desconocida, 2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2011-00574.
2008a Global Peace and Security Fund Project Proposal Sheet. Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (29/08/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01635.
2008b Global Peace and Security Fund Project Proposal Sheet, Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (08/12/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01635.

NOTA DIPLOMÁTICA (CON EL NOMBRE DEL AUTOR CENSURADO)
2011 "Your questions regarding our requested meeting" (14/01/2011). Acceso a la información: Expediente A-2011-02152.
2010 "Visit Ministry of Industry to Gildan", comunicación entre [la corporación] Gildan y la embajada canadiense. [Municipio] Choloma,

[Departamento] Cortés, Honduras (08/03/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-00532.

OAS – ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

2010 Report of the Secretary General to the Permanent Council on His Visit to Ecuador, Organization of American States (06/10/2010). Disponible en: www.oas.org. Fecha de acceso: 12/10/2010.

OBIRI-YEBOAH, YAA-HEMAA

2008 "Memorandum for Decision". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (25/04/2008).

OCAMPO, JOSÉ ANTONIO

2009 "Latin America and the Global Financial Crisis", en *Cambridge Journal of Economics*, vol. 33, núm. 4: 703-724.

OCMAL – OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS EN AMÉRICA LATINA

2013 "Lanzan en El Salvador Movimiento Mesoamericano contra la Minería Metálica (M4)", en *Conflictos Mineros* (25/04/2013). Disponible en: http://www. conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/10034/lanzan-en-el-salvadormovimiento-mesoamericano-contra-la-mineria-m4. Fecha de acceso: 01/08/2013.

OFFICE OF THE CHIEF MILITARY PERSONNEL

2010 "Visit Report —RCMP Visit to Colombia— 10-12 November 2009". Ottawa: Department of National Defence (16/01/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-00734-DND.

OFFICE OF THE EMBASSY

2008 "Meeting with Yamana Gold Officials and Site Visit". Tegucigalpa (fecha desconocida). Acceso a la información: Expediente A-2009-00780.

OGAWA, SUMIKO (*et al*.)

2013 "Financial Interconnectedness and Financial Sector Reforms in the Caribbean", *IMF Working Paper* (07/2013).

O'GRADY, MARY ANASTASIA

2009 "A Resolute Ally in the War on Terror", en *The Wall Street Journal* (28/02/2009). Disponible en: http://www.wsj.com/articles/SB123578347494598289. Fecha de acceso: 01/03/2009.

OJEDA RIOFRÍO, FRANCISCO

2006 "Tambogrande: A Community in Defence of Its Rights", en L. North, T. David Clark y V. Patroni (eds.), *Community Rights and Corporate Responsibility: Canadian Mining and Oil Companies in Latin America*. Toronto: BTL Books.

OLIVERA, ROXANA

2010 "Cook feels the heat", en *New Internationalist* (01/09/2010). Disponible en: http://newint.org/columns/currents/2010/09/01/cookcanadian-ambassador-guatemala/. Fecha de acceso: 08/09/2010.

OROZCO, EDUARDO

2002 "Manhattan Minerals Likes Prospects in Peru's Tambogrande Project: Gold and Copper Mine", en *The National Post* (03/01/2002).

OSPINA PERALTA, PABLO

2013 "'Estamos hacienda mejor las cosas con el mismo modelo antes que cambiarlo': La *revolución ciudadana* en Ecuador (2007-2012)", en C. Arze, J. Gómez, P. Ospina y V. Álvarez (eds.), *Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*. La Paz: CEDLA.

2011 "La unidad de las izquierdas", en *La Línea del Fuego* (08/09/2011).

PÁEZ, ÁNGEL

2010 "Mining Firms Alarmed at Election of Leftist Governor", en *Inter Press Service* (11/11/2010). Disponible en: http://www.ipsnews.net/2010/11/perumining-firms-alarmed-at-election-of-leftist-governor/. Fecha de acceso: 18/11/2010.

2009 "Peru: Three Days of Anti-Government Protests", en *Inter Press Service* (08/07/2009). Disponible en: http://www.ipsnews.net/2009/07/peruthree-daysof-anti-government-protests/. Fecha de acceso: 09/07/2009.

PALEY, DAWN

2012a "The Spoils of an Undeclared War: How Guatemala's 'War on Drugs' is Being Used as a Front to Clear Land for Oil Companies", en *Briarpatch* (01/07/2012). Disponible en: http://briarpatchmagazine.com/articles/view/the-spoils-of-an-undeclared-war. Fecha de acceso: 02/06/2014.

2012b "Nueva Esperanza", en *Canadian Dimension* (01/08/2012). Disponible en: http://canadiandimension.com/articles/4863. Fecha de acceso: 15/08/2013.

2012c "Guatemala: Peaceful Resistance in the Face of Violence", en *Upside Down World* (24/10/2012). Disponible en: http://upsidedownworld.

org/main/guatemala-archives-33/3934-guatemala-peaceful-resistance-in-the-face-of-violence. Fecha de acceso: 10/08/2013.

2012d "Ottawa's role in the permanent war against the people of Mexico", en *Upside Down World* (04/07/2012). Disponible en: http://upside-downworld.org/main/news-briefs-archives-68/3729-canada-boosts-police-power-in-mexico. Fecha de acceso: 05/07/2012.

2012e "Drug War Capitalism: Militarization and Economic Transformation in Colombia and Mexico", en *Against the Current*, núm. 159 (julio-agosto): 21-26.

2011 "Militarized Mining in Mexico", en *Dominion* (12/12/2011). Disponible en: http://www.dominionpaper.ca/articles/4301. Fecha de acceso: 15/12/2011

2010a "Snowbirds Gone Wild! Canadian Retirees and Locals Clash in Honduras", en *Rights Action, Boletín electrónico* (04/11/2010).

2010b "Ten Injured as Riot Police Break Strike at Calgary-owned Oil Company", en *Upside Down World* (14/06/2010). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/news-briefs-archives-68/2541-colombia-ten-injured-as-riot-police-breakstrike-at-calgary-owned-oil-company. Fecha de acceso: 17/06/2010.

2010c "Canadian Companies Out for Colombian Oil", en *NACLA Report on the Americas* (11/08/2010). Disponible en: nacla.org. Fecha de acceso: 19/09/2010.

PANIAGUA, CARLOS

2002 "El bloque empresarial hegemónico salvadoreño", en *Estudios Centroamericanos*, vol. 57, núms. 645-646: 609-693.

PANITCH, LEO Y SAM GINDIN

2004 "Finance and American Empire", en Leo Panitch y Colin Leys (eds.), *Socialist Register 2005: The Empire Reloaded*. New York: Monthly Review Press.

2003 "Global Capitalism and American Empire", en Leo Panitch y Colin Leys (eds.), *Socialist Register 2004: The New Imperial Challenge*. New York: Monthly Review Press.

PARRA, SONIA E.

2010 "Honduran Caribbean on a Tightrope", en *Inter Press Service* (26 /06/2010). Disponible en: http://www.ipsnews.net/2010/06/environment-hondurancaribbean-on-a-tightrope/. Fecha de acceso: 06/072010.

PASQUEL, MARIA
2009 "Chavez fifth visit to Ecuador". Quito: Embajada canadiense (28/05/2009). Solicitud de información: Expediente A-2010-02391.
2007 "Ecuadorian Constitution Draft". Quito: Canadian Embassy (06/11/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00052.

PASTERNAK, SEAN B.
2011 "Scotiabank Eyeing Acquisitions in Latin America", en *Bloomberg* (05/04/2011). Disponible en: http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-04-05/scotiabank-looking-at-acquisitions-in-latin-americaporter-says-. Fecha de acceso: 06/04/2011.

PATTERSON, K.
2010 Título censurado. Washington: Misión permanente canadiense ante la OEA (14/06/2010). Acceso a la información: Expediente A-2012-00366.

PATTERSON, KELLY
2005a "Canadian Mine Strikes Lode of Unrest", en *Ottawa Citizen* (26/04/2005).
2005b "Open Veins: Conflicts Erupting around the World over Canadian Mines", en *Ottawa Citizen* (01/10/2005).
2005c "The Trouble with Junior: Small-Scale Companies Dogged by Controversy", en *Ottawa Citizen* (03/10/2005).

PAYNE, ELIZABETH
2014 "Colombian Activists Say Canadian Companies Benefitting from Human Rights Abuses", en *Ottawa Citizen* (06/02/2014). Disponible en: http://www.ottawacitizen.com/news/Colombian+activists+says+Canadian+companies+benefiting+from/9478549/story.html. Fecha de acceso: 13/02/2014.

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL
2011 "Mining in Colombia: At What Cost?", en *Boletín* (18/11/2011).

PEARSON, TAMARA
2010 "Another Trade Union Leader Murdered in Aragua State", en *Venezuelanalysis* (28/04/2010). Disponible en: http://venezuelanalysis.com/news/5314. Fecha de acceso: 29/04/2010.

PÉREZ, I.
2010 "Organizaciones sociales piden la salida inmediata de Pacific Rim", en *La Página* (22/07/2010). Disponible en: http://www.lapagina.com.

sv/nacionales/36319/2010/07/22/Organizaciones-sociales-piden-la-salida-inmediatade-Pacific-Rim. Fecha de acceso: 27/07/2010.

PERLA JR., HÉCTOR, Y HÉCTOR M. CRUZ-FELICIANO

2013 "The Twenty-First-Century Left in El Salvador and Nicaragua: Understanding Apparent Contradictions and Criticisms", en *Latin American Perspectives*, vol. 40, núm. 3: 83-106.

PETRAS, JAMES

2001 "The Geopolitics of Plan Colombia", en *Monthly Review*, vol. 53, núm. 1: 30-48.

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS

2010 Comunicado de prensa (18/05/2010). Disponible en: physiciansforhumanrights.org. Fecha de acceso: 20/05/2010.

PICOLOTTI, ROMINA

2009 Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (SCFAID). 40th Parliament, 2nd Session. Ottawa: 24/11/2009.

PINTO, VLADIMIR

2009 "Reestructuración neoliberal del estado peruano, industrias extractivas y derechos sobre el territorio", en José de Echave C., Raphael Hoetmer y Mario Palacios Panéz (eds.), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global.

PONCE, ALDO F. Y CYNTHIA McCLINTOCK

2014 "The Explosive Combination of Inefficient Local Bureaucracies and Mining Production: Evidence from Localized Societal Protest in Peru", en *Latin American Politics and Society*, vol. 56, núm. 3: 118-140.

POOLE, DEBORAH Y GERARDO RÉNIQUE

2003 "Terror and the Privatized State: A Peruvian Parable", en *Radical History Review*, vol. 85.

PORTES, ALEJANDRO Y KELLY HOFFMAN

2003 "Latin American Class Structures: Their Composition and Change During the Neoliberal Era", en *Latin American Research Review*, vol. 38, núm. 1: 41-82.

POSTIGO, JULIO C., MARIANA MONTOYA Y KENNETH R.YOUNG

2013 "Natural Resources in the Subsoil and Social Conflicts on the Surface: Perspectives on Peru's Subsurface Political Ecology", en A. Bebbington

y J. Bury (eds.), *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. Austin: University of Texas Press.

PREFONTAINE, CHRISTINA

2011 "Report re. laws". Caracas: Canadian Embassy (25/01/2011). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01863.

PRIME MINISTER'S OFFICE

2013a "Prime Minister Stephen Harper Announces Support for Development and Sustainable Economic Growth in Peru". Lima: Oficina del Primer Ministro (22/05/2013).

2013b "Canada strengthens defence and security ties with Peru". Lima: Prime Minister's Office (22/05/2013).

2012a "Prime Minister Harper Announces Support for Economic Growth and Development in the Americas". Ottawa (14/04/2012).

2012b "Prime Minister Harper Announces Support to Enhance Security in the Americas". Ottawa: Oficina del Primer Ministro (15/04/2012).

2011a "Prime Minister Harper Announces Conclusion of Free Trade Negotiations with Honduras". Ottawa (12/08/2011).

2011b "Prime Minister Harper Announces Contributions to Security Enhancements in Central America". Ottawa: Oficina del Primer Ministro (12/08/2011).

2011c "Canada Supports Economic Growth Through Conflict Prevention in Peru". Ottawa: Prime Minister's Office (12/11/2011).

PRIVY COUNCIL OFFICE

2006 "Draft Intelligence Memorandum Ecuador: Leftist Wins the Presidency". Ottawa: Privy Council Office (29/11/2006). Solicitud de información: Expediente A-2010-02390.

PROACTIVE DISCLOSURE

2008a "Disclosure of Grant and Contribution Awards over $25,000" (26/06/2008). Disponible en: http://www.international.gc.ca. Fecha de acceso: 14/04/2012.

2008b "Disclosure of Grant and Contribution Awards over $25,000" (02/09/2008). Disponible en: http://www.international.gc.ca/. Fecha de acceso: 14/04/2012.

PRODESC – PROYECTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

2012 "Mexican Army and Police Use Force to Break Community's Protest, Enter Excellon's La Platosa Mine", en *Mining Watch* (29/08/2012). Disponible en: http://www.miningwatch.ca/news/mexican-army-and-

police-use-force-break-communitys-protest-enter-excellons-laplatosa-mine. Fecha de acceso: 30/08/2012.

PUGLIESE, DAVID

2012 "Canadian military intends to spend $1 billion on armed drones", en *The Ottawa Citizen* (06/08/2012) Disponible en: www.ottawacitizen.com. Fecha de acceso: 08/08/2012.

2005 "Soldiers of Fortune", en *The Ottawa Citizen* (12/11/2005).

QUEIROZ, C.

2011 "Continúa impase entre trabajadores y empresas petroleras", en *Adital* (26/07/2011). Disponible en: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=58709. Fecha de acceso: 06/08/2011.

RAMÍREZ, ALBERTO

2010 "The Minister Takes Legal Action Against Montana", en *Prensa Libre* (04/10/2010). Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Ministro-presenta-accion-legal-Montana_0_347365300.html. Fecha de acceso: 20/10/2010. Traducción: Rosalind Gill for *Rights Action*. Disponible en: https://goldcorpoutnews.wordpress.com/2010/10/01/the-minister-takes-legal-action-against-montana/.

RAMÍREZ CUELLAR, FRANCISCO

2005 *The Profits of Extermination: How U.S. Corporate Power is Destroying Colombia*, traducido por A. Chomsky. Monroe, Maine: Common Courage Press.

RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN

2010 "Fragmentación, reflujo y desconcierto: Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)", en *Observatorio Social de América Latina* vol. xi, núm. 28: 17-47. (28/11/2010).

RAMÍREZ, SERGIO

2011 *Adiós Muchachos: A Memoir of the Sandinista Revolution*. Durham y Londres: Duke University Press.

RANDALL, STEPHEN J. Y JILLIAN DOWDING

2008 "Canada, Latin America, Colombia, and the Evolving Policy Agenda", en *Canadian Foreign Policy*, vol. 14, núm. 3: 29-46.

RATHBONE, JOHN PAUL

2011 "Bolivia and Ecuador Feel Political Heat", en *Financial Times* (06/09/2011). Disponible en: http://www.ft.com/cms/

s/0/3844369ed010-11e0-81e2-00144feabdc0.html#axzz3vzndWmJV. Fecha de acceso: 04/08/2013.

REEDER, NEIL

2010a *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (22/02/2010). Acceso a la información: Expediente A-2009-02141.

2010b *Communication to Ottawa*. Tegucigalpa: Embajada de Canadá (26/07/2010) Acceso a la información: Expediente A-2010-01177.

2010c *Situational Report*. Tegucigalpa: Oficina de la Embajada de Canadá (30/01/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

2010d "Re. Canadian Mining meetings", comunicación entre la Embajada de Canadá y Breakwater Resources. San José, Costa Rica (23/03/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-00532.

2009a *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (30/10/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

2009b *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (09/10/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

2009c *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (01/11/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

2009d *Situational Report*. Tegucigalpa: Oficina de la Embajada de Canadá (07/07/2009).

REMA – RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

2010 "Asegura Canadá que minera en Costa Rica cumplió requisitos", en *Rema* (09/08/2010). Disponible en: http://rema.codigosur.net/leer.php/4941356.html. Fecha de acceso: 12/08/2010.

RÉNIQUE, GERARDO

2010 "'People's War,' 'Dirty War': Cold War Legacy and the End of History in Postwar Peru", en G. Grandin y G. Joseph (eds.), *A Century of Violence*. Durham y London:Duke University Press.

REVIL, UTTING Y RIVERA

s/f "Andean Brief". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-00547.

REY ROSA, MAGALÍ

2010 "Montana Lied!", en *Prensa Libre* (01/10/2010). Traducción: Rosalind Gill para *Rights Action*. Disponible en: https://goldcorpoutnews.wordpress.com/2010/10/18/montana-lied/. Fecha de acceso: 14/12/2015.

REYES, CRISTINA

2011 "Se debate de denuncia del Convenio con Canadá", en *Radio Sucre* (21/07/2011). Disponible en: www. radiosucre.com.ec. Fecha de acceso: 27/07/2011.

RICHANI, NAZIH

2014 *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia*. 2da. edición. Albany: State University of New York Press.

2012 "The Agrarian Rentier Political Economy: Land Concentration and Food Insecurity in Colombia", en *Latin American Research Review*, vol. 47, núm. 2: 51-78.

RIGHTS ACTION

2013 "Context of the Honduran Electoral Process 2012-2013: Incomplete List of Killings and Armed Attacks Related to Political Campaigning in Honduras", en *Rights Action, Boletín electrónico* (21/10/2013). Disponible en: http://rightsaction.org/sites/default/expedientes/Honduras-Violence-Political-Campaign.pdf. Fecha de acceso: 29/05/2014.

2010 "Shooting of Mayan Woman Linked to Goldcorp's Mine in Guatemala", en *Rights Action, Boletín electrónico* (10/07/2010).

2009a "Honduras Coup Alert 41". Washington (02/08/2009).

2009b "Hudbay Minerals Linked to One and Possibly Two Deadly Shootings On September 27 and 28", en *Rights Action, Boletín electrónico* (28/09/2009).

2009c "After Goldcorp illegal tried to take control of more lands, Maya Mam people of San Miguel Ixtahuacan are threatened with more 'criminalizatin' and repression", en *Rights Actions, Boletín electrónico* (12/06/2009).

2009d "Another Possible Attempt against 4 Community Leaders of San Miguel Ixtahuacan", en *Rights Action, Boletín electrónico* (09/08/2009).

2009e "Goldcorp 7", en *Rights Action, Boletín electrónico* (19/06/2009).

2009f "Mining and the Death of a Mayan Teacher", en *Rights Action, Boletín electrónico* (18/10/2009).

2009g "Mexican Government Sends Troops In Support of Canadian Mining Company", en *Rights Action, Boletín electrónico* (09/05/2009). Fecha de acceso: 09/05/2009.

2007 "Trial of 'Goldcorp 7' Begins Monday, November 12", en *Rights Action, Boletín electrónico* (10/11/2007).

RIGHTS AND DEMOCRACY

2010 Standing Committee on Foreign Affairs and International Development – SCFAID, 3rd Session, 40th Parliament (15/04/2010).

RIVERA, JACOBO
2013 "Lo irreversible y Hugo Chávez", en *La Jornada* (10/03/2013).

ROBERTSON, GRANT
2013 "Scotiabank sees bright future in South America", en *The Globe and Mail* (23/01/2013).
2011 "Scotiabank buys Banco Colpatria", en *The Globe and Mail* (20/10/2011). Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/scotiabankbuys-banco-colpatria/article559128/. Fecha de acceso: 20/10/2011.

ROBINSON, ALLAN
2002 "Mining Conference to Tackle Range of Controversial Issues", en *The Globe and Mail* (13/05/2002).

ROBINSON, BILL
2011 "Canadian Military Spending 2010-11", en *Canadian Centre for Policy Alternative* (03/2011). Disponible en: https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/canadian-military-spending-2010-11. Fecha de acceso: 02/04/2011.

ROBINSON, WILLIAM I.
2012 "Latin America in the New Global Capitalism", en *NACLA Report on the Americas*, vol. 45, núm. 2: 13-18.
2008 *Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective*. Baltimore: John Hopkins University Press.
2007 "Transformative Possibilities in Latin America", en L. Panitch y C. Leys (eds.), *Socialist Register 2008: Global Flashpoints, Reactions to Imperialism and Neoliberalism*. New York: Monthly Review Press.
2004 "Global Crisis and Latin America", en *Bulletin of Latin American Research*, vol. 23, núm. 2: 135-153.
2003 *Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization*. Londres: Verso.
2001 "Transnational Processes, Development Studies and Changing Social Hierarchies in the World System: A Central American Case Study", en *Third World Quarterly*, vol. 22, núm. 4: 529-563.
1996 *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*. Cambridge: Cambridge University Press.

RODRÍGUEZ, A. DE J.
2012 "Goldcorp's Legacy: Criminalization and Mining Resistance in San Rafael las Flores, Guatemala", en *Upside Down World* (25/04/2012). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/guatemala-

archives-33/3595-goldcorpslegacy-criminalization-and-mining-resistance-in-san-rafael-las-flores-guatemala. Fecha de acceso: 26/04/2012.

RODRÍGUEZ, J.
2010 "Costa Rica/Nicaragua/Honduas Pol-Econ Report —30 Apr to 18 May, 2010" (19/05/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01630.

ROJAS-ARBULÚ, CARLOS
2005 "Canadian participation in Guatemala's Energy Sector". Ciudad de Guatemala; Embajada de Canadá (fecha específica desconocida). Acceso a la información: expediente A-2010-02417.

ROJAS BOLAÑOS, MANUEL
2010 "Centroamérica: ¿anomalías o realidades?", en *Nueva Sociedad*, núm. 226 (03/04/2010).

ROJAS T., JUAN FERNANDO
2014 "Crisis del oro desata despidos en Segovia", en *El Colombiano* (30/01/2014). Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/crisis_del_oro_desata_despidos_en_segovia/crisis_del_oro_desata_despidos_en_segovia.asp. Fecha de acceso: 17/02/2014.

ROLDÁN, MARY
2002 *Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953*. Durham: Duke University Press.

ROMERO, ELIZABETH
2013 "Reviven quejas contra minera", en *La Prensa* (11/06/2013). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/06/11/ambito/150315-revivenquejas-contra-minera. Fecha de acceso: 08/08/2013.

ROMERO, JUAN
2009 "La coyuntura económica del golpe: Crisis del régimen e inestabilidad del modelo de acumulación", en *Socialismo o Barbarie*, núms. 23/24: 129-138.

ROSALES, ANTULIO
2013 "Going Underground: The Political Economy of the 'Left Turn' in South America", en *Third World Quarterly*, vol. 34, núm. 8: 1443-1457.

ROSALES, FRANKLIN
2011 "Venezuela's Oswaldo Álvarez Paz Found Guilty of Spreading False Information", en *Venezuelanalysis* (14/06/2011). Disponible en: http://venezuelanalysis.com/news/6353. Fecha de acceso: 16/01/2014.

ROSS, CLIFTON
2010 "A Nicaraguan Farce", en *The Upside Down World* (20/01/2010). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/nicaragua-archives-62/2330-a-nicaraguan-farce. Fecha de acceso: 08/08/2013.

ROSS, IAN
2012 "Former First Nation Chief becomes face of Canadian mining", en *Northern Ontario Business* (01/03/2012). Disponible en: http://www.northernontariobusiness.com/Industry-News/aboriginal-businesses/Former-First-Nation-chief-becomes-face-of-Canadian-mining.aspx. Fecha de acceso: 26/04/2013.

ROSS, OAKLAND
2013 "If you thought Chavez (sic) was bad", en *Toronto Star* (10/03/2013).

ROTHSCHUH, TATIANA
2013 "Revive protesta de mineros de Santo Domingo", en *La Prensa* (01/08/2013). Disponible en: http://www.laprensa.com/ni/2013/08/01/departamentales/157021. Fecha de acceso: 08/08/2013.

RUBEN, RUERD Y MARRIT VAN DEN BERG
2001 "Nonfarm Employment and Poverty Alleviation of Rural Farm Households in Honduras", en *World Development*, vol. 29, núm. 3: 549-560.

RUSSELL, GRAHAME
2011 "Even the Cows are Being Killed By Goldcorp's Mine in Guatemala", en *Rights Action, Boletín electrónico* (04/02/2011).
2010a "Goldcorp in Guatemala: Despite the Despites, the Struggle for Human Rights and the Environment Continues", en *Rights Action, Boletín electrónico* (22/09/2010).
2010b "Gang Rapes, Forced Evictions and the Endless Nightmare of Nickel Mining in Guatemala", en *Rights Action, Boletín electrónico* (27/05/2010).

RUTA, JONATHON
2007 "PetroAmérica Initiative". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha exacta desconocida, 2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2008-00058.

SAAD-FILHO, ALFREDO
2005 "From Washington to Post-Washington Consensus: Neoliberal Agendas for Economic Development", en A. Saad-Filho y D. Johnston (eds.), *Neoliberalism: A Critical Reader*. Londres: Pluto.

SAAD-FIHLO, ALFREDO Y JOHN WEEKS
2013 "Curses, Diseases and Other Resource Confusions", en *Third World Quarterly*, vol. 34, núm. 1: 1-21.

SAAVEDRA, LUIS A.
2012 "Legislative reforms favor mining companies", en *Latin America Press* (16/08/2012). Disponible en: http://www.lapress.org/articles.asp?art=6688. Fecha de acceso: 27/08/2012.

SABOURIN, N.
2010 "Pérou: les élections régionales et locales laissent entrevoir une champagne présidentielle mouvementée en 2011". Lima: Embajada de Canadá (14/10/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01361.

SACHER, WILLIAM Y ALBERTO ACOSTA
2012 *La minería a gran escala en Ecuador: Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador*. Quito: Abya Yala.

SADER, EMIR
2011 *The New Mole: Paths of the Latin American Left*. Londres: Verso.

SÁENZ, ROBERTO
2009 "'Tienen miedo porque no les tenemos miedo': Después del golpe —rebelión, negociación y resistencia", en *Socialismo o Barbarie*, núm. 23-24.

SALAZAR, CARLOS
2012 "Minera canadiense descalifica estudio sobre daños ambientales en Crucitas", en *El País* (16/04/2012). Disponible en: www.elpais.cr. Fecha de acceso: 16/04/2012.
2010 "Minera de Crucitas suspendió anuncio de acciones legales tras fallo de Justicia de Costa Rica", en *El País* (30/11/2010). Disponible en: www.elpais.cr. Fecha de acceso: 30/11/2010.

SALAZAR FERNÁNDEZ, CARLOS
2012 "Óscar Arias sigue defendiendo 'legalidad' de mina de oro en Crucitas", en *El País* (02/12/2012). Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/58823. Fecha de acceso: 07/08/2013.

SALAZAR, MILAGROS

2010a "Mineral-Rich Highlands Lack Legal Protection", en *Inter Press Service* (30/11/2010). Disponible en: http://www.ipsnews.net/2010/11/peru-mineral-rich-highlands-lacklegal-protection/. Fecha de acceso: 30/11/2010.

2010b "Resistance to Increasing Mining Royalties", en *Inter Press Service* (10/12/2010). Disponible en: http://www.ipsnews.net/2010/12/peru-resistance-toincreasing-mining-royalties/. Fecha de acceso: 16/12/2012.

SALOMÓN, LETICIA

2012 "Honduras: A History That Repeats Itself", en *NACLA Report on the Americas*, vol. 45, núm. 1: 58-61.

SÁNCHEZ ANCOCHEA, DIEGO

2005 "Domestic Capital, Civil Servants and the State: Costa Rica and the Dominican Republic under Globalisation", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 37, núm. 4: 693-726.

SANKEY, KYLA

2014 "Colombia —The Mining Boom: A Catalyst of Development or Resistance?", en H. Veltmeyer y J. Petras (eds.), *The New Extractivism*. London y New York: ZEDBooks.

SANTACRUZ, SILVIA

2008 "Firms See Stability as Correa Rebuffs conaie", en *Ecuador Mining News* (16/10/2008). Disponible en: www.ecuadorminingnews.com. Fecha de acceso: 01/11/2008.

SAUNDERS, DOUG

2013 "Hugo Chavez (sic) had nothing to do with South America's real revolution", en *The Globe and Mail* (11/03/2013). Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/doug-saunders-hugo-chavez-had-nothingto-do-with-south-americas-real-revolution/article9552917/. Fecha de acceso: 14/06/2013.

2009 "Second wave of financial crisis is coming, Brown warns", en *The Globe and Mail* (08/07/2009).

SAWYER, SUSANA

2004 *Crude Chronicles: Indigenous Politics, Multinational Oil, and Neoliberalism in Ecuador*. Durham y Londres: Duke University Press.

SCFAID – STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Comité permanente de relaciones exteriores y desarrollo internacional)

2011a 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 21/03/2011.
2011b 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 21/03/2011.
2011c 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 21/03/2011.
2011d 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 21/03/2011.
2011e 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 09/03/2011.
2011f 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 09/03/2011.
2011g 40th Parliament, 3rd Session. Ottawa, 21/03/2011.

SCHIPANI, ANDRES

2015 "Peru's President Sees a Sharp 2014 gdp Slump", en *The Financial Times* (07/01/2015). Disponible en: http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/01/07/peruspresident-sees-a-sharp-2014-gdp-slump/. Fecha de acceso: 01/03/2015.

2013a "Pacific Rubiales has Faith in Colombia", en *The Financial Times* (25/07/2013). Disponible en: http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/07/25/pacific-rubialeshas-faith-in-colombia/#axzz2tg4gdna3. Fecha de acceso: 12/02/2014.

2013b "Colombia's Oil Producers Surge Ahead", en *The Financial Times* (03/06/2013). Disponible en: http://www.ft.com/cms/s/0/92b87f80-9de2-11e2-9ccc-00144feabdc0.html. Fecha de acceso: 12/02/2014.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2013 *Anuario Estadístico de La Minería Mexicana 2012*. México: Secretaría de Economía.

SDIR – SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS OF THE STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT

2013 1st Session, 41st Parliament. Ottawa: 18/04/2013.

SEGNINI, GIANNINA

2011 "Socio de Crucitas ofreció $250,000 a la Fundación Arias" (28/04/2011). Disponible en: https://www.nacion.com/archivo/socio-de-crucitas-ofrecio-250-000-a-la-fundacion-arias/G6XFN5XVJBEIFDOXPZGNMDDY7E/story. Fecha de acceso: 03/05/2011.

SEOANE, JOSÉ

2013 "El retorno de la crisis y la ofensiva extractivista", en José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati (eds.), *Extractivismo, despojo y crisis*

climática: Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América. Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

SEOANE, JOSÉ; EMILIO TADDEI Y CLARA ALGRANATI

2013 *Extractivismo, despojo, y crisis climática: Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*. Buenos Aires: Herramienta editores.

SEREDA, S.

2009 "Information Template for Meeting with President Correa of the Republic of Ecuador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (12/02/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01185.

SHAIKH, ANWAR

1979a "Foreign Trade and the Law of Value: Part I", en *Science and Society,* vol. 43, núm. 3: 281-302.

1979b "Foreign Trade and the Law of Value: Part II", en *Science and Society,* vol. 44, núm. 1: 27-57.

SHANE, KRISTEN

2012 "Why did cida cut Development and Peace's funding?", revista *Embassy* (21/03/2012).

SHAW-WOOD, ROBERT

2011 "Re. Mining in El Salvador, an update". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (07/02/2011). Acceso a la información: Expediente A-2011-02152.

SHISKO, ANDREW

2011 "RE: For your review and approval". Quito: Canadian Embass (06/01/2011). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2011-01180.

2010a "Canada Day". Quito: Canadian Embasy (13/06/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01196.

2010b "Visit to Quimsacocha". Quito: Canadian Embassy (18/02/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01192.

2010c "msfa visit". Quito: Canadian Embassy /23/08/ 2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02389.

2010d "Ecuador sitrep". Quito: Canadian Embassy (03/10/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01363.

2010e "Réunion régionale sur l'Unité andine pour la gouvernance démocratique". Quito: Canadian Embassy (07/10/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01363.

2010f "Pre-DPAT consultation: concept paper by the Netherlands Institute for Multiparty Democracy". Quito: Canadian Embassy (20/09/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2011-00574.

SILVA, J. ADÁN Y LUIS EDUARDO MARTÍNEZ

2013 "Bendita minería maldita", en *La Prensa* (25/03/2013). Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/03/25/reportajesespeciales/139557-bendita-mineria-maldita. Fecha de acceso: 08/08/2013.

SILVA HERRERA, JAVIER

2014 "Tres magistrados van a la selva; evalúan si permiten extracción de oro", *en El Tiempo* (29/01/2014). Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13427338.html. Fecha de acceso: 18/02/2014.

SILVA, SANTIAGO

2011 "Ecuador wants higher royalties from U.S., Canadian miners", en *Agencia Reuters* (26/05/2011). Disponible en: http://www.reuters.com/article/ecuador-minesidUSN2623921620110526. Fecha de acceso: 02/06/2011.

SINGLETON, B.

2010 "[D]raft letter from Amb Reeder to Bob Carreau, Breakwater Resources", comunicación entre la oficina de CIDA en Ottawa y Tegucigalpa. Ottawa: FAIT (24/03/2010). Acceso a la información: Expediente A-2010-00532.

SIPRI – STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE

s/f *Military Expediture Database*. Disponible en: www.sipri.org. Fecha de acceso: 27/03/2013.

SO, ALVIN Y.

1990 *Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World-Systems Theories*. New York: Sage.

SOEDERBERG, SUSANNE

2006 *Global Governance in Question: Empire, Class and the New Common Sense in Managing North-South Relations*. Londres: Pluto.

2005 "The Transnational Debt Architecture and Emerging Markets: The Politics of Paradoxes and Punishment", en *Third World Quarterly*, vol. 26, núm. 6: 927-949.

2004 *The Politics of the New International Financial Architecture: Reimposing Neoliberal Domination in the Global South*. Londres: Zed.

SOLANO, GONZALO
2009 "U.S. Closes Military Post in Ecuador", en *The Washington Post* (19/09/2009).

SOSA, TANIA
2012 "Implicaciones socio-ambientales de la minería en Centroamérica", en *América Latina en Movimiento*, núm. 473.

SOSA, MILAGROS Y MARGREET ZWARTEVEEN
2012 "Exploring the Politics of Water Grabbing: The Case of Large Mining Operations in the Peruvian Andes", en *Water Alternatives*, vol. 5, núm. 2: 360-375.

SPALDING, ROSE J.
2007 "Civil Society Engagement in Trade Negotiations: CAFTA Opposition Movements in El Salvador", en *Latin American Politics and Society*, vol. 49, núm. 4: 85-114.

SPICER, JONATHAN Y ALONSO SOTO
2008 "Ecuador reassures miners", en *The Globe and Mail* (26/04/2008).

SPRING, KAREM
2010 "Military Coups, Mining and Canadian Involvement in Honduras", en *Rights Action, Boletín electrónico* (10/09/2010).

SPRING, KAREM Y GRAHAME RUSSELL
2011 "Goldcorp and Honduran Regime Cover-up Blood and Urine Testing and Poisoning at San Martin Mine", en *Rights Action*, *Boletín electrónico* (27/04/2011).

SPRONK, SUSAN Y JEFFREY R. WEBBER
2014 "Sabaneta to Miraflores: The Afterlives of Hugo Chávez", en *New Politics,* vol. 56 (Winter).

STAUFFER, CAROLINE Y TERESA CESPEDES
2011 "Peru's presidential field split over mining taxes", en *Agencia Reuters* (17/03/2011). Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-peru-election-mining-idUSTRE72G6V720110317. Fecha de acceso: 14/04/2011

STERN, STEVE J. (ed.)
1988 *Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980-1995*. Durham y Londres: Duke University Press.

STEWART, WALTER
1982 *Towers of Gold, Feet of Clay: The Canadian Banks*. Toronto: Harper-Collins.

STIRLING, K.
2009 "Meeting at pdac". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (26/02/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01193.

STOKES, DOUG
2005 *America's Other War: Terrorizing Colombia*. Londres: Zed Books.

STUECK, WENDY
2006 "Mining Firms Agree to Peruvian Payment", en *The Globe and Mail* (25/08/2006).
2005 "Clashes reported in Guatemala over Glamis mining project", en *The Globe and Mail* (13/01/2005).

SUNQUIST, KENNETH
2007 "Canadian Mining Interests in Ecuador". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (24/01/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.

SZABLOWSKI, DAVID
2006 "Regulating Corporate and Community Engagement in a Large Mining Project", en L. North, T. David Clark y V. Patroni (eds.), *Community Rights and Corporate Responsibility: Canadian Mining and Oil Companies in Latin America*. Toronto: Between the Lines.

TABAH, JOSHUA
2009 "Background Briefing on cida Programming in Ecuador". Ottawa: CIDA (21/09/2009). Solicitud de acceso a la información-Cida: Expediente A-2010-00388.
2008 "Next Steps in Ecuador for CIDA". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (27/11/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-00389.

TAIT, CARRIE
2013 "Pacific Rubiales Strikes Deal to Acquire Petrominerales", en *The Globe and Mail* (30/09/2013). Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/rubiales-strikes-deal-forpetrominerales/article14600753/. Fecha de acceso: 12/02/2014.

TAYLOR, FABRICE
2007 "Crystallex's Venezuelan road not necessarily paved with gold", en *The Globe and Mail* (27/03/2007).

TAYLOR, LEWIS
2011 "Environmentalism and Social Protest: The Contemporary Anti-Mining Mobilization in the Province of San Marcos and Condebamba Valley, Peru", en *Journal of Agrarian Change*, vol. 11, núm. 3: 420-439.

TAYLOR, MARCUS
2010 "Conscripts of Competitiveness: Culture, Capital and Institutions", en *Third World Quarterly*, vol. 31, núm. 4: 561-579.

THE STANDING COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS
2003 *Enhancing Canada's Role in the OAS: Canadian Adherence to the American Convention on Human Rights*. Ottawa (05/2003). Disponible en: http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/372/huma/rep/rep04may03-e.htm. Fecha de acceso: 24/05/2013.

THOMSON, ADAM
2011 "Ortega Heads for Re-Election in Nicaragua", en *The Financial Times* (07/11/2011). Disponible en: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/aca01480-0955-11e1-8e86-00144feadbdc0.html#axzz2bKUzmOuA. Fecha de acceso: 08/08/2013.

TINK, B.
2007 "RE: Ecuador Mining Update". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (13/02/2007). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01187.

TSX – TORONTO STOCK EXCHANGE
2014 "Mining Sector Fact Sheet" (21/02/2014). Disponible en: tmx.com. Fecha de acceso: 07/04/2014.

UNDA, MARIO
2011 "Ecuador 2010: El año 4 de la Revolución Ciudadana", en *Observatorio Social de América Latina* (29/05/2011).

UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS
2010 "Migrant Workers Protest at Canada's Embassy in Guatemala", en *Market Wired* (01/09/2010). Disponible en: http://www.marketwired.com/press-release/migrant-workers-protestat-canadas-embassy-in-guatemala-1312972.htm. Fecha de acceso: 02/09/2010.

URKIDI, LEIRE

2011 "The Defence of Community in the Anti-Mining Movement of Guatemala", en *Journal of Agrarian Change*, vol. 11, núm 4: 556-580.

U.S. EMBASSY

2006 Wikileaks, cable 06SANJOSE706, Rodrigo Arias, Minister of Presidency. San José: Embajada de EE.UU (30/03/2006).

VACCARO, ANTHONY

2012 "B2Gold makes Nicaragua its platform for growth", en *The Northern Miner* (26/03-01/04/2012).

2008 "Infinito Gold looks to unlock Costa Rica's mining potential", en *The Northern Miner* (13/10/2008). Disponible en: http://www.northernminer.com/news/infinito-gold-looks-to-unlock-costa-rica-s-miningpotential/1000224005/. Fecha de acceso: 06/08/2012.

VALDES, P.

2009a *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (08/10/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

2009b *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (03/10/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

2009c *Situational Report*. Tegucigalpa: Canadian Embassy (29/09/2009). Acceso a la información: Expediente A-2010-01179.

VALDEZ, RICARDO

2010a "Report Participation and Activities of the Government of Ecuador's Delegation to pdac". Quito: Canadian Embassy (09/04/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.

2010b "Resultados y expectativas de la visita al pdac 2010". Quito: Canadian Embassy (18/03/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-2400.

20120c "Conflict and Controversy as Illegal Miners Come to Terms with the Law". Quito: Canadian Embassy (23/09/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.

2009 "Ecuadorian Delegation to pdac 2009". Quito: Canadian Embassy (21/04/2009). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.

2008a "Report Second Coordination Meeting for Ecuadorian-Canadian interests". Quito: Canadian Embassy (29/04/2008).

2008b "Follow up meeting with group of Canadian mining companies". Quito: Canadian Embassy (25/04/2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2009-0078.

2008c "UBC Geology in Ecuador". Quito: Canadian Embassy (01/05/ 2008). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01194.

VALENCIA, ALEXANDRA

2012 "Kinross, Ecuador gold mine talks hit impasse", en *Financial Post* (17/02/2012). Disponible en: http://business.financialpost.com/investing/kinross-ecuadorgold-mine-talks-hit-impasse. Fecha de acceso: 17/02/2012.

VALENTE, MARCELA

2012 "Mining Industry Puts a Freeze on Mapping of Argentina's Glaciers", en *Upside Down World* (15/03/2012). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/news-briefs-archives-68/3511-mining-industry-putsa-freeze-on-mapping-of-argentinas-glaciers. Fecha de acceso: 26/03/2012.

VALLADARES, DANILO

2009 "Guatemala: Mines Bring No Benefits to Local People", en *Upside Down World* (24/07/2009). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/content/view/2012/68/. Fecha de acceso: 01/08//2009.

2010a "Goldcorp Mining Project in Guatemala Faces Cross Border Opposition", en *Upside Down World* (06/04/2010). Disponible en: https://upsidedownworld.org/archives/guatemala/goldcorp-mining-project-in-guatemala-faces-cross-border-opposition/.

2010b "Goldcorp Mining Project in Guatemala Faces Cross Border Opposition", en *Upside Down World* (06/04/2010. Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/2435-goldcorp-mining-projectin-guatemala-faces-cross-border-opposition. Fecha de acceso: 08/04/2010.

VANDERKLIPPE, NATHAN

2013 "Chavez's death opens door to Venezuela's oil riches", en *The Globe and Mail* (06/03/2013).

VARELA, MARCELO

2010 "Las actividades extractivas en Ecuador", en *Ecuador Debate*, núm. 79 (04/2010).

VÁSQUEZ, ANDRÉS

2012 "Decenas de heridos en protesta contra Barrick Gold en Cotuí", en *Listin Diario* (28/09/2012). Disponible en: www.listindiario.com. Fecha de acceso: 02/10/2012.

VELTMEYER, HENRY Y JAMES PETRAS (EDS.)
2014 *The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century*. Londres: Zed.

VILLACORTA, E.
2009 "Office in Tegucigalpa". Comunicación electrónica entre ejecutivo de Goldcorp, la Embajada y CIDA. Tegucigalpa, Honduras (24/08/2009). Acceso a la información: Expediente A-2009-01803.

VUNDERLINK, GREGG L.
1990 "Peasant Participation and Mobilization During Economic Crisis: The Case of Costa Rica", en *Studies in Comparative International Development*, vol. 25, núm. 4: 3-34.

VYBIRAL, JAMES
2013 "Amazon Indians unite against Canadian oil giant", en *Survival International* (14/03/2013). Disponible en: http://www.survivalinternational.org/news/9023. Fecha de acceso: 22/03/2013.

WAGNER, W.
2008 "Mining list/Table". Ottawa: NRCAN (29/04/2008). Solicitud de información: NRCAN, Expediente DC7040-11-308.

WALLACH, JASON
2009a "Pacific Rim Silent in Wake of Violence against Anti-Mining Protesters in Cabañas, El Salvador", en *Upside Down World* (05/08/20099. Disponible en línea en: http://upsidedownworld.org/main/content/view/2037/1. Fecha de acceso: 06/08/2009.
2009b "Another Anti-Mining Activist Shot in Cabañas El Salvador, Hitman Tied to Pacific Rim is Detained", en *Upside Down World* (13/08/2009). Disponible en línea en: http://upsidedownworld.org/main/el-salvador-archives-74/2049-anotheranti-mining-activist-shot-in-cabael-salvador-hitman-tied-to-pacific-rim-is-detained. Fecha de acceso: 14/08/2009.

WANG, EDWARD
2012 "Re: Honduras article in the Ottawa Citizen". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (04/03/2012). Acceso a la información: Expediente A-2012-01135).
2010 "Agenda —visit of Ambassador Mackay to Tegucigalpa". San José: Embajada canadiense (30/09/2010). Acceso a la información: Expediente: A-2010-01177.

WANG, EDWARD Y LAURA DALBY

s/f "Crucitas Gold Mining Project". San José: Embajada canadiense y Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (fecha desconocida). Acceso a la información: Expediente A-2010-01630.

WARNAARS, XIMENA S.

2012 "Why be Poor when We can be Rich? Constructing Responsible Mining in El Pangui, Ecuador", en *Resources Policy*, vol. 37, núm. 2: 223-232.

WARREN, BILL

1980 *Imperialism: Pioneer of Capitalism*. Londres: Verso.

WATT, PETER Y ROBERTO ZEPEDA

2012 *Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy*. Londres: Zed Books.

WATTS, JONATHAN

2013 "Venezuela, Nicaragua and Bolivia Offer Asylum to Edward Snowden", en *The Guardian* (06/07/2013). Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2013/jul/06/venezuela-nicaragua-offer-asylum-edward-snowden. Fecha de acceso: 08/08/2013.

WAUW, J. VAN DE; ROEL EVENS Y LIEVEN MACHIELS

2010 "Are groundwater overextraction and reduced infiltration contributing to arsenic related health problems near the Marlin mine?" (14/10/2010). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/266274045_Are_Groundwater_overextraction_and_reduced_infiltration_contributing_to_Arsenic_related_health_problems_near_the_Marlin_mine_Guatemala. Fecha de acceso: 02/05/2012.

WEBBER, JEFFREY R.

2010 "Uribe's Parting Shot: Colombia and Venezuela Rattle Their Sabres", en *The Bullet* (05/08/2010). Disponible en: http://www.socialistproject.ca/bullet/399.php. Fecha de acceso: 08/03/2015.

WEBER, JEFFERY R. Y BARRY CARR (EDS.)

2013 *The New Latin American Left: Cracks in the Empire*. Lanham, MD: Rowman y Littlefield.

s/f "Introduction: The Latin American Left in Theory and Practice," en J. Webber y B. Carr (eds.), *The New Latin American Left*. Laham: Rowman & Littlefield

WEBSTER CHRISTOPHER, PAUL

2012 "Colombia is Canada's new best friend", en *The Globe and Mail* (26/04/2012). Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-magazine/colombia-is-canadas-new-best-friend/article4102946/?page=all. Fecha de acceso: 01/01/2016.

WEISBROT, MARK

2013 "Venezuela's Post-Election Campaign: Pots and Pans and Uncle Sam Weren't Enough This Time". Centre for Economic Policy Research, CEPR (22/04/2013). Washington.

2012 "Why the U.S. Demonises Venezuela's Democracy", en *The Guardian* (03/10/2012). Disponible en: http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/03/why-us-dcemonises-venezuelas-democracy. Fecha de acceso: 16/01/2014.

2009 "Hondurans Resist Coup: Will Need Help from Other Countries", en *The Guardian* (09/07/2009).

WEISBROT, MARK Y JAKE JOHNSTON

2012 *Venezuela's Economic Recovery: Is it Sustainable?* Center for Economic and Policy Research, CEPR (09/2012). Washington, D.C.

WILPERT, GREGORY

2007 *Changing Venezuela by Taking Power: The History and Policies of the Chávez Government*. Londres: Verso.

WILLIAMSON, JOHN

1993 "Democracy and the 'Washington Consensus'", en *World Development*, vol. 21, núm. 8: 1329-1336.

WIMMER, CHRIS

2010a "Canada-Honduras Commerical Relations". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade (10/11/2010). Acceso a la información. Expediente A-2010-01177.

2010b Reporte sin título (28/07/2010) Acceso a la información: Expediente A-2010-01630.

2010c Documento sin título (23/04/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-01630.

WOLF, SONJA

2009 "Subverting Democracy: Elite Rule and the Limits to Political Participation in Post-War El Salvador", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 41, núm. 3: 429-465.

WOLSETH, JON
2008 "Safety and Sanctuary: Pentacostalism and Youth Gang Violence in Honduras", en *Latin American Perspectives*, vol. 35, núm. 4: 96-111.

WOOD, ELLEN MEIKSINS
2011 "Guatemala: Reflexiones sobre el ciclo actual de lucha popular en la antesala del proceso electoral del 2011", en *OSAL*, núm. 12 (29/05/2011).
2003 *Empire of Capital*. Londres: Verso.
2002 *The Origin of Capitalism: A Longer View*. Londres: Verso.

YAGENOVA, SIMONA V.
2013 "Guatemala 2012: Reconfiguración autoritaria, movilización popular y criminalización de las luchas", en *OSAL*, año 14, núm. 33 (05/2013).
2011 "Guatemala: Reflexiones sobre el ciclo actual de lucha popular en la antesala del proceso electoral del 2011", en *OSAL*, año 12, núm. 29 (05/2011).

YAGENOVA, SIMONA Y ROCÍO GARCIA
2009 "Indigenous People's Struggles Against Transnational Mining Companies in Guatemala: The Sipakapa People vs. GoldCorp Mining Company", en *Socialism and Democracy*, vol. 23, núm. 3: 157-166.

YARED, J.
2010 "Meeting to Discuss a National Training Plan for Ecuador's Mining Sector". Quito: Canadian Embassy (26/07/2010). Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2010-02402.

YATES, BRENDA
2011 "Annotated Agenda: Third Annual Canada-Colombia Consultations on Human Rights". Ottawa: Foreign Affairs and International Trade, 2011. Solicitud de acceso a la información: Expediente A-2011-02145.

ZARATE-LAUN, CECILIA
2011 "Gold v. Water", en *Counterpunch* (20/01/2011). Disponible en: http://www.counterpunch.org/2011/01/20/gold-v-water/. Fecha de acceso: 21/01/2011.

ZARSKY, LYUBA Y LEONARDO STANLEY
2011 "Searching for Gold in the Highlands of Guatemala: Economic Benefits and Environmental Risks of the Marlin Mine". Global Development and Environment Institute, Tufts University (09/2011).

ZIBECHI, RAÚL

2013a "El retorno triunfal del campesinado", en *América Latina en Movimiento* (23/09/2013). Disponible en: http://alainet.org/active/67650&lang=es. Fecha de acceso: 13/02/2014.

2013b "Peru: Resistencia en los Andes a la minería", en *América Latina en Movimiento* (11/03/2013). Disponible en: http://alainet.org/active/62367&lang=es. Fecha de acceso: 01/03/2015.

2013c "Guerra minera en los Andes peruanos", en *La Jornada* (08/03/2013). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/08/opinion/027a2pol. Fecha de acceso: 01/03/2015.

2012 "La Paz del extractivismo en Colombia", en *La Jornada* (09/07/2012). Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/09/07/opinion/021a2pol. Fecha de acceso: 10/02/2014.

2011a "Guatemala: Resisting the New Colonialism —An Interview with Mario Godínez", en *Americas Program* (18/07/2011). Disponible en: http://www.cipamericas.org/archives/5136. Fecha de acceso: 12/08/2013.

2011b "Ecuador: The Construction of a New Model of Domination", en *Upside Down World* (05/08/2011). Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/3152-ecuador-the-construction-of-a-new-model-ofdomination. Fecha de acceso: 01/01/2016.

2010a "Perú: Un año de Bagua, nuevos actores frente a un Estado en crisis", en *América Latina en Movimiento* (16/06/2010). Disponible en: http://alainet.org/active/38929&lang=es. Fecha de acceso: 01/03/2015.

2010b "Bolivia and Ecuador: The State against the Indigenous People", en *Americas Program* (19/07/2010).

ZIMMERMAN, MATILDE

2001 *Sandinista: Carlos Fonseca and the Nicaraguan Revolution*. Durham y Londres: Duke University Press.

ZUCKER, GABRIEL

2010 "El Salvador: Mining the Resistance", en *Monthly Review*, vol. 62, núm. 2 (06/2010).

Medios de comunicación

ABC

07/02/2011 "Perú alcanzó cifra histórica de concesiones para exploración minera en 2010". Disponible en: www.abc.es. Fecha de acceso: 09/02/2011.

AGENCIA EFE

08/03/2011 "Colombia considera rebajar impuestos a empresas mineras, dice el ministro Rodado", en *SDP Noticias*. Disponible en: http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/03/08/colombia-considera-rebajar-impuestos-a-empresasmineras-dice-el-ministro-rodado. Fecha de acceso: 14/03/2011.

25/01/2011 "Gobierno de Nicaragua proyecta duplicar inversión extranjera directa en 2011", en *Confidencial*. Disponible en: http://confidencial.com.ni/archivos/articulo/3015/gobiernode-nicaragua-proyecta-duplicar-inversion-extranjera-directa-en-2011. Fecha de acceso: 25/01/2011.

07/01/2011 "Nicaragua otorga a empresas licencia de generación de energía hidroeléctrica", en *Mis Finanzas*. Disponible en: http://www.misfinanzasenlinea.com/noticias/20110109/nicaragua-otorga-a-empresas-licencia-de-generacion-deenergia-hidroelectrica. Fecha de acceso: 07/01/2011.

AGENCE FRANCE PRESSE

22/11/2011 "Intensa jornada de protestas en Costa Rica". *Estrategia y Negocios*. Disponible en: www.estrategiaynegocios.net. Fecha de acceso: 23/11/2011.

24/06/2011 "Empresa minera canadiense demanda a diputado de Costa Rica". Disponible en: feeds.univision.com. Fecha de acceso: 05/07/2011.

26/05/2011 "Peruvians protest presence of Canadian mining company", en *Edmonton Journal* (26/05/2011). Disponible en: www.edmontonjournal.com. Fecha de acceso: 26/05/2011.

AGENCIA ÓRBITA

06/07/2012 "Canadiense Dessau adquiere empresa peruana y fortalece su presencia en sector energético". Disponible en: http://agenciaorbita.org/. Fecha de acceso: 07/07/2012.

AGENCIA REUTERS

09/01/2013 "Colombia to prohibit mining in gold-rich northern area", en *Mining Weekly*. Disponible en: www.miningweekly.com. Fecha de acceso: 10/01/2013.

20/09/2012 "One dead, four injured in clash near Barrick Gold's Peru mine". Disponible en: http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE88J15W20120920. Fecha de acceso: 20/09/2012.

07/08/2012 "Guatemala steps back from mining reform plans —adviser". Disponible en: http://uk.reuters.com/article/guatemala-mining-urgentidUKL2E8J64W420120806. Fecha de acceso: 09/08/2012.

03/04/2011 "Peru front-runner Humala aims to assuage investors". Disponible en: http://www.reuters.com/article/peru-electionidUSN0330201620110403. Fecha de acceso: 04/04/2011.
09/03/2011 "Peru miners say campaign talk deters investors". Disponible en: http:// www.reuters.com/article/peru-mining-investmentidUSN0922794420110309. Fecha de acceso: 10/03/2011.
11/03/2009 "Kinross Gold gets Ecuador green light". Disponible en: http:// www.reuters.com/article/us-mining-summit-kinross-ecuadoridUSTRE52A47M20090311. Fecha de acceso: 19/10/2010.

AIM – AGENCIA DE INFORMACIONES MERCOSUR

09/02/2012 "Protesta contra la Barrick Gold deja 30 detenidos". Disponible en: http://www.aimdigital.com.ar/2012/02/09/protesta-contralabarrick-gold-deja-30-detenidos/. Fecha de acceso: 14/02/2012.

AL JAZEERA

05/07/2011 "Colombia's Goldrush". Disponible en: http://www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2011/07/2011757127575176.htm. Fecha de acceso: 01/01/2016.
25/06/2011 "Peru halts mine project after protesters shot". Disponible en: http://www.aljazeera.com/news/americas/2011/06/201162535356326164.html. Fecha de acceso: 25/06/2011.

AMÉRICA ECONOMÍA

23/07/2013 "ONG salvadoreña insiste ante Parlamento que apruebe una ley contra la minería". Disponible en: http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ong-salvadorena-insiste-anteparlamento-que-apruebe-una-ley-contra-la-mineria. Fecha de acceso: 01/08/2013.

ANDINA

28/09/2013 "Inversiones canadienses en Perú suman casi US$8,000 millones". Disponible en: www.andina.com.pe. Fecha de acceso: 01/10/2013.

ASSOCIATED PRESS (AP)

10/04/2013 "Chile suspends Barrick Gold mine on indigenous fears of pollution", en *Edmonton Journal* (10/04/2013). Disponible en: www.edmontonjournal.com. Fecha de acceso: 10/04/2013.
18/02/2013 "Rafael Correa Re-Elected for Third Term as President of Ecuador", en *The Guardian*. Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2013/feb/18/ecuador-election-rafael-correa-victory. Fecha de acceso: 15/08/2014.

25/01/2013 "Clash at Canadian-owned Peru mine leaves at least 4 hurt", en *CBC News* (25/01/2013). Disponible en: http://www.cbc.ca/news/world/clash-at-canadian-owned-perumine-leaves-at-least-4-hurt-1.1381767. Fecha de acceso: 01/02/2013.

21/10/2011 "Honduras: Court Clears Six Generals in Overthrow of President in 2009", en *The New York Times*. Disponible en: http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/americas/honduras-court-clears-generalsin-overthrow-of-zelaya.html. Fecha de acceso: 21/10/2011.

22/12/2010 "Venezuelan national assembly bars foreign funding for ngos", en *The Guardian*. Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2010/dec/22/venezuela-chavez-ngo-foreign-funding. Fecha de acceso: 05/01/2011.

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE

07/05/2010 Disponible en: http://business-humanrights.org/en/canada-court-dismisses-ecuadorians-lawsuitagainst-copper-mesa-and-toronto-stock-exchange. Fecha de acceso: 13/05/2010.

CANADIAN PRESS

05/03/2013 "Chávez's Death Brings Hope of a Better Future for Venezuela: PM Harper", en *The Globe and Mail*. Disponible en: http://www.theglobeandmail.com/news/politics/chavezs-death-brings-hope-of-a-better-futurefor-venezuela-pm-harper/article9321008/. Fecha de acceso: 16/01/2014.

18/06/2010 "Canadian firm fires 397 workers at Mexican mine", en *The Globe and Mail* (18/06/2010).

CLARÍN

15/07/2010 "Acusan al secretario de Minería de tener lazos con la empresa Barrick". Disponible en: http://www.clarin.com/politica/Acusan-secretario-Mineria-empresa-Barrick_0_298770159.html. Fecha de acceso: 20/07/2010.

CONTRAPUNTO

04/04/2013 "Organizaciones reaccionan ante demanda Pacific Rim", en *Conflictos Mineros*. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/12660-organizaciones-reaccionan-ante-demanda-pacificrim. Fecha de acceso: 02/08/2013.

15/10/2012 "PDDH, minería no viable en El Salvador". Disponible en: http://www.contrapunto.com.sv/ambiente/pddhmineria-no-viable-en-el-salvador. Fecha de acceso: 01/08/2013.

DAILY MARKETS

10/01/2013 "General Dynamics Awarded $65 Million by the Colombian Ministry of National Defence For Light Armoured Vehicles". Disponible en: www.dailymarkets.com. Fecha de acceso: 10/01/2013.

DEMOCRACY NOW

09/07/2013 "Exclusive: Ecuador's Foreign Minister on Snowden Asylum and Latin American Resistance to U.S. Spying". Disponible en: http://www.democracynow.org/2013/7/9/exclusive_ecuadors_foreign_minister_on_snowden. Fecha de acceso: 07/09/2013.

DINERO (REVISTA DE SEMANA)

26/04/2013 "Lo que pierde el Estado por privilegios tributarios a la mineria". Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/lo-pierde-estado-privilegios-tributarios-mineria/174393. Fecha de acceso: 26/04/2013.

DOMINICAN TODAY

24/03/2010 "Toxins sickened Barrick Gold's 326 Dominican miners, study says". Disponible en: http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2010/3/24/35196/Toxinssickened-Barrick-Golds-326-Dominican-miners-study-says. Fecha de acceso: 14/04/2010.

11/02/2010 "Canada defends Barrick Gold's operation in Dominican Republic". Disponible en: http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2010/2/11/34791/Canada-defends-Barrick-Golds-operation-in-Dominican-Republic. Fecha de acceso: 12/02/2010.

EL COMERCIO

04/07/2012 "Embajador de Canadá: Impuestos mineros muy elevados". Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/embajador-de-canada-impuestos-mineros.html. Fecha de acceso: 28/04/2013.

03/03/2012 "Buscamos protección a la inversión". Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/buscamosproteccion-a-inversion.html. Fecha de acceso: 04/03/2012.

01/10/2010a "Correa: No aceptamos negociar nada". Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/Correa-aceptamosnegociar_0_345565468.html. Fecha de acceso: 08/01/2014.

01/10/2010b "La OEA, la ONU y los gobiernos amigos apoyaron al Presidente". Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/OEA-ONU-gobiernos-apoyaron-Presidente_0_345565495.html. Fecha de acceso: 08/01/2014.

EL CONFIDENCIAL

06/01/2012 "Amigos de la Carta Democrática ante 'opaca' elección presidencial". Disponible en: www.confidencial.com. Fecha de acceso: 06/01/2012.

EL DIARIO (EL SALVADOR)

23/07/2013 "El Salvador y las agresiones a la lucha antiminera". Disponible en: http://www.eldiario.es/desalambre/mineríamanifestaciones-El_Salvador-represion_0_156784975.html. Fecha de acceso: 01/08/2013.

EL DIARIO (ECUADOR)

05/02/2012 "Ecuador firma contratos petroleros con empresas de EEUU, Argentina y Canadá". Disponible en: www.eldiario.com. Fecha de acceso: 12/02/2012.

EL HERALDO

18/02/2019 "Canciller de Canadá reitera apoyo a Honduras". Disponible en línea: www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/02/18/Noticias/Canciller-de-Canada-reitera-apoyo-a-Honduras. Fecha de acceso: 01/03/2010.

31/05/2011 "Avanza dictamen de Ley de Minería en Honduras". Disponible en: archivo.elheraldo.hn. Fecha de acceso: 01/06/2011.

EL NUEVO HERALD

10/08/2011 "Harper discute con Santos seguridad para empresas canadienses". Disponible en: http://www.elnuevoherald.com/2011/08/10/1001003/harper-discute-con-santos-seguridad.html. Fecha de acceso: 10/08/2011.

EL PAÍS (COSTA RICA)

28/01/2012 "Renunció viceministro aliado de minería a cielo abierto". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/61521. Fecha de acceso: 07/08/2013.

16/01/2012 "ONG ambientalista estudia daños causados por minera canadiense en Crucitas". Disponible en: http//www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/60931. Fecha de acceso: 07/08/2013.

23/12/2011 "Abogados ambientalistas solicitan ejecutar sentencia minera Crucitas". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/59872. Fecha de acceso: 07/08/2013.

08/12/2011 "Infinito Gold y Minaet rehúyen debate sobre sentencia en U PAZ". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/59082. Fecha de acceso: 07/08/2013.

30/11/2011 "Sepultado proyecto minero Crucitas en Costa Rica". Fecha de acceso: 30/11/2011.

29/11/2011 "Empresa minera canadiense demanda a dos académicos de la UCR". Disponible en: www.elpais.cr. Fecha de acceso: 29/11/2011.

23/11/2011 "En Costa Rica intimidan a líderes sociales, ambientalistas y académicos". Disponible en: www.elpais.cr. Fecha de acceso: 23/11/2011.

15/11/2011 "Golpe de Estado en Poder Judicial para favorecer a minera Infinito Gold". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/57551. Fecha de acceso: 07/08/2013.

11/11/2011 "Ola de protestas ocupó a Costa Rica este martes". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/58146. Fecha de acceso: 07/08/2013.

16/09/2011 "Fiebre del oro amenaza aguas en cerro de Abangares, Guanacaste". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/53259. Fecha de acceso: 07/08/2013.

20/06/2011 "Empresas mineras patrocinan Fiesta en Embajada de Canadá". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/47753. Fecha de acceso: 07/08/2013.

11/06/2011 "Industrias Infinito ataca a diputado Manrique Oviedo por supuesta difamación". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/47371. Fecha de acceso: 07/07/2013.

29/09/2010 "Minera Infinito Gold defiende proyecto Crucitas en tercer debate". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/33178. Fecha de acceso: 07/08/2013.

26/09/2010 "Infinito Gold ausente en Foro de universidades público sobre minería". Disponible en: www.elpais.cr. Fecha de acceso: 29/11/2010.

30/07/2010 "Viceministro y asesor de Laura Chinchilla ha sido un aliado de Crucitas". Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/29497. Fecha de acceso: 07/08/2013.

EL TIEMPO

05/09/2011 "Un misterio, el asesinato del párroco de Marmato". Disponible en: www.eltiempo.com. Fecha de acceso: 05/06/2014.

ESCOPUSA NOTICIAS

05/02/2008 "Asambleista Monica Chuji Denuncia Excesivo 'Lobbying' De Mineras Extranjeras". Quito. Acceso a la información: Expediente A-2010-01186.

FORBES

11/06/2010 "Mining on the Upswing in Mexico". Disponible en: http://www.forbes.com/2010/06/10/mexico-mining-industry-business-oxford-analytica.html. Fecha de acceso: 17/06/2010.

HISPANTV

s/f "Denuncian agresión económica contra El Salvador por transnacional canadiense". Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/12655-denuncianagresion-economica-contra-el-salvador-por-transnacional-canadiense. Fecha de acceso: 02/08/2013.

JUST THE FACTS

06/08/2013 "Murders of human rights defenders jump sharply in Colombia". Disponible en: www.justf.org. Fecha de acceso: 09/08/2013.

LA JORNADA

08/04/2013 "Oposición en Perú a las transnacionales mineras". Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/04/08/eco-o.html. Fecha de acceso: 01/03/2015.

05/03/2013 "Cronología de la última batalla del líder venezolano".

06/01/2013 "Regresan directivos de Financial Pacific 12.2 millones de dólares tras escándalo". Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/06/economia/020n2eco. Fecha de acceso: 09/08/2013.

30/12/2012 "El gobierno de Panamá anuncia apoya a la investigación a Financial Pacific". Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/30/economia/023n2eco. Fecha de acceso: 09/08/2013.

20/11/2012 "Transnacionales cometen crímenes ecológicos" (Comunicado de Amigos de la Tierra). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/11/20/sociedad/037n2soc. Fecha de acceso: 01/08/2013.

14/07/2012 "Los Ngäbe-Buglé de Panamá defienden su comarca y sus recursos: Contra los intereses de empresas estadounidenses". Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/14/oja-silvia.html. Fecha de acceso: 09/08/2013.

LA PRENSA

01/03/2013 "Nicaragua ofrecerá oportunidades mineras en Canadá". Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/03/01/activos/136554. Fecha de acceso: 08/08/2013.

08/07/2011 "Listo financiamiento para obras de ciudad modelo". Disponible en: http://expediente.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2011/07/09/Noticias/Listo-financiamiento-para-obras-de-ciudad-modelo. Fecha de acceso: 08/07/2011.

27/04/2011 "Trujillo se queda sin otro proyecto turístico". Disponible en: http://www.laprensa.hn/honduras/543822-97/trujillo-sequeda-sin-otro-proyecto-turistico. Fecha de acceso: 02/05/2011.

07/03/2011 "Empresario de la pornografía dirige proyectos en Trujillo". Disponible en: http://www.laprensa.hn/honduras/548832-97/empresario-de-la-pornografia-dirige-proyectos-en-trujillo. Fecha de acceso: 08/03/2011 y 04/04/2016.

10/08/2010 "Canadá sale en defensa de Crucitas". Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2010/08/10/nacionales/447375-canada-sale-en-defensa-de-crucitas. Fecha de acceso: 19/08/2010.

LA REPÚBLICA

18/05/2013 "Minera canadiense Candente Copper suspende actividades en Cañariaco". Disponible en: http://larepublica.pe/18-05-2013/minera-canadiense-candente-copper-suspende-actividades-en-canariaco. Fecha de acceso: 20/05/2013.

18/01/2012 "Scotia y Colpatria traerán inversión canadiense en minería". Disponible en: www.larepublica.co. Fecha de acceso: 23/01/2012.

LATIN AMERICA PRESS

16/11/2012 "Pascua Lama mine suspended". Disponible en: http://lapress.org/articles.asp?art=6737. Fecha de acceso: 26/11/2012.

02/06/2011 "Military dismantles illegal mines". Disponible en: http://lapress.org/articles.asp?art=6391. Fecha de acceso: 14/06/2011.

14/07/2010 "Government considers overturning gold mining decree," Latin America Press, 14 de julio 2010. Disponible en: http://lapress.org/articles.asp?item=1&art=6176. Fecha de acceso: 22/07/2010.

24/11/2010 "Lawmakers ban open-pit mining". Disponible en: http://lapress.org/articles.asp?art=6269. Fecha de acceso: 04/12/2010.

LA TRIBUNA

04/01/2012 "Ley de Minería vuelve a la agenda legislativa del 2012". Disponible en: http://www.latribuna.hn/2012/01/04/leyde-mineria-vuelve-a-la-agenda-legislativadel-2012/. Fecha de acceso: 04/01/2012.

14/10/2011a "Congreso elimina el contrato de Lothelsa". Disponible en: www.latribuna.hn. Fecha de acceso: 14/10/2011.

14/10/2011b "Loterías tradicionales no desaparecerán". Disponible en: www.latribuna.hn. Fecha de acceso: 14/10/2011.
27/09/2011 "Invertirán más $200 millones en el rubro turístico de Honduras". Disponible en: www.latribuna.hn. Fecha de acceso: 27/09/2011.
12/08/2011 "Stephen Harper: Males de derechos humanos no son perpetrados por el gobierno".
08/02/2011 "TLC con Canadá generará inversiones en sector minero". Disponible en: www.latribuna.hn. Fecha de acceso: 08/02/2011.
02/02/2011 "Maquiladores hondureños respaldan TLC con Canadá". Disponible en: www.latribuna.hn. Fecha de acceso: 02/02/2011.

LIBRE ENCUENTRO
s/f www.schnoorversuscanada.ca. Fecha de acceso: 15/05/2012.

LISTIN DIARIO
15/03/2010 "Más de 400 trabajadores de la empresa minera Barrick Gold se intoxican en Cotuí". Disponible en: www.listindiario.com. Fecha de acceso: 14/04/2010.

MINEWEB
22/06/2012 "IAMGold not 'bailing' on multimillion ounce Ecuador gold project". Disponible en: http://www.mineweb.com/archive/iamgold-not-bailing-on-multimillion-ounce-ecuador-gold-project/. Fecha de acceso: 12/06/2012.

NATIONAL POST
25/02/2012 "Venezuela, China to develop Cristina".
24/12/2011 "Crystallex expedientes for bankruptcy; TSX to delist firm".
18/03/2009 "Canadian miners can restart in Ecuador".

PIENSA CHILE
18/03/2012 "La Barrick Gold posee un 'país virtual' de 3.000 kilómetros de largo en la Cordillera de los Andes" (de *La Verdad Ahora*). Disponible en: http://piensachile.com/2012/03/la-barrick-gold-posee-un-qpais-virtualq-de-3000-kilometros-de-largo-en-la-cordillera-de-los-andes/. Fecha de acceso: 20/03/2012.

PRENSA LIBRE
01/06/2013 "Disputa minera militariza región en San Rafael Las Flores". Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Disputa-militariza-San-Rafael-Flores_0_929907247.html. Fecha de acceso: 15/07/2013.

10/04/2012 "San José del Golfo Villagers Detain Mining Personnel". Traducido por Rosalind Gill para Rights Action.
09/03/2012 "Community Members Call for Closure of Gold and Silver Mine". Traducido por Rosalind Gill para Rights Action.

PRESS ASSOCIATION
16/08/2013 "Ecuador Restates Support for Julian Assange on Asylum Anniversary", en *The Guardian*. Disponible en: http://www.theguardian.com/media/2013/aug/16/ecuador-julian-assange-asylum-anniversary. Fecha de acceso: 07/09/2013.

PROCESO
04/02/2011 "Textilera canadiense proyecta invertir más de 100 millones de dólares en Honduras". Disponible en: http://www.proceso.hn/component/k2/item/56295.html. Fecha de acceso: 04/02/2011.

RADIO MUNDO REAL
s/f "Testimonio del padre Neftalí Ruíz sobre la Resistencia a la minería en Cabañas". Disponible en: http://www.conflictos-mineros.net/contenidos/14-el-salvador/11658-testimonio-del-padre-neftali-ruiz-sobre-la-resistencia-a-la-mineria-en-cabanas. Fecha de acces: 01/08/2013.

RADIO SANTA FE
14/04/2012 "Colombia y Canadá firmaron Acuerdo de Cooperación en Seguridad Integral". Disponible en: http://www.radiosantafe.com/2012/04/14/colombia-y-canada-firmaron-acuerdo-de-cooperacion-enseguridad-integral/. Fecha de acceso: 14/04/2012.

SEMANA
21/12/2013 "Angustia por la obtención de petróleo". Disponible en: http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=369103. Fecha de acceso: 09/06/2014.
09/12/2013 "Otro hallazgo de petróleo en Colombia". Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/ecopetrol-encuentrapozo-petrolero/367726-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.
07/12/2013 "La Pelea por Santurbán". Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-pelea-por-santurban/367354-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.
29/09/2013 "Pacific Rubiales sube su apuesta por crudo Colombiano". Disponible en: http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=359466. Fecha de acceso: 02/03/2014.

10/08/2013 "Proyectos mineros en el socavón". Disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/proyectos-minerossocavon/353676-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.

01/06/2013 "La guerra por los parques naturales". Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-por-los-parques-naturales/345087-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.

11/05/2013 "Pesos pesados". Disponible en: http://www.semana.com/100-empresas/articulo/pesos-pesados/342855-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.

17/11/2012 "Canadá y Colombia firman un acuerdo de colaboración militar". Disponible en: http://m.semana.com/nacion/articulo/canada-colombia-firman-acuerdo-colaboracion-militar/268024-3. Fecha de acceso: 21/03/2014.

08/10/2011 "Cuando el río suena…". Disponible en: http://m.semana.com/economia/articulo/cuando-rio-suena/247572-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.

14/07/2011 "Procuraduría pide frenar proyecto minero en el corazón de la Amazonía". Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-pide-frenar-proyecto-minero-corazon-amazonia/243001-3. Fecha de acceso: 09/06/2014.

THE ECONOMIST

02/03/2013 "Italy's Election: Ungovernability Wins". Disponible en: http://www.economist.com/news/europe/21572783-result-has-come-bombshell-italy-and-across-euro-zone-ungovernability-wins. Fecha de acceso: 16/01/2014.

30/10/2008 "Zelaya Plays the Chávez Card". Disponible en: http://www.economist.com/node/12522958?story_id=12522958. Fecha de acceso: 02/07/2009.

20/10/2008 "Leaning Left: Honduras Joins a Club Promoted by Venezuela and Cuba".

27/03/2008 "The Canadian connection: Providing Banking, Business, and Policemen". Disponible en: http://www.economist.com/node/10925797. Fecha de acceso: 10/05/2012.

THE ECONOMIST/EIU

2013a *Guatemala: Country Report*. Londres: Economist Intelligence Unit (06/2013).

2013b *Venezuela: Country Report*. Londres: Economist Intelligence Unit (03/2013).

2011 *Ecuador: Country Report*. Londres: Economist Intelligence Unit (09/2011).

2009 *Honduras Politics: Mixed Report Card for Zelaya*. Londres: Economist Intelligence Unit.
2008 *Honduras: Country Profile 2008*. Londres: Economist Intelligence Unit.

THE GLOBE AND MAIL
06/03/2013a "The polarizing appeal of Chavez (sic)".
06/03/2013b "Chavez's (sic) gifts failed to serve democracy".
19/03/2011 "Greystar to modify Colombian project".
01/06/2010 "Pacific Rim arbitration on El Salvador mine begins".
10/09/2009 "Brookfield to invest $400 million in Colombia".
01/05/2008 "Venezuelan ruling hits Crystallex".

THE GUARDIAN
31/01/2011 "U.S. embassy cables: Mining companies worried about security". Disponible en: http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/38881. Fecha de acceso: 02/02/2011.

THE NEW YORK TIMES
21/05/2006 "Peru Ex-Spy Chief Says Candidate for President Aided His Escape". Disponible en: http://www.nytimes.com/2006/05/21/world/americas/21peru.html?ref=topics. Fecha de acceso: 01/03/2015.

THE NORTHERN MINER
15/03/2013 "Customs hold-up has Barrick investors on edge" (15 /03/2013). Disponible en: http://www.northernminer.com/news/customs-hold-up-has-barrick-investors-on-edge/1002145720/. Fecha de acceso: 15/03/2013.
09/06/1997 "Lyon Link Drills Costa Rican Play". Disponible en: http://www.northernminer.com/news/lyon-lake-drills-costa-rica-play/1000098762/. Fecha de acceso: 07/08/2013.

THE PROVINCE
26/05/2009 "Gold Reserve squeezed out".

TORONTO STAR
13/03/2007 "Star stories on Venezuela lacked balance, panel rules". Disponible en: http://www.thestar.com/news/2007/03/13/star_stories_on_venezuela_lacked_balance_panel_rules.html. Fecha de acceso: 14/06/2013.
21/01/1999 "The Brutal Price of Fly-By-Night Mining".

TV PERÚ

03/12/2012 "Perú y Canadá fortalecen cooperación en Educación, Energía y Defensa". Disponible en: www.tvperu.gob.pe. Fecha de acceso: 04/12/2012.

VANCOUVER SUN

04/05/2002 "Colombia Not Safe".

VOCES

s/f "Antimineros de todo el mundo debatieron sobre la defensa del agua en El Salvador". Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/13061-antimineros-de-todo-el-mundo-debateironsobre-la-defensa-del-agua-en-el-salvador. Fecha de acceso: 01/08/2013.

YAHOO

17/03/2010 "Cornerstone Reports Significant Progress on Ecuador Permits". Disponible en: ca.news.finance.yahoo.com. Fecha de acceso: 26/05/2010.

Este libro, publicado en inglés con el título *Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America* (2016), pone en cuestión la política exterior canadiense y la expansión de sus inversiones en América Latina. De manera específica, se detiene en los casos de algunos países centroamericanos y otros ubicados en los Andes para ejemplificar este hecho.

En esa línea, el lector podrá hacer un recorrido por hechos acontecidos en varios países latinoamericanos hasta el año 2016 y en los que Canadá ha tenido algún tipo de participación. Además de conocer cómo se ha desarrollado el capital canadiense en el sector de recursos primarios y en la banca de esos países, y el apoyo activo del gobierno canadiense para crear las condiciones necesarias para la inversión en esos sectores.

ISBN: 978-9917-9886-0-1